

TOMO VII

La burocracia civil como espacio de combate faccioso (Cabildos y Justicia). (compuesto de catorce [14] capítulos):

Capítulo 1

INTRODUCCION. El rol de las fracturas estamentales y corporativas en la burocracia política colonial y nacional

Desde tiempos coloniales se suscitó en la América Latina un debate aún hoy inconcluso acerca de la naturaleza de la burocracia colonial y en especial de la burocracia capitular, así como de los orígenes del régimen federal de gobierno. En los comienzos patrios, políticos y juristas rioplatenses de inspiración Iluminista como Bernardo de Monteagudo, Antonio Sáenz, Tomás Antonio Valle y Pedro Somellera se embarcaron, en medio de la Asamblea del año XIII, en una interminable discusión acerca de la abolición o reforma de los fueros y privilegios corporativos. Si bien con la Asamblea de 1813 y el Directorio de 1815 se suprimieron la venalidad, la perpetuidad y la heredabilidad de los cargos concejiles,¹ se dispuso la renovación de los mismos por elección popular,² y se abolieron los fueros personales en las causas civiles y criminales, los títulos y escudos de nobleza,³ el Tribunal de la Inquisición,⁴ los mayorazgos, y las Reales Audiencias,⁵ los juristas y los políticos como Valentín Gómez, Manuel Antonio Castro, Julián Segundo de Agüero y Bernardino Rivadavia se trenzaron, una década más tarde, en una ardua polémica acerca de la conveniencia o inconveniencia de la reforma o supresión de los cabildos.⁶

Más luego, continuando la tradición iluminista Rivadaviana, autores como Alberdi (1852,1853) y Sarmiento (1853) manifestaron juicios francamente desfavorables para la institución del Cabildo indiano, a la cual le atribuían una honda tradición hispana. Tanto De Angelis (1843) primero, como Echeverría (1847), Mitre (1871) y Sarmiento (1866, 1883, 1898) después, fueron modificando este criterio, a la luz de las lecturas de autores impregnados de la tradición romántica (Tocqueville) y de las críticas a la práctica de colonizar territorios de frontera sólo mediante autoridades puramente militares y sin el paralelo establecimiento de las correspondientes instituciones municipales.⁷ Posteriormente, buscando el origen histórico del proceso emancipador, una corriente de autores influido por el positivismo (Barraquero 1878;⁸ Quesada, 1881; López, 1883; Ramos Mexía, 1887; y González, 1888);⁹ lo encontraron en la naturaleza federalista y autónoma de la estructura corporativa colonial más significativa: la burocracia capitular.¹⁰

Pero a fines de siglo, otros autores también influidos por el positivismo,¹¹ negaron la relevancia de los cabildos y sostuvieron que en el origen de la emancipación y del federalismo se hallaban las

prácticas modernas, unitarias o centralizadoras Borbónicas, tales como la Expulsión de los Jesuitas (1767), la subdivisión de los Virreynatos y su fragmentación en Gobernaciones-Intendencias (1784), y la abolición de los Repartos de Mercancías, los Corregimientos y las encomiendas.¹² Para estos últimos autores, las prácticas discursivas de las corporaciones coloniales pre-modernas y pre-Borbónicas (patriarcalismo [mayorazgo], etnocentrismo [limpieza de sangre], nepotismo, clericalismo, señorialismo, corporativismo, patrimonialismo) se oponían al progreso material y a la igualdad jurídica y se resistían a los objetivos reformistas de los Borbones, habiendo sido en realidad instituciones o corporaciones oligárquicas.¹³ Más tarde, liberales de izquierda como Garretón (1933) consideraron que la penetración del capital comercial bajo el débil control de políticas mercantilistas Borbónicas, ayudó a desarrollar un embrión de democracia burguesa y a disolver gradualmente el estado corporativo colonial ("a obedecer pero no a cumplir"). Sin embargo, para autores de la positivista Nueva Escuela Histórica como Heras (1923,1925) y para exponentes de la llamada escuela "revisionista" como Pereyra (1924), Palacio (1954) y Zorraquín Becú (1958,1959), continuada por Véliz (1984), la legislación centralizadora borbónica (Real Ordenanza de Intendentes y los Tribunales del Consulado), tardíamente impuesta en el Río de la Plata, habría combatido el incipiente federalismo colonial.

También en los países centrales se suscitaron en ese entonces profundos debates acerca de la burocracia del Antiguo Régimen.¹⁴ Autores como Gasser (1939,1946), a mediados de este siglo, probablemente inspirado en Renán, planteaban que la estabilidad de las democracias se fundaba en la mayor o menor antigüedad que poseyera la autonomía de la burocracia municipal (la extensión de sus fueros), con abstracción del carácter oligárquico o democrático de sus elites.¹⁵ Por el contrario, otros autores, como Bauer (1907) y Luxemburg (1908-09), en la primera pre-guerra y Kofler (1948, 1974) en la última pos-guerra,¹⁶ ponían el acento en una burocracia central que hiciera eje en una mayor garantía de las libertades y derechos individuales y, por consiguiente, en una mayor democratización de la sociedad.¹⁷ Paralela y coincidentemente, en el Río de la Plata, intelectuales de izquierda, como el primer Puiggrós (1940), influenciados por el positivismo francés, asimilaron los cabildos a las comunas feudales, definiéndolas como corporaciones oligárquicas, parodias de los municipios castellanos.¹⁸ Según Puiggrós (1940), erran quienes como Lisandro de la Torre, piensan que los cabildos nacieron, se desarrollaron y murieron limitados a la esfera económica o administrativa, con prescindencia del carácter del estado y de la transiciones de los antiguos regímenes (feudalismo colonial) al capitalismo.¹⁹

Para los autores tributarios de la escuela funcionalista (Phelan, 1960; Beneyto Pérez, 1961; y McAlister, 1963), influídos por la lectura de Weber (1922), la burocracia colonial española, durante la hegemonía Habsburga, no fue sólo un asunto de dominación carismática, estamental y patrimonial sino un sistema o balanza de equilibrio entre instituciones o burocracias auto-gobernadas, detentadoras de rituales y fueros o jurisdicciones especiales.²⁰ Como el status de los individuos, regidos por criterios de nacimiento, que ingresaban a cada corporación debía corresponder, según Beneyto (1961), con el status mismo de las corporaciones respectivas --por ser éstas subórdenes en una sociedad estratificada en estamentos-- cuando el equilibrio entre las corporaciones se desestabilizaba por motivos exógenos de carácter económico, político o militar, el status de los individuos que los integraban también se desequilibraba, volviéndose inconsistente y campo propicio para que determinadas conductas se aprovecharan de una situación potencialmente crítica.²¹ Para esa época, Morse (1954), Pike (1958), Phelan (1960), McAlister (1963), Moreno (1967), y Stein y Stein (1970), hallaron que cada corporación gubernamental de la administración colonial Habsburga, desde el Consejo de Indias hasta la Real Audiencia, los Cabildos y los Corregimientos "combinaban la autoridad judicial y la administrativa".²² Esta fragmentación administrativa del poder colonial es lo que habría garantizado un

cierto equilibrio. Sin embargo, para otros autores como Higley, Burton y Field (1990) la inestabilidad política y la consiguiente discontinuidad institucional se originó siempre no en la pérdida de las libertades y derechos individuales sino en la frecuente desunión y/o divergencia entre las mismas elites.

La llamada escuela Dependientista,²³ en una clara reacción anti-Weberiana, preñada de un reduccionismo economicista y fuertemente influida por el Marxismo, consideró a la burocracia capitular colonial como una burocracia controlada básicamente por el capital comercial metropolitano, el cual en lugar de erosionar los impedimentos socio-políticos y jurídicos para alcanzar el liberalismo, la república y la democracia, y construir un estado burgués independiente, los reforzó.²⁴ Sin embargo, para autores como Lynch (1967) y Kaplan (1976), los cabildos exhibieron una gran variabilidad

"...según el grado de poder autónomo,...el tipo de región en que se ubiquen, tareas que deben asumir,...cercanía e intensidad de control de las autoridades reales superiores".²⁵

La burocracia patrimonialista, impuesta por la dinastía Habsburga en el siglo XVII, debido a las necesidades fiscales que trajo la crisis de dicho siglo, se contrapuso a una burocracia aún más patriarcal, estamental y tradicional, una suerte de burocracia señorial, impuesta por los señores indianos o criollos, por lo general encomenderos, o a la impuesta por un estamento rentista integrado por censualistas (conventos y acreedores de censos y capellanías) y dueños de ingenios de moler metal (usufructuarios de la renta mitaya).²⁶ Para algunos de los autores que trataron la composición político-social de la burocracia colonial lo que determinaba que la burocracia capitular estuviera controlada por el acentuado localismo de minorías oligárquicas fué su naturaleza patrimonialista, manifestada en la multitudinaria subasta de oficios públicos.²⁷ Por el contrario, para otros autores,²⁸ lo que determinaba que la burocracia capitular estuviera nepóticamente controlada, no fué la enajenación de los oficios públicos, sino la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos dominantes.²⁹ En beneficio de este patriciado o minoría de vecinos beneméritos, únicos en los cuales residía la entonces llamada voluntad popular,³⁰ venían siendo repartidos los cargos seculares electivos, como el de los alcaldes ordinarios, los Síndicos Procuradores Generales, y los alcaldes de hermandad o jueces pedáneos, que no podían ser arrendados ni subastados por tratarse de cargos de justicia.³¹ Esta restricción en beneficio directo de los clanes oligárquicos vigentes en cada ciudad de provincia se había logrado mediante una numerosa serie de requisitos legales, que reducían el número de los electores y los elegidos a un ínfimo núcleo de parientes.³²

A los efectos de romper las alianzas de sangre de los patriciados locales, los Borbones se vieron precisados a forzar la participación de los comerciantes peninsulares en la actividad capitular de sus colonias mediante la imposición de la Real Cédula sobre la Alternativa,³³ y la mayor exigencia de dispensas de ilegitimidad y mezcla de sangres (Informaciones de Limpieza de Sangre, excepciones de calidad, y Gracias al Sacar).³⁴ El número de casos sobre nepotismo que llegaron a ventilarse judicialmente fue escandaloso. Sin embargo, como en la mayor parte de los casos los candidatos a cargos capitulares eran impugnados en las sesiones previas de calificación de votos el número de casos de nepotismo registrados judicialmente debe haber sido mucho menor a los que en realidad ocurrieron.³⁵

La prolongación del mandato de los alcaldes,³⁶ la derogación de los Corregimientos de Indios, el mecanismo de la alternativa en los Cabildos, la fundación de nuevas ciudades sufragáneas, la imposición de Diputaciones del Real Consulado de Buenos Aires en cada ciudad o distrito, y la designación de Subdelegados de Real Hacienda (con atribuciones en las cuatro ramas de Gobierno,

Justicia, Hacienda y Guerra), ordenada por las políticas centralizadoras borbónicas, al despojar a los Cabildos seculares de parte de dichas funciones, limitando sus fueros, habría generado consecuencias letales.³⁷ Entre dichas consecuencias, se habrían degradado las ventajas de las elecciones capitulares anuales, congelado la circulación de las elites políticas capitulares, desjerarquizado la justicia capitular, frustrado el creciente localismo que la mayor autonomía relativa de los Cabildos había generado en el pasado Habsburgo, y logrado así abonar el terreno que precipitó los acontecimientos revolucionarios de comienzos del siglo XIX.³⁸

La política discriminatoria impulsada por los Borbones en los Cabildos seculares --conocida como la alternativa-- fomentó un estereotipado étnico que invitó a los vecinos de las diversas ciudades a visualizar a los peninsulares como poseedores de características étnicas superiores a las de los criollos, que los hacían merecedores en las elecciones capitulares de privilegios o cuotas preferenciales de representación política. De aquí que la práctica de la alternativa, sumió la vitalidad de la personalidad bajo amortiguantes prejuicios étnicos que hacía que los peninsulares justificaran sus privilegios como producto de un mérito y los criollos su inferiorizada cuota de poder político como fruto de una culpa. Pero para Lynch (1958), Comadrán Ruiz (1959), Acevedo (1965), Fisher (1981) y Brown (1986), la política centralizadora Borbónica (Real Ordenanza de Intendentes) no habría afectado a los gobiernos municipales.³⁹ Por el contrario, para Acevedo (1965), el sistema intendencial impuesto por los Borbones hizo que con pocas excepciones, "...las ciudades fueran progresando lentamente".⁴⁰ Más aún, para Pereyra (1924), Palacio (1954) y Fisher (1981), en sus análisis del Virreinato Peruano, los intentos de revivir los cabildos y mejorar las finanzas municipales se dieron a partir del establecimiento de las gobernaciones-intendencias (1784), ordenado por la Real Ordenanza de Intendentes, una de las más relevantes reformas Borbónicas.⁴¹ Sin embargo, para Socolow (1987), las reiteradas interrupciones del pago de salarios en la administración pública, luego de la Rebelión de Túpac Amaru (1782), socavó el espíritu de cuerpo de la burocracia colonial.⁴²

Sin embargo, pese a las Reformas Borbónicas, que dieron primacía a una burocracia real asalariada, la burocracia patrimonialista se habría perpetuado a lo largo del régimen Borbónico, y aún probablemente luego de la Revolución, y no se habría diferenciado mayormente de la burocracia absolutista.⁴³ En efecto, probablemente inspirado en las hipótesis de Jaurés acerca de las consecuencias revolucionarias que en Francia habrían provocado las frustradas reformas anti-patrimonialistas del Canciller Maupeou,⁴⁴ para Pérez de Tudela (1989) los Corregimientos de Indios nunca habrían sido definitivamente abolidos pues sus prácticas corruptas se habrían perpetuado a través de sus sustitutos: los Subdelegados de Real Hacienda.⁴⁵ Los Corregidores de Indios, funcionarios peninsulares a cargo entre otras funciones de los repartos forzosos de mercaderías en las comunidades indígenas, fueron justamente anatematizados por el ilustrado Virrey Manuel de Amat y Junient como "diptongos de mercaderes y jueces".

La burocracia colonial borbónica habría estado entonces, para autores como Barbier, Andrien, Socolow, Peña y Webre,⁴⁶ compuesta por funcionarios que explotaban rentas fiscales y mercantiles (reparto de mercancías), al extremo de configurar el intento de centralizar el poder y de inmunizar la burocracia colonial contra el localismo y el regionalismo, poniendo a ésta fuera del alcance de los linajes aristocráticos nativos o criollos. La subsistencia de la burocracia patrimonial en la América colonial no se hallaba amenazada, según Bonilla (1981), por la burocracia absolutista Borbónica misma, sino por la amenaza que provenía de la propia estructura económico-social colonial criolla.⁴⁷ Asimismo, Felstiner (1976) y Sánchez Bella (1989) fueron los que más fuertemente insistieron en la inocuidad de las Reformas Borbónicas (Real Cédula de la Alternativa) para combatir las oligarquías

capitulares.⁴⁸

Mas la explotación de una renta fiscal por parte de los Corregidores era una hipótesis sumamente cuestionable. Según Moreno Cebrián (1976), como el valor en que se vendieron los Corregimientos de Indios durante el siglo XVIII aumentó muchísimo, el desfase existente entre los ingresos salariales y los gastos inherentes al cargo creció también en grado sumo, debido justamente a la depreciación y a la baja del poder adquisitivo del salario.⁴⁹ Y para Parry (1953), el intento de divorciarse del feudalismo y engendrar un embrión burgués también se frustró, no tanto por hacer vendibles los oficios concejiles, sino por hacerlos renunciabiles, o en otras palabras heredables, lo cual en lugar de enaltecer el mérito y el esfuerzo personal privilegiaba la prosapia y la herencia.⁵⁰ Sin embargo, para Golte (1980), la imposición del sistema de Corregimiento de Indios, al desplazar del poder a una clase encomendil, habría significado un embrión de burguesía mercantil; así como su posterior abolición habría expresado la frustración de dicho embrión.⁵¹ Frente a las críticas que esta posición suscitó, Golte (1980), Tord y Lazo (1981) y Reyes Flores (1983), analizando el caso Peruano, concluyeron que aunque la burocracia patrimonial no constituyó una clase social en cuanto burocracia, sí lo habría sido en cuanto clase efectiva, por el hecho de adquirir los cargos venalmente. Por último, para Choy (1985), desde una perspectiva reduccionista, la venta de los oficios públicos, y entre ellos la de los Corregimientos de Indios, era una hábil política destinada a quebrar la unidad de los burgueses, incorporando a algunos de ellos, incluso a los que padecían del estigma de un dudoso origen racial y una sospechosa legitimidad, como funcionarios del feudalismo; separándolos así de aquellos otros burgueses

"...que permanecían ligados a la trayectoria histórica de su clase, o sea a la función de minar y derribar el sistema feudal por todos los medios".⁵²

La característica más notoria del Antiguo Régimen colonial Borbónico estaba constituida, según Urbina Reyes (1962), Woodward (1966), Villaseñor Bordes (1970), Meltzer (1978) y Lampros (1980), por las inmunidades forales obtenidas por los comerciantes en los Tribunales de los Consulados de Comercio. Y para Botana (1991), fundado en la obra de López (1883), la representación capitular en la América hispana no era una representación clásica como en las colonias de la Nueva Inglaterra, sino una representación invertida, donde los cabildantes eran elegidos por los que los precedían en los cargos.⁵³ Pero si tomamos en cuenta el impacto del instrumento jurídico, llamado alternativa, debemos reconocer que, a pesar de sus desvirtuaciones, merced a este instrumento la corporación capitular no era cerrada ni exclusivista, sino abierta, aunque calificada, por cuanto auspiciaba una inclusión controlada. Las fracturas corporativas, aún hoy en día no totalmente extinguidas,⁵⁴ consistían en privilegios judiciales (fueros) que atentaban contra la inamovilidad de los jueces y otorgaban a quienes se integraban a una determinada corporación inmunidad contra el poder jurisdiccional común, habiendo constituido la fuente nutricia de los clericalismos y militarismos en boga.

En una reciente línea de investigación, Vives (1986) sostuvo la hipótesis que las políticas recolonizadoras borbónicas cumplieron en las ciudades una función desestructuradora.⁵⁵ Mientras Domínguez (1985) sostuvo que los patriciados de las distintas ciudades coloniales estaban entre sí jerárquicamente relacionados; Robinson y Thomas (1974) y Colmenares (1991) probaron que los patriciados de los asentamientos urbanos más antiguos se sentían amenazados por los de las ciudades más nuevas.⁵⁶ Pero en sus análisis, estos autores (Vives, Domínguez, Robinson y Thomas, y Colmenares) no alcanzaron a describir cuales fueron dichas elites ni cuales fueron las formas en que dicha desestructuración y/o jerarquización tuvo lugar.

Por último, aplicando los juicios que formulara Salzmänn (1993) para el Imperio Otomano,⁵⁷ la descentralización de la burocracia colonial que significaron las políticas fiscales privatizadoras (venalidad de los oficios) habría facilitado la transición entre la precoz centralización imperial del Absolutismo Habsburgo y la peculiar centralización institucional que introdujeron las Reformas Borbónicas a fines del siglo XVIII.⁵⁸ En forma semejante, la concentración de la burocracia colonial -- que significó la lenta gestación de la esfera pública y la consiguiente supresión de la venalidad de los oficios públicos-- habría facilitado la larga transición del Antiguo Régimen colonial-absolutista a la modernidad liberal republicana vigente en el siglo XIX. Ultimamente, Fradkin (1987), siguiendo aparentemente las tesis de Phelan, Beneyto y McAlister, sostuvo al referirse al Gremio de Hacendados de Buenos Aires, que el pasaje de gremio corporativo a clase social encontraba en el estado colonial límites que comenzaban a superarse en el estado autocrático, y que sólo se resolvieron en el estado oligárquico, a fines del siglo XIX. Más aún, el autor de este trabajo demostró que la inestabilidad o variabilidad exhibida por la burocracia capitular cambiaba según la naturaleza hereditaria, venal o electiva que prevaleciera entre sus miembros.⁵⁹ En dicho artículo comprobé que los Cabildos seculares, independientemente de los Cabildos Eclesiásticos, las Comandancias de Milicias y los Cabildos Indianos, fueron capaces de competir por el favor político del Rey, el Virrey o la Real Audiencia, así como de prevalecer contra la voluntad de virreyes, gobernadores, comandantes, obispos y oidores poniéndolos a unos contra otros.⁶⁰ De esa forma, sacando ventaja de sus mutuas diferencias respecto de la venta de oficios, solicitud de arbitrios (impuestos) y levadas militares, licencias para ausentarse o vender tabaco y naipes, precedencias protocolares, administración de bienes de Temporalidades y nombramiento de autoridades (Tenientes Gobernadores, Alcaldes Mayores, y Diputados en las Juntas Municipales de Propios y Temporalidades), la burocracia capitular pudo sobrevivir.⁶¹

Los patrones jerárquicos y nepóticos de estamentos y corporaciones, el sistema de fueros y privilegios corporativos, y el poder de las estructuras político-patrimoniales propias del estado colonial Habsburgo o de los Austrias persistieron, para Montenegro (1943, 1967), Beezley (1969), Fals Borda (1970-71), Wiarda (1973) y Andrews (1980, 1985), aún después de haberse producido las Reformas Borbónicas y la misma Revolución de Independencia.⁶² Por ejemplo, el hecho de que en tiempos de Rosas (1836-52), e incluso en tiempos de la presidencia de Roca (1880-86), el gobierno siguiera reclamando el pago de personeros,⁶³ como requisito para que alguien de posibles lograra ser exceptuado del servicio de Milicia, reflejaría la permanencia del patrimonialismo militar.⁶⁴ Y pese a que los mayorazgos y las vinculaciones fueron prohibidos por la Asamblea del Año XIII-- dichas instituciones lograron perpetuarse maquillados en la sucesión de los patronatos y los beneficios capellánicos, hasta sancionarse en la segunda mitad del siglo XIX el Código Civil.⁶⁵ ¿Qué era lo que definía la constitución de una burocracia patrimonialista y corporativa? ¿eran el patrimonialismo y el corporativismo prevalecientes en el Antiguo Régimen Colonial semejantes a los vigentes durante la modernidad? ¿fueron las limitaciones etno-céntricas (la alternativa y la legislación persecutoria del nepotismo), prevalecientes durante el Antiguo Régimen Colonial, semejantes a las vigentes durante la modernidad?. No contestar estos interrogantes correría el riesgo de no poder explicar porqué las revoluciones ocurrieron, ni por qué ocurrieron cuando y donde lo hicieron.

Para estudiar la burocracia secular colonial y la civil nacional indagaremos entonces el rol que le cupo a:

- a) la lucha del comercio y los Tribunales del Consulado con los Cabildos, manifestada en los conflictos producidos por los fueros capitulares, que se expresaban en el ejercicio de los

actos de administración o jurisdicción,⁶⁶ y en los actos de honor o representación;⁶⁷

b) las impugnaciones de los Alcaldes en ocasión de elecciones concejiles;

c) las contradicciones entre los fueros capitulares y el poder de Gobernadores, Virreyes y Oidores;

y d) la corrupción, el nepotismo y la falta de independencia de la justicia federal.

En el sentido apuntado por las tesis arriba expuestas, cabe entonces preguntarse si la velocidad de circulación de la elite estaba o no relacionada con la intensidad de los privilegios forales y las fracturas corporativas; y si los conflictos en el seno de las instituciones mercantiles (Tribunales y Diputaciones del Real Consulado), y entre estas últimas y los Cabildos, se hallaban o no relacionados con los procesos de estamentalización y movilidad de la sociedad colonial. Asimismo, en este tomo nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas comerciales, por cuanto fué durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de los patriciados locales. Para analizar a la burocracia capitular indagamos los casos en que sus fueros afectaron al comercio a larga distancia y al servicio de Milicias. Para estudiar la incidencia de las impugnaciones capitulares hemos realizado algunos cálculos demográficos. Y para investigar el comportamiento del Consulado de Comercio estudiamos los casos en que el Consulado combatió los privilegios de la Milicia, como ocurrió en Buenos Aires y Asunción del Paraguay.

A los efectos de estudiar todos estos casos, hemos recogido docenas de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC).

Plan del Volumen

En el capítulo 2 estudiamos el origen del auto-gobierno y la naturaleza contradictoria del estado colonial hispano-americano. En el capítulo 3, estudio el origen geográfico en la identidad de la polis colonial y en especial las cuotas preferenciales de representación política, tales como la "Alternativa" en las Recusaciones Capitulares del mundo Rioplatense dieciochesco. En el Capítulo 4, estudio el etno-centrismo y el nepotismo de los Cabildos en las ciudades carentes de inmigración del Virreinato del Río de la Plata (1700-1776). En el Capítulo 5 analizo el nepotismo capitular en los orígenes de las Reformas Borbónicas, en especial la endogamia en los Cabildos del Interior del Virreinato del Río de la Plata (1760-1790). En el Capítulo 6, investigo el impacto de la inmigración de comerciantes peninsulares en el nepotismo y el etno-centrismo practicados en los Cabildos (1760-1810). En el Capítulo 7, estudio las fracturas patrimonialistas en los Cabildos, específicamente la elegibilidad y la venalidad de los oficios capitulares en el Virreinato del Río de la Plata (Siglo XVIII). En el Capítulo 8, indago el fuero consular enfrentado a los fueros capitular, eclesiástico y militar, en especial la lucha del comercio contra las presiones señoriales de los Cabildos, la Iglesia y la Milicia. En el capítulo 9, estudiamos las contradicciones entre los fueros capitulares y el poder de Gobernadores, Virreyes y Oidores y la facultad de nombrar y representar. En el Capítulo 10 examino la conducción de los caudales de oro y plata como mecanismos de corrupción, centrandome en el caso del situado asignado a Buenos Aires por las Cajas Reales de Potosí en el siglo XVIII. En el capítulo 11 encaro el analisis de la imposicion fiscal y su impronta en la estructura social o el poder de recaudar impuestos, librar licencias y administrar bienes en el Río de la Plata (1739-1810). En el Capítulo 12, analizo la

corrupción administrativa como mecanismo de acumulación y engendrador de una burguesía comercial local. En el Capítulo 13, estudiamos la administración de justicia como ámbito de contienda facciosa, centrándonos en el fuero federal durante el siglo XIX de la Argentina. Y en el capítulo 14, analizamos las comunicaciones como esfera crítica, en especial la censura telegráfica en el régimen republicano.

NOTAS

¹ Ravignani, 1937, I, 49.

² Cervera, 1907, II, 913; Silva, 1937, I, 175; y Sáenz Valiente, 1952, 208-209.

³ El Redactor de la Asamblea (Buenos Aires: Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1913), n.18, pp.69-70, citado en Cabral Texo, 1952, 100.

⁴ Registro Oficial de la República Argentina, t.I, 1810-1821, p.206. Los Alguaciles y Familiares del Santo Oficio de la Inquisición eran los que debían expedirse sobre la limpieza de sangre de quienes aspiraban a determinados cargos.

⁵ Ibáñez Frocham, 1938, 149-150.

⁶ Heras, 1923, 1925; Ibáñez Frocham, 1938, 165-171; y Halperín Donghi, 1979, 359-360.

⁷ Orgaz, 1940; y Mouchet, 1952, 1958 y 1960.

⁸ Ver Martínez Peroni, 1983, 455-490.

⁹ Para Joaquín V. González, los Cabildos, al haber sabido resistir la naturaleza centralista y absolutista de obispos y gobernadores, "...parecían repúblicas perfectas, aún dentro de una monarquía de hierro" (González, 1888, Libro Primero, II).

¹⁰ Según ellos, los Cabildos resistieron la naturaleza centralista y absolutista de obispos y gobernadores desde los mismos comienzos de la dominación colonial, en los siglos XVI y XVII. En ese sentido, los que influídos por el germanismo de Thierry y Guizot, sostuvieron la tesis de que en la génesis del estado colonial le cabía la prioridad a las provincias por sobre la nación, en realidad lo que hacían era atribuir el origen de la nacionalidad a los Cabildos. Al lamentarse que en la Argentina Independiente no se hubieran dejado en pie los Cabildos, con sus libertades y sus fueros, lo que en realidad añoraban era el "republicanismo" colonial Habsburgo --erosionado por el discurso Reformista Borbónico y demolido por el discurso Revolucionario.

¹¹ como Montes de Oca (1897), García (1900), Rivarola (1908), Matienzo (1910), Levillier (1912), Ingenieros (1918), Bas (1927), Ravignani (1938), Bagú (1952) y Levene (1911).

¹² Al referirse a la base social del estado colonial, dichos autores sostuvieron que en aquellos tiempos, en las corporaciones de las ciudades del Virreinato del Río de la Plata, existieron aristocracias o patriciados (equivalentes a la nobleza del Antiguo Régimen Europeo), y no clases medias (equivalentes a la burguesía), únicos sostenes posibles de repúblicas democráticas.

¹³ García, 1900, Capítulo VIII, Sección 2; Levillier, 1912, 81-83; e Ingenieros, 1918, 38-41. Ver Saguier, 1984a, 24.

¹⁴ En los Estados Unidos, a partir de la obra de Wood (1992, 1994) y en Canadá a partir de las obras de Groulx (1936, 1952, 1956); Frégault (1944, 1955); Brunet (1964, 1969); Séguin (1968); y Wallot (1973), reseñadas por Ouellet (1981).

¹⁵ distinguimos para la vigencia de los fueros aquellas ciudades e instituciones donde prevalecía la venalidad y heredabilidad de los cargos públicos de aquellas otras ciudades e instituciones donde prevalecía la elegibilidad de los mismos. Lo que definía la constitución patrimonialista de los estados coloniales del Antiguo Régimen eran las diversas políticas respecto al reclutamiento y promoción de los funcionarios públicos (subastas de oficios públicos versus burocracia real asalariada).

¹⁶ probablemente inspirados en Tocqueville (1859), Tönnies (1887) y Weber (1922).

¹⁷ Luxemburg, 1908, 1979, 81-139; Rivarola, 1941, 21; y Kofler, 1974, 332.

¹⁸ Levillier, 1912, 81-83; Ingenieros, 1918, 38-41; y Puiggrós, 1940. Ver Saguier, 1984, 24.

¹⁹ Puiggrós, 1940, 56, nota 91.

²⁰ Phelan, 1967, 327; y Zabłudovsky, 1986.

²¹ Beneyto, 1961, 117.

²² Phelan, 1967, 324.

²³ Peña, 1970.

²⁴ Esta tendencia visualizó a los conflictos en el seno de los concejos municipales coloniales (Vicuñas versus Vascongados en Potosí, Beneméritos versus Confederados en Buenos Aires, pelucones versus anti-beatos en San Juan, ajesuitados y anti-jesuitas en Corrientes) como verdaderas luchas inter-capitalistas.

²⁵ Lynch, 1967, 191; y Kaplan, 1976, 74.

²⁶ No obstante su condición de miembros de un estamento, los vecinos encomenderos revelarían --en los conciertos de indios celebrados entre regiones geográficamente apartadas entre sí-- la existencia de una intensa movilidad, estrecha interdependencia y capacidad de transformarse en hacendados (permítaseme citar a Saguier, 1993).

²⁷ Peña, 1983.

²⁸ como Barbier (1972), quien estudia el caso Chileno; Alvarado Morales (1979), quien estudia la elite de la ciudad de México; y para Martínez Ortega (1989,1992) y González Muñoz (1992), quienes analizan la elite Yucateca.

²⁹ Martínez Ortega, 1989, 216. Sherman (1977, 1980) y Williams (1988) reconocen a partir de la sociobiología la importancia que el rol del nepotismo tiene en el género animal (Williams, 1988, 384 y 397). Sherman (1977) demuestra en un gran número de especies sociales que los parientes más próximos reciben una mayor ayuda (Reiss, 1984, 123). Las relaciones de parentesco entre los seres humanos surgían como consecuencia de las estrategias matrimoniales, las cuales incluían los matrimonios endogámicos (cruzados y paralelos). Mientras que el matrimonio paralelo (aquel celebrado con la hija del hermano del padre), era casi inexistente por sospechárselo incestuoso; el matrimonio cruzado (aquel celebrado con la hija de los hermanos de la madre o de las hermanas del padre), no sólo estaba permitido sino que era alentado, por los elementos de conveniencia económica (clearing dotal) y prestigio social que traía consigo. Elias (1982), en su estudio de la temprana edad moderna, sostenía que las estrategias matrimoniales deben ser tomadas como prácticas o mecanismos mediante las cuales lo que importa son sólo el prestigio y rango de los contrayentes; donde en otras palabras uno, que representa a una familia o clan específico, no se casa con un ser humano individual sino con una familia o incluso con un clan familiar. Cuanto más prestigioso era el rango de el o la consorte mayor era el prestigio que adquiría el o la contrayente (Elias, 1982, 71). Esta tesis fué sustentada en otros términos, con anterioridad, por Goode (1959), para quien los impulsos del amor romántico debían ser reprimidos por cualquier sociedad que buscara preservar su estructura social (Wolf & Hansen, 1967, 171). Con relación a ello, y referido al Río de la Plata, Balmori (1984) sostiene la tesis de que la composición de la oligarquía privilegiaba aquellos integrantes cuyos apellidos se entroncaban con las familias cuyo origen paterno o materno arrancaba del estado colonial borbónico. En un país cuasi-despoblado conformado por castas donde primaba la línea del color y donde la mayoría de la población de raza blanca que constituía la élite política procedía de Europa, para un inmigrante el prestigio de un matrimonio lo daba no tanto la riqueza como la antigüedad del linaje de la novia y la extensión de su parentela; y viceversa, para una familia patricia de dos o más generaciones de estar avecinados el prestigio de un matrimonio lo daba no tanto la antigüedad del linaje como la riqueza del pretendiente y su origen peninsular. Pero el prestigio del matrimonio también variaba con la coyuntura histórica de que se tratara; pues en tiempos de la Organización Nacional (1852-80), el prestigio lo otorgaba la profesión liberal, en especial la de abogado; en tiempos del Unicato Roquista (1880-1904), lo otorgaba la propiedad territorial y la vinculación con el polo económico en expansión constituido por la Pampa Húmeda; y en tiempos del interregno revolucionario anti-oligárquico (1890-1916), el prestigio lo habría concedido la militancia política en los partidos políticos populares.

Sin embargo, para Boone (1986), que estudia el Portugal medieval tardío, en todas las sociedades estratificadas, la riqueza fué siempre el parámetro más decisivo para determinar la habilidad del varón para contraer pareja y para establecer una carrera reproductiva estable (Boone, 1986, 862). El objetivo de la competencia por los recursos materiales no era necesariamente por los recursos mismos, sino por el status social que el control de los recursos confería. Desde un punto de vista evolucionista, la competencia por el status en las sociedades patriarcales como las del interior del espacio rioplatense, eran en última instancia, una forma de competencia en la cual los varones rivalizaban por los recursos materiales que les conferían status, el cual a su vez les garantizaba el acceso a las jóvenes casaderas. Es nuestra tesis entonces, que a los efectos de la obtención de dichos recursos materiales, era indispensable en una gran parte de los casos el control de las estructuras político-administrativas, lo cual suponía la exclusión de aquellos otros miembros de la élite política que amenazaban su hegemonía; de ahí la continuidad y la extensión, en los estados oligárquicos de las prácticas nepóticas propias de los estados coloniales. Observar para el caso de Colombia, el artículo de Leal Buitrago (1988) y el de Uribe y Alvarez Gaviria (1988); y en el caso del Río de la Plata los trabajos de Mansilla (1941), Labougle (1953), Real de Azúa (1961), Saguier (1989), Marquiegui (1990); y Navarro Floria y Nicoletti (1990).

³⁰ no debe ser confundida con la noción más reciente y ampliada de soberanía popular.

³¹ González Echenique, 1967, 129; y Romero, 1976, 112.

³² Solo aquellos que tuvieran casa poblada de por sí en la villa de su jurisdicción, fueren vecinos, mayores de 20 años de edad, fuesen honrados "de buena opinión y fama", no hubieren ejercido ningún oficio mecánico "ni otros trabajos humildes y bajos", fuesen personas beneméritas "...de buenas partes y servicios, idóneas, temerosas, y celosas del servicio de Dios nuestro Señor, limpias, rectas, y de buenas costumbres", es decir, carecieran de tacha racial alguna, y fuesen hijos de legítimo matrimonio, reducía enormemente el universo dentro del cual podía elegirse a un capitular, operando como una suerte de ley de embudo (Leyes 6, 10, y 12, Tít.10, Lib.4; Ley 8, Tít.3, Lib.5; y Ley 13, Tít.2, Lib.3 de la Recopilación de Indias; y Ley 3, Tít.9, Lib.3 y Ley 1 y 7, Tít.10, Lib.4 de la Recopilación de Castilla. Según Pedro Vicente Cañete "...el extranjero no puede ser Alcalde ni Regidor por la Ley 66, Cap.5, Tít.4, Lib.2, y Ley 2, Tít.3, Lib.7 de Castilla; no puede serlo tampoco el hombre desentendido, o de mal ceso, ni el mudo, ni el sordo, ni el ciego, ni el enfermo havitual, ni el que fuere de mala fama, ni el herege, ni la mujer, ni el siervo según la Ley 7 y 8, Tít.9, Lib. 3 de Castilla copiadas literalmente de la Ley 4, Tít.4, part.3, y Ley 7, Tít.6, part.7, incluso el clérigo de orden sacro, y los Alcaydes de Fortalezas que están igualmente prohibidos por la Ley 10, Tít.3, Lib.1, y por la Ley 15, Tít.5, Lib.3 de Castilla" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Para la noción de vecindad ver Lezcano de Podetti (1968); y para la enumeración de los privilegios que otorgaba la vecindad ver Lorenzo Schiaffino (1984).

³³ Por Real Cédula del 17 de febrero de 1762, la Corona dispuso que en las elecciones anuales de alcaldes ordinarios, se instrumentase la alternativa, es decir una elección en la cual simultáneamente se eligieran como alcaldes de primero y segundo voto a un nativo y un europeo (AGN, Reales Cédulas, tomo 40, fs.246, Sala IX, 24-9-7). Este sistema, equivalía en la práctica a un sistema de cuotas por mitades, es decir del 50% para cada uno de ambos grupos étnicos. La partición de los oficios públicos, o discriminación preferencial de los oficios públicos, tiene sus antecedentes en el siglo XVII en los Cabildos seculares cuando los oficios capitulares fueron repartidos entre encomenderos y no encomenderos (Doucet, 1974, 383), y en las Ordenes Religiosas cuando en los capítulos conventuales se elegían peninsulares y criollos por mitades (Tibesar, 1955; González Echenique, 1962; y Lavallé, 1993, 165-166). Esta política discriminatoria, semejante al Programa impulsado recientemente en los Estados Unidos para favorecer a las minorías étnicas y conocido con el título de Acción Afirmativa, fomentó el estereotipado étnico que invitó a los vecinos de las diversas ciudades de la América Hispana a percibir a los peninsulares como poseedores de características raciales superiores a las de los criollos, que los hacían merecedores de privilegios o cuotas preferenciales de representación política. De aquí que la práctica de la alternativa sumergió la vitalidad de la personalidad bajo amortiguantes prejuicios étnicos que hacía que los peninsulares justificaran sus privilegios como producto de un mérito y los criollos su desproporcionadamente inferior cuota de poder como fruto de una culpa (Para evaluar el impacto negativo que estas políticas discriminatorias tuvieron en los Estados Unidos, ver Reynolds, 1992; y Lipset, 1992).

³⁴ Dispensa o concesión de facultades, títulos o privilegios que se otorgan por el Rey o el Papa mediante ciertos servicios pecuniarios (Escriche, 1863, 752). Ver asimismo a Cortés, 1978. El Sargento Mayor José Cañete, hijo bastardo del Gobernador y caudillo de los Comuneros Don José de Antequera y Castro y de Micaela Cañete Sánchez de Vera y Aragón, y padre del célebre escritor Pedro Vicente

Cañete y Domínguez, fué legitimado por el Rey (Quevedo, 1984, 77). El escribano Juan José Rocha, mulato, adquirió en 1797 en Buenos Aires una gracias al sacar, que le permitió ser llamado Don (Socolow, 1987, 106).

³⁵ El fenómeno eleccionario estaba compuesto por tres actos distintos: la calificación, la elección propiamente dicha, y la confirmación.

³⁶ Ibáñez Frocham, 1938, 4.

³⁷ Ley 53, título 4, libro 8 de la Novísima Recopilación, y Real Ordenanza de Intendentes, 1784.

³⁸ Romero, 1956, 54-55; Véliz, 1984, 87; y Sanjurjo, 1987, 531.

³⁹ Comadrán Ruiz, 1959, 82; Acevedo, 1965, 127, 186-187, y 505; y Fisher, 1981, 201. Según Fernandez Alonso (1991), tanto Moore como Lynch y Comadrán Ruiz sostienen, a diferencia de Fisher y Acevedo, que la intervención de los Gobernadores-Intendentes supuso una grave pérdida de terreno para los Cabildos (Fernández Alonso, 1991, 518).

⁴⁰ Acevedo, 1965. 187.

⁴¹ Fisher, 1981, 201.

⁴² Socolow, 1987, 160.

⁴³ No es de descartar que el régimen patrimonial se perpetuara aún luego de la Revolución si tenemos en cuenta que aún en Francia, pese a la Revolución, Runciman (1983) concluye que "...ni la abolición de la venalidad de los oficios ni la introducción del sufragio adulto cortó los lazos entre el dinero y la función pública, o democratizó el proceso de selección en el Ejército y la Iglesia" (Runciman, 1983, 315).

⁴⁴ Moore, 1976, 60; y Bell, 1991, 107-141.

⁴⁵ Pérez de Tudela, 1989, 455; y Walker, 1991, 128.

⁴⁶ fundados implícitamente en los juicios de Weber (1922); Kofler (1948, 1974) y Anderson (1974) en sus aportes acerca de la venta de cargos; y Golte (1980), Tord y Lazo (1981), Reyes Flores (1983) y Choy (1985), que analizaron el Perú colonial tardío.

⁴⁷ Bonilla, 1981, 278, cit. por Peralta Ruiz, 1991, 150.

⁴⁸ Sánchez Bella, 1989, 447.

⁴⁹ Moreno Cebrián, 1976, 228.

⁵⁰ Parry, 1953, 33-47, citado por Lynch, 1967, 216, nota 8. La innovación de hacer a los oficios vendibles también renunciabiles fué copiada aparentemente de Francia, donde por el procedimiento ideado por Paulet los oficios vendibles "...se volvían hereditarios por un pequeño porcentaje anual

sobre su valor de compra, medida destinada a aislar a la burocracia de la influencia de los potentados" (Anderson, 1979, 91).

⁵¹ Golte, 1980, 206.

⁵² Choy, 1985, 206.

⁵³ Botana, 1991, 92.

⁵⁴ Fernández, 1973, 1985, 196-197.

⁵⁵ cuyos síntomas fueron: 1) la utilización de la campaña del hinterland como ámbito de residencia alternativa por parte de las élites locales; 2) el avance progresivo de las actividades artesanales; 3) la tugurización de las áreas urbanas centrales (plaza de armas); y 4) la escasez de recursos infraestructurales (Vives, 1986, 70).

⁵⁶ Domínguez, 1985, 98; y Robinson y Thomas, 1974, 32. Debo la referencia de este último autor a la gentileza del Profesor Carlos A. Mayo.

⁵⁷ y a diferencia de los puntos de vista funcionalistas de Eisenstadt (1969) y Mardin (1973) y los criterios de clase de Mann (1984), que plantearon la inevitabilidad del conflicto entre los centros y las periferias.

⁵⁸ Salzmann, 1993, 394.

⁵⁹ Saguier, 1984a.

⁶⁰ Saguier, 1984b, 48-59.

⁶¹ Saguier, 1984b, 51. Ultimamente, Fradkin (1987), reanudando una tesis de Ingenieros (1900) y de Beneyto (1961), incorpora a los análisis acerca de la crisis del estado colonial el rol que en dicha crisis les cupo a las corporaciones. Para Fradkin, el pasaje de gremio corporativo a clase social encuentra en el estado colonial límites que comienzan a superarse recién en el estado autocrático, y que sólo se resuelven en el estado oligárquico. Como el status de los individuos que ingresaban a cada corporación debía corresponder, según Fradkin, con el status mismo de las corporaciones respectivas -- por ser éstas subórdenes en una sociedad estratificada en estamentos-- cuando el equilibrio entre las corporaciones se desestabilizaba por motivos exógenos de carácter económico, político o militar, el status de los individuos que los integraban también se desequilibraba, volviéndose inconsistente y campo propicio para que determinadas conductas se aprovecharan de una situación potencialmente crítica. Finalmente, Golte (1980), Tord y Lazo (1981) y Reyes Flores (1983), analizando el caso Peruano, concluyeron que aunque la burocracia patrimonial no constituyó una clase social en cuanto burocracia, sí lo habría sido en cuanto clase efectiva, por el hecho de adquirir los cargos venalmente.

⁶² Wiarda, 1973, 219.

⁶³ sustitutos de los destinados al servicio de Milicia, que se obtenían mediante la correspondiente paga.

⁶⁴ Real, 1957, 75; y Rodríguez Molas, 1982, 272.

⁶⁵ Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del Código Civil, ignoró totalmente esta institución.

⁶⁶ designación de autoridades eclesiásticas, laudo de litigios eclesiásticos, y supervisión y control de la educación superior.

⁶⁷ privilegios, precedencias o prerrogativas del ceremonial religioso.

TOMO VII

Capítulo 2:

El origen del auto-gobierno y la naturaleza del estado colonial hispano-americano.

(publicado en 1984 en la Revista de Historia de América [México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia], 97, 23-44; bajo el título: "The Contradictory Nature of the Spanish American Colonial State and the Origin of Self-Government in the Rio de la Plata Region. The Case of Buenos Aires in the Early Seventeenth Century"; registrado en el Handbook of Latin American Studies (HLAS), v.48, 1986, item 2830);

La naturaleza contradictoria del estado colonial le dio forma a la burocracia y a los conflictos políticos internos. Cuando el capital comercial llegó a dominar la encomienda y los intereses ligados a la producción agropecuaria, como lo hizo en la primera mitad del siglo XVII en Buenos Aires, el crecimiento de un grupo de interés mercantil no fue sólo una función del éxito económico, sino también una función del nivel de hegemonía sostenido por los mismos mercaderes en las "sociedades políticas y civiles". A la luz de este hecho, podría decirse que la construcción de un estado colonial nuevo implicaba la transformación de las relaciones sociales de producción y distribución, y de las creencias religiosas, culturales, morales, políticas y sociales predominantes. Simultáneamente, la construcción de un estado colonial nuevo dio nacimiento a una nueva hegemonía mercantil por la lucha contra los constreñimientos externos e internos y por la legitimación de un bloque de poder local.¹

Aparte de darle forma a la naturaleza del estado colonial, la penetración del capital comercial también dio forma a la naturaleza de los conflictos políticos internos. Este estado colonial era el resultado de antagonismos sociales inscriptos en su propia estructura. Es necesario comprender que los residentes de un estado tal como el de Buenos Aires, no disfrutaban todos de los mismos derechos ni cargaban con las mismas responsabilidades. Las diferencias generadas dentro de la burguesía mercantil de Buenos Aires eran causadas por el desarrollo contradictorio entre los mercaderes orientados hacia el mercado interno (relacionado con los productores de vino, tabaco, azúcar y yerba de las regiones litoraleñas y cuyanas) y los mercaderes orientados hacia el mercado externo (tratantes de esclavos), por las diversas formas de asociación con el capital comercial portugués y por las rivalidades crediticias.

Este conflicto intra-colonial también penetró el bloque ideológico. En un período de crisis ideológica profunda y generalizada, acentuado por la Visita pro-indígena de Francisco de Alfaro, brotó una crisis de confianza en la reproducción espontánea del sistema neo-feudal.² Esta crisis de confianza se tornó en una exacerbación de todas las contradicciones ideológicas y en una desintegración de la unidad del discurso ideológico dominante. Como el rol de toda ideología, consiste en transformar

individuos en sujetos o agentes históricos, esta crisis ideológica necesariamente envolvió a todos los agentes sociales dentro de una severa crisis de identidad.³ Cada una de las facciones en conflicto trató de reconstruir una unidad ideológica nueva transmitiendo una descripción que podía desarticular el discurso ideológico de las fuerzas opositoras -los Confederados, por un lado, que transmitían una suerte de anticlericalismo erasmiano, y los Beneméritos, por el otro, que transmitían una suerte de racismo pre-moderno.

Los intereses orientados hacia el mercado interno y externo, agentes tanto de los constreñimientos externos como de los internos, estaban organizados y reorganizados en corporaciones y estamentos (rangos o estados sociales). Estas corporaciones y estamentos luchaban unos contra otros por el control de la sociedad civil. El resultado inmediato de los conflictos intracoloniales fue el reacomodamiento de jurisdicciones y áreas de influencia. En la búsqueda de influencia, cada facción en conflicto deseaba controlar y manipular los recursos administrativos y judiciales y asegurar para sí la porción más grande posible de los ingresos de la administración pública. El clásico conflicto de clases en el Buenos Aires colonial se desarrolló dentro de una minoría diminuta, privilegiada. Durante este período la gran masa de mano de obra productiva, indios y esclavos, sólo prestaron un apoyo pasivo a los rivales en conflicto. Además, la inmigración portuguesa, con la mezcla consecuente de razas, ayudó a eliminar los límites de una estratificación social estamental y dio lugar a un tipo peculiar de conflicto social pre-moderno, conocido como conflicto intracolonial. Este tipo de conflicto consistía esencialmente en conflictos interestamentales.

En las ciudades interiores, donde los intereses orientados hacia el mercado interno prevalecieron, los Oficiales Reales ejercían una muy débil influencia y los Cabildos eran controlados casi exclusivamente por los encomenderos. Después de 1602, en Buenos Aires, el capital comercial o los intereses orientados hacia el mercado externo, y los empresarios no-encomenderos (Confederados) gradualmente devinieron dominantes. Sin embargo, no dominaron completamente el Cabildo; los Oficiales Reales aun mantenían una fuerte influencia. De ahí que el Cabildo devino un campo de batalla donde ambos bandos luchaban por la hegemonía. Los Beneméritos decían representar el partido del orden, mientras los Confederados eran acusados de representar el partido de la anarquía. Cada una de estas facciones trató de alcanzar legitimidad y subordinar a los otros mediante luchas intercorporativas. Era como Jacques Heers se refería a las ciudades de la Italia Medieval "...poder o exilio para cada facción, victoria total o al menos la pérdida temporal de toda influencia e incluso de toda propiedad para sus líderes".⁴

En las colonias centrales del Imperio español tales como México o Perú, los principales conflictos intercorporativos arrieron entre virreyes y Audiencias, o entre arzobispos y virreyes. En las colonias periféricas, como Buenos Aires, la puja arrecio entre el Consejo de Indias, el virreinato Peruano, la Real Audiencia de Charcas, el Arzobispado de Charcas, y la gobernación del Río de la Plata.

Una vez que un equilibrio de poder externo fue logrado, permaneció aún inestable una crítica lucha interna. Internamente, la lucha más decisiva ocurrió entre gobernadores, Cabildo, funcionarios reales y obispos o, dentro de corporaciones diferentes (Beneméritos versus Confederados dentro de los miembros del Cabildo), afectando así el necesario equilibrio de poder entre ellos. El equilibrio de poder significaba la distribución de poder en la colonia de manera tal que ningún poder burocrático individual, ni el Cabildo, ni el gobernador, ni el obispo, ni los funcionarios reales, ni el Alguacil Mayor, le fuera permitido volverse tan fuerte como para dominar o imponer a los otros poderes y cambiar entonces el equilibrio existente.

La administración colonial habsburga se volvió a juicio de Phelan no tanto en una cuestión de comando vertical desde la metrópoli española, como un sistema de frenos y contrapesos de las instituciones burocráticas autogobernadas. Cuanto más tiempo el burócrata real permanecía en su cargo, más obvias se volvían las tendencias contradictorias del dual concepto habsburgo de autoridad y control.⁵ En opinión de Phelan, el estado español fue un converso tardío al absolutismo.

Sin embargo, cuando la balanza del poder cambiaba la lucha intra-colonial estallaba. Esta lucha era estimulada por la naturaleza contradictoria del estado colonial, por cuanto comprendía una subordinación antagonica a las autoridades metropolitanas, una relación inconsistente con la iglesia colonial, una división incoherente del poder temporal o secular, una circulación ambivalente de la élite política, y una distribución contradictoria de los derechos ceremoniales o protocolares.

Primero, a diferencia de los estados-nación independientes, el estado colonial experimentó una subordinación a las autoridades metropolitanas. En un estado colonial periférico, esta subordinación generaba entre las corporaciones locales (Audiencias, cabildos, obispados, gobernaciones) una amplia competición por el favor Real. Obispos y Gobernadores al igual luchaban entre sí por el favor Real. Esta competición por los favores políticos generaba múltiples conflictos. La lucha contra el gobernador, comenzaba en Buenos Aires, pero era transferida a Sevilla y Madrid. Ahí se mezclaba con la rivalidad de las facciones españolas que trataban de impulsar a sus propios candidatos para la gobernación así como sus propias políticas, o intentaban proteger al Gobernador que el Rey había designado a su instancia. En estas circunstancias, como resultado de la débil situación económica de Buenos Aires, debido a la prohibición de exportar plata, las peticiones dirigidas al Rey en el siglo XVII eran escritas por los Procuradores Generales Fray Martín Ignacio de Loyola (1600), Manuel de Frías (1612), y Antonio de León Pinelo (1623), en defensa del comercio con ambas Sevilla y Bahía, y contra el control monopolístico del comercio legal por parte de Lima. El común denominador de estas posiciones eran las quejas acerca de los altos precios de la mercancía Europea en el Alto Perú y la escasez monetaria y laboral en Buenos Aires. Estos tres abogados del comercio libre argumentaban que los ítems importados por Buenos Aires desde España o Brasil no serían directamente competitivos con aquellos importados por Perú desde España debido a la enorme distancia entre estas dos regiones. Ellos agregaban que aunque las concesiones o permisiones que podían ser otorgadas a Buenos Aires podían disminuir el tamaño de las tradicionales flotas de galeones, estas pérdidas serían compensadas con los ingresos que Buenos Aires obtendría.⁶ Los resultados prácticos de estas quejas fueron esencialmente una política poblacional orientada hacia las importaciones de mano de obra africana esclava y una política territorial orientada hacia una estrategia "junker" de desarrollo rural. Polemizando con esas quejas hubo también peticiones en defensa de las políticas proteccionistas. No obstante, el proteccionismo en el período colonial, a pesar de su carácter militante, no tenía una impronta industrial, y se restringía a los intereses de cada sector regional: productores de azúcar, tabaco, y yerba mate del Paraguay, y productores de vino y aguardiente de Cuyo promovían peticiones, protestas y otras expresiones proteccionistas. Como resultado de esta competición por el favor Real numerosos conflictos inter-corporativos se desataron.

Por sobre la competición por el favor Real, las autoridades locales competían por el favor del virrey Peruano y de la Real Audiencia de Charcas. Por ejemplo, algunas peticiones se dirigían a la Real Audiencia de Charcas pidiendo la remoción de gobernadores y teniente-gobernadores así como el envío de Visitadores.

Segundo, a diferencia de las democracias liberales en el siglo XIX tardío, el estado colonial no

experimento una separacion de la iglesia y el estado. En otras palabras, en un estado pre-capitalista, debido al Patronato Real, cada una de estas esferas (iglesia y estado) se encimaban unas a otras, deviniendo una fuente de conflicto real.⁷

Las Leyes de Indias conferian poder total en los Gobernadores de Buenos Aires para cumplir los derechos del Patronato Real. La esencia de este patronato era el derecho de representacion. Cuando quiera que un cargo eclesiastico bajo como el diacono o el archidiacono estaba por ser designado, el candidato era presentado al Obispo de la diocesis de Buenos Aires por el Gobernador.⁸ Mientras que los obispos eran capaces de excomulgar y absolver autoridades publicas, los gobernadores y las Reales Audiencias eran responsables de erigir iglesias, capillas y hospitales, autorizar el establecimiento de ordenes religiosas y la celebracion de sinodos o concilios provinciales, expulsar curas escandalosos, asegurar la absolucion de las excomuniones, y administrar la educacion, la salud y la caridad. Mediante la excomunion, los obispos podian evitar que los gobernadores administraran justicia, mantuvieran disciplina en los ejercitos, guardaran a los delincuentes en las carceles, y presidieran sobre las asambleas capitulares anuales donde las nuevas autoridades municipales eran electas.

Tercero, de nuevo a diferencia de las republicas liberales del siglo XIX, el estado colonial no practicaba el mito de la division de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial.⁹ Muchos de los funcionarios coloniales compartian esas mismas funciones, aunque en diferentes proporciones. Cada uno de los cargos mas altos del gobierno desde el Consejo de Indias hasta las Audiencias, los cabildos, y los corregimientos, de acuerdo con Phelan, "combinaban ambas autoridades judiciales y administrativas".¹⁰ En otras palabras, en un estado pre-capitalista, cada una de las tres ramas de la sociedad politica de un estado liberal estaba siendo fragmentada entre diferentes autoridades, deviniendo asi en una permanente fuente de conflictos. Por ejemplo, la administracion de justicia estaba compartida por el alcalde de segundo voto, el Teniente gobernador, los Oficiales Reales, la corte eclesiastica, el Santo Oficio de la Inquisicion, los tribunales militares, y la Real Audiencia. Tambien, el control de la coercion directa era compartido por gobernadores, obispos, alguaciles mayores, alcaldes de primer voto, Reales Audiencias, y Alcaldes de Hermandad. Esta confusa manera de mezclar los diferentes roles publicos estaba llevada a tan alto grado que era muy dificil distinguir a un militar de un cabildante. Ambos funcionarios desplegaban simultaneamente autoridad militar y legislativa tomando parte en las sesiones capitulares exhibiendo mas el rango militar que el municipal. Esencialmente, la confusa exhibicion de rangos fue finalmente liquidada. En 1668, el cabildante Alonso Esteban de Esquibel se quejo acerca de la manera que el Corregidor Pedro de Ocampo entro en la asamblea capitular, vistiendo su insignia de Capitan a Guerra. Esquibel pidio a Ocampo que abandonara la sesion para poder discutir la manera correcta en que debia exhibir su uniforme de ahora en mas. Ocampo replico rehusandose a dejar la sesion. Finalmente, el caso fue llevado a la consideracion de la Real Audiencia.¹¹ Este alto Tribunal judicial puso fin a esta interminable discusion, sobre rituales, ordenando al Corregidor no llevar espada en las sesiones capitulares, pidiendole en su lugar que llevara la vara.¹²

De un modo similar, el proceso de votar leyes y regulaciones fue compartido por los miembros del Cabildo (regidores), los miembros del capitulo catedralicio, los sinodos eclesiasticos, y el Consejo de Indias. Cuando los Cabildos necesitaban extender sus poderes para decretar leyes tributarias, los gobernadores convocaban a cabildo abierto, y haciendo esto, los cabildos evitaban conflictos y resistencias. El cabildo abierto era una clase especial de asamblea local que servia, en una de sus funciones, de foro publico general para consolidar el bloque en el poder reclutando grandes segmentos de la "sociedad civil". La inclusion de presbiteros y artesanos significaba que en esta clase de sesiones se podia formar un bloque mas extenso, con diferentes corporaciones y gremios. Como ejemplo, los

gobernadores en Buenos Aires convocaron a Cabildos Abiertos en 1632 para construir fuertes, y en 1658 para recaudar subsidios militares.¹³

Cuarto, el estado colonial no reclutaba y promovía la elite política exclusivamente a través de medios electorales pero también lo hacía a través de la pública subasta de los oficios públicos. Estos dos mecanismos competitivos de reclutamiento de elites constituían una fuente permanente de conflictos. Por ejemplo, entre el Alferez Real y el Depositario General se desataban conflictos muy a menudo. Dichos conflictos surgían en parte del hecho de que el Alferez Real era un funcionario electo, mientras que el Depositario General era un cargo adquirido. El Depositario General Bernardo de León disputó dos veces su derecho a hablar, sentar y emitir su voto con prelación al Alferez Real. Paso primero en 1608 contra la queja de Víctor Casco de Mendoza, y de nuevo diez años más tarde en 1618, contra el reclamo del General Enrique Enriquez.¹⁴

Finalmente, a diferencia también de las democracias liberales, en un estado colonial pre-capitalista como Buenos Aires, la constante y profunda preocupación de los magistrados con el honor y el protocolo constituía una crónica fuente de conflictos. Consistentes con la estructura de clases pre-capitalista de su tiempo, los administradores públicos, en Buenos Aires y otros lugares, asignaba la más alta relevancia a las desigualdades de rango, precedencia, protocolo, y reputación. Por lo tanto, eran extremadamente susceptibles cuando devenía en una violación de sus prerrogativas, privilegios de rango, y símbolos de vanagloria y arrogancia.

Aunque las fuentes burocráticas de los conflictos coloniales eran importantes, la principal fuente de conflicto entre Benemeritos y Confederados residía en las políticas económicas adoptadas. Cuando quiera que los Confederados tomaban el poder, el control del comercio era levantado y el peso fiscal de apoyar al gobierno municipal revertía a los productores orientados hacia el mercado interno. La dominación de los Confederados tendía a fomentar la participación en el comercio internacional, debido a la naturaleza abierta inherente a las economías de libre comercio. Consecuentemente, la hegemonía Confederada ayudó a elevar el valor comercial de los oficios públicos.

Con el fin de acelerar el proceso de emisión de licencias la dominación de los Confederados, que controlaban a los Oficiales Reales, tendía a subvalorar la mercancía secuestrada. Durante la gobernación de Marín Negron (1610-1614) los esclavos fueron tasados invariablemente a \$70 cada uno. Contra las recomendaciones reales para elevar drásticamente el valor al que los esclavos eran vendidos en las subastas públicas, el Gobernador Beaumont y Navarra elevó la tasación del esclavo en 1615 a solo \$100. En 1619, bajo el Gobernador Gongora, fue elevada solo a \$144.¹⁵ Inversamente, cuando los Benemeritos asumían el control, los gobernadores tendían a sobrevalorar la mercancía secuestrada con el fin de proteger los productos nativos, elevar los ingresos Reales, y atribuir a los intereses orientados hacia el mercado externo la responsabilidad de apoyar financieramente al gobierno municipal. De esta manera los altos precios en las subastas públicas operaban como tarifa proteccionista. Haciendo ello los Benemeritos tendían a reducir el valor comercial de los oficios públicos.

Aparte de proveer una importante fuente de ingresos, las tarifas proteccionistas tenían la ventaja adicional de derivar hacia los comerciantes parte de la responsabilidad para extraer el excedente económico de las clases subalternas o castas. Esto hizo más difícil a los Confederados poder culpar a la elite Benemerita, como lo habían hecho en el pasado. Cuando Hernandarias, representando a los intereses orientados hacia el mercado interno, tomó el poder en el período 1606-1609 y 1615-1618, el valor de un esclavo alcanzó los \$200.¹⁶ De igual manera, cuando estos mismos intereses prevalecieron,

entre 1603 y 1605, el Cabildo de Buenos Aires otorgo a los herederos de los primeros pobladores el monopolio sobre el ganado realengo. De la misma forma, entre 1620 y 1623, bajo el Visitador Alonso Pérez de Salazar, los gravámenes de la alcabala fueron impuestos.¹⁷

Políticas fiscales discriminatorias referidas a la introduccion de vino Portugues y de madera y azucar Brasileira fue la seria respuesta a los constreñimientos externos indirectos (contrabando). En 1614, las autoridades Confederadas, con el fin de frustrar a los productores orientados hacia el mercado interno fomentaron la introduccion de vinos extranjeros.¹⁸ Un año mas tarde, sin embargo, las autoridades Benemeritas obtuvieron la proteccion del vino, la miel, y el azucar que venian del Paraguay, prohibiendo la entrada de dichos productos desde el Brasil.¹⁹ Pero una vez que el Gobernador Diego de Gongora asumió el poder en 1618, el vino Paraguay fue una vez mas desalentado del mercado en beneficio de los vinos Portugueses.²⁰ Pareciera ser que el vino Paraguay adquirio una mala reputacion debido a una propaganda fomentada por el Cabildo y por los comerciantes Portugueses deliberadamente propalada con el objeto de eliminar la improductiva elaboracion domestica de vinos y aguardientes

El grupo economico predominante tambien determino las politicas fiscales no necesariamente relacionadas con el comercio. Es mi hipotesis que cuando los intereses orientados hacia el mercado externo estaban en el poder, la autoridad discrecional se expandia, y la corrupcion, el soborno, y las extorsiones se incrementaban. Esta politica discrecional estaba facilitada por el hecho que la jurisdiccion final en materia fiscal pertenecia a la distante Audiencia de Charcas. A pesar del hecho que el salario oficial de los gobernadores era solo de 3.000 ducados (o \$4.125 pesos de ocho reales) anuales, el Gobernador Marin Negron, como lo muestra su testamento, dejo \$80.000 pesos al momento de su muerte, y el Gobernador Gongora dejo mas de \$20.000.²¹ Los Tenientes Gobernadores, sin salario formal, eran conocidos por su extrema corrupcion. Los casos de Mateo Leal de Ayala, en 1615, conocido como socio en el negocio ilegal de Diego de Vega y Juan de Vergara, y de Diego Paez Clavijo, en 1620, eran los mas notorios. Lo mismo era verdad para los Oficiales Reales. Tesoreros y Contadores ganaban ostensiblemente apenas \$1.286 anuales. Su riqueza actual, al final de la tenencia del puesto, sin embargo, era mayor que varias veces este monto.²² El miedo al secuestro o confiscacion causado por los juicios de residencia, sin embargo, indujo a los funcionarios publicos a guardar sus ahorros en efectivo antes que invertir en el mercado inmobiliario de Buenos Aires.

Que una politica fiscal tendiera a activar o desactivar una lucha intra-colonial dependia largamente del grupo que ocupara la posicion predominante en el poder. Sobre todo, este resultado dependia en si la politica fiscal estaba fundada en los intereses orientados hacia el mercado interno o el externo. Estos cambios pendulares en politicas fiscales dependian esencialmente del grado de constreñimientos externos.

Desde que los comerciantes orientados hacia los mercados externos fueron influenciados por la naturaleza contradictoria del estado colonial, la posicion negociadora de los funcionarios publicos con relacion a estos comerciantes debe tomar en cuenta esta contradiccion. Aquellos que apoyaran al Gobernador recibiran beneficios proporcionales (e.g.: promociones militares, integracion en los cabildos, tierras publicas, etc.). Finalmente, los gobernadores, Oficiales Reales, y comerciantes orientados hacia el mercado externo, luego de intensos y a veces violentas negociaciones, alcanzaban a llegar a algun acuerdo, el cual se reflejaba en la composicion politica de los cabildos. Dos objeciones principales fueron promovidas a los gobernadores y los cabildos. Una era su complicidad en los constreñimientos externos indirectos (actividades de contrabando), y la otra eran los abusos en el poder para designar funcionarios. La primera consistia en la aceptacion de sobornos y restituciones por parte

de comerciantes de esclavos y Oficiales Reales. La ultima era facilitada por la aparente inabilidad del cabildo para prevenir el nepotismo en las designaciones de los gobernadores.

En el manejo de la coercion era posible tener una variedad de jurisdicciones burocraticas diferentes comandando fuerzas y administrando justicia, ejerciendo un poder multipolar, dentro del mismo territorio.

Los Gobernadores y los gobernadores-adelantados, aunque formalmente representaban al Rey, en la practica se afiliaban a los intereses locales. Aparte de sus obligaciones para llenar los cargos de milicia, los gobernadores tenian la responsabilidad de llenar las vacantes en el clero secular y los puestos civiles, de erigir iglesias y hospitales, de convocar Juntas de Guerra, de decidir votaciones empatadas en las elecciones concejiles, y el de asignar mercedes de tierras y encomiendas vacantes. Distribuyendo mercedes reales e indios encomendados los gobernadores lograban una fuerte presencia en los ambitos economicos. Pero cuando quiera que los gobernadores se ausentaban los alcaldes ordinarios venian a reemplazarlos, con todos los poderes del gobernador. Un similar proceso de delegacion ocurria cuando, durante el segundo gobierno de Hernandarias (1609), los gobernadores comenzaron por designar Tenientes Gobernadores. Esta nueva designacion incluia el rango de General, el poder de juzgar en casos de apelacion de decisiones judiciales tomadas por los Alcaldes ordinarios, y el poder de participar en las asambleas concejiles. El consiguiente solapamiento de la autoridad judicial entre la Audiencia de Charcas y los Tenientes Gobernadores dentro del sistema judicial Rioplatense devino en una fuente de permanentes conflictos burocraticos. Por ejemplo, ya en 1607, el Gobernador Hernandarias se vio envuelto en un severo conflicto con la Real Audiencia de Charcas, por haber procesado a Gaspar de Acevedo, Escribano de Registro y de la Real Hacienda, quien habia introducido ilegalmente en el pasado reciente alrededor de 200 esclavos.²³ Subordinando la gobernacion del Rio de la Plata al control judicial de la de la Real Audiencia de Charcas en 1608, el Consejo de Indias fue capaz de equilibrar el poder del Gobernador paraguayo asi como la influencia local de la elite Benemerita. Mas tarde, cuando los intereses orientados hacia el mercado externo de la elite Confederada a traves de los Tenientes Gobernadores, como Mateo Leal de Ayala en 1614, Diego Paez Clavijo en 1623, y Francisco de Cespedes en 1627, desequilibraron a los intereses Reales, la Real Audiencia de Charcas intervino mandando Visitadores para restaurar tanto la balanza del poder externo como el del interno.²⁴

El alguacil mayor simultaneamente servia a los gobernadores y al cabildo como funcionario judicial, responsable del cumplimiento de la ley y de la designacion de los carceleros. Para el cuidado de la ciudad y la libertad de sus vecinos, el Alguacil dependia del Cabildo.²⁵ De esta manera, la oficina del Alguacil Mayor devino extremadamente estrategica y valiosa para las actividades relacionadas con el tráfico ilegal. Para las funciones policiales el Alguacil era un subordinado del Gobernador. Mas aun, el Alguacil Mayor era responsable de designar alguaciles menores en las parroquias. Como este ultimo estilaba abusar de sus prerrogativas derivando los excedentes extras procedentes de aquellos miembros de los estamentos inferiores que practicaban actividades ilegales, muy a menudo estallo la violencia. De aquí que, no era posible para un funcionario publico tener por mucho tiempo tan contradictoria variedad de jurisdicciones en un equilibrio pacifico, sin definir sus limites.

Los Oficiales Reales eran aquellos funcionarios principalmente responsables de recaudar los ingresos Reales, quienes tambien poseian autoridad judicial para llevar a cabo sus mandatos. Los dos mas importantes Oficiales Reales fueron el contador y el tesorero. El hecho de que ni los gobernadores ni los Alcaldes tuvieran las llaves de la Tesoreria Real y no pudieran intervenir en sus funciones hizo que estos dos funcionarios publicos fueran independientes y poderosos.²⁶ Las demoras en expedir las

cuentas, debido a las dificultades atmosféricas para los navios que atravesaban el Atlántico, incremento la importancia del efectivo existente y transformo a la Tesorería en un verdadero banco local. Amen de recaudar los ingresos aduaneros, los Oficiales Reales eran responsables de subsidiar los **socorros** (tropas de milicia) procedentes de España en su camino a Chile (1585, 1601, 1605, y 1623), así como para el envío de los excedentes fiscales de Buenos Aires (una oficina de tesorería subordinada), a las oficinas de tesorería principales de Chile, Alto Perú y Paraguay (ver Tabla I).²⁷

Asimismo, los Oficiales Reales eran responsables de investigar (visitar) los navios entrantes. Desde la gobernación de Hernando de Zárate (1594-1595) hasta el final de la segunda gobernación de Hernandarias (1609), los gobernadores, siguiendo las Ordenanzas de Madrigal de 1591, estilaban investigar los navios entrantes sin la presencia de los Oficiales Reales.²⁸ Pero comenzando con la gobernación de Diego Marín Negron (1609), los gobernadores debían inspeccionar los navios entrantes, siguiendo las nuevas regulaciones que prescribían la recaudación del almojarifazgo Real, en compañía de los Oficiales Reales.²⁹ Esta responsabilidad conjunta obligo a ambos gobernadores y Oficiales Reales a llegar a un acuerdo relacionado con la valuación de la mercancía secuestrada.

Cuanto más alta la valuación de los ingresos mercantiles que correspondían a la corona más alto el valor comercial de los oficios públicos correspondientes. El funcionario público que encontraba los ítems contrabandeados tenía primero derecho a un tercio de la mercancía secuestrada.³⁰ Los Oficiales Reales, amen de ser responsables (conjuntamente con el gobernador, el Comisario del Santo Oficio, el notario, y el Alguacil Mayor) de inspeccionar los navios entrantes, de confiscar la mercancía contrabandeada, y de formular las preguntas concernientes a los objetos religiosos no católicos y los libros prohibidos, tenían el derecho de evaluar los ítems que eran secuestrados para venderlos en subasta pública.³¹ En 1620, sin embargo, el Gobernador Gongora excluyó a los Oficiales Reales de cualquier intervención en casos de introducción ilegal de esclavos africanos, y retuvieron para ellos los derechos a un tercio de la mercancía secuestrada.³² De resultados de la controversia concerniente a este punto, se siguió un debate en el Consejo de Indias. Luego de un largo proceso judicial el Consejo pronunció un veredicto en 1622 que favoreció a los Oficiales Reales por sobre los gobernadores. Tres años más tarde, a comienzos de 1625, una Real Cédula ordenó que el tercio aduanero de la mercancía secuestrada debía ser distribuida en partes iguales entre gobernadores y Oficiales Reales. Esta controversia terminó recién a fines de 1625 cuando el Rey ordenó temporariamente que los esclavos introducidos sin licencias debían ser considerados libres.³³

Los Escribanos estaban también involucrados en esta puja entre los funcionarios públicos concerniente al secuestro de oficios y magistraturas. Los notarios de la Tesorería Real conjuntamente con los gobernadores se suponía que inspeccionaban los navios entrantes. De descubrir mercancía ilegal debían secuestrarla. Una vez que la mercancía ilegal era secuestrada, las subastas debían ser convocadas. A través de estas subastas y emitiendo las correspondientes licencias los notarios de la Tesorería Real legitimaban la mercancía ilegal. Sin dichas licencias, cualquier mercancía ilegal era sujeta a secuestro por otras jurisdicciones municipales. Desempeñando este oficio el notario devino uno de los más poderosos funcionarios dentro de la burocracia colonial. Para poner fin a esta creciente influencia el Gobernador Hernandarias, en 1607, trató infructuosamente de procesar a Gaspar de Acevedo, Escribano de Registro y de Real Hacienda, bajo los cargos de haber introducido ilegalmente 198 esclavos.³⁴ A diferencia de los notarios de la Tesorería Real, los notarios capitulares no estaban relacionados con la inspección de los navios entrantes pero sí con el registro cotidiano de las actividades del cabildo, incluyendo las decisiones judiciales emitidas por los alcaldes de segundo voto. Custodiando esos archivos o registros el notario capitular también devino uno de los más significativos funcionarios dentro del estado colonial. Para obstruir su rol crucial el Teniente Gobernador Mateo Leal

de Ayala, con el apoyo del General Sebastian de Orduña y Juan de Tapia de Vargas, pusieron a Cristobal Remon, el notario capitular, en prision. Remon fue finalmente exilado a la ciudad de Luanda, en Angola, lugar donde mas tarde fallecio.

Finalmente, el Cabildo de Buenos Aires era una corporacion con una serie diversificada de funciones y responsabilidades ejecutivas, deliberativas, judiciales y ceremoniales representando a los estamentos urbanos mas altos y los intereses locales estrictamente clasificados de acuerdo a sus antecedentes y riqueza familiares. Su autonomia teorica era limitada por el omnipotente poder del gobernador, la Real Audiencia, y el Consejo de Indias. A traves de las peticiones anuales registradas en los archivos notariales, los regidores mostraban otros medios utilizados para asegurar el cumplimiento de materias menos controversiales. Las mas comunes peticiones solicitaban la condicion de vecino, salarios y marcas de hacienda, o requerian licencias para exportar materias primas, importar esclavos, desempeñar oficios artesanales, poblar estancias, abrir pulperias, colocar mojones en establecimientos rurales, cazar y recolectar ganado salvaje, o hacer cueros, grasa y tasajo, todas las cuales constituian medios politicos que interferian en el ambito economico.

Resumiendo, he verificado en este estudio como la naturaleza contradictoria del estado colonial estimulaba la lucha intra-colonial, la cual se reflejaba en el carácter de dicho estado, que se estructuraba a si mismo en relacion a los constreñimientos economicos, sociales y politicos externos e internos. Externamente, estaba estructurado en relacion a la sociedad politica española (el Virreinato Peruano, la Audiencia de Charcas, y el Consejo de Indias) y la red interlope Portuguesa, e internamente en relacion con la sociedad civil y politica local (gobernadores, alguaciles, y Oficiales Reales por un lado; por el otro, obispos, provinciales de ordenes religiosas, mayordomos de capellanias y cofradias, y miembros del Cabildo Eclesiastico. La forma peculiar de estructurar su propia naturaleza contradictoria marco el antecedente historico mas importante y remoto de la revolucion de independencia.

NOTAS

¹ Phelan, 1960, 47.

² Ver Gandía, 1939; Mora Mérida, 1973, 164-173; y Doucet, 1977 y 1978.

³ Laclau, 1978, 116.

⁴ Ver Heers, 1977, 54.

⁵ Phelan, 1967, 327. Ver también, Lang (1980, 227-233).

⁶ Levene, 1915, capitulo VII; y Molina, 1966, 125.

⁷ Ver Rodriguez Valencia, 1957; Lafuente, 1957; Shiels, 1961; y de la Hera, 1963.

⁸ Mecham, 1934, 26 y 31.

⁹ Sobre el mito de la division de poderes, ver Eisenmann, 1933, 190, citado en Althusser,

1964, capítulo V.

¹⁰ Phelan, op.cit., 324.

¹¹ Acuerdos, X, 186-194.

¹² Acuerdos, XIII, 25-29.

¹³ Garreton, op. cit., 210-218; Tapia, 1966; Saenz Valiente, 1952, capítulo VI; y Acuerdos, VII, 356; y VIII, 115, 248-363.

¹⁴ Acuerdos, I, 503; y III, 365.

¹⁵ Canabrava, 1944, 87-88.

¹⁶ Molina, 1966, 113.

¹⁷ Peña, 1916, 14.

¹⁸ Acuerdos, III, 99.

¹⁹ Acuerdos, III, 229.

²⁰ Tiscornia, op. cit., 146; y Garavaglia, 1978, 29-30.

²¹ Canabrava, op. cit., 107.

²² Peña, op. cit., 43; y Molina, 1964, 16.

²³ Correspondencia de la Ciudad de Buenos Aires con los Reyes de España, t.II, 27ss.

²⁴ Sobre la Visita de Enrique Jerez en 1614, ver Cordero, 1978, 300. Sobre la Visita de Alonso Perez de SALAZAR EN 1623, VER Canabrava, capítulo XII, y Mora Merida, op. cit., 86. Sobre la Visita de Diego Martinez de Prado en 1627, ver Peña, op. cit., 34-38. Y sobre la Visita de

Andres de Leon Garavito en 1630, ver Peña, op. cit., 48-49.

²⁵ Garreton, 1933, 285.

²⁶ Garreton, 1933, 363.

²⁷ La Tabla I enlista los remesantes de plata a Potosi y los montos de esos envios. Tambien, el Tesorero de Buenos Aires previamente enviaba subsidios al Paraguay. En 1639, Diego Rivera, un lancharo del Paraguay, recibio del Cap. Pedro de Roxas y Acevedo \$2.100, que tuvo que ser enviado a Pedro de Lugo y Navarra, Gobernador del Paraguay (Archivo General de la Nacion, Division Colonia, Sala IX, Protocolos de Real Hacienda, f.27).

²⁸ Molina, Primeras experiencias..., 169.

²⁹ Molina, id., 171-172.

³⁰ Tiscornia, op. cit., 119.

³¹ Tiscornia, op. cit., 120.

³² Sierra, 1957, II, 145.

³³ Molina, Primeras experiencias..., 174.

³⁴ Correspondencia de la Ciudad de Buenos Aires con los Reyes de España, t.II, 27ss.

TOMO VII

CAPITULO 3

Las cuotas preferenciales de representación política. La "Alternativa" en las Recusaciones Capitulares del mundo Rioplatense dieciochesco.

En el mundo colonial hispánico, diversos mecanismos --tales como la alternativa, el nepotismo, la limpieza de sangre, el tanteo, el retracto, los fueros, el régimen capellánico, etc.-- otorgaban privilegios que beneficiaban a distintos grupos sociales según su relativa correlación de fuerzas. En efecto, por el proceso político de la alternativa,¹ cualquier español peninsular podía, al momento de las elecciones capitulares, reclamar el derecho a ser elegido para una alcaldía. La política discriminatoria impulsada por los Borbones en los Cabildos seculares --conocida como la alternativa-- fomentó un estereotipado étnico que invitó a los vecinos de las diversas ciudades a visualizar a los peninsulares como poseedores de características raciales superiores a las de los criollos, que los hacían merecedores en las elecciones capitulares de privilegios o cuotas preferenciales de representación política. De aquí que la práctica de la alternativa,² sometió la vitalidad de la personalidad bajo amortiguantes prejuicios étnicos que hacía que los peninsulares justificaran sus privilegios como producto de un mérito y los criollos su inferiorizada cuota de poder político como fruto de una culpa.³

El impacto de la alternativa.

En principio, el impacto de la alternativa variaba notablemente de una provincia a otra, según la diferente proporción de población peninsular existente. Para medir esa variación hemos elaborado un ranking de la inmigración, tomando como supuesto que los comerciantes peninsulares estaban compuestos por los varones españoles adultos solteros, entendiendo por españoles a los varones blancos. Dicho ranking fué elaborado en base a las transacciones notariales de los comerciantes que se internaban al interior del cono sur del Virreinato Peruano, en el período comprendido entre la Paz de París (1763) y la Paz de Versailles (1782), y a la Tabla H-I, fundada en el padrón de 1776, publicado por Larrouy (1927), correspondiente a un año de paz. Su proporción sobre el total de la población masculina adulta daría un índice de la importancia relativa de dichos varones españoles adultos solteros. En efecto, en el Cuadro F-A, encabezan el ranking de posiciones aquellas ciudades de provincia que contaban con comerciantes procedentes de Buenos Aires, como Santiago del Estero con el 25,8%, Tucumán con el 23,4%, Córdoba con el 13% y Salta con el 12%.⁴ Postreras en el ranking figuran aquellas ciudades de provincia escasas de comerciantes procedentes de Buenos Aires como La Rioja con el 10,3%, Jujuy con el 9,9% y Catamarca con el 5,75%.⁵

Asimismo, la resistencia demográfica interna a la presencia del aluvión inmigratorio varió

notablemente de una provincia a otra, alterándose de esa forma su impacto político, en especial el grado de localismo manifestado. Para medir esta otra variación hemos elaborado un ranking del patriciado, tomando como supuesto que los vecinos patricios estaban compuestos por los varones españoles adultos casados. Este último ranking fué elaborado también en base a la Tabla H-I, fundada en el padrón de 1778, publicado por Larrouy (1927). Su proporción sobre el total de la población masculina adulta daría un índice de la importancia relativa de dichos varones españoles adultos casados. En efecto, en el Cuadro F-B, las ciudades de Tucumán y Salta, donde las masas indígenas pesaban demográficamente menos que en el Alto Perú, estaban tercera y sexta en el ranking del número de patricios sobre el total de la población, con el 33,16% y el 17,33% respectivamente. Postrera en este ranking figura Catamarca, con el 14%, ciudad de provincia escasa de varones españoles adultos casados.

En ese sentido, en aquellas provincias donde se contaba con abundancia de vecinos peninsulares la cuota de representación política privilegiada no era visualizada como una injusticia. El caso extremo fué Buenos Aires, donde la presencia de peninsulares era abismal, y la de los vecinos criollos considerada como una minoría. En consecuencia, en Buenos Aires la cuota privilegiada debió haber sido reclamada por los criollos.

Disputas entre patricios y peninsulares. El caso de Córdoba.

El caso de Córdoba es el de una provincia donde la presencia de ambas nacionalidades se equilibraba. Como secuela inmediata de la imposición de la Real Cédula sobre la alternativa, se había elegido en Córdoba en 1765 como alcalde de primer voto al patricio Dalmacio Vélez,⁶ quien se arrogó el título de Justicia Mayor,⁷ y como Alcalde de segundo voto al peninsular José del Portillo,⁸ ambos ligados por afinidad política a la Compañía de Jesús y por parentesco a la Casa de los Echenique, heredera del fundador de Córdoba Gerónimo Luis de Cabrera. El resultado de estas elecciones fué confirmado, contra todo derecho, por el Alcalde Provincial José Martínez González, marido de Clara Echenique y Urtubey.⁹ Esta confirmación, que perjudicaba las ambiciones del Gobernador Juan Manuel Fernández Campero,¹⁰ así como las de sus socios, los hermanos José Allende y Losa,¹¹ y Santiago Allende y Losa,¹² ambos aunados en la manipulación del Ramo de Sisa,¹³ se convirtió en fuente de una nueva crisis política, pues violaba una de las más importantes Leyes de Indias.¹⁴

El patriciado cordobés era, si nos atenemos al Cuadro F-B antes mencionado, cuarto entre las ciudades del norte, en importancia numérica, con el 20,23% de patricios sobre una población donde abundaban los comerciantes peninsulares. No se diga, alegaba en 1782 el comerciante de origen porteño, ex-Tesorero de la Real Hacienda de Córdoba y Teniente de Oficiales Reales Carlos Estela,¹⁵ que en Córdoba escaseaban, como en La Rioja, vecinos a quienes acudir para llenar los cargos capitulares, pues Córdoba

"...era abundantísima en vecinos honrados de conciencia, timoratos, y sin coligación, ni parentesco, de modo que anualmente se pueda con amplitud completar el número de individuos en el ayuntamiento, sin necesitarse por ningún título de incluir en mucha serie de años dos individuos que por línea alguna aludan parentesco".¹⁶

No obstante esta auspiciosa realidad, el Cabildo de Córdoba era un antro oligárquico, semejante al que un lustro antes el Gobernador Gerónimo Matorras, quizo sin éxito desmembrar.¹⁷ En dicho antro, linajes familiares compuestos indistintamente de patricios y peninsulares se disputaban el privilegio de integrar el Cabildo y la Junta Municipal de Temporalidades, la facultad de recaudar el ramo de Sisa, y

el derecho de administrar la Bula de la Santa Cruzada y la limosna de Redención de Cautivos y de usufructuar los fondos de capellanías y obras pías. Para 1775 la parcialidad de los Allende logró sin oposición elegir de Alcaldes a Francisco Xavier de Usandivaras,¹⁸ y a Domingo Ignacio de León;¹⁹ para 1776 a Santiago de Allende y a Marcelino Moyano;²⁰ para 1777 a Antonio de la Quintana, y a Jacinto Díaz de la Fuente,²¹ "...quien dirigido por el Sargento Mayor Fernando Fabro adhirió enteramente a sus errados sistemas como lo tenían bien previsto cuando lo eligieron".²² Recaía en ese entonces, año de 1778, en el Maestre de Campo Juan Tiburcio de Ordóñez,²³ comisionado por el Teniente Gobernador Arriaga, la responsabilidad de confirmar en el Cabildo de Córdoba al Teniente Coronel del Regimiento de Caballería del Río Seco Don Xavier de la Torre Benítez,²⁴ y al Europeo Nicolás Azcoeta,²⁵ electos por el Alguacil Mayor Nicolás García Guilleto,²⁶ y el Alcalde Provincial Domingo de Garay.²⁷ Para impedir esta confirmación estaban las cabezas visibles de la estirpe, los hermanos José y Santiago de Allende y Losa (Ver Cuadros COR-I, II y III). En la quinta crisis acontecida en el Cabildo de Córdoba, en 1778-80, a diferencia de otras anteriores, la elite nativa colonial ensayaba legitimar la hegemonía violentamente lograda en 1772, articulando una estrategia conciliatoria fundada en una concordia, y en un discurso jurídico que ponía en tela de juicio la unidad del discurso oficial, representado en la alternativa, tergiversándolo.²⁸

Pero fracasada la implementación de la alternativa,²⁹ como mecanismo utilizado por la corona para controlar los cabildos --por cuanto los criollos casaban sus hijas con españoles europeos, a quienes colocaban en los oficios concejiles-- aquellos funcionarios que ponían en tela de juicio las situaciones adquiridas entraron a cuestionar el parentesco de los gobernantes.³⁰

Los pactos o concordias.

También se dieron entre los diversos clanes de los patriciados provinciales numerosos pactos o concordias para impedir la aplicación en sus distritos el régimen de la alternativa. En La Rioja, las casas patricias riojanas de los Bazán y los Villafañe celebraban su unidad practicando concordias. Primero en 1708 y setenta años después, en 1781, con motivo de la irrupción de las Milicias cordobesas --que iban a reprimir el alzamiento de Tupac Amaru-- el patriciado Riojana firmó concordias, donde acordaba su exclusividad in perpetuum de los empleos concejiles y militares.³¹ Si bien tradicionalmente La Rioja había pertenecido a la jurisdicción de Salta, a partir de la Real Ordenanza de Intendentes pasó a depender de la jurisdicción de Córdoba. Este cambio de jurisdicción no alcanzó a cambiar la injusta realidad económica y social de la provincia, marginada de todas las rutas comerciales que unían al litoral con el Alto Perú y con Chile. Este marginamiento comercial unido a la extrema concentración territorial y minera en manos de una élite ultra-conservadora condicionó la constitución de su Cabildo.

Con motivo de la irrupción de las Milicias cordobesas --que iban a reprimir el alzamiento de Túpac Amaru-- en la ciudad de La Rioja, las casas patricias riojanas de los Bazán de Pedraza, los Ortiz de Ocampo y los Villafañe reafirmaron su unidad celebrando en 1781 una nueva concordia, ratificatoria de la celebrada en 1708, donde se acordaba su exclusividad vitalicia o in perpetuum de los empleos concejiles y militares.³² En esta unión y en todos los episodios en que el pueblo riojano manifestó su repudio por el avasallamiento de su autonomía y el despojo de la administración de su Renta de Tabaco y Naipes, las dinastías de los Ortiz de Ocampo y los Villafañe, que detallamos en los Cuadros LR-I al LR-VI, estuvieron presentes turnándose en el mando.

Pero a fines del siglo, las casas de los Ocampo y los Villafañe, afincadas en los Llanos, se vieron enfrentadas por la casa de los Dávila, radicada en Chilecito. En esta última ciudad, las familias de los Tagle y los Castro apoyaban al linaje de los Dávila, perteneciendo a las mismas la riojana Felipa

Tagle y Castro, la cual se desposara con el Teniente Asesor de la Gobernación de Córdoba, Victorino Rodríguez. Para mejor dominar la situación política riojana Rodríguez había designado como Jefe de la Guarnición de soldados a Manuel José Derqui,³³ yerno de su hermano Manuel Antonio Rodríguez,³⁴ y como Subdelegado Provisional y Comisionado de Minas al primo hermano carnal de su mujer, Don José Víctor Gordillo y Castro.³⁵ La Casa de los Villafañe llegó a incorporar a fines de dicho siglo a las familias de los Peñaloza y los Bazán. Entre sus representantes más conspicuos se destacaban Nicolás Villafañe y Sánchez de Loria,³⁶ Manuel del Rincón y Escudero,³⁷ y Favián Gonsález,³⁸ uno de los Administradores particulares designados por el Coronel Manuel Castro en el Real Estanco de Tabaco de La Rioja. A esta Casa de los Villafañe se suma en la década del 90 Don Vicente Antonio Bustos,³⁹ quien fuera Alcalde de Primer Voto, Subdelegado de Real Hacienda y Comandante de Armas, por renuncia de Juan Antonio Ortíz de Ocampo en 1794.⁴⁰ Quien por primera vez enfrenta a este bloque de poder tradicional en La Rioja, al extremo de ser repetidamente impedido de ingresar al Cabildo, fué el Administrador General de Tabacos, Don José Antonio Mercado,⁴¹ pariente de la mujer de Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán.⁴² No obstante este parentesco, Ocampo le profesaba a Mercado una profunda enemistad originada en su desempeño como Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes y en el pleito que como apoderado de su yerno Xavier de la Vega y Castro le seguía por las tierras de la Pampa Blanca, en el partido de los Llanos.⁴³ Amén de Ocampo, el Alcalde Ordinario Pedro José de Escalante también le guardaba una profunda inquina, al extremo de haberlo arrestado en 1795 en la cárcel pública aduciendo que "vendía malos tabacos".⁴⁴ Además de Bustos, Ocampo, y Escalante, también se sumaron al bloque oficialista Francisco Xavier de Herrera y Juan Pablo de Villafañe y Dávila.⁴⁵ Sin embargo, estos dos últimos fueron impugnados por Mercado en razón de ser parientes dentro del tercer grado de afinidad.⁴⁶ Finalmente, Mercado fué arrestado bajo la injusta acusación de haber sublevado las tropas (60 hombres) que iban a relevar las que estaban de guarnición en la frontera del Río del Valle.⁴⁷ A más de haber abandonado el relevo, Mercado fué acusado también de haber esquilmado a sus soldados con el juego y la venta de bebidas espirituosas.⁴⁸ En realidad, las tropas fueron sublevadas por el Comandante Juan José de Villafañe y Dávila,⁴⁹ "...quien no por eso dejó de merecer al Cabildo compuesto de sus allegados y parientes el concepto de muy buen servidor del Rey y de la República".⁵⁰ Conocida más tarde la verdad, trató entonces el Cabildo que la culpa de Villafañe apareciese como de Mercado. Con la explotación del Cerro de Famatina, a partir de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, la antigua estructura de poder en La Rioja sufrió un cambio tan radical, que su patriciado necesariamente volvió a fragmentarse en dos facciones, al igual que a fines del siglo XVII. Por un lado aquellos más ligados a la producción minera del Cerro y a las políticas unitarias dirigidas desde Córdoba (la Casa de los Dávila), altamente dependientes de la provisión de azogue con que refinar su mineral, y por el otro lado aquellos vecinos más ligados con el comercio y la explotación agraria de Los Llanos, más afines a los vientos federalistas que soplaban desde el litoral Artiguista (la Casa de los Ocampo u Ortíz de Ocampo).⁵¹

NOTAS

¹ Sistema electoral por el cual en las elecciones anuales de alcaldes ordinarios, se elegía simultáneamente como alcaldes de primero y segundo voto a un criollo y un peninsular, que en la práctica equivalía a un sistema de cuotas por mitades, es decir del 50% para cada uno de ambos grupos étnicos. Tiene sus antecedentes en el siglo XVII, en los Cabildos seculares, cuando los oficios capitulares fueron repartidos entre encomenderos y no encomenderos, por lo general peninsulares (Doucet, 1974, 383); y en las Ordenes Religiosas cuando en los capítulos conventuales se elegían peninsulares y criollos por mitades (Tibesar, 1955; González Echenique, 1962; y Lavallé, 1993, 165-166).

² semejante al Programa impulsado recientemente en los Estados Unidos para favorecer a las minorías étnicas y conocido por algunos con el título de Acción Afirmativa y por otros por discriminación inversa (ver Walzer, 1993, 159).

³ Para evaluar el impacto negativo que estas políticas discriminatorias tuvieron en los Estados Unidos, ver Reynolds, 1992; y Lipset, 1992.

⁴ Santiago del Estero, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 17 comerciantes y 82 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 318 varones adultos, o el 25,8%. Tucumán que también dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con 93 comerciantes y 271 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 1158 varones adultos, o el 23,4%. La ciudad de Córdoba contaba con 108 comerciantes y 447 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3459 adultos varones, o el 13%. Y la ciudad de Salta, contaba con 45 comerciantes y 416 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3.427 adultos varones, o el 12%.

⁵ La Rioja que dependía de la Gobernación-Intendencia de Córdoba, contaba con 80 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 772 adultos varones, o el 10,3%. Catamarca, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 123 varones españoles adultos solteros sobre un total de 2139 varones adultos, o el 5,75%. Por último, Jujuy contaba con 64 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 644 varones adultos, o el 9,9%.

⁶ Hijo de Bernardo Vélez de Herrera y de María Teresa de Baigorri y Tejeda, casado con Rosa Sársfield (Lascano Colodrero, 1969, III, 17). María Teresa era hija del General Juan Clemente de Baigorri y Brizuela, Señor de San Sebastián de Sañogasta, y encomendero de Nogolma, y de Gabriela de Garay y Tejeda. Poseía Dalmacio Vélez una valiosa biblioteca (Furlong, 1944, 66).

⁷ equivalente al de Corregidor o Gobernador.

⁸ Bilbaíno, casado con Francisca Antonia Garay y Zamudio, hija de Domingo Garay y Molina, y de Isidora Zamudio y Echenique. Domingo era sobrino de Pedro Garay y Tejeda, el que a su vez era casado con su prima hermana Agueda Fernández Granados y Tejeda (Calvo, 1924, 164). José del Portillo era padre del Dr. José Eugenio del Portillo y Garay, y abuelo del Cap. José María Cortés y del Portillo, casado con Josefa Funes y Allende, hija de Ambrosio Funes (Cabrera, 1915; y Allende Navarro, 1964,104).

⁹ Hija de Gerónimo Luis de Echenique y de Josefa Urtubey y Paz de Figueroa (AHC, Escribanía N.2, 1766, Leg.36, Exp.13). Era hermana del R. P. Bernabé Echenique, a quien se le adjudicó erróneamente la autoría del Laudatione Quinque (Furlong, 1937, 1952).

¹⁰ Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco, entre 1755 y 1760. Sobrino de Diego de Hesles, el Secretario del Virrey del Perú José Antonio Manso de Velazco, Conde de Superunda; marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y Campero; padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marqués de Yavi Fernando Campero; sobrino de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes (Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; y primo hermano del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y

Campero y de Francisco de Güemes y Campero (Acevedo, 1969, 14 y 103; y Cutolo, II, 74; y III, 50). Tomás de Allende y Losa y su cuñado Gregorio Arrascaeta afianzaron en 1764 el juicio de residencia del Gobernador Campero (Acevedo, 1969, 15).

¹¹ Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda Losa Bravo, casóse en 1754 con María Isidora de Ascasubi, hija de Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la segunda mujer de su hermano Santiago. María Isidora era probablemente sobrina de José de Ascasubi, dueño del ingenio de moler metales del Potosí llamado Pampa, y de la labor Arenas. Como Alcalde de Primer Voto le cupo cumplir la orden del Gobernador de Buenos Aires de reabrir la Universidad de Córdoba luego de la expulsión de los Jesuitas. La cédula de Regidor Fiel Ejecutor propietario le fué librada el 2-XII-1773 (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro 48, folios 491v. y 222). Su suegro Don Marcos Ascasubi falleció en 1756 (AHC, Escribanía N.1, Leg.326, Exp.1). Rosalía de las Casas y Ponce de León, mujer de Don Marcos Ascasubi, era hija a su vez del primer matrimonio del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jaime con Teresa Ponce de León. José de Allende e Isidora Ascasubi fueron padres de Felipe de Allende, fallecido en 1784 a los 21 años de edad, de José Norberto de Allende, nacido en 1773, y de Josefa y Mercedes Allende, mujer esta última del Teniente Coronel Félix Mestre, hermano menor del Gobernador de Tucumán Andrés Mestre (AN, 1964, 87; y LC, 1968, II, 142; AHC, Escribanía N.2, Leg.89, Exp.3). José Allende y Loza contrae segundas nupcias con la hermana de su mujer, María Polonia Ascasubi, a su vez viuda de Manuel Arredondo y Puerta, padres estos últimos de Antonio Arredondo. Las hermanas Ascasubi eran parientas por los Ponce de León de Simón Insaurralde, el que fuera dueño de la chacarilla de la Calera. José Allende fué dueño de la estancia Saldán (LC, 1936, I, 35) y mantuvo estrechos vínculos comerciales con Pedro de Lea (AGN, Protocolos, R.2-1745-fs.254). Félix Mestre fué apoderado en Buenos Aires del comerciante Ambrosio Funes (Garro, 1882, 210).

¹² Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en primeras nupcias con Engracia Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería José Joaquín Mendiolaza y Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano José. María de la Cruz era nieta de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí.

¹³ Acevedo, 1969, 23 y 117.

¹⁴ También contribuyeron a alimentar la crisis de 1766 las varias causas que en lo Civil se hallaban pendientes del Juzgado de segundo voto, entre ellas las causas por los dineros provenientes de la limosna de Redención de Cautivos, administrada por la Orden Mercedaria, y la causa por los cuatro mil pesos del principal del Convento de San Lorenzo, que retenía la concuñada de Don Santiago Allende, Doña Catalina de Arrascaeta. Fué entónces, a partir de dichos conflictos, que la Casa de los Allende guardó para con la Orden Mercedaria una "...notoria enemistad, antipatía y odio entrañable" (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3). Una vez expulsados los Jesuitas, en 1767, el eje de la lucha en la elite cordobesa se trasladó de la disputa por los dineros provenientes de la limosna de Redención de Cautivos, administrada por la Orden Mercedaria, y los fondos del Convento de San Lorenzo, a la disputa por los despojos de la Compañía de Jesús.

¹⁵ Apellido originario del Ayuntamiento de Cabanillas, partido judicial de Figueras, provincia de Gerona (García Carraffa, XXX, 189). En 1775 tuvo un litigio con Blas Martínez por cobro de pesos

(AGN, Leg.70, Exp.34). En 1777 José de Allende, Marcelino Moyano, Juan Alejandro Echenique, y otros lo demandan por calumnias (AGN, Criminales, Leg.12, Exp.13). En 1780 como Teniente Administrador de la Real Hacienda de la Intendencia de Córdoba demanda al Cabildo de Córdoba (AGN, Guerra y Marina, Leg.5, Exp.16). El mismo año demanda al médico Antonio Rosel por el abandono de su criada (AGN, Tribunales, Leg.202, Exp.5; y Leg.114, Exp.2). Es también en el mismo año que se lo separa de su cargo en la Real Hacienda por acusación de dolo (AGN, Justicia, Leg.9, Exp.166). En 1781 solicita su traslado a Jujuy (AGN, Interior, Leg.13, Exp.13). Este mismo año mantuvo un litigio con José Thames, vecino de Tucumán (AGN, Tribunales, Leg.150, Exp.20). En 1782 se lo procesa por inmoralidad (AGN, Criminales, Leg.20, Exp.20). En 1786 participa en la investigación a raíz de la sustracción de los caudales del finado Juan Bautista Pardo (AGN, Criminales, Leg.29, Exp.3). En 1807 se inicia el inventario de sus bienes (AGN, Tribunales Administrativos, Leg.20, Exp.634).

¹⁶ AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

¹⁷ Ateniéndonos al documento descubierto por Levillier (1915), comentado por Acevedo (1965), y reeditado por Segreti (1973), que firma en 1776 el Teniente Gobernador Interino del Tucumán Antonio de Arriaga.

¹⁸ hijo del Cap. Pedro de Usandivaras y de María de la Sierra y Cuerno, y casado con María Teresa de Allende Vicentelo. Las hermanas de esta última estaban casadas con los comerciantes Hipólito García Posse, Gregorio de Tejerina y Gregorio de las Heras, y José Miguel Tagle y Hereña, y con el terrateniente Bartolomé de Figueroa y Mendoza (Allende Navarro, 1964, 99). En el ejercicio de su vara de Alcalde, Usandivaras "...cometió el escandaloso hecho de azotar a un hombre rústico amarrado a una cruz, sin que bastasen a disuadirle de aquel irreligioso atentado las instancias del miserable paciente, que más christiano le advertía no ultrajase el simulacro de la que fué medio de nuestra redención, mayormente teniendo tan inmediato el rollo, que le facilitaba teatro adecuado para la satisfacción de su saña por cuyo exceso le aplicó el compasivo Tribunal de la Inquisición saludable penitencia" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5).

¹⁹ Era hijo del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León y de Eugenia de Ledesma y Olmedo, cuñado del General Prudencio Palacios, y primo hermano de la mujer de José Manuel Salguero (LC, 1969, III, 293). Domingo Ignacio León fué Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775. Fué hermano del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, famoso por su barraganía con la mulata Bernabela, y por su amistad con el Coronel Santiago Alexo de Allende. Domingo Ignacio se casó con María Josefa Zavala, hija del General Juan Antonio de Zavala, nieta de María de Garay, y hermana del Dr. Juan Antonio de Zavala (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21). A Domingo Ignacio se le inició juicio sucesorio en 1785 (AHC, Escribanía N.1, Leg.405, Exp. 16).

²⁰ marido de Catalina Arrascaeta y Ferreyra de Aguiar, hija de Miguel de Arrascaeta y de Josefa Ferreyra de Aguiar, sobrino de Gregorio y José de Arrascaeta, y cuñado de Justo Arrascaeta.

²¹ Levillier, 1915, II, 155. Díaz de la Fuente era casado con Juana Arias de Cabrera, hija de Juan Luis Arias de Cabrera y Gutiérrez y de Rosa de Ceballos y Losa Bravo, nieto paterno de Santiago Arias de Cabrera y Díaz de Quiñones, propietario de la estancia Yacanto en Traslasierra, y en el Arroyo de

Tegua, en Río Cuarto, y de María Cándida Gutiérrez y Ledesma, y nieto materno de Juan Miguel de Ceballos y Almonacid, dueño de la estancia San Isidro, hoy Río Ceballos, y de María Josefa Losa Bravo y Albornoz (LC, III, 215); concuñado de Bernabé Gregorio de las Heras, de Felipe Antonio Gonsález, de Juan José Sardeñis, del mendocino José Orencio Correa, y de Rafael María Castellanos y Cossio; suegro de Mariano de Usandivaras y Allende; y consuegro del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende. Su suegro Juan Luis era cuñado de Francisco de Bustos y Cabanillas (Mayol Laferrere, 1975; y LC, I, 1936, 445).

²² AGN, División Colonia, Sala IX, Interior, Leg.13, Exp.5.

²³ Hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en primeras nupcias con Isabel Bustos y Ledesma, y en segundas nupcias con María Caldevilla (LC, 1936, 140). Pretendió en 1785 adquirir de los Dominicos la estancia de Diego Celis en \$2.000, y fracasó en el intento (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.242, Exp.12). Según Andrés Mestre, Ordóñez "...no tenía poco mérito en que no se hubiese disipado con mayor brevedad la Sublevación de Traslasierra, por patrocinar a José de Isasa, autor de aquellos alborotos" (Andrés Mestre al Virrey Vértiz, Salta, 24 de Agosto de 1782 [AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5]).

²⁴ Hijo de Pedro de la Torre y de María Josefa de Benítez, poseedores de una valiosa biblioteca (Furlong, 1944, 66), casado con María Teodora de Vera y Mujica, padres a su vez de José Joaquín de la Torre y Vera, a su vez casado con Teresa de Allende y Torres, hija del Caballero de Carlos III Don Pedro Lucas de Allende; y de Juan Capistrano de la Torre y Vera, marido de Josefa Torres de la Quintana (Cutolo, VII, 358; y Crespo y Moyano Aliaga, 1992, 30).

²⁵ Mayordomo de Propios y Arbitrios, 1770-74; casado con María Rosa Echenique, hija de José Gregorio Echenique y Cabrera y de María Rosa Arzaga (Calvo, 1938, III, 229 y 233; y LC, II, 203). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

²⁶ Casó con María Teresa de las Casas y Correa, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario, y dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y Ferreyra. Era concuñado del Escribano Clemente Guerrero (LC, II, 142). Guillelmo remata el oficio de Alguacil Mayor en 1753 (AHC, Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26, Exp.6). En 1758 fué encausado y condenado por la Real Audiencia de Charcas conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena, Manuel de Castro, y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique, por la conducta observada respecto del Comisionado Sebastián de Velasco. Guillelmo fué suspendido en el ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a 30 leguas de Córdoba (Acevedo, 1972, 258). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

²⁷ Hijo del Alcalde Francisco Garay y Tejeda, aquel que había sido herido de una puñalada en 1753, y de Petronila Molina Navarrete, y sobrino del Alcalde José de Molina, y de Bartolina Garay y Tejeda, mujer de José Santiago Echenique y Cabrera. Era casado con Isidora Zamudio y Echenique, hija de Juan José de Dízido y Zamudio y de Tadea Echenique y Garay, Señora de la Capellanía de Copacabana, y por tanto prima hermana del Alcalde de Hermandad Patricio Echenique (Calvo, 1924, 164). Domingo Garay era hermano de Petrona Garay, la cual se desposó con el Alcalde Francisco Armesto y Allende; de Ipólita Garay, mujer del Alcalde José Benito de Acosta; de Fernando Garay; de Teresa Garay, mujer de José de Ariza; y de Francisca Garay, mujer de Fernando de Arce y Bustillos; y

primo hermano de María Josefa Molina y López del Barco, mujer de Juan Agustín Echenique y Cabrera (AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119). Isidora Zamudio era hermana de Lucas Zamudio, casado con Gervasia Echenique; de Juan Gregorio Zamudio, desposado tres veces, la primera con la santafesina Ana Josefa Gaete y Vera Muxica, la segunda con la mendocina Catalina de Anzorena Nieto, y la tercera con la mendocina María Nicolasa de Videla y Correas de Larrea; de José Antonio Zamudio, casado con Simona Muñoz; de Pedro Pablo, casado con su prima hermana Petrona de Zamudio Vallejo, de Catalina, casada con Pablo Cires; de María Antonia, casada con José Miguel de Zamudio Vallejo; y de Bernardina, casada con Manuel de Figueroa Ceballos (Calvo, II, 395). Era padre de Francisca Antonia Garay, mujer del Alcalde José del Portillo, de Justo Pastor Garay, marido de Francisca Peralta, y de José Justo Garay, marido de Isidora Josefa de Urtubey, hija de Juan Luis de Urtubey y de María Ana Villarroel (Calvo, 1924, 164; y AHC, Escribanía N.2, Leg.92, Exp.21). Fernando de Arce y Bustillos, tuvo por hija natural a Juana María Arce y Bustillos, viuda de Domingo Aragón (AHC, Escribanía N.4, Leg.49, Exp.6; Sucesión No.3468). En cuanto a José de Ariza, éste reclama en 1801 que el dinero que dejó para dotes de niñas pobres el finado Deán de Córdoba Don José Garay Bazán, primo hermano de Francisco Xavier Garay, se doten sus hijas María del Carmen, Petrona, Agustina, y Polonia de Ariza (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.82, Exp.30). En 1782 el Alcalde Provincial Don Domingo Garay, fué hallado culpable por el Juez Ambrosio Funes y Bustos, de haber degollado en el Corral de Barrancos, Puesto de Don Luis de Aguirre, en sus propias camas, al matrimonio constituido por Pascual Cortés y su mujer Isidora Orco, y a la jóven de 12 años, Candelaria Cortés, hermana de Pascual (AHC, Crímen, 1782, Leg.36, Exp.1; 1784, Leg.38, Exp.10; y 1796, Legajos 70, Exp.5 y 72, y Exp.11). En 1790 Garay fué nuevamente procesado por inferir lesiones a Carlos Andino, marido de María Teresa Lorca, y privar indebidamente de su libertad a la parda liberta María de los Santos Morales, y maltratar a su esposo Valentín Cáceres (AHC, Juzgado del Crímen, 1790, Leg. 50, Expedientes 16 y 18). Con motivo de este proceso se le embargan los bienes (AHC, Crímen, 1790, Leg.52, Exp.13). Y su mujer, Isidora Zamudio, se vió obligada a pedir permiso para rifar su casa (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.19). Un año después vuelve a reincidir intentando asesinar a Florentino Rojas (AGN, Crímen, 1791, Leg.54, Exp.22). En una época en que los crímenes de los individuos "trascendían a los parientes", los mismos significaron la defenestración política y social de su hijos varones José Justo Garay y Justo Pastor Garay, y de su yerno el ex-Alcalde José del Portillo. Finalmente, su nieto José Lorenzo Garay y Peralta, hijo de Justo Pastor, perseguido por la justicia cordobesa se radicó en Buenos Aires. José Justo Garay, marido de Isidora Josefa de Urtubey, hija de Juan Luis de Urtubey y María Ana Villarroel, es procesado en 1800 por desacato (AHC, Crímen, 1800, Leg.86, Exp.21). En agosto de 1809 representa los perjuicios que en sus bienes patrimoniales le había inferido su madre Isidora Zamudio (Oficio del 28-VIII-1809, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 16, Sala IX, 6-1-4). José Lorenzo Garay y Molina, fué también procesado en 1793 conjuntamente con otros cómplices, por ladrón y otros excesos (AHC, Crímen, 1793, Leg.58, Exp.11). Una década y media más tarde, en 1808, como soldado de la Compañía de La Carlota, José Lorenzo deserta de la misma, y aparentemente se oculta en Buenos Aires (Oficio del 16-IX-1808, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.16, Sala IX, 6-1-4). Finalmente, José Lorenzo Garay contrae matrimonio con Pascuala de la Torre y Cordobés (Calvo, 1924, 164).

²⁸ Eduardo R. Saguier (1991): "Los conflictos entre el Clero y el Estado en el mundo colonial. El ejercicio del Patronato Real en el Virreinato del Río de la Plata", presentado en el Encuentro "Sociedad y Economía en el Mundo Colonial", organizado por el Centro de Estudios de Historia Americana Colonial (Universidad Nacional de La Plata) y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de

Ciencias Sociales, celebrado el 27, 28 y 29 de junio de 1991 en el Museo Roca (Buenos Aires);

²⁹ Por Real Cédula del 17 de febrero de 1762, la Corona dispuso que en las elecciones anuales de alcaldes ordinarios, se instrumentase la alternativa, es decir una elección en la cual simultáneamente se eligieran como alcaldes de primero y segundo voto a un nativo y un europeo (AGN, Reales Cédulas, tomo 40, fs.246, Sala IX, 24-9-7). La partición de los oficios tiene su antecedente en el siglo XVII cuando los oficios fueron repartidos entre encomenderos y no encomenderos (Doucet, 1974, 383).

³⁰ acerca de la alternativa, ver Lavallé, 1994, 163-165.

³¹ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 240.

³² AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 240.

³³ Padre del que fuera Presidente de la República Don Santiago Derqui.

³⁴ Dionicio de Villafañe y Luna al Alcalde Ordinario de Primer Voto Don Andres Herrera y Sánchez, La Rioja, 28-V-1810 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 240, Exp. 41, fs. 16.).

³⁵ Casado éste último con Maria Soaje y Dávila, hija de José Fermín Soaje y de Manuela Dávila (Luque Colombres, 1946; Ruiz Moreno, 1982; y Moyano Aliaga, 1983).

³⁶ casado con María de la Concepción del Moral.

³⁷ Casado con María Josefa de Villafañe y Carreño, hija del Alcalde Mayor Provincial y Presidente de la Real Junta de Temporalidades Juan Manuel Villafañe y de María del Rosario Carreño y Bazán de Cabrera, concuñado del Maestro de Postas Justo Pastor Gordillo, hijo de Inocencio Gordillo (Serrano Redonnet, 1944, 61; y AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1).

³⁸ Probablemente el antecesor de Joaquín Gonsález Gordillo, el padre del historiador y político Joaquín V. Gonsález.

³⁹ Español, casado con Francisca Solana San Román y Castro, padre del que fuera Gobernador de La Rioja en 1841 y 1849 Manuel Vicente Bustos, y abuelo del que fuera, a partir del 80, tres veces Gobernador de La Rioja, Francisco Vicente Bustos.

⁴⁰ AGN, Sala IX, Interior, Leg. 35, Exp. 8.

⁴¹ Fué designado Mercado Administrador de Tabacos de La Rioja por el Coronel Manuel Castro, Administrador General de la Renta de Tabaco y Naipes de la Gobernación de Salta del Tucumán. Su persona parece haber sido también una de las causas de la quiebra póstuma de Castro (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.24, Exp. 590, fs.39).

⁴² Nacido en Asunción en 1725 de una unión adulterina del General Andrés Ortiz de Ocampo con una mestiza paraguaya de apellido Ysfrán. Llevado a La Rioja y criado por su padre, el noble bastardo fué educado como un hijo más, alcanzando una cultura inusual en La Rioja de ese tiempo, lo

que le permitió desarrollar especialmente su vena poética, con la cual satirizaba a sus adversarios y defendía múltiples causas perdidas. Alcanzó en 1780 el cargo de Alcalde Ordinario en el cabildo, y el grado de Maestre de Campo en las milicias locales.

⁴³ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 243v.

⁴⁴ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 246v.

⁴⁵ Hijo de Juan José de Villafañe y Tejeda, y de Petronila Dávila, hermano del Comandante de Milicias Juan José de Villafañe y Dávila, y cuñado de Andrés Ortíz de Ocampo. Casó con María Antonia de Luna (Serrano Redonnet, 1944; y Cutolo, VII).

⁴⁶ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 247.

⁴⁷ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 248v.

⁴⁸ A ello respondió Mercado, que "...los soldados no podían seguir su destino por falta de cabalgaduras, los juegos fueron con el Cap. Pedro de Villegas y otro oficial, las bebidas que llevó fueron dos cargas de vino y aguardiente y la venta que hizo dellas fué no sólo entre los soldados si también entre otros independientes que ocurrían a comprarle, lo cual sucedió cuando Mercado recibió el orden para regresarse en que ya no necesitaba de aquellos caldos de que se había proveído para su gasto" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v).

⁴⁹ Hijo de Juan José de Villafañe y Tejeda y de Petronila Dávila (Serrano Redonnet, 1979, 186). Cuñado de Andrés Nicolás Ortíz de Ocampo, y tío de los hermanos Francisco Antonio, Domingo, y Juan Amaranto Ortíz de Ocampo.

⁵⁰ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v.

⁵¹ Ver Bazán, 1966, 1979.

TOMO VII

CAPITULO 4

El nepotismo y el etno-centrismo capitular en las ciudades carentes de inmigración del Virreinato del Río de la Plata (1760-1810)

(publicado parcialmente en 1993 en Estudios de Historia Social y Económica de América [Alcalá de Henares, Madrid: Departamento de Historia de América de la Universidad de Alcalá de Henares, 10, 1993, pp.61-116]; bajo el título: "El Parentesco como Herramienta de Consolidación del Patriado Colonial. El caso de las provincias rioplatenses del Virreinato Peruano [1700-1776]);

En principio, la presencia del patriado varió notablemente de una provincia a otra, alterándose de esa forma su repercusión política, en especial el grado de localismo manifestado. Para medir esta variación hemos elaborado un ranking del patriado, tomando como supuesto que los vecinos patricios estaban compuestos por los varones españoles adultos casados. Dicho ranking fué elaborado sobre la base de la Tabla H-I, fundada en el padrón de 1778, publicado por Larrouy (1927). Su proporción sobre el total de la población masculina adulta daría un índice de la importancia relativa de dichos varones españoles adultos casados. En efecto, en el Cuadro F-B, encabeza el ranking de posiciones Santiago del Estero con el 40,25%, seguido por La Rioja con el 37,30%, Tucumán con el 33,16%, Córdoba con el 20,23%, Jujuy con el 19,56%, Salta con el 17,33% y Catamarca con el 14%.¹ Lamentablemente no contamos con cifras para las ciudades del Alto Perú, pero por la alta presencia de masas indígenas, suponemos que, con excepción de las ciudades del Oriente Alto peruano, la proporción de miembros del patriado en el total de su población debe haber sido extremadamente baja.

De las regiones que más padecían de acusaciones de nepotismo el Alto Perú figuraba entre las primeras. Y en el Alto Perú, la provincia de La Paz era una de las que más asiduamente venía sufriendo conflictos de esta naturaleza.² A diferencia de las provincias abajeñas, en La Paz, al igual que en el resto del Altiplano, existía una minoría blanca en medio de una inmensa masa indígena. En 1777, en oportunidad de haberse elegido de alcalde de primer voto a Francisco Tadeo Díez de Medina,³ el Alcalde de segundo voto Andrés Calderón y Sanginés, el Alcalde Provincial Bernardino Argandoña y el Alférez Real Tadeo Ortiz de Foronda impugnaron la elección alegando que votaron por Medina su tío Tadeo Díez de Medina y su primo Clemente Vidangos.⁴ Pero no habiendo incurrido en los grados de parentesco que la ley prohibía el Fiscal de la Real Audiencia concluía "...que no debe anularse la elección por este capítulo".⁵

También se dieron entre los diversos clanes de los patriados provinciales numerosos pactos o

concordias para impedir la intromisión en sus distritos de las autoridades correspondientes a jurisdicciones centrales. En La Rioja, las casas patricias riojanas de los Bazán y los Villafañe celebraban su unidad practicando concordias. Primero en 1708 y setenta años después, en 1781, con motivo de la irrupción de las Milicias cordobesas --que iban a reprimir el alzamiento de Tupac Amaru-- el patriciado Riojana firmó concordias, donde acordaba su exclusividad in perpetuum de los empleos concejiles y militares.⁶

Si bien tradicionalmente La Rioja había pertenecido a la jurisdicción de Salta, a partir de la Real Ordenanza de Intendentes pasó a depender de la jurisdicción de Córdoba. Este cambio de jurisdicción no alcanzó a cambiar la injusta realidad económica y social de la provincia, marginada de todas las rutas comerciales que unían al litoral con el Alto Perú y con Chile. Este marginamiento comercial unido a la extrema concentración territorial y minera en manos de una élite ultra-conservadora condicionó la constitución de su Cabildo. Con motivo de la irrupción de las Milicias cordobesas --que iban a reprimir el alzamiento de Túpac Amaru-- en la ciudad de La Rioja, las casas patricias riojanas de los Bazán de Pedraza, los Ortiz de Ocampo y los Villafañe reafirmaron su unidad celebrando en 1781 una nueva concordia, ratificatoria de la celebrada en 1708, donde se acordaba su exclusividad vitalicia o in perpetuum de los empleos concejiles y militares.⁷

En esta unión y en todos los episodios en que el pueblo riojano manifestó su repudio por el avasallamiento de su autonomía y el despojo de la administración de su Renta de Tabaco y Naipes, las dinastías de los Ortiz de Ocampo y los Villafañe, que detallamos en los Cuadros LR-I al LR-VI, estuvieron presentes turnándose en el mando. Pero a fines del siglo, las casas de los Ocampo y los Villafañe, afincadas en los Llanos, se vieron enfrentadas por la casa de los Dávila, radicada en Chilecito. En esta última ciudad, las familias de los Tagle y los Castro apoyaban al linaje de los Dávila, perteneciendo a las mismas la riojana Felipa Tagle y Castro, la cual se desposara con el Teniente Asesor de la Gobernación de Córdoba, Victorino Rodríguez. Para mejor dominar la situación política riojana Rodríguez había designado como Jefe de la Guarnición de soldados a Manuel José Derqui,⁸ yerno de su hermano Manuel Antonio Rodríguez,⁹ y como Subdelegado Provisional y Comisionado de Minas al primo hermano carnal de su mujer, Don José Víctor Gordillo y Castro.¹⁰ La Casa de los Villafañe llegó a incorporar a fines de dicho siglo a las familias de los Peñaloza y los Bazán. Entre sus representantes más conspicuos se destacaban Nicolás Villafañe y Sánchez de Loria,¹¹ Manuel del Rincón y Escudero,¹² y Favián González,¹³ uno de los Administradores particulares designados por el Coronel Manuel Castro en el Real Estanco de Tabaco de La Rioja. A esta Casa de los Villafañe se suma en la década del 90 Don Vicente Antonio Bustos,¹⁴ quien fuera Alcalde de Primer Voto, Subdelegado de Real Hacienda y Comandante de Armas, por renuncia de Juan Antonio Ortiz de Ocampo en 1794.¹⁵

Quien por primera vez enfrenta a este bloque de poder tradicional en La Rioja, al extremo de ser repetidamente impedido de ingresar al Cabildo, fué el Administrador General de Tabacos, Don José Antonio Mercado,¹⁶ pariente de la mujer de Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán.¹⁷ No obstante este parentesco, Ocampo le profesaba a Mercado una profunda enemistad originada en su desempeño como Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes y en el pleito que como apoderado de su yerno Xavier de la Vega y Castro le seguía por las tierras de la Pampa Blanca, en el partido de los Llanos.¹⁸ Amén de Ocampo, el Alcalde Ordinario Pedro José de Escalante también le guardaba una profunda inquina, al extremo de haberlo arrestado en 1795 en la cárcel pública aduciendo que "vendía malos tabacos".¹⁹ Además de Bustos, Ocampo, y Escalante, también se sumaron al bloque oficialista Francisco Xavier de Herrera y Juan Pablo de Villafañe y Dávila.²⁰ Sin embargo, estos dos últimos fueron impugnados por Mercado en razón de ser parientes dentro del tercer grado de afinidad.²¹ Finalmente, Mercado fué

arrestado bajo la injusta acusación de haber sublevado las tropas (60 hombres) que iban a relevar las que estaban de guarnición en la frontera del Río del Valle.²² A más de haber abandonado el relevo, Mercado fué acusado también de haber esquilado a sus soldados con el juego y la venta de bebidas espirituosas.²³ En realidad, las tropas fueron sublevadas por el Comandante Juan José de Villafañe y Dávila,²⁴ "...quien no por eso dejó de merecer al Cabildo compuesto de sus allegados y parientes el concepto de muy buen servidor del Rey y de la República".²⁵ Conocida más tarde la verdad, trató entonces el Cabildo que la culpa de Villafañe apareciese como de Mercado. Con la explotación del Cerro de Famatina, a partir de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, la antigua estructura de poder en La Rioja sufrió un cambio tan radical, que su patriciado necesariamente volvió a fragmentarse en dos facciones, al igual que a fines del siglo XVII. Por un lado aquellos más ligados a la producción minera del Cerro y a las políticas unitarias dirigidas desde Córdoba (la Casa de los Dávila), altamente dependientes de la provisión de azogue con que refinar su mineral, y por el otro lado aquellos vecinos más ligados con el comercio y la explotación agraria de Los Llanos, más afines a los vientos federalistas que soplaban desde el litoral Artiguista (la Casa de los Ocampo u Ortíz de Ocampo).²⁶

Las tres casas reinantes. El caso de Cuyo.

Entre las regiones que padecían en sus elecciones concejiles de amenazas de nulidad Cuyo era otra de las que se destacaba por las acusaciones de nepotismo. Lamentablemente, sus cifras de población, que nos provee el Marqués de Sobremonte y el Pbro. Domingo García,²⁷ al no estar desagregadas entre casados y solteros, como las que trae la Tabla H-I, fundada en los datos proporcionados por Larrouy (1927), para las provincias del norte, no nos permite en este caso inducir una aproximación numérica, con relación a la proporción de población patricia respecto de la población mercantil forastera.²⁸ De todas maneras las prácticas centralizadoras Borbónicas, desplegadas en Cuyo, que intentaron relegar del poder comunal a las antiguas oligarquías fueron de un grado inusitado. Ellas estaban originadas en: a) la expulsión de los Jesuitas, b) la prohibición de comerciar impuesta al clero; c) la creación de la Real Renta de Tabaco y Naipes, y d) el desplazamiento de la Real Audiencia de Chile --que significara la creación del nuevo Virreinato del Río de la Plata.²⁹ En San Juan, el nuevo patriciado intentó relegar de la composición del Cabildo a los antiguos clanes de los Sánchez de Loria, los Irrazábal, y los Albarracín; y en Mendoza logró con éxito desplazar al antiguo clan de los Videla.³⁰

En tanto, en Mendoza, el monarca había prohibido en 1760 por Real Cédula que la Real Audiencia de Chile eligiera de Corregidor de Cuyo a un vecino del lugar, "...por los desórdenes que hubo cuando lo fué de ella [Francisco] Videla y Aguiar".³¹ Veinte años después, en 1782, el mismo Francisco Videla y Aguiar,³² fué desterrado de Mendoza, conjuntamente con Pablo Barroso y José de la Reta Videla,³³ por negarse a participar de la represión de los seguidores de Túpac Katari.³⁴ Una nueva oligarquía, ligada a la liquidación de los bienes de los Jesuitas, y fundada en el poder político y económico de las familias de Juan Luis Corvalán de Castilla,³⁵ Juan Martínez de Soto y Rozas,³⁶ y José Sebastián Sotomayor,³⁷ había ocupado el escenario político de Mendoza.

Con la Real Orenanza de Intendentes (1782), la disminución del poder relativo del Cabildo Cordobés, condicionó la naturaleza de las crisis políticas que se sucedieron en lo que restaba de la dominación colonial, exportando los conflictos a las cabeceras de las provincias cuyanas (Mendoza, San Juan y San Luis). Cuyo, que había pasado en 1778 de la jurisdicción de la Capitanía General de Chile a la de la Gobernación-Intendencia de Córdoba, fué otra de las regiones donde el nepotismo practicado en las elecciones concejiles amenazaban desatar serios conflictos, alimentados por la intervención central. En 1782 se produjo en Mendoza una conspiración integrada por una facción

capitular,³⁸ adversaria de las llamadas tres casas reinantes, motivo por el cual resultaron desterrados el suegro del Alcalde Raymundo Pelliza, Francisco Videla y Aguiar,³⁹ conjuntamente con Pablo Barroso y José de la Reta.⁴⁰

Dos años después, en 1784, una vez promulgada la Real Ordenanza de Intendentes, las denuncias contra las tres casas reinantes que iniciara en 1778 Francisco de Serra y Canals,⁴¹ las continuó esta vez el Comandante de Fronteras José Francisco Amigorena,⁴² tomando como objeto de sus acusaciones al Capitán de Milicias y Maestre de Postas Nicolás Santander y Corvalán.⁴³ El propio Santander, cuestionado por Amigorena en virtud de acumular una Maestría de Postas y una Capitanía de Milicias,⁴⁴ replicaba que el Comandante "...no ahorra ocasión de bomitar pestes contra los de mi segundo apellido viviendo al todo separado de nosotros...teniendo horror de pisar los umbrales de las casas comprendidas en esta su desgracia".⁴⁵ Siete años después, en 1792, la candidatura a alcalde de segundo voto de Manuel José de Godoy y Rojas,⁴⁶ miembro por matrimonio de una de las tres casas reinantes, fué revocada por "...el impedimento de comprenderse por la relación de parentesco de primo hermano por afinidad con el Alférez Real Nicolás Corvalán".⁴⁷ Más luego, en 1800, el candidato a Alcalde de segundo voto Fernando Güiralde, ⁴⁸ también fué impugnado por haber sido elegido por su conculado. ⁴⁹ Esta impugnación fué hecha esta vez por Nicolás Corvalán, ⁵⁰ quien eligió en su lugar como Alcalde a su propio primo hermano Domingo Corvalán. ⁵¹ Tres años más tarde, en 1803, la élite mendocina se hallaba dividida entre aquellos miembros Diputados del Gremio de Hacendados, ⁵² y aquellos otros miembros Diputados del Gremio de conductores de carretas. ⁵³ Para ese mismo año de 1803, el Teniente Coronel y Comandante de las Milicias Urbanas de Mendoza Don Miguel Télles Meneses Sodré, ⁵⁴ también perteneciente por matrimonio a una de las tres casas reinantes, luego de batallar por las elecciones anuales de los alcaldes, manifestando que a excepción de las ciudades correspondientes a la provincia de Cuyo,

"...no hay otro Cabildo donde no se elixan anualmente los regidores que son de dotación, porque en ninguna hay arriba de dos o tres propietarios, y porque en todas combiene, que supla la elección anual, completándose por ella el número de regidores y vocales de un cuerpo, que debe siempre ser íntegro, para que por su defecto, no peligre el servicio y público bien de las ciudades". ⁵⁵

denunciaba que aún en el caso de reunirse los vocales para la elección anual, "...podría no resultar elección legal". ⁵⁶ Y esto último, por cuanto por ser hermanos el Regidor Juan de la Cruz Vargas, y el Alguacil Mayor Rafael Vargas, ⁵⁷ y primos hermanos los Regidores Francisco Xavier Molina, ⁵⁸ y Bentura Cabero, ⁵⁹ "...es fácil que se defectúe la elección". ⁶⁰ Esta deformación se podía dar, según Télles, por cuanto "...los dos hermanos pueden sufragar al contesto de los dos primos, y estos al de los hermanos, recompensándose mutuamente, sin que el quinto vocal pueda hacer oposición por ser sólo". ⁶¹

Asimismo en San Juan, el nepotismo y el etno-centrismo practicado en las elecciones concejiles amenazaba desatar serios conflictos, alimentados por la intervención central. La hegemonía capitular de la facción llamada beata se había logrado perpetuar hasta el filo de la misma revolución. En efecto, en 1808, el Regidor Decano y Alférez Real de San Juan José Ignacio Fernández Maradona, ⁶² el Alcalde Provincial Juan Rufino Flores Hurtado, y el Alguacil Mayor Francisco Flores Hurtado, ⁶³ elevaron un recurso al Gobernador de Córdoba reclamando que en los oficios concejiles de San Juan "...se guarden huecos, parentescos, y solvencias para evitar que estos oficios se vinculen en las familias contra la buena administración de justicia". ⁶⁴ Una buena administración debía interesarse, según los citados

regidores, en la circulación de los oficios "...para que todos los ciudadanos participen de los honores de la Patria".⁶⁵ Sin embargo, la elección del Alcalde de Primer Voto había recaído en 1808 en Pedro Carril,⁶⁶ quien era hermano de Don Justo, Regidor Alguacil Mayor en 1806 y doble hermano político del Regidor Fiel Ejecutor Don Francisco Borja de la Rosa.⁶⁷ También era Carril, como lo podemos ver cotejando el Cuadro SJ-I con el Cuadro SJ-II, pariente consanguíneo del Regidor Alejandro Albarracín,⁶⁸ quien lo era también del Alcalde de Segundo Voto Don José Antonio de Oro,⁶⁹ y de Don José María Torres. La elección del Alcalde de Segundo Voto había recaído en Pedro José de Echegaray,⁷⁰ tío de consanguinidad con el Alcalde de la Santa Hermandad electo José María de Echegaray, y de afinidad con el Alférez Real que quedaba.⁷¹ La elección de los Regidores Defensores de Menores y de Pobres había recaído en Don Alejandro Albarracín y en Rosendo Frías respectivamente. De Albarracín se consignaba que era pariente de consanguinidad dentro del cuarto grado y de afinidad en el mismo grado con los electores que se han referido, y de Frías que

"...sin diez años de vecindad, ni casa poblada, y que no tiene ni se le conoce Finca Raíz, y caudal abundante ni mediocre para la responsabilidad a que por su ministerio de regidor se halla suxeto".⁷²

Finalmente, la elección del Procurador Síndico General de la Ciudad había recaído en Don Martín Gomed, hermano político del Regidor Don José Cortínez, cuyo mandato vencía, y del Regidor Alcalde Provincial, cuyo mandato se renovaba, "...con cuyas dos hermanas estaban casados [el] elector y [el] elegido".⁷³

Y cuando con motivo de las elecciones concejiles celebradas en San Luis, en 1808, fuera elegido y confirmado Don Estéban Ramos para el cargo de Alcalde de primer voto del Cabildo de San Luis, sus miembros capitulares Don Tomás Baras, Don Francisco Rodríguez, Don Isidro Calderón, y Don Juan de Amieba Díaz alegaban que de ciertos sujetos beneficiados por la confirmación del Gobernador Intendente de Córdoba "...no permitían dispensar semejante diligencia la justicia ni la razón".⁷⁴ Ese era el caso de Estéban Ramos por cuanto se ha dicho que era deudo (pariente) de Don Francisco Vicente Lucero

"...pues también sucede lo propio con Don José Lucero elegido para Síndico Procurador de Ciudad, como primo hermano de Don Francisco, con Don Tomás Luis Lucero electo Alguacil Mayor, que es sobrino del primero, con Don Pedro Ignacio Pérez Defensor de Menores que se halla en igual grado que el antecedente con el mismo, y con Don José González Pena, Regidor Defensor de Pobres elector, que es deudo del referido Don Francisco Lucero".⁷⁵

Más aún, en el escrito de expresión de agravios elevado en el recurso de nulidad e injusticia notoria entablado contra el auto del Gobernador-Intendente de Córdoba, el abogado Antonio de Ezquerrenea manifestaba

"...que la prohibición de sufragar en los grados de consanguinidad y afinidad, deve entenderse no sólo entre los electores y elegidos dando a estos aquellos, sus sufragios, si también aún quando no les huviesen prestado y dimanasen de otros capitulares con quienes no tengan conección".⁷⁶

Esta última interpretación brindada por Ezquerrenea, se fundaba en el irrefutable principio de que el espíritu de la ley era no sólo impedir que sufragaran quienes entre sí padecieran de vínculos de afinidad o consanguinidad sino también simplemente "...prohibir la sucesión de los empleos y sus familias".⁷⁷

Las prácticas burocráticas nepóticas. El caso de Santa Fé.

En lo que hace a las provincias litorales, Santa Fé, dado el corto número de su vecindario apto para los cargos concejiles, la Corona le había concedido a su Cabildo el privilegio de elegir como Alcaldes ordinarios a los mismos Regidores. Pero la facción santafesina opuesta a dicha medida, liderada por Juan Francisco Aldao,⁷⁸ quiso en 1780 ponerse de acuerdo en el número de vecinos aptos para ser elegidos en los oficios concejiles, conceptuando

"...que para Alcaldes Ordinarios y Procurador General hay 45 vecinos desta Ciudad y 4 de la Campaña, para Alcaldes de la Hermandad 50 vecinos de la campaña, y para Mayordomos 25 vecinos desta ciudad".⁷⁹

Estas últimas cifras concuerdan con las dadas para la ciudad de Córdoba en la misma época. No obstante el holgado número de vecinos en condiciones de votar y ser votado, la administración real y municipal fué monopolizada primero por las casas patricias de los Martínez del Monje y más luego por las casas de los Maciel y los Vera Mujica.

En la primera mitad del siglo XVIII, el comercio exclusivo de la yerba producida por los Jesuitas, y la instauración del llamado puerto preciso en la ciudad de Santa Fé, destinado a debilitar a las familias patricias del Paraguay, en gran medida hallada culpable de haberse amotinado en la llamada Revolución de los Comuneros, consolidó en el poder de Santa Fé a la familia patricia de los Monje, al extremo de marginar de esta ciudad a aquellos elementos que no se sometían a su hegemonía. Entre dichos elementos no asimilables a la Casa de los Monje estaban Don Juan de Zaballos,⁸⁰ y su yerno Don Antonio Candiotti y Mujica.⁸¹ El suegro Zaballos pudo en 1745 presentar ante el Cabildo de Santa Fé un despacho expedido por el Teniente General de la Gobernación por la cual lo restituían en su empleo de Regidor. En dicha presentación Zaballos revela la base social del poder de los Monje. El Cabildo de Santa Fé estaba compuesto del Regidor Don Miguel Martínez del Monje,⁸² del Teniente General Don Francisco Antonio de Vera Mujica,⁸³ del Alcalde de Primer Voto Pedro Florentino de Urizar,⁸⁴ y del Alguacil Mayor Pablo Navarro, estos dos últimos cuñados de dicho Teniente General, así como del citado Regidor Martínez del Monje, tío carnal del mencionado Urizar.⁸⁵ La reelección en dicha oportunidad del Alcalde Urizar, a juicio de Candiotti, era nula porque para ser reelecto en dicha vara no tuvo Urizar

"...más voto que el suyo, el de su conculado Don Pablo Navarro y el de su tío carnal Don Miguel Martínez del Monje, por que el Alcalde de Segundo Voto su sobrino por afinidad se fué a Chile antes de las elecciones, y el único regidor que no era de su familia ni su pariente inmediato, que fué mi suegro, le expulsaron del Cabildo en la forma referida".⁸⁶

También debía ser nula esta elección

"...por que ha más de diez años sino ha veinte que la dicha vara de Alcalde de Primer Voto está vinculada a esta Casa de los Monjes, pasando de unos a otros entre hermanos, cuñados, tíos, primos, yernos, sobrinos y parientes practicando lo mismo con la de segundo voto".⁸⁷

Esta composición familiar obedecía al "...ánimo de no tener otro en el Cabildo que pueda embarazarles sus operaciones".⁸⁸ Teniendo asimismo los miembros de la Casa de los Monje varios litigios que seguir contra otros vecinos,

"...en un año son partes y en otro año son jueces en los mismos autos y causas...por lo que todas las demás familias de aquel vecindario viven ajadas y ultrajadas expuestas a dejar sus casas y conveniencias mudándose a otra ciudad por el conocido agravio que en éstas se les hace".⁸⁹

Por no ser estos vecinos perseguidos como lo era el suegro de Candioti, no había en 1745 vecino en Santa Fé que se atreviera

"...a hacer postura ni en propiedad ni en arrendamiento a cualquiera de todas las demás varas de aquel Cabildo que ha muchos años están vacas y lo estarán siempre sino se remedian estos desórdenes".⁹⁰

Una vez expulsados los Jesuitas, en 1767, el cargo de Depositario de los bienes de las Temporalidades, en Santa Fé, había recaído en el Teniente Gobernador Joaquín Maciel,⁹¹ quien "...se posesionaba a su vez del producido de las ventas sin dar cuenta detallada alguna".⁹² Integrando la mayor parte de los cargos capitulares con parientes próximos o afines, las familias de los Maciel, los Echagüe, y los Vera Múxica reproducían la misma conducta que en el período anterior había desplegado la familia de los Monje. Las elecciones hechas en 1772, que recayeran en Francisco Crespo,⁹³ y Pedro de Mihura, fueron impugnadas por el Alguacil Mayor Cayetano Ximénez Naharro. La de Crespo por haber participado en la elección su propio padre José Crespo. Y la de Mihura por vivir "...amancebado con una parienta muy cercana de Juan Francisco Roldán, el cual es entenado del Alguacil Mayor Ximénez".⁹⁴ Ninguno de estos obstáculos concurrían, según el Alguacil Mayor Ximénez, en las candidaturas de Pedro Florentino de Urizar,⁹⁵ y de Lucas de Echagüe y Andía.⁹⁶ Si bien Urizar estaba casado con Antonia de Vera Mújica, y Lucas de Echagüe con María Josefa de Vera Muxica, una sobrina carnal de la anterior, dichos parentescos no habrían sido para el Alguacil Mayor Ximénez

"...en el grado que prohíbe el derecho se vote por él, ni éste [Echagüe] tuvo hijos para que pudiese subsistir el enlace, o razón que precaben las Leyes de la amistad y proporción para influir en que no tenga lugar la independencia".⁹⁷

Más aún, en el acuerdo del 24 de diciembre de 1779, el Regidor Decano Juan Francisco Aldao, había calificado (ponderado) los votos del regidor y Alcalde de segundo voto Don Luis de Hereñú y el del Regidor Tomás Vicente de Hereñú en un sólo voto, por el sólo hecho de ser hermanos.⁹⁸ Igualmente, por el hecho de ser cuñados, Aldao graduó por uno los sufragios del Alcalde de Primer Voto Tomás Vicente de Hereñú y el del Alférez Real Pedro de Urizar.⁹⁹ Para el abogado fiscal Dr. José Pacheco y Gómez,¹⁰⁰ aún más extrañeza debía causar que en la confirmación del Alcalde de primer voto se pospusiese a Juan Antonio de la Elguera,¹⁰¹ confirmando a Tomás Vicente de Hereñú, en atención al hecho de que había alcanzado la mayoría de los votos, cuando en realidad el primero [Elguera] estuvo electo por tres capitulares, y si bien el segundo [Hereñú] tuvo cuatro [sufragios] "...uno de los electores fué su hermano el Alcalde de segundo voto Don Luis Hereñú y otro de los electores fué el mismo electo [Hereñú]".¹⁰² A trueque de exceder al otro, Hereñú no dudó en elegirse a sí mismo "...sin tropezar con el escollo [escrúpulo] de la ambición a la vara".¹⁰³ Hallándose en un Cabildo un número grande de parientes y aliados, Aldao concluía que "...estos dispondrán a su arbitrio de cuanto ocurra en él, y ellos sólo serán los que en realidad de verdad formen el cuerpo del Ayuntamiento".¹⁰⁴ Siendo ellos la mayoría "...estarán eternamente los empleos públicos en sus manos".¹⁰⁵ De esta situación se desprenderán, según Aldao, innumerables perjuicios:

"...No tendrá valor de oponerse a sus violencias el Particular, que considere que el encono de sus perseguidores se ha de perpetuar por todas las edades, y se verá en la consternación de sufrir sus injusticias, cediéndoles por fuerza el despotismo sobre sí y sobre sus haciendas".¹⁰⁶

Aldao, quien pertenecía a una facción íntimamente vinculada con la producción de cueros, remataba su parecer afirmando que las familias del Teniente Gobernador Melchor de Echagüe y Andía,¹⁰⁷ la de Joaquín Maziel, y la de José de Vera Muxica,¹⁰⁸ tradicionalmente ligadas al comercio de la yerba mate, "...están unidas con los vínculos del parentesco, y después de 10 o 12 años, no hay exemplar que alguno de ellos no obtenga un empleo de justicia".¹⁰⁹ Hallándose en un Cabildo un número grande de parientes y aliados, Aldao concluía que estos dispondrán "...a su arbitrio de cuanto ocurra en él, y ellos solos serán los que en realidad de verdad formen el cuerpo del Ayuntamiento".¹¹⁰ Siendo los parientes la mayoría, Aldao razonaba que "...estarán eternamente los empleos públicos en sus manos".¹¹¹ De dicha realidad se seguirían innumerables perjuicios

"...el Pueblo se acostumbrará a mirar a una familia con el temor de que en ella es hereditario el mando: no tendrá valor de oponerse a sus violencias el Particular, que considere que el encono de sus perseguidores se ha de perpetuar por todas las edades, y se verá en la consternación de sufrir sus injusticias, cediéndoles por fuerza el despotismo sobre sí y sobre sus haciendas".¹¹²

Consecuente con esta posición, un año después, en 1781, Aldao probó la coherencia de su posición, por cuanto habiendo Juan Antonio de la Elguera y José de Vera Muxica elegido por Alcalde de primer voto a su propio cuñado Francisco Antonio Candiotti y Zevallos,¹¹³ Aldao "...dixo estarle impedido por derecho así el votar por cuñado, como su conformación por él".¹¹⁴

A partir de la Paz de Versailles (1783) y la Real Ordenanza de Intendentes (1784), la composición del Cabildo de Santa Fé había cambiado radicalmente, beneficiando a la facción liderada por Juan Francisco Aldao,¹¹⁵ íntimamente ligada primero al tráfico de mulas y luego a la producción de cueros, y perjudicando a la encabezada por los Maciel y los Vera Muxica, tradicionalmente vinculada al comercio de la yerba mate y a los privilegios del Puerto Preciso. En este período Aldao cambió su hasta entonces irreproachable conducta, crítica del nepotismo, erigiéndose en cabeza de una dinastía que hubo de perdurar en el gobierno de Santa Fé (Ver Cuadro F-I).

Este cambio de política en la conducta de Aldao se puede observar especialmente en las elecciones de 1785, 1787, 1788 y 1789. En 1785 Aldao votó para Alguacil Mayor por Gabriel de Lassaga y Gamboa,¹¹⁶ con quien tenía parentesco de afinidad por estar casado Lassaga con prima hermana del Cap. Juan Francisco Echagüe;¹¹⁷ para 1786 votó para Alcalde de segundo voto a Manuel de Toro y Villalobos;¹¹⁸ para 1787 votó para Alcalde a José Teodoro Larramendi y Arias de Cabrera,¹¹⁹ "...siendo este pariente consanguíneo en uno de los grados que prohíben las leyes de Castilla con el Alférez Real que representa"; y para 1788 votó para Alcalde a Félix Joaquín Troncoso,¹²⁰ "...siendo este tío carnal del Alguacil Mayor [José Gabriel Lassaga y Echagüe y Andía] y pariente de Don José de Vera Muxica en segundo grado".¹²¹ De igual manera Aldao estaba empeñado en que fuera Procurador General Luis Martín Caminos, hijo del Director de la Junta de Temporalidades Ambrosio Ignacio Caminos. El mismo Regidor Aldao, que era vocal de la Junta de Temporalidades, también era, según lo afirmaban los firmantes del escrito antecedente, deudor de la misma. De aquí que Don Ambrosio Caminos era "...servido por el mismo Aldao y por el Alcalde de primer voto Director de la misma Junta y de Aldao, y también de su hijo Don Luis Martín".¹²² Con que resultaba que subsistiendo la elección contraria, "...una sola persona será la que deba, la que demande, y la que mande".¹²³ Don Ambrosio Caminos sería entonces

"...el que dirigirá a Don Teodoro de Larramendi y a Juan Francisco Aldao como deudores de Temporalidades, el que dirigirá a su hijo Luis Martín como Procurador General promovente de los intereses de estas y el que dirigirá al mismo Juan Francisco Aldao como Juez vocal que ha de mandar en la Junta sobre lo que el mismo debe y Don Luis Martín demanda".¹²⁴

Semejante plan de votación, alegaban con todo derecho los denunciados mencionados, es querer "...refundir todas las acciones en una sola persona [Aldao], cuya solución abominan las leyes, la razón, y la recta justicia".¹²⁵

En 1791, vuelve a plantearse en Santa Fé la vieja antinomia entre la casa de los Echagüe y la casa de los Aldao. Pero esta vez el problema es suscitado por cuanto el candidato de la facción tradicional de los Echagüe, antiguamente ligada al comercio de yerba y al puerto preciso, era en realidad un niño llamado José Ignacio de Echagüe,¹²⁶ "...que hasta aquí no salió del regazo de la Señora su madre".¹²⁷ Si bien es cierto, como Juan Francisco Roldán lo reconocía, que el cargo le correspondía a su buen nacimiento y educación,

"...ello que importa, si por otra parte, carece de toda instrucción en asuntos de Justicia, y no ha tenido intervención alguna en el manejo de los cargos públicos,...[por lo cual] se verá en la necesidad de obrar solamente como niño, lo que sus parientes que lo han elegido le enseñen".¹²⁸

En cambio, el candidato opuesto, Don Ignacio Pantaleón Crespo Carballo,¹²⁹ fuertemente ligado primero al comercio de mulas y luego a la producción de cueros, ya había sido Alcalde ordinario y "...correspondió con su gobierno y recta conducta, al nombramiento que en él se hizo".¹³⁰ Si bien era cierto que la mujer de Crespo, María del Tránsito Zavala, era prima hermana del Alguacil Mayor José Manuel Troncoso Zavala, y que era fiador del Ministro de Real Hacienda Rafael María Guerrero Montañes,¹³¹ Roldán no veía que el parentesco de la esposa de Crespo con el Alguacil Mayor

"...pueda perjudicar el nombramiento que yo he hecho en él, toda vez, que no lo ha hecho el Alguacil Mayor, que es el Pariente, y que por el mismo echo, de no haber querido éste concurrir a su nombramiento, se pone patente, una prueba nada equívoca, de la independencia con que el dicho Crespo se maneja, aún con sus parientes".¹³²

De igual manera, en lo que hacía a su rol como fiador del Ministro de Real Hacienda, era también cierto

"...que la fianza por Don Rafael Guerrero, no tiene conexión alguna, ni dependencia, con la jurisdicción ordinaria de los Alcaldes, porque pende del conocimiento de los Jefes encargados de las causas de Real Hacienda, y así es visto que dicha fianza no le puede ser de obstáculo ninguno para ser Alcalde Ordinario".¹³³

De las prácticas burocráticas nepóticas la renuncia de oficios era la más común. El Alcalde Provincial de Santa Fé Juan José Morcillo Baylador renunció en 1786 el cargo a favor de su hijo Pedro Pablo Morcillo, y mientras durare la minoridad del hijo en Juan de Pereda y Morante.¹³⁴ De igual manera, renunciaron sus oficios en 1793 el Alcalde Provincial de Buenos Aires Diego Mantilla y de los Ríos en su hijo Manuel Florencio Mantilla,¹³⁵ el Alcalde Provincial de Santiago del Estero Roque López de Velazco en su hijo José Antonio López de Velazco,¹³⁶ y en 1797 el Regidor Sanjuanino

Pedro Sarmiento de Quiroga.¹³⁷

En cuanto a Corrientes, también padecía en sus elecciones concejiles de amenazas de nulidad provocadas por acusaciones de nepotismo.¹³⁸ Lamentablemente, las cifras de población que nos provee el Fraile Pedro José de Parras, al no estar desagregadas entre casados y solteros, como las que trae la Tabla H-I para las provincias del norte, no nos permite tampoco en este caso inducir una aproximación a la población patricia ni a la población mercantil forastera. Corrientes contaba para 1751 con 440 familias, para 1753 con 300 vecinos, para 1760 con 1440 milicianos, y para 1769 con 1021 milicianos.¹³⁹

La hegemonía Jesuítica. El caso de la provincia de Corrientes.

El caso de la provincia de Corrientes fué totalmente peculiar por la fuerte presencia de un bloque de facciones políticamente ajesuitado enfrentado a otro de patricios o españoles americanos. El bloque ajesuitado estaba liderado por el Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio,¹⁴⁰ Este genearca, entre cordobés y correntino, cuya descendencia estudiamos en el Cuadro CRR-I, estaba vinculado con el patriciado cordobés pues era padre de Juan José de Dícido y Zamudio, casado con Tadea Echenique y Garay.¹⁴¹ Su solar patricio lo integraban sus hijos varones y sus yernos Nicolás Patrón y Centellas, José de Acosta y López Lisperguer,¹⁴² y Ziprián de Lagraña.¹⁴³ La base material de este solar patricio habría consistido esencialmente en la exportación de ganado en pie al Paraguay y las Misiones, y en el tráfico mercantil con Buenos Aires. En cuanto a la facción anti-jesuítica, estaba liderada por Pedro Bautista Casajús, propietario de una gran estancia en Las Saladas.¹⁴⁴ Su solar patricio, que analizamos en el Cuadro CRR-II, estaba integrada por sus hijos varones Gregorio,¹⁴⁵ Bernardo,¹⁴⁶ Sebastián,¹⁴⁷ y José, este último párroco de Saladas, así como también sus yernos Miguel de Esquivel y Saravia, José de Silva y Osoreo, y Alonso Hidalgo Viera y Torres.¹⁴⁸

Pero debido a que a partir de la caída de Portobello (1742) la economía del litoral se entró a dinamizar con la exportación de cueros, los linajes patricios comenzaron a enfrentarse entre sí por el derecho a corambrear las haciendas realengas y a competir con el circuito de la exportación de ganado en pie al Paraguay y las Misiones y con la comercialización de la yerba mate, controlada por los Jesuitas. Ello sería el principal motivo por el cual a la facción ajesuitada del patriciado local le surgió una anti-élite con fuertes elementos anti-jesuíticos. De todos los miembros del patriciado anti-jesuítico, el único que demostró tener una fuerte inclinación por el comercio fué Don Sebastián Casajús. Si bien su giro fué tres veces menor al alcanzado por su competidor de la facción pro-jesuítica José de Acosta, entre 1744 y 1769 Don Sebastián viajó a Buenos Aires en diez oportunidades contrayendo obligaciones entre otros con Domingo Basabilbaso y Juan de Lezica y Torrezuri, para traer mercaderías por valor de \$15.138.¹⁴⁹

En cuanto a la competencia política, la década del 50 estuvo marcada por la hegemonía de la Casa pro-jesuítica de los Zamudio, con el liderazgo de Nicolás Patrón y Centellas, uno de los oficiales que participaron en las Guerras Guaraníticas. Así es que, en 1750, cuando fué electo como Alcalde de primer voto Alonso Hidalgo,¹⁵⁰ yerno de Pedro Bautista Casajús, el Gobernador José de Andonaégui, con dictámen del Teniente General y Asesor José de Acosta, con cuñado de Nicolás Patrón y de Ziprián de Lagraña, desaprobó el nombramiento de Hidalgo por haber tomado parte en su votación, sus cuñados y con cuñados, todos hijos o yernos de Pedro Bautista de Casajús y de Ursula Fernández.¹⁵¹ Posteriormente, en 1757, Sebastián de Casajús se desquitó con éxito del bando jesuítico pidiendo la nulidad de los votos dados por Juan Solís,¹⁵² y su cuñado el Alguacil Mayor Amaro Gómez,¹⁵³ en

favor de la candidatura para alcalde de Xavier Solís.¹⁵⁴ En su presentación, Don Sebastián manifestaba que Don Nicolás Patrón

"...lo manda todo en Cabildo sin que ninguno de los individuos tenga acción propia para hablar en ninguna materia, por que a cualquiera que quiera contravenir a sus dictámenes luego amenaza con sus facultades; con su caudal (que lo tiene) y su valimiento".¹⁵⁵

Y como Don Sebastián reconoce que la mayor parte de los regidores eran pobres, "...por no experimentar una bejación luego rendimos nuestros privilegios a su arbitrio, benerando sus dictámenes [los de Nicolás Patrón] como evangelios".¹⁵⁶ Más aún, Don Sebastián le expresaba al Gobernador que si se tomara la molestia de leer los Acuerdos del Cabildo en oportunidad de elecciones tomaría conciencia de "...la ninguna libertad que tenemos los regidores de hablar en los cabildos en cumplimiento de nuestras obligaciones".¹⁵⁷ Un año más tarde, en octubre de 1758, Melchor de Rojas y Aranda, le expresaba al Gobernador, confirmando lo señalado por Don Sebastián Casajús, que

"...aquí no se vé más ley ni razón que la pasión de los que mandan, aunque sea contra toda razón, ni ai quien se atreva a hablar desto, porque todos están poseídos del miedo, y callados pasan por tantas injusticias".¹⁵⁸

Más aún, si alguno se atrevía a expresar en forma independiente alguna opinión "...lo tratan de sedicioso y alborotador, y lo cojen entre ojos, y lo tiran a acobardar".¹⁵⁹ Los vecinos honrados que huían de esta realidad "...andan los más por sus chacras, y no se atreven a visitarse unos a otros, por luego que los ven juntos empiezan [las autoridades] a maliciar de lo que hablan".¹⁶⁰ Por último, lo que más le dolía al autor (Rojas Aranda) del oficio,

"...que dos o tres foráneos [Acosta, Patrón, y Lagraña] que se han avecindado aquí, sólo porque tienen cuatro pesos se han aunado contra los pobres vecinos, y los tienen arruinados, sin atreverse a hablar nada en su favor por temor de que los coxan por enemigos".¹⁶¹

Finalmente, con motivo de estas protestas y del fiasco que significó la impugnación de Xavier Solís, Nicolás Patrón decidió retirarse del ruedo político, no sin antes tratar de mudar el mando en su cuñado Ziprián de Lagraña. Al cabo de dos años, en 1760, al elegir el Alcalde de Primer Voto Ignacio de Soto, aliado de la Casa de Zamudio, a su concuñado José Ignacio Cabral, como su sucesor, fué impugnado por Pedro Bautista y Sebastián Casajús, padre e hijo.¹⁶² La impugnación se fundaba en hallarse tanto Cabral como Soto incurso en la prohibición de la Ley 5, Título 10, Libro 4 de la Novísima Recopilación, por estar casados con dos hermanas.¹⁶³ Sin embargo, y pese a no haber sacado Cabral la mayoría, y haber ganado Bartolomé de Quiroga,¹⁶⁴ el Teniente Gobernador Bernardo López confirmó a Cabral, "...por concurrir en el sujeto todas las prendas y requisitos necesarios, de pacífico, desinteresado e imparcial".¹⁶⁵ Amén de las virtudes personales que adornaban al elegido, López alegaba que no sólo la epiqueia,¹⁶⁶ permitía la elección mencionada, sino también las

"...circunstancias presentes de la quietud, y paz pública, que se debe anteponer a cualesquiera motivo o causa, maiormente no siendo la Ley con expresada nulidad, sino instructiva, pues, si el soberano se hallara enterado de los motivos, que me han inducido para la confirmación, no dudo lo tendría a bien".¹⁶⁷

Pedro Bautista y Sebastián de Casajús estaban ciertos que el propio Cabral, quien por otro lado era el tío carnal del último,

"...desea que se prefiera al citado [Bartolomé de] Quiroga] en el oficio así por estar [Quiroga] casado con sobrina carnal mía, hija de su hermana, como por hallarse con avanzada edad y cargado de achaques habituales, particularmente el de los ojos que está casi ciego".¹⁶⁸

Por último, Casajús padre e hijo se lamentaban que el Teniente Gobernador López no sólo hubiere abandonado el principio de la pluralidad (mayoría) de votos "...que así en lo eclesiástico y secular como en lo político y militar hace elección canónica", sino que tolerara la violación de la ley citada,

"...con que se abrirá la puerta para que en lo sucesivo aia exemplar que sirva de pretesto para establecerse en el particular una perjudicialísima irrupción o corruptela, de modo que debiendo ser esta especie de oficios Añales bendrán a haserse vitalicios y hereditarios en esta o en la otra Casa o familia, y el quererlo interrumpir será levantar una escandalosa quimera".¹⁶⁹

De todas maneras, las prácticas centralizadoras Borbónicas desplegadas en Corrientes no lograron desplazar del poder comunal a la antigua oligarquía pro-jesuita. Después de la Rebelión de los Comuneros de Corrientes,¹⁷⁰ acontecida en octubre de 1764, no obstante los esfuerzos de los anti-jesuitas, el Cabildo fué copado por los ajesuitados encabezados por Nicolás Patrón y Centellas, y su concuñado el más luego Familiar del Santo Oficio de la Inquisición Ziprián de Lagraña (ver Cuadro CRR-III).¹⁷¹

Más adelante, en oportunidad de las elecciones de 1771, habiendo los primos hermanos políticos Martín González de Orduña y Juan García de Cossio,¹⁷² miembros del clan de los Zamudio, elegido para Alcalde de primer voto a León Martínez de Ybarra y Acosta,¹⁷³ Sebastián de Casajús impugnó la elección en razón de ser sus mujeres primas hermanas carnales. Sin embargo, Orduña refutó dicha impugnación alegando que mal podía el Teniente Gobernador de Corrientes regular el litigio, por ser el impugnador Sebastián de Casajús su hermano carnal.¹⁷⁴ Tres años más tarde, en 1774, un prosélito de Patrón, que fuera el primer poeta correntino, el Alcalde Juan Antonio de Lafuente,¹⁷⁵ recusó la candidatura de Juan Estéban Martínez al empleo de Alguacil Mayor.¹⁷⁶ Si bien la fuente no aclara el motivo de la recusación, la circunstancia de ser Martínez --como se puede observar en el Cuadro CRR-II-- casado con Francisca Hidalgo Casajús, una hija del que fuera en 1750 el Alcalde Ordinario Alonso Hidalgo Viera y Torres,¹⁷⁷ yerno a su vez del que había sido el caudillo anti-jesuita Pedro Bautista Casajús, explicaría sobradamente dicha motivación.

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables conflictos de nepotismo suscitados en los Cabildos de Mendoza, San Juan, Santa Fé y Corrientes, de fines del siglo XVIII aquí relatados, lo que determinaba que estos Cabildos coloniales estuvieran controlados por un acentuado localismo de minorías oligárquicas no fué la naturaleza patrimonialista del estado colonial, manifestada en la multitudinaria subasta de oficios públicos, y sus consiguientes renunciaciones, sino la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos dominantes. Por predominar en las sociedades correspondientes a estos Cabildos una estructura familiar agnaticia, el nepotismo que en ellas se practicaba se asemejaba más al de un nepotismo lineal o vertical, que no atravesaba la red de instituciones políticas, que al de un nepotismo horizontal.

NOTAS

¹ Santiago del Estero contaba con una población de 128 varones españoles adultos casados, sobre un total de 318 varones adultos, o el 40,25%. La Rioja contaba con 288 varones españoles adultos casados, sobre un total de 772 adultos varones, o el 37,30%. Tucumán contaba con 384 varones españoles adultos casados, sobre un total de 1158 varones adultos, o el 33,16%. La ciudad de Córdoba contaba con 700 varones españoles adultos casados, sobre un total de 3459 adultos varones, o el 20,23%. Jujuy contaba con 126 varones españoles adultos casados, sobre un total de 644 varones adultos, o el 19,56%. La ciudad de Salta, contaba con 594 varones españoles adultos casados, sobre un total de 3.427 adultos varones, o el 17,33%. Por último, Catamarca contaba con una población de 300 varones españoles adultos casados sobre un total de 2139 varones adultos, o el 14%.

² En Potosí, en oportunidad del litigio sobre la testamentaria del Coronel José de Andrés Sanz, el Dr. Pedro Vicente Cañete y Domínguez manifestaba que para combatir el nepotismo no era necesario que su sobrino carnal el Dr. José María de Lara y Villanueva Domínguez fuese el abogado de la causa, pues "...ha sido en todos tiempos tan imparcial mi Ministerio en la administración de Justicia, que haciendo de Juez en negocios propios de Parientes míos muy cercanos he sabido dar al Mundo en su misma condenación el testimonio más perentorio de que la sangre no ha tenido fuerza jamás en mi corazón contra la Justicia y los mismos litigantes contrarios han recibido en estos mis heroicos desprendimientos de la carne el cambio de la confianza con que se sometieron a mis juicios" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.32, Exp.926, fs.19). El parentesco del Dr. Lara con Cañete se derivaba de "...Dn Juan José Domínguez mi Abuelo, y de Da Juana Domínguez prima hermana de este y Visabuela de aquel [Lara]: y contando los grados colaterales por donde nos unimos, resulta que hallandome yo en cuarto grado de consanguinidad con Da. Luisa Villanueva Madre de dho Dr. [Lara] viene a ser mi sobrino en quinto grado dentro de una computación donde no alcanza ya la Providencia de la Ley. Con que siendo constante por esta regla que yo pudiera ser Juez balidamente en las causas propias que tubiese el Dr. Lara como Parte, debe ser mucho menor el embarazo para serlo en aquellas que el intervenga como mero Abogado" (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.32, Exp.926, fs.28v. y 29).

³ Acerca de esta familia colonial, ver Klein (1985).

⁴ Archivo General de la Nación (AGN), Sala IX, Hacienda, Leg.9, Exp.169.

⁵ *Ibidem*.

⁶ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 240.

⁷ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 240.

⁸ Padre del que fuera Presidente de la República Don Santiago Derqui.

⁹ Dionicio de Villafañe y Luna al Alcalde Ordinario de Primer Voto Don Andres Herrera y Sánchez, La Rioja, 28-V-1810 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 240, Exp. 41, fs. 16.).

¹⁰ Casado éste último con Maria Soaje y Dávila, hija de José Fermín Soaje y de Manuela Dávila (Luque Colombes, 1946; Ruiz Moreno, 1982; y Moyano Aliaga, 1983).

¹¹ casado con María de la Concepción del Moral.

¹² Casado con María Josefa de Villafañe y Carreño, hija del Alcalde Mayor Provincial y Presidente de la Real Junta de Temporalidades Juan Manuel Villafañe y de María del Rosario Carreño y Bazán de Cabrera, con cuñado del Maestro de Postas Justo Pastor Gordillo, hijo de Inocencio Gordillo (Serrano Redonnet, 1944, 61; y AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1).

¹³ Probablemente el antecesor de Joaquín Gonsález Gordillo, el padre del historiador y político Joaquín V. Gonsález.

¹⁴ Español, casado con Francisca Solana San Román y Castro, padre del que fuera Gobernador de La Rioja en 1841 y 1849 Manuel Vicente Bustos, y abuelo del que fuera, a partir del 80, tres veces Gobernador de La Rioja, Francisco Vicente Bustos.

¹⁵ AGN, Sala IX, Interior, Leg. 35, Exp. 8.

¹⁶ Fué designado Mercado Administrador de Tabacos de La Rioja por el Coronel Manuel Castro, Administrador General de la Renta de Tabaco y Naipes de la Gobernación de Salta del Tucumán. Su persona parece haber sido también una de las causas de la quiebra póstuma de Castro (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.24, Exp. 590, fs.39).

¹⁷ Nacido en Asunción en 1725 de una unión adulterina del General Andrés Ortíz de Ocampo con una mestiza paraguaya de apellido Ysfrán. Llevado a La Rioja y criado por su padre, el noble bastardo fué educado como un hijo más, alcanzando una cultura inusual en La Rioja de ese tiempo, lo que le permitió desarrollar especialmente su vena poética, con la cual satirizaba a sus adversarios y defendía múltiples causas perdidas. Alcanzó en 1780 el cargo de Alcalde Ordinario en el cabildo, y el grado de Maestre de Campo en las milicias locales.

¹⁸ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 243v.

¹⁹ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 246v.

²⁰ Hijo de Juan José de Villafañe y Tejeda, y de Petronila Dávila, hermano del Comandante de Milicias Juan José de Villafañe y Dávila, y cuñado de Andrés Ortíz de Ocampo. Casó con María Antonia de Luna (Serrano Redonnet, 1944; y Cutolo, VII).

²¹ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 247.

²² AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v.

²³ A ello respondió Mercado, que "...los soldados no podían seguir su destino por falta de cabalgaduras, los juegos fueron con el Cap. Pedro de Villegas y otro oficial, las bebidas que llevó fueron dos cargas de vino y aguardiente y la venta que hizo dellas fué no sólo entre los soldados si también entre otros independientes que ocurrían a comprarle, lo cual sucedió cuando Mercado recibió el orden para regresarse en que ya no necesitaba de aquellos caldos de que se había proveído para su gasto" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v).

²⁴ Hijo de Juan José de Villafañe y Tejeda y de Petronila Dávila (Serrano Redonnet, 1979, 186). Cuñado de Andrés Nicolás Ortíz de Ocampo, y tío de los hermanos Francisco Antonio, Domingo, y Juan Amaranto Ortíz de Ocampo.

²⁵ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v.

²⁶ Ver Bazán, 1966, 1979.

²⁷ para 1802 Mendoza figuraba tercera en el ranking de mestizaje, pues contaba con 4.092 mestizos, 1.841 negros y mulatos esclavos, 2.301 criados libres, y 5.148 españoles, por sobre un total de 13.382 personas (información publicada por Caillet-Bois, 1930).

²⁸ Con referencia a las tres ciudades de Cuyo, Sierra (1960) les asigna en 1777 -sobre la base de un documento del Marqués de Sobremonte que concuerda con las cifras dadas a conocer por José Torre Revello- una población de 23.411 habitantes, de los cuales 9.834 eran blancos, o el 43%; 5.487 mestizos, o el 20%; 4.168 indios empadronados, o el 17%; y 3.922 negros y mulatos, o el 16%. A un promedio de 5 habitantes blancos por unidad doméstica podemos calcular entonces aproximadamente la existencia de 1966 vecinos. A la jurisdicción de San Luis correspondían 6.956 habitantes, de los cuales 3.708 eran blancos, o el 50%; 1.388 mestizos, o el 20%; y 1.860 indios y negros, o el 25%; 3.684 en la ciudad de San Luis propiamente dicha, de los cuales 1.908 eran blancos, o el 51%; y 987 mestizos, o el 27%; y 3.272 en Renca, de los cuales 1.800 eran blancos, o el 55%; y 401 mestizos, o el 12% (Sierra, 1956, IV, 48; y Díaz Couselo, 1985, 265).

²⁹ para Jocelyn-Holt Letelier (1992) el ascenso de Buenos Aires "permitió que Chile ejerciera un papel intermediario en un esquema triangular clásico en virtud del cual el tercero más débil logra cierta autonomía oponiéndose a los otros dos más fuertes" (Jocelyn-Holt Letelier, 1992, 53).

³⁰ Ver Mansilla, 1941.

³¹ Comadrán Ruiz, 1962, 39. En esa época Videla mantuvo estrechos vínculos comerciales con Domingo Basavilbaso (AGN, Protocolos, R.2-1766-fs.313v.).

³² hijo de Miguel de Videla y Pardo Parraguéz y de la santafecina Antonia de Aguiar y Montiel; casado en primeras nupcias con su prima Petrona Correa de Súa, hija de Francisco Correa de Súa y de Maria Pardo Parraguéz y Videla, padres de Maria Josefa Videla, mujer de Raymundo Pelliza Morales, y del R.P. Ramón Videla S.J., jesuita expulso; y en segundas nupcias con Catalina Chacón (Calvo, IV, 334; Verdaguer, 1931-32, 440 y 485; Mansilla, 1941, 144; y Fontana, 1962, 80). Francisco Videla y Aguiar era asimismo primo hermano de Clara Isabel Escalante Videla, mujer de Francisco Corbalán de Castilla, y madre de los curas Luis, Antonio, Miguel Fermín y Juan Corvalán y Escalante, todos ellos jesuitas expulsos (Verdaguer, 1932, 440). Probablemente Don Francisco fué de filiación sarracena, partidario de los Jesuitas, por el hecho de tener un hijo y cuatro sobrinos Expulsos.

³³ hijo de Juan Bautista de la Reta y Landó y de María de Videla y Lucero de Tovar; marido de Antonia de Videla Salazar; padre del Pbro. José Eduardo de la Reta; y primo segundo de Francisco Videla y Aguiar (Calvo, IV, 333 y 29; Morales Guinazú, 1939, 275; y Verdaguer, 1931-32, 598).

³⁴ Acevedo, 1960, 85ss.; Martínez, 1962, 11-18; y Archivo Histórico de Mendoza, Judicial Civil, Documento No.115.

³⁵ Hijo de Antonio Corvalán de Castilla y Rocha y de Magdalena Arias de Molina y Videla; y suegro del Fiscal de la Real Audiencia de Chile Dr. José Perfecto de Salas, de Pedro Nolasco de

Correas y Villegas, de Juan Antonio Molina y Coria, de José Xavier Santander y Coria, de Manuel José de Godoy y Rojas, de Matías de Godoy Lima Melo, de María Manuela de Sotomayor y Videla, y de Carmen Martínez de Rozas y Correas (Calvo, I, 315; II, 361; y V, 176, y 184).

³⁶ Hijo de Marcos Martínez de Soto y Rozas y de Francisca López de Liñero y Torres, naturales de Regules; casado en 1746 con María Prudencia Correas y Villegas, hija de José Correas de Larrea y de Francisca Ruiz de Villegas; padre del Gobernador de Concepción y prócer de la Independencia de Chile, Juan Martínez de Rozas; y suegro de Francisco de Borja Corvalán y Chirinos, del Alférez Real Miguel Téllez de Meneses, y de Tomás de Lima Melo y Jofré (Calvo, II, 377; IV, 110 y 350; y V, 185; y Comadrán, 1962, 47).

³⁷ Hijo de José de Sotomayor y Dávila, y de María Villafañe y Tejeda, casado en 1744 con Isabel Videla y Zalazar, padres de Juana Sotomayor, mujer de Félix Correas, de Manuela Sotomayor, mujer de Domingo Corvalán, de Ventura Sotomayor, mujer de José Clemente Benegas, de Petronila Sotomayor, mujer de Isidoro Sáinz de la Maza, y de Josefa Sotomayor, mujer de Francisco Xavier de Molina (Comadrán, 1962, 45). Corregidor de la Ciudad de Mendoza, en 1778 pide cargo de Coronel de Milicias (AGN, Solicitudes Militares, Libro 4, f.269-271).

³⁸ Acevedo, 1960, 85ss.; Martínez, 1962, 11-18; y Archivo Histórico de Mendoza, Judicial Civil, Documento No.115.

³⁹ hijo de Miguel de Videla y Pardo Parraguéz y de la santafecina Antonia de Aguiar y Montiel; casado en primeras nupcias con su prima Petrona Correa de Saa, hija de Francisco Correa de Saa y de María Pardo Parraguéz y Videla; y en segundas nupcias con Catalina Chacón; y padre del R.P. Ramón Videla S.J., fraile jesuita expulso (Calvo, IV, 334; y Verdaguer, 1931-1932, 440 y 485).

⁴⁰ marido de Antonia de Videla y padre del Pbro. José Eduardo de la Reta (Morales Guinazú, 1939, 275; y Verdaguer, 1931-32, 598). De la obra de Morales Guinazú no surge que tipo de parentesco mantenía con Francisco Videla y Aguiar.

⁴¹ AGN, División Colonia, Criminales, Leg.13, Exp.6.

⁴² Casa con María Prudencia de Escalante. En 1779 representa contra el Alguacil Mayor Fernando Güiralde y el Alcalde de Primer Voto de la ciudad de Mendoza Ramón Martínez de Rozas sobre abusos cometidos (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.8, Exp.123). El mismo año protestan por su actuación como Maestre de Campo (AGN, Hacienda, Leg.15, Exp.323). En 1790 Pedro José de la Cuadra le inicia demanda por cobro de pesos (AGN, Comerciales, Leg.15, Exp.14). En 1791 pide la suma pagada por cinco cautivas (AGN, Guerra y Marina, Leg.17, Exp.30).

⁴³ Hijo de José Xavier de Santander y Coria y de Andrea Corvalán de Castilla y Chirinos de Posadas, sobrino político del Dr. José Perfecto de Salas, de Pedro Nolasco de Correas y Villegas, de Juan Antonio de Molina y Coria, de Manuel José de Godoy y Rojas, y de Matías de Godoy Lima y Melo; y cuñado de Ignacio Domingo Corvalán Escalante (Calvo, I, 315; II, 361; y V, 176, y 184).

⁴⁴ Cuando en 1792, en Santa Fé, Francisco Antonio Candioti fué elegido Alcalde, Juan Francisco Roldán manifestaba que "...aunque Maestro de Postas, no sirve personalmente en este empleo, sino que

como hombre de sobradas facultades, lo sirve por medio de sus dependientes y domésticos" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.31, Exp.11).

⁴⁵ AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.9, Exp.3, fs.45.

⁴⁶ Marido de Francisca de Borja Corvalán y Chirinos de Posadas, hija de Juan Luis Corvalán de Castilla y de Angela Chirinos de Posada.

⁴⁷ Archivo Histórico de Mendoza, Civil-Epoca Colonial, Carpeta No.17, Documento No.7).

⁴⁸ Hijo de Pedro Güiralde y Rosa Molina, suegro del Alguacil Mayor Rafael Vargas. Sostuvo un litigio con sus propios padres sobre el cobro de una escritura en setiembre de 1780 (Archivo Histórico de Mendoza, Judicial Civil, Documento No.35).

⁴⁹ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.148, Exp.5, fs.44.

⁵⁰ Hijo de Francisco Corvalán de Castilla y Clara Escalante Videla; cuñado de Hilarión Almandóz Puebla, de Onofre Lemos Ladrón de Guevara y de Gaspar Serrano; marido de Manuela Mayorga Molina; y suegro de Marcelino Videla Godoy y Clemente Segura Gamboa.

⁵¹ Bautizado en septiembre de 1743, hijo del Maestre de Campo Juan Luis Corbalán de Castilla y de Angela Chirinos de Posada, casado en 1768 con María Manuela de Sotomayor y Videla (Calvo, V, 176). Padre de Eugenio, Victoriano, y Gabino Corvalán y Sotomayor.

⁵² Integrado por Domingo García, Clemente Godoy, Isidro Sáenz de la Maza, Manuel Ochoa, Juan Miguel García, Joaquín Sosa y Juan Manuel Díaz Barroso (Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta 18, Documento 4). A Juan Manuel Díaz Barroso la Comandancia Militar de Mendoza lo demanda por injurias en 1803 (AGN, Criminales, Leg.5, Exp.8). Manuel Ochoa demanda en 1793 a Julián Galvez por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.14, Exp.15). Isidro Sáinz de la Maza casó con Petronila Sotomayor, hija de José Sebastián de Sotomayor y Villafañe y de Isabel Videla y Zalazar, y era concuñado de Félix Correas, Domingo Corbalán, Manuel Fernández de Aranda, José Clemente Benegas, y Francisco Xavier de Molina (Comadrán, 1962, 45). Clemente Godoy Videla era nacido en 1760; hijo de Nicolás Godoy y del Pozo y de Magdalena Videla y Martínez de la Peña; casado con Nicolasa Cruz del Castillo; padre del prócer Tomás Godoy Cruz; y suegro de José Villanueva.

⁵³ Integrado por Antonio Lemos, Melchor Videla, Sebastián Baldor, José Obredor, Pablo Salia, Mateo Delgado, Justo Alvarado, y Nicolás Plaza (Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta 18, Documento 4). Melchor Videla era hijo de José Leandro Videla y Correas de Larrea, b.1754, y de Felipa Ortiz Gamboa, desposados en 1780; marido de Francisca Cabero; y padre del Coronel Juan de la Cruz Videla.

⁵⁴ Natural de Portugal, prisionero de la Colonia del Sacramento en 1776, y confinado por el Gobernador Cevallos en Mendoza (Sosa Morales, 1965, 11). Alférez Real en 1808 (Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta Carpeta 18, Documento 8). Casado en 1786 con María Juana Martínez de Rozas y Correas, hija del Alcalde y Procurador de Mendoza Maestre de Campo Juan

Martínez de Rozas y López Piñero, nacido en Nogales, Valle de Soba, y de María Prudencia Correas de Larrea, y cuñado de Francisco de Borja Corvalán de Castilla, y de Tomás de Lima Melo (Calvo, IV, 110; y Morales Guinazú, 1939, 286).

⁵⁵ AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.26v.

⁵⁶ AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.26v.

⁵⁷ Alguacil Mayor, casó con Tomasa Güiraldez, hija de Fernando Güiraldez, Alguacil Mayor del Cabildo de Mendoza en 1777. Fueron padres de Isabel Bargas Güiraldez, mujer del Coronel José Félix Aldao, hijo del Comandante Francisco de Esquivel y Aldao y de María del Carmen Anzorena y Nieto, y de Pedro Bargas, el primer agente de espionaje del Ejército de los Andes, marido de Rosa Corvalán (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.148, Exp. 5, fs.38; Morales Guinazú, 1939, 7; y Cutolo, I, 327). En 1800 Rafael Bargas celebra una compañía con Bernardo Claris (AGN, Protocolos, Reg.73, 1800, fs.45). El mismo año demanda por calumnias y difamación a Pedro Tuella (AGN, Interior, Leg.49, Exp.18).

⁵⁸ hijo del Maestre de Campo Juan Gregorio de Molina y Vasconcelos y de Josefa Ventura de Videla, y hermano y suegro de Manuel Ignacio de Molina (Calvo, IV, 351). Casado con Josefa Sotomayor Videla; hija del Corregidor José Sebastián de Sotomayor y Villafañe y de Isabel Videla Salazar; cuñada de Domingo Rege Corvalán, Isidro Sáinz de la Maza, Félix Correas, y José Clemente Benegas; y padre del que fuera Gobernador de Mendoza Pedro Molina Sotomayor (Morales Guinazú, 1939, 210; y Comadrán, 1962, 45).

⁵⁹ marido de Petronila Mayorga (Fuenzalida Grandón, 1972, 625); y probablemente hijo de Vicente José Cavero y de una Videla.

⁶⁰ AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.26v.

⁶¹ *Ibídem*, fs.26v.

⁶² Regidor y Alcalde. Nacido por 1750, hijo de Francisco Fernández de Maradona, natural de San Pedro de Abanto, y de Francisca Arias de Molina y Jofré, y nieto materno de Bernardo Arias de Molina y Videla y de Catalina Jofré de la Barreda y Bravo de Montenegro. Era hermano de Juana Fernández de Maradona, mujer de José Luciano Fernández de Balmaceda; de Pedro Fernández de Maradona, marido de Teresa Blanco Echegaray, hija de Tomás Blanco Jofré y de Inés Echegaray Quiroga; y de Francisco Fernández de Maradona, casado con Petrona Sánchez del Carril, hija de Juan José Sánchez de Loria Moyano y de Francisca de Borja Vásquez del Carril. José Ignacio Fernández de Maradona casó con Paula Echegaray Cano, hija de Miguel de Echegaray y Quiroga y de Elena Cano de Carvajal y Quiroga Sarmiento, desposados estos últimos en junio de 1751. Fueron padres de Timoteo y José Clemente Fernández de Maradona (Zinny, IV, 136-137; Calvo, II, 48; y V, 145 y 249; y Cutolo, III, 60)

⁶³ Hijos de Francisco Flores, vecino de Córdoba.

⁶⁴ Recurso de Regidores de San Juan al Gobernador de Córdoba, Córdoba, 15-IV-1808 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, 1808, Sala IX, 6-1-4).

⁶⁵ *Ibídem*. El hueco o interregno forzoso de los cargos capitulares y la limitación anual del término de las alcaldías procedían del derecho romano. Según Patterson (1993), para asegurarse de que participaran la mayor cantidad posible de miembros de las clases superiores, los romanos limitaban rígidamente la duración de los altos cargos (Hopkins, 1974, 103-10; y Badian 1972, cap.3; citados por Patterson, 1993, 310).

⁶⁶ Hijo del Alcalde Salvador del Carril, nacido en Galicia, y de María Josefa Sánchez de Loria y Jofré. Fue padre del célebre político y congresista Salvador María del Carril, enemigo acérrimo de la facción "apostólica", continuadora de la facción pelucona, liderada por los hermanos Videla Lima (Carte, 1958; y Mansilla, 1941, I, 186). María Josefa Sánchez de Loria era hija de Vicente Sánchez de Loria, y de Juana Josefa Jofré y Bravo de Montenegro, y nieta materna del Maestre de Campo Phelipe Jofré y Quiroga y de Juana Bravo de Montenegro (Calvo, II, 48).

⁶⁷ Hijo de Fernando Tadeo de la Rosa y de Rosa de la Torre y Torres, casó con Constanza del Carril y Salinas, hija de Juan Vásquez del Carril y de Francisca Salinas Cabrera (Calvo, IV, 327).

⁶⁸ Hijo del Encomendero y Maestre de Campo Remigio Albarracín Balmaceda, y de Josefa Juana Irrazábal y Sánchez de Loria, y sobrino de Fray Jacinto Irrazábal Sánchez de Loria. Este último donó a su sobrino político Remigio Albarracín su biblioteca (Furlong, 1944, 70). Casó Albarracín con Justina de Allende Quiroga Sarmiento (Calvo, V, 28).

⁶⁹ Hijo de Juan Miguel de Oro y Cossio y de María Elena Albarracín. Fué agente comercial de Martín Alzaga, y padre del prócer Fr. Justo Santa María de Oro, quien a su vez era tío de Domingo Faustino Sarmiento (Cutolo, V, 190; y Wildner-Fox, 1966). Su padre fué primo de Clara de la Rosa y Oro, mujer de Pedro Carril; tío de José Antonio Godoy Oro, marido de Francisca Regis de la Rosa, designado por el Real Consulado diputado en la ciudad de San Juan para el bienio de 1804-06, y autor de un célebre Informe acerca de la realidad económica sanjuanina (Tjarks, 1957).

⁷⁰ Hijo de Juan de Echegaray y Quiróz y de María de Laciari; marido de su prima Josefa Gabriela Riveros Echegaray; y cuñado de Francisco Niño Ladrón de Guevara, natural del Puerto de Santa María, y de Tomás Miguel Blanco Basurco, natural de Buenos Aires (Silva Argañaraz, 1991, 5).

⁷¹ Recurso de Regidores de San Juan al Gobernador de Córdoba, Córdoba, 15-IV-1808 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, 1808, Sala IX, 6-1-4).

⁷² *Ibídem*.

⁷³ *Ibídem*.

⁷⁴ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 88, Exp. 3, fs.25.

⁷⁵ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 88, Exp.3, fs. 26.

⁷⁶ *Ibídem*, fs. 62v.

⁷⁷ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 88, Exp.3, fs. 62v.

⁷⁸ Duodécimo hijo de Jacinto Bernardo de Aldao y de María Teresa Rendón y Lariz; contrajo

primeras nupcias con la cordobesa María Teresa Ordóñez, hija de Francisco Xavier Ordóñez y de Mariana de Ledesma Valderrama, y segundas nupcias con Leonor Candioti, hija de Antonio Candioti y Múxica, y de María Andrea de Zeballos (Crespo Naón, 1983, 60; y Fernández de Burzaco, I, 61-62; y V, 253). Fué hermano menor del Secretario del Virrey Vértiz, el Dr. Antonio Basilio Aldao y Rendón; cuñado del poeta Juan Manuel de Labardén y de Manuel de la Quintana; y padre en su primer matrimonio de Félix Aldao y Ordóñez, casado con Andrea Duarte Neves, hija de Juan Domingo Duarte Neves y de Antonia Lacoizqueta; y del Regidor Andrés Aldao y Ordóñez, casado en 1801 con Martina Igarzábal, hija de Domingo Igarzábal Sarmiento, y de María Josefa de Echeverría y Ordóñez. En su segundo matrimonio fué padre del que fuera Guerrero de la Independencia Juan Francisco Aldao y Candioti, soltero; del Alcalde de segundo voto de Santa Fé en 1810 Dr. Pedro Aldao Candioti, casado con Joaquina Rodríguez del Fresno, hija de Manuel Rodríguez, natural de Galicia, y de Francisca del Fresno, nacida en Galicia; y del que fuera Gobernador de Santa Fé en 1818 Luis Aldao Candioti, casado con su prima Leonor Candioti, abuelo del Diputado Nacional y Director General de Correos y Telégrafos Carlos A. Aldao Roseti (Calvo, I, 40).

⁷⁹ AGN, División Colonia, Interior, Leg.9, Exp.4.

⁸⁰ Casado con Paula de Izca y Aranibar (Crespo Naón, 1983, 50 y 78).

⁸¹ Hijo de Teodoro Candioti, oriundo de Venecia, y de Leonor Mugica. Había logrado demostrar su dedicación al comercio, pues entre 1744 y 1751 había realizado siete viajes al puerto de Buenos Aires con el objeto de comerciar con Pedro de Lea por valor de \$25.378 (AGN, Protocolos, Reg.2, 1744, fs.243; Reg.2, 1745, fs.167; Reg.4, 1749, fs. 239; Reg.1, 1750, fs.101; Reg.4, 1751, fs.189v.; Reg.5, 1751, fs.300; y Reg.2, 1751, fs.461).

⁸² Sargento Mayor y Regidor Propietario de Santa Fé. Hijo de Francisco Martínez del Monje, natural de Santo Domingo de la Calzada, Castilla la Vieja, y de Isabel de Pessoa y Figueroa (Probst, 1946, 13; y Crespo Naón, 1983, 50). Casó en primeras nupcias con María de Rojas y Aranda, natural de Asunción del Paraguay, hija del Capitan Isidro de Rojas y Aranda y de María Servin, y segundas nupcias con Dominga de Mendieta y Zárate, santafesina, hija del Sargento Mayor Pedro de Mendieta y Zárate y de María Alvarez del Castillo (Calvo, 1988, 63).

⁸³ Hijo del Teniente de Gobernador Francisco de Vera Muxica y de Luisa Salguero de Torres Cabrera, casado con Juana Ventura López Pintado (Crespo Naón, 1983, 56).

⁸⁴ Casado con Antonia Vera Mujica, hija de Francisco Vera-Mujica, bautizado en Santa Fé en abril de 1675, Alcalde de Santa Fé en 1700, Procurador en 1703, y Regidor Perpetuo en 1708. Francisco Vera Mujica era casado en primeras nupcias en Córdoba con Luisa de Torres, hija de Pedro de Torres, nacido en Jerez de la Frontera, y de Luisa Isabel Salguero, y en segundas nupcias con su cuñada María Josefa Vera-Mujica, viuda de Manuel Francisco de Gaete. Urizar era cuñado de Don Francisco Antonio Vera-Mujica, casado con Juana Ventura López Pintado (Espejo, 1967, 839).

⁸⁵ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-6, Exp. 2, fs. 309v. Francisca Martínez del Monje y su marido el Sargento Mayor Ignacio de Barrenechea eran suegros de José Vicente Zabala, Ignacio Crespo, y Cayetano Echagüe (Crespo Naón, 1983, 62). María Martínez del Monje, hija de Francisco, estaba casada con el Maestre de Campo Juan de Lacoizqueta (Probst, 1946, 13; y Calvo, 1988, 60).

⁸⁶ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-6, Exp. 2, fs. 312v.

⁸⁷ Idem.

⁸⁸ Idem.

⁸⁹ Idem.

⁹⁰ Idem.

⁹¹ Hijo del Maestre de Campo Manuel Maciel, natural de Corrientes, casado con Isidora Fernández de Valdivieso; padres de Juana Maciel, mujer de Nicolás del Campo, sobrino del Virrey Loreto; y hermano del R.P. Juan Baltasar Maziél, de María Isabel Maciel, que casó con Melchor de Echagüe y Andía; de Dominga Maciel, que casó con José Fernández Valdivieso; y de Domingo Maciel, quién casó primero con Ventura del Casal, en segundas nupcias con su sobrina Antonia Maciel y Valdivieso, y en terceras nupcias con Josefa López Pintado (Azarola Gil, 1940, 134-136; y Crespo Naón, 1983, 73).

⁹² Cervera, 1979, 529.

⁹³ Hijo del Regidor Capitán José Crespo y de Casilda Carvallo y Aguilera del Pino, y marido de Polinesia Rodríguez y Lencinas (Crespo Naón, 1983, 63).

⁹⁴ AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.1, fs.5.

⁹⁵ Casado con Antonia de Vera y Mújica.

⁹⁶ Alcalde de primer voto en 1779, 1798, 1803, y 1804, y Recaudador de Propios en 1793 (AGN, Hacienda, Leg.67, Exp.1800). Fué bautizado en Octubre de 1739, hijo del Teniente Gobernador Francisco Xavier de Echagüe y Andía, y de Josefa de Gaete, y casado en primeras nupcias con María Josefa de Vera Muxica, hija de Francisco de Vera Muxica y de Juana Ventura López Pintado, y en segundas nupcias con Bonifacia Carballo, hija de José Carballo y de Sebastiana Ruiz de Arellano. Era hermano del Teniente Gobernador Melchor de Echagüe y Andía, el que apoyaba a los Mocobíes contra los Abipones, y cuñado de los comerciantes Jose de Uriarte, Gabriel Francisco de Lassaga, y Simón de Abechuco y Retana (Crespo Naón, 1983, 66). En 1789 interviene en el juicio de disenso de su sobrino José G. Lassaga con Juana Isabel Medina (AGN, Tribunales, Leg.182, Exp.2).

⁹⁷ AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.1, fs.113v.

⁹⁸ Hijos o nietos del que fuera en 1700 Teniente Gobernador de Santa Fé Tomás de Hereñú Arteaga y Echeverría, natural de Guipúzcoa, y de su mujer María Magdalena de Arbestain y del Peso (Crespo Naón, 1983, 50).

⁹⁹ AGN, División Colonia, Interior, Leg.9, Exp.4.

¹⁰⁰ natural del Valle y Obispado de Santander, hijo de Manuel Diego Pacheco y de Francisca Gómez Pacheco, marido de María Teresa de la Concha, padre del General Angel Pacheco, y suegro de

José Julián Arriola (FB, V, 103; y JR, 1989, ítem 7011). No estoy seguro si en realidad se trata del Dr. Lorenzo Antonio Pacheco, teólogo y abogado de la Real Audiencia de Charcas.

¹⁰¹ Nacido en Santurce, Vizcaya, hijo de Diego Ventura de la Elguera y de María Josefa de Ciancas, casado en 1794 con María del Carmen Velarde y Cabot, hija de Pedro de Velarde y Calderón, bautizado en Conchillos, Torre la Vega, Santander, y de Trinidad Cabot y García (Calvo, I, 369; e Ibarguren, 1961, 134-136). En 1775 mantuvo con su socio Marcos Salinas, vecino del Paraguay, un litigio sobre cuentas de su comercio en yerba (AGN, Tribunales, Leg.S-6, Exp.19). En 1805 demanda por cobro de pesos a Juan J. Zapiola (Guillamondegui, 1962).

¹⁰² AGN, División Colonia, Interior, Leg.9, Exp.4.

¹⁰³ Idem.

¹⁰⁴ Idem.

¹⁰⁵ Idem.

¹⁰⁶ Idem.

¹⁰⁷ Coronel de Milicias y Teniente Gobernador, hijo del Teniente Gobernador Francisco Xavier de Echagüe y Andía, y de Josefa de Gaete, y hermano de Lucas de Echagüe y Andía. Era casado con Isabel Maciel, hija del Maestre de Campo Baltasar Maciel y de Rosa de Lacoizqueta; padre de Juan Francisco, Cayetano, y Narciso de Echagüe y Maciel; y hermano de Joaquín Maciel (Crespo Naón, 1983, 67).

¹⁰⁸ Hijo del Teniente Gobernador Francisco de Vera Muxica y de Juana Ventura López Pintado, hermano de Petrona Vera, que casó con Juan José de Lezica, y de Rafaela Vera, casada con el Virrey Rafael del Pino (Crespo Naón, 1983, 56).

¹⁰⁹ AGN, División Colonia, Interior, Leg.9, Exp.4.

¹¹⁰ Ibídem.

¹¹¹ Ibídem.

¹¹² Ibídem.

¹¹³ Hijo de Antonio Candioti y Muxica y de María Andrea de Zevallos, casó en primeras nupcias con Petrona Zalazar, y en segundas nupcias con Juana Ramona de Larramendi, hija de José Teodoro de Larramendi y de Antonia Manso. Era Francisco Antonio Candioti cuñado de Juan Francisco Aldao, por ser este último casado con Leonor Candioti, suegro de José Urbano de Iriondo Narbarte, y consuegro de Agustín de Iriondo Alberdi (Crespo Naón, 1983, 63 y 68). En 1775 Amaro Rodríguez le inicia un juicio por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.R-14, Exp.28). Cuando en 1792, en Santa Fé, Francisco Antonio Candioti fué elegido Alcalde, Juan Francisco Roldán manifestaba que "...aunque Maestro de Postas, no sirve personalmente en este empleo, sino que como hombre de sobradas facultades, lo sirve por medio de sus dependientes y domésticos" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.31, Exp.11).

¹¹⁴ AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.12.

¹¹⁵ Contrajo primeras nupcias con la Cordobesa María Teresa Ordóñez, hija de Francisco Xavier Ordóñez y de Mariana de Ledesma Valderrama, y segundas nupcias con Leonor Candiotti, hija de Antonio Candiotti y Múxica, y de María Andrea de Zeballos (Crespo Naón, 1983, 60). Fué padre en su primer matrimonio de Félix Aldao y Ordóñez, casado con Andrea Duarte Neves, hija de Juan Domingo Duarte Neves y de Antonia Lacoizqueta; y del Regidor Andrés Aldao y Ordóñez, casado en 1801 con Martina Igarzábal, hija de Domingo Igarzábal Sarmiento, y de María Josefa de Echeverría y Ordóñez. En su segundo matrimonio fué padre del que fuera Guerrero de la Independencia Juan Francisco Aldao y Candiotti, soltero; del Alcalde de segundo voto de Santa Fé en 1810 Dr. Pedro Aldao Candiotti, casado con Joaquina Rodríguez del Fresno, hija de Manuel Rodríguez, natural de Galicia, y de Francisca del Fresno, nacida en Galicia; y del que fuera Gobernador de Santa Fé en 1818 Luis Aldao Candiotti, casado con su prima Leonor Candiotti, abuelo del Diputado Nacional y Director General de Correos y Telégrafos Carlos A. Aldao Roseti (Calvo, I, 40).

¹¹⁶ Natural de Lesaca, Pamplona, hijo de Gabriel de Lassaga y Barrenechea, y de Gracia de Gamboa y Eudara, sobrino de Martín de Gamboa, avecindado en Buenos Aires, y primo hermano de los hermanos Pedro Tomás y Martín Francisco de Larrechea. Casó en primeras nupcias con Francisca de Ziburu y Echagüe y Andía, y en segundas nupcias con la prima hermana de su primer mujer, Doña Francisca Xaviera de Echagüe y Andía, cuarta hija del Teniente Gobernador Francisco Javier de Echagüe y Andía y de Josefa de Gaete y Casal (Crespo Naón, 1983, 66 y 71).

¹¹⁷ Hijo del Teniente Gobernador Melchor de Echagüe y Andía y de Isabel Maciel, y casado con su prima hermana Rosa Maciel y Valdivieso (Crespo Naón, 1983, 67).

¹¹⁸ En 1758 Jose Cano le inicia demanda por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.C-7, Exp.19). En 1773 Manuel Acuña Neves pide rendición de cuentas por su administración (AGN, Tribunales, Leg. A-12, Exp.24). En 1774 demanda a Fernando Maseira y Luis Rodríguez Valdovinos por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.T-4, Exp.5). En 1788 demanda a Manuel Ferreyra Braga do Couto por incumplimiento de contrato (AGN, Tribunales, Leg.53, Exp.7).

¹¹⁹ Hijo de Pedro de Larramendi y de Francisca Arias de Cabrera, casado en 1771 con Antonia Manso, hija de Francisco Manso y de Anastasia de Aguirre, padres de Juana Ramona de Larramendi, mujer del Gobernador Francisco Antonio Candiotti (Crespo Naón, 1983, 70).

¹²⁰ Hijo de José Francisco Troncoso y de Catalina de Echagüe y Andía; hermano de Cecilia Catalina Troncoso y Echagüe, mujer de Manuel Arias, nat. de los Infantes, Galicia, y casado con Ana Inés de Mendieta y Díez de Andino; padre de María del Tránsito Troncoso y Echagüe, b.1782, mujer del catalán Mariano Comas y Senné, de Juana Troncoso, mujer del catalán Sebastián Puig, de Gregoria, casada con el murciano Julián Galvéz; y de María Ignacia Troncoso, casada con el catalán Quirce Pujato Vidoll; y conuñado de su primo hermano carnal Isidro Ignacio de Echagüe y Gaete (Crespo Naón, 1983, 76).

¹²¹ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730.

¹²² *Ibíd.*

¹²³ *Ibídem.*

¹²⁴ *Idem.*

¹²⁵ *Idem.*

¹²⁶ Hijo de Narciso Javier de Echagüe y Gaete, Alcalde entre 1752 y 1761, y de María Teresa Ruiz de Arellano, y casado con su prima hermana María Francisca de Lassaga, hija de Gabriel de Lassaga y de Francisca Xaviera de Echagüe (Crespo Naón, 1983, 66).

¹²⁷ Juan Francisco Roldán a Nicolás Arredondo, Santa Fé, 6-I-1791 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.30, Exp.30).

¹²⁸ *Idem.*

¹²⁹ Hijo de José Crespo y de Casilda Carballo y Aguilera del Pino, casó con María del Tránsito Zavala y Barrenechea, hija de José Vicente Zavala y de María Lucía de Barrenechea (Calvo, III, 213). Era Ignacio Crespo cuñado del Regidor José Antonio Fernández de Villamea, del Alcalde José Ventura de la Lastra, del comerciante Juan de Morlius, y de Pablo Chalabert o Gelabert (Crespo Naón, 1983, 64). Fué padre de Domingo Crespo, marido de Dolores Rodríguez del Fresno, y de Antonio Crespo, desposado en 1818 con Dolores Candioti Larramendi (Calvo, III, 213).

¹³⁰ Juan Francisco Roldán a Nicolás Arredondo, Santa Fé, 6-I-1791 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.30, Exp.30).

¹³¹ Casó con Manuela Obarrio Fernández (FB, 1986-90, III, 292).

¹³² Juan Francisco Roldán a Nicolás Arredondo, Santa Fé, 6-I-1791 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.30, Exp.30).

¹³³ *Idem.*

¹³⁴ AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.12.

¹³⁵ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.29, Exp.872.

¹³⁶ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.112, Exp.2

¹³⁷ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.99, Exp.6.

¹³⁸ Para la consideración de las oligarquías correntinas del siglo XVII, ver Cañedo-Argüelles, 1988, 180-187.

¹³⁹ Maeder, 1981, 105.

¹⁴⁰ natural de Bilbao, quien llegó al Río de la Plata en 1696 con su tío Juan de Zamudio, casando primero en Córdoba con Francisca Ordóñez, y luego en Corrientes en 1721 con Ana Maciel, hija del Teniente Gobernador General Baltasar Maciel y de Gregoria Cabral de Melo.

¹⁴¹ Calvo, 1938, III, 231.

¹⁴² concuñado de Nicolás Patrón y de Ziprián de Lagraña.

¹⁴³ Labougle, 1953, 170. Lagraña fué a su vez suegro de Juan García de Cossio (Mazzuchi, 1992, ítem 896).

¹⁴⁴ Apellido originario del partido judicial de Jaca, Huesca (García Carraffa, XXII, 286; y Atienza, 1959, 297). Propietario de una gran estancia en Las Saladas. Casado con Ursula Fernández, hija del Maestre de Campo Gaspar Fernández y de Andrea Arias de Mansilla, padres de Bernardo y Sebastián de Casajús (Labougle, 1941, 116).

¹⁴⁵ Hijo de Pedro Bautista Casajús, y yerno del Teniente Gobernador de Corrientes General Francisco de Villanueva y de Juana Cabral, viuda de Alpoin.

¹⁴⁶ hijo de Pedro Bautista Casajús, y yerno de Francisco Ruiz de Bolaños y de Ana Maciel. Fué muerto en Yapeyú en 1754 durante las Guerras Guaraníticas, provocando la misma gran desconcierto en Corrientes (Maeder, 1975, 428). Cuando su mujer enviudó contrajo segundas nupcias con Bartolomé de Quiroga (Bernardo López a Pedro de Cevallos, Corrientes, 2-I-1760 [AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6]). Padre de Francisco Xavier Casajús, quien a fines del siglo XVIII poseía una encomienda con 259 indios (AGN, División Colonia, Interior, Leg.27, Exp.7).

¹⁴⁷ Casado dos veces, una con Micaela Carvallo y Maciel y la otra con Margarita Pessoa y Figueroa.

¹⁴⁸ Labougle, 1953, 136.

¹⁴⁹ AGN, Protocolos, Reg.2, 1744, fs.473; Reg.3, 1746, fs.418v.; Reg.5, 1752, fs.68v. y 58v.; Reg.1, 1752, fs.92v.; Reg.4, 1752, fs.71v.; Reg.6, 1767, fs.348v.; y Reg.2, 1769, fs. 58, 53v., y 167.

¹⁵⁰ Nacido en Jerez de la Frontera.

¹⁵¹ Labougle, 1953, 144.

¹⁵² marido de Juana Garay (Mazzuchi, 1992, ítem 851).

¹⁵³ marido de Isabel Solís (Mazzuchi, 1992, ítem 368).

¹⁵⁴ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-8, Exp. 8, fs. 9.

¹⁵⁵ *Ibídem*.

¹⁵⁶ *Ibídem*.

¹⁵⁷ *Ibídem*.

¹⁵⁸ Melchor de Rojas Aranda al Gobernador, Corrientes, 20-X-1758 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

¹⁵⁹ *Ibídem.*

¹⁶⁰ *Ibídem.*

¹⁶¹ *Ibídem.*

¹⁶² Apellido originario del partido judicial de Jaca, Huesca (García Carraffa, XXII, 286; y Atienza, 1959, 297). Propietario de una gran estancia en Las Saladas. Casado con Ursula Fernández, hija del Maestre de Campo Gaspar Fernández y de Andrea Arias de Mansilla, padres de Bernardo y Sebastián de Casajús (Labougle, 1941, 116). Sebastián casó dos veces, una con Micaela Carvallo y Maciel y la otra con Margarita Pessoa y Figueroa.

¹⁶³ Bernardo López a Pedro de Ceballos, Corrientes, 2-I-1760 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

¹⁶⁴ Segundo marido de Rosa Ruiz de Bolaños, viuda de Bernardo Casajús.

¹⁶⁵ Bernardo López a Pedro de Ceballos, Corrientes, 2-I-1760 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

¹⁶⁶ Interpretación prudente y benigna de la ley según las circunstancias de tiempo, lugar, y persona (Escriche, 1863); y equidad según Tau Anzoátegui, 1992, 532.

¹⁶⁷ Bernardo López a Pedro de Ceballos, Corrientes, 2-I-1760 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

¹⁶⁸ Sebastián de Casajús al Gobernador, Corrientes, 5-I-1760 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

¹⁶⁹ *Idem.*

¹⁷⁰ Ver Labougle, 1953; y AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.19.

¹⁷¹ Integraban también esta facción Luis de Soto (marido de Pascuala Navarro), Juan Solís, José Ponciano Rolón (marido de Ana Pera), José Díaz (marido de Felipa Cavallero), Pedro Juan Sotelo (marido de Isabel Luque), y Fernando Soberón (Labougle, 1953, 149 y 194; y Mazzuchi, 1992, ítems 18, 415, 523, 653, 694, 328, 404, 853 y 872).

¹⁷² Oriundo de la casa solariega hidalga y blasonada de Cossio, del Valle de Ríonansa, Santander, y bautizado en 1732. Hijo de Justo García de Cossio y de Ana Gómez de Cossio. Casó en primeras nupcias con María Josefa Zamudio y Bolaños, y en segundas nupcias con su sobrina política Antonia Rosa Timotea Lagraña, hija de Ziprián de Lagraña y de María Gregoria de Dícido y Zamudio; y fué padre del Dr. José Simón García de Cossio y Zamudio, marido de su prima segunda Josefa de Vedoya y Lagraña; y de Estanislada García de Cossio y Lagraña, mujer de Santiago Gutiérrez (Cutolo, 1963, 73; Calvo, IV, 33; Palma, 1957; Bonastre, 1936; y Mazzuchi, 1992, ítem 896).

¹⁷³ Martínez Gonsález de Orduña al Gobernador Juan José Vértiz, Corrientes, 3-I-1771 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.2 [Sala IX, 3-3-7]). León Martínez de Ybarra estaba casado con

María Ignacia de Acosta y Zamudio, hija de José de Acosta y de Ana Zamudio (Calvo, I, 29).

¹⁷⁴ Martín González de Orduña al Gobernador Juan José Vértiz, Corrientes, 3-I-1771 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.2 [Sala IX, 3-3-7]).

¹⁷⁵ Hijo de Francisco de Lafuente, nacido en Guarnizo en marzo de 1710, y de Manuela de la Portilla (Lafuente, 1941).

¹⁷⁶ AGN, Justicia, Leg.18, Exp. 475.

¹⁷⁷ Natural de Jerez de la Frontera.

TOMO VII

CAPITULO 5

El nepotismo capitular en los orígenes de las Reformas Borbónicas. La endogamia en los Cabildos del Interior del Virreinato del Río de la Plata (1760-1790)

(publicado parcialmente en 1992 en la revista *Andes. Antropología e Historia* [Salta: CEPIHA y Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta], 5, 1991, pp.89-124; bajo el título: "La lucha contra el nepotismo en los orígenes de las Reformas Borbónicas. La endogamia en los Cabildos de Salta y Tucumán (1760-1790)");

Para la mayoría de los autores que trataron la composición político-social de la burocracia colonial lo que determinaba que ésta estuviera controlada por el acentuado localismo de minorías oligárquicas fué la naturaleza patrimonialista del estado colonial, manifestada en la multitudinaria subasta de oficios públicos,¹ y sus consiguientes renunciaciones,² estudiada en otros trabajos de este autor. Y lo que dió lugar al nacimiento de una nobleza indiana no titulada fueron, según Céspedes del Castillo (1985), los séquitos de cortesanos y parientes traídos por los Virreyes y Gobernadores.³ Por estos motivos, Phelan (1972) y Socolow (1987) enfatizaron que la legislación Habsburga había decretado que ningún Oidor podía casar con una nativa del mismo distrito.⁴ Sin embargo, para autores como Barbier (1972), quien estudia el caso Chileno; Alvarado Morales (1979) y Pietschmann (1992), quienes estudian la elite de la ciudad de México; Casaús Arzú (1992), quien estudia las elites Centroamericanas; y para Martínez Ortega (1989) y González Muñoz (1990), quienes analizan la elite Yucateca, lo que determinaba que la burocracia estuviera nepóticamente controlada, no fué la enajenación de los oficios públicos, sino la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos dominantes.⁵

En el sentido apuntado por Céspedes, Acevedo (1965) nos revela que en 1763 el Brigadier Diego de Hesles Campero, Secretario del Virrey del Perú José Antonio Manso de Velasco, Conde de Superunda, influyó en la designación de su sobrino Juan Manuel Fernández Campero,⁶ como Gobernador de Córdoba del Tucumán.⁷ Cuatro años después, en 1767, el Oidor de la Real Audiencia de Charcas Francisco Javier de Palacios y Aróstegui,⁸ había incidido para que el Gobernador de Córdoba del Tucumán Juan Manuel Fernández Campero nombrara de lugarteniente a su propio sobrino Prudencio Palacios,⁹ yerno a su vez del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León.¹⁰ Para esa misma época, el Gobernador de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán Francisco de Bucarelli y Ursúa se quejaba al Conde de Aranda de la nociva influencia que ejercían los parentescos salteños de la mujer del Presidente de la Real Audiencia de Charcas Juan Victorino Martínez de Tineo.¹¹ En efecto, el vecindario y Cabildo de Salta había ganado para sí la voluntad de la Real Audiencia de Charcas,

merced a la buena voluntad de su Presidente Martínez de Tineo. Asimismo, el Intendente General de Ejército y Real Hacienda y Caballero de Carlos III Manuel Ignacio Fernández, sostenía en 1779 que la familia del difunto José Perfecto de Salas, refiriéndose a su viuda María Josefa Corvalán de Castilla, ultraja a los vecinos de Mendoza "...porque toma partido en las elecciones de los oficios de República, y en todo lo que suele ofrecerse entre los magnates de aquellos pueblos".¹²

En la Intendencia de La Paz, Manuel de Fonnegra sostenía que el Subdelegado de Pacajes Joaquín de la Riva, era sostenido por la influencia amenazante que ejercía sobre sus fiadores su padre, el Protector de Naturales Dr. Diego de la Riva.¹³ Y sobre la designación de Francisco Ramos Mexía como Subdelegado de Pacajes en 1806, las influencias que dejaron su suegro el Brigadier General Sebastián de Seguro y su concuñado Ramón de Ballivián e Igareda. También el Gobernador de Córdoba Campero se quejaba de parecidas influencias que ejercía la esposa del Gobernador Gerónimo Matorras.¹⁴ La designación de Juan Estéban Tamayo,¹⁵ en 1796, como Teniente Asesor del Gobernador Intendente de Salta de Tucumán Ramón García de León y Pizarro,¹⁶ fué sospechada de nepótica por las autoridades centrales, al extremo de permutárselo inmediatamente por José de Medeyros,¹⁷ que era Asesor en La Paz.¹⁸ Este último incidió a su vez en el nombramiento de su yerno el Coronel Juan José Fernández Cornejo y de la Corte como Comandante del Fuerte del Río del Valle.¹⁹ Y el Comandante de Armas de Salta Coronel Gregorio de Zegada,²⁰ incidió en la designación de su yerno Diego José de Pueyrredón,²¹ como Comandante del Fuerte de Ledesma y le otorgó en herencia en 1795, en perjuicio de su propio hijo varón, la Subdelegación de Correos de Jujuy. En Paraguay, Diego de los Reyes Balmaceda, quien gobernara en la década de 1720, fué acusado ante la Real Audiencia de Charcas de haber violado el precepto que prohibía a los funcionarios reales contraer matrimonio con quienes pertenecieran al lugar donde se ejercía el cargo, al haberse casado con una paraguaya,²² siendo

"...dos de sus cuñados regidores de Cabildo, otro de sus cuñados es nombrado por él Protector de Naturales y finalmente, otro hermano de su mujer es el Superior de las Misiones de la Compañía de Jesús en el Paraguay".²³

Más luego, Rafael de la Moneda,²⁴ quien gobernara el Paraguay a comienzos y mediados de la década del 40, fué suegro del Contador de las Reales Cajas de Potosí Fermín de Aoíz y Larrazábal.²⁵ Marcos José de Larrazábal,²⁶ quien gobernara el Paraguay a fines de la década del 40, fué cuñado del ex-Gobernador del Paraguay Martín José de Echauri,²⁷ y del Gobernador de Tucumán Gerónimo de Matorras,²⁸ y concuñado del Teniente Coronel de Artillería Juan Antonio Marín de Cáceres,²⁹ y del Corregidor Domingo Alonso de Lajarrota.³⁰ José Martínez Fontes,³¹ quien gobernara el Paraguay a comienzos de la década del 60, fué padre del Comandante de la Guardia de Rojas Manuel Martínez Fontes; y suegro del Comandante de la Guardia de Luján Francisco González Balcarce.³² Agustín Fernando de Pinedo,³³ quien gobernara el Paraguay en la década de 1770, fué padre del Coronel Agustín José de Pinedo,³⁴ y suegro del Corregidor Antonio de Pinedo y Montúfar.³⁵ Finalmente, Lázaro de Ribera,³⁶ quien gobernara el Paraguay a comienzos del siglo XIX, era concuñado del Virrey Santiago de Liniers y del Teniente Coronel de Artillería Angel Augusto de Monasterio.³⁷

Con respecto a la propia capital del Virreinato, Buenos Aires, la conexión familiar entre altos funcionarios (Virreyes, Gobernadores y miembros de la Real Audiencia) y linajes nobles de Europa constituyó, al decir de Céspedes del Castillo (1985), una fuente fundamental para la formación de una nobleza local.³⁸ Socolow (1987) nos revela como los Virreyes Vértiz y Salcedo,³⁹ Loreto,⁴⁰ del Pino,⁴¹ Olaguer y Feliú,⁴² Sobremonte,⁴³ y Liniers,⁴⁴ habían logrado conformar en Buenos Aires una corte de parientes y allegados.⁴⁵

Hubo asimismo en el interior del virreinato casas patricias, que se beneficiaron de las designaciones hechas por los Virreyes y Gobernadores de origen limeño o porteño. La facultad de confirmar las elecciones de alcaldes podía ser asumida sólo por los Virreyes, Presidentes de Real Audiencia y Gobernadores, y no por los Alcaldes Provinciales, y los alcaldes de primer voto no podían a su vez titularse Justicias Mayores.⁴⁶ Las rivalidades internas a los patriciados tuvieron entonces más que ver con las actitudes tomadas respecto a los Tenientes-Gobernadores designados por las autoridades virreinales, los bienes de los Jesuitas y las actividades de la Real Renta de Tabaco y Naipes que con meras aspiraciones a cargos capitulares.

Las tachas capitulares. El caso de Córdoba.

En Córdoba, el Gobernador Campero logró revertir en 1766 la relación de fuerzas existente en el Cabildo de Córdoba promoviendo a un grupo que Romero de Cabrera (1992) caracteriza como una burguesía embrionaria, ubicando para ello como Alcalde de Primer Voto al tercero de los hermanos Allende y Losa, el patricio Santiago de Allende y Losa, y como Alcalde de segundo voto a Enrique Olmedo;⁴⁷ y nombrando como su propio lugarteniente a Prudencio Palacios, el yerno del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León, el cual "...anhelaba mucho por la tenencia y por ella le dió al Gobernador \$4.000".⁴⁸ Mediante esta dádiva y no obstante que "...era mozo caviloso e inquieto", Palacios obtuvo la confirmación de la Real Audiencia "...por respeto de su tío Oidor [Francisco Xavier de Palacios]".⁴⁹ Por el otro lado, la fracción opuesta al Gobernador Campero, que Romero de Cabrera (1992) caracteriza como feudal, sospechada de estar ligada a los intereses Jesuíticos, la Casa de los Echenique,⁵⁰ había elegido como Alcalde al europeo Cayetano Terán Quevedo.⁵¹ Para investirlo a Terán con su vara, el Presidente de la Real Audiencia de Charcas Juan Victorino Martínez de Tineo mandó en comisión al General don José Francisco de Galarza.⁵² Pero a fin de no dar cumplimiento al despacho del Comisionado Galarza, el Gobernador Campero salió de Salta para Córdoba, con el objeto de deponer

"...a los Regidores antiguos, y como seis de dos solas familias, que fueron un hijo de dicho Teniente de Rey [Domingo Ignacio de León], a dicho Alcalde Allende, a su concuñado Francisco José de Uriarte, a un Santibáñez,⁵³ sobrino de éste, y a otro Allende, hijo natural;⁵⁴ que en dos días le hizo Capitán, Sargento Mayor y Regidor".⁵⁵

Como trágica secuela de esta crisis el Comisionado de la Real Audiencia de Charcas General Galarza, fué ultrajado, de resultas de lo cual enfermó de muerte, falleciendo a los tres días, y

"...haciendo que su muerte fuere el más claro testimonio de la lealtad con que se sacrificó en obsequio de la autoridad del Regio Tribunal que lo comisionó, y el más fuerte convencimiento de la temeridad de estos individuos [los Allende] que se la ocasionaron".⁵⁶

Con el fin de hacer Alcaldes y ganar los Cabildos de las seis restantes ciudades de la Gobernación de Córdoba del Tucumán, el Gobernador Campero salió nuevamente de Córdoba a principios de Diciembre de 1766.⁵⁷ Para comienzos de 1767, Campero había logrado que se eligieran como alcalde de primer voto del Cabildo de Córdoba a la cabeza más visible del clan de los Allende: el patricio Joseph de Allende y Losa, y como alcalde de segundo voto al antes mencionado Francisco José de Uriarte. A fines de 1767, y no obstante tener cohechados a varios Oidores, con el regalo de más de \$80.000, el mencionado Presidente de la Real Audiencia de Charcas libró Providencias "...para deponer y desterrar al Teniente de Rey, a su yerno Palacios, y a Don Santiago Allende, con el Escribano,⁵⁸ que fueron causa de la muerte de Galarza".⁵⁹ Para su intimación y para hacer cumplir dicha Provisión, "...por no haber quien se animase en la Provincia", la Real Audiencia ordenó al Gobernador de Buenos

Aires Francisco de Bucarelli y Ursúa "...nombrase un oficial de graduación, que con suficiente tropa, pasase a Córdoba y diese cumplimiento al superior mandato, nombramiento que recayó en [el Comandante de Infantería de Buenos Aires] Fernando Fabro".⁶⁰

Para 1768, meses después de la expulsión de los Jesuitas, los Allende cohecharon al Teniente de Rey Fabro, de resultas de lo cual impusieron como Alcaldes a los patricios Joaquín de Mendiola,⁶¹ y Francisco de Armesto y Allende;⁶² y para 1769 a los europeos Phelipe Haedo y de la Sota,⁶³ y Melchor Otero.⁶⁴ Cuatro años después, en 1772, los hermanos José y Santiago de Allende y Losa consiguieron con el apoyo de 500 milicianos armados, en lo que constituyó una grave crisis política, consagrar como alcaldes al Maestre de Campo Gregorio Arrascaeta,⁶⁵ y a José Prudencio Xigena.⁶⁶ Pero en esa misma oportunidad los Alcaldes José Benito de Acosta,⁶⁷ y José de Vejarano,⁶⁸ apoyados por el entonces Gobernador Gerónimo Matorras,⁶⁹ quien había declarado vacantes varios puestos de regidores,⁷⁰ eligieron como alcaldes a Francisco Antonio Díaz,⁷¹ y al patricio Juan Tiburcio de Ordóñez,⁷² ex-Fiscal de Temporalidades. Si bien el Gobernador Joaquín de Espinosa y Dávalos,⁷³ coaligado con los oidores de la Real Audiencia de Charcas, confirmó a los primeros, que eran candidatos del clan de los Allende, los electores de los segundos apelaron ante la Real Audiencia de Lima. Al cabo de tres años de intensa tramitación judicial, Díaz y Ordóñez lograron ser confirmados.⁷⁴ En una palabra, una facción del Cabildo de Córdoba había demandado a su gobernador, antagonizándolo con la Real Audiencia de Lima.

De igual modo, en Córdoba, cuando en 1809 su Gobernador-Intendente Juan Gutiérrez de la Concha --uno de los fusilados con Liniers, Allende y Rodríguez en Cabeza de Tigre-- confirmó para Alcalde de primer voto y para Procurador a aquellos que tenían menor número de votos, dejando fuera del Cabildo a quien como el peninsular Vicente Antonio Bedoya y López de la Madrid, tenía mayor número de sufragios, estalló la última crisis política del Cabildo de Córdoba, previa a la Revolución. La misma se desató, por cuanto, a falta del argumento de la insolvencia, el parentesco en el cuarto grado, o el incumplimiento del hueco,⁷⁵ el Gobernador-Intendente acudió a las antipáticas tachas referentes a la legitimidad del nacimiento del alcalde electo. Esta actitud de Concha debió necesariamente desmoronar el frente interno, por cuanto ponía en tela de juicio la dignidad de muchos miembros de la elite nativa colonial, en especial la de los Gigena Santiestéban, con los cuales los Allende mantenían fuertes lazos de amistad y parentesco. En efecto, Concha hizo presente al Presidente de la Real Audiencia de Buenos Aires que el citado Bedoya, amén de haber estado preso como contrabandista cuando ejercía el cargo de Teniente Visitador de la Renta de Tabaco y Naipes, estaba casado con alguien de "dudosa entidad moral", como María Isabel de Gigena

"...que no solamente es ilegítima sino que también con bastante publicidad se sabe que es de dañado y punible ayuntamiento, como hija de un religioso profeso en mujer casada, ausente el marido y criada en casa separada, que como tal no alterna con las mujeres distinguidas desta Ciudad".⁷⁶

A esta altura de los entretelones judiciales de la última crisis política acontecida en el Cabildo de Córdoba, Levene (1960) nos cuenta que fué el prócer Mariano Moreno,⁷⁷ quien había asumido la defensa de Bedoya y Recalde, en medio de un clima hostil hacia el Gobernador de Córdoba, inspirado dicho clima por Martín de Alzaga debido a la solidaridad que le había brindado Concha al ex-Virrey Sobremonte, luego de su inaudita fuga frente al invasor inglés.⁷⁸

Las parcialidades capitulares. El caso de Cuyo.

En San Juan, en 1762, el Alcalde Remigio Albarracín,⁷⁹ se vió precisado a renunciar frente a la

embestida del Teniente Corregidor Francisco Javier de Garramuño,⁸⁰ y del Administrador del Estanco de Tabaco y Naipes Francisco Suárez de Salcedo.⁸¹ Más luego, el propio Garramuño tuvo también que renunciar ante la presión del Corregidor Félix José de Villalobos.⁸² En Mendoza, una nueva oligarquía copó, según Comadrán Ruiz (1962), los cargos de Corregidor, Cura Párroco y Vicario Foráneo, Alcalde de primer y segundo voto, Recaudador de Alcabalas, Fiscal de la Vicaría Foránea de Cuyo, Comisario Interino del Santo Oficio, Teniente de Oficial Real y Diputado de la Junta de Temporalidades.⁸³ Esta situación dió lugar a numerosas y reiteradas denuncias de los Corregidores Juan José del Risco y Alvarado, y Jacobo Badarán y Bustillos.⁸⁴ En un principio, el ingeniero catalán, arrendatario de los yacimientos mineros de Uspallata, Francisco de Serra y Canals, fué el primero en apuntar la naturaleza oligárquica del patriciado mendocino.⁸⁵

A propósito de haberse devengado a Serra y Canals sus haberes por las obras del puente sobre el río Desaguadero, sus apoderados José de Almeyda y Jordán y Juan de Santos Preciado, iniciaron unas prolongadas y frustrantes gestiones. Por ese motivo, Canals se vió precisado a formalizar en 1778 una denuncia por el "...estado deplorable en que se hallaba la ciudad de Mendoza". La fuerza de su documento, a juicio del propio Canals, molestó al Fiscal de la Real Audiencia de Chile José Perfecto de Salas,⁸⁶ e "...irritó la parcialidad de las tres casas [reinantes], nombradas Corvalán, Rozas y Sotomayor, quienes tenían aquel Pueblo en una suma opresión".⁸⁷ Según Phelan (1972), un Fiscal de la Real Audiencia deliberaba pero no podía votar pues estaba colocado en un grado menor al del Oidor, pero si bien no podía votar en los casos en que era parte como abogado de la corona, en aquellos litigios en que no lo era podía votar solo para romper el empate entre los Oidores.⁸⁸ Aparentemente, si hemos de estar al documento firmado por Canals, el Virrey Cevallos pensaba en designar Corregidor al propio Canals, pero con motivo del valimiento de Salas, padre de uno de sus más fieles coaligados, fué designado en el cargo de Corregidor Don Jacinto de Camargo y Loayza.⁸⁹ Esta designación manifestaba "...la conligación que ubo entre las mencionadas casas y dicho Corregidor y lo mucho que este se alla obligado con aquella parcialidad, su echura, para el logro de sus venganzas".⁹⁰ Amén de que los dos Alcaldes Juan Antonio Molina Coria,⁹¹ y Nicolás Corvalán,⁹² eran parientes en primeros grados y de las familias de las mencionadas casas

"...ace mas de veinte años que sucede lo propio, sin que la elección de justicia dexe de verificarse en las citadas parcialidades, de que resulta allarse aquel Pueblo, símil al cautiverio del Faraón".⁹³

Finalmente, a fines de 1778, Almeyda Jordán en carta a Canals, le ruega no deje de decirle al Virrey "...que mire este pobre lugar, quitando la justicia de las casas de Corvalanes, Rozas, y Sotomayor".⁹⁴ En su lugar, Canals le ruega al Virrey se acuerde de Lucas de Neira y Pacheco,⁹⁵ Fernando Jurado,⁹⁶ Andrés Antonio Moyano,⁹⁷ Juan Santos Preciado, Matías Barros, José Marcos Aragón,⁹⁸ Francisco Xavier de la Cruz,⁹⁹ Francisco Videla y Aguiar,¹⁰⁰ y José Francisco Amigorena.¹⁰¹ De este último recalaba Canals que "...era muy especial si no estuviera de Maestre de Campo y otros muchos de integridad que de lo contrario se acaba de perder este lugar".¹⁰²

Conflictos entre clanes. El caso del Paraguay.

En el Paraguay, en 1761, el Gobernador José Martínez Fontes designó a Fulgencio Yegros y Ledesma,¹⁰³ Maestre de Campo, Teniente Gobernador y Justicia Mayor.¹⁰⁴ Asimismo, casas patricias como la de Cabañas, se beneficiaron con la expulsión de los Jesuitas, mientras que otras, como la de los Yegros mismos, quedaron marginadas del botín. En 1767 el ex-Teniente Gobernador Fulgencio Yegros, acusaba esta situación al manifestar que el ex-Alcalde de primer voto y actual Depositario General Salvador Cabañas y Ampuero,¹⁰⁵ designado por el Gobernador de Buenos Aires Francisco de

Bucareli y Ursúa como auxiliar del Gobernador del Paraguay Carlos Morphy en la operación de expulsión,¹⁰⁶ "...con el abrigo de su parentesco, y corpulenta parcialidad, se reputaba por acreedor a mayor exaltación, y me estimaba por intruso, y menos digno de aquella superioridad".¹⁰⁷ Estos sentimientos lo impulsaron a Cabañas a enviar al Virrey y a la Real Audiencia de Charcas informes que, a juicio de Yegros, carecían de veracidad alguna, y recomendaciones y favores "...que consiguió de los Jesuitas, que con toda franqueza y esfuerzo coadyuvaron, mediante la nueva amistad que asentaron desde que se hizo mi enemigo".¹⁰⁸ La enemistad de Yegros con los Jesuitas arrancaba del hecho de

"...no haber querido consultarles cosa alguna, ni condescendido a sus injustas peticiones, sino conteniéndolos en todo sentenciando advertidamente sus pleitos, y destruídoles en varias partes los mojones, que antes de mi tiempo y durante la impotencia de mi antecesor habían prefixado, con mucho avanzamiento de cierras a diversos rumbos".¹⁰⁹

Respecto de las nuevas actividades de la Real Renta del Tabaco y Naipes, su primer Director General Francisco de Paula Sanz, resistido por los vecinos, acusó al Cabildo de Asunción del Paraguay en 1779 de "...ser pasto de los comerciantes de aguas abajo", y de contubernio en la producción de tabaco, tanto en su cantidad como en su calidad.¹¹⁰

La Aduana, el Real Consulado y el Tribunal de Cuentas.

Al igual que la Real Audiencia, las Gobernaciones y la Real Renta del Tabaco y Naipes, a fines de siglo, la Aduana, el Real Consulado y el Tribunal de Cuentas, tampoco pudieron escapar al influjo del nepotismo. Este fenómeno se manifestaba en su forma más aguda en las elecciones del Prior, del Cónsul y del Síndico del Real Consulado.¹¹¹ Si bien la exclusión de candidatos por afinidad de segundo o tercer grado fué extinguida en materia matrimonial, en materia política subsistió para impedir en la magistratura "...una concección de verdadera parcialidad".¹¹² Dichas elecciones dieron oportunidad a repetidos cuestionamientos. Cuando en 1796 se convocó a elecciones, José Martínez de Hoz,¹¹³ reclamó contra las propuestas que entónces se hicieron de Juan Viola,¹¹⁴ para Cónsul y de Agustín Antonio de Erézcana,¹¹⁵ para Síndico,

"...por estar estos casados, el primero con prima [María Ignacia de Echavarri], y el segundo con hermana [María Eugenia Azcuénaga] de la mujer de Don Gaspar de Santa Coloma [Flora Azcuénaga], que sólo era entónces Teniente del Conciliario Juan Estéban de Anchorena".¹¹⁶

Y cuando en 1801 se reclamó contra la propuesta de José Martínez de Hoz por hallarse casado con [Josefa de Castro Almandoz] sobrina carnal de Francisco Castañón Reina,¹¹⁷ "...no Teniente de Conciliario sino Consiliario actual como Cónsul saliente", el Oidor Juez de Alzadas dió lugar al planteo.¹¹⁸ Por último, este fenómeno se dió también a fines del siglo XVIII en el seno del Tribunal de Cuentas, aunque en éste caso pareciera que las razones no pueden ser atribuídas a meros atavismos clánicos. En efecto, el Virrey Joaquín del Pino había denunciado en la Corte a Juan Andrés de Arroyo,¹¹⁹ como cómplice de una "pandilla" de funcionarios que se enriquecían por medio del contrabando.¹²⁰ La Junta Superior de Real Hacienda había declarado por justas las causas de recusación puestas por el Tesorero de Real Hacienda y Caballero de la Orden de Santiago Coronel Antonio de Pinedo y Montúfar,¹²¹ el Factor Félix de Casamayor,¹²² y el Contador Pedro Medrano,¹²³ contra todos los Contadores Mayores del Tribunal de Cuentas.¹²⁴ El Contador Mayor Ramón Miguel de Oromí y Martiller,¹²⁵ había sido recusado por ser pariente afínico, dentro del cuarto grado civil (primos hermanos), de la Señora Ana Gertrudis de Pinedo y Arce,¹²⁶ mujer del Caballero de Carlos III Contador Mayor del Virreinato Juan de Andrés y Arroyo.¹²⁷ Este último, a su vez, como lo ilustra el Cuadro BA-

I, fué suegro del Asesor General del Virreinato Don Juan Manuel de Almagro de la Torre.¹²⁸

En Potosí, la facción liderada por el mercader Juan de Ybieta y Endeyza,¹²⁹ en la cual militaban los Diputados del Consulado en Chuquisaca Manuel Fernández de Alonso,¹³⁰ y Domingo Antonio de Achával,¹³¹ y los Regidores Propietarios Joaquín de la Quintana,¹³² y Gregorio Barragán,¹³³ se hallaba enfrentada con la facción liderada por el azoguero y Síndico Procurador Coronel Indalecio González de Socasa,¹³⁴ compuesta por los comerciantes Potosinos, que como luego veremos se disputaron la conducción del Situado: Manuel Bulúcia,¹³⁵ Juan Bautista Elorreaga,¹³⁶ Nicolás Ponte,¹³⁷ Nicolás de Oliden,¹³⁸ Francisco Senavilla,¹³⁹ Joaquín Obregón Cevallos,¹⁴⁰ Martín de Gainza,¹⁴¹ y el Diputado del Consulado en Potosí Domingo Achúcarro,¹⁴² y por los azogueros Luis de Orueta,¹⁴³ Antonio Vargas y Flor,¹⁴⁴ y Pedro Antonio Azcárate.¹⁴⁵ La crisis que analizaremos había estallado el 1 de enero de 1799 con motivo de la elección de Alcalde de primer voto, recaída en el Regidor Propietario Capitán Mariano Torre,¹⁴⁶ apoyado por la facción azoguera. Luego del acto de calificación de votos, o cabildo extraordinario que llamaban de dudas, y producida la votación que recayó en Torre, el Regidor Quintana, seguido por Ybieta y por Barragán, lo impugnaron

"...con palabras preñadas que indicaron alguna tacha grave que no declaró ninguno de ellos, [y] quisieron que se escribiese en el Libro para que se pasase al Señor Gobernador con estos borrones de infamia, por darle que sentir, y por burlarse del nuevo Alcalde a la vista de todo el Pueblo congregado en la Plaza según costumbre esperando la elección".¹⁴⁷

Aunque le hubiese constado en aquel entonces que el Regidor Don Mariano Torre no era hijo legítimo, el Teniente Gobernador de Potosí Pedro Vicente Cañete afirmaba que

"...no hubiera podido ni debido impedir su votación para Alcalde: no habiendo Ley alguna que pida por requisito la legitimidad de nacimiento y si mas bien igualarse los hijos legítimos y los naturales para casi todos los efectos civiles, aún en lo Eclesiástico".¹⁴⁸

El Cabildo, según Cañete

"...no lo eligió [a Torre] para Alcalde por que era hijo legítimo, sino por haberlo reputado vecino idóneo tanto mas siendo Regidor Propietario, que solo con serlo estaba habilitado para ser Alcalde Ordinario en virtud del privilegio auténtico que para ello tiene este Cabildo".¹⁴⁹

Finalmente, para Cañete, la votación de Torre para Alcalde

"...no me hubiera podido resolver a impedirla sin injusticia, aún en el caso de haber entendido el hecho; por que la falta de nobleza nativa [hidalguía] la hubiera reputado por muy bien suplida con la nobleza privilegiada que le conceden las mismas Leyes en virtud del grado honorífico que obtiene en la Milicia con Real Título de S.M.". ¹⁵⁰

Como consecuencia de la victoria de los criterios sustentados por Cañete,¹⁵¹ y el consiguiente triunfo de la facción azoguera liderada por Socasa, la facción mercantil liderada por Ybieta manifestaba

"...que al tiempo de su ingreso al uso de sus empleos...se hallaba el Régimen interior, político, y público de aquel Cabildo reducido a un lamentable desorden, en todos los Ramos correspondientes a la inspección y Gobierno de sus Regidores".¹⁵²

A tal grado de desorden había sucumbido el Cabildo

"...que deprimidos y oprimidos sus fueros, privilegios y facultades con el gran peso de la autoridad y prepotencia de aquel gobierno, ya no eran Capitulares y Padres de la Patria sino en la apariencia o en el nombre; o sólo se reconocían tales para acompañar al Sr. Intendente [Francisco de Paula Sanz] en las asistencias y actos públicos".¹⁵³

En los Acuerdos ordinarios y extraordinarios

"...no dominaba otro espíritu que el del temor, o el de la condescendencia a las ideas del Jefe [Gobernador-Intendente], y su Asesor [Cañete], viéndose los suplicantes en todo en la dura necesidad o de suscribirles, contra su propio dictámen, o de sufrir los fatales resentimientos a que hasen en el día una dolorosa experiencia".¹⁵⁴

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables casos de nepotismo concertados por Virreyes, Oidores y Gobernadores, en diversas cabeceras de Gobernaciones-Intendencia y provincias, como Buenos Aires, Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza y San Juan, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que las estructuras de parentesco fueron más fuertes que cambio político alguno, incluidas las Reformas Borbónicas, pues lograron perpetuarse en el tiempo.

NOTAS

¹ Peña, 1983.

² Parry, 1953.

³ Céspedes del Castillo, 1985, 289.

⁴ Socolow, 1987, 193.

⁵ Martínez Ortega, 1989, 216; y Pietschmann, 1992, 329. Las relaciones de parentesco surgían como consecuencia de las estrategias matrimoniales, las cuales incluían los matrimonios endogámicos (cruzados y paralelos). Mientras que el matrimonio paralelo (aquel celebrado con la hija del hermano del padre), era casi inexistente por sospechárselo incestuoso; el matrimonio cruzado (aquel celebrado con la hija de los hermanos de la madre o de las hermanas del padre), no sólo estaba permitido sino que era alentado, por los elementos de conveniencia económica (clearing dotal) y prestigio social que traía consigo. Elias (1982), en su estudio de la temprana edad moderna, sostenía que las estrategias matrimoniales deben ser tomadas como prácticas o mecanismos mediante las cuales lo que importa son sólo el prestigio y rango de los contrayentes; donde en otras palabras uno, que representa a una familia o clan específico, no se casa con un ser humano individual sino con una familia o incluso con un clan familiar. Cuanto más prestigioso era el rango de el o la consorte mayor era el prestigio que adquiría el o la contrayente (Elias, 1982, 71). Esta tesis fué sustentada en otros términos, con anterioridad, por Goode (1959), para quien los impulsos del amor romántico debían ser reprimidos por cualquier sociedad que buscara preservar su estructura social (Wolf & Hansen, 1967, 171). Con relación a ello, y referido al Río de la Plata, Balmori (1984) sostiene la tesis de que la composición de la oligarquía privilegiaba aquellos integrantes cuyos apellidos se entroncaban con las familias cuyo origen paterno o materno arrancaba del estado colonial borbónico. En un país cuasi-despoblado conformado por castas donde primaba la línea del color y donde la mayoría de la población de raza blanca que constituía la

élite política procedía de Europa, para un inmigrante el prestigio de un matrimonio lo daba no tanto la riqueza como la antigüedad del linaje de la novia y la extensión de su parentela; y viceversa, para una familia patricia de dos o más generaciones de estar avecindados el prestigio de un matrimonio lo daba no tanto la antigüedad del linaje como la riqueza del pretendiente y su origen peninsular. Pero el prestigio del matrimonio también variaba con la coyuntura histórica de que se tratara; pues en tiempos de la Organización Nacional (1852-80), el prestigio lo otorgaba la profesión liberal, en especial la de abogado; en tiempos del Unicato Roquista (1880-1904), lo otorgaba la propiedad territorial y la vinculación con el polo económico en expansión constituido por la Pampa Húmeda; y en tiempos del interregno revolucionario anti-oligárquico (1890-1916), el prestigio lo habría concedido la militancia política en los partidos políticos populares.

Sin embargo, para Boone (1986), que estudia el Portugal medieval tardío, en todas las sociedades estratificadas, la riqueza fué siempre el parámetro más decisivo para determinar la habilidad del varón para contraer pareja y para establecer una carrera reproductiva estable (Boone, 1986, 862). El objetivo de la competencia por los recursos materiales no era necesariamente por los recursos mismos, sino por el status social que el control de los recursos confería. Desde un punto de vista evolucionista, la competencia por el status en las sociedades patriarcales como las del interior del espacio rioplatense, eran en última instancia, una forma de competencia en la cual los varones rivalizaban por los recursos materiales que les conferían status, el cual a su vez les garantizaba el acceso a las jóvenes casaderas. Es nuestra tesis entónces, que a los efectos de la obtención de dichos recursos materiales, era indispensable en una gran parte de los casos el control de las estructuras político-administrativas, lo cual suponía la exclusión de aquellos otros miembros de la élite política que amenazaban su hegemonía; de ahí la continuidad y la extensión, en los estados oligárquicos de las prácticas nepóticas propias de los estados coloniales. Observar para el caso de Colombia, el artículo de Leal Buitrago (1988) y el de Uribe y Alvarez Gaviria (1988); y en el caso del Río de la Plata los trabajos de Mansilla (1941), Labougle (1953), Real de Azúa (1961), Saguier (1989), Marquiegui (1990); y Navarro Floria y Nicoletti (1990).

⁶ Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco, entre 1755 y 1760. Sobrino de Diego de Hesles, Secretario del Virrey del Perú José Antonio Manso de Velazco, Conde de Superunda; de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes (Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; primo hermano del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero y de Francisco de Güemes y Campero; marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y Campero; y padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marqués de Yavi Fernando Campero (Acevedo, 1969, 14 y 103; y Cutolo, II, 74; y III, 50). Tomás de Allende y Losa y su cuñado Gregorio Arrascaeta afianzaron en 1764 el juicio de residencia del Gobernador Campero (Acevedo, 1969, 15).

⁷ Acevedo, 1965, 4.

⁸ Graduado de Doctor en Alcalá de Henares. Según Burkholder y Chandler indudablemente no había comprado su puesto (Burkholder y Chandler, 1984, 71).

⁹ Sobrino del Oidor de la Real Audiencia de Charcas Francisco Xavier de Palacios. Marido de María Teresa de León, hija del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León. A Prudencio Palacios se le abre sucesión en 1797 (AHC, Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5). Padre de Francisco Xavier de Palacios, marido de María Ignacia de la Fuente, y de Petrona Palacios, mujer de Andrés Gigena y Santelices, padres a su vez de Martín Gigena y Palacios, dueño de la estancia del Tío (AHC, Escribanía N.1, Leg.409, Exp.1). Al enviudar María Ignacia de la Fuente contrae segundas nupcias con Francisco

García Arenas (AHC, Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5). El Gobernador Campero quiso quitar del Cabildo de Córdoba "...sus individuos, y crear otros, para lo que hizo su lugarteniente al yerno del Teniente de Rey [Estéban y León] (depuesto del empleo político) don Prudencio Palacios" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

¹⁰ Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el cargo hasta de 1775 (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr. Emilio Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y Acevedo, 1972, 253-267). Fué también encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (Lazcano Colodrero [en adelante LC], 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

¹¹ Acevedo, 1969, 123. Casado con Rosa Escobar Castellanos, hija de Ramón de Escobar Castellanos y de Francisca López de Velasco (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.14, Exp.23).

¹² Comadrán Ruiz, 1962, 61.

¹³ Acevedo, 1992, 184.

¹⁴ Natural del Lugar de Lameo, Obispado de León, hijo de Andrés Matorras y de Ana Cires; marido de Manuela Larrazábal, hija de Antonio Larrazábal y de Agustina Avellaneda, y viuda de José Fernández; y concuñado de Martín José de Echauri, Juan de Otárola, José Antonio de Iturriaga, Martín de Arráiz y Pablo de Aoíz (Acevedo, 1969, 185; Jáuregui Rueda [en adelante JR], 1987, ítem 3231; y Fernández de Burzaco [en adelante FB], IV, 113).

¹⁵ sobrino carnal del Teniente Gobernador y Justicia Mayor de Jujuy entre 1778 y 1780 Dr. Tadeo Fernández Dávila (Cutolo, II, 484; y VII, 270; y Cornejo, 1947, 151-158).

¹⁶ Arribas, 1970.

¹⁷ nacido en la Colonia del Sacramento en 1748, hijo de un Portugués. En 1791 fué Asesor de la Junta Municipal de Temporalidades. Casó con Jerónima Rosa Martínez de Iriarte, natural de San Miguel de Tucumán, viuda del Gobernador de Guanta Juan de Zubiaur, e hija de Juan Martínez de Iriarte y de Felipa Campana (Aranzaes, 1915, 480; y Cornejo, 1944, 95-101). Según Calvo era hija de Domingo Martínez de Iriarte y Córdoba, natural de Jujuy, y de su segunda mujer Florencia de la Cámara Elizondo; cuñado del Pbro. Felipe Antonio Martínez de Iriarte y del Gobernador de Armas de Jujuy Domingo Martínez de Iriarte; y concuñado de Francisco Zenavilla, de Juan Manuel de Pucheta,

del Coronel Ventura José Marquieguy Marquieguy y de Juan de Simón y Olazo (Calvo, VI, 24). Fué padre de Gertrudis de Medeyros, casada en junio de 1799 con el Coronel Juan José Fernández Cornejo y de la Corte (Cornejo, 1972, 65). En 1807 el Cabildo salteño, se quejaba de la traición de su Asesor José de Medeyros, quien pretendía erigir a San Miguel de Tucumán en capital de la Gobernación y sede de su Obispado.

¹⁸ Acevedo, 1965, 144.

¹⁹ AC, 1972, 65.

²⁰ antiguo Situadista, marido de María Mercedes Rubianez y Liendo Argañaráz; padre de Julián Gregorio de Zegada, y del R.P. José Miguel de Zegada; y abuelo del R.P. Escolástico Zegada y de Fortunata Zegada, mujer de Gabriel Graz. Era dueño de las fincas de San Lorenzo de Calilegua y El Remate (Cutolo, VII, 801).

²¹ Nacido en Junio de 1769, hijo de Juan Martín de Pueyrredón y de Rita Dogan y Soria; hermano de Juan Martín de Pueyrredón; cuñado de Ambrosio Sáenz Valiente; marido de Juana Francisca Zegada, hija del Coronel y Teniente Gobernador Gregorio de Zegada y de María Mercedes Rubianez y Liendo Argañaráz; y cuñado de Julián Gregorio de Zegada, con quien sostuvo reiteradas reyertas políticas. Heredó de su suegro la Subdelegación de Correos de Jujuy en 1795, alcanzó el Coronelato en 1799, y fué designado Alcalde de Primer Voto de Jujuy en 1807. Fué 2o. Jefe del Ejército del Norte, falleciendo en 1812. Padre del Teniente Diego José de Pueyrredón, muerto en la batalla de Ayohuma (Cutolo, V, 611).

²² En efecto, Balmaceda se había casado con Francisca Benítez, sobrina del R.P. Pablo Benítez, S.J., Padre Superior de las Misiones, y del R.P. Blas de Silva, quien fuera ejecutado por los indios Payaguás en las vísperas de la rebelión Comunera; y hermana del Regidor Andrés Benítez (Saeger, 1972, 219; y Susnik, 1993, 51-56).

²³ Garavaglia, 1987, 256, nota 62.

²⁴ Coronel de Ejército y Caballero de Santiago, extendió las fronteras del Paraguay e introdujo la figura de los Administradores civiles de los pueblos de indios (Garavaglia, 1983, 143, 336-338). Marido de María Josefa de Igarzábal, hija del Capitán Antonio de Igarzábal y Goitía y de Bernarda de la Rivilla y Crespo Flores; y suegro de Fermín Javier de Aoíz y Larrazábal (JR, 1989, ítem 4510; y FB, IV, 50 y 360).

²⁵ FB, IV, 360; y JR, 1989, ítem 4510.

²⁶ Coronel de Ejército y Caballero de Santiago, hijo del General Antonio de Larrazábal y de Agustina Avellaneda; marido de Josefa Leocadia de la Quintana y Riglos (FB, IV, 114; y V, 253; y JR, 1987, ítem 1415; y 1989, ítem 4210).

²⁷ Coronel de Ejército, suegro del Corregidor de la provincia de Yungas José de Albizuri y Sagasti (FB, II, 265).

²⁸ JR, 1987, ítem 3231.

²⁹ nacido en Coria, Extremadura; hijo de Jacinto Marín y de Mauricia Antonia; marido de María Rosa Estefanía de la Quintana y Riglos (FB, IV, 243).

³⁰ Caballero de Alcántara y Comandante. Suegro del Teniente Coronel Agustín Casimiro de Aguirre y de José Manuel Prudent (FB, IV, 101).

³¹ Viola, 1985, 85-89.

³² Cabodi, 1950, 135, nota 260.

³³ yerno del General Alonso de Arce y Arcos y de María Báez de Alpoin y Lavayén (Fernández de Burzaco, I, 140). Para más datos ver Quevedo (1973), Arréllaga (1976), Albarenga Caballero (1977), Ferrer de Arréllaga (1985) y Romero de Viola (1987).

³⁴ marido de Juana Albizuri y Echauri, hija del Corregidor de la provincia de Yungas José de Albizuri y Sagasti.

³⁵ Tesorero de Real Hacienda, Caballero de la Orden de Santiago y Coronel de Ejército (FB, 1986-90, I, 58 y 140; y V, 206 y 207; y JR, 1989, ítem 5929).

³⁶ nació en Málaga, hijo de Pedro Antonio de Ribera y de Francisca Cayetana Espinosa de los Monteros. Fué Gobernador de Moxos, en donde había sostenido una dura disputa con el Presidente de la Real Audiencia de Charcas, General Ignacio Flores (Furlong Cardiff, 1954, 15-69; Massare de Kostianovsky, 1985, 95-119). Era marido de María Francisca de Sarratea, hija de Martín de Sarratea y de Tomasa de Altolaquirre; conuñado del Virrey Santiago de Liniers y del Administrador de Correos de Potosí Teniente Coronel de Artillería Angel Augusto de Monasterio (Udaondo, 1945, 762; FB, IV, 359; y JR, 1989, ítem 7165).

³⁷ Udaondo, 1945, 762; FB, IV, 359; y JR, 1989, ítem 7165.

³⁸ Céspedes del Castillo, 1985, 289.

³⁹ Casó a su sobrina Petrona Salcedo con Antonio José Escalada, hijo de Manuel de Escalada (Pillado, 1910, 218). Petrona era hija de José de Salcedo, natural de la Villa de Moquegua, y de Juana de Silva Rodríguez, natural de Santa Fé; y sobrina nieta del Teniente General y Gobernador Miguel de Salcedo (AGN, Protocolos, Registro 3, 1790, fs.350v.).

⁴⁰ tío de Nicolás del Campo, marido de Juana Maciel, hija del Maestre de Campo Manuel Maciel, natural de Corrientes, y de Isidora Fernández de Valdivieso (Crespo Naón, 1983, 73).

⁴¹ marido de Rafaela Francisca de Vera y Pintado, hija del Teniente General Francisco Antonio de Vera Mujica y de Juana Ventura de López Pintado; y conuñado de Juan José de Lezica y Alquiza (FB, IV, 143).

⁴² natural de Villafranca del Bierzo, León, hijo de Tomás Olaguer Feliú y de Josefa de Heredia y Domec; marido de Ana de Azcuénaga, hija de Vicente de Azcuénaga y de Rosa Benedicta de Basavilbaso; cuñado del Comandante Miguel de Azcuénaga, y conuñado de Gaspar de Santa Coloma y de Agustín Antonio de Erézcana (JR, 1989, ítems 5899 y 6161; y FB, II, 201 y 284).

⁴³ natural de Sevilla, hijo de Raimundo de Sobremonte y Castillo y de María Angel de Núñez y Carrasco; marido de Juana María de Larrazábal y Quintana, hija del Coronel y Caballero de la Real Orden de Santiago Marcos de Larrazábal y de María Josefa de la Quintana y Riglos (JR, 1989, ítem 4741).

⁴⁴ hijo del Conde Luis Henri de Liniers y de la Condesa Henriqueta de Bremond; marido en primeras nupcias de Juana Minvielle; y en segundas nupcias de María Martina de Sarratea, hija de Martín de Sarratea y de Tomasa Altolaguirre, concuñado del Gobernador del Paraguay Lázaro de Rivera y Espinosa de los Monteros (JR, 1989, ítem 4940; y FB, IV, 148).

⁴⁵ Socolow, 1987, 206.

⁴⁶ Real Provisión librada el 4-II-1758 por la Real Audiencia de La Plata.

⁴⁷ nieto del encomendero de Cabinda y Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano.

⁴⁸ Archivo General de Indias (AGI), Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, dirigido por el Prof. Carlos Mayo, de la Universidad Nacional de La Plata.

⁴⁹ *Ibíd.*

⁵⁰ El R.P. Bernabé Echenique y Urtubey era discípulo e íntimo amigo del R.P. José Manuel Peramás S.J., autor de las *Laudatione* Quinque.

⁵¹ Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades. Primo hermano de Gonzalo Terán Quevedo. Cayetano estaba casado en primeras nupcias con Bartolina Fernández, y en segundas nupcias con María Mercedes Amarante, hija del comerciante y frustrado minero José Amarante, y de Catalina de Quevedo y Soria (datos proporcionados por el Investigador Carlos Jáuregui). Amarante había contraído con comerciantes de Buenos Aires entre 1749 y 1751 cinco operaciones de fiado por valor de \$23.489 (AGN, Protocolos, Reg.4, 1749, fs.225; R.1, 1751, fs. 463; R.4, 1751, fs.145; y R.2, 1751, fs. 485 y 489). También había sido Amarante dueño de un trapiche para moler metal en La Punilla (Gould, 1983, 32). Desconocemos si este Amarante es el mismo casado con Catalina Arrascaeta, y suegro de Juan de Hormaeche, o si se trata de un homónimo. Terán Quevedo fué el Alcalde que en 1766 dió cuenta a la Audiencia de Charcas y al Virrey de Lima que el Gobernador Campero se había juntado con Prudencio Palacios, su suegro Estéban y León y el Alcalde Santiago Allende para impedir que él [Terán] pudiera dar ayuda a los Frailes Mercedarios (AGI, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

⁵² Ex-Teniente de Rey de Córdoba en 1744 (Acevedo, 1972, 254). Peninsular, casado con la cordobesa Ana Petronila Hurtado de Saracho (Dato proporcionado por Carlos Jáuregui), probablemente hermana de Catalina Hurtado de Saracho y Ordóñez, hija de Lorenzo Hurtado de Saracho y de Teresa Ordóñez. Catalina Hurtado era casada con José de los Reyes, natural de Huelva, Andalucía (LC, 1936,

I, 122). Este último era tío del fundador de la Hermandad de la Caridad Juan José Vélez y de los Reyes.

⁵³ Probablemente fuera Domingo Santibáñez, vecino de Salta, Síndico del Convento de San Francisco. En 1791 solicitó la devolución de lo que abonó con exceso por derechos de alcabala (AGN, Tribunales, Leg.S-10, Exp.19).

⁵⁴ muy probablemente se tratara de Francisco de Armesto y Allende, hijo de Francisco Armesto y de María de Allende y Losa (LC, I, 27); marido de Petrona Garay (AN, 1964, 85); y padres de Felipe Armesto y de Luisa Armesto y Garay, mujer de Mariano Moyano Cornejo (LC, I, 449). Estaba Francisco Armesto en el tercer grado de parentesco con sus tíos. Francisco Armesto y Allende era propenso a mantener pleitos por tierras con numerosos vecinos. En 1774 le dijo en un oficio al Alcalde de Córdoba que "...consta haber recaído en mí el derecho a las tierras de estancia" de San Antonio, a 8 leguas de Córdoba, en el Paso de la Cruz, que fueron de Doña Isabel de Mercado, y que hubo Armesto por compra que hizo al Monasterio de Santa Catalina de Sena (AHC, Escribanía N.1, Leg. 389, Exp.5). En 1775 mantuvo un pleito por tierras con Juan Ramallo (AHC, Escribanía N.3, Leg.23, Exp.3), y en 1777 fué demandado en un pleito de tierras por Luisa Gutiérrez (AHC, Escribanía N.1, Leg.389, Exp.5). Al fallecer Mariano Moyano en 1797 le deja bienes a su cuñado Felipe Armesto (AHC, Escribanías N.1, Leg.427, Exp.8).

⁵⁵ AGI, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata.

⁵⁶ Antonio de Arriaga al Exmo Sr. Pedro de Ceballos, Córdoba, 31-X-1777 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 2, Sala IX, 5-9-4).

⁵⁷ "...caminando en coche anduvo la Provincia que abraza sobre 400 leguas en 23 días, en cuyo viaje, como dijeron varios, ocasionó más daño a la Provincia, a excepción de no derramarse sangre, que han podido hacer los indios infieles en 20 años; pues con sólo decir, que para el tránsito de un monte y serranía intransitable, ocupó centenares de hombres, unos en cargar el coche, y otros en desmontar y cargar faroles, porque caminaba sin cesar de día y de noche, y sin pagar cabalgaduras, trabajo, herramientas ni aún bastimento que cada uno debía llevarlo" (AGI, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

⁵⁸ La duda cabe si se trataba de Clemente Guerrero o de Martín de Arrascaeta. Según Acevedo (1969) este escribano fué Guerrero (Acevedo, 1969, 18). Guerrero era natural de Cádiz, casado con Josefa de las Casas y Funes, hija del Maestre de Campo Pedro de las Casas y Correa, dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, sobre el Río III, por compra al Monasterio de Santa Teresa, y de Micaela de Funes (LC, II, 133). Su mujer se opuso al casamiento de su hijo José con su prima Petrona Garay (Pueyrredón, 1958, 250). Arrascaeta era natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón; marido de Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez; y primo hermano del Superintendente de la Santa Cruzada, Juez de Minas, y Alcalde de primero y segundo voto Gregorio Arrascaeta (Romero Cabrera, 1973, 27; y LC, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5).

⁵⁹ AGI, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata.

⁶⁰ AGI, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata.

⁶¹ Hijo de Gaspar de Mendiola, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí. Casó con Teresa de las Casas y Ponce de León, hija del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jaime y de Teresa Ponce de León y Bazán de Pedraza, y cuñada del Alcalde Marcos Ascasubi. Era hermano de Fr. José Ignacio de Mendiola, y con cuñado de Santiago de Allende y Losa (LC, II, 151).

⁶² Hijo natural de Francisco Armesto y de María de Allende y Losa (LC, I, 27). Marido de Petrona Garay (AN, 1964, 85); y padre de Felipe Armesto y de Luisa Armesto y Garay, mujer de Mariano Moyano Pacheco (LC, I, 449). Estaba Francisco Armesto en el tercer grado de parentesco con sus tíos. Armesto y Allende era propenso a mantener pleitos por tierras con numerosos vecinos. En 1774 le dijo en un oficio al Alcalde de Córdoba que "...consta haber recaído en mí el derecho a las tierras de estancia" de San Antonio, a 8 leguas de Córdoba, en el Paso de la Cruz, que fueron de Doña Isabel de Mercado, y que hubo Armesto por compra que hizo al Monasterio de Santa Catalina de Sena (AHC, Escribanía N.1, Leg. 389, Exp.5). En 1775 mantuvo un pleito por tierras con Juan Ramallo (AHC, Escribanía N.3, Leg.23, Exp.3), y en 1777 fué demandado en un pleito de tierras por Luisa Gutiérrez (AHC, Escribanía N.1, Leg.389, Exp.5). Al fallecer Mariano Moyano en 1797 le deja bienes a su hijo Felipe Armesto (AHC, Escribanías N.1, Leg.427, Exp.8).

⁶³ Natural de Santander, casado con María Mercedes Roldán y Allende, hija del Comisario General Bernardo Roldán y de María Allende y Losa, y prima hermana del Coronel Santiago Alexo de Allende y Mendiola y del Caballero de Carlos III Don Pedro Lucas de Allende Vicentelo. Felipe de Haedo y Mercedes Roldán eran padres de Tiburcia de Haedo y Roldán, mujer de José Paz de Codecido, padres a su vez del autor de las célebres Memorias, General José María Paz (LC, 1936, I, 27; y Calvo, 1939, IV, 169). También eran padres de María Josefa Pía Haedo y Roldán, mujer de José de Leániz y Luján de Medina, y abuelos de María Mercedes Leániz y Haedo, mujer del que fuera Gobernador de Córdoba Manuel Estéban Pizarro y Liria (Allende Navarro, 1964, 81). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

⁶⁴ En 1762 se lo procesa por contrabando de negros esclavos, en 1771 es asesinado por el negro Lorenzo, esclavo del Gobernador de Tucumán (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.216, Exp.4, fs.48v.), y en 1776 se le abre su sucesión (AHC, Escribanía N.2, Leg.31, Exp.1; Leg.52, exp.9; y Leg.57, Exp.6).

⁶⁵ Teniente Tesorero, Superintendente de la Santa Cruzada, Juez de Minas, y Alcalde de primero y segundo voto (AN, 1964, 86). Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de María Ferreira de Acevedo, poseedor este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Fué casado luego de 1744 con María de Allende y Losa. Era hermano de María Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de

Villamonte, padres de Estefanía y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; de José de Arrascaeta, casado con María Roldán y Allende; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta. Gregorio Arrascaeta era primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón, casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; y LC, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5). La herencia de Gregorio Arrascaeta tuvo toda suerte de incidentes, comenzando con su sobrino Justo Arrascaeta, quien disputó la propiedad de la estancia denominada la Yerba Buena, que hubo Don Gregorio por herencia de su hermano el Arcediano Dr. Marcos Arrascaeta (AHC, Escribanía N.3, Leg.42, Exp.16). Estos incidentes se extendieron a la herencia del primer Arrascaeta, procedente de España, que en su oportunidad cobrara el Coronel Marcos José de Larrazábal, al extremo que Juan de Hormaeche solicitaba en 1816 se le exhibiera su testamento (AHC, Escribanía N.1, Leg.447, Exp.2).

⁶⁶ Hijo de José Gaspar de Xijena Santistéban y de Agueda Céliz de Burgos, viudo de Francisca de Soria se casó en segundas nupcias en 1790 con Rosa de Argüello y Tejeda, viuda a su vez de Juan José Martínez de Betancur, e hija de Juan de Argüello y Baigorri y de Sinforosa de Tejeda y Ledesma (LC, I, 53). José Gaspar era hermano de Pablo Ignacio, casado con Teresa Espinosa de los Monteros, y primo hermano de Juan José y de Pedro Nolasco Xijena, padre este último del Dr. José Dámaso Jijena (Bustos Argañaraz, 1972, 9-13). Era José Prudencio deudor de Domingo de Basabilbaso y de José Almoríña Caro por valor de \$7080 (AGN, Protocolos, Reg. 2, 1762, fs.130v.; y Reg.3, 1764, fs.113). En tanto, los primos Pablo Ignacio y Juan José Xijena fueron deudores del comerciante porteño Pablo Ruiz de Gaona en tres transacciones por valor de \$12.000 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1767, fs.365v.; Reg.2, 1767, fs.208; y Reg.6, 1768, fs.257v.)

⁶⁷ Gallego, Coronel de Milicias de la Frontera, casado en primeras nupcias con Ipólita Garay y Molina, sin sucesión, y en segundas nupcias con María Josefa Echenique, también sin sucesión. Su primer esposa Ipólita Garay era hermana de Petrona Garay, la cual se desposó con el Alcalde Francisco Armesto y Allende, del Alcalde Provincial Domingo Garay, de Fernando Garay, de Teresa Garay, mujer de José de Ariza, y de Francisca Garay, mujer de Fernando de Arce y Bustillos (AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119). Su segunda esposa María Josefa Echenique, nacida en Noviembre de 1765, era hija de Francisco Xavier Echenique y del Barco, y de Rosa Tablada. Josefa Echenique era hermana de Petrona Isabel, mujer de Francisco del Signo y San Román, y de Gervasia, mujer de Lucas de Dízido y Zamudio. En 1779 querella al Maestre de Campo Diego de las Casas (AHC, Crímen, Leg.34, Exp.13). Lo heredó a José Benito de Acosta, su sobrino y albacea Don Pedro Martínez (AHC, Escribanía N.1, Leg.438, Exp.24).

⁶⁸ Estuvo preso con el Alcalde Provincial José Martínez, y con Don Manuel Isidoro Gutiérrez con motivo de la Expulsión de los Jesuitas (Learte, 1926, 216).

⁶⁹ Nacido en Lameo, Obispado de León, hijo de Andrés de Matorras y de Ana de Cires. Gobernador de Córdoba del Tucumán entre 1769 y 1770. Fueron sus fiadores por la suma de \$50.000 los comerciantes residentes en Córdoba Estéban Montenegro, Francisco Antonio Díaz, Bonifacio Aramburu y Bernabé Gregorio de las Heras (Acevedo, 1969, 137). Primo hermano del comerciante Juan Eusebio de Cires y Fernández de Cossio, y compadre de Eugenio Lerdo de Tejada (Acevedo, 1969, 210). Marido de Manuela de Larrazábal, hija del comerciante porteño Antonio de Larrazábal; y cuñado del Caballero de Santiago y Gobernador del Paraguay Coronel Marcos Larrazábal, del Coronel

Martín José de Echauri, del Coronel Juan Gregorio de Otálora, y del comerciante José Antonio de Iturriaga (FB, 1986-90, I, 137, 140 y 162; II, 265; III, 163; IV, 74, 113 y 298; y V, 94).

⁷⁰ Acevedo, 1969, 151.

⁷¹ Español, casado con María del Carmen Albornóz y Carranza, hija de José de Albornóz y Guevara y de Francisca Carranza Echenique, padre del que fuera Gobernador de Córdoba, José Xavier Díaz, quien a su vez estaba casado con Jenuaria Allende y Mendiolaza; de Juana Isabel Díaz, mujer del comerciante de mulas Gaspar Sáenz Bravo; y de María Clara Díaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (Calvo, I, 203). Era socio de su primo Juan Pérez de Bulnes.

⁷² Hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en primeras nupcias con Isabel Bustos y Ledesma, y en segundas nupcias con María Caldevilla (LC, 1936, 140). Pretendió en 1785 adquirir de los Dominicos la estancia de Diego Celis en \$2.000, y fracasó en el intento (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.242, Exp.12).

⁷³ Nacido en Lima en 1708 y designado primero Corregidor de Andahuaylas y luego en 1756 Gobernador de Córdoba del Tucumán. Sustituyó en este último cargo a Juan de Pestaña Chumacero, que debió pasar a cubrir la Presidencia de la Real Audiencia de Charcas (Acevedo, 1982, 63).

⁷⁴ Levillier, 1915, II, 154.

⁷⁵ Institución que prescribía en los Cabildos un intervalo de dos o tres años entre cargo y cargo (Hevia Bolaños, 1853, 14).

⁷⁶ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.98, Exp. 13, n.34. Lazcano (1936) dá como padres legítimos de María Isabel a Francisco Gigena y Juana Soria. Bedoya fué padre del Coronel Francisco Solano Bedoya y de José María y Elías Estanislao Bedoya (Lazcano, 1936, I, 60).

⁷⁷ Figura en la Matrícula de Abogados graduados en la Universidad de Charcas (Cutolo, 1963, 47 y 101).

⁷⁸ Levene, 1960, 122.

⁷⁹ Hijo del Maestre de Campo Bernardino de Albarracín Díez Zambrano, nacido en Salta, y de María Balmaceda de los Ríos, nacida en San Juan. Don Remigio era casado con Josefa Juana de Irrázabal Sánchez, hija de José de la Cruz de Irrázabal Herrera, nacida en Santiago de Chile, y de María Sánchez de Loria Jofré de la Guardia, con quien tuvo entre otros hijos a Doña Paula Albarracín, casada en 1801 con José Clemente Sarmiento y Funes, padres del autor de Facundo (Calvo, V, 28).

⁸⁰ Vecino de San Juan. Casado con Ana María Ladrón de Guevara (AGN, Tribunales, Leg.236, Exp.1). Asesinado en 1764 por una partida de indios (Espejo, 1954, II, 687). Padre de José Xavier Garramuño.

⁸¹ Archivo Nacional de Santiago de Chile, Informe R.A., vol. 491, Pieza 6, citado por Acevedo, 1963, 178.

⁸² Archivo Nacional de Santiago de Chile, R.A. vol. 1973, pieza 2, citado por Acevedo, 1963, ítem 808. Ver asimismo, Acevedo, 1966, 225-244. Cuando fué promovido al Corregimiento de Cochabamba, para su viaje a dicho reino, el Gobernador-Intendente de Potosí Francisco de Paula Sanz le informa en 1784 al Virrey del Río de la Plata Marqués de Loreto "...fué necesario lo costease, o supliese el dinero un criado que trajo de España, que más feliz en el laboreo de una mina separado de su amo había logrado una más que mediana fortuna" (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.20, Exp.25, fs.13).

⁸³ Comadrán Ruiz, 1962, 53-54.

⁸⁴ Archivo Nacional de Santiago de Chile, J.A. vol 148, Pieza 9; C.G. vol.711, n.8.317; C.G. volúmenes 997 y 998, n.17.774; y R.A. vol.557, Pieza 1, citados por Acevedo, 1963, ítems 878, 903, 905, 991 y 1008.

⁸⁵ Archivo Nacional de Santiago de Chile, R.A. vol.557, Pieza 1, citado por Acevedo, 1963, ítem 1031.

⁸⁶ Doctorado en Chile (Donoso, 1963; y Fuenzalida Grandón, 1972, 635). Nacido en Buenos Aires en 1714, hijo del Capitán Francisco Antonio Martínez de Salas y de Ana Rosa de los Ríos, viuda de Enrique Henríquez Nuño del Aguila, vecinos de Corrientes; casado con María Josefa Corvalán de Castilla y Chirinos, hija del Maestre de Campo Juan Corvalán de Castilla y de Angela Chirinos de Posada; padre de Judas Tadeo de Salas, integrante de la facción Sarracena que defendiera a los Jesuitas y al Virrey Cevallos; y suegro de José Antonio de Rojas, y de Ramón Martínez de Rozas y Correas de Larrea (Comadrán Ruiz, 1962, 42; y Fernández de Burzaco, IV, 12 y 290)

⁸⁷ AGN, Sala IX, Criminales, Leg.13, Exp.6, fs.11.

⁸⁸ Phelan, 1972, 604.

⁸⁹ *Ibídem*.

⁹⁰ *Ibídem*.

⁹¹ Casado con Nicolasa Corvalán de Castilla, hija de Juan Luis Corvalán de Castilla y de Angela Chirinos de Posada, conuñado del Dr.José Perfecto de Salas, de Pedro Nolasco de Correas y Villegas, de José Xavier Santander y Coria, de Matías de Godoy Lima y Melo, y de Manuel José de Godoy y Rojas (Calvo, I, 315; II, 361; y V, 176, y 184).

⁹² Hijo de Francisco Corvalán de Castilla y Clara Escalante Videla; cuñado de Hilarión Almandóz Puebla, de Onofre Lemos Ladrón de Guevara y de Gaspar Serrano; marido de Manuela Mayorga Molina; y suegro de Marcelino Videla Godoy y Clemente Segura Gamboa.

⁹³ AGN, Sala IX, Criminales, Leg.13, Exp.6, fs.11.

⁹⁴ *Ibídem*.

⁹⁵ En 1779 pide se le releve de la fianza que otorgó por Jacinto Camargo y Loayza al tiempo que

se le recibió de Corregidor en Mendoza (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.16, Exp.356). En 1768 acusa a varios vecinos poderosos de Mendoza por no querer pagar los derechos de alcabala (Archivo Nacional de Santiago de Chile, R.A. vol.2358, Pieza 15, citado por Acevedo, 1963, ítem 880).

⁹⁶ Marido de Bernarda Correa de Saa y Pardo Parraguéz, padre de Gavino Jurado, casado con María Mercedes de Puebla Molina; y suegro de Francisco Vargas, Pedro Nolasco Puebla y José Ignacio de la Reta (Calvo, IV, 29).

⁹⁷ Corregidor interino y Alcalde de primer voto en 1781 (Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta 16, Documento 7). Nacido en 1726, hijo de Juan José Moyano y de Francisca Corvalán; sobrino de Juan Luis Corvalán; marido de Anselma Godoy; padre del miembro de la Primera Junta Gubernativa Antonio Fulgencio Moyano; y suegro de José Matías Moyano y del Coronel Juan Nepomuceno Chenaut (Morales Guiñazú, 1939, 226).

⁹⁸ Alcalde de segundo voto en 1779 y 1794; y Procurador General en 1780 (Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta 16, Documentos 5 y 6; y Carpeta 17, Documento N.9).

⁹⁹ Alcalde de primer voto en 1782 (Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta 16, Documento 8). Marido de Lorenza Sanjurjo y suegro de José de Silva (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.132, Exp.3, fs.70; y Tribunales, Leg.55, Exp.4).

¹⁰⁰ hijo de Miguel de Videla y Pardo Parraguéz y de la santafecina Antonia de Aguiar y Montiel; casado en primeras nupcias con su prima Petrona Correa de Saa, hija de Francisco Correa de Saa y de María Pardo Parraguéz y Videla; y en segundas nupcias con Catalina Chacón; y padre del R.P. Ramón Videla S.J., fraile jesuita expulso (Calvo, IV, 334; y Verdaguer, 1931-1932, 440 y 485).

¹⁰¹ Nació en Pasajes, provincia de Guipúzcoa, hijo de Bautista Amigorena y de María Teresa de Anzorena; primo hermano del Licenciado Jacinto de Anzorena; marido de María Prudencia de Escalante; y si bien no tuvo descendencia legítima reconoció numerosos hijos naturales (Sosa Morales, 1965, 7). En 1779 representa contra el Alguacil Mayor Fernando Güiralde y el Alcalde de Primer Voto de la ciudad de Mendoza Ramón Martínez de Rozas sobre abusos cometidos (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.8, Exp.123). El mismo año protestan por su actuación como Maestre de Campo (AGN, Hacienda, Leg.15, Exp.323). En 1790 Pedro José de la Cuadra le inicia demanda por cobro de pesos (AGN, Comerciales, Leg.15, Exp.14). En 1791 pide la suma pagada por cinco cautivas (AGN, Guerra y Marina, Leg.17, Exp.30).

¹⁰² AGN, Sala IX, Criminales, Leg.13, Exp.6, fs.11.

¹⁰³ noveno hijo del Maestre de Campo José de Yegros Vallejo y de Francisca Ledesma Valderrama; marido de Tomasa Franco Torres; y padre del Comandante José Antonio Yegros y de María Josefa de Yegros, mujer de Pedro Pereira (Alvarenga Caballero, 1978, 222 y 252; Velázquez, 1981, 213-285; y Spangenberg, 1992, 428).

¹⁰⁴ Velázquez, 1981, 238.

¹⁰⁵ En 1765 Cabañas promovió una cuestión judicial en el Juicio de Residencia contra Fulgencio Yegros (Velázquez, 1981, 240). Esta cuestión obedecía a las acusaciones del Gobernador Interino Fulgencio Yegros de que Cabañas se hallaba implicado en la sublevación de la Villa de San Isidro Labrador de Curuguaty, ocurrida ese año (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.28).

¹⁰⁶ Rivarola Paoli, 1988, 148.

¹⁰⁷ AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.1, Sala IX, 5-3-7).

¹⁰⁸ Idem.

¹⁰⁹ Idem.

¹¹⁰ Rivarola Paoli, 1988b, 33.

¹¹¹ El mismo fenómeno se dió en Caracas (Lucena Salmoral, 1976, 481-88).

¹¹² AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 22, Exp.6, fs. 16v.

¹¹³ Nacido en Huésped, Arzobispado de Burgos, hijo de Mateo Martínez y de Antonia de Hoz; y marido de María Josefa de Castro, hija del comerciante Blas Alonso de Castro y de Magdalena de Almandos (FB, I, 72; y IV, 287; y JR, 1989, ítem 4826).

¹¹⁴ natural de la Villa de Torruella de Mongrín, Obispado de Gerona, Cataluña, hijo de Juan Viola y María Angela Pascual; y marido de María Ignacia Ibáñez de Echavarri, hija de Pascual Ibáñez de Echavarri y de Gabriela de Basavilbaso (JR, 1989, ítem 5465; y FB, IV, 46).

¹¹⁵ Nacido en Bilbao, hijo de Agustín de Erézcana y de Maria de Ocerín, casado en 1778 con María Eugenia Azcuénaga, hija de Vicente Azcuénaga y de Ramona de Basavilbaso; cuñado de Gaspar de Santa Coloma y del Virrey Antonio de Olaguer y Feliú; y suegro de José de Anzorena y Barón, natural del Tucumán (FB, 1986-90, I, 124 y 201; y II, 284; y JR, 1989, ítem 4669).

¹¹⁶ AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 22, Exp.6, fs. 16v. Los nombres de las mujeres los obtuve en JR, 1989, n.4669.

¹¹⁷ Comandante del Regimiento de Caballería de Montevideo, nacido en Utrera; hijo del Teniente Coronel de Milicias de Granada Francisco Castañón y de Sabina Reyna y Sáenz Montero de Espinosa; y casado en primeras nupcias con Dominga Almandos Puebla, hija de Francisco Almandós y Josefa Puebla; y en segundas nupcias con María Sabina Romagnon o Romairone, hija de Pedro Romagnon y de Francisca de las Cabezas; y padre del Coronel Bernardo José Castañón Almandóz (FB, 1986-90, II, 102-103; y JR, 1989, ítem 4575).

¹¹⁸ AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 22, Exp.6, fs. 16v.

¹¹⁹ Caballero de Carlos III, Contador Mayor del Tribunal de Cuentas, nacido en Navaleno, Osma, Castilla; hijo de Francisco de Andrés y de Catalina de Arroyo; marido de Ana Gertrudis de Pinedo, hija del Gobernador del Paraguay Agustín Fernando de Pinedo y de María Bartolina de Arce y

Báez de Alpoin; sobrino político de Juan de Vargas Machuca y de Blas Gazcón; y suegro del Oidor de la Real Audiencia de Charcas Juan María de Almagro (FB, 1986-90, I, 118 y 140; y JR, 1989, ítem 4568).

¹²⁰ Cutolo, 1968, 168.

¹²¹ Hijo de Antonio Gaspar de Pinedo Fernández de Valdivieso y de María Josefa de Montúfar y Frasco. Casó en primeras nupcias con Micaela Bilbao La Vieja y Peñaranda, hija de Antonio Bilbao La Vieja y Angela de Peñaranda; y en segundas nupcias previa dispensa con su prima Rafaela Pinedo, hija del Gobernador del Paraguay y Presidente de la Real Audiencia de Charcas General Agustín Fernando de Pinedo y de María Bartola de Arce y Báez de Alpoin (FB, 1986-90, V, 207; Socolow, 1987, 118; y JR, 1989, ítem 4722).

¹²² Hijo de Francisco Pedro de Casamayor y Abadie y de María Luz García de la Calle Robles (FB, 1986-90, II, 86).

¹²³ Nacido en Navarrete, Logroño, hijo de Pedro Medrano y de la Plaza y de María de Otárola. Casó en primeras nupcias en 1752 con Micaela Montaner, hija de Bartolomé Montaner y de Margarita de Oliva Jofré; y en segundas nupcias en 1764 con Victoriana Cabrera, hija del Contador de la Real Hacienda y Caballero de Santiago Francisco de Cabrera y de Antonia de Saavedra. Fué suegro del Contador del Tribunal Mayor de Cuentas José María Romero (Ezcurra Medrano, 1966, 128-138; FB, 1986-90, IV, 309; y JR, 1989, ítem 5207).

¹²⁴ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 28, Exp. 702, fs. 44.

¹²⁵ Caballero de la Orden de Carlos III. Nacido en Málaga en 1756, hijo de Ramón Antonio de Oromí y Castelló y de Agustina Martiller y Gómez Tubilla; marido de Indalecia Agustina de Lasala y Fernández de Larrazábal, hija de Juan Bautista de Lasalle y Bauchalet, conocido por La Sala, y de Juana Agustina Fernández de Larrazábal; y suegro de Manuel de Escalada, de Saturnino de Nadal y Guarda, y del Dr. Luis María Moxó y López (Martínez Gálvez, 1961, 268-269; Mariluz Urquijo, 1974, 142-143; y FB, 1986-90, IV, 402; y V, 9 y 78).

¹²⁶ Hija del Gobernador del Paraguay Agustín Fernando de Pinedo, natural de Burgos, Asturias, y de María Bartola de Arce y Báez de Alpoin (JR, 1987, ítem 2951; y JR, 1989, ítem 4568).

¹²⁷ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 28, Exp. 702, fs. 51. Nacido en Osma, hijo de Francisco Andrés y de Catalina de Arroyo; marido de Ana Gertrudis de Pinedo; y suegro de Juan María de Almagro y de la Torre (Ibarguren, 1961, 22; y FB, I, 118).

¹²⁸ Nacido en Malaga, hijo de Antonio Alonso de Almagro Madroñel y de Juana María de la Torre Caballero; sobrino del Coronel Francisco Almagro de la Torre; casado en primeras nupcias con su prima Joaquina Ruiz Román, hija de Francisco Ruiz Román y de Teresa Gonsález de Godoy; y en segundas nupcias con Ana de Andrés de Arroyo y Pinedo, hija de Juan de Andrés de Arroyo y de Ana Gertrudis de Pinedo; y suegro de Nicolás Sacristi y de Nicolás Rivarola (Schulkin, 1961, 33-42; FB, 1986-90, I, 71; y JR, 1989, ítem 6089).

¹²⁹ Sobrino carnal de José de Endeyza y Alvear, ajusticiado por los indígenas durante la rebelión

de Tupac Amaru, quien a su vez era yerno de José de Lezica y Torrezuri (Fernández de Burzaco, 1986-90, IV, 144). A juicio de Indalecio González de Socasa, formulado en 1795, Ybieta "...tiene una ambición declarada por las distinciones civiles, y por el honor de los empleos públicos, según el precio excesivo de \$6.000 en que compró el nombramiento de Teniente sustituto de Contador entre partes a sabiendas de que no podía dejarle lucro alguno un Ministerio que había de despachar por mano ajena por su poca inteligencia en materia de cuentas,..., además de otras pruebas que ha dado Ybieta en los Pleitos que trae sobre el uso del uniforme de Oficiales Reales por sólo el prurito de hacer figura" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.61).

¹³⁰ Regidor de la Villa de Potosí. En 1795 pide permiso para pasar a Potosí (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 6, f.197). En 1800 es procesado por injurias y calumnias (AGN, Criminales, Leg.46, Exp.9). En 1802 le prohíben votar en las elecciones concejiles (AGN, Interior, Leg.52, Exp.18). Ver en Morales (s/f) según Quesada (1988).

¹³¹ Nacido en Vizcaya, b. 17-2-1759, hijo de Antonio de Achával y de Ana de Sasturri, y casado con Josefa Barrón, hija de Diego Barrón y de Agustina Berecoechea. Era cuñado de Diego Barrón, Administrador de la Real Renta de Tabacos de Charcas, y primo del Intendente de La Paz y Director General de la Real Renta de Tabaco y Naipes Francisco Ortega y Barrón (FB, 1986, I, 33).

¹³² Dueño del Ingenio Canteros, marido de María Lizarazu, hija del Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de Santiago de Chile, Caballero de Carlos III y Conde de Casa Real de Moneda General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra (Lohmann Villena, 1947, II, ítem 120). Heredero legítimo de Alejandra de la Quintana, que lo fué por testamento de su hermana la Marquesa Bárbara de la Quintana, quien por igual institución hereditaria había sucedido en los bienes de su marido José de Palacios, y tío de Estéban Giráldez [nieto de Antonia de la Quintana] (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.92, Exp.51).

¹³³ En 1792 le arrienda un ingenio a Manuel Pío García (AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.18).

¹³⁴ Síndico Procurador General de la Villa de Potosí (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.150, Exp. 5). Era criollo, hijo de Juan Angel González de Socasa y González de Velazco, y de Lorenza Zorrilla del Barrio; y probablemente hermano del comerciante Pedro González de Socasa, quien contrajo en 1797 un par de operaciones de fiado con comerciantes porteños por valor de \$12.399. El apellido Socasa es originario del lugar de Villaverde, Valle de Soba, Santander (García Carraffa, XXXVIII, 214). En 1793 y 1795 le fué negado el grado de Teniente Coronel, que recién le es concedido en 1797 (AGN, Reales Ordenes, Libro 23, f.177; Libro 25, f.328; y Libro 27, f.177). Su conducta fué puesta en tela de juicio en numerosas Informaciones, que terminan recomendando su persona (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.28, Exp. 9 y 11; Criminales, Leg.43, Exp.1; Hacienda, Leg.88, Exp.2289; y Tribunales, Leg.86, Exp.2; Leg.97, Exp.11; Leg.128, Exp. 22; y Leg.129, Exp.7). Es designado Coronel de Milicias de Puno en 1798 (AGN, Despachos Militares y Cédulas de Premio (DMCP), Libro 9, f.186). Estallada la revolución de independencia se volcó al bando realista. A las órdenes del General Vicente Nieto perdió Potosí a manos del General porteño Antonio González Balcarce. Participó en las batallas de Cotagaita, Huaqui y Sipe-Sipe. Fué Gobernador de Salta entre agosto de 1812 y marzo de 1813. Vencedor en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma (Cutolo, III).

¹³⁵ Capitán de la Sala de Armas de la Villa de Potosí. Participa en la elección de los Situadistas (AGN, Comerciales, Leg.18, Exp.5). Fiador del Administrador de Tabaco de Potosí Ignacio Crespillo (AGN, Hacienda, leg.86, Exp.2250). En 1789 y 1792 contrajo con comerciantes porteños un par de operaciones de fiado por valor de \$124.284 (AGN, Protocolos, Registro 1, año 1789, fs.164; y Registro 1, año 1792, fs.48). Probablemente sobrino de María Nicolasa Bulúcu, mujer del Contador de las Cajas Reales y Tesorero de la Santa Cruzada Juan Antonio Foronda, suegros de Feliciano de Alquiza y de Ramón de Roxas y Orueta (Aranzaes, 1915, 303).

¹³⁶ Nacido en Abadiano, Durango, Vizcaya, hijo de Juan Bautista de Elorriaga y de Josefa de Urizar, casado con María Leocadia de Segurola, hija de Francisco de Segurola y de María Bernarda de Lezica (FB, 1987, II, 278). Entre 1796 y 1804 contrajo media docena de operaciones de fiado por valor de \$55.639 (AGN, Protocolos, Registro 1, año, 1796, fs.70v.; Registro 6, año 1796, fs.36v. y 43v.; Reg.1, año 1800, fs.66; Reg.5, año 1803, fs.64; y Reg.6, año 1804, fs.664).

¹³⁷ En 1795 se dictó una Real Provisión para que Ponte satisfaga la cantidad demandada por el Marqués de Rocafuerte y costas a que a sido condenado por la Real Audiencia de Charcas por la retención que tenía en calidad de depósito (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.176, Exp.3, fs.3v.).

¹³⁸ Hijo de Francisco Ignacio de Oliden y de Francisca Antonia de Erazo, y casado con Prudencia Molina, hija de Francisco Molina (FB, 1990, V, 59).

¹³⁹ Alcalde de Segundo Voto de Jujuy, probablemente hermano de Pedro Zenavilla, marido de María Justa Allende y Funes, hija de Benito Antonio de Allende Vicentelo y de María Mercedes Funes (Lazcano, I, 28).

¹⁴⁰ socio de Juan Estéban de Anchorena y Domingo de Ezcurra. Entre 1768 y 1785 contrajo con mercaderes porteños cuatro operaciones de fiado por valor de \$8544.

¹⁴¹ Subdelegado del Partido de Atacama. Hijo de Juan Antonio Gainza y Sopena y de María Rosa Sánchez de Loria, casado con María de los Dolores de Ascó, hija del Capitán de Dragones Juan de Ascó y de María Luisa de Merlos, suegro de Ramón Aquino, y conuñado de Juan Bautista de Aguiar (FB, 1986-1988, I, 177; y III, 103-104).

¹⁴² Arrendatario del Ingenio de la Purísima Concepción de Turú.

¹⁴³ Natural de Oñate, hijo de Domingo de Orueta Balansátegui y de Ana María de Eguinoa, natural de Elgueta (García Carraffa, LXIII, 271). Desconozco su parentesco con Miguel de Orueta, chileno, desposado en 1703 con Josefa Díez de Medina, padres de María de Orueta, mujer de Juan de Rojas, quien a su vez era padre de Don Ramón de Rojas y Orueta, el suegro del Brigadier General Don Sebastián de Segurola (Aranzaes, 1915). Orueta era el azoguero más bien parado, y de más grueso giro, por trabajar en diez cabezas de ingenio, y por ser también el que con más exactitud, escrupulosidad, y distinción llevaba las cuentas de sus beneficios y explotación.

¹⁴⁴ Dueño en 1786 de las labores San Agustín y San José (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.37, Exp.965).

¹⁴⁵ Arrendatario del ingenio Ichuni en 1788, del ingenio Chaca en 1797, y del ingenio San Miguel en 1800 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.71, Exp.19; Justicia, Leg.36, Exp.1055; y Hacienda, Leg.95, Exp.2461). Contrajo matrimonio primero con Carmen Petrona Scholl y Quintanilla, hija del azoguero Miguel Scholl y Quintanilla; luego con Rosa Segovia; y finalmente con Clara Zamudio, hija adoptiva del azoguero Pedro Zamudio. En 1809, Indalecio González de Socasa, en oficio reservado dirigido al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, advierte que "...Don Pedro, es hombre de bien, y fué uno de los más pudientes, con los auxilios que se repartieron de la azoguería, ha caído con el tiempo en la mayor inopia, hasta no poseer bienes algunos libres de hipoteca, por tenerlos todos gravados con la responsabilidad, a los gruesos suplementos que ha ido negociando para el tráfico de la minería= Desconfiando el público de su solvencia, celebró acta este illustre Cabildo en 7. de marzo de este año, para que rindiese las cuentas de su administración, sin duda por el recelo de que pudiese haber imbertido en beneficio de su trabajo, los fondos que hubiese ido recaudando. En el siguiente Cabildo, inculcaron la misma resolución; pero todo quedó eludido con haber expresado el escribano de cabildo, que no había tenido lugar para hacerle saber la providencia, sin que se hayan rendido las cuentas, ni oblado los productos hasta la fecha, sin embargo de que se hizo uso de ellos, para remitir 12 mil pesos al Excelentísimo señor Liniers, en pago de otros tantos que por donativo gracioso para él y sus hijos, prometió contribuir este Cabildo por años del ramo de propios" (Mayo Documental, X, 106).

¹⁴⁶ Capitán de Milicias, Azoguero del partido de Tinta, Potosí, y Alcalde de Hermandad de la Villa de Potosí. Era hijo natural de Juan de la Torre y Ana María Cardozo "...ambos a dos tenidos y reputados por personas nobles y distinguidas en estas Provincias" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Casó con María del Carmen Carrasco. Su testamentaría se abrió en 1801 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.50, Exp.4)..

¹⁴⁷ Oidor Honorario de Charcas Teniente Gobernador de Potosí Pedro Vicente Cañete al Sr. Gobernador Intendente Francisco de Paula Sanz, Potosí, 26 de enero de 1800 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.79, Exp.12).

¹⁴⁸ Ibídem.

¹⁴⁹ Ibídem.

¹⁵⁰ Ibídem.

¹⁵¹ Luego se arrepintió del apoyo brindado a dicha facción para comenzar a atacarla duramente (Saguier, 1989). Sobre Cañete, ver Just Lleó, 1994, 48-52; 220-221; y 359-361.

¹⁵² AGN, División Colonia, Justicia, Leg.40, Exp.1197.

¹⁵³ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.40, Exp.1197.

¹⁵⁴ Idem.

TOMO VII

CAPITULO 6

La inmigración de comerciantes peninsulares. Su impacto en el nepotismo y el etnocentrismo practicados en los Cabildos (1760-1810)

(publicado parcialmente en 1992 en la revista *Andes. Antropología e Historia* [Salta: CEPIHA y Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta], 5, 1991, pp.89-124; bajo el título: "La lucha contra el nepotismo en los orígenes de las Reformas Borbónicas. La endogamia en los Cabildos de Salta y Tucumán (1760-1790)", y en *Anuario de Estudios Americanos* [Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, XLVIII, 1991, pp.349-389]; bajo el título "Esplendor y derrumbe de una élite contrarrevolucionaria: El clan de los Allende y el ajusticiamiento de Cabeza de Tigre"), rescensionado en *Historical Abstracts* [Sta. Bárbara, Cal.], v.44, Part A, n.3, 1993, n.9432, p.766; y regist. en *HLAS*, v.54, 1995, ítem 2568;

Aquellas familias del patriciado que no poseían bienes como para constituir dotes respetables, pero sí contaban con una cuota de poder político considerable dotaban a sus yernos o parientes políticos con cargos electivos en los Cabildos, o con cargos en los organismos estatales o para-estatales (Temporalidades, Correo, Renta de Tabaco, Milicia Provincial, Vicariato, Santo Oficio, Cabildo Eclesiástico, Real Hacienda, etc.). Como entonces los patriciados locales se las ingeniaban para eludir las normas jurídicas, casando a sus hijas con comerciantes peninsulares, la Corona se vió asimismo obligada a reiterar por Reales Cédulas la prohibición del parentesco de los cabildantes dentro del cuarto grado civil. No obstante la instauración de estas normas, los patriciados locales lograron evadirlas arguyendo la prelación del Derecho Común "...que permite puedan ser regidores padre e hijo, y dos hermanos".¹ Según dicho Derecho Común

"...solo se prohibía el que los regidores hermanos, pudiesen votar unos por otros, padre por hijo, de cuio tenor se infiere, el que no se prohíbe el que puedan tener voto dichas personas, como no sufraguen uno por otro".²

Fracasada también la implementación de la alternativa,³ como mecanismo utilizado por la corona para controlar los cabildos --por cuanto los criollos casaban sus hijas con españoles europeos, a quienes colocaban en los oficios concejiles-- aquellos funcionarios que ponían en tela de juicio las situaciones adquiridas entraron a cuestionar el parentesco de los gobernantes.⁴

En principio, el aluvión inmigratorio o presión demográfica externa varió notablemente de una

provincia a otra, alterándose de esa forma su repercusión política, en especial el grado de localismo manifestado. Para medir esa variación hemos elaborado un ranking de la inmigración, tomando como supuesto que los comerciantes peninsulares estaban compuestos por los varones españoles adultos solteros, entendiendo por españoles a los varones blancos. Dicho ranking fué elaborado en base a las transacciones notariales de los comerciantes que se internaban al interior del cono sur del Virreinato Peruano, en el período comprendido entre la Paz de París (1763) y la Paz de Versailles (1782), y a la Tabla H-I, fundada en el padrón de 1776, publicado por Larrouy (1927), correspondiente a un año de paz. Su proporción sobre el total de la población masculina adulta daría un índice de la importancia relativa de dichos varones españoles adultos solteros. En efecto, en el Cuadro F-A, encabezan el ranking de posiciones aquellas ciudades de provincia que contaban con comerciantes procedentes de Buenos Aires, como Santiago del Estero con el 25,8%, Tucumán con el 23,4%, Córdoba con el 13% y Salta con el 12%.⁵ Postreras en el ranking figuran aquellas ciudades de provincia escasas de comerciantes procedentes de Buenos Aires como La Rioja con el 10,3%, Jujuy con el 9,9% y Catamarca con el 5,75%.⁶

Asimismo, la resistencia demográfica interna a la presencia del aluvión inmigratorio varió notablemente de una provincia a otra, alterándose de esa forma su impacto político, en especial el grado de localismo manifestado. Para medir esta otra variación hemos elaborado un ranking del patriciado, tomando como supuesto que los vecinos patricios estaban compuestos por los varones españoles adultos casados. Este último ranking fué elaborado también en base a la Tabla H-I, fundada en el padrón de 1778, publicado por Larrouy (1927). Su proporción sobre el total de la población masculina adulta daría un índice de la importancia relativa de dichos varones españoles adultos casados. En efecto, en el Cuadro F-B, las ciudades de Tucumán y Salta, donde las masas indígenas pesaban demográficamente menos que en el Alto Perú, estaban tercera y sexta en el ranking del número de patricios sobre el total de la población, con el 33,16% y el 17,33% respectivamente. Postrera en este ranking figura Catamarca, con el 14%, ciudad de provincia escasa de varones españoles adultos casados. En cuanto al Cabildo de Salta, este había estado hasta la expulsión de los Jesuitas (1767), controlado por una oligarquía constituida por las casas de los Arias Rengell y la de los Saravia, en especial por los regidores Félix Apolinario y José Manuel Arias Rengell e Hidalgo, conquistadores del Chaco Gualamba.⁷ Con dicha expulsión la más dinámica casa de los Cornejo, influida por el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero,⁸ ocupó gran parte del escenario político. Quienes tuvieron a su cargo poner la Real Orden de expulsión en ejecución fueron los propios hermanos Fernández Cornejo, llegados recientemente de Moquegua, aunque nacidos en Tacna.⁹ Ellos fueron Juan Adrián,¹⁰ el Dr. Pedro Vicente,¹¹ y Antonio Fernández Cornejo y Rendón.¹²

La perpetuación de oligarquías. El caso de Tucumán.

En cuanto a Tucumán, las designaciones efectuadas en 1768 por influencia del Gobernador Campero, del Defensor de Temporalidades, recaída en el Fiel Ejecutor Propietario Coronel Diego Ignacio Aráoz del Campo,¹³ y del Alcalde de primer voto Juan Bautista del Campo, vino a acentuar la consolidación del patriciado, con su consiguiente repercusión en el Cabildo, pues su hijo Pedro Antonio Aráoz y Paz de Figueroa,¹⁴ llegó a desempeñarse como Alcalde de segundo voto en 1772, como Expedicionario del Chaco en 1774, y como Fiel Ejecutor (oficio heredado de su padre) entre 1771 y 1775; y su otro hijo Diego Miguel Aráoz, fué Cura Vicario de Monteros. Asimismo, el Gobernador Campero apoyó al primo hermano de estos últimos, Miguel de Aráoz y Echávez,¹⁵ quien alcanzó a ejercer como Alcalde de Primer Voto en 1765 y 1772.¹⁶ Más aún, el rechazo público que el Cabildo de Tucumán, liderado por Pedro Antonio Aráoz, hiciera en 1772 del Administrador de la nueva Renta de Tabaco Gaspar de Salcedo y su aliado Fermín Vicente Texerina y Barreda,¹⁷ consolidó al clan de los

Aráoz.¹⁸ Sin embargo, la unidad de este clan familiar no estaba garantizada, pues a la muerte de Diego Ignacio Aráoz, dueño de un patrimonio que rondaba los \$7.000, sus hijos Pedro Antonio y Diego Miguel se disputaron la herencia.¹⁹

Por otro lado, el sobrino segundo de estos últimos, el Fiel Ejecutor Juan Antonio Aráoz y Sánchez de la Madrid,²⁰ un renegado de la familia Aráoz, conjuntamente con el Regidor Francisco de Texerina y Barreda,²¹ impugnaron en enero de 1778 las elecciones del Cabildo de Tucumán, recaídas en miembros de la facción liderada por el Regidor y Administrador de Correos José Fermín Ruiz Poyo,²² cuñado del Fiel Ejecutor, "...por ser violatoria a una Real Cédula que trata sobre la oligarquía [primera vez que se utiliza este término en el Río de la Plata]".²³ De resultas de dicha denuncia, la "oligarquía" de los Aráoz, que ya se había cuestionado en 1777, parecía sin embargo que en 1780, 1781 y 1782 se perpetuaba en el poder, aunque ahora dirigida por el Regidor Ruiz Poyo. Esta sospecha se basaba en los testimonios obrados en diversos juicios. En uno de ellos, ocasionado por las elecciones de 1780 y sustanciado en 1781,²⁴ dirigido contra la facción liderada por Ruiz Poyo, el Alcalde Provincial y elector del Cabildo Francisco Javier Sánchez de la Madrid,²⁵ era denunciado por encabezar una trenza de intereses dinásticos. Sánchez de la Madrid era, como se puede visualizar en el Cuadro T-I simultáneamente tío carnal de Catalina Aráoz, la mujer del Veinticuatro Fermín Ruiz Poyo; cuñado y deudo consanguíneo con José González Thames;²⁶ primo hermano por su madre de María Josefa Villafañe, mujer del Maestre de Campo José Fermín de Molina y López; tío de la mujer del Alcalde José Velarde;²⁷ y tío carnal de un yerno del Alcalde Sargento Mayor José de Figueroa Mendoza y Cabrera.²⁸ En el mismo juicio, ocasionado por las elecciones de 1780 --en que la parcialidad de Ruiz Poyo, compuesta por cinco electores, eligió para alcalde de primer voto al Sargento Mayor José Figueroa,²⁹ y para alcalde de segundo voto a José Velarde, y las otras parcialidades compuestas de tres electores eligieron a Vicente Escobar y Envila,³⁰ y Martín Angel Varón,³¹-- se cuestionaba a

"...José Figueroa [Mendoza],..., consuegro con una hermana del Alcalde Provincial Sánchez de la Madrid, y a José Velarde, casado con [María Teresa Villafañe] sobrina e hija de primo hermano del Alcalde Provincial y prima segunda con [Catalina Aráoz] la mujer de Ruiz Poyo".³²

Un año más tarde, en 1781, Ruiz Poyo, el Alcalde Provincial Francisco Javier Sánchez de la Madrid, y Juan García Cárdenas,³³ eligieron para Alcalde Ordinario de primer voto a José Miguel Medina,³⁴ y para Alcalde de segundo voto a Julián Ruiz Huidobro.³⁵ De los cinco vocales que le dieron su voto, Vicente Escobar alegaba que la elección era nula porque "...el Alférez Simón Domínguez,³⁶ y el Fiel Ejecutor Pedro Antonio Aráoz,³⁷ son parientes de Medina".³⁸ Una representación de treinta y cinco vecinos,³⁹ y los argumentos de Ruiz Huidobro avalaron la elección. No obstante ello, el Gobernador-Intendente de Salta Andrés Mestre,⁴⁰

"...despreció la elección de aquel Consejo,...y procedió a nombrar por sí solo por Alcalde de primer voto a Miguel Laguna,⁴¹ y por Alcalde de segundo voto a Juan Gregorio de Aráoz [y Campo Avila],⁴² sujetos no incluídos en la elección del Cabildo".⁴³

Más aún, so pretexto de la autonomía del ayuntamiento Tucumano, el Justicia Mayor Juan Silvestre Deheza y Helgueros,⁴⁴ miembro conspicuo de la facción liderada por Ruiz Poyo e íntimo socio de los comerciantes vinculados al Consulado de Lima,⁴⁵ se opuso a que su colega de Santiago del Estero General Antonio García Villegas actuara en la jurisdicción de San Miguel de Tucumán, para levantar una información sumaria relacionada con la antedicha acusación. Dicha oposición levantó la sospecha

de que la perpetuación de una "oligarquía" era una acusación cierta. El apoderado de Fermín Vicente Texerina y Barreda, de Manuel Padilla y de Martín Angel Varón, que lo era Joaquín Monzón,⁴⁶ le imputaba al Justicia Mayor Deheza y Helgueros, que para el rechazo judicial practicado tuviera en su devoción "...todos los individuos del Cabildo, pues el que no es hermano es pariente en grado muy próximo".⁴⁷ Asimismo, Monzón se lamentaba que

"...el espíritu de conformidad, unión y confraternidad que les inspira la sangre que ierve en sus venas, sea el que rija el de conformidad a todo lo que se practicaba,...pues todos viven reunidos en un centro de reconciliación siempre que se trate de aniquilar a un miembro del público, que no es de su facción".⁴⁸

Refiriéndose al Justicia Mayor Helgueros, Monzón advertía con un giro lleno de satírica malicia que

"...vive en el centro, no como aquel que ministra la Paz, según el Oráculo, llenando la Casa consistorial de aquel olor suave, que despide el Bálsamo y buen ungüento del exemplo, sino antes bien la llena de feto, sólo agradable a sus parciales, que tienen habituados los órganos al olfato de esta sensación".⁴⁹

En el mismo escrito Monzón sostenía creer que "...siendo todos tan unos en la carne por el enlace de parentesco quanto lo son en el espíritu,...se unirán a pretextar algún informe siniestro, que todo se logrará a medida de sus inicuos pensamientos".⁵⁰ Pero que Informe podrán formalizar, se preguntaba Monzón

"¿...que fuera de estar no sólo afecto a los reatos de obrepción y subrepción,⁵¹ no esté también ilustrado con las figuras del hiperbaton,⁵² de la anfibolia,⁵³ del cohecho, del estelión,⁵⁴ del monopolio (sic), del soborno, y de la inteligencia ninguna otra a la verdad?".⁵⁵

De resultas de haber obstaculizado el cumplimiento de la delegación hecha en Pedro Antonio Aráoz por el General García Villegas para que se levantara dicha información sumaria, el Gobernador de Salta le hacía saber finalmente al Cabildo de Tucumán por Providencia del 30 de diciembre de 1782 que Deheza y Helgueros cesaba en el cargo de Justicia Mayor. Finalmente, pese al apoyo que el Cabildo le brindara, el Justicia Mayor Deheza y Helgueros tuvo que dejar sus funciones. No obstante su renuncia, el conflicto en el seno del Cabildo no se resolvió, por cuanto también en 1783 el Gobernador de Salta se negó a confirmar las elecciones de dicho año, remitiendo los oficios a consideración del Virrey. Días después el Gobernador de Salta comunicaba al Cabildo de Tucumán que había nombrado interinamente de Gobernador de Armas a Vicente Escobar, y que se había repuesto como Regidor 24 a Texerina y Barreda, el que era aliado de Monzón, Padilla, y Varón.⁵⁶

Incluso los créditos que devengaban las Temporalidades solían generar favoritismos fundados en el parentesco. En una causa iniciada por el Juez Subdelegado de la Ciudad de Tucumán, apoderado de las Temporalidades, Mariano Zavaleta,⁵⁷ se quejaba a la Junta Provincial de Temporalidades que el Alcalde de Segundo Voto Pedro Antonio Aráoz, exigiese un crédito por el importe de unas mulas, perteneciente a las Temporalidades, a la Testamentaria de José Fermín Ruiz Poyo, primer marido de Catalina Aráoz, y no a la Testamentaria de José de las Muñecas, segundo marido de dicha Catalina Aráoz.⁵⁸ Zavaleta atribuía dicho favoritismo a los "respetos del parentesco" que se interesaban a favor de la pretensora María Elena Alurralde, viuda de Juan de las Muñecas y mujer de José Ignacio Garmendia.⁵⁹

Las pluralidades capitulares. El caso de Santiago del Estero.

La importancia numérica de los peninsulares (17) radicados en la ciudad de Santiago del Estero --sobre un total de 128 supuestos patricios (vecinos casados), y 1.315 negros, mulatos y zambos-- concedió el pretexto para provocar también en ella intensos conflictos a nivel municipal. En enero de 1785 José Bravo de Rueda,⁶⁰ le manifestaba al Brigadier Andrés Mestre que habiendo merecido su persona y la de José Lorenzo Gonsebat,⁶¹ la pluralidad o mayoría de votos en el cabildo "...comenzó el demonio a fraguar tantos enredos que debilitando las más sanas intenciones arrastró con su malicia a la más memorable iniquidad".⁶² El caso fué que pretendiendo los dos Alcaldes y los dos Regidores Propietarios elegir en su lugar de Alcalde de segundo voto a José Antonio López de Velazco,⁶³ Bravo de Rueda tuvo que impugnarlos "...por ser el Alcalde de primer voto su primo hermano, el de segundo voto su concuñado, el Regidor Alguacil Mayor [José Miguel Zilveti] también su concuñado, y el Regidor Fiel Ejecutor aparejado con el defecto y tacha de escandaloso público".⁶⁴

El cuarto grado de parentesco. El caso de Córdoba.

En Córdoba, la ciudad que después de Buenos Aires contó con el mayor porcentaje de comerciantes peninsulares, el nepotismo ocupó uno de los lugares más asiduos entre los problemas de derecho público analizados por los juristas y letrados del coloniaje.⁶⁵ Para abordar dicho tema los letrados acudieron a las obras más célebres, entre las cuales descolló la Curia Filípica. El Cabildo de Córdoba recordaba en 1780 que la Curia Filípica contemplaba los casos de elecciones concejiles, y en 1800 el Alcalde Mayor Provincial Antonio Arredondo, hacía referencia a la Novísima Recopilación.⁶⁶ Merced a la recepción del derecho hispano en tierras de América, los peninsulares advenedizos pudieron argumentar jurídicamente en sus litigios con las elites criollas. Por representar esta recepción uno de los principales capítulos de cuantos integraron el proceso general de la colonización, mereció siempre la máxima atención de los historiadores.⁶⁷ En Córdoba, el Alcalde Nicolás García Guilleo,⁶⁸ ligado por parentesco político con la casa patricia de los Echenique,⁶⁹ denunciaba en 1780, el incumplimiento de la Real Provisión del 20 de agosto de 1641, que condenaba la designación de alcaldes relacionados entre sí dentro del cuarto grado de parentesco, es decir hasta primos hermanos. Tres años antes, en 1777, para impedir el ingreso del candidato a Regidor José de Ariza,⁷⁰ también ligado por parentesco a la casa de los Echenique, el Cabildo de Córdoba, controlado por los Allende,⁷¹ argüía que la Ley 53, título 4, libro 8 de la Novísima Recopilación "...prohíbe el que ni los Oficiales Reales, ni sus hijos, deudos, criados, ni allegados puedan tener estos reximientos".⁷² Los Allende habían tomado conciencia de la importancia crucial de copar los oficios venales y honoríficos de los Cabildos en sus frecuentes viajes, que iban desde Buenos Aires hasta Potosí, para vender mulas. Siendo Ariza tan allegado al ex-Tesorero de la Real Hacienda de Córdoba y Teniente de Oficiales Reales Carlos Estela, "...así por la estrechísima amistad que con el mantiene, cuanto por el oficio de Defensor de Real Hacienda que obtiene", el Cabildo entendía que debía aplicarse dicha prohibición y que Ariza no debía obtener el oficio subastado.⁷³ Es preciso hacer presente, decía su concuñado Fernando de Arce y Bustillos,⁷⁴ también emparentado con la casa de los Echenique, en un alegato jurídico presentado en el Cabildo de Córdoba en 1777, que el Alcalde de primer voto Antonio de la Quintana y Sebreros,⁷⁵ era yerno del General Tomás Allende y Losa,⁷⁶ y que José Allende y Losa,⁷⁷ y Santiago Allende y Losa,⁷⁸ eran hermanos de Tomás de Allende así como Regidores Propietarios de número.⁷⁹ También hacía patente Arce y Bustillos que dichos Allendes

"...pusieron tacha y objeción a la postura [que hiciera] José de Ariza,...y que después de la objeción hizo postura y oposición a este mismo oficio de Ariza, el contenido Tomás de Allende,

para un hijo suyo [Pedro Lucas]".⁸⁰

Esta corruptela ocurría al mismo tiempo que el que luego fué su concuñado Francisco Armesto y Allende, "...hacía postura a otro oficio".⁸¹ De esa manera, se veía a las claras, para Arce y Bustillos,

"...que el espíritu de la objeción que se puso a José Ariza, y oposición a mi persona no es otro que el de vincular todos los oficios en una Casa para poder distribuir los demás onerosos de la república continuamente entre sí, y que las demás familias y vecinos de honor del Pueblo, carecen de estos honores y tal vez de la justicia en sus causas, por vincular las varas en esta misma conformidad".⁸²

Ponía también de relieve Arce y Bustillos que todos estos señores Allende "...son los más distinguidos en caudal en esta ciudad, y que tienen entre sí el mayor comercio della, que es el de las mulas".⁸³ Por lo cual era natural concebir, para Arce y Bustillos, "...que para sostener este [comercio] con los adelantamientos [fiados en el pago de la sisa y la alacabala] que se prometen procuren [los Allende] estos oficios para el mayor respeto de sus Personas".⁸⁴

Pero para enfrentar las prácticas centralizadoras de las autoridades virreinales las elites oligárquicas o patriciados de los Cabildos del interior del espacio colonial recurrieron, en la defensa de su propia legitimidad, a la manipulación del derecho consuetudinario así como también la sátira literaria. El influjo consuetudinario en el derecho indiano se percibía, a juicio de Tau Anzoátegui (1987), no sólo en el gobierno eclesiástico, el Real Patronato, las encomiendas, y los diezmos y los tributos, sino también en el gobierno y la administración seculares. En esta última, los elementos consuetudinarios se advertían también no sólo en las regalías del rey, los despachos de cédulas y bulas, el ceremonial, la recepción y juramento de los virreyes, el salario de los corregidores, y la actividad de la Contaduría Mayor y los oficiales de la Real Hacienda, sino a su vez en la elección de los propios alcaldes ordinarios.⁸⁵ Para dirimir el resultado de elecciones capitulares cuya legitimidad era cuestionada dichas elites esgrimieron el pensamiento de Castillo de Bobadilla,⁸⁶ y de Solórzano y Pereira;⁸⁷ para quienes la fuerza de la costumbre estaba encarnada en los casos históricos comparados.⁸⁸ Es con motivo de las elecciones capitulares de Córdoba de 1778 que --al producirse la quinta crisis de relevancia política en lo que iba del siglo-- se puede advertir claramente el rol vital jugado por el derecho consuetudinario en la resolución de los conflictos suscitados en contiendas electorales capitulares. La mayoría del Cabildo de Córdoba, controlado en 1780 por los regidores propietarios José y Santiago de Allende y Losa, y su sobrino segundo José Antonio de Allende y Argüello,⁸⁹ rechazaba la denuncia del Alguacil Mayor García Guilleo alegando que el índice alfabético de las Provisiones Reales por él citado no hacía fe por estar ilegible, y que por ende había que estarse al Derecho Común "...que permite puedan ser regidores padre e hijo, y dos hermanos".⁹⁰ Según dicha mayoría concejil, en los textos jurídicos anteriores a la Real Provisión citada, como la Curia Filípica,

"...solo se prohibía el que los regidores hermanos, pudiesen votar unos por otros, padre por hijo, de cuyo tenor se infiere, el que no se prohíbe el que puedan tener voto dichas personas, como no sufraguen uno por otro".⁹¹

Más aún, aunque hubiere sido cierta la Real Provisión citada, el Fiel Ejecutor José de Allende y Losa, alegaba que "...estaría derogada por la inmemorial costumbre que se ha observado en esta ciudad, comprobada con innumerables actos de esta naturaleza que tienen fuerza de ley".⁹² En apoyo del argumento de la mayoría del Cabildo de Córdoba, José Prudencio Jixena,⁹³ profundo conocedor de la

historia de cada una de las Gobernaciones, citaba en 1780, como jurisprudencia o precedentes a favor de la familia Allende,⁹⁴ los casos de nepotismo de los hermanos Echenique y Las Casas en Córdoba, los López de Velazco en Santiago del Estero,⁹⁵ los Aráoz en Tucumán,⁹⁶ los Martínez de Yriarte en Jujuy,⁹⁷ los Nieva en Catamarca,⁹⁸ los Villafañe en La Rioja,⁹⁹ y los Arias y los Cornejo en Salta.¹⁰⁰

Como secuela inmediata de la imposición de la Real Cédula sobre la alternativa, se había elegido en Córdoba en 1765 como alcalde de primer voto al patricio Dalmacio Vélez,¹⁰¹ quien se arrogó el título de Justicia Mayor,¹⁰² y como Alcalde de segundo voto al peninsular José del Portillo,¹⁰³ ambos ligados por afinidad política a la Compañía de Jesús y por parentesco a la Casa de los Echenique. El resultado de estas elecciones fué confirmado, contra todo derecho, por el Alcalde Provincial José Martínez González, marido de Clara Echenique y Urtubey.¹⁰⁴ Esta confirmación, que perjudicaba las ambiciones del Gobernador Juan Manuel Fernández Campero,¹⁰⁵ así como las de sus socios, los hermanos José Allende y Losa,¹⁰⁶ y Santiago Allende y Losa,¹⁰⁷ ambos aunados en la manipulación del Ramo de Sisa,¹⁰⁸ se convirtió en fuente de una nueva crisis política, pues violaba una de las más importantes Leyes de Indias.¹⁰⁹

El patriciado cordobés era, si nos atenemos al Cuadro F-B antes mencionado, cuarto entre las ciudades del norte, en importancia numérica, con el 20,23% de patricios sobre una población donde abundaban los comerciantes peninsulares. No se diga, alegaba en 1782 el comerciante de origen porteño, ex-Tesorero de la Real Hacienda de Córdoba y Teniente de Oficiales Reales Carlos Estela,¹¹⁰ que en Córdoba escaseaban, como en La Rioja, vecinos a quienes acudir para llenar los cargos capitulares, pues Córdoba

"...era abundantísima en vecinos honrados de conciencia, timoratos, y sin coligación, ni parentesco, de modo que anualmente se pueda con amplitud completar el número de individuos en el ayuntamiento, sin necesitarse por ningún título de incluir en mucha serie de años dos individuos que por línea alguna aludan parentesco".¹¹¹

No obstante esta auspiciosa realidad, el Cabildo de Córdoba era un antro oligárquico, semejante al que un lustro antes el Gobernador Gerónimo Matorras, quizo sin éxito desmembrar.¹¹² En dicho antro, linajes familiares compuestos indistintamente de patricios y peninsulares se disputaban el privilegio de integrar el Cabildo y la Junta Municipal de Temporalidades, la facultad de recaudar el ramo de Sisa, y el derecho de administrar la Bula de la Santa Cruzada y la limosna de Redención de Cautivos y de usufructuar los fondos de capellanías y obras pías. Para 1775 la parcialidad de los Allende logró sin oposición elegir de Alcaldes a Francisco Xavier de Usandivaras,¹¹³ y a Domingo Ignacio de León,¹¹⁴ para 1776 a Santiago de Allende y a Marcelino Moyano;¹¹⁵ para 1777 a Antonio de la Quintana, y a Jacinto Díaz de la Fuente,¹¹⁶ "...quien dirigido por el Sargento Mayor Fernando Fabro adhirió enteramente a sus errados sistemas como lo tenían bien previsto cuando lo eligieron".¹¹⁷ Recaía en ese entonces, año de 1778, en el Maestre de Campo Juan Tiburcio de Ordóñez,¹¹⁸ comisionado por el Teniente Gobernador Arriaga, la responsabilidad de confirmar en el Cabildo de Córdoba al Teniente Coronel del Regimiento de Caballería del Río Seco Don Xavier de la Torre Benítez,¹¹⁹ y al Europeo Nicolás Azcoeta,¹²⁰ electos por el Alguacil Mayor Nicolás García Guilledo,¹²¹ y el Alcalde Provincial Domingo de Garay.¹²² Para impedir esta confirmación estaban las cabezas visibles de la estirpe, los hermanos José y Santiago de Allende y Losa (Ver Cuadros COR-I, II y III). En la quinta crisis acontecida en el Cabildo de Córdoba, en 1778-80, a diferencia de otras anteriores, la elite nativa colonial ensayaba legitimar la hegemonía violentamente lograda en 1772, articulando una estrategia

conciliatoria fundada en una concordia, y en un discurso jurídico que ponía en tela de juicio la unidad del discurso oficial, representado en la alternativa, tergiversándolo.¹²³

En Córdoba, en 1780, el Alcalde José Antonio de Allende y Argüello,¹²⁴ conjuntamente con sus tíos segundos los hermanos José y Santiago Allende y Losa, pretendían elegir a su sobrino carnal Don Francisco de Armesto, hijo natural de María de Allende y Losa,¹²⁵ cuya compleja y clave descendencia para la historia política de Córdoba podemos observar en el Cuadro COR-III. Para lograr colocar a su sobrino, dichos hermanos alegaron que sobre el candidato opositor, Juan Tiburcio de Ordóñez, pesaba la tacha de haber sido ya recusado por el Cabildo de Córdoba en Noviembre de 1772, con el agravante de haber sido ésta recusación admitida por la Real Audiencia de la Plata.¹²⁶ Concurría en Ordóñez, según los Allende,

"...el defecto de ser de los más inquietos y sediciosos de esta ciudad [Córdoba], y la reprehensible circunstancia de tener vinculada su congrua en la dirección de los jueces, y accesorio de las partes, vendiendo la justicia a los que más dán, como se comprueba de tres cuerpos de autos".¹²⁷

El mismo carácter de Ordóñez tenía, según los Allende, el Alguacil Mayor Guilleddo, "...a quien por su inquietud y codicia, por su genio sedicioso, apellida el público con el apodo de tinterillo".¹²⁸ No es de extrañar que para los Allende, Guilleddo fuera "inquieto", pues el 3 de febrero de 1779 solicita "...se le manden restituir los derechos que percibía como Alguacil Mayor de Cajas por las Tropas de Carretas y Arrias que salían de aquella ciudad".¹²⁹ La mala fé del Cabildo de Córdoba en pretender cobrar dichos derechos con destino a las obras públicas se revelaba, para Guilleddo, cuando era "...omiso en recaudar el real por mula" concedido para dichas obras.¹³⁰

También guardaba la misma caracterización que a Guilleddo y Ordóñez le habían asignado los Allende, Don Juan Antonio de la Bárcena,¹³¹ pues el 11 de septiembre de 1779 Don José de Allende y Losa "...acompaña testimonio de los acuerdos celebrados para recibir el nuevo Tesorero que nombraron los Oficiales Reales en lugar de Carlos Estela, por donde consta el genio inquieto de Juan Antonio de la Bárcena".¹³² Tres meses después, en Diciembre de 1779, cuando con ocasión del socorro solicitado por Buenos Aires para afrontar la amenaza portuguesa, Bárcena se hallaba aprontando 300 hombres, el Gobernador libró comisión para arrestarlo, medida que puso en ejecución el Alcalde de Primer Voto General José de Allende y Losa.¹³³ Con el pretexto de la apelación ante la Real Audiencia la trenza o contubernio de los Allende se opuso al recibimiento de Ordóñez, desobedeció al Gobernador Arriaga, y en el acuerdo del día siguiente eligió --según manifiestan Nicolás García Guilleddo y Domingo Garay-- "...por pluralidad de votos, si acaso merece este nombre la confederación de los de una familia", para Alcalde de Primer Voto al Dr. Domingo Ignacio de León, y para Alcalde de Segundo Voto a Don Francisco de Armesto y Allende.¹³⁴ León se hallaba de Presidente en la Junta de Temporalidades, "...sujeto a las cuentas que debe dar de sus asuntos y caudales, y sin haber dado residencia del empleo de Alcalde de Segundo Voto, que ejerció en 1775".¹³⁵ En tanto Armesto y Allende, "...entenado de Don Gregorio Arrascaeta y sobrino de muchos de los que lo eligieron" se hallaba con causa criminal pendiente, "...y sus bienes embargados por las tropelías que ejecutó contra Doña Francisca Fernández, primera mujer del Alférez Real Don Juan Antonio de la Bárcena".¹³⁶ En otra carta dirigida al Virrey un año después, en 1779, el Alguacil Mayor Guilleddo y el Alcalde Provincial Domingo Garay le informan que por Alcalde de Primer Voto han elegido al Coronel Francisco Antonio Gonsález,¹³⁷ y "...para atraer a los demás Regidores a una concordia que dictava la equidad, la prudencia y la razón",¹³⁸ eligieron por Alcalde de Segundo Voto a un nuevo miembro de la Casa de los Allende, aunque hijo de

quien en el pasado se había enfrentado a dicha familia, que lo era Don Nicolás de Cabrera Ceballos.¹³⁹ Sin perjuicio de sus actividades políticas, Francisco Antonio Gonsález poseía un fuerte giro mercantil, alcanzando a contraer entre 1753 y 1790 86 operaciones de fiado entre Córdoba y Buenos Aires por valor de \$286.327.¹⁴⁰ La mencionada concordia se extendió también a la vida privada, pues para 1779 el ex-Alcalde Armesto y Allende, luego de su traspie con la primera mujer de Bárcena, habría encarrilado su vida casándose con la hermana del Alcalde Provincial Domingo Garay.

Al año siguiente, en 1780, luego de la defección de Garay, García Guilledo debió sumar a su facción al Juez Comisionado Don Juan López Cobo,¹⁴¹ y al Regidor Juan Antonio de la Bárcena, de resultas de la cual logró consolidar una parcialidad que ponía en tela de juicio la legalidad del mecanismo eleccionario adoptado por la mayoría.¹⁴² Como corolario de su posición, la mayoría del Cabildo eligió en 1780 a un pariente de los Allende y a un rico comerciante bien emparentado. En efecto, la Alcaldía de primer voto recayó en Francisco José de Uriarte,¹⁴³ que aunque relativamente pobre y haber sido acusado en 1769 de contrabandista, era concuñado de Santiago de Allende y Losa,¹⁴⁴ y la de segundo voto en el comerciante Bernavé Gregorio de las Heras.¹⁴⁵ Este último, como puede observarse en el Cuadro COR-VII, se caracterizaba por ser concuñado del comerciante peninsular Jacinto Díaz de la Fuente, del hacendado y comerciante Felipe Antonio Gonsález,¹⁴⁶ y del Administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes Don Rafael María Castellanos y Cossio.¹⁴⁷ Gregorio de Las Heras contaba con un intenso giro comercial que se extendía desde Buenos Aires hasta Salta, extremos por donde viajaba asiduamente, y en cuyos Cabildos su opinión también contaba.¹⁴⁸

No obstante los argumentos de la mayoría y pese a hallarse en inferioridad numérica Guilledo planteaba que la asistencia simultánea de padres, hijos y hermanos en los Cabildos "...no era una costumbre legítima sino corruptela".¹⁴⁹ La fórmula elegida en esta ocasión por Guilledo, López Cobo y Bárcena, y recaída en el Teniente Coronel Torre Benítez, y en el Sargento Mayor Gaspar de Salcedo, aunque derrotada, fué formulada al decir de López Cobo "...sin otra preocupación que el de que florezca la justicia, se extirpen los vicios y respire el público de este vecindario que por tantos años gime bajo el yugo de las casas de Arrascaeta y los Allende".¹⁵⁰ Según el Comisionado Juan López Cobo, los empleos concejiles fueron erigidos "...para honrar a los vecinos beneméritos de los pueblos más no para perpetuarse y vincularse en una sólo casa, familia o bando".¹⁵¹ Tanto Bárcena como López Cobo eran fuertes comerciantes, cuyo giro comercial se originaba en el crédito con que contaban entre los comerciantes porteños. Bárcena había alcanzado a operar una media docena de veces en un período que arrancando en 1748 se había extendido por medio siglo hasta 1790, sumando un total de \$16.470,¹⁵² y López Cobo había contraído entre 1761 y 1773 una veintena de transacciones, totalizando un capital de \$143.346.¹⁵³

Dos años después, en 1782, Carlos Estela, amigo del impugnado candidato a Regidor José de Ariza,¹⁵⁴ al igual que en 1776 lo había denunciado el Teniente Gobernador Arriaga y la minoría del Cabildo,¹⁵⁵ delata la situación imperante en el Cabildo de Córdoba como un grave caso de nepotismo. Esta situación se reflejaba automáticamente en los ingresos fiscales del Ayuntamiento Cordobés, manifestados en los autos obrados por la Diputación del Cabildo acerca de la alegada extenuación del ramo municipal de Propios. Si el Cabildo de Córdoba había cobrado los derechos de entrada de carretas y arrias que debía percibir la Real Hacienda, los ingresos correspondientes a dicho ramo no podían, según Estela, menos que abundar "...por que bien notorio es las mulas que entran en aquella ciudad [Córdoba] de la de Buenos Aires anualmente".¹⁵⁶ Pero si, por el contrario, el Cabildo no había cobrado dicho derecho, y como hemos visto, tampoco los cobraba el Alguacil Mayor de Cajas García Guilledo, ello sería evidencia de que los vecinos negociantes en las especies gravadas habían usurpado

(defraudado) a los Propios este derecho. Entre dichos vecinos, Estela detallaba

"...principalmente los Allendes, Quintanas, y toda su parentela, que sucesivamente están empleados en el Cabildo, ya de jueces ya de regidores".¹⁵⁷

Como era de suponer, Estela había sido excluido y separado por los demás Oficiales Reales del manejo de la Real Caja, motivo por el cual se había suscitado un litigio en la Intendencia de la Real Hacienda. Impuesto del hecho, el Teniente Gobernador Arriaga no sólo lo declaró a Estela por "buen Ministro", sino que también le libró despacho de reposición.¹⁵⁸ El Cabildo compuesto por el linaje de los Allende en la persona de Don José de Allende y Losa y Don Francisco Hurtado de Mendoza,¹⁵⁹ resistió su reposición, no admitiendo de modo alguno la fianza que Estela ofreciera. Pero el caso era que en aquel Cuerpo municipal "...no se cumplían las resoluciones de los Tribunales superiores".¹⁶⁰ Los que componían aquel ayuntamiento eran los regidores propietarios José, Santiago, y José Antonio de Allende; el Justicia Mayor Antonio de la Quintana y Sebreros, y el Alcalde de Segundo Voto Don Ambrosio Funes y Bustos,¹⁶¹ casados estos últimos con dos hermanas hijas del finado General Tomás de Allende y Losa,¹⁶² y sobrinas carnales en primer grado de los dos primeros regidores mencionados. Asimismo componían dicho Cabildo el Alcalde de Primer Voto Don Francisco Antonio Díaz,¹⁶³ consuegro de un tío de las esposas del Justicia Mayor Quintana y del Alcalde Funes; un concuñado de Allende, el Procurador General de la Ciudad Don Francisco José de Uriarte; y los regidores Don José Prudencio Xixena y Francisco Hurtado de Mendoza, "...todos parientes dentro del cuarto grado, unos por afinidad [matrimonio] y otros por sanguinidad y parcialidad".¹⁶⁴ Como se comprenderá

"...no hay quien no les rinda por la violencia todo omenaje, y con razón, porque ellos tienen, puede decirse, como en el bolsillo, toda la autoridad y judicatura de aquella Ciudad, anualmente se ve entrar y salir todo el mando y poder de aquella ciudad de unos parientes en otros, entre ellos turna y entre sus manos se gastan las varas, mas no se atienden las resoluciones del Soberano".¹⁶⁵

A comienzos de la década del 90, la casa de los Allende, encubierta bajo el manto de sobremontista, y pese a la oposición de la facción funesista, seguía en el control del Cabildo. Para 1788 se eligió por Alcalde de segundo voto al Coronel de Milicias Antonio del Castillo,¹⁶⁶ para 1789 a Francisco Antonio González por Alcalde de primer voto,¹⁶⁷ y al Dr. Victorino Rodríguez por alcalde de segundo voto;¹⁶⁸ para 1790 a Victorino Rodríguez y a Don Antonio de la Quintana y Sebreros respectivamente;¹⁶⁹ para 1791 a Don Pedro Lucas de Allende Vicentelo,¹⁷⁰ y a Don Antonio del Castillo; y para 1795 a José de Isasa y Ayesta.¹⁷¹ En el año del siglo 1800, se vuelven a reiterar los abusos electorales, lo cual hizo decir al Alcalde Mayor Provincial Antonio Arredondo,¹⁷² un miembro del grupo funesista, que en el Cabildo de Córdoba se verificaba a fines de siglo el tesón sistemático de

"...radicar los empleos consejiles en casa de los Allendes, y por esto eligieron para Alcaldes a Don Cipriano Moyano [y Quijano, casado con María Dolores Porcel de Peralta, primo hermano de Catalina Moyano y Cabrera, mujer del Regidor José Antonio de Allende Argüello], por Regidores a José Manuel Allende, hijo de Don Pedro Lucas de Allende Vicentelo, Caballero de la Orden de Carlos III, y sobrino segundo del Coronel Santiago Alexo de Allende y Mendiolaza, a un hermano político de éste Don Francisco Gache [y Escajal, casado con Ursula de Allende y Mendiolaza], a Don José Ignacio Mujica [hijo de Miguel Antonio Mujica y de María Quiteria Usandivaras y Losa], primo hermano del actual Alcalde de segundo voto Mariano Usandivaras y Allende [el cual a su vez era sobrino carnal de la mujer del Coronel Allende], y al Dr. José Dámaso Xigena [sobrino segundo de José Prudencio Xigena], preceptor

que fué en latinidad de los hijos del finado Pedro Lucas de Allende".¹⁷³

Y en oportunidad de elegir en 1800 al Defensor General de Menores, el Alcalde Mayor Provincial Arredondo, expuso que el Alcalde de primer voto Pedro Lucas de Allende

"...deberá excluirse de las presentes elecciones por hallarse actualmente sustentando un ruidoso o interesante litigio en esta ciudad con el Sr. Regidor Defensor General de Menores [Francisco Antonio Bulnes], a quien S.A. lo ha nombrado, para que promueva los derechos de los hijos del finado Don Benito Antonio de Allende [su hermano], sobre crecida cantidad de pesos, que le demandan".¹⁷⁴

Por este motivo, alegaba Arredondo, "...no puede ocultarse a Usía el interés que debe acompañar al expresado Sr. Alcalde para la elección de un Defensor parcial, o que no le prometa contradicción formal en el curso de dicho pleito".¹⁷⁵ Si la Ley 34, título 6, Libro 3 de las de Ordenanzas de Castilla ordenaba que todo capitular, cuando en el Acuerdo que se va a celebrar ha de tratar de su persona e intereses, debe salir del Ayuntamiento, con más razón en este particular caso. Parecía entonces, que por esta causa "...deberá ser excluido el dicho Sr. Alcalde [Pedro Lucas de Allende], pues se va a nombrar un sugeto [Defensor de Menores], que inmediatamente deberá tocarle sobre los intereses litigados en la citada causa".¹⁷⁶ También debía ser excluido del acto eleccionario, a juicio de Arredondo, el Señor Regidor Defensor de Pobres Juan Antonio Cabrera y Allende,¹⁷⁷ así porque

"...contra éste gobierna el impedimento alegado contra el sobredicho Sr. Alcalde de primer voto, pues es del propio modo interesado en el nominado litigio, ...porqué es su sobrino carnal, y se halla por consiguiente dentro del grado prohibido para votar por la Ley 35, Título 2, Libro 2 de la Novísima Recopilación".¹⁷⁸

Por el contrario, en ocasión de las elecciones de 1801, si bien los dos elegidos fueron Dalmacio Allende Moyano,¹⁷⁹ y José Manuel Allende y Torres,¹⁸⁰ el Cabildo se declaraba --en oficio dirigido al Virrey-- satisfecho por cuanto los elegidos "...no son parientes a no ser en el octavo o décimo grado".¹⁸¹ Pero precabiendo que el Virrey fuera informado que Dalmacio Allende era asimismo pariente del electo Alcalde de primer voto Cipriano Moyano, el Cabildo de Córdoba se adelantaba para aclararle "...que aquel parentesco está fuera del cuarto grado, y llega al quinto, pues el Don Dalmacio es hijo de una prima de Don Cipriano".¹⁸²

Como reflexión final, podemos concluir, sobre la base de los innumerables conflictos de nepotismo suscitados en los Cabildos de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que lo que determinaba que estos Cabildos estuvieran controlados por el acentuado localismo de minorías oligárquicas no fué sólo la naturaleza patrimonialista del estado colonial, manifestada en la multitudinaria subasta de oficios públicos, y sus consiguientes renunciaciones, sino la intensa endogamia o consanguinidad practicada por los grupos dominantes. Por predominar en las sociedades correspondientes a estos Cabildos una estructura familiar cognaticia, el nepotismo que en ellas se practicaba se asemejaba más al de un nepotismo colateral, transversal u horizontal, que si atravesaba la red de casamatas e instituciones políticas.

NOTAS

¹ "...como podía verse en la Curia Filípica párrafo segundo de elección de oficios número 27 y 28,

confirmada por la Ley 5, Título 10, libro 4 de las Recopiladas" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29, expediente sin foliar).

² *Ibidem*.

³ Por Real Cédula del 17 de febrero de 1762, la Corona dispuso que en las elecciones anuales de alcaldes ordinarios, se instrumentase la alternativa, es decir una elección en la cual simultáneamente se eligieran como alcaldes de primero y segundo voto a un nativo y un europeo (AGN, Reales Cédulas, tomo 40, fs.246, Sala IX, 24-9-7). La partición de los oficios tiene su antecedente en el siglo XVII cuando los oficios fueron repartidos entre encomenderos y no encomenderos (Doucet, 1974, 383).

⁴ acerca de la alternativa, ver Lavallé, 1994, 163-165.

⁵ Santiago del Estero, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 17 comerciantes y 82 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 318 varones adultos, o el 25,8%. Tucumán que también dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con 93 comerciantes y 271 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 1158 varones adultos, o el 23,4%. La ciudad de Córdoba contaba con 108 comerciantes y 447 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3459 adultos varones, o el 13%. Y la ciudad de Salta, contaba con 45 comerciantes y 416 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 3.427 adultos varones, o el 12%.

⁶ La Rioja que dependía de la Gobernación-Intendencia de Córdoba, contaba con 80 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 772 adultos varones, o el 10,3%. Catamarca, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, contaba con una población de 123 varones españoles adultos solteros sobre un total de 2139 varones adultos, o el 5,75%. Por último, Jujuy contaba con 64 varones españoles adultos solteros, sobre un total de 644 varones adultos, o el 9,9%.

⁷ El primero casado con Manuela de Escobar Castellanos y Arias Velázquez, y el segundo con Margarita Sánchez Palacios (Cutolo, I, 228).

⁸ Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco. Sobrino del Brigadier Diego de Hesles Campero, Secretario del Virrey del Perú Conde de Superunda, Don Diego de Hesles Campero. Marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y Campero, y padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marqués de Yavi Fernando Campero; sobrino de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes (Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; y primo hermano del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero (Cutolo, II, 74; y III, 50; Lohmann, 1947, II, 377; y Acevedo, 1969, 94). Según Acevedo (1969), Campero utilizó la expulsión de los Jesuitas como medio para envolver a todos los que se opusieron a sus manejos del Ramo de Sisa (Acevedo, 1969, 117).

⁹ Cúneo-Vidal, 1978, 180.

¹⁰ Dueño de Campo Santo, introductor de la caña de azúcar, casado con Clara de la Corte y Rosas, dueño de la estancia Campo Santo e introductor de la caña de azúcar, padre de Gaspar, Juan José, casado con Gertrudis Medeyros, José Antonino, y Francisco María Fernández Cornejo, y suegro de

Lorenzo de Goyechea (Cornejo, 1972, 20).

¹¹ Miembro del Cabildo de Salta en 1778, casado con Rosa Zeballos, y padre del Sargento Mayor Tiburcio Cornejo, casado en primeras nupcias con Ventura Boedo, y en segundas nupcias con Petrona Zenarruza (AC, 1972, 14).

¹² Alcalde de Salta en 1778, casado con María Teresa Castellanos y Arias Velázquez, hija de Pedro Francisco de Escobar Castellanos y de María Arias Velázquez, padre de Gabino Fernández Cornejo, casado con María del Carmen Torino, Sinforoso Fernández Cornejo, casado con Josefa San Millán, y Justo Pastor Fernández Cornejo, marido de Evarista de Elgueta; y suegro de Antonio Pardo, de Francisco Xavier Figueroa y Toledo Pimentel, de Gaspar Fernández Cornejo, y de Juan Pablo Arias Rengel (AC, 1972, 107).

¹³ Comandante del primer regimiento de Milicias del Tucumán. Hijo de Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y de Claudia del Campo Avila; hermano de Bartolomé Santos, Ignacio Inocencio y Juan Gregorio Aráoz; marido de Josefa Paz de Figueroa, hija del encomendero de Silipica Maestre de Campo Juan Paz de Figueroa, y de Gregoria Ibáñez del Castrillo; cuñado de Francisco Solano, Domingo, y Juan José de Paz y Figueroa; y conuñado de Gaspar de Goncebat y del Maestre de Campo Roque Jacinto López de Velazco (Calvo, 1924, 286ss.; 1939, 177ss.). Era padre de Pedro Antonio Aráoz, del R.P. Diego Miguel Aráoz, Cura Vicario de Monteros, y del Dr. Miguel Ignacio de Aráoz, Cura de la Iglesia de Famaillá. Según el Cura apóstata Francisco José Marcano y Arizmendi, Diego Ignacio de Aráoz extrajo del Colegio Jesuítico del Tucumán "...barias alajas, y toda la librería, fingiendo se la han robado, hasta han extraído varios cuadros y entre ellos dos grandes el uno de nuestro Patriarca San Ignacio de Loyola, para su Casa y estancia" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Sus hijos se enfrentaron duramente a raíz de la herencia del padre.

¹⁴ Teniente Coronel del segundo regimiento de Milicias de Tucumán. Marido de Francisca Antonia Núñez de Herrera, hija de Pedro Núñez Herrera y de Andrea Moreno Briceño; y padres del Congresista de Tucumán Pbro. Dr. Pedro José Miguel Aráoz, y de Josefa Aráoz, mujer del Maestro de Postas Francisco Borja Helguero Rodríguez (Calvo, 1936, I, 77; Pereira Lahitte, 1966; Murga, 1979, 223; y Corominas, 1987, ítem 161).

¹⁵ Hijo de Bartolomé Aráoz y del Campo y de Catalina de Echávez y Elorriaga; marido de Catalina Sánchez de la Madrid, hija del Teniente Gobernador del Tucumán Francisco Sánchez de la Madrid y de María de Villafañe y Guzmán; y padres de Miguel Ignacio, marido de María Gramajo y Lucena; del Comandante de Armas y Coronel Francisco Xavier, marido de María Ignacia de Aráoz López; de María Petrona, mujer de Francisco José Díaz Vélez; de Mercedes, mujer de Julián Ruiz Huidobro; de Juan Antonio, marido de Josefa Córdoba y Gutiérrez; de Catalina, mujer primero de Juan José de las Muñecas y Alurralde y luego del Alcalde de Segundo Voto José Fermín Ruíz Poyo; de Pedro Nolasco, marido de Narcisa García Guevara; y de José Manuel de Aráoz, marido de Nicolasa Figueroa Mendoza y Moreno Briceño (Calvo, 1936, I, 68 y 246; Díaz de Molina, 1946-47, 45). Catalina Sánchez de la Madrid era hermana de Francisca Xaviera, mujer del Sargento Mayor y Provincial de la Santa Hermandad Juan Francisco Deheza y Helgueros, natural de Laredo, España. De todos sus hijos, indudablemente fué Petrona, la mujer de Díaz Vélez, la que dejó la descendencia más relevante desde el punto de vista del parentesco:

¹⁶ Acevedo, 1969, 170.

¹⁷ Arrendatario de la Sisa en 1764 y recusado como Alcalde de segundo voto en 1767 y como Gobernador de Armas en 1772. Hijo de Francisco Tejerina y Barreda y de Laurencia García, naturales de Andalucía, y casado en 1762 con Teresa Domínguez, hija del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieyra), hermana del Alférez Real Simón Domínguez (Avila, 1920, 55; y Corominas, 1987, ítem 214). Era hermano de María Josefa Tejerina, mujer de Pedro José Domínguez, padres del Teniente Coronel Pedro José Domínguez, bautizado en Tucumán en junio de 1801; y hermano del Regidor Francisco Texerina y Barreda. Era también concuñado del Capitán José de Molina, de Juan López Ríos, y de Francisco Xavier Villafañe (Corominas, 1987, ítem 118, 156, 196, y 214). Asimismo, fué suegro de Manuel Fernández Carranza y de Manuel Posse, nacido en Camariñas, La Coruña, en 1744. En otras palabras Manuel Pose y Manuel Carranza eran concuñados (Avila, 1920, 69; AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 379).

¹⁸ González Ledo y Saguier (1991).

¹⁹ Según Pedro Antonio Aráoz en carta al Visitador General Diego de la Vega, el Cura Diego Miguel Aráoz entorpeció el cumplimiento de los dos testamentos de su padre, "...sobornando al Subdelegado que fué, en ese tiempo, y al abogado fiscal, de manera que ocultando bienes y abultando costos y gastos, bino a quedarse el referido mi hermano con 6 o 7 mil pesos que importan los bienes. Este principio me ha parecido conveniente poner en la alta comprensión de V.S. por que de éste dimanar todas las iniquidades que a cometido dicho mi hermano, como tengo suficientemente alegado en autos, y justificado la cría de yeguas, que dejó mi Padre cuando falleció, de estas dimanar las mulas que este Subdelegado tiene embargadas, como la cría de Bacas bastante número, una y otra especie se hizo dueño el prefijado mi hermano sin llamarnos a los herederos, ni contar, ni saber las cantidades con todo el derecho de las marcas, las que ocultó en los inventarios que hizo" (Pedro Antonio Aráoz al Visitador General Diego de la Vega, Tucumán, 10-VIII-1803, AGN, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

²⁰ Hijo de Miguel de Aráoz y Echávez, y de Catalina Sánchez de la Madrid y Villafañe; hermano de Miguel Ignacio, del Coronel y Comandante de Armas Francisco Xavier, del Presbítero Francisco de Borja, de Pedro Nolasco, y de José Manuel Aráoz; y cuñado de Julián Ruiz Huidobro, de Juan José de las Muñecas, y de Fermín Ruiz Poyo (Calvo, I, 1936, 68). Era marido de Josefa Córdoba y Gutiérrez, hija de Lucas de Córdoba y Figueroa Mendoza y de Josefa Gutiérrez Pérez Palavecino; hermana de Pedro Nolasco Córdoba, viudo de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid, y marido de Manuela Deheza y Helgueros; cuñada de José Colombres y Thames; y tía del Obispo y Congresista de Tucumán e introductor de la caña de azúcar Monseñor José Eusebio de Colombres, y de Francisco y Santiago Colombres, casados con las dos hermanas Trinidad y Tadea de Alurralde y Avila (Calvo, III, 199; Pereira Lahitte, 1966, 79-82; y Murga, 1979, 223-228). Eran padres de María Agueda Aráoz, mujer del Dr. Juan Venancio Laguna, hijo del Alcalde Miguel Laguna y de Francisca Bazán; de Catalina Aráoz, desposada en 1800 con Miguel Sánchez de la Madrid; de Pedro Aráoz, marido de Dionisia de Usandivaras Figueroa; y de Miguel Jerónimo Aráoz, marido de Inés de Usandivaras Figueroa; y padres del que fuera caudillo de Monteros, y Gobernador de la República de Tucumán Bernabé Aráoz, fusilado por Francisco Javier López Molina, y casado con Teresa Velarde Villafañe, hija del Interventor de la Renta de Correos de Tucumán y Diputado del Comercio por el Consulado de Buenos Aires Don José Velarde y de María Teresa Villafañe (Avila, 1920, 62, 91 y 94; Jaymes Freyre, 1911; Calvo, I, 71; y Cutolo, I, 191).

²¹ Marido de María Catalina Medina, hija de Baltasar de Medina Montalvo y de María Agustina

de Aráoz y Rodríguez Viera; nieta materna del Capitán Ignacio Inocencio de Aráoz y de Teresa Rodríguez Viera; y madre del Pbro. Francisco Tejerina y Medina, de Catalina de Tejerina y Medina, mujer de José Millán, del Alcalde Fermín Tejerina y Medina, del médico Baltasar Tejerina, y de María Antonia de Tejerina y Medina, mujer de Pedro Roca y Vidiella, natural de Tarragona, abuelos paternos del Presidente de la República Julio A. Roca (Luque Colombres, 1948, 121). Hermano del Gobernador de Armas Coronel Fermín Vicente Texerina, el mismo que se había solidarizado en 1772 con el frustrado Administrador del Estanco del Tabaco Gaspar de Salcedo.

²² Sargento Mayor del primer regimiento de Milicias de Tucumán. Casa con la viuda de Juan José de las Muñecas Alurralde, Doña Catalina Aráoz y Sánchez de la Madrid, hija de Miguel Aráoz y de Catalina Sánchez de la Madrid (Calvo, 1936, I, 77). En 1778 Francisco Texerina y Barreda y Pedro Aráoz lo demandan por mal desempeño en sus funciones de Administrador de Correos (AGN, Interior, Leg.3, Exp.15). Poseía la estancia Yerba Buena, que fuera de los Jesuitas (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Según el Cura apóstata Francisco Marcano y Arizmendi, Ruiz Poyo cambió "...el Divino Señor que estaba en la Sacristía, por uno mediano, y la madera y tablazón que tenían los expulsos en la carpintería la extrajo dicho Poyo para su casa, y parte della le dió a José Antonio Molina, con la que acabó su casa...Las demás tierras respectivas a las Estancias dicen las repartieron de Limosna a los sobrinos de la mujer de Poyo y del Vicario [Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid]" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20).

²³ Actas Capitulares de Tucumán, en Indices Documentales (Tucumán: Archivo Histórico, 1974).

²⁴ AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.21.

²⁵ Hijo del General Francisco Sánchez de la Madrid y de María de Villafañe y Guzmán, y hermano de Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid y de María Sánchez de la Madrid, mujer de Francisco Xavier Cabrera (AGN, Temporalidades de Tucumán, Leg.5, Sala IX, 22-2-5). Viudo de Claudia Aráoz, casó en segundas nupcias en 1758 con Clara de Paz y Aguirre, natural de Santiago del Estero, hija de Domingo de Paz y de Gregoria Aguirre (Corominas, 1987, ítem 181). Dueño del Potrero Río Blanco, por compra a las Temporalidades (Avila, 1920, 257).

²⁶ Natural de Llanes, Asturias, dueño de la mina San Francisco de Asís, en San Antonio de los Cobres, provincia de Salta, quien trajo treinta barreteros del Potosí. En 1802 solicitó auxilio a la Real Hacienda para continuar el beneficio de la mina San Francisco (AGN, Tribunales, Leg.65, Exp.43). Era hijo de Ignacio de Thamés y de Ana González de la Borbolla y Lamadrid, y se casó en 1755 con Francisca Javiera Sánchez de la Madrid Villafañe, hija del General Francisco Sánchez de Lamadrid y de María de Villafañe y Guzmán, y viuda de Juan Francisco Dehesa y Helgueros. Francisca Javiera era cuñada de Francisco Javier de Cabrera, vecino de Córdoba, y de Miguel de Aráoz (Luque Colombres, 1942, 38; y Corominas, 1987, ítem 155, 101, y 35). Fueron padres del Dr. José Ignacio Thames y de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid, mujer de Pedro Nolasco de Córdoba y Gutiérrez (Calvo, III, 208). Dueño de las tierras de Yerba Buena (Avila, 1920, 252). Era también tío de José Colombres y Thames, nacido en Blanes en febrero de 1749, quien era hijo de Bartolomé Díaz de Colombres y del Castillo, bautizado en Llanes, España, y de su hermana Josefa de Thamés y González de la Borbolla (Calvo, III, 199; Pereira Lahitte, 1966, 79-82).

²⁷ Casó con María Teresa Villafañe, sobrina e hija de primo hermano del Alcalde Provincial

Francisco Sánchez de la Madrid y prima segunda con la mujer de Ruíz Poyo. Fueron padres de Pedro José Velarde, marido de Bárbara Urrea; y de Teresa Velarde Villafañe, mujer del Presidente de la República de Tucumán Bernabé Aráoz (Avila, 1920, 91). Fué José Velarde Interventor de la Renta de Correos de Tucumán, Diputado del Comercio por el Consulado de Buenos Aires. Renuncia a éste último cargo en 1800 (AGN, Hacienda, Leg.96, Exp.2485).

²⁸ Natural de la Ciudad de Córdoba, hijo del General Juan de Figueroa y de Jacinta de Cabrera, casó en 1746 con Andrea Moreno Suárez de Cabrera, viuda del General Pedro Núñez Herrera (Corominas, 1987, ítem 110). Presidente de la Junta de Temporalidades. Padre de Miguel Figueroa (AGN, Temporalidades de Tucumán, Leg.5, Sala IX, 22-2-5).

²⁹ mantuvo contactos comerciales con Domingo Basavilbaso (AGN, Protocolos, R.1-1754-fs.300; R.2-1761-fs.244).

³⁰ Casó en diciembre de 1754 con María Josefa de la Cerda (Corominas, 1987, ítem 150).

³¹ Coronel de Milicias y Teniente Tesorero de la Real Hacienda de Tucumán. Presenta quejas contra el Justicia Mayor Juan Silvestre Dehesa y Helgueros (AGN, Justicia, Leg.13, Exp.284).

³² AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.21. fs.22v.

³³ Español, nacido en 1732 en la Villa de Huelva, arzobispado de Sevilla, hijo de Melchor García y de Ana de Baesa de Cárdenas. Contrajo primeras nupcias con Eugenia Indarte, y segundas nupcias con Maria Trinidad Carrasco, hija de Francisco Carrasco y de Luisa de la Zerda y Alvarez de Toledo. Era concuñado en sus segundas nupcias del Subdelegado de Real Hacienda José Silvestre de Ojeda, hijo de José de Ojeda y de Catalina Gutiérrez; y suegro de Miguel Pérez Padilla, del boticario Hermenegildo Rodríguez, y de José Fermín Molina, hijo este último de José Miguel de Molina y de Agustina Díaz de Peña, una de las herederas del litigado Mayorazgo de Guazán (Avila, 1920, 87; Bustos Argañaráz, 1979, 30-32; Corominas, 1987, ítem 204 y 101; y Padilla, 1987, 90). Dueño del Potrero de San Jenuario, por compra a las Temporalidades de los Jesuitas Expulsos (Avila, 1920, 255). En 1778 se ordena al Cabildo de Tucumán se lo confirme como Regidor (AGN, Justicia, Leg.52, Exp.1508). En 1785 litiga el título de Regidor y en 1808 renuncia al mismo (AGN, Justicia, Leg.52, Exp.1508). Para el abogado Juan José Mariano Barón del Pozo, la casa del dicho Cárdenas "...es una de las de mayor recogimiento, y que dá exemplo a todas las demás en la crianza y educación de la familia, y así el dicho García, como su mujer, son unos vecinos de acreditada virtud y honradez (AGN, Tribunales, Leg. 142, Exp.9, capítulo 83). Para una biografía de Barón del Pozo ver Furlong, 1952, 471-477.

³⁴ Hijo de José de Medina y de Magdalena Pérez; sobrino de Catalina Medina, mujer de Francisco Tejerina y Barreda; nieto de Baltasar de Medina Montalvo y de María Agustina de Aráoz y Rodríguez Viera; y marido de Ana Rosa Páez, hija de Josefa Páez (Corominas, 1987, ítem 195).

³⁵ Oficial primero de la Real Renta de Correos. Marido de Mercedes Aráoz de la Madrid, hija de Miguel Aráoz y de Catalina Sánchez de la Madrid, y concuñado de Juan José de las Muñecas y Francisco Díaz Vélez (Avila, 1920, 66; y Díaz de Molina, 1956-57). Padres de Dolores Ruiz Huidobro, mujer del Gobernador de Tucumán Clemente Zavaleta, hijo de Prudencio Zavaleta y Maria Agustina de Indá y Tirado (Cutolo, VII, 1969). Dueño del Potrero El Rincón, por compra a las Temporalidades

(Avila, 1920, 257).

³⁶ Alférez Real, hijo del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieyra), y casado en 1752 con María Ignacia de Toledo Pimentel, hija del Sargento Mayor y Alcalde Ordinario Luis de Toledo Pimentel y de María Ledesma Valderrama (Corominas, 1987, ítem 137). Era hermano de Teresa Domínguez, la mujer de Don Fermín Texerina y Barreda, los cuales fueron suegros de Manuel Carranza y Manuel Posse, este último nacido en Camariñas, La Coruña, en 1744 (Avila, 1920, 69, y 112). La mulata Catalina de Herrera le inició a Simón Domínguez ante la Real Audiencia de Charcas una demanda por su libertad y la de sus hijos (AGN, Tribunales, Leg.6, Exp.6; Leg.236, Exp.9).

³⁷ Hijo de Diego Ignacio Aráoz y del Campo y de Josefa Paz de Figueroa; hermano de Javier Aráoz, marido de Petrona Valderrama; y del Pbro. Diego Miguel Aráoz, Cura Vicario de Monteros; cuñado de Juan Manuel García Tezetia; y primo hermano del Alcalde de Primer Voto en 1765 y 1772 Miguel de Aráoz y Echávez. Era casado con Francisca Antonia Núñez de Herrera, hija de Pedro Núñez Herrera y de Andrea Moreno Briceño, padres del Congresista de Tucumán Pbro. Dr. Pedro José Miguel Aráoz, y de Josefa Aráoz, mujer del Maestro de Postas Francisco Borja Helguero Rodríguez (Calvo, 1936, I, 77; Pereira Lahitte, 1966; Murga, 1979, 223; y Corominas, 1987, ítem 161).

³⁸ AGN, División Colonia, Interior, Leg.10, Exp. 13, fs.29v. El Justicia Mayor Juan Silvestre Deheza y Helgueros, refutaba dicha aserción afirmando -al igual que los Allende habían sostenido el año anterior en Córdoba- que "...aunque la elección de José Miguel Medina no sea válida por lo que hace a los votos de sus parientes, es legítima en cuanto a los demás vocales libres de impedimento" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.10, Exp. 13, fs.30). Esta tesis Helgueros la fundaba en que

"...si acaso la ley Real requiere por forma de que los Parientes en los grados allí expresados no voten en las elecciones (lo que todavía es disputable) es una forma distributiva en cada vocal, y aunque indivisible en cada uno de por sí, es dividua (sic) en toda la elección" (Ibídem). De modo que, para concluir, Helgueros argumentaba que la elección podía "...ser válida y al mismo tiempo nula por partes, como se ha visto en la donación excesiva" (Ibídem).

³⁹ Miguel Aráoz, José Figueroa, José Thames, Luis Aguilar, José Molina, Juan Silvestre Deheza y Helgueros, Fermín Paz, Francisco Antonio Zorroza, Juan de Reto, Lorenzo de la Paliza, José de Berasaluze, Vicente Guevara, José Colombres y Thames, Francisco Xavier Gutiérrez, Miguel Viaña, Pedro Pablo Montenegro, José Gabriel García, Juan Antonio Porcelo, Juan Felipe de Paz, Juan de Mata de Uzqueda, José Huergo, Miguel Ignacio Aráoz, Pedro Gregorio López Cobo, José Manuel Aráoz, José Córdova, Pedro Bernavé Gramajo, Francisco Díaz de Sobrecasas, Ramón Alvarez, Domingo Cabot, y Francisco Lizarralde de Aráoz (AGN, División Colonia, Interior, Leg.10, Exp.13, fs.28).

⁴⁰ Nacido en Albuquerque, reino de Extremadura, en 1720; hijo del Capitán José Mestre; y hermano del Teniente Coronel Félix Mestre, marido de Mercedes Allende Ascasubi (hija del General José de Allende y Losa y de María Isidora Ascasubi) (Acevedo, 1955, 10; AN, 1964, 87; LC, 1968, II, 142; y AHC, Escribanía N.2, Leg.89, Exp.3).

⁴¹ Primo de Juan López Cobo. Casó con Francisca Bazán, hija de Juan Antonio Bazán y de Petrona Estévez, padres de Nicolás Valerio Laguna; de Benito Laguna; de Nicolasa Laguna, mujer de Domingo Villafañe, sin sucesión; del Pbro. Dr. Miguel Martín Laguna, cura de Trancas; de Gertrudis Laguna, mujer de Pedro Antonio Zavalía; y del Dr. Juan Venancio Laguna, marido de María Agueda

Aráoz y Córdoba, hija de Juan Antonio Aráoz y de Josefa Córdoba y Gutiérrez (Avila, 1920, 62, 91 y 94). Mantuvo estrechos vínculos comerciales con Domingo Basavilbaso (AGN, Protocolos, R.3-1760-fs.34), y con Juan de Lezica y Torrezuri (AGN, Protocolos, R.4-1761-fs.281v.; R.6-1769-fs.98). Su hijo, el Pbro. Miguel Martín Laguna, mantuvo en 1789 un conflicto con el Alcalde de segundo voto Juan Francisco del Prado y Revuelta que llegó hasta la Real Audiencia de Buenos Aires (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.67, Exp.26 y 27).

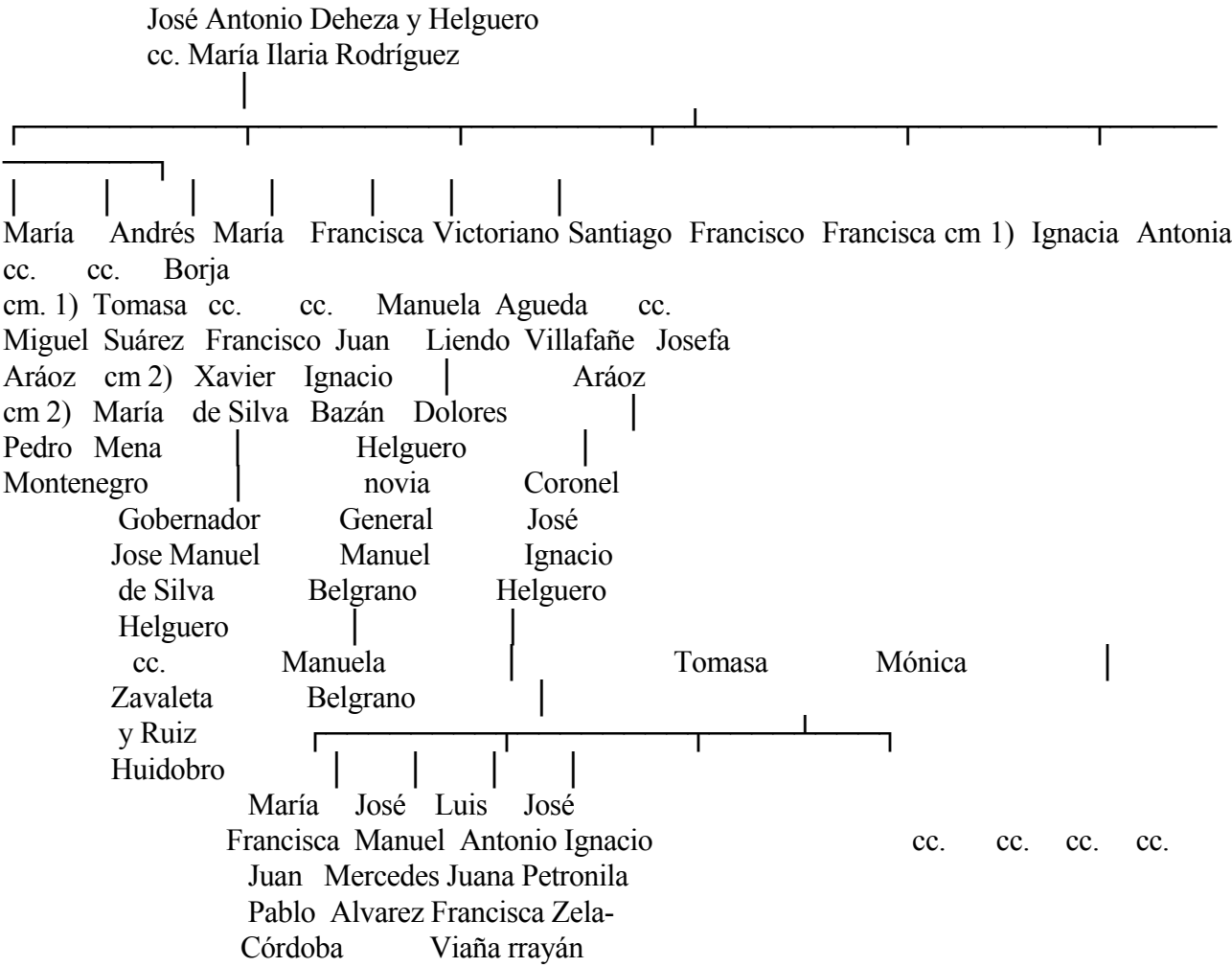
⁴² Cuando se lo designó debió haber sido un hombre anciano pues ya se había recibido como Regidor en 1732, habiendo desempeñado el cargo hasta 1739. Era hijo del Capitán Juan Nicolás de Aráoz y Bazán, y de Claudia del Campo Avila; hermano de Bartolomé Santos, Ignacio Inocencio y Diego Ignacio Aráoz; y marido de Francisca de Saavedra Gramajo, hija de Juan de Saavedra Gramajo Lasso de Puelles y de Ana Díez Caballero. Fué padre de seis hijas mujeres, Josefa casada en 1738 con Francisco Alvarez Ferreyra; Ana casada el mismo año con Marcelo de Villagra de la Lastra, natural del Valle Calchaquí, hijo del Capitán Mauricio de Villagra y de Bernarda de la Lastra; Francisca, desposada en 1744 con José de Aranguren, hijo de Joaquín Aranguren y de Francisca de Goitía y Lezama, naturales del Señorío de Vizcaya; Damiana casada con Francisco López; y Claudia casada con José de Palacios Villagra, hijo de Pablo Palacios y de Melchora Villagra, naturales del Valle Calchaquí (Calvo, 1936, I, 67ss.; y Corominas, 1987, items 78, 99, y 132).

⁴³ También nombró "...por Alcaldes de Hermandad a José Antonio García..., y a Joaquín Monzón, con dos sólo votos dados por el Alcalde de segundo voto Don Vicente Escobar y por el Regidor Francisco Texerina y Barreda; para Procurador General a Manuel Pérez Padilla electos por los dos expresados vocales; para Defensor General de Menores a José de Ojeda electo por el Alcalde de primer voto con los cuatro vocales que me han conferido su poder; y para Tesorero de Propios a José Millán con el único voto del expresado Alcalde de segundo voto Don Vicente Escobar" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.10, Exp.13, fs.10v.).

⁴⁴ Coronel, Gobernador de Armas (1775-1777), Justicia Mayor (1781-82), y Subdelegado de Tierras (1781), b. el 31-XII-1743, hijastro del Sargento Mayor y Provincial de la Santa Hermandad Juan Francisco Deheza y Helguero, segundo marido de su madre, y de Francisca Xaviera Sánchez de la Madrid, sobrino carnal del Cura Párroco de Tucumán Dr. Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid, y sobrino político de Francisco Javier de Cabrera, vecino de Córdoba, y de Miguel de Aráoz, por ser estos dos últimos casados con hermanas de su madre (Luque Colombes, 1942, 38; y Corominas, 1987, ítem 155, 101, y 35). Juan Silvestre estaba casado en primeras nupcias con María Antonia de Villavieja, hija de Francisco Xavier de Villavieja, natural de Madrid, y de Francisca Gonsález de Abreu, con sucesión; y en segundas nupcias con Catalina Carriaga y Balderrama, sin sucesión. También era hermano de José Antonio Deheza y Helguero, propietario de las estancias El Manantial y Vipos, por compra a la Junta de Temporalidades; y de Manuela Deheza, mujer de Pedro Nolasco Córdoba, viudo de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid; y tío de María Francisca Helguero, mujer de Miguel Aráoz, hijo de Miguel Ignacio Aráoz y de Gregoria Gramajo; de María Ignacia Helguero, mujer de Francisco Xavier de Silva, hijo del Cap. Ignacio de Silva, nacido en 1728, y de María de Aguilar y Mercado, padres del Gobernador de Tucumán (1828-29) José Manuel Silva y Helguero, casado con Tomasa Zavaleta Ruiz Huidobro, ambos padres a su vez de Dolores Silva, mujer del Mártir de Metán Don Marcos Avellaneda; de Victoriano Helguero, marido de María Manuela Liendo, padres de la que fuera la amante del General Manuel Belgrano; y del Maestro de Postas Francisco Borja de Helguero, casado con Josefa Aráoz, hija de Pedro Antonio Aráoz y de Francisca Antonia Núñez, padres estos últimos del Comandante General de Armas y Gobernador Delegado del Tucumán Coronel

José Ignacio Helguero, amigo y primo del General Gregorio Aráoz de Lamadrid (Calvo, 1936, I, 108; Murga, 1979, 223-228; y Corominas, 1987, ítems 35 y 145).

Cuadro A



(Fuente: Calvo, 1936, I, 108; y Murga, 1979, 223-228).

⁴⁵ mantuvo estrechos vínculos comerciales con Francisco Rodriguez de Vida (AGN, Protocolos, R.3-1759-fs.311v.),

⁴⁶ Capitán de Milicias Urbanas y Alguacil Mayor de Tucumán. Casó con Catalina Murga, hija o nieta de Isidro de Murga y de Isabel Núñez de Avila, padres de Visitación Monzón, la cual casara con José Ignacio Gancedo (Avila, 1920, 97; y Corominas, 1987, ítem 114). Era cuñado de un tal Murga, quien "...le dió unas atroces heridas al Abogado [Domingo] García, y si salió libre al primer día del arresto, sin habérsele formado Sumaria, sólo porque dixo Monzón que estaba loco" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 68). En 1782 Monzón mejoró la oferta hecha por Francisco Antonio Zorroza en el remate de diezmos de Tucumán (AGN, Interior, Leg.14, Exp.22). El

mismo año compra ganado en Tucumán y lo conduce a Jujuy (AGN, Hacienda, Leg.24, Exp.583). En 1795 solicita que se apruebe el auto del Gobernador de Salta por el que se declara que como Alguacil Mayor le corresponde el voto y asiento después de las justicias con precedencia a los demás Regidores (AGN, Tribunales, Leg.125, Exp.15). Y en 1796 litiga con José Gabriel de Segade por haberle desobedecido en su ejercicio como Alguacil Mayor (AGN, Tribunales, Leg.189, Exp.18).

⁴⁷ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.13, Exp.284, fs.42v. En efecto, Juan Silvestre Helguero era primo hermano carnal de Miguel Ignacio, Francisco Xavier, Juan Antonio, Pedro Nolasco, y José Manuel Aráoz de la Madrid, así como de María Petrona Aráoz, mujer de Francisco José Díaz Vélez, de Mercedes Aráoz, mujer de Julián Ruiz Huidobro, y de Catalina Aráoz, mujer primero de Juan José de las Muñecas, y luego de José Fermín Ruíz Poyo. Juan Silvestre era también tío político de Miguel Aráoz, hijo de su primo carnal Miguel Ignacio Aráoz; y de Josefa Aráoz, hija del Alcalde Pedro Antonio Aráoz.

⁴⁸ *Ibídem*.

⁴⁹ *Ibídem*.

⁵⁰ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.13, Exp.284, fs.41.

⁵¹ La obrepción era el fraude que se cometía "...en la obtención de alguna gracia, rescripto, empleo, o dignidad callando en la narración hecha al superior alguna verdad que era necesario manifestar para la validez del acto. La subrepción, por el contrario, era el fraude que se cometía en la obtención de dichas cosas avanzando hechos contrarios a la verdad" (Escriche, 1863, 1350).

⁵² Figura de construcción gramatical consistente en invertir el orden lógico en que deben colocarse las palabras.

⁵³ Es la palabra o sentencia que se puede entender de dos modos (Escriche, 1863, 169).

⁵⁴ Fraude que consiste en falsear una declaración, encubriendo los hechos.

⁵⁵ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.13, Exp.284, fs.41.

⁵⁶ Actas Capitulares de Tucumán, 30-XII-1782, citadas por Murga, 1979, 226.

⁵⁷ Marido de María Jacinta de Riglos, hija de Marcos José de Riglos y de Juana Xaviera de San Martín, concuñado del Intendente de Buenos Aires Domingo Reynoso, y primo político del Virrey Sobremonte (Gammalsson, 1980, 372).

⁵⁸ Mariano Zavaleta a la Junta Provincial de Temporalidades, Agosto de 1792 (AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-5, fs.71).

⁵⁹ *Ibídem*.

⁶⁰ Hijo de Manuel Fernando Bravo de Rueda y de Inés Santillán. Su madre, al enviudar, contrae segundas nupcias con Manuel de Palacio y Amavíscar. Era Jose Bravo de Rueda casado con María Roberta Suasnábar, hija del Maestre de Campo Francisco Antonio de Zuasnábar, Alcalde en 1767 y

Tesorero Juez Oficial Real en 1771, y de Petrona de Paz y Figueroa (hija de Miguel Paz y Figueroa y de María Díaz Caballero). José Bravo de Rueda era hermano del Alcalde de primer voto y Comandante de Armas Diego Bravo de Rueda, casado con María Josefa Goyechea y Frías. María Roberta Suasnábar era hermana de Gabriela, casada con José Pelayo de Alcorta; de Victoria, casada con el Comandante Gregorio Díaz; y de Margarita, mujer de José de Olaechea (Figueroa, 1927, 104, y 119).

⁶¹ Hijo de Gaspar de Goncebat y de Josefa Paz de Figueroa, sobrino carnal del Encomendero y Alcalde Francisco Solano de Paz, del Regidor y Maestre de Campo Domingo de Paz y Figueroa, y del Teniente Gobernador y Justicia Mayor General Juan José Paz de Figueroa; y sobrino político de los Maestres de Campo Roque Jacinto López de Velazco y Diego de Aráoz y del Campo (Calvo, 1924, 286; 1939, 177).

⁶² José Bravo de Rueda al Brigadier Andrés Mestre, Salta, 12-I-1785 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.20, Exp.1).

⁶³ Hijo del Maestre de Campo José López de Velazco y de Magdalena Sánchez Sambrano, casado con Josefa Corvalán de Castilla.

⁶⁴ José Bravo de Rueda al Brigadier Andrés Mestre, Salta, 12-I-1785 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.20, Exp.1).

⁶⁵ Elizondo (1779) en su tomo III, juicio ordinario n.23, f.259, trae las ordenanzas en virtud de las cuales estaba impedido en los Cabildos la designación de parientes. Estas ordenanzas se originaban en el capítulo III de la Real Cédula del 15-XI-1767 (inhallable en nuestro Archivo), que condenaba en Córdoba la designación de alcaldes relacionados entre sí dentro del cuarto grado de parentesco, es decir hasta primos hermanos, y del segundo grado de afinidad, por computación civil y no canónica (AGN, División Colonia, Interior, Leg.35, Exp.2). También fué reiterada esta norma por Real Cédula de 28-IX-1778. Estas Reales Cédulas tenían a su vez su origen en las Ordenes Generales de los años 1722, 1725, y 1752 (Ley 3, Tít.6, Part.4). También procedían de la Real Provisión del 20 de agosto de 1641, la cual a su vez provenía del Fuero Juzgo, Título I de su Libro IV, así como de las Provisiones Reales dictadas por el Virrey Toledo en 1597 (Bayle, 1952, 120). La doctrina más completa acerca del parentesco se expuso en el Fuero Juzgo con carácter científico-legal, acompañándola con árboles genealógicos y computaciones, en el Título VI de la Partida IV, conformándose con el Derecho Romano y el Canónico (Ver la noción de parentesco en la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana). También serían estas Ordenanzas de origen visigótico pues se practicaban ya en tiempos de Julio César en los senados de las naciones bárbaras asentadas en las Galias (Julio César, 1940, capítulo XXXIII).

⁶⁶ "...párrafo segundo de elección de oficios número 27 y 28, confirmada por la Ley 5, Título 10, libro 4 de las Recopiladas" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29, expediente sin foliar); y "...contra éste gobierna el impedimento alegado contra el sobredicho Sr. Alcalde de primer voto, pues es del propio modo interesado en el nominado litigio, ...porque es su sobrino carnal, y se halla por consiguiente dentro del grado prohibido para votar por la Ley 35, Título 2, Libro 2 de la Novísima Recopilación" (AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.6). La Curia Filipica la encontró Furlong (1944) en las bibliotecas de Juan Martínez de Bayogorri, de José de Antequera, de Francisco Javier de Echagüe y Andía y de Felipe de Haedo (Furlong, 1944, 41, 42, 43 y 67).

⁶⁷ Levene, 1946; Malagón-Barceló, 1959; y Luján Muñoz, 1987.

⁶⁸ Guilledo remata el oficio de Alguacil Mayor en 1753 (AHC, Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26, Exp.6). En 1758 fué encausado y condenado por la Real Audiencia de Charcas conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena, Manuel de Castro, y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique, por la conducta observada respecto del Comisionado Sebastián de Velasco. Guilledo fué suspendido en el ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a 30 leguas de Córdoba (Acevedo, 1972, 258). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67). Casó con María Teresa de las Casas y Correa, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario, y dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y Ferreyra. Era concuñado del Escribano Clemente Guerrero (LC, II, 142).

⁶⁹ desplazada desde la Expulsión de los Jesuitas de la hegemonía política de Córdoba por la más pujante y dinámica casa de los Allende.

⁷⁰ vecino morador de Córdoba, casado con Teresa Garay Molina Navarrete; hija de Francisco Garay y Tejeda y de Petronila Molina Navarrete; sobrina del Alcalde José de Molina y de Bartolina Garay y Tejeda, mujer de José Santiago Echenique y Cabrera; hermana del Alcalde Provincial Domingo Garay; y cuñada del Alcalde Francisco Armesto y Allende, del Alcalde José Benito de Acosta y de Fernando Arce y Bustillos (AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119).

⁷¹ clan estrechamente vinculado a la cría y comercialización de mulas con el Alto Perú.

⁷² AGN, Tribunales, Leg.97, Exp.17, fs.28.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ vecino morador de Córdoba, casado con Francisca Garay Molina Navarrete; hija de Francisco Garay y Tejeda y de Petronila Molina Navarrete; sobrina del Alcalde José de Molina y de Bartolina Garay y Tejeda, mujer de José Santiago Echenique y Cabrera; hermana del Alcalde Provincial Domingo Garay, y cuñada del Alcalde Francisco Armesto y Allende, del Alcalde José Benito de Acosta y de José de Ariza (AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119).

⁷⁵ hijo de Bernardo de la Quintana, nacido en Buenos Aires, y de Petronila de Cebberos y Suárez de Cabrera, casó con María Mauricia de Allende y Vicentelo, hija del General Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicentelo de la Rosa, y padre de Manuela de la Quintana, mujer del Sanjuanino Jose Matías de Torres y Funes; de Micaela de la Quintana, mujer del Coronel Santiago de Allende y Mendiolaza, y de Teresa de la Quintana, mujer de Jose Manuel Luciano de Allende y Torres (AN, 1964, 102; y FB, 1990, V, 252). Poseía una valiosa biblioteca detallada por Furlong (Furlong, 1944, 45-46).

⁷⁶ General, Justicia Mayor, y Teniente Gobernador, hijo de Lucas de Allende y Larrea, y de Agueda de Losa Bravo y Gutiérrez de Nis, hermano de José y Santiago Allende y Losa, y sucesivamente cuñado de Francisco Armesto, Bernardo Roldán, y Gregorio Arrascaeta, casó con

Bernarda Vicentelo de la Rosa y Carranza, hija de Francisco Vicentelo de la Rosa y de Angela Carranza y Herrera, padre del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende, y suegro de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, Antonio de la Quintana y Cebreros, Nicolás de Cabrera y Ceballos, y Ambrosio Funes y Bustos (Calvo, IV, 327; AN, 1964, 97; y LC, I, 27).

⁷⁷ Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda Losa Bravo, casóse en 1754 con María Isidora de Ascasubi, hija de Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la segunda mujer de su hermano Santiago. María Isidora era probablemente sobrina de José de Ascasubi, dueño del ingenio de moler metales del Potosí llamado Pampa, y de la labor Arenas. Como Alcalde de Primer Voto le cupo cumplir la orden del Gobernador de Buenos Aires de reabrir la Universidad de Córdoba luego de la expulsión de los Jesuitas. La cédula de Regidor Fiel Ejecutor propietario le fué librada el 2-XII-1773 (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro 48, folios 491v. y 222). Su suegro Don Marcos Ascasubi falleció en 1756 (AHC, Escribanía N.1, Leg.326, Exp.1). Rosalía de las Casas y Ponce de León, mujer de Don Marcos Ascasubi, era hija a su vez del primer matrimonio del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jaime con Teresa Ponce de León. José de Allende e Isidora Ascasubi fueron padres de Felipe de Allende, fallecido en 1784 a los 21 años de edad, de José Norberto de Allende, nacido en 1773, y de Josefa y Mercedes Allende, mujer esta última del Teniente Coronel Félix Mestre, hermano menor del Gobernador de Tucumán Andrés Mestre (AN, 1964, 87; y LC, 1968, II, 142; AHC, Escribanía N.2, Leg.89, Exp.3). José Allende y Loza contrae segundas nupcias con la hermana de su mujer, María Polonia Ascasubi, a su vez viuda de Manuel Arredondo y Puerta, padres estos últimos de Antonio Arredondo. Las hermanas Ascasubi eran parientas por los Ponce de León, de Simón Insaurrealde, el que fuera dueño de la chacarilla de la Calera. José Allende fué dueño de la estancia Saldán (LC, 1936, I, 35) y mantuvo estrechos vínculos comerciales con Pedro de Lea (AGN, Protocolos, R.2-1745-fs.254). Félix Mestre fué apoderado en Buenos Aires del comerciante Ambrosio Funes (Garro, 1882, 210). El Regidor José de Allende "...azotó privadamente en su casa a un español europeo solo porque no le compuso unos zapatos tan pronto como quería, lo que consta de Autos, y que para no experimentar la pena que merecía se compuso con el injuriado en 400 pesos, que le satisfizo por este agravio" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5).

⁷⁸ Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en primeras nupcias con Engracia Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz Mendiola, hija del Comisario de Caballería José Joaquín Mendiola y Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano José. María de la Cruz era nieta de Gaspar de Mendiola, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí.

⁷⁹ AGN, Tribunales, Leg.97, Exp.17, fs.28.

⁸⁰ AGN, Tribunales, Leg.97, Exp.17, fs.28.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ Tau Anzoátegui, 1987, 499.

⁸⁶ Autor de Política para regidores y señores de vasallos en tiempo de paz y guerra, y para preladados (Madrid, 1597; Medina del Campo, 1608; y Barcelona, 1818).

⁸⁷ Para una rescensión de Solórzano, ver Mouchet, 1955, 70; Malagón-Barceló y Ots Capdequí, 1965; y Halperín Donghi, 1985, 44-60.

⁸⁸ Levene nos recuerda que Castillo de Bovadilla afirmaba que la costumbre "...hace callar las leyes y reescritos de los Príncipes". Solórzano y Pereira estimaba que el buen legislador debía acomodar sus preceptos conforme las regiones y las gentes a quienes se refiere (Levene, 1946, I, 98-99). Sobre la costumbre en el derecho indiano, ver Dougnac Rodríguez, 1978; Avila Martel y Bravo Lira, 1984; y Tau Anzoátegui, 1973, 1976, 1986, y 1987. Sobre Castillo de Bovadilla ver Tomás y Valiente, 1982, 179-227.

⁸⁹ Antonio o José Antonio Allende, uno de los dos, dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de azogue en las inmediaciones de Mendoza, San Luis, y el Morro, sin haber logrado ser premiado por la suerte (Córdoba, oficio del Gobernador-Intendente del 5-XII-1789 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.5, Sala IX, 5-9-7]). José Antonio de Allende fué exonerado en 1771 de la Administración, tomó posesión de la estancia "Totoral Grande" en 1780 y falleció en 1805 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.8; y Escribanía N.4, Legajo 2, Exp. 2; y Leg.28, Exp.1). En 1770 José Antonio Allende fue demandado por su tío o primo Lucas Argüello por el cobro de unas mulas que le adeudaba (AHC, Escribanía N.3, Leg.15, Exp.8). Era hijo de Antonio de Allende y Villamonte, nacido en Gordejuela, y de Ignacia Argüello y Funes, hija esta última de Miguel Argüello y Ladrón de Guevara y de María de Funes. Casóse con Catalina Moyano y Cabrera, hija del Alcalde y Maestre de Campo Vicente Moyano y Oscariz y de Francisca Cabrera Celis de Burgos, padres del Gobernador-Intendente Interino de Córdoba en 1810 Coronel Dalmacio Allende Moyano (Calvo, 1936, I, 19 y 59; LC, III, 195; y Tejerina Carreras, 1974, 14). José Antonio de Allende era primo hermano de la mujer del Dr. Juan Antonio Saráchaga, y primo carnal en segundo grado del Coronel Santiago Alexo de Allende y del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende. Dalmacio en tanto, era primo carnal en tercer grado de los Coroneles Tomás y Faustino de Allende y Torres.

⁹⁰ "...como podía verse en la Curia Filípica párrafo segundo de elección de oficios número 27 y 28, confirmada por la Ley 5, Título 10, libro 4 de las Recopiladas" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29, expediente sin foliar).

⁹¹ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29, expediente sin foliar.

⁹² AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29 (expediente sin foliar).

⁹³ En 1777 lo demanda por calumnias Carlos Estela (AGN, Criminales, Leg.12, Exp.13). Hijo de José Gaspar de Xijena Santistéban y de Agueda Céliz de Burgos, viudo de Francisca de Soria se casó en segundas nupcias en 1790 con Rosa de Argüello y Tejeda, viuda a su vez de Juan José Martínez de Betancur, e hija de Juan de Argüello y Baigorri y de Sinforosa de Tejeda y Ledesma (Lazcano, I, 53). José Gaspar era hermano de Pablo Ignacio, casado con Teresa Espinosa de los Monteros, y primo hermano de Juan José y de Pedro Nolasco Xijena, padre este último del Dr. José Dámaso Jijena (Bustos Argañaraz, 1972, 9-13). Era José Prudencio deudor de Domingo de Basabilbaso y de José Almoríña

Caro por valor de \$7080 (AGN, Protocolos, Reg. 2, 1762, fs.130v.; y Reg.3, 1764, fs.113). En tanto, los primos Pablo Ignacio y Juan José Xijena fueron deudores del comerciante porteño Pablo Ruiz de Gaona en tres transacciones por valor de \$12.000 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1767, fs.365v.; Reg.2, 1767, fs.208; y Reg.6, 1768, fs.257v.)

⁹⁴ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.145, Exp.29.

⁹⁵ Los Regidores José, Roque y Antonio López de Velazco, y su cuñado Juan José de Paz y Figueroa e Ibáñez del Castrillo.

⁹⁶ Los hermanos Regidores Diego Ignacio, Bartolomé Santos y Miguel de Aráoz y del Campo, hijos de Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y de Claudia del Campo Avila, y un hijo del primero Fiel Ejecutor.

⁹⁷ El Alcalde Provincial Diego Martínez de Iriarte, marido de Teodora de Abreu y Figueroa, y su hijo el Alcalde Ordinario Domingo Martínez de Iriarte (Zenarruza, 1991, 340).

⁹⁸ El Teniente de Gobernador Estéban de Nieva y Castilla y sus hermanos el Alcalde Provincial Antonio de Nieva y el Fiel Ejecutor Juan Bernardo de Nieva, hijos de Juan Bernardo de Nieva y Castilla y de su esposa, hija del Teniente Gobernador del Tucumán General Juan Antonio de la Vega y Castro. Estéban de Nieva había contraído segundas nupcias con Ignacia Carrizo, viuda de Vega, y poseía las tierras de la comunidad indígena de Guazán, en Andalgalá (Rázori, 1945, II, 459). A su muerte, hereda la estancia Santa Rita de Huasán su nieto el Pbro. Francisco Cubas, un hijo de Francisco Cubas Palacio y de una hija de Nieva, quien las vende al General Luis José Díaz de la Peña, el cual instituye en parte de ellas el famoso Mayorazgo de Guazán, y otra parte dona en 1746 a los Jesuitas.

⁹⁹ El Alférez Real Manuel de Villafañe y Toledo y sus hijos el Alguacil Mayor Luis de Villafañe y Tejeda, el Depositario General Francisco de Villafañe, y el Alcalde Ordinario Ignacio de Villafañe

¹⁰⁰ Los Regidores Félix Apolinario y José Arias Rengell e Hidalgo Montemayor, y Adrián, Pedro y Antonio Fernández Cornejo.

¹⁰¹ Hijo de Bernardo Vélez de Herrera y de María Teresa de Baigorri y Tejeda, casado con Rosa Sársfield (LC, 1969, III, 17). María Teresa era hija del General Juan Clemente de Baigorri y Brizuela, Señor de San Sebastián de Sañogasta, y encomendero de Nogolma, y de Gabriela de Garay y Tejeda. Poseía Dalmacio Vélez una valiosa biblioteca (Furlong, 1944, 66).

¹⁰² equivalente al de Corregidor o Gobernador.

¹⁰³ Bilbaíno, casado con Francisca Antonia Garay y Zamudio, hija de Domingo Garay y Molina, y de Isidora Zamudio y Echenique. Domingo era sobrino de Pedro Garay y Tejeda, el que a su vez era casado con su prima hermana Agueda Fernández Granados y Tejeda (Calvo, 1924, 164). José del Portillo era padre del Dr. José Eugenio del Portillo y Garay, y abuelo del Cap. José María Cortés y del Portillo, casado con Josefa Funes y Allende, hija de Ambrosio Funes (Cabrera, 1915; y AN, 1964,104).

¹⁰⁴ Hija de Gerónimo Luis de Echenique y de Josefa Urtubey y Paz de Figueroa (AHC, Escribanía N.2, 1766, Leg.36, Exp.13). Era hermana del R. P. Bernabé Echenique, a quien se le adjudicó erróneamente la autoría del Laudatione Quinque (Furlong, 1937, 1952).

¹⁰⁵ Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco, entre 1755 y 1760. Sobrino de Diego de Hesles, el Secretario del Virrey del Perú José Antonio Manso de Velazco, Conde de Superunda; marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y Campero; padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marqués de Yavi Fernando Campero; sobrino de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes (Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; y primo hermano del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero y de Francisco de Güemes y Campero (Acevedo, 1969, 14 y 103; y Cutolo, II, 74; y III, 50). Tomás de Allende y Losa y su cuñado Gregorio Arrascaeta afianzaron en 1764 el juicio de residencia del Gobernador Campero (Acevedo, 1969, 15).

¹⁰⁶ Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda Losa Bravo, casóse en 1754 con María Isidora de Ascasubi, hija de Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la segunda mujer de su hermano Santiago. María Isidora era probablemente sobrina de José de Ascasubi, dueño del ingenio de moler metales del Potosí llamado Pampa, y de la labor Arenas. Como Alcalde de Primer Voto le cupo cumplir la orden del Gobernador de Buenos Aires de reabrir la Universidad de Córdoba luego de la expulsión de los Jesuitas. La cédula de Regidor Fiel Ejecutor propietario le fué librada el 2-XII-1773 (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro 48, folios 491v. y 222). Su suegro Don Marcos Ascasubi falleció en 1756 (AHC, Escribanía N.1, Leg.326, Exp.1). Rosalía de las Casas y Ponce de León, mujer de Don Marcos Ascasubi, era hija a su vez del primer matrimonio del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jaime con Teresa Ponce de León. José de Allende e Isidora Ascasubi fueron padres de Felipe de Allende, fallecido en 1784 a los 21 años de edad, de José Norberto de Allende, nacido en 1773, y de Josefa y Mercedes Allende, mujer esta última del Teniente Coronel Félix Mestre, hermano menor del Gobernador de Tucumán Andrés Mestre (AN, 1964, 87; y LC, 1968, II, 142; AHC, Escribanía N.2, Leg.89, Exp.3). José Allende y Loza contrae segundas nupcias con la hermana de su mujer, María Polonia Ascasubi, a su vez viuda de Manuel Arredondo y Puerta, padres estos últimos de Antonio Arredondo. Las hermanas Ascasubi eran parientas por los Ponce de León de Simón Insaurralde, el que fuera dueño de la chacarilla de la Calera. José Allende fué dueño de la estancia Saldán (LC, 1936, I, 35) y mantuvo estrechos vínculos comerciales con Pedro de Lea (AGN, Protocolos, R.2-1745-fs.254). Félix Mestre fué apoderado en Buenos Aires del comerciante Ambrosio Funes (Garro, 1882, 210).

¹⁰⁷ Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en primeras nupcias con Engracia Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería José Joaquín Mendiolaza y Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano José. María de la Cruz era nieta de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí.

¹⁰⁸ Acevedo, 1969, 23 y 117.

¹⁰⁹ También contribuyeron a alimentar la crisis de 1766 las varias causas que en lo Civil se hallaban pendientes del Juzgado de segundo voto, entre ellas las causas por los dineros provenientes de la limosna de Redención de Cautivos, administrada por la Orden Mercedaria, y la causa por los cuatro mil pesos del principal del Convento de San Lorenzo, que retenía la concuñada de Don Santiago Allende, Doña Catalina de Arrascaeta. Fué entónces, a partir de dichos conflictos, que la Casa de los Allende guardó para con la Orden Mercedaria una "...notoria enemistad, antipatía y odio entrañable" (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3). Una vez expulsados los Jesuitas, en 1767, el eje de la lucha en la elite cordobesa se trasladó de la disputa por los dineros

provenientes de la limosna de Redención de Cautivos, administrada por la Orden Mercedaria, y los fondos del Convento de San Lorenzo, a la disputa por los despojos de la Compañía de Jesús.

¹¹⁰ Apellido originario del Ayuntamiento de Cabanillas, partido judicial de Figueras, provincia de Gerona (García Carraffa, XXX, 189). En 1775 tuvo un litigio con Blas Martínez por cobro de pesos (AGN, Leg.70, Exp.34). En 1777 José de Allende, Marcelino Moyano, Juan Alejandro Echenique, y otros lo demandan por calumnias (AGN, Criminales, Leg.12, Exp.13). En 1780 como Teniente Administrador de la Real Hacienda de la Intendencia de Córdoba demanda al Cabildo de Córdoba (AGN, Guerra y Marina, Leg.5, Exp.16). El mismo año demanda al médico Antonio Rosel por el abandono de su criada (AGN, Tribunales, Leg.202, Exp.5; y Leg.114, Exp.2). Es también en el mismo año que se lo separa de su cargo en la Real Hacienda por acusación de dolo (AGN, Justicia, Leg.9, Exp.166). En 1781 solicita su traslado a Jujuy (AGN, Interior, Leg.13, Exp.13). Este mismo año mantuvo un litigio con José Thames, vecino de Tucumán (AGN, Tribunales, Leg.150, Exp.20). En 1782 se lo procesa por inmoralidad (AGN, Criminales, Leg.20, Exp.20). En 1786 participa en la investigación a raíz de la sustracción de los caudales del finado Juan Bautista Pardo (AGN, Criminales, Leg.29, Exp.3). En 1807 se inicia el inventario de sus bienes (AGN, Tribunales Administrativos, Leg.20, Exp.634).

¹¹¹ AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

¹¹² Ateniéndonos al documento descubierto por Levillier (1915), comentado por Acevedo (1965), y reeditado por Segreti (1973), que firma en 1776 el Teniente Gobernador Interino del Tucumán Antonio de Arriaga.

¹¹³ hijo del Cap. Pedro de Usandivaras y de María de la Sierra y Cuerno, y casado con María Teresa de Allende Vicentelo. Las hermanas de esta última estaban casadas con los comerciantes Hipólito García Posse, Gregorio de Tejerina y Gregorio de las Heras, y José Miguel Tagle y Hereña, y con el terrateniente Bartolomé de Figueroa y Mendoza (Allende Navarro, 1964, 99). En el ejercicio de su vara de Alcalde, Usandivaras "...cometió el escandaloso hecho de azotar a un hombre rústico amarrado a una cruz, sin que bastasen a disuadirle de aquel irreligioso atentado las instancias del miserable paciente, que más christiano le advertía no ultrajase el simulacro de la que fué medio de nuestra redención, mayormente teniendo tan inmediato el rollo, que le facilitaba teatro adecuado para la satisfacción de su saña por cuyo exceso le aplicó el compasivo Tribunal de la Inquisición saludable penitencia" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5).

¹¹⁴ Era hijo del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León y de Eugenia de Ledesma y Olmedo, cuñado del General Prudencio Palacios, y primo hermano de la mujer de José Manuel Salguero (LC, 1969, III, 293). Domingo Ignacio León fué Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775. Fué hermano del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, famoso por su barraganía con la mulata Bernabela, y por su amistad con el Coronel Santiago Alexo de Allende. Domingo Ignacio se casó con María Josefa Zavala, hija del General Juan Antonio de Zavala, nieta de María de Garay, y

hermana del Dr. Juan Antonio de Zavala (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21). A Domingo Ignacio se le inició juicio sucesorio en 1785 (AHC, Escribanía N.1, Leg.405, Exp. 16).

¹¹⁵ marido de Catalina Arrascaeta y Ferreyra de Aguiar, hija de Miguel de Arrascaeta y de Josefa Ferreyra de Aguiar, sobrino de Gregorio y José de Arrascaeta, y cuñado de Justo Arrascaeta.

¹¹⁶ Levillier, 1915, II, 155. Díaz de la Fuente era casado con Juana Arias de Cabrera, hija de Juan Luis Arias de Cabrera y Gutiérrez y de Rosa de Ceballos y Losa Bravo, nieto paterno de Santiago Arias de Cabrera y Díaz de Quiñones, propietario de la estancia Yacanto en Traslasierra, y en el Arroyo de Tegua, en Río Cuarto, y de María Cándida Gutiérrez y Ledesma, y nieto materno de Juan Miguel de Ceballos y Almonacid, dueño de la estancia San Isidro, hoy Río Ceballos, y de María Josefa Losa Bravo y Alborno (LC, III, 215); concuñado de Bernabé Gregorio de las Heras, de Felipe Antonio Gonsález, de Juan José Sardeñis, del mendocino José Orencio Correa, y de Rafael María Castellanos y Cossio; suegro de Mariano de Usandivaras y Allende; y consuegro del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende. Su suegro Juan Luis era cuñado de Francisco de Bustos y Cabanillas (Mayol Laferrere, 1975; y LC, I, 1936, 445).

¹¹⁷ AGN, División Colonia, Sala IX, Interior, Leg.13, Exp.5.

¹¹⁸ Hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en primeras nupcias con Isabel Bustos y Ledesma, y en segundas nupcias con María Caldevilla (LC, 1936, 140). Pretendió en 1785 adquirir de los Dominicos la estancia de Diego Celis en \$2.000, y fracasó en el intento (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.242, Exp.12). Según Andrés Mestre, Ordóñez "...no tenía poco mérito en que no se hubiese disipado con mayor brevedad la Sublevación de Traslasierra, por patrocinar a José de Isasa, autor de aquellos alborotos" (Andrés Mestre al Virrey Vértiz, Salta, 24 de Agosto de 1782 [AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5]).

¹¹⁹ Hijo de Pedro de la Torre y de María Josefa de Benítez, poseedores de una valiosa biblioteca (Furlong, 1944, 66), casado con María Teodora de Vera y Mujica, padres a su vez de José Joaquín de la Torre y Vera, a su vez casado con Teresa de Allende y Torres, hija del Caballero de Carlos III Don Pedro Lucas de Allende; y de Juan Capistrano de la Torre y Vera, marido de Josefa Torres de la Quintana (Cutolo, VII, 358; y Crespo y Moyano Aliaga, 1992, 30).

¹²⁰ Mayordomo de Propios y Arbitrios, 1770-74; casado con María Rosa Echenique, hija de José Gregorio Echenique y Cabrera y de María Rosa Arzaga (Calvo, 1938, III, 229 y 233; y LC, II, 203). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

¹²¹ Casó con María Teresa de las Casas y Correa, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario, y dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y Ferreyra. Era concuñado del Escribano Clemente Guerrero (LC, II, 142). Guillello remata el oficio de Alguacil Mayor en 1753 (AHC, Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26, Exp.6). En 1758 fué encausado y condenado por la Real Audiencia de Charcas conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena, Manuel de Castro, y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique, por la conducta observada respecto del Comisionado Sebastián de Velasco. Guillello fué suspendido en el ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a 30 leguas de Córdoba (Acevedo, 1972, 258). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

¹²² Hijo del Alcalde Francisco Garay y Tejeda, aquel que había sido herido de una puñalada en 1753, y de Petronila Molina Navarrete, y sobrino del Alcalde José de Molina, y de Bartolina Garay y Tejeda, mujer de José Santiago Echenique y Cabrera. Era casado con Isidora Zamudio y Echenique, hija de Juan José de Dízido y Zamudio y de Tadea Echenique y Garay, Señora de la Capellanía de Copacabana, y por tanto prima hermana del Alcalde de Hermandad Patricio Echenique (Calvo, 1924, 164). Domingo Garay era hermano de Petrona Garay, la cual se desposó con el Alcalde Francisco Armesto y Allende; de Ipólita Garay, mujer del Alcalde José Benito de Acosta; de Fernando Garay; de Teresa Garay, mujer de José de Ariza; y de Francisca Garay, mujer de Fernando de Arce y Bustillos; y primo hermano de María Josefa Molina y López del Barco, mujer de Juan Agustín Echenique y Cabrera (AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119). Isidora Zamudio era hermana de Lucas Zamudio, casado con Gervasia Echenique; de Juan Gregorio Zamudio, desposado tres veces, la primera con la santafesina Ana Josefa Gaete y Vera Muxica, la segunda con la mendocina Catalina de Anzorena Nieto, y la tercera con la mendocina María Nicolasa de Videla y Correas de Larrea; de José Antonio Zamudio, casado con Simona Muñóz; de Pedro Pablo, casado con su prima hermana Petrona de Zamudio Vallejo, de Catalina, casada con Pablo Cires; de María Antonia, casada con José Miguel de Zamudio Vallejo; y de Bernardina, casada con Manuel de Figueroa Ceballos (Calvo, II, 395). Era padre de Francisca Antonia Garay, mujer del Alcalde José del Portillo, de Justo Pastor Garay, marido de Francisca Peralta, y de José Justo Garay, marido de Isidora Josefa de Urtubey, hija de Juan Luis de Urtubey y de Maria Ana Villarroel (Calvo, 1924, 164; y AHC, Escribanía N.2, Leg.92, Exp.21). Fernando de Arce y Bustillos, tuvo por hija natural a Juana María Arce y Bustillos, viuda de Domingo Aragón (AHC, Escribanía N.4, Leg.49, Exp.6; Sucesión No.3468). En cuanto a José de Ariza, éste reclama en 1801 que el dinero que dejó para dotes de niñas pobres el finado Deán de Córdoba Don José Garay Bazán, primo hermano de Francisco Xavier Garay, se doten sus hijas María del Carmen, Petrona, Agustina, y Polonia de Ariza (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.82, Exp.30). En 1782 el Alcalde Provincial Don Domingo Garay, fué hallado culpable por el Juez Ambrosio Funes y Bustos, de haber degollado en el Corral de Barrancos, Puesto de Don Luis de Aguirre, en sus propias camas, al matrimonio constituido por Pascual Cortés y su mujer Isidora Orco, y a la jóven de 12 años, Candelaria Cortés, hermana de Pascual (AHC, Crímen, 1782, Leg.36, Exp.1; 1784, Leg.38, Exp.10; y 1796, Legajos 70, Exp.5 y 72, y Exp.11). En 1790 Garay fué nuevamente procesado por inferir lesiones a Carlos Andino, marido de María Teresa Lorca, y privar indebidamente de su libertad a la parda liberta María de los Santos Morales, y maltratar a su esposo Valentín Cáceres (AHC, Juzgado del Crímen, 1790, Leg. 50, Expedientes 16 y 18). Con motivo de este proceso se le embargan los bienes (AHC, Crímen, 1790, Leg.52, Exp.13). Y su mujer, Isidora Zamudio, se vió obligada a pedir permiso para rifar su casa (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.19). Un año después vuelve a reincidir intentando asesinar a Florentino Rojas (AGN, Crímen, 1791, Leg.54, Exp.22). En una época en que los crímenes de los individuos "trascendían a los parientes", los mismos significaron la defenestración política y social de su hijos varones José Justo Garay y Justo Pastor Garay, y de su yerno el ex-Alcalde José del Portillo. Finalmente, su nieto José Lorenzo Garay y Peralta, hijo de Justo Pastor, perseguido por la justicia cordobesa se radicó en Buenos Aires. José Justo Garay, marido de Isidora Josefa de Urtubey, hija de Juan Luis de Urtubey y María Ana Villarroel, es procesado en 1800 por desacato (AHC, Crímen, 1800, Leg.86, Exp.21). En agosto de 1809 representa los perjuicios que en sus bienes patrimoniales le había inferido su madre Isidora Zamudio (Oficio del 28-VIII-1809, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 16, Sala IX, 6-1-4). José Lorenzo Garay y Molina, fué también procesado en 1793 conjuntamente con otros cómplices, por ladrón y otros excesos (AHC, Crímen, 1793, Leg.58, Exp.11). Una década y media más tarde, en 1808, como soldado de la Compañía de La Carlota, José Lorenzo deserta de la misma, y aparentemente se oculta en Buenos Aires (Oficio del 16-IX-1808, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.16, Sala IX, 6-1-4). Finalmente, José Lorenzo Garay

contrae matrimonio con Pascuala de la Torre y Cordobés (Calvo, 1924, 164).

¹²³ Eduardo R. Saguier (1991): "Los conflictos entre el Clero y el Estado en el mundo colonial. El ejercicio del Patronato Real en el Virreinato del Río de la Plata", presentado en el Encuentro "Sociedad y Economía en el Mundo Colonial", organizado por el Centro de Estudios de Historia Americana Colonial (Universidad Nacional de La Plata) y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, celebrado el 27, 28 y 29 de junio de 1991 en el Museo Roca (Buenos Aires);

¹²⁴ Hijo de Antonio de Allende y Villamonte, nacido en Gordejuela, y de Ignacia Argüello y Funes, hija esta última de Miguel Argüello y Ladrón de Guevara y de María de Funes. Casóse con Catalina Moyano y Cabrera, hija del Alcalde y Maestre de Campo Vicente Moyano y Oscariz y de Francisca Cabrera Celis de Burgos, padres del Gobernador-Intendente Interino de Córdoba en 1810 Coronel Dalmacio Allende Moyano (Calvo, 1936, I, 19 y 59; LC, III, 195; y Tejerina Carreras, 1974, 14). José Antonio de Allende era primo hermano de la mujer del Dr. Juan Antonio Saráchaga, y primo carnal en segundo grado del Coronel Santiago Alexo de Allende y del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende. Dalmacio en tanto, era primo carnal en tercer grado de los Coroneles Tomás y Faustino de Allende y Torres. Antonio o José Antonio Allende, uno de los dos, dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de azogue en las inmediaciones de Mendoza, San Luis, y el Morro, sin haber logrado ser premiado por la suerte (Córdoba, oficio del Gobernador-Intendente del 5-XII-1789 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.5, Sala IX, 5-9-7]). José Antonio de Allende fué exonerado en 1771 de la Administración, tomó posesión de la estancia "Totoral Grande" en 1780 y falleció en 1805 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.8; y Escribanía N.4, Legajo 2, Exp. 2; y Leg.28, Exp.1). En 1770 José Antonio Allende fue demandado por su tío o primo Lucas Argüello por el cobro de unas mulas que le adeudaba (AHC, Escribanía N.3, Leg.15, Exp.8).

¹²⁵ Siendo Alcalde Gregorio Arrascaeta "...azotó en la plaza pública a una honrada mujer española por solo haber fingido su mujer Doña María de Allende que la había agraviado en la Iglesia, sobre lo qual siguió el marido de la infamada Autos en la Audiencia de Charcas, y para evadirse Arrascaeta de la condigna providencia que esperaba acalló con dos mil pesos las quejas de la querellante" (AGN, División Colonia, Sala IX, Interior, Leg.13, Exp.5).

¹²⁶ José, Santiago, y José Antonio de Allende al Virrey Cevallos, Córdoba, 8-I-1778 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, 1774-1779, Leg.2, Sala IX, 5-9-4). Sin embargo, el mismo día Ordóñez escribe al Virrey Ceballos que los Allende omiten decir que la recusación no fué admitida por el Tribunal en que se controvertió "...pues es constante que el Exmo. Sr. Virrey de Lima siéndolo destas provincias declaró definitivamente que de aquellos autos no resultaba cosa que malquistase mi conducta, y confirmando en su consecuencia la elección que la menor parte de votos hizo el citado año, me mandó a posesionar en el empleo de Alcalde de Segundo Voto, el que serví el año de 1774 con aceptación del público" (Juan Tiburcio Ordóñez al Virrey, Buenos Aires, 8-I-1778, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 2, Sala IX, 5-9-4).

¹²⁷ *Ibidem*.

¹²⁸ *Ibidem*.

¹²⁹ Oficio de Nicolás García Guilledo, Córdoba, 3-II-1779 (AGN, División Colonia, Intendencia

de Córdoba, Leg. 2, Sala IX, 5-9-4).

¹³⁰ *Ibídem*.

¹³¹ Hijo de Angel Antonio de la Bárcena, y de Gabriela Goyechea, casado en primeras nupcias con Francisca Fernández, la misma que fué hostigada por el Alcalde de Primer Voto Francisco de Armesto y Allende, y en segundas nupcias con Teresa de Funes y Allende, hija de Ambrosio Funes y Bustos de Albornoz y de María Ignacia de Allende y Vicentelo de la Rosa (LC, 1936, I, 194). Divorciado de su mujer por culpa de Dionisio Romero, probablemente el mismo que conjuntamente con el Coronel de Milicias Gaspar de Salcedo provocó un alboroto en Tucumán en oportunidad de la introducción de la Real Renta de Tabaco y Naipes (Andrés Mestre al Virrey Vértiz, Salta, 24 de Agosto de 1782 [AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5]). Padre del Coronel Manuel de la Bárcena, llamado el "Tuerto Bárcena", célebre por sus crueldades durante las guerras civiles. Juan Antonio de la Bárcena fué compañero del Alcalde Provincial José Martínez y González (Learte, 1926, 217), y fué quien iniciara ante el Virrey de Lima en 1768 la causa criminal contra el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero, y ante la Real Audiencia de La Plata en agosto de 1769 la causa criminal contra Fernando Fabro, Administrador de la Junta de Temporalidades de Córdoba, el mismo que había secuestrado los bienes de los Jesuitas (AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, Legajos 2 y 7, Sala IX, 21-9-3, y 21-10-2). Por mano de Bárcena, como líder de la facción de los Echenique, el Cabildo de Cordoba había iniciado en Lima en 1768 instancias judiciales contra Campero (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

¹³² AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.2, Sala IX, 5-9-4.

¹³³ Juan Antonio de la Bárcena al Virrey Ceballos, Córdoba, 7-XII-1779 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.2, Sala IX, 5-9-4).

¹³⁴ Domingo Garay y Nicolás García Guilledo al Virrey, Córdoba, 2-I-1778 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.2).

¹³⁵ *Ibídem*.

¹³⁶ *Ibídem*.

¹³⁷ Este actuó también como Alcalde ordinario diez años después, en 1789, y más luego como Defensor de Pobres en 1792.

¹³⁸ Domingo Garay y Nicolás García Guilledo al Virrey, Córdoba, 6-I-1779 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Sala IX, 5-9-4).

¹³⁹ Hijo de Félix Cabrera Celis de Burgos y de María Isabel de Zeballos y Suárez de Velazco, nieto paterno de Félix Cabrera y Cortés y de Dionisia Celis de Burgos, y nieto materno de Juan Antonio de Zeballos. Casado con María Tomasa de Allende, hija del General Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicenteleo de la Rosa y Carranza, era concuñado de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, de Antonio de la Quintana y Cebreros, y de Ambrosio Funes; y primo segundo de José

Prudencio Xixena y Céliz de Burgos. Nicolás era padre de José Antonio Cabrera y Allende, casado con Dolores de Gastañaduy, hija del Teniente Gobernador de Santa Fé Teniente de Navío de la Real Armada y Caballero de Alcántara Prudencio María de Gastañaduy y de Isabel Martín da Costa (Calvo, 1924, 74; Díaz de Molina, 1966, 62). Padeció en vida un extenso litigio con Joaquín de Buena Maysón, por las tierras nombradas El Ancón, conocidas como el Horno de Don Félix (AHC, Escribanía N.3, Leg.41, Exp.14).

¹⁴⁰ Entre sus acreedores figuraban Francisco Alvarez Campana, Blas Ximénez, Juan Antonio Egusquiza, Patricio José Warnes, Manuel José de Borda, Isidro José Balbastro, Manuel Antonio Warnes, Manuel Escalada, Lorenzo Cossio, Manuel Rodríguez de la Vega, Eugenio Lerdo de Tejada, Juan José Viana, Xavier Saturnino Saraza, Manuel Méndez de Ochagavía, Domingo de Basavilbaso, José de San Pedro Lorente, Domingo de Vea y Murguía, Manuel Joaquín de Zapiola, Pablo Ruiz de Gaona, Miguel de Arana y Torrezuri, Francisco Segurola, Tomás de Valansátegui, y Julián Hernández Barruso. (AGN, Protocolos, Registro 2, 1753, fs.230v., 226v.,225v.,220v., y 712v.; R.4, 1753, fs.188v.; R.5, 1753, fs.192v.; R.1, 1754, fs.452v.; R.4, 1754, fs.595; R.5, 1754, fs.584v.; R.1, 1756, fs.62 y 63; R.2, 1756, fs.111v. y 125; R.5, 1756, fs.232v.; R.2, 1757, fs.132v.; R.5, 1757, fs.176; R.6, 1757, fs.94; R.2, 1759, fs.40v.; R.1, 1759, fs.175; R.4, 1759, fs.351v.; R.5, 1759, fs.139; R.6, 1759, fs.179v.; R.2, 1760, fs.219; R.4, 1760, fs.232; R.5, 1760, fs.404v.; R.2, 1762, fs.4; R.3, 1762, fs.10; R.4, 1762, fs.5v. y 11; R.5, 1762, fs.2v.; R.2, 1763, fs.119, 116, 111v., y 120v.; R.4, 1763, fs.108v.; R.5, 1763, fs.172v.; R.2, 1764, fs.320v., 318v., 330 y 331; R.2, 1764, fs.334; R.4, 1764, fs.191v.; R.2, 1764, fs.352; R.2, 1765, fs.204v., y 231; R.4, 1765, fs.98; R.6, 1765, fs.348; R.2, 1766, fs.342; R.1, 1768, fs.19; R.2, 1768, fs.100v.; R.3, 1768, fs.122, 101v., 103v., 104v., y 172; R.4, 1768, fs.256 y 255v.; R.6, 1768, fs.139v.; R.6, 1771, fs.230v., y 352; R.2, 1773, fs.41; R.5, 1773, fs.85, 96v., y 194; R.6, 1773, fs.248v.,278v., 260v., y 118v.; R.1, 1774, fs.161v.; R.6, 1774, fs.147v.; R.5, 1782, fs.14; R.1, 1785, fs.400 y 402v.; R.5, 1785, fs.236; y R.6, 1790, fs.321v.)

¹⁴¹ Criado en Sevilla, sobrino de Francisco Cobo (Córdoba, 10-III-1784, AGN, Intendencia de Córdoba, Leg.3, Sala IX, 5-9-5), y primo del comerciante Miguel Laguna. Juan López Cobo se casó con Damiana Figueroa Mendoza, hija del Maestre de Campo Juan Jacinto Figueroa Mendoza y Cabrera, y de Leocadia de Ceballos y Suárez de Cabrera. Eran padres de Marquesa López Cobo, desposada en 1812 con Melchor Ferrer y Xivixel, hijo de Juan Bautista Xivixel y Caminada y de Gertrudis Xivixel (LC, II, 379). Damiana Figueroa era a su vez cuñada de Pedro de Argañaráz Villafañe, Francisca de Usandivaras y Allende, y de Bernardina de Zamudio Echenique (Calvo, 1936, I, 240ss.). Un Antonio López Cobo se había casado con Ana María Correa, viuda de José Domingo Cabral, vecino del Río Tercero (AHC, Escribanía N.2, Leg.93, Exp.15). Don Antonio López Cobo, Juez Pedáneo del Río Tercero, preso en Córdoba, fué presumiblemente asesinado en Diciembre de 1795 por Faustino García (Marcelino Moyano al Presidente de la Real Audiencia de Buenos Aires, Córdoba, 18-XII-1795, AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.249, Exp.76). Se le abre auto sucesorio en 1797 (AHC, Escribanía N.2, Leg.93, Exp.15).

¹⁴² Fenómeno que ha sido relatado en otros trabajos del autor.

¹⁴³ Casó con María Mercedes Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería José Joaquín de Mendiolaza, y de Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de José de Allende y Losa. María Mercedes era nieta de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí, y era cuñada de Santiago de Allende y Losa (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.97, Exp.4). En 1763 se le inició un sumario para averiguación de su proceder

como Teniente de Oficiales Reales (AHC, Crímen, 1763, Leg.18, Exp.4). Al año siguiente el Alcalde Provincial José Martínez de Candia le inició un juicio por injurias (AHC, Crímen, 1764, Leg.19, Exp.13). Finalmente, en 1769, fué procesado por contrabandista (AHC, Crímen, 1769, Leg.22, Exp.15)

¹⁴⁴ padre del Coronel Santiago Alexo de Allende, quien se había ganado los despachos de Coronel de los Reales Ejércitos participando en la represión de la sublevación indígena del Alto Perú, donde se había destacado en las acciones de Orubumda y Oropesa, comandando las tropas reales en el combate de Saylla a las órdenes del Coronel Avilés, y asistiendo a las acciones de Secuani y Condorcuyo (Oficio del 16-XI-1804 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.12, Sala IX, 5-10-7; y Leg.10, Sala IX, 5-10-5]. El 14-II-1782, en el Cuzco, le fueron dadas a Santiago Alejo de Allende las Instrucciones para combatir a Gabriel y Diego Tupac Amaru [Archivo Museo Mitre, A.B., c.22, P.I. n.13]. El 24-II-1782, en Sicuani, fué elevado un Memorial solicitando el grado de Coronel en favor de Santiago Alejo de Allende [Archivo Museo Mitre, A.B., c.22, P.2, n.17]. El 6-XI-1783, en el Cuzco, se libra el Certificado de Servicios de Santiago Allende [Archivo Museo Mitre, A.B., c.23, P. I, n.6; A.B., c.28, P.I., n.29]. [Debo esta valiosa información a la generosidad de la Prof. Estela Barbero].

¹⁴⁵ Fiador del Gobernador Gerónimo Matorras (Acevedo, 1969, 137). Bautizado en Velbis de la Jara, Toledo, en agosto de 1738, hijo de Francisco Plácido Gregorio y de Catalina García de las Heras, y casado con María Eugenia Arias de Cabrera, hija del Cap. Juan Luis Arias de Cabrera y Gutiérrez y de Rosa de Ceballos y Losa Bravo. Era concuñado del comerciante Jacinto Díaz de la Fuente (Espejo, 1967, 444). Bernabé Gregorio de las Heras era hermano de María Gregorio de las Heras (mujer de Juan de Tejerina, y madre de Gregorio Tejerina y Gregorio de las Heras, marido de Josefa de Usandivaras y Allende); y de Bernardo Gregorio de las Heras, bautizado en Velbis en agosto de 1749, Alférez Real de Buenos Aires en 1773, Regidor, Defensor de Menores, Tesorero en 1783, casado con María Rosalía Ursula de la Gacha, hija de Juan Ignacio de la Gacha, nacido en la Villa de Guetaria, Guipúzcoa, y de Juana María de Rojas y Acevedo. Don Bernardo era el padre del prócer de la independencia de Chile General Juan Gualberto Gregorio de las Heras (LC, II, 15 y 20; FB, 1988, III, 99).

¹⁴⁶ Mayordomo de Propios y Arbitrios en 1778 y 1781; era hermano de Antonio Manuel Gonzalez de Acosta, casado con María Rosa Espeche y Herrera, padres de María Salomé Gonzalez Espeche, mujer del Teniente Gobernador de Catamarca Nicolás Avellaneda y Tula, padre a su vez del Mártir de Metán Marco Avellaneda (Calvo, 1936, I, 108). También era hermano de Francisco José Gonsález de Acosta, yerno del Coronel Francisco Antonio Gonsález, casado con Teresa Gonsález de Villarroel (Datos proporcionados por el Investigador Carlos Jáuregui).

¹⁴⁷ Los cuatro concuñados estaban casados con cuatro hermanas Arias de Cabrera, hijas del Capitán Juan Luis Arias de Cabrera y Gutiérrez y de Rosa de Ceballos y Losa Bravo, herederos de la estancia San Javier en el Valle de Traslasierra (Mayol Laferrere, 1975). Al Capitán Juan Luis Arias de Cabrera le fué otorgada en 1780 una merced de tierras en el Puesto de las Animas (AHC, Escribanía N.2, Leg.59, Exp.6).

¹⁴⁸ Las Heras llevaba contraídas entre 1766 y 1804 una treintena de transacciones crediticias con Juan Tomás Echever, Domingo Belgrano Pérez, Pablo Ruiz de Gaona, Domingo de Basabilbaso, Manuel del Arco, Phelipe Santiago del Pozo, Diego Casero, José de San Pedro Lorente, Pedro Manuel Beruti, Ventura L. Lorente Romero, Manuel Antonio Barquin, Gaspar de Santa Coloma, Tomás de Valansátegui, Juan José Lezica, Casimiro Francisco de Necochea, Cristóbal Avecilla, Martín de Alzaga, y Diego de Agüero, por la suma total de \$163.969 (AGN, Protocolos, R.2, 1766, fs.35v.; R.6,

1766, fs.47; R.2, 1767, fs.248, 222, y 256v.; R.3, 1767, fs.254v.; R.5, 1767, fs.294; R.2, 1768, fs.222v.; R.6, 1768, fs.273, y 275; R.3, 1774, fs.520v.y 466v.; R.5, 1774, fs.201; R.6, 1774, fs.339; R.3, 1776, fs.305v.; R.5, 1778, fs.47; R.1, 1782, fs.337; R.6, 1782, fs.186; R.1, 1783, fs.321; R.4, 1783, fs.353v.; R.6, 1784, fs.259; R.4, 1786, fs.259 y 263v.; R.6, 1786, fs.35 y 45v.; y R.3, 1804, fs.192).

¹⁴⁹ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.145, Exp. 29.

¹⁵⁰ *Ibídem*.

¹⁵¹ *Ibídem*.

¹⁵² Sus acreedores fueron en orden cronológico Pedro de Lea, Joseph Vienne, Manuel Escalada, y Francisco José Díaz Vélez (AGN, Protocolos, Reg.2, 1748, fs.58v.; R.4, 1748, fs.53; R.4, 1749, fs.138; R.5, 1771, fs.203; R.5, 1790, fs.297v.)

¹⁵³ Entre sus acreedores figuraban en orden cronológico María Josefa Balbastro, Domingo Basabilbaso, José Antonio Ibáñez, Martín Olazábal, José Antonio Irigoyen, Manuel Sarratea, Agustín Casimiro de Aguirre, Manuel Escalada, Vicente Azcuénaga, Matías de Abaroa Barrena, Bernardo Sancho Larrea, y Francisco Ignacio de Ugarte (AGN, Protocolos, Reg.4, 1761, fs.33v.; R.2, 1761, fs.20; R.2, 1764, fs.331v., 313v., y 304v.; R.2, 1767, fs.70, 228, 192v., 212 y 182v.; y R.6, 1767, fs.210 y 346; R.3, 1771, fs.130v.; R.5, 1771, 117v., 134, y 141; R.6, 1771, fs.143 y 159; R.3, 1773, fs.214; R.4, 1773, fs.503 y 507v.; R.5, 1773, fs.190v.; y R.6, 1773, fs.291, 285v., y 254.)

¹⁵⁴ vecino morador de Córdoba, casado con Teresa Garay Molina Navarrete; hija de Francisco Garay y Tejeda y de Petronila Molina Navarrete; sobrina del Alcalde José de Molina y de Bartolina Garay y Tejeda, mujer de José Santiago Echenique y Cabrera; hermana del Alcalde Provincial Domingo Garay; y cuñada del Alcalde Francisco Armesto y Allende, del Alcalde José Benito de Acosta y de Fernando Arce y Bustillos (Archivo Histórico de Córdoba, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119).

¹⁵⁵ Levillier (1915), reeditado por Segreti (1973).

¹⁵⁶ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 13, Exp. 269.

¹⁵⁷ *Ibídem*.

¹⁵⁸ AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

¹⁵⁹ Probablemente pariente del Comandante de Armas de Tarija Luis Hurtado de Mendoza. Mayordomo de Propios y Arbitrios en 1776; casado con una Moynos y Ledesma, hija de Pedro Moynos e Hipólita Ledesma, cuñada del regidor José Manuel Salguero, sobrina del Alguacil Mayor Manuel de Estéban y León, y prima política del General Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, III, 293).

¹⁶⁰ AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

¹⁶¹ Nacido en Córdoba en 1755. Hijo del Sargento Mayor Juan José de Funes y Rodríguez Navarro y de Josefa Bustos y Cabanillas, y nieto de Vicente de Funes y Losa Bravo (primo hermano de la mujer de Lucas de Allende), y de Juana Rodríguez y Navarro (LC, I, 194). Don Ambrosio fué

Sargento Mayor y Comandante del Regimiento de Milicias. Participó en tres expediciones contra los indios del sur y los portugueses. Fué Alcalde de segundo voto en 1783, Procurador en 1791, Juez Diputado del Real Consulado en 1794, y Alcalde de primer voto en 1798. Funes fué suegro de José Antonio de la Bárcena (padre del Coronel Bárcena), de Juan Pablo Pérez Bulnes, y del Cap. José María Cortés y del Portillo (AN, 1964, 104).

¹⁶² General, Justicia Mayor, y Teniente Gobernador, hijo de Lucas de Allende y Larrea, y de Agueda de Losa Bravo y Gutiérrez de Nis, hermano de José y Santiago Allende y Losa, y sucesivamente cuñado de Francisco Armesto, Bernardo Roldán, y Gregorio Arrascaeta, casó con Bernarda Vicentelo de la Rosa y Carranza, hija de Francisco Vicentelo de la Rosa y de Angela Carranza y Herrera, padre del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende, y suegro de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, Antonio de la Quintana y Cebberos, Nicolás de Cabrera y Ceballos, y Ambrosio Funes y Bustos (Calvo, IV, 327; AN, 1964, 97; y LC, I, 27).

¹⁶³ Español, casado con María del Carmen Albornoz y Carranza, hija de José de Albornoz y Guevara y de Francisca Carranza Echenique, padre del que fuera Gobernador de Córdoba, José Xavier Díaz, quien a su vez estaba casado con Jenuaria Allende y Mendiola; de Juana Isabel Díaz, mujer del comerciante de mulas Gaspar Sáenz Bravo; y de María Clara Díaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (Calvo, I, 203). Era socio de su primo Juan Pérez de Bulnes.

¹⁶⁴ AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

¹⁶⁵ *Ibidem*.

¹⁶⁶ Alcalde de Segundo Voto de Córdoba. Natural de Lima, Gobernador de Armas de Santiago del Estero, casado con Polonia Hernández de León, hija de Juan Hernández de León y de Francisca Pérez y Calderón; padres de Andrea del Castillo, mujer de Hilario Lazcano y Usandivaras, y de Manuel Antonio del Castillo, marido de Francisca Funes; y suegro de Lorenzo Recalde y Cano (LC, I, 263; Buscá-Sust, 1981, 80). Debe tenerse en cuenta que Antonio del Castillo se opuso al casamiento de su hijo Manuel Antonio del Castillo con Francisca Funes (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.208, Exp.14). En 1788 interpone un recurso por no conformarse en el puesto de Alcalde de Segundo Voto (AGN, Tribunales, Leg.58, Exp.32).

¹⁶⁷ Este había actuado también como Alcalde ordinario diez años antes, en 1779, y más luego como Defensor de Pobres en 1792. Sin perjuicio de sus actividades políticas, Francisco Antonio Gonsález poseía un fuerte giro mercantil, alcanzando a contraer entre 1753 y 1790 86 operaciones de fiado entre Córdoba y Buenos Aires por valor de \$286.327. Entre sus acreedores figuraban Francisco Alvarez Campana, Blas Ximénez, Juan Antonio Egusquiza, Patricio José Warnes, Manuel José de Borda, Isidro José Balbastro, Manuel Antonio Warnes, Manuel Escalada, Lorenzo Cossio, Manuel Rodríguez de la Vega, Eugenio Lerdo de Tejada, Juan José Viana, Xavier Saturnino Saraza, Manuel Méndez de Ochagavía, Domingo de Basavilbaso, José de San Pedro Lorente, Domingo de Vea y Murguía, Manuel Joaquín de Zapiola, Pablo Ruiz de Gaona, Miguel de Arana y Torrezuri, Francisco Seguro, Tomás de Valansátegui y Julián Hernández Barruso (AGN, Protocolos, Registro 2, 1753, fs.230v., 226v., 225v., 220v., y 712v.; R.4, 1753, fs.188v.; R.5, 1753, fs.192v.; R.1, 1754, fs.452v.; R.4, 1754, fs.595; R.5, 1754, fs.584v.; R.1, 1756, fs.62 y 63; R.2, 1756, fs.111v. y 125; R.5, 1756, fs.232v.; R.2, 1757, fs.132v.; R.5, 1757, fs.176; R.6, 1757, fs.94; R.2, 1759, fs.40v.; R.1, 1759, fs.175; R.4,

1759, fs.351v.; R.5, 1759, fs.139; R.6, 1759, fs.179v.; R.2, 1760, fs.219; R.4, 1760, fs.232; R.5, 1760, fs.404v.; R.2, 1762, fs.4; R.3, 1762, fs.10; R.4, 1762, fs.5v. y 11; R.5, 1762, fs.2v.; R.2, 1763, fs.119, 116, 111v., y 120v.; R.4, 1763, fs.108v.; R.5, 1763, fs.172v.; R.2, 1764, fs.320v., 318v., 330 y 331; R.2, 1764, fs.334; R.4, 1764, fs.191v.; R.2, 1764, fs.352; R.2, 1765, fs.204v., y 231; R.4, 1765, fs.98; R.6, 1765, fs.348; R.2, 1766, fs.342; R.1, 1768, fs.19; R.2, 1768, fs.100v.; R.3, 1768, fs.122, 101v., 103v., 104v., y 172; R.4, 1768, fs.256 y 255v.; R.6, 1768, fs.139v.; R.6, 1771, fs.230v., y 352; R.2, 1773, fs.41; R.5, 1773, fs.85, 96v., y 194; R.6, 1773, fs.248v., 278v., 260v., y 118v.; R.1, 1774, fs.161v.; R.6, 1774, fs.147v.; R.5, 1782, fs.14; R.1, 1785, fs.400 y 402v.; R.5, 1785, fs.236; y R.6, 1790, fs.321v.). Litigó en 1763 con José I. Arcos, en 1768 con Juan J. Argüello, en 1769 con Phelipe Delgado, en 1769 con Ramón Gaetán, en 1782 con José Galarza, en 1783 con Francisco del Signo (AHC, Escribanía N.1, Leg.4, Exp.15; Leg.361, Exp.2; Leg.362, Exp.2; Leg.364, Exp.7; Leg.399, Exp.11; y Leg.400, Exp.1)

¹⁶⁸ Hijo del Maestre de Campo José Rodríguez, dueño de la estancia de Alta Gracia, por compra a las Temporalidades, y de Felipa Catalina Ladrón de Guevara. Era hermano de José Antonio Rodríguez, casado con María Agueda Allende y Mendiolaza, hija del Alcalde Santiago de Allende y Losa y de María de la Cruz Mendiolaza; y de Manuel Antonio Rodríguez, casado con María del Rosario Orduña, antecesor de las familias puntanas de los Rodríguez Saa y los Rodríguez Jurado (LC, I, 336). Su padre era adicto al bando de José Antonio de la Bárcena, líder de la facción de los Echenique (AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5).

¹⁶⁹ Hijo de Bernardo de la Quintana, nacido en Buenos Aires, y de Petronila de Cebreros y Suárez de Cabrera, casó con María Mauricia de Allende y Vicentelo, hija del General Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicentelo de la Rosa, y padre de Manuela de la Quintana, mujer de Jose Matías de Torres y Funes; de Micaela de la Quintana, mujer del Coronel Santiago de Allende y Mendiolaza, y de Teresa de la Quintana, mujer de Jose Manuel Luciano de Allende y Torres (AN, 1964, 102). Poseía una valiosa biblioteca detallada por Furlong (Furlong, 1944, 45-46).

¹⁷⁰ Hijo de Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicentelo de la Rosa y Carranza, cuñado de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, de Antonio de la Quintana y Cebreros, de Nicolás de Cabrera y Ceballos, y de Ambrosio Funes y Bustos; casado con María Javiera de Torres Gaete, y padre de José Manuel de Allende y Torres, casado con Teresa de la Quintana y Allende, del Teniente Coronel Tomás Bailón de Allende, casado con Inocencia Díaz de la Fuente y Arias, y del Sargento Mayor Faustino de Allende, casado con Rita Trinidad Moyano y Deza; y suegro de José Joaquín de la Torre y Zúñiga, de José Cipriano de Argüello y Moynos, de José Roque de Funes y Sánchez, y de Manuel de la Piedra y Vargas (Calvo, I, 36; y III, 56).

¹⁷¹ Nacido en San Sebastián, España, casó en Córdoba con María del Rosario Ponce de León, hija del Maestre de Campo Agustín Ponce de León y Elena de Carranza, padres de José Manuel de Isasa, prócer de la Independencia. Tuvo una confusa actuación en la rebelión comunera de Traslasierra de 1774 (Barrionuevo Imposti, 1968). Comprador de La Candelaria, estancia jesuítica, según Acuerdo del 31-III-1784 (AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, 1774-1777, Leg.7, Sala IX, 21-10-2) Debo esta referencia a la gentileza de la Profesora Estela Barbero, quien se halla estudiando la expulsión de los Jesuitas con una meticulosidad propia de benedictino. Tuvo Isasa duros pleitos con José Manuel Salguero, dueño de la Estancia de Los Dos Ríos (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.220, Exp. 15).

¹⁷² Originario del lugar de Arredondo, partido judicial de Ramales, provincia de Santander (García Carraffa, X, 39). Hijo de Manuel de Arredondo y Puerta, Presidente de la Junta de Temporalidades de Santa Fé, y de María Polonia Ascasubi, quienes poseían una valiosa biblioteca (Furlong, 1944, 66). Esta última cuando enviuda vuelve a casar con José de Allende y Losa. María Polonia Ascasubi era hija de Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León; hermana de María Isidora Ascasubi, mujer del General José de Allende y Losa; y prima hermana de la segunda mujer de Santiago Allende y Losa (AN, 1967, 87). Y era probablemente sobrina de José de Ascasubi, dueño del ingenio de moler metales del Potosí llamado Pampa, y de la labor Arenas.

¹⁷³ AGN, Sala IX, Interior, Leg. 51, Exp. 13, citado por Mariluz Urquijo, 1987, 282.

¹⁷⁴ AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.6.

¹⁷⁵ *Ibidem*.

¹⁷⁶ *Ibidem*.

¹⁷⁷ Hijo de Nicolás de Cabrera y Ceballos y de María Tomasa de Allende, casado con Dolores de Gastañaduy, hija del Teniente Gobernador de Santa Fé Teniente de Navío de la Real Armada y Caballero de Alcántara Prudencio María de Gastañaduy y de Isabel Martín da Costa (Calvo, 1924, 74; Díaz de Molina, 1966, 62).

¹⁷⁸ AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.6.

¹⁷⁹ Coronel, Comandante General de Armas, Alcalde de Primer Voto, Gobernador-Intendente Interino en 1810, hijo de José Antonio de Allende y Argüello y de Catalina Moyano Cabrera, contrajo matrimonio con Trinidad Martínez de Bethencourt (LC, 1969, III, 195; y Calvo, 1936, I, 59).

¹⁸⁰ Hombre de pensamientos revolucionarios que emigró a España antes de la Revolución. Hijo de Pedro Lucas de Allende Vicentelo y de María Javiera de Torres, hermano mayor de los Coroneles Tomás Baylón y Faustino de Allende, y primo hermano de la mujer del Coronel Santiago Alexo de Allende y Mendiolaza, y de la mujer de José Antonio de la Bárcena. José Manuel Allende estaba casado con Teresa de la Quintana y Allende, hermana de la mujer del Coronel Santiago Allende. También era primo segundo de la madre del General José María Paz, y primo tercero del Coronel Dalmacio Allende.

¹⁸¹ El Cabildo de Córdoba al Virrey Joaquín del Pino, Córdoba, 1801 (AGN, Tribunales, Leg.148, Exp.15).

¹⁸² *Ibidem*.

TOMO VII

CAPITULO 7

Las fracturas patrimoniales civiles en los Cabildos. La elegibilidad y la venalidad de los oficios capitulares en el Virreinato del Río de la Plata.

Para una corriente historiográfica, representada por González Muñoz y Martínez Ortega (1989), quienes analizan la elite nativa de Mérida (Yucatán), lo que determinaba que --a diferencia del cabildo de Valladolid (Yucatán)-- su cabildo estuviera oligárquica o nepóticamente controlado no fué sólo la intensa endogamia o consanguineidad practicada por los grupos dominantes sino las numerosas subastas de oficios públicos consumadas. A semejanza de Mérida, en las provincias del Río de la Plata, el incesante aluvión de comerciantes y funcionarios peninsulares que comenzó a radicarse a partir de la Paz de Aquisgrán (1748) y la formación del Virreinato (1778), amén de debilitar la naturaleza patricéntrica de los patriciados locales, volviéndolos más cognáticos,¹ provocó al decir de Barbier (1972), una oferta ampliada de empleados en la administración secular, militar y eclesiástica. Esta oferta ampliada amenazó seriamente a las élites locales, por un lado con sufrir una movilidad social descendente, y por otro con aumentar sus oportunidades de contraer matrimonios con miembros de la burocracia.² Este desigual alud inmigratorio hizo necesario modificar la legislación que hacía referencia a los Cabildos seculares, las Milicias y los Capítulos de las Ordenes Religiosas.

Continuando estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo si en aquellas ciudades con un alto grado de penetración mercantil, que eran nudos del tráfico comercial a larga distancia, la subasta pública de cargos capitulares y corregimientos debilitó o no el profundo localismo reinante y la consiguiente endogamia de las élites locales al incorporar a mercaderes foráneos, facilitando así las políticas centralizadoras y patrimonialistas, sin perjuicio de considerar más adelante la incorporación de individuos de dudoso origen racial o de sospechosa legitimidad. Asimismo, nos preguntamos en este trabajo si la íntima vinculación entre los adquirentes de cargos capitulares y los fundadores de capellanías, y la estrecha correlación entre los ciclos comerciales y la frecuencia con que se adquirían cargos capitulares, contribuyeron o no a fortalecer una presión patrimonialista y señorial. Si bien Moore (1976) considera que en Francia las Reformas Borbónicas anti-patrimonialistas del Canciller Maupeou pudieron haber evitado la Revolución, esta hipótesis difícilmente es aplicable a los territorios coloniales de España. Para el tipo de ciudades-estado de naturaleza patrimonialista hemos tomado los casos de Mendoza, Córdoba, Tucumán, Catamarca y Salta. Asimismo, nos preguntamos si en los Cabildos de las ciudades del Virreinato del Río de la Plata del período borbónico --alejadas de las rutas comerciales y que contaban con un bajo grado de penetración comercial-- las elecciones concejiles acentuaban o no el localismo reinante, debilitando las políticas centralizadoras e intervencionistas de los Borbones. Para este tipo de ciudades hemos tomado los casos de Corrientes, Santa Fé, Asunción, La

Rioja, y Santiago del Estero.

La secular lucha en el seno de las élites coloniales por alcanzar los asientos concejiles, por reducir el precio de los arrendamientos de los ingenios, por rebajar o condonar las deudas contraídas por los azogueros, por reducir la tasa de interés de los censos y capellanías o por conducir el Situado Real, reflejaba las contradicciones existentes en la apropiación de las rentas agraria y minera. Estas contradicciones se habrían montado a su vez sobre las contradicciones desatadas en las luchas insurreccionales o guerras de liberación nacional. La lucha por la rebaja o condonación de las deudas que los azogueros habían contraído con corregidores, mercaderes y oficiales reales, a exponer en este ensayo, reflejaba también las contradicciones por la renta minera misma. Ello era así porque la rentabilidad de los azogueros y trapicheros dependía de los sobreprecios que las burguesías comerciales portuarias (Lima y Buenos Aires) y provinciales (Cuzco, La Paz, Tucumán, Córdoba, Salta, y Cochabamba) imponían a los productos fiados, imprescindibles para el funcionamiento de los ingenios.³ La lucha por el control de las Cajas Reales y de la Compañía de Azogueros, entre los mismos Mercaderes de Plata, también reflejaría las contradicciones por la renta minera.⁴

A la luz de estas hipótesis, el conflictivo desempeño de la actividad capitular habría obedecido a la resistencia que las facciones mayoritarias de los Cabildos oponían a las políticas patrimonializadoras del estado absolutista en desarrollo.⁵ La venta en subasta pública --y consiguiente hereditariad-- de las Oficialías Reales, las Regidurías Perpetuas y los Corregimientos de Indios; la elegibilidad oligárquica de los oficios capitulares; la renuncia nepótica de los oficios públicos; el cobro compulsivo de las deudas mercantiles; el control capitular y eclesiástico de censos, capellanías y obras pías; y la discriminatoria selección de quienes se beneficiaban con la conducción del Situado Real habrían jugado un rol determinante en la gestación de situaciones conflictivas. En este trabajo nos hemos propuesto indagar sólo el rol cumplido por las luchas que se dieron en las elecciones de los alcaldes ordinarios, así como las luchas por la venta de los Corregimientos de Indios, las Oficialías Reales y las Regidurías Perpetuas. De entre estas últimas surge la sugestiva hipótesis si en los Cabildos, con una campaña anti-patrimonialista o democratizadora, se hubiera evitado la revolución de independencia. Para estudiar estas luchas hemos recogido una treintena de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires; y en los Archivos Históricos de Córdoba y Mendoza.⁶

Los cargos venales.

En aquellas ciudades que eran nudos del tráfico comercial de larga distancia, al subastarse los cargos públicos al mejor postor, o en el sentido propuesto por Hernández Benítez (1986) 'al venderse poder', el intenso localismo reinante no se habría debilitado, por cuanto los adquirentes de dichos cargos, por lo general ricos comerciantes peninsulares o residentes de los puertos de América, ligados al comercio a larga distancia, se entroncaban matrimonialmente con las élites nativas, y patrimonialmente con las instituciones de la Iglesia Católica.⁷ Era en tiempos de bonanza minera, que las regidurías perpetuas y las oficialías reales se cotizaban a los precios más altos. En dichas ocasiones, los cargos electivos como el de los alcaldes ordinarios --los que realmente garantizaban la autonomía de los Cabildos por ser cargos de justicia que no podían enajenarse-- eran una minoría comparados con los cargos venales, como el de los Regidores perpetuos. Por ejemplo, en Potosí, los adquirentes de los cargos públicos venales eran ricos comerciantes porteños o peninsulares, ligados al comercio a larga distancia.⁸ En 1795, Juan de Ybieta y Endeyza,⁹ adquirió el nombramiento de Teniente Sostituto de Contador en \$6.000.¹⁰ Más luego, en 1797, se lo vió al porteño Manuel Obligado detentar en Potosí la Alcaldía de primer voto.¹¹ En Salta, los hermanos Juan Adrián,¹² Dr. Pedro Vicente,¹³ y Antonio

Fernández Cornejo,¹⁴ originarios de Moquegua, aunque nacidos en Tacna,¹⁵ adquirieron, en 1778, las varas del Cabildo de Salta.¹⁶ En Córdoba, el Gobernador Interino Joaquín de Espinosa y Dávalos,¹⁷ para contrarrestar el poder del clan hegemonizado por la familia Echenique, al que pertenecía el Teniente de Rey Manuel de Estéban y León,¹⁸ consolidó el bloque de poder de los Allende subastando los oficios de regidor y los grados militares de General,¹⁹ en Tomás de Allende y Losa,²⁰ y José de Allende y Losa,²¹ y sólo los de Regidor en Santiago de Allende y Losa,²² en su primo hermano Antonio de Allende y Villamonte,²³ y en José Prudencio Xijena,²⁴ siendo los tres últimos librados recién en 1772.

En cuanto al notariado su valorización dependió de la intensidad de la actividad comercial. Socolow (1987) nos ha relatado como las escribanías públicas de Buenos Aires se fueron valorizando desde 1727 en que se cotizaron en \$475, para remontarse un 50% (\$600) en 1749, al triple (\$1.300) en 1762, siete veces (\$3.500) su primitivo valor en 1774, y una vez declarada la Paz de Versailles, en 1785, una docena de veces (\$6.000).²⁵ La creación en Buenos Aires, a partir de la Paz de Utrecht (1713), de los registros números dos (Merlo) y tres (Esquivel); y a partir de la Paz de Aquisgrán (1748), de los registros cuatro (Gorordo), cinco (Ferrera) y seis (Vásquez Pelayo), nos revelan la palmaria influencia de la actividad mercantil desatada luego de dichos acontecimientos.²⁶ También se reveló esta influencia en el interior del espacio colonial, luego de las regulaciones de Libre Comercio de 1778, cuando en San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja y Cochabamba se manifiesta la necesidad de crear nuevas escribanías.²⁷

La vinculación patrimonial con la Iglesia se daba a través de capellanías y memorias pías. En Buenos Aires, la clase política registró una quincena de casos donde los regidores perpetuos habían fundado capellanías y memorias pías, sobresaliendo en ello Cristóbal de Aguirre, Francisco de Almandoz, Martín de Alzaga, Vicente Azcuénaga, Juan Benito González, Fernando Caviedes, Domingo Belgrano Pérez, José Blas de Gainza, Juan José de Lezica y Alquiiza, Juan de Mansilla, Antonio Obligado, José Antonio Otálora, Miguel Fermín de Riglos, Manuel Rodríguez de la Vega, Gaspar de Santa Coloma, Saturnino Saraza, Manuel Antonio Warnes y Domingo Antonio Zapiola y Sosa.

A medida que las autoridades capitulares sufrieron el proceso de patrimonialización gestado por las Reformas Borbónicas el precio de los oficios concejiles se fué depreciando. La venta de los oficios habría consolidado los bloques de poder locales debido al exclusivo rol jugado por la renuncia de dichos oficios, equivalente a una suerte de arrendamiento de los mismos. En 1786 el Alcalde Provincial de Santa Fé Juan José Morcillo Baylador renuncia el cargo a favor de su hijo Pedro Pablo Morcillo, y mientras dure la minoridad del hijo lo renuncia en Juan de Pereda y Morante.²⁸ En Salta, el Fiel Ejecutor Mateo de Saravia y Jáuregui había heredado el oficio de un tío suyo.²⁹ De igual manera, en Buenos Aires, renuncian sus oficios en 1759 el Regidor Juan de la Palma en su hijo;³⁰ en 1761 el Alguacil Mayor Antonio de la Torre en su cuñado Luis Aurelio de Zavala;³¹ en 1789 el Escribano público y de Número Martín de Rocha en su hijo Juan José Rocha;³² en 1787 el Escribano José García de Echaburu en su hijo Mariano;³³ en 1793 el Alcalde Provincial Diego Mantilla y de los Ríos en su hijo Manuel Florencio Mantilla;³⁴ en 1795 el Escribano Público y de Número Eufasio José Boyso en su hijo Tomás José Boyso;³⁵ y en 1816 el Escribano Inocencio Antonio de Agrelo en su hijo Marcos Leonardo de Agrelo.³⁶ En Santiago del Estero el Alcalde Provincial Roque López de Velazco renuncia su oficio en su hijo José Antonio López de Velazco,³⁷ y en San Juan, en 1797, renuncia el Regidor del Cabildo Pedro Sarmiento de Quiroga.³⁸

La provisión de Corregimientos de Indios.

En cuanto a la provisión de los Corregimientos de Indios, a diferencia de las Regidurías Perpetuas, se hacía en interés directo de las sociedades o compañías introductoras o importadoras de efectos de Castilla o de mercadería contrabandeada.³⁹ De ahí el acierto con que el Virrey Manuel de Amat y Junient anatematizara a los Corregidores como "diptongos de mercaderes y jueces", pues estos estaban a cargo de sus repartimientos forzosos. La abolición de los repartos mercantiles, que ocurrió luego de la Rebelión de Túpac Amaru, perjudicó no sólo a los Corregidores, sino también a la clase azoguera altoperuana, la cual solía financiar sus empresas mineras con el crédito otorgado por aquellos. Gran parte de las operaciones de crédito entre comerciantes y corregidores era concertada en Buenos Aires mismo. En el Apéndice E-I constatamos que al menos una veintena de Corregidores se endeudaron en Buenos Aires antes de partir hacia su destino.⁴⁰ Y en otro trabajo de este autor comprobamos como muchos corregidores, acuciados por el desfasaje entre los sueldos y los gastos inherentes al cargo, recayeron en la defraudación y el cohecho.⁴¹ En carta a José Santos Díaz y Herrero, Francisco Gutiérrez de Cevallos le agradecía en 1777 "...la oferta que V. M. me franquea de escribir a Madrid a Dn. Domingo Sánchez Barrero para que promueva la instancia sobre el Corregimiento de mi hermano Dn. Juan González, en la inteligencia de la prompta entrega de los mil pesos de a 128 quartos".⁴² Ni lardo ni perezoso, el mismo día, Gutiérrez de Cevallos le escribe a Sánchez Barrero diciéndole que "...José Santos Díaz y Herrero me escribe diciendo comisionaría en esa corte, sugeto que entregase a V. Md. los 4 mil pesos consavidos por el Corregimiento que solicita mi hermano de que me persuado aia también prevenido a V. M.". ⁴³ Tres meses más tarde, Barrero comunica su conformidad con la entrega de los 4 mil pesos "...conseguida que aia la gracia del Corregimiento a favor de mi hermano González".⁴⁴ Por su peculiaridad los casos de Antonio de la Calzada y el General Antonio de Rueda ya fueron resaltados en otro capítulo de esta obra. También fueron proverbiales las acusaciones recaídas en los corregidores por sus relaciones con los Administradores de la Renta de Tabacos. Con motivo del tabaco contrabandeado por Juan Bautista Buytrago en la Provincia de Chichas en la década del 70, el Corregidor de la Provincia de Tarija, Francisco Xavier García de Prado, fué acusado de estar coludido con Buytrago al atropellar al Administrador de la Real Renta de Tabacos Francisco Xavier Savano o Seoane, cerrándole los estancos.⁴⁵ Y con relación a las defraudaciones de la Renta de Tributos el caso más notorio fué el del Corregidor de la Provincia de Atacama, Don Francisco Argumanis Fernández, quien en 1774 embolsó la suma de más de \$7.000 procedente de los tributos de San Juan y Navidad.⁴⁶

Una vez abolidos los corregimientos, pareciera ser que se confirma la hipótesis de Pérez de Tudela (1989), por cuanto se presume que los sueldos de los Subdelegados de Real Hacienda tampoco alcanzaban para subvenir las necesidades más apremiantes, pues muchos de estos últimos, a juzgar por el Apéndice A, se endeudaban con comerciantes porteños para más luego recaer en defraudaciones y cohechos.⁴⁷ Fué notorio el caso del Subdelegado de Carabaya, Carlos Rogers,⁴⁸ quién con la complicidad de los Tesoreros José Ballivián y Juan de Dios Villamor fueron acusados en 1797 de malversar las Cajas de Carabaya en provecho propio, en el orden de los \$50.000.⁴⁹ Otro caso muy sonado fué el de Paria, cuyo Subdelegado Juan de Grandidier, fué culpado en 1792 de defraudar los tributos a la Real Renta en \$10.714.⁵⁰ Pero también hubo otros casos que aunque menos notorios no por ello dejaron de causar graves trastornos a las Cajas Reales. Ellos fueron los casos de la Caja de Carangas, primero en 1780, en la persona de su Tesorero Pablo Gregorio de Castilla;⁵¹ y luego en 1803, en la persona del Ministro Contador Juan Muñóz Villegas, natural de Carrión, en el Reino de México, de 63 años de edad, por \$84.968;⁵² la de la Caja de Potosí en 1803, en la figura del Contador Fermín de Aoíz por \$5.100;⁵³ la de la subdelegación de Apolobamba en 1806, en la persona de José de Santa Cruz y Villavicencio;⁵⁴ la de la Renta de Chulumani y Yanacachi sumariada en 1809 en la

persona de Faustino Gómez, por la suma de \$31.528;⁵⁵ la de la Renta de Irupana en la figura de Rodrigo Flores Picón, por \$8.130; y la de la Renta de Sorata sustanciada también en 1809 en la persona de José Manuel Molinos, por \$1.107.⁵⁶ En el caso de la Renta de Yanacachi, Don Antonio de Zubiaga, Contador de Rentas unidas de la Presidencia del Cuzco y Juez Visitador de las Reales Cajas, declaraba en 1803 que Domingo de la Torre Leyrado, Receptor de la Renta de Yanacachi, había sido acusado de ser el autor del ingente desfalco de miles de pesos que "...aquella Recepturía ha padecido anualmente en sus ingresos".⁵⁷ En el caso de la Caja de Carangas, Muñoz Villegas, confesaba que la quiebra fué el resultado "...de los gastos que tiene practicados...en el trabajo de minas y en el de haber concluído un socabón en el Cerro de Chiarague,...como igualmente en la refacción del Ingenio y Mina del Carmen [en el Cerro de Conajagua, en el Asiento de Santa Rosa]".⁵⁸ A su vez, la causa por la cual se vió obligado a trabajar minas e ingenios fué la necesidad imperiosa que tuvo de indemnizarse de un quebranto anterior, que le había producido "...un considerable derrame y pérdida que experimentó en la especie de azogue, de donde proviene la falta de este magistral".⁵⁹

Los cargos capitulares puramente electivos.

Aún los cargos capitulares puramente electivos, como requerían de ingentes gastos, se volvían en la práctica oficios venales. En Potosí, advertido de la postulación a Alcalde de Felipe Santiago de Arce,⁶⁰ Rafael de los Reyes y Serrano,⁶¹ apoderado de Francisco Alvarez Campana,⁶² pidió licencia para entrar en la Sala Capitular y poder exponer en contra de dicha postulación. Habiéndosele concedido el pedido

"...entré y les expresé que públicamente se decía iban a elegir de Alcalde al dicho Arce, que esto era sumamente gravoso a mi constituyente, por que debiendo a mi parte el dicho Arce 28 mil y más pesos como constaba de la escritura que les manifesté, le atrasaban más con dicha elección porque aún cuando se moderase en los primeros gastos que traía consigo la vara, no bajarían de 1500 o 2000 pesos".⁶³

Y en Córdoba, cuando en 1784 le otorgaron la vara de Alcalde de primer voto a Don Miguel de Learte y Ladrón de Zegama,⁶⁴ éste último confesó que la vara

"...me costó muchos pesos, respecto a mis posibles; pues con la institución de nuevo Gobierno a Córdoba, su recibimiento, fiestas, etc., el compañero alcalde de 2o. voto, de más rasgos o de mas posibles, me obligó a entrar en el aro a no poder más".⁶⁵

En cuanto al Cabildo de Santiago del Estero, su composición de fuerzas también se revirtió, en ocasión de las Reformas Borbónicas, más exactamente en 1789, a favor de un grupo de peninsulares, propietarios de varas concejiles adquiridas en pública subasta y aliados del Gobernador-Intendente de Salta. Ellos estaban encabezados por Juan José de Erquicia,⁶⁶ y seguidos por Nicolás de Villacorta,⁶⁷ y Bartolomé Francisco de Maguna.⁶⁸ Erquicia reunía en su persona la condición de Diputado Interventor del Ramo de Sisa, la de Defensor General de Bienes de Difuntos, la de Regidor Fiel Ejecutor Propietario, y la de Alcalde Ordinario de Primer Voto. Tan aguda fué esta concentración de poder que en 1789 el Alférez Real José Bravo de Rueda,⁶⁹ el mismo que siete años después fuera asesinado, denunciaba que en el Cabildo

"...se hacían muchas iniquidades, y que sólo los hijos de España querían y gobernaban estos parajes, sin atender a que los criollos y patricios eran más beneméritos y debían ser mucho más atendidos, pues tenían más lealtad a sus tierras, por ser naturales de ellas, y no ningún hijo de

España, pues según se veía eran éstos los que cometían las mayores maldades".⁷⁰

Acusado entonces Bravo de Rueda de haber insultado echando a la mierda a un Alcalde, se excusó arguyendo que él [Bravo de Rueda] "...tenía también jurisdicción, y mayormente cuando su genio no le permitía aguantar ni tolerar".⁷¹ Un año más tarde, en 1790, el Alférez Real Bravo de Rueda solicitó que en todos los años se elija el número completo de seis regidores.⁷²

El conflicto que se suscitó seis años después, en las elecciones de 1796, obedecía a que el Regidor Propietario Juan José de Erquicia "...tuvo la osadía y arrojo criminal de despojar al Alcalde Ordinario de primer voto [Alonso Araujo] del voto activo en las elecciones del primero de enero".⁷³ Como en ausencia del Alférez Mayor, el Regidor Propietario debía hacerse cargo de la vara, el Dr. Juan José Castelli sostenía que Erquicia

"...jamás podía pretenderlo hallándose implicado con la vara 1a. de Alcalde y así se ve una monstruosidad en haber reunido en sí las dos jurisdicciones ordinarias independiente de la de Fiel Ejecutor, quando la ley del Reino [Real Provisión de 29 de Noviembre de 1774 expedida por la Real Audiencia de Charcas] establece sean separadas...para bien de la administración de justicia".⁷⁴

En los Cabildos de las Capitales, esta práctica se confirma, según Castelli, "...en donde faltando o enfermado los Alcaldes no recaen las dos varas en el Regidor Alférez Mayor o Decano si no una, y la 2a. en otro".⁷⁵ La acumulación de varas fué tan comprobada "...que desde luego se sirvió este Superior Gobierno anular la elección mandando que repuestas las cosas al Estado en que las deturbó Erquicia se procediese a nueva Elección".⁷⁶ Asimismo, tan consistente y reiterada por años fué la oposición encabezada por el Alférez Real Bravo de Rueda, que el día en que se celebraron las elecciones de 1796, uno de sus rivales, de la facción liderada por Erquicia, le convidó con un mate, de resultas del cual falleció repentinamente, aparentemente envenenado. El 11 de febrero de dicho año, la mujer de Bravo de Rueda, María Roberta Zuasnábar,⁷⁷ le solicitó al Gobernador la formación de una Comisión Investigadora del crimen cometido. Cuatro meses después, el 11 de junio de 1796, se vió obligada a denunciar al Virrey que el Gobernador de Salta no daba cumplimiento a las Providencias dictadas por él para el esclarecimiento y castigo del crimen.⁷⁸ Dos años después, en 1798, se suscitó un nuevo conflicto, pues habiendo fallecido el Alcalde Ordinario de segundo voto Francisco López de la Madrid "...se encargó Erquicia como Regidor propietario de la vara, y haciéndose elección de oficios en enero de 1798, se pasó de propia autoridad [Alcalde de segundo voto] a ser Alcalde de primer voto".⁷⁹ Esta maniobra fué posible debido a que Erquicia había creado el cargo "...de regidor suplente en contravención de la regalía de esta Ciudad y de lo dispuesto por Real Provisión de rigurosa observancia".⁸⁰ Con esta artimaña, Erquicia había designado a Domingo Iramain de Regidor suplente y al mismo tiempo de Alcalde Ordinario, "...retribuiéndole Iramain la condescendencia de que pasase aquel [Erquicia] al depósito de la vara de primer voto".⁸¹ Esta serie de procedimientos irregulares probaba, a juzgar por lo declarado en 1799 por los Alcaldes de primero y segundo voto José Yspizúa,⁸² y Santiago García del Villar,⁸³ "...que los Regidores suplentes son Parciales declarados con el único Regidor de este Ayuntamiento [Erquicia]".⁸⁴ También probaba que los Regidores suplentes eran parciales "...igualmente entre sí, porque no se dará ejemplo que se hayan dibidido en botación alguna de las muchas a que han concurrido".⁸⁵ La Parcialidad de Erquicia y sus repetidas conexiones dieron mérito a que "...se hayan declarado nulas por el Superior Gobierno, las [elecciones] practicadas por ellos en los años de 96, 98, y 99".⁸⁶

En Montevideo, a fines del siglo XVIII, Mateo Vidal adquirió el oficio de Alférez Real; Ramón

de Cáceres,⁸⁷ y José Matías de Ortega,⁸⁸ el de Alguacil Mayor; y Juan Antonio Bustillo de Zevallos -- el mismo que en 1750 había celebrado un contrato social por \$300.286 con Manuel de Escalada y Antonio de Rueda, en efectos que vinieron corriendo riesgo en el Navío Juan, María, y José-- compró la vara de Alcalde Provincial.⁸⁹ En Corrientes, a mediados del siglo XVIII, las varas concejiles revirtieron a favor de un grupo de peninsulares adinerados, ligados al comercio de la yerba mate, conectado con la Compañía de Jesús, como Nicolás Patrón y Centellas,⁹⁰ José de Acosta y López Lisperguer,⁹¹ y Ziprián de Lagraña.⁹² En una presentación hecha en el Cabildo de Corrientes en 1757, Don Sebastián Casajús,⁹³ manifestaba que Patrón

"...lo manda todo en Cabildo sin que ninguno de los individuos tenga acción propia para hablar en ninguna materia, por que a cualquiera que quiera contravenir a sus dictámenes luego amenaza con sus facultades; con su caudal (que lo tiene) y su valimiento".⁹⁴

Y como Don Sebastián reconoce que la mayor parte de los regidores eran pobres, "...por no experimentar una bejación luego rendimos nuestros privilegios a su arbitrio, benerando sus dictámenes [los de Nicolás Patrón] como evangelios".⁹⁵ Más aún, Don Sebastián le expresaba al Gobernador que si se tomara la molestia de leer los Acuerdos del Cabildo en oportunidad de elecciones tomaría conciencia de "...la ninguna libertad que tenemos los regidores de hablar en los cabildos en cumplimiento de nuestras obligaciones".⁹⁶ Un año más tarde, en octubre de 1758, Melchor de Rojas y Aranda,⁹⁷ le expresaba al Gobernador, confirmando lo señalado por Don Sebastián Casajús, que "...aquí no se vé más ley ni razón que la pasión de los que mandan, aunque sea contra toda razón, ni ai quien se atreva a hablar desto, porque todos están poseídos del miedo, y callados pasan por tantas injusticias".⁹⁸ Más aún, si alguno se atrevía a expresar en forma independiente alguna opinión "...lo tratan de sedicioso y alborotador, y lo cojen entre ojos, y lo tiran a acobardar".⁹⁹ Los vecinos honrados que huían de esta realidad "...andan los más por sus chacras, y no se atreven a visitarse unos a otros, por luego que los ven juntos empiezan [las autoridades] a maliciar de lo que hablan".¹⁰⁰ Por último, lo que más le dolía al autor (Rojas Aranda) del oficio,

"...que dos o tres foráneos [Acosta, Patrón, y Lagraña] que se han avecindado aquí, sólo porque tienen cuatro pesos se han aunado contra los pobres vecinos, y los tienen arruinados, sin atreverse a hablar nada en su favor por temor de que los coxan por enemigos".¹⁰¹

El caso de las ciudades alejadas de las rutas comerciales.

Por el contrario, en las ciudades o villas alejadas de las rutas comerciales y que contaban con un bajo grado de penetración comercial, los cargos concejiles no pudieron subastarse por carecer de postores. En el caso de Asunción del Paraguay, el Gobernador-Intendente se propuso en 1785 hacer electivos los oficios concejiles por no haber persona que los quisiera rematar en propiedad.¹⁰² Y en el caso de La Rioja, esta ciudad no podía en 1786, a juicio del Gobernador-Intendente de Córdoba Rafael de Sobremonte, mantener Cabildo, "...porque hace años que se compone de los dos Alcaldes ordinarios y el Procurador, sin esperanza de que lleguen a ocuparse las Plazas de Regidores".¹⁰³ Por dichos motivos, Sobremonte le pedía al Virrey Marqués de Loreto que no hiciera caso de aquellos Riojanos que, como Francisco Dávila y Doria,¹⁰⁴ y Manuel del Rincón y Escudero,¹⁰⁵ pedían excusarse de aceptar los cargos para los que fueron elegidos, pues no había

"...más que tres sujetos libres de excepciones y de proporcionadas facultades a quienes pueda elejirse de Alcaldes, y siete asimismo libres de dichas excepciones pero pobres de facultades

para poder responder sin ordenanza [pago de fianza] de los tributos que deben recaudar".¹⁰⁶

Aquellos pocos vecinos libres de excepciones, que hacían lo imposible por libertarse de los cargos concejiles y del servicio militar, pergeñaron el ardid de incorporarse a aquellos oficios, como la Maestría de Postas, que estaban exceptuados de las cargas públicas. Dávila y Doria, que era uno de los más distinguidos de aquella ciudad, y por tanto uno de los pocos libres de excepciones, para emanciparse de los cargos concejiles y del servicio militar había entrado al ejercicio de postillón, merced a que los Maestros de Postas tenían la facultad de elegir al que les pareciera a propósito para el cargo, sin otro gravámen "...que el de dar dos caballos en el discurso del año, tocándoles cada dos meses la carrera de 50 leguas que dista desta ciudad a la de Catamarca".¹⁰⁷

La discriminación contra los foráneos.

La discriminación contra los foráneos o extranjeros era alimentada en este tipo de ciudades por el intenso localismo así como por las prácticas endogámicas vigentes en ese entonces. Esta discriminación cumplía un rol inmovilizador en la estructura social colonial, alcanzando no sólo a los Europeos no españoles, sino incluso a aquellos americanos procedentes de otras regiones o localidades. En las elecciones del Cabildo de Mendoza, ocurridas en 1762, habiendo empatado Diego Videla,¹⁰⁸ y Juan Martínez de Soto y Rozas,¹⁰⁹ el Corregidor Félix José de Villalobos dijo para desempatar en favor de Videla que tenía "...entendido que por ley se debe preferir al natural o criollo primero que al forastero".¹¹⁰ En las sesiones preliminares de las elecciones del Cabildo de Santa Fé, ocurridas en Diciembre de 1788, Juan Francisco Aldao,¹¹¹ había tachado a José Ignacio Uriarte,¹¹² por su condición de foráneo, y preferido para Alcalde de primer voto a Francisco J. Crespo,¹¹³ por ser este último patricio. Sin embargo, en un largo escrito elevado al Gobernador de Buenos Aires, José Arias Troncoso,¹¹⁴ José de Vera Múxica y José Manuel Troncoso,¹¹⁵ integrantes de la vieja facción de los Echagüe, los Maciel y los Vera, alegaban que el mismo Aldao había nombrado de Alcaldes en 1785 y 1786 a Gabriel de Lassaga y Gamboa,¹¹⁶ y a Manuel de Toro Villalobos,¹¹⁷ "...que han sido tan foráneos como lo es José Ignacio de Uriarte, si se pueden llamar tales, por ser Europeos casados con patricias".¹¹⁸ Si nunca en aquellas votaciones "...consideró [Aldao] esta qualidad por impedimento para obtener las varas...¿porqué --se preguntaban los firmantes del escrito mencionado-- prevarica ahora objetando por tacha lo que antes no lo fué en su concepto?".¹¹⁹ Por último, dichos firmantes agregaban que

"...por más foráneo se debe tener, respecto de esta ciudad [Santa Fé], a Francisco Crespo que a José Ignacio Uriarte..., [pues] el primero es vecino de Nogoyá en la otra banda, cuja parte se ha pretendido desmembrar de la jurisdicción desta ciudad y lo cierto es que aquel vecindario no reconoce en los jueces de aquí, jurisdicción ni autoridad".¹²⁰

Por el contrario, para dichos firmantes

"José Ignacio Uriarte la reconoce, vive en esta ciudad y está casado aquí, y tiene la casa propia de su mujer, luego se debe decir con mejor fundamento, que Don Francisco Crespo es más foráneo respecto desta ciudad que Don José Ignacio Uriarte".¹²¹

El concepto que esta facción de los Maciel y los Vera tenían de Crespo lo ilustra con demasía el contenido de la carta que José de Vera Múxica enviara al Virrey Marqués de Loreto en diciembre de 1788, en la cual le expresaba que Crespo

"...hase muchos años se retiró a su desierto [Nogoyá] en aquella otra vanda [Entre Ríos] vivió mucho tiempo, escandalizando aquel partido con la ilícita amistad que cultivaba, con la que después tuvo por suegra",¹²²

Cansado de dicho concubinato, intentó luego "...casarse con una hija de la misma concubina",¹²³ a lo cual se opusieron sus parientes por la desigualdad social de la contrayente.¹²⁴ Por último, en Río Cuarto, el Regidor Defensor General de Pobres, fiel a la política centralizadora de los Borbones, hizo presente en 1803 al Virrey del Pino que el Defensor de Menores Don Pedro López, inflamado de localismo, tuvo "...varias expresiones insultantes, y entre ellas algunas de amenazas a los que para Alcalde Ordinario diesen su voto a Persona Europea, dándoles a estas el título de intrusos, y no dignos de gobernar a los Patricios".¹²⁵

Pero las elecciones periódicas de los alcaldes ordinarios no eran garantía de paz y concordia. En 1739, en Santa Fé, Corrientes y Montevideo, tan intensas eran las disputas en ocasión de las elecciones concejiles, y tal el abuso de los Oficiales Reales de la Real Hacienda en lograr ser electos, que el Gobernador de Buenos Aires solicitó al Rey se aboliera por completo las elecciones.¹²⁶ Y en 1786, en Mendoza, el sistema político se limitó aún mas. En efecto, se decidió reducir las elecciones anuales de capitulares a sólo las de los Alcaldes de segundo voto y los Alcaldes de la Santa Hermandad, promoviendo automáticamente como alcalde de primer voto a quien hubiere sido elegido alcalde de segundo voto en la elección del año anterior.

En ciudades marginadas de las más importantes rutas comerciales, como La Rioja y San Juan, al no existir subastas públicas de cargos capitulares, un mecanismo idóneo para perpetuarse en el poder consistía en acordar, por consenso o contrato formal, la designación en los cargos concejiles de parientes que les devolvieran la vara al cabo de un período. En La Rioja, las casas patricias evitaron la lucha fratricida celebrando en 1708, y ratificando en 1781 concordias o pactos, que acordaban su exclusividad in perpetuum de los empleos concejiles y militares.¹²⁷ Otro mecanismo de perpetuación consistía en entorpecer las elecciones comunales con impugnaciones posteriores al acto de calificación de votos, de manera tal que las varas quedaran en depósito en aquellos que ya las detentaban.¹²⁸ En San Juan, las elecciones anuales de oficios concejiles las obstaculizaba en 1802 el Alférez Real José Ignacio Fernández de Maradona,¹²⁹ "...para que formándose pleyto sobre nulidad se perturbasen la confirmación de elecciones para que la vara cayese en depósito en su persona, pasándose todo el año muchas veces sin poderse concluir el juicio de nulidad".¹³⁰ Tanto se habían multiplicado las demandas de nulidades de elecciones en San Juan y otras ciudades, que la Corona

"...se vió precisada a circular un auto por el que se mandó no se depositasen en adelante varas de justicia en los Alféreces Reales, si se eligiesen de nuevo los oficios por los Ayuntamientos, y ese fué el único modo con que se cortó este inconveniente gravísimo y tan contrario a la quietud de los pueblos y al orden público".¹³¹

El Teniente Alguacil Mayor Domingo Lynch, fué quién más sufrió que el depósito de la vara recayera en Maradona, que duró dos años, por cuanto Maradona fué en el primer año enemigo del Alcalde de Primer Voto Juan Ignacio Echegaray,¹³² y en el siguiente año de Andrés Aurelio de Quiroga, y mucho más del Alguacil Mayor Francisco Flores Hurtado,¹³³ dado que éste

"...se oponía siempre a sus malas intenciones y torcidos deseos, porque era el único que tenía frente para oponérsele por que a los demás los intimidaba su cavilosidad, intrigas, y arbitrios para siempre dominar con el depósito de una de las varas de Alcalde".¹³⁴

Las pugnas electorales y la crisis de la hegemonía patrimonial.

Para esa misma época, cuando la crisis comercial y minera alcanzó a las grandes casas monopolistas de Cádiz y a sus consignatarios en las colonias, la hegemonía con que contaban los Regidores propietarios en los Cabildos también entró en crisis, volviendo a prevalecer las pugnas electorales entre clanes familiares opuestos.¹³⁵ En 1799, en Santiago del Estero, jurisdicción dependiente de la Gobernación-Intendencia de Salta del Tucumán, el que fuera Alcalde Ordinario en 1798, Manuel de Palacio y Amavíscar,¹³⁶ reitera los recelos anti-Salteños que había manifestado con anterioridad su hijastro, el finado José Bravo de Rueda,¹³⁷ expresando "...lo viciosa que es la elección hecha en Don Bartolomé Francisco de Maguna y Pedro de Medina [concuñado del mismo Palacio] para servir los empleos de república de aquella ciudad".¹³⁸

Un año más tarde, en 1800, el Síndico Procurador Don Baltasar Gaya, que había sido habilitado por el Alcalde José de Yspizúa, revela "...la turbación y entorpecimiento que padecen las elecciones de aquel Cabildo por la maquinación de varios protegidos del Gobernador de Salta, y especialmente por las cavilosas del Regidor perpetuo Don Juan José de Erquicia".¹³⁹ En Mendoza, en agosto de 1803, habiendo quedado vacantes en el Cabildo tres plazas de Regimiento (regidurías), el Gobernador-Intendente de Córdoba Coronel José González,¹⁴⁰ bajo cuya jurisdicción se hallaban las ciudades Cuyanas, mandó convocar la elección "...para nombrar tres vecinos de honor, sin perjuicio de sacarlas a público remate por si hubiese quien las compre".¹⁴¹ Pero el Regidor Propietario Juan de la Cruz Vargas,¹⁴² temeroso de perder electoralmente su hegemonía en dicho Cabildo, interpuso por ante el Gobernador-Intendente un recurso contrario a la convocatoria electoral. Por el contrario, el Teniente Coronel y Comandante de las Milicias Urbanas de Mendoza Don Miguel Telles Meneses,¹⁴³ "...teniendo acción cualesquiera del Pueblo para representar por su particular interés",¹⁴⁴ reclamó a fines del siglo XVIII del Gobernador-Intendente la convocatoria electoral, sirviéndose "...mandar llevar a debido efecto su Superior providencia".¹⁴⁵ Fundaba Telles su pedido de convocatoria electoral en que "...Nada es más práctico en todo el reyno, que esta costumbre".¹⁴⁶ En lo que hacía al Virreinato del Río de la Plata, Telles manifestaba que a excepción de las ciudades correspondientes a la provincia de Cuyo, "...no hay otro Cabildo donde no se elixan anualmente los regidores que son de dotación, porque en ninguna hay arriba de dos o tres propietarios, y porque en todas conviene, que supla la elección anual, completándose por ella el número de regidores y vocales de un cuerpo, que debe siempre ser íntegro, para que por su defecto, no peligre el servicio y público bien de las ciudades".¹⁴⁷

La condición de solvencia.

La consecuencia lógica de las prácticas centralizadoras borbónicas, con las que se beneficiaba a quienes adquirirían venalmente los oficios públicos, fué la persecución de los insolventes. Las Reformas Borbónicas requerían que los aspirantes a capitulares poseyeran solvencia, no estuvieran endeudados con la Real Hacienda ni con las grandes casas comerciales de Cádiz o Buenos Aires, no practicasen ausentismos, y tuvieran las fianzas actualizadas en caso de haberse venido éstas a menos.¹⁴⁸ En lo que hace a la insolvencia o excesiva pobreza, los pobres podían ser indistintamente los patricios o los peninsulares. Cuando el pobre era un patricio, la ausencia de gastos de viaje aseguraba, a juicio de Burkholder y Chandler (1984), que no aceptaría nunca un puesto oficial por presión de sus acreedores, circunstancia que daría por resultado una administración ejemplar.¹⁴⁹ Pero cuando el pobre era un peninsular, al no tener parientes ni apoyo familiar alguno, su pobreza lo podía empujar a cometer abusos. Como bien lo consignan Burkholder y Chandler (1984), "...un español acomodado nunca

habría abandonado su patria y su familia para exponerse a los peligros de un viaje transatlántico" y ocupar un cargo en un cabildo americano.¹⁵⁰ Los que sí se exponían a esta aventura llegaban a su destino o bien cargados de deudas, o provistos de mercancía europea consignada que luego negociaban con creces en América. La necesidad de recobrar su solvencia los empujaba a prestarse muchas veces a transacciones ilegales. Por último, el deseo de enriquecerse era un estímulo más para establecer relaciones ilícitas con familias locales, de manera que los peninsulares establecían rápidamente una mayor dependencia con la región en adopción que muchos de los nacidos en ella.¹⁵¹

De esa forma, los cargos de alcalde de primero y segundo voto, alguacil mayor, fiel ejecutor, procurador general, defensores de pobres y menores, depositarios de Propios y Arbitrios, alcaldes de hermandad o jueces pedáneos y alcaldes de aguas, fueron preferentemente repartidos entre "solventes", peninsulares o patricios, haciéndose casi imposible un control de gestión que beneficiara a la administración del ramo de Propios y Arbitrios, encargada de la venta de dichos oficios. En Oruro, en 1800, el Gobernador-Intendente de Charcas se opuso a que sus Cabildantes,¹⁵² so pretexto de que el Regidor Decano Manuel Serrano,¹⁵³ se ausentaba reiteradamente del Cabildo a trabajar sus minas, lo removieron de su Veintiquatría.¹⁵⁴ Aparentemente este último se había ganado la inquina de sus colegas "...por haber escrito una carta en que acusaba a varios de ellos de deudas reales".¹⁵⁵ Este motivo de venganza, "...unido a la absoluta deliberación en sus elecciones, movieron esta máquina en que sin interpelar, citar, o conminar al interesado, formaron una información mal ponderada".¹⁵⁶ Pero la privación del voto a un vocal con semejantes excusas viciaba de nulidad la elección,

"...porqué la conceptúa el Derecho lleno de estudiada prevención, designios, conventículos, y otros antecedentes relativos a elegir por facciones, mayormente quando la ocupación en trabajar minas, útil a todos estados, no es en Serrano un delito para separarlo con desonor".¹⁵⁷

Igualmente en Córdoba, para que José de Ariza,¹⁵⁸ no obtuviera el cargo capitular que solicitaba, el Cabildo acordaba en agosto de 1777 que

"...deben colocarse en estos empleos, no sólo los más nobles y beneméritos sino es también deben tener la calidad de Ricos [solventes],...,de modo que [aún] cuando se le conceda a José de Ariza, la primera cualidad de Noble, no podrá considerársele idóneo por estar desnudo de las dos subsecuentes [solvencia y arraigo], mayormente habiendo como hay en esta ciudad copia de vecinos veneméritos y de conocidos caudales".¹⁵⁹

Cinco años después, con motivo de la solicitud de confirmación de las elecciones capitulares de Córdoba, de 1782, el Alguacil Mayor Nicolás García Guilledo,¹⁶⁰ no ponía objeción a los electos, "adictos al partido de facción que domina esta República [los Allende]", pero por no ser "poderosos [económicamente]" sostiene que están expuestos "a desviarse". A juicio de Guilledo, sólo Don Francisco Antonio Díaz,¹⁶¹ y Don Jacinto Díaz de la Fuente,¹⁶² eran los menos sospechosos "...por las mayores conveniencias que disfrutaban sobre los otros".¹⁶³ Sin duda, el más rico era Díaz, quien entre 1753 y 1780 había contraído en Buenos Aires 54 operaciones de fiado por valor de \$240.868.¹⁶⁴ En el caso de Díaz de la Fuente estas conveniencias consistían en que ya llevaba concertadas con Buenos Aires entre 1766 y 1774 una docena de operaciones de fiado por valor de \$29.427.¹⁶⁵

La razón por la cual se exigía que los candidatos fueran solventes obedecía a diferentes motivos. En principio "...para que libres del aliciente del interés y del temor, puedan servir sus empleos con pureza".¹⁶⁶ Y en segundo lugar para que puedan "...responder sin ordenanza [pago de fianza] de los tributos que deben recaudar".¹⁶⁷

La condición de deudor moroso de la Real Hacienda e incluso de mercaderes ligados a las grandes casas comerciales de Cádiz, o de la Real Hacienda en concepto de azogues, agravaba los motivos de impugnación o tacha para integrar los Cabildos. Pero asimismo, la circunstancia de ser funcionario de Cabildo permitía a los comerciantes que usufructuaban de los privilegios del cargo capitular aprovechar una suerte de fuero o impunidad que influía para que sus demoras en la cancelación de sus deudas fueren esperadas o en algunos casos, renovadas en términos menos gravosos. En Mendoza, en 1796 el Alcalde de primer voto Lic. Manuel Ignacio de Molina dijo que la elección de José Agustín Sotomayor,¹⁶⁸ como Alcalde de segundo voto era viciosa "...porque contra este sujeto hay Decreto librado por el Gobernador Intendente para que se le haga el pago de cinco mil y más pesos, pertenecientes a Temporalidades, cuyo Ramo por cédula se estima oy como Hacienda Real por privilegio".¹⁶⁹

Sin embargo, para el Regidor Nicolás Corvalán,¹⁷⁰ la elección debía ser válida

"...porqué lo que se ha expuesto por el Señor Alcalde de primer voto no lo perjudica a obtener el oficio de Alcalde Ordinario por ser la dependencia no causada por él sino por la testamentaría del finado su padre, y no ser de Real Hacienda".¹⁷¹

Asimismo, en La Rioja, en 1801, el Teniente de Oficiales Reales, Administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes, y Alcalde de 2o. Voto José de Noroña y Losada,¹⁷² tachaba la elección de Francisco Antonio de Soaje y del Signo,¹⁷³ por ser deudor de la Real Hacienda,¹⁷⁴ y la de Juan Amaranto Ocampo,¹⁷⁵ por ser contrabandista de tabaco.¹⁷⁶ La no aceptación de la renegociación de las deudas por los acreedores ocasionaba por lo general la solidaridad de los capitulares del lugar, con la consiguiente repulsa del o de los apoderados de los acreedores foráneos. La lucha por la rebaja o condonación de las deudas de los azogueros reflejaba también las contradicciones por la renta minera misma que se daba en el seno de la propia élite Potosina. Ello era así porque la rentabilidad de los azogueros y trapicheros dependía de los sobrepresos que las burguesías comerciales portuarias (Lima y Buenos Aires) y provinciales (Cuzco, La Paz, Tucumán, Córdoba, Salta, y Cochabamba) imponían a los productos fiados,¹⁷⁷ imprescindibles para el funcionamiento de los ingenios.

La condición de fiador venido a menos también agravaba los motivos de impugnación o tacha para integrar los Cabildos. Para fines de siglo, en San Juan, en el recurso de apelación que los Regidores José Ignacio Fernández Maradona,¹⁷⁸ y José Ortiz Santibáñez,¹⁷⁹ interpusieron de las elecciones celebradas en 1798, su apoderado Martín José de Segovia alegaba que el Alcalde de primer voto Francisco Borxa Vicentelo de la Rosa,¹⁸⁰ y el Regidor Fiel Ejecutor Pedro del Carril,¹⁸¹ no podían haber votado en las elecciones pues eran deudores de la Real Hacienda; y el Regidor Depositario General Francisco Gregorio Blanco,¹⁸² tampoco por cuanto

"...por haber contraído tres matrimonios teniendo hijos de todos ellos, y sin haber formado los Capitales correspondientes al tiempo de contraerlos; sino que el Fiador que había dado más era muerto, y sus bienes se adjudicaron a causas y legados píos",¹⁸³

debió haber renovado sus fianzas. El impedimento de votar en las elecciones capitulares se originaba en este caso en que la ley establecía que no podían ejercer sus empleos hallándose "...en diferente estado del que tenían cuando entraron a servir sus oficios, o si las fianzas que tuviesen dadas hubiesen venido a menos, o estuviesen de peor condición".¹⁸⁴

Como última impresión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables conflictos

suscitados en los Cabildos de Potosí, Oruro, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y San Juan, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que no obstante las periódicas elecciones de cargos concejiles, el proceso de centralización y formación de un estado patrimonialista se consolidó. A la lucha electoral fueron incorporándose paulatinamente, en especial en los cabildos periféricos, numerosos vecinos de dudoso origen racial y legitimidad de origen, que merced a la venalidad de los oficios, podían acceder a los cargos públicos, transformándose así el cuadro étnico de la política colonial.¹⁸⁵ Pero, por el contrario, al ser los oficios venales también renunciables entre parientes, se lograba retener en las mismas familias, por herencia, lo que había sido adquirido venalmente. De ahí que, la venalidad, y consiguiente heredabilidad de los oficios, cumplió en las colonias de América un rol contradictorio, democratizador por un lado, al romper con las dualidades étnicas y estamentales, acelerando así la transición hacia un régimen político de matriz liberal burguesa; y elitista por el otro, al retener en las mismas familias los cargos adquiridos por compra.

NOTAS

¹ Sistema de descendencia unilineal doble, donde las obligaciones y los deberes para con los parientes del padre o de la madre son muy similares.

² Barbier, 1972, 418 y 434.

³ mercancías Europeas, medios de producción [almadanetas], mano de obra esclava Africana, y productos del mercado interno colonial [mulas, coca, aguardiente, paños].

⁴ banqueros privados que tenían el monopolio del comercio de la plata amonedada antes de la creación del Banco de San Carlos.

⁵ Eduardo R. Saguier (1991): "Las disputas en el seno de la burocracia estatal colonial. La facultad de nombrar y representar en el Virreinato del Plata (1739-1810)", ponencia presentada en el Encuentro "Sociedad y Economía en el Mundo Colonial", organizado por el Centro de Estudios de Historia Americana Colonial (Universidad Nacional de La Plata) y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, celebrado el 27, 28 y 29 de junio de 1991 en el Museo Roca (Buenos Aires);

⁶ Desgraciadamente, por falta de medios con que trasladarme a Bolivia, no he podido consultar los Acuerdos Capitulares y las Actas Notariales de la Villa Imperial de Potosí.

⁷ Los regidores propietarios de los Cabildos diferían de una burocracia legal y racional en que carecían, al decir de Theobald (1982), de: a) esferas de competencia claramente definidas que estuvieran sujetas a reglas impersonales; b) un ordenamiento racional de relaciones de superioridad e inferioridad; c) un sistema regular de designación y promociones; y d) salarios fijos pagados en metálico.

⁸ Cornejo (1971) nos relata que en Potosí "...se vió a uno de los Arias de Salta comprar por \$25.000 la vara perpetua de alcalde, y a Doña Tomasa Larrazábal y Avellaneda [nacida en Buenos Aires] comprar para su hijo Don Fermín Javier de Aoíz, la de Alguacil Mayor, cuyo costo de \$18.000, sumado con los gastos que originó la transacción, alcanzó a \$27.000" (Cornejo, 1971, 44). Correa Luna (1918) también nos relata que el comerciante Angel Alonso Gutiérrez había adquirido en Chuquisaca una regiduría perpetua con el producto de las ventas de las mercaderías que le había fiado Antonio José

de Escalada (Correa Luna, 1918, 81). En Catamarca, Andrada de Bosch (1987) nos informa que el oficio de Regidor fué vendido en 1707 a Francisco Solano de Barros Sarmiento en \$310, y el Alferazgo Real a Francisco de Cubas Palacio en \$800 (Andrada de Bosch, 1987, 53-54). También las varas concejiles del Cabildo de Asunción del Paraguay se cotizaban en el mercado de los cargos públicos. Juan Francisco de Aguirre comentaba en 1793 que los regimientos llegaron a valer como 4.000 arrobas de yerba, o el equivalente a 6.000 pesos de plata de ocho reales (Aguirre, 1949-51, XVIII, 294-295, citado por Quevedo, 1973, 110).

⁹ Sobrino carnal de José de Endeyza y Alvear, ajusticiado por los indígenas durante la rebelión de Tupac Amaru, quien a su vez era yerno de José de Lezica y Torrezuri (Fernández de Burzaco, 1986-90, IV, 144). Contrajo matrimonio con una mujer, que según Indalecio González de Socasa, tenía "...bastantes conveniencias, y que sin embargo de ser como es notorio de dañado coito, tiene un espíritu el más lleno de vanidad que se ha podido escogitar, e intenta por este medio influyendo a su marido llegar a una clase de distinción de que...no era capaz,...No hace mucho tuvo esta mujer el atrevimiento, antes de ser casada con Ybieta de insultar a la consorte del Regidor Fiel Ejecutor Don Pedro de Ascárate, llenándole en su casa misma de las mayores injurias: entónces salió a la Plaza su calidad, y circunstancias, de las que no pudiendo vindicarse en el Tribunal de Su Alteza, en donde se le mandó calificase ser viuda honesta, y no pudiéndolo hacer, fué condenada a perpetuo silencio, con un apercibimiento serio, y condenación de costas" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.91v.). A juicio de Indalecio González de Socasa, formulado en 1795, Ybieta tenía "...una ambición declarada por las distinciones civiles, y por el honor de los empleos públicos, según el precio excesivo de \$6.000 en que compró el nombramiento de Teniente sustituto de Contador entre partes a sabiendas de que no podía dejarle lucro alguno un Ministerio que había de despachar por mano agena por su poca inteligencia en materia de cuentas,..., además de otras pruebas que ha dado Ybieta en los Pleitos que trae sobre el uso del uniforme de Oficiales Reales por sólo el prurito de hacer figura" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.61).

¹⁰ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.61.

¹¹ fué Regidor y Alcalde Ordinario de Primer Voto en Potosí en 1796, hijo de Antonio Obligado y de Fausta Fernández; habiéndose casado en primeras nupcias con la potosina Isabel Carrasco de Arrascaeta, nieta de Petrona de Peñaranda; y en segundas nupcias con Juana Tejedor, hija del Teniente Coronel Miguel Tejedor y de Manuela Garayo (Cutolo, V; Fernández de Burzaco, V, 46; y Jáuregui Rueda, 1989, ítem 7059).

¹² Dueño de Campo Santo, introducto de la caña de azúcar, casado con Clara de la Corte y Rosas, dueño de la estancia Campo Santo e introductor de la caña de azúcar, padre de Gaspar, Juan José, casado con Gertrudis Medeyros, José Antonino, y Francisco María Fernández Cornejo, y suegro de Lorenzo de Goyechea (Cornejo, 1972, 20).

¹³ Miembro del Cabildo de Salta en 1778, casado con Rosa Zeballos, y padre del Sargento Mayor Tiburcio Cornejo, casado en primeras nupcias con Ventura Boedo, y en segundas nupcias con Petrona Zenarruza (Cornejo, 1972, 14).

¹⁴ Alcalde de Salta en 1778, casado con María Teresa Castellanos y Arias Velázquez, hija de Pedro Francisco de Escobar Castellanos y de María Arias Velázquez, padre de Gabino Fernández Cornejo, casado con María del Carmen Torino, Sinforoso Fernández Cornejo, casado con Josefa San

Millán, y Justo Pastor Fernández Cornejo, marido de Evarista de Elgueta; y suegro de Antonio Pardo, de Francisco Xavier Figueroa y Toledo Pimentel, de Gaspar Fernández Cornejo, y de Juan Pablo Arias Rengel (Cornejo, 1972, 107).

¹⁵ Cúneo-Vidal, 1978, 180.

¹⁶ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 145, Exp. 29; y Gandía, 1929, 181-183.

¹⁷ Acevedo, 1982, 63-91.

¹⁸ Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el cargo hasta 1775 (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr. Emilio Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y Acevedo, 1972, 253-267). Fué también encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrirre y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

¹⁹ Levillier, 1915, II, 153.

²⁰ General, Justicia Mayor, y Teniente Gobernador, hijo de Lucas de Allende y Larrea, y de Agueda de Losa Bravo y Gutiérrez de Nis, hermano de José y Santiago Allende y Losa, y sucesivamente cuñado de Francisco Armesto, Bernardo Roldán, y Gregorio Arrascaeta, casó con Bernarda Vicentelo de la Rosa y Carranza, hija de Francisco Vicentelo de la Rosa y de Angela Carranza y Herrera, padre del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende, y suegro de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, Antonio de la Quintana y Ceballos, Nicolás de Cabrera y Ceballos, y Ambrosio Funes y Bustos (Calvo, IV, 327; Allende Navarro, 1964, 97; y Lazcano, I, 27).

²¹ La cédula de Regidor Fiel Ejecutor propietario le fué librada el 2-XII-1773 (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro 48, folios 491v. y 222). Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda Losa Bravo, casóse en 1754 con María Isidora de Ascasubi, hija de Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la segunda mujer de su hermano Santiago. María Isidora era probablemente sobrina de José de Ascasubi, dueño del ingenio de moler metales del Potosí llamado Pampa, y de la labor Arenas. Como Alcalde de Primer Voto le cupo cumplir la orden del Gobernador de Buenos Aires de reabrir la Universidad de Córdoba luego de la expulsión de los Jesuitas. Su suegro Don Marcos Ascasubi falleció en 1756 (AHC, Escribanía N.1, Leg.326, Exp.1). Rosalía de las Casas y Ponce de León, mujer de Don Marcos Ascasubi, era hija a su vez del primer matrimonio del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jaime con Teresa Ponce de León. José de Allende e Isidora Ascasubi fueron padres de Felipe de Allende, fallecido en 1784 a los 21 años de edad, de José Norberto de Allende, nacido en 1773, y de Josefa y Mercedes Allende, mujer esta última del

Teniente Coronel Félix Mestre, hermano menor del Gobernador de Tucumán Andrés Mestre (Allende Navarro, 1964, 87; y Lazcano, 1968, II, 142; AHC, Escribanía N.2, Leg.89, Exp.3). José Allende y Loza contrae segundas nupcias con la hermana de su mujer, María Polonia Ascasubi, a su vez viuda de Manuel Arredondo y Puerta, padres estos últimos de Antonio Arredondo. Las hermanas Ascasubi eran parientas por los Ponce de León de Simón Insaurralde, el que fuera dueño de la chacarilla de la Calera. José Allende fué dueño de la estancia Saldán (Lazcano, 1936, I, 35). Félix Mestre fué apoderado en Buenos Aires del comerciante Ambrosio Funes (Garro, 1882, 210).

²² El 28-IX-1772 le fué librado el despacho de Regidor Propietario (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro 48, folio 485). Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en primeras nupcias con Engracia Arze, muy probablemente hija o sobrina del Contador Interino de la Real Caja de Moneda de Potosí, Coronel Phelipe Santiago de Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería José Joaquín Mendiolaza y Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano José. María de la Cruz era nieta de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí.

²³ Nacido en Gordejuela, España, casóse con Ignacia de Argüello y Funes, hija de Miguel de Argüello y Ladrón de Guevara y de María de Funes. Padres del Dr. Leopoldo, de José Antonio de Allende, y de María Mercedes de Allende y Argüello, mujer de Juan Domingo de Berrotarán y Carricaburu (Calvo, 1936, I, 19 y 59; y III, 54; Tejerina Carreras, 1974, 14; y Mayol Laferrere, 1974, 31-33). Según Allende Navarro (1964) María Ignacia Argüello, la mujer de Antonio Allende, era hija del Cap. Jose de Argüello y Moyano, y de Mariana de Baigorri y Brizuela, y hermana de la mujer de José Moyano Oscariz, del Cap. Pedro Argüello y Baigorri, y de Juan Antonio de Argüello y Baigorri, casado con Sinforosa de Tejeda y Ledesma. Mariana de Baigorri y Brizuela fué a su vez hermana del General Juan Clemente de Baigorri y Brizuela, Señor de San Sebastián de Sañogasta, y encomendero de Nogolma, marido de Gabriela de Garay y Tejeda, y tía de María Teresa de Baigorri y Tejeda, mujer primero de Bernardo Vélez de Herrera, y luego del Regidor Juan Vicente Piñero Pacheco, abuelos de Dalmacio Vélez Sarsfield (Allende Navarro, 1964, 145). Por lo tanto, Antonio de Allende era tío de la mujer de Simón de Azcoitia y Gonsález; abuelo de la mujer del Dr. Juan Antonio Saráchaga; y tío en segundo grado del Coronel Santiago Alexo de Allende, y del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende (Lazcano, I, 53). En 1771 Antonio de Allende fué nombrado Administrador de Santa Catalina, propiedad secuestrada a la Compañía de Jesús (AGN, División Colonia, Sala IX, 21-9-5).

²⁴ Hijo de José Gaspar de Xijena Santistéban y de Agueda Céliz de Burgos, viudo de Francisca de Soria se casó en segundas nupcias en 1790 con Rosa de Argüello y Tejeda, viuda a su vez de Juan José Martínez de Betancur, e hija de Juan de Argüello y Baigorri y de Sinforosa de Tejeda y Ledesma (Lazcano, I, 53). José Gaspar era hermano de Pablo Ignacio, casado con Teresa Espinosa de los Monteros, y primo hermano de Juan José y de Pedro Nolasco Xijena, padre este último del Dr. José Dámaso Jijena (Bustos Argañaraz, 1972, 9-13). Era José Prudencio deudor de Domingo de Basabilbaso y de José Almoríña Caro por valor de \$7080 (AGN, Protocolos, Reg. 2, 1762, fs.130v.; y Reg.3, 1764, fs.113). En tanto, los primos Pablo Ignacio y Juan José Xijena fueron deudores del comerciante porteño Pablo Ruiz de Gaona en tres transacciones por valor de \$12.000 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1767, fs.365v.; Reg.2, 1767, fs.208; y Reg.6, 1768, fs.257v.)

²⁵ Socolow, 1987, 96.

²⁶ ver los trabajos de Villalonga (1909) y Salessi Sémper (1931).

²⁷ Archivo General de la Nación (AGN), División Colonia, Justicia, Leg.16, Exp.399; Leg.7, Exp.94; y Leg.8, Exp.131.

²⁸ AGN, División Colonia, Interior, Leg.2, Exp.12.

²⁹ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.53, Exp.1553.

³⁰ AGN, Protocolos, Registro 3, año 1759, fs.203v.

³¹ AGN, Protocolos, Registro 3, año 1761, fs.298, citado en FB, VI, 186.

³² AGN, Protocolos, Registro 4, año 1789, fs.96.

³³ AGN, Protocolos, Registro 6, año 1787, fs.90.

³⁴ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.29, Exp.872.

³⁵ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.B-6, Exp.3.

³⁶ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.55, Exp.1607.

³⁷ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.112, Exp.2

³⁸ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.99, Exp.6.

³⁹ AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 44, Exp. 14; y Hacienda, Leg. 12, Exp. 235. Según Moreno Cebrián (1976), el precio con que se beneficiaron los corregimientos no resultó estable. Más aún, el ritmo del valor en que se vendieron los corregimientos creció muchísimo, teniendo en cuenta la depreciación y la baja del poder adquisitivo, haciendo aún mayor el desfase existente entre los sueldos y los gastos inherentes al cargo (Moreno Cebrián, 1976, 228).

⁴⁰ No hemos podido constatar las operaciones de fiado que los Corregidores de Indios del Alto Perú puedan haber contraído en ciudades como Córdoba, Tucumán y Salta. Entre los gastos a los que estaban sujetos los funcionarios que arribaban a América estaban aquellos referidos a la financiación de sus viajes, estadías en los Puertos, etc. Para alcanzar sus destinos, los funcionarios peninsulares debían endeudarse con comerciantes que les adelantaban dinero sencillo, a cambio de escrituras donde se comprometían a devolver las habilitaciones en plazos muy breves y con moneda dura o fuerte. En la diferencia entre la moneda dura y la sencilla los comerciantes les cargaban premios exorbitantes. El premio oscilaba según en qué momento o lugar se concertaba. El premio de la moneda doble, a la inversa de las tasas de interés, era más alto en los puertos de salida, y más bajo en tiempo muerto (tiempo de ausencia de navíos en los puertos) y cerca de las Casas de Moneda. Durante el tiempo muerto en Buenos Aires el premio que se estilaba alcanzaba al 3%, y en tiempos de navíos oscilaba entre el 5 y el 15%. En Chile, en 1737, el premio de la moneda doble alcanzaba al 2% y en Potosí, donde había más abundancia de moneda doble el premio debió haber sido menor. En igual fecha, en Buenos Aires, el premio llegó al 6%, en 1778 en la Colonia del Sacramento alcanzó al 17%, y en Brasil al 25%. Entre la moneda doble (o de ocho y cuatro reales) y la sencilla (de 2, 1, 1/2, o 1/4 real) no había

diferencia de fino o ley ni tampoco de peso salvando la proporción, pero si existió una diferencia de volumen, siendo mayor en moneda sencilla. Tal fue el abuso en los premios que en 1790 la corona decidió poner coto a ello habilitándolos de su cuenta y riesgo acudiendo los que necesitaban al Ministerio de Guerra y Hacienda de Indias donde se les otorgaban libranzas a pagar en Cádiz o en la Coruña en las cantidades proporcionales a las clases de empleos y sueldos que llevaran.

⁴¹ Eduardo R. Saguier (1991): "La Corrupción de la Burocracia Colonial y los Orígenes del Federalismo: El caso del Virreinato del Río de la Plata", ponencia presentada en las IX Jornadas Nacionales de Historia Económica, organizadas por la Asociación Argentina de Historia Económica, en Octubre de 1988.

⁴² Francisco Gutiérrez de Cevallos a José Santos Díaz y Herrero, Cádiz, 24-IV-1777 (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.6, Exp.71, fs.22v.).

⁴³ Francisco Gutiérrez de Cevallos a Domingo Sánchez Barrero, Madrid, 24-IV-1777 (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.6, Exp.71, fs.24).

⁴⁴ Francisco Gutiérrez de Cevallos a José Santos Díaz Herrero, Cádiz, 31-VII-1777 (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.6, Exp.71, fs.36).

⁴⁵ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 12, Exp. 235; citado por Correa Luna, 1918, capítulo X.

⁴⁶ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.14, Exp. 286.

⁴⁷ "A fin de evitar a los Provistos para Indias los graves perjuicios y atrasos que padecen con la frecuente y largas detenciones, ya en la Corte, o ya en los Puertos, por no encontrar en lo general quien los habilite con lo necesario para equiparse, y transferirse a sus destinos, teniendo que sugetarse, quando lo consiguen, a la dura ley que les imponen los Comerciantes, cargándoles sobre la diferencia de la moneda sencilla que les entregan, a la fuerte en que hacen los pagos en América, unos premios exorbitantes, con plazos muy cortos, que en lo común no pasan de treinta a quarenta días de haber llegado a sus destinos, o arribado a los Puertos respectivos de aquellos Dominios, lo que les pone en necesidad de sufrir otras detenciones en ellos para facilitar el pago de sus escrituras, aumentando considerablemente sus empeños con los nuevos premios que les exigen, o de contraer con los Prestamistas obligaciones perjudiciales a la recta administración de justicia, y de los intereses de la Real Hacienda...". A todos los sujetos que eran destinados a empleos "...cuias rentas o sueldos no pasen de seiscientos pesos, se les libraré el haber de un año, a descontar en quatro, reteniéndoles la quarta parte en cada uno, repartida por mesadas= Al que tenga más de seiscientos pesos hasta mil, se le socorrerá con seiscientos pesos a pagar con el descuento de la tercera parte del sueldo, siempre que este llegue a setecientos pesos, pues de lo contrario solo se le retendrá la quarta parte= El que pase de mil pesos hasta mil quinientos, tendrá setecientos pesos de habilitación, y sufrirá el descuento de la tercera parte.= El que goce de más de mil y quinientos hasta dos mil pesos, se le darán ochocientos pesos a satisfacer con igual descuento de la tercera parte.= El que disfrute sobre dos mil pesos hasta dos mil y quinientos, percibirá mil pesos, y se le retendrá también la tercera parte de su haber.= Al que cuya dotación se exceda de dos mil y quinientos pesos hasta quatro mil, será habilitado con mil y doscientos pesos, y los reintegrará sufriendo igual descuento de la tercera parte.= Al que componga más de quatro mil hasta seis mil pesos, se le librarán dos mil, los que satisfará, dexando la mitad de su haber mensual, siempre que tenga cinco mil y quinientos pesos de sueldo anual, pues no llegando a esta quota, solo se

le retendrá la tercera parte.= El que pase de seis mil hasta ocho mil, percibirá tres mil, a pagar también con retención de la mitad de su haber mensual= Y a todo el que tenga más de ocho mil pesos, se le libraré la mitad de su respectivo sueldo, baxo la calidad de hacer el reintegro con igual descuento de la mitad íntegra del que goce= De esta regla general quedarán excluidos únicamente los Virreyes, Arzobispos, y obispos, a quienes se darán las habilitaciones que necesiten, conforme a las familias que lleven, y al carácter de sus altos empleos, y dignidades, y se acordarán con cada uno los términos en que deberán verificar los reintegros...Las entregas en los mencionados Puertos de Cádiz y La Coruña, se harán en pesos de a ciento y veintiocho quartos, y los reintegros en Indias en pesos fuertes, conforme a la práctica generalmente establecida, por ser esta la correspondencia que tiene la moneda provincial, o de vellón de España, con la nacional o fuerte que se labra y corre en América... inmediatamente que ocurra el fallecimiento de qualquiera Provisto habilitado por S.M. se considere que no alcanzará su producto a satisfacer en el todo el descubierto en que se halle con el Real Erario, no por eso dexarán de librar sobre él los respectivos Ministros lo necesario para su funeral y entierro, haciéndose con la debida moderación y conforme al carácter del empleo que hubiese servido, pues lo contrario sería opuesto y ofendería a la religiosa piedad de S. M....Madrid, 26 de Febrero de 1790" (AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg. 35, Exp.14).

⁴⁸ Había contraído en Buenos Aires escrituras de fiado de Castilla: en 1771 con Domingo Veá y Murguía por \$2.466 (AGN, Registro 6, año 1771, fs.195); y en 1773 con Gonzalo Doblas por valor de \$1.179 (AGN, R.4, 1773, fs.512v.); con M. Olazábal por valor de \$4.146 (AGN, R.5, 1773, fs.223v.); con Domingo de Veá y Murguía por valor de \$3.137 (AGN, R.6, 1773, fs.353v.); y con Manuel Joaquín de Zapiola por valor de \$1.572 (AGN, R.6, 1773, fs.342).

⁴⁹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2216; y Criminales, Leg. 45, Exp. 3 y 18.

⁵⁰ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 68, Exp. 1812.

⁵¹ Designado Oficial Real de las Cajas de Carangas por fallecimiento en 1754 de Diego Sandoval Benítez, un cuarto de siglo más tarde fué puesto en prisión y ejecutado por el Corregidor de Carangas Mateo Ibáñez, hermano del Marqués de Balbuena, y en 1781 se le concedió la jubilación como Corregidor, siendo reemplazado por Manuel José de Vélez (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.18, Exp.409; Tribunal de Cuentas de Lima, Nombramiento de Oficiales Reales, Libro 2, Fs.359 y 360; Reales Cédulas, tomo 24, fs.79; y Reales Ordenes, Libro 49, fs.72).

⁵² AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907.

⁵³ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 115, Exp. 2945, fs. 156-163v., 200-212v.

⁵⁴ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 132, Exp. 3319.

⁵⁵ AGN, Sala IX, Interior, Leg. 64, Exp. 4,

⁵⁶ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 139, Exp. 3559.

⁵⁷ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.87, Exp.11, fs.251.

⁵⁸ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907, fs. 31v.

⁵⁹ Idem.

⁶⁰ Hijo del General Alonso de Arce y Arcos, nacido en Guaraz, Perú, y de María Báez de Alpoyn y Labayén; marido de María Juana de Arráez, hija de Martín de Arráez y de Tomasa de Larrazábal; concuñado del poderoso comerciante Juan de Vargas Macías, del Oficial de las Reales Cajas Blas Gazcón Cervellón de Arze y de Manuel Antonio Warnes; y primo hermano del célebre abogado Mariano Pérez de Saravia y Sorarte (Fernández de Burzaco, I, 137, 162 y 222; y III, 163).

⁶¹ marido de Juana Francisca Conti, hija del Capitán José Conti y de Francisca Isidora Bermudez; y concuñado de Diego Tejedor y Solórzano (Fernández de Burzaco, II, 149; y VI, 343; y Jáuregui Rueda, 1987, ítem 3289).

⁶² Hijo de Bernardo Alvarez Campana y de Josefa Manuela de la Vega, nacidos en Cádiz, marido de Isabel Gil, hija de Nicolás Gil, gallego, muerto por los indios en la travesía de Chile, y de Bartola Rodríguez Osorio; y concuñado de Pascual Mariano Basallo (Fernández de Burzaco, I, 98; y III, 171; y Jáuregui Rueda, 1989, ítem 5161).

⁶³ Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, 7-III-1769, (AGN, Tribunales, Sucesión 8125, Incidente sin Cuerpo Principal de la Sucesión de Rafael de los Reyes y Serrano, fs.52). Arce terminó siendo Contador Interino de la Real Caja de Moneda de Potosí.

⁶⁴ Casó en 1776 con María Ignacia de Isasi, hija de Don Juan Bautista de Isasi y Molina, y de Doña María Luisa de Echenique y Villafañe, sobrina de Don Nicolás de Azcoeta, y nieta materna de José Gregorio de Echenique y Cabrera, y de Margarita Villafañe (Calvo, 1938, III, 233). María Ignacia Isasi era viuda del Sargento Mayor de la Nobleza Estéban Montenegro. Viuda por segunda vez, entra en enero de 1800 en la Orden de las Monjas Mercedarias Descalzas, llevando como dote una casa de cal y canto avaluada en \$18.000 (Oficio del 16-I-1800, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.11, Sala IX, 5-10-6). Miguel de Learte fué padre natural de María Josefa Learte, quién casó con José Bienvenido, del cual se divorció, y fueron a su vez padres de María Gregoria, María Pascuala, Pantaleón, y María Manuela Bienvenido (AGN, Tribunales, Leg.111, Exp.2). En 1765 su apoderado Juan Estéban de Anchorena hace información sobre calumnias levantadas contra Learte en las ventas de unos géneros (AGN, Tribunales, Leg.A-11, Exp.4). En 1787 se ordena proceder contra sus fiadores Manuel Alfonso Ginés, Felipe Santiago del Pozo, y Juan de Lezica (AGN, Reales Ordenes, Libro 17, fs.36; y Libro 16, fs.234). En 1790 Learte se queja al Gobernador de Salta por malos tratos (AGN, Tribunales, Leg.66, Exp.2). En 1793 solicita que como Contador Real de la Mesa Decimal del Obispado de Córdoba y Síndico Procurador del Monasterio de Santa Catalina de Sena, se le guarden todos los fueros y libertad de cargos concejiles y militares que le corresponden (AGN, Justicia, Leg.31, Exp.897). Y en 1795 es confirmado como Contador del Ramo de Diezmos (AGN, Reales Ordenes, Libro 25, f.477). Fué autor de unas curiosas memorias denominadas "Fracasos de la Fortuna y Sucesos Varios", donde relata todas sus peripecias en América, publicadas en 1926 por el R.P. Grenón S.J., en la serie Documentos Históricas (Córdoba; Archivo de Gobierno).

⁶⁵ Learte, 1926, 281.

⁶⁶ Acevedo, 1965, 183-184. Aún no he podido hallar que clase de parentesco mantuvo con el gran comerciante español residente en Salta Agustín de Erquicia, socio de Mateo de Saravia y Jáuregui.

⁶⁷ Acevedo, 1965, 139.

⁶⁸ Según Acevedo (1965), Maguna declaró haber descubierto un camino más corto entre Santiago del Estero y Corrientes (Acevedo, 1965, 76).

⁶⁹ Hijo de Manuel Fernando Bravo de Rueda y de Inés Santillán. Su madre, al enviudar, contrae segundas nupcias con Manuel de Palacio y Amavíscar. Era Jose Bravo de Rueda casado con María Roberta Suasnábar, hija del Maestre de Campo Francisco Antonio de Zuasnábar, Alcalde en 1767 y Tesorero Juez Oficial Real en 1771, y de Petrona de Paz y Figueroa (hija de Miguel Paz y Figueroa y de María Díaz Caballero). José Bravo de Rueda era hermano del Alcalde de primer voto y Comandante de Armas Diego Bravo de Rueda, casado con María Josefa Goyechea y Frías. María Roberta Suasnábar era hermana de Gabriela, casada con José Pelayo de Alcorta; de Victoria, casada con el Comandante Gregorio Díaz; y de Margarita, mujer de José de Olaechea (Figueroa, 1927, 104, y 119).

⁷⁰ Actas Capitulares de Santiago del Estero (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1942-1946), IV, 461, citado por Acevedo, 1965, 349.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² AGN, Sala IX, División Colonia, Interior, Leg.29, Exp.3.

⁷³ AGN, División Colonia, Interior, Leg.48, Exp.12.

⁷⁴ AGN, División Colonia, Interior, Leg.40, Exp.13, fs.41.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ AGN, División Colonia, Interior, Leg.48, Exp.12.

⁷⁷ Hija del Alcalde y Procurador General de Santiago del Estero Maestre de Campo Francisco Antonio de Zuasnábar y de Petrona de Paz y Figueroa, cuñada de José Pelayo de Alcorta, del Comandante Gregorio Díaz y de José de Olaechea (Figueroa, 1927, 104).

⁷⁸ María Roberta Zuasnábar al Virrey, Santiago del Estero, 11-II-1796 y 11-VI-1796 (AGN, División Colonia, Intendencia de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7).

⁷⁹ *Idem*.

⁸⁰ AGN, Tribunales, Leg.128, Exp.9, fs.40.

⁸¹ AGN, Tribunales, Leg.128, Exp.9, fs.40.

⁸² Cuñado del clérigo Maestro Juan Rodríguez (Baltasar Gaya al Virrey, Santiago del Estero, 11-I-1800 [AGN, División Colonia, Intendencia de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7]).

⁸³ Casó en primeras nupcias con Narcisa Suárez, y en segundas nupcias con Petrona Santillán, hija de José Domingo Santillán y de Margarita Gramajao; y fué suegro de Pedro Francisco Carol y de Pedro José Maldonado (Figueroa, 1927, 113).

⁸⁴ AGN, Tribunales, Leg.128, Exp.9, fs.40.

⁸⁵ *Ibídem*.

⁸⁶ *Ibídem*.

⁸⁷ Hijo de José de Cáceres y de Catalina María Pérez de Rosas, naturales de Santa Cruz de Tenerife (Fernández de Burzaco, II, 31).

⁸⁸ Hijo de Isidro de Ortega y de Juana Isabel de Esquivel, naturales del Paraguay; y cuñado de Pedro Pablo Pavón (Fernández de Burzaco, V, 80).

⁸⁹ Sala de Tourón, 1967, 119; y Apolant, 1966-76, II, 863-865.

⁹⁰ Yerno del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio y concuñado de Ziprián de Lagraña y de José de Acosta.

⁹¹ Yerno del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio, concuñado de Nicolás Patrón y de Ziprián de Lagraña, y suegro de León Martínez de Ybarra y Acosta, de José Justo García de Zúñiga, y de Fernando Gramajo y Argañaráz.

⁹² Casado con María Gregoria de Dícido Zamudio, hija del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio y de Ana Maciel, concuñado de José de Acosta y de Nicolás Patrón, y suegro del Teniente Gobernador de Corrientes Coronel Juan García de Cossio y Gómez de Cossio, Manuel de Vedoya y Cossio, e Isidoro Martínez de Cires (Calvo, I, 299; Labougle, 1953, 170).

⁹³ Maestre de Campo, Regidor Decano Propietario, Alcalde, Promotor de la Rebelión de los Comuneros Correntinos de 1764, casó en primeras nupcias con Micaela Carvallo Maciel, hija de Ventura Carvallo y de Ignacia Maciel Cabral de Melo, prima hermana de María Ignacia Carvallo, mujer del comerciante José Antonio Mieres, y en segundas nupcias con Margarita Home Pessoa, hija de Alexo Nicolás Home Pessoa de Figueroa Mendoza y de Francisca Sanabria Maciel y Saavedra (Calvo, I, 164). En 1757 inicia una causa por nepotismo contra el Teniente Gobernador Interino de Corrientes Don José de Acosta (AGN, Criminales, Leg.4, Exp.14). Y en 1766 fué procesado por su rebelión contra el Gobernador de Corrientes Manuel de Rivera Miranda (AGN, Criminales, Leg.5, Exp.7).

⁹⁴ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-8, Exp. 8, fs. 9.

⁹⁵ *Ibídem*.

⁹⁶ *Ibídem*.

⁹⁷ Probablemente hermano del Capitán Isidro de Roxas y Aranda, marido de María Servín, y padre de María de Roxas y Aranda, mujer de Diego de León y Valdivia, fallecido en 1771 (Quevedo, 1984, 97).

⁹⁸ Melchor de Rojas Aranda al Gobernador, Corrientes, 20-X-1758 (AGN, División Colonia, Corrientes, Leg.1, Sala IX, 3-3-6).

⁹⁹ *Ibídem.*

¹⁰⁰ *Ibídem.*

¹⁰¹ *Ibídem.*

¹⁰² AGN, División Colonia, Interior, Leg.20, Exp.7.

¹⁰³ Marqués de Sobremonte al Virrey Loreto, Córdoba, 7-VIII-1786 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3 [Sala IX, 5-9-5]).

¹⁰⁴ Hijo del Capitán José María Dávila y de Petronila Brizuela y Doria, y marido de María Rosa del Moral, y padre del General Miguel Gregorio Dávila y del Coronel Nicolás Dávila.

¹⁰⁵ Casó con María Josefa Villafañe, hija del Alcalde Provincial Juan Manuel Villafañe y de María del Rosario Carreño y Bazán, y padres del Gobernador Jacinto del Rincón y Villafañe, asesinado por la montonera de Facundo. Era concuñado del Maestro de Postas Justo Pastor Gordillo, hijo de Inocencio Gordillo (Serrano Redonnet, 1944, 61; y AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1).

¹⁰⁶ Marqués de Sobremonte al Virrey Loreto, Córdoba, 7-VIII-1786 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3 [Sala IX, 5-9-5]).

¹⁰⁷ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1.

¹⁰⁸ Hijo de Simón de Videla Azoca Pardo Parragués y de Elena Martínez de la Peña; cuñado de Miguel de Molina Chacón, de Juan Mateo de León y Guevara, y de Nicolás de Godoy y del Pozo (Calvo, I, 309; y IV, 344, 347; y Morales Guinazú, 1936, 65ss.; 1939, 114, 335, y 338).

¹⁰⁹ Hijo de Marcos Martínez de Soto y Rozas y de Francisca López de Liñero y Torres, naturales de Regules; casado en 1746 con María Prudencia Correas y Villegas, hija de José Correas de Larrea y de Francisca Ruiz de Villegas; y fué padre del Gobernador de Concepción, Chile, Juan Martínez de Rozas, y suegro de Francisco de Borja Corvalán y Chirinos, del Alferz Real Miguel Téllez de Meneses, y de Tomás de Lima Melo y Jofré (Calvo, II, 377; IV, 110 y 350; y V, 185; y Comadrán, 1962, 47).

¹¹⁰ Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta No.15, Documento N.2.

¹¹¹ Hijo del mercader Jacinto Bernardo de Aldao, natural de San Roque de la Piedra, La Coruña, y de María Teresa Rendón y Lariz, porteña (Fernández de Burzaco, I, 61). Contrajo primeras nupcias con la Cordobesa María Teresa Ordóñez, hija de Francisco Xavier Ordóñez y de Mariana de Ledesma Valderrama, y segundas nupcias con Leonor Candioti, hija de Antonio Candioti y Múxica, y de María Andrea de Zeballos (Crespo Naón, 1983, 60). Fué padre en su primer matrimonio de Félix Aldao y Ordóñez, casado con Andrea Duarte Neves, hija de Juan Domingo Duarte Neves y de Antonia Lacoizqueta; y del Regidor Andrés Aldao y Ordóñez, casado en 1801 con Martina Igarzábal, hija de Domingo Igarzábal Sarmiento, y de María Josefa de Echeverría y Ordóñez. En su segundo matrimonio fué padre del que fuera Guerrero de la Independencia Juan Francisco Aldao y Candioti, soltero; del Alcalde de segundo voto de Santa Fé en 1810 Dr. Pedro Aldao Candioti, casado con Joaquina Rodríguez del Fresno, hija de Manuel Rodríguez, natural de Galicia, y de Francisca del Fresno, nacida

en Galicia; y del que fuera Gobernador de Santa Fé en 1818 Luis Aldao Candioti, casado con su prima Leonor Candioti, abuelo del Diputado Nacional y Director General de Correos y Telégrafos Carlos A. Aldao Roseti (Calvo, I, 40).

¹¹² Alcalde de Segundo Voto de Santa Fé en 1785. Natural de Lemoniz, Vizcaya, casó con Estefanía Echagüe y Gaete, hija del Teniente Gobernador, Justicia Mayor, y Comandante de Armas de Santa Fé Francisco Javier de Echagüe y Andía y de Josefa Gaete y del Casal, padres de José Uriarte, casado con Angela López de los Ríos (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730; Crespo Naón, 1983, 66). En 1791 demanda para que la justicia de Santa Fé cite a testigos que prueben su conducta y moral (AGN, Tribunales, Leg.215, Exp.3). En 1801 sigue autos contra B.López (AGN, Tribunales Administrativos, Leg.5, Exp.150; Leg.9, Exp.268; y Leg.8, Exp.220). En 1804 demanda a M. Almagro por cobro de pesos (AGN, Tribunales Administrativos, Leg.14, Exp.414).

¹¹³ Hijo del Regidor Capitán José Crespo y de Casilda Carvallo y Aguilera del Pino, y marido de Polinesia Rodríguez y Lencinas (Crespo Naón, 1983, 63).

¹¹⁴ hijo de Manuel Arias, nat. de los Infantes, Galicia, y de Cecilia Catalina Troncoso y Echagüe.

¹¹⁵ hijo de Manuel Troncoso y de María Elbira de Zabala (CN, 1983, 76).

¹¹⁶ Natural de Lesaca, Pamplona, hijo de Gabriel de Lassaga y Barrenechea, y de Gracia de Gamboa y Eudara, sobrino de Martín de Gamboa (marido de Dionisia Morón), avecindado en Buenos Aires, y primo hermano de los hermanos Pedro Tomás y Martín Francisco de Larrechea. Casó en primeras nupcias con Francisca de Ziburu y Echagüe y Andía, y en segundas nupcias con la prima hermana de su primer mujer, Doña Francisca Xaviera de Echagüe y Andía, cuarta hija del Teniente Gobernador Francisco Javier de Echagüe y Andía y de Josefa de Gaete y Casal (CN, 1983, 66 y 71; y FB, IV, 399).

¹¹⁷ En 1758 Jose Cano le inicia demanda por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.C-7, Exp.19). En 1773 Manuel Acuña Neves pide rendición de cuentas por su administración (AGN, Tribunales, Leg. A-12, Exp.24). En 1774 demanda a Fernando Maseira y Luis Rodríguez Valdovinos por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.T-4, Exp.5). En 1788 demanda a Manuel Ferreyra Braga do Couto por incumplimiento de contrato (AGN, Tribunales, Leg.53, Exp.7).

¹¹⁸ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730.

¹¹⁹ Idem.

¹²⁰ Idem.

¹²¹ Idem.

¹²² José de Vera Múxica al Marqués de Loreto, Santa Fé, 6-XII-1788 (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730). Si bien Vera Múxica ignora el resultado de este juicio de disenso, lo cierto fué "...que él se casó con la hija de su manceba [Polinesia Rodríguez y Lencinas]" (Crespo Naón, 1983, 63) para lo cual fué necesario la dispensa del Ilustrísimo Fray Sebastián Malvar, que se la concedió con la imposición de una penitencia pública, la cual cumplió a deshoras de la noche por disposición del cura del partido del Paraná (José de Vera Múxica al Marqués de Loreto, Santa Fé, 6-XII-1788, AGN,

División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730).

¹²³ José de Vera Múxica al Marqués de Loreto, Santa Fé, 6-XII-1788 (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730). Si bien Vera Múxica ignora el resultado de este juicio de disenso, lo cierto fué "...que él se casó con la hija de su manceba [Polinesia Rodríguez y Lencinas]" (Crespo Naón, 1983, 63) para lo cual fué necesario la dispensa del Ilustrísimo Fray Sebastián Malvar, que se la concedió con la imposición de una penitencia pública, la cual cumplió a deshoras de la noche por disposición del cura del partido del Paraná (José de Vera Múxica al Marqués de Loreto, Santa Fé, 6-XII-1788, AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730).

¹²⁴ Idem.

¹²⁵ El Regidor Defensor General de Pobres al Virrey Joaquín del Pino, 1-X-1802 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.13, Sala IX, 6-1-1).

¹²⁶ Levene, 1911, 124-125; y Lynch, 1958, 204; y 1967, 192.

¹²⁷ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs. 240.

¹²⁸ El fenómeno eleccionario estaba compuesto por tres actos distintos: la calificación, la elección propiamente dicha, y la confirmación. El acto o sesión de la calificación debía ser, para el abogado porteño educado en el Chile colonial Dr. Mariano Pérez de Saravia y Sorarte, el lugar donde exclusivamente debían resolverse las causas que privaban o tachaban (impugnaban) a las personas de elegir y ser elegidas. Este acto o cabildo extraordinario, que en Potosí -a juzgar por lo que opinaba Pedro Vicente Cañete- llamaban de dudas (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12), debía ser celebrado en la víspera de cada elección. Es decir, en dicho acto debían quedar decididas "...las tachas, y excluidos de la voz activa y pasiva los sujetos comprendidos en ellas, para entrar al día siguiente sin estos embarazos a prestar únicamente los votos o elegir" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 98, Exp. 7, fs.45). Quienes podían privar de voz y voto a algún cabildante, o incluso impugnar a uno o varios candidatos a ocupar cargos concejiles eran, amén de los cabildantes mismos, los Virreyes, los Gobernadores, y las Reales Audiencias. En 1757, año en que asume la Gobernación de Córdoba Joaquín de Espinosa y Dávalos, Nicolás Guilleto, que operaba como el intelectual orgánico del bloque de poder citado, fué privado por motivos que ignoramos de voz y voto por algunos años y conducido preso a la Real Audiencia de La Plata (José, Santiago, y José Antonio de Allende al Virrey Cevallos, Córdoba, 8-I-1778 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, 1774-1779, Sala IX, 5-9-4]). El objeto de estas sesiones extraordinarias de calificación de votos era para Mariano Moreno "...asegurar la dignidad de los sujetos, sin exponer a infamación a los que no se consideren dignos de ser elegidos" (AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.5, fs.19v.). Después que en el acto de calificación de votos era reconocida la idoneidad de una persona, no debía según Moreno "...admitirse reproche alguno que se le oponga al tiempo de elegir" (Ibídem). Aquellos que resultaban no tener tacha ni vicio alguno se escribían en el Libro de Acuerdos como hábiles y suficientes para poder ser elegidos, y los que padecían de alguna nota o excepción verbal quedaban excluidos (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Las excepciones verbales no se asentaban para evitar difamaciones (Ibídem). El acto de la elección debía ser por cédulas secretas el día primero de cada año, sin poder saberse otra cosa sino que "...algunos de los candidatos propuestos, admitidos, y calificados por los mismos regidores" debían salir elegidos para Alcaldes (Ibídem). Las cédulas en blanco les eran repartidas en la misma Sala Capitular "...retirándose cada uno de por sí a la Mesa del Escribano [donde] escribe allí de su propia letra los nombres, y pasando con el

Papel ya doblado al Presidente del Cabildo y demás Jueces, lo entrega por su mano dentro de una vasija hasta su tiempo" (Ibídem). Concluída la votación, se acercaban a la Mesa de la Justicia los dos Regidores más antiguos y el Escribano de Cabildo en cuya presencia se vaciaban los votos y se contaban, para confrontar su número con el de los vocales. Luego, el Presidente iba abriendo las cédulas una por una, las leía en voz alta, "...y por este orden corre y se publica el papel por los dos Alcaldes Ordinarios y los dos Regidores señalados para el escrutinio" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). En tanto, el acto de la confirmación, celebrado obviamente a posteriori de la elección, era exclusivo de los Gobernadores-Intendentes, aunque en numerosas oportunidades lo practicaban los Comisionados designados al efecto.

¹²⁹ Regidor y Alcalde. Nacido por 1750, hijo de Francisco Fernández de Maradona, natural de San Pedro de Abanto, y de Francisca Arias de Molina y Jofré, y nieto materno de Bernardo Arias de Molina y Videla y de Catalina Jofré de la Barreda y Bravo de Montenegro. Era hermano de Juana Fernández de Maradona, mujer de José Luciano Fernández de Balmaceda; de Pedro Fernández de Maradona, marido de Teresa Blanco Echegaray, hija de Tomás Blanco Jofré y de Inés Echegaray Quiroga; y de Francisco Fernández de Maradona, casado con Petrona Sánchez del Carril, hija de Juan José Sánchez de Loria Moyano y de Francisca de Borja Vásquez del Carril. José Ignacio Fernández de Maradona casó con Paula Echegaray Cano, hija de Miguel de Echegaray y Quiroga y de Elena Cano de Carvajal y Quiroga Sarmiento, desposados estos últimos en junio de 1751. Fueron padres de Timoteo y José Clemente Fernández de Maradona (Zinny, IV, 136-137; Calvo, II, 48; y V, 145 y 249; y Cutolo, III, 60)

¹³⁰ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.60, Exp.7b, fs.37.

¹³¹ Ibídem.

¹³² Casó con una hija de Vicente Sánchez de Loria y Jofré y de Juana Josefa Jofré y Bravo de Montenegro, y fué padre de Sebastiana Echegaray, mujer de Ignacio Sánchez Gallen (Calvo, II, 48; IV, 264; y V, 29).

¹³³ Hijo de Francisco Flores, vecino de Córdoba.

¹³⁴ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.60, Exp.7b, fs.37.

¹³⁵ Estas pugnas se desarrollan con mas detalle en otro trabajo de este autor titulado "La campaña contra el nepotismo en los orígenes de la Revolución. El Discurso político reformista en los Cabildos de las provincias del Río de la Plata (1790-1810)".

¹³⁶ Nacido en Vizcaya en 1747, casado en primeras nupcias con María Inés Santillán, viuda de Manuel Fernando Bravo de Rueda, y en segundas nupcias con Agustina Iramain, hija de Agustín Iramain y Josefa Santillán (Figueroa, 1927, 77). Agustina era hermana de Juan José Iramain, Gobernador de Armas en 1786, y Subdelegado de Real Hacienda en 1787 (Figueroa, 1927, 177). En 1787 pide permiso para pasar a Santiago del Estero (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 17, f.356). En 1790 es nombrado Subdelegado de Santiago del Estero en reemplazo de Baltasar Gaya (AGN, DNCE). Era concuñado de Pedro de Medina y Montalvo. Puede haber sido el padre del rematador del Ramo de Sisa en Córdoba, llamado Antonio de Palacio y Amavíscar.

¹³⁷ Hijo de Manuel Fernando Bravo de Rueda y de Inés Santillán. Su madre, al enviudar, contrae segundas nupcias con Manuel de Palacio y Amavíscar. Era Jose Bravo de Rueda casado con María Roberta Suasnábar, hija del Maestre de Campo Francisco Antonio de Zuasnábar, Alcalde en 1767 y Tesorero Juez Oficial Real en 1771, y de Petrona de Paz y Figueroa (hija de Miguel Paz y Figueroa y de María Díaz Caballero). José Bravo de Rueda era hermano del Alcalde de primer voto y Comandante de Armas Diego Bravo de Rueda, casado con María Josefa Goyechea y Frías. María Roberta Suasnábar era hermana de Gabriela, casada con José Pelayo de Alcorta; de Victoria, casada con el Comandante Gregorio Díaz; y de Margarita, mujer de José de Olaechea (Figueroa, 1927, 104, y 119).

¹³⁸ Manuel de Palacio al Virrey, Santiago del Estero, 13-II-1799 (AGN, División Colonia, Intendencia de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7). Ver también AGN, División Colonia, Interior, Leg.46, Exp.8, fs.18.

¹³⁹ Baltasar Gaya al Virrey, Santiago del Estero, 11-I-1800 (AGN, División Colonia, Intendencia de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7).

¹⁴⁰ Nacido en España. Fué designado Gobernador de Córdoba en 1796 en reemplazo de Sobremonte. Partió a España en 1800, volviendo a tomar el cargo en diciembre de 1803 (Garzón, 1898, 385-390).

¹⁴¹ AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.24.

¹⁴² Hermano del Alguacil Mayor Rafael Bargas.

¹⁴³ Natural de Portugal, prisionero de la Colonia del Sacramento en 1776, y confinado por el Gobernador Cevallos en Mendoza (Sosa Morales, 1965, 11). Era casado en 1786 con María Juana Martínez de Rozas y Correas, hija del Alcalde y Procurador de Mendoza Maestre de Campo Juan Martínez de Rozas y López Piñero, nacido en Nogales, Valle de Soba, y de María Prudencia Correas de Larrea, y cuñado de Francisco de Borja Corvalán de Castilla, y de Tomás de Lima Melo (Calvo, IV, 110).

¹⁴⁴ AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.24.

¹⁴⁵ *Ibídem*.

¹⁴⁶ *Ibídem*, fs.25.

¹⁴⁷ *Ibídem*, fs.26v.

¹⁴⁸ Pike, 1958, 144.

¹⁴⁹ Burkholder y Chandler, 1984, 22.

¹⁵⁰ Burkholder y Chandler, 1984, 22.

¹⁵¹ Burkholder y Chandler, 1984, 22.

¹⁵² Alcalde de Primer Voto Lic. Martín de Tapia, Alcalde de Segundo Voto Tomás Antonio de

Ayarza, Alcalde Mayor Provincial José Mariano del Castillo, Fiel Ejecutor Simón Romano, Regidores Perpetuos José Antonio Ramallo y Melchor Saavedra, Alcaldes de Hermandad Juan Tomás Moscoso y Pérez y José Gavino Ruiz de Sorsano, Mayordomo de Renta de Propios Antonio de Ensima y Defensor de Menores Clemente López (AGN, División Colonia, Interior, Leg.49, Exp.25).

¹⁵³ Uno de los Reos de Oruro, casado con María Josefa Urquieta (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.1, N.12; Leg.4, N.11; Hacienda, Leg.79, Exp.2070; y Criminales, Leg.48, Exp.3). Probablemente pariente de Domingo Urquieta, también implicado en la sublevación de Oruro (AGN, División Colonia, Sublevación de Oruro, Leg.2, N.8).

¹⁵⁴ AGN, División Colonia, Interior, Leg.49, Exp.25.

¹⁵⁵ Idem.

¹⁵⁶ Idem.

¹⁵⁷ Idem.

¹⁵⁸ vecino morador de Córdoba, casado con Teresa Garay Molina Navarrete; hija de Francisco Garay y de Petronila Molina Navarrete; sobrina del Alcalde José de Molina; hermana del Alcalde Provincial Domingo Garay; y cuñada del Alcalde Francisco Armesto y Allende, del Alcalde José Benito de Acosta y de Fernando Arce y Bustillos (Archivo Histórico de Córdoba, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119).

¹⁵⁹ AGN, Tribunales, Leg.97, Exp.17, fs.28.

¹⁶⁰ Casó con María Teresa de las Casas y Correa, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario, y dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y Ferreyra. Era concuñado del Escribano Clemente Guerrero (Lazcano, II, 142). Guilleto remata el oficio de Alguacil Mayor en 1753 (Archivo Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26, Exp.6). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

¹⁶¹ Español, casado con María del Carmen Albornoz y Carranza, hija de José de Albornoz y Guevara y de Francisca Carranza Echenique, padre del que fuera Gobernador de Córdoba, José Xavier Díaz, quien a su vez estaba casado con Jenuaria Allende y Mendiola; de Juana Isabel Díaz, mujer del comerciante de mulas Gaspar Sáenz Bravo; y de María Clara Díaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (Calvo, I, 203). Era socio de su primo Juan Pérez de Bulnes.

¹⁶² Levillier, 1915, II, 155. Díaz de la Fuente era casado con Juana Arias de Cabrera, hija de Juan Luis Arias de Cabrera y Gutiérrez y de Rosa de Ceballos y Losa Bravo, nieto paterno de Santiago Arias de Cabrera y Díaz de Quiñones, propietario de la estancia Yacanto en Traslasierra, y en el Arroyo de Tegua, en Río Cuarto, y de María Cándida Gutiérrez y Ledesma, y nieto materno de Juan Miguel de Ceballos y Almonacid, dueño de la estancia San Isidro, hoy Río Ceballos, y de María Josefa Losa Bravo y Albornoz (Lazcano, III, 215); concuñado de Bernabé Gregorio de las Heras, de Felipe Antonio González, de Juan José Sardeñis, del mendocino José Orencio Correa, y de Rafael María Castellanos y Cossio; suegro de Mariano de Usandivaras y Allende; y consuegro del Caballero de Carlos III Pedro

Lucas de Allende. Su suegro Juan Luis era cuñado de Francisco de Bustos y Cabanillas (jMayol Laferrere, 1975; Lazcano, I, 1936, 445).

¹⁶³ Nicolás García Gilledo a Juan José Vértiz, Córdoba, 5-I-1782 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, 1774-79, Sala IX, 5-9-4).

¹⁶⁴ Entre sus principales acreedores figuraban Manuel Escalada, José Almorina Caro, Pedro José Doye, M. Sánchez, José Iturriaga, Nicolás de Acha, Pablo Thompson, Manuel José de Borda, Francisco Alvarez Campana, Ignacio de Irigoyen, Inés Jijano y Castro, T. Martínez, J. Alsina, Miguel Alfonso de San Ginés, Bernardo Sancho Larrea, José de San Pedro Lorente, Joaquín Pinto de los Ríos, Domingo Antonio de Vea y Murguía, Julián Gregorio de Espinosa, Manuel Rodríguez de la Vega, y José León Barua (AGN, Protocolos, Reg.2, 1753, fs.171; Reg.2, 1755, fs.366 y 610v.; Reg.1, 1755, fs. 314; R.2, 1756, fs.280; R.5, 1756, fs.210 y 137; R.2, 1754, fs.622 y 647; R.1, 1757, fs.102v.; R.2, 1757, fs.122v.,113v., y 105; R.4, 1758, fs.34; R.1, 1759, fs.129v.; R.6, 1759, fs.166v.; R.2, 1761, fs.29; R.1, 1761, fs.15v.; R.4, 1761, fs.31, 29v.,18, 13, 310v., 317 y 330v.; R.2, 1761, fs.229v.; R.5, 1761, fs.252; R.4, 1763, fs.2v., 8, y 9; R.4, 1764, fs.42v. y 47; R.5, 1764, fs.29; R.2, 1765, fs.77v.; R.4, 1765, fs.39; R.6, 1765, fs.64v.; R.2, 1766, fs.10v., 36v., y 39v.; R.4, 1766, fs.138; R.3, 1770, fs.83v.; R.4, 1770, fs.66 y 67; R.5, 1770, fs.35; R.6, 1771, fs.89v.; R.3, 1772, fs.236v.; R.2, 1778, fs.38; R.2, 1780, fs.1; y R.3, 1780, fs.86v.

¹⁶⁵ Entre sus acreedores se registran Juan Tomás Echever, Ignacio Alfonso Marcó, Francisco Segurola, Domingo Basabilbaso, Bernardo Sancho Larrea, Juan de Lezica y Torrezuri, Vicente Azcuénaga, J. Mojaime, y Juan Antonio de Lezica (AGN, Protocolos, R.2, 1766, fs.37v.; R.3, 1767, fs.176; R.6, 1767, fs.59; R.3, 1770, fs.175 y 176; R.5, 1772, fs.188; R.6, 1772, fs.287 y 283v.; R.5, 1773, fs.303; R.4, 1774, fs.4v.; y R.6, 1774, fs.70v.)

¹⁶⁶ AGN, Tribunales, Leg.97, Exp.17, fs.28.

¹⁶⁷ Marqués de Sobremonte al Virrey Loreto, Córdoba, 7-VIII-1786 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3 [Sala IX, 5-9-5]).

¹⁶⁸ Hijo de José de Sotomayor y Dávila, y de Maria Villafañe y Tejeda, casado en 1744 con Isabel Videla y Zalazar, padres de Juana Sotomayor, mujer de Félix Correas; de Manuela Sotomayor, mujer de Domingo Corvalán; de Ventura Sotomayor, mujer de José Clemente Benegas; de Petronila Sotomayor, mujer de Isidoro Sáinz de la Maza; y de Josefa Sotomayor, mujer de Francisco Xavier de Molina (Comadrán, 1962, 45). Corregidor de la Ciudad de Mendoza, en 1778 pide cargo de Coronel de Milicias (AGN, Solicitudes Militares, Libro 4, f.269-271).

¹⁶⁹ Archivo Histórico de Mendoza, Civil, Epoca Colonial, Carpeta No.17, Documento No.11.

¹⁷⁰ Hijo de Francisco Corvalán de Castilla y Clara Escalante Videla; cuñado de Hilarión Almandóz Puebla, de Onofre Lemos Ladrón de Guevara y de Gaspar Serrano; marido de Manuela Mayorga Molina; y suegro de Marcelino Videla Godoy y Clemente Segura Gamboa.

¹⁷¹ Archivo Histórico de Mendoza, Civil, Epoca Colonial, Carpeta No.17, Documento No.11.

¹⁷² Casado en 1769 con Ana María de Herrera y Dávila, sobrina segunda del Alcalde de primer

voto Juan José de Villafañe y Dávila, hija de su prima hermana carnal, y padre de Manuel de Noroña y Herrera, marido de Carmen Magarzo. Aparentemente estaba separado de su mujer (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.1; y Serrano Redonnet, 1979, 213).

¹⁷³ Natural de la Villa de María (Galicia), casado con Ana Victoria de Villafañe y Dávila, padre de José Fermín Soaje y Villafañe, casado con Manuela Antonia Dávila del Moral (Cutolo, VII, 130; y Serrano Redonnet, 1979, 213).

¹⁷⁴ AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.89, Exp.2313.

¹⁷⁵ Hijo de Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo y Bazán y de María Aurelia de Villafañe y Dávila, hermano de Francisco Antonio y de Domingo Ortiz de Ocampo, marido de María del Tránsito de Luna y Carmona, y padre de Andrés Nicolás, Ventura, y Amaranto Ocampo y Luna.

¹⁷⁶ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1. Según Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, el contrabando "...que tanto vocifera [Noroña] haber aprehendido a mi hermano [Domingo] era reducido a siete masos pequeños de tabaco tarijeño comprados en la tercena de San Carlos, jurisdicción de Salta, para su gasto y consumo por la suma escasez, que de ese efecto se padecía en el partido de Anguinan y en toda la jurisdicción de La Rioja. La noticia que tuvo D. José Noroña de esos siete masos de tabaco fue bastante para que conduciéndose a casa de Dn. Amaranto con el ruidoso aparato de hombres armados hiciese un registro general de todas las viviendas sin dispensar rincón alguno, ni aún las tinajas de vino; y el hallazgo de los siete masos fue todo el material para la causa, que le fulminó por despique y venganza (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.37).

¹⁷⁷ mercancías Europeas, medios de producción [almadanetas], mano de obra esclava Africana, y productos del mercado interno colonial [mulas, coca, aguardiente, paños].

¹⁷⁸ Regidor y Alcalde. Nacido por 1750, hijo de Francisco Fernández de Maradona, natural de San Pedro de Abanto, y de Francisca Arias de Molina y Jofré, y nieto materno de Bernardo Arias de Molina y Videla y de Catalina Jofré de la Barreda y Bravo de Montenegro. Era hermano de Juana Fernández de Maradona, mujer de José Luciano Fernández de Balmaceda; de Pedro Fernández de Maradona, marido de Teresa Blanco Echegaray, hija de Tomás Blanco Jofré y de Inés Echegaray Quiroga; y de Francisco Fernández de Maradona, casado con Petrona Sánchez del Carril, hija de Juan José Sánchez de Loria Moyano y de Francisca de Borja Vázquez del Carril. José Ignacio Fernández de Maradona casó con Paula Echegaray Cano, hija de Miguel de Echegaray y Quiroga y de Elena Cano de Carvajal y Quiroga Sarmiento, desposados estos últimos en junio de 1751. Fueron padres de Timoteo y José Clemente Fernández de Maradona (Zinny, IV, 136-137; Calvo, II, 48; y V, 145 y 249; y Cutolo, III, 60)

¹⁷⁹ Según Francisco Alfonso Pereira, Ortiz dependía del Regidor Francisco Gregorio Blanco "...por su pobreza y miseria", pues "...aún le debe a Don Juan de Dios Furque o ha debido el valor del oficio". Su pobreza o miseria era "...notoria pues sin embargo del oficio que tiene por poder comer sirve de plumista en Temporalidades por seis u ocho pesos al mes. Pero quien duda que esta misma condición de no tener que perder presta a muchos animosidad para entrar en la empresa más ardua y que de ellos se valen muchas veces los más taimados y cautos para ponerlos a la frente y hacerlos Autores de sus venganzas y de sus insultos y de sus injusticias para no exponer sus caudales que es lo que a mi entender puntualiza este caso" (AGN, Tribunales, Leg.69, Exp.14, fs.200).

¹⁸⁰ hijo de Fernando Tadeo de la Rosa y de Rosa de la Torre y Torres, casó con Constanza del Carril y Salinas, hija de Juan Vásquez del Carril y de Francisca Salinas Cabrera (CC, IV, 327).

¹⁸¹ El Regidor, Fiel Ejecutor y Teniente Ministro de la Real Hacienda Pedro Carril era hijo del Corregidor y Maestre de Campo Salvador Vázquez del Carril, nacido en Galicia, y de María Josefa Sánchez de Loria y Jofré, y se desposó en 1787 con Clara de la Rosa y Torres, hermana de Francisco Borxa de la Rosa, y de Manuela de la Rosa de Arbestayn, padres de Antonino Aberastain. Fue padre de Salvador María del Carril (Carte, 1958).

¹⁸² Regidor Perpetuo, Depositario General de San Juan en 1776 y 1789. Casado con María Gómez de la Quintana, padres de Juana de la Cruz Blanco, desposada en 1811 con Domingo Manuel de Albarracín y Allende, hijo de Alejandro Albarracín Irrazábal y de Justina de Allende Quiroga Sarmiento (CC, V, 29).

¹⁸³ AGN, Tribunales, Leg.103, Exp.14, fs.53.

¹⁸⁴ AGN, Tribunales, Leg.103, Exp.14, fs.53.

¹⁸⁵ Socolow, 1987, 106.

TOMO VII

CAPITULO 8

El fuero consular enfrentado a los fueros capitular, eclesiástico y militar. La Lucha del Comercio contra las presiones señoriales de los Cabildos, la Iglesia y la Milicia.

(publicado en 1996 en el Boletín de Historia y Geografía [Santiago de Chile: Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas], 12, 96-117);

Si bien los fueros personales en las causas civiles y criminales, los títulos y escudos de nobleza,¹ el Tribunal de la Inquisición,² los mayorazgos, las Reales Audiencias,³ y la venalidad y perpetuidad de los oficios concejiles,⁴ fueron abolidos por las disposiciones de la Asamblea del año 1813,⁵ y los fueros de la Milicia, la Iglesia, los Cabildos, el Consulado, la Hacienda, el Protomedicato, y el Correo también por las leyes Rivadavianas,⁶ los privilegios corporativos se perpetuaron. Tan se perpetuaron que la Suprema Corte de Justicia Argentina, en repetidos fallos, tuvo que diferenciar los fueros personales, que implicaban una preeminencia social, de los fueros reales, que según Rivarola (1934), y más luego Linares Quintana (1956) y la mayoría de los constitucionalistas contemporáneos, no implicaban preeminencia social alguna. Mientras los primeros fueron suprimidos, los segundos quedaron subsistentes.⁷

En el caso de los fueros, la mayoría de los estudios sobre los mismos se redujeron a analizar la naturaleza de su origen, en lugar de estudiar los conflictos que por su causa se suscitaron y el desigual impacto que generaron en la estructura social. El derecho a los fueros militar, eclesiástico, capitular y consular, contaron como verdaderos privilegios personales que --al liberar a sus miembros de las persecuciones de las demás autoridades y atentar contra el principio republicano de la inamovilidad de los jueces y la integridad de las demás corporaciones-- influían en el comportamiento de los mercados de mercancías y de mano de obra afectando, al decir de Max Weber, causalmente las relaciones inter-estamentales e implicando verdaderas subordinaciones y preeminencias sociales.⁸ Por ejemplo, si bien los fueros capitular y consular habrían operado en la estructura económica y social en forma restrictiva, en la práctica operaron entre sí en forma antagónica; el fuero capitular, al igual que el fuero eclesiástico, privando al comercio y al mercado de mercancías del poder para cobrar gabelas y ejecutar créditos; y el fuero consular privando a la burocracia comunal y militar de las inmunidades corporativas. Por el contrario, los fueros militar y eclesiástico habrían dado lugar a: a) una intromisión en los asuntos civiles y políticos; y b) privado al mercado de mercancías y al mercado de mano de obra de la seguridad jurídica imprescindible para la circulación y cumplimiento de negocios y contratos. Levaggi (1971) sostuvo que mientras los fueros eclesiástico y militar fueron en tiempos coloniales y hasta su subrogación por las leyes Rivadavianas de naturaleza estrictamente personal, los fueros

consulares (mercantiles) y profesionales (Protomedicato) fueron de un acentuado carácter real.⁹ El fuero capitular fué restringido aún más, a partir de la implantación de la Real Ordenanza de Intendentes (1784), al prolongarse el término del mandato de los jueces o alcaldes.¹⁰ Finalmente, si bien el fuero capitular desapareció con la abolición de los Cabildos,¹¹ con las legislaturas provinciales y nacionales apareció el nuevo fuero parlamentario.

En el sentido apuntado por las tesis de Rivarola y Levaggi, cabe entonces preguntarse si los conflictos en el seno de las instituciones mercantiles, y entre estas últimas y los Cabildos, la Milicia y la Iglesia, se hallaban o no relacionados con los procesos de estamentalización y movilidad de la sociedad colonial. Asimismo, en este trabajo nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas comerciales, por cuanto fué durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de los patriciados locales. Para analizar a los Cabildos hemos indagado los casos en que el fuero capitular afectó al comercio a larga distancia y al servicio de Milicias. Para investigar el comportamiento del Consulado de Comercio hemos estudiado los casos en que los Consulados combatieron los privilegios de la Milicia, como ocurrió en Buenos Aires y Asunción del Paraguay. A los efectos de estudiar todos estos casos, hemos recogido una decena de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC).

Entre las nociones jurídicas implementadas en el mundo colonial se hallaban aquellas relacionados con las luchas libradas contra el corporativismo, tales como patronato, fuero, recurso de fuerza, avocamiento, declaratoria, e inhibitoria. En estas luchas prevalecían las nociones relacionadas con la facultad de subrogar o transferir los poderes administrativos y jurisdiccionales, seculares y eclesiásticos; así como aquellas vinculadas con la facultad de confirmar o revocar la elección de los representantes ante los Cabildos seculares. En lo que hace a la primer facultad mencionada, su origen último residía en el monarca y era delegado por este último en los Virreyes, Gobernadores y Tenientes Asesores Letrados; y en los alcaldes y oidores o tribunales inferiores, respectivamente. De ahí que, en esta concepción regalista del origen de los poderes administrativo y judicial, desarrollada en el siglo XVIII, era lógico y legítimo que el monarca o las autoridades superiores pudieran confirmar o revocar las elecciones concejiles y las ventas de oficios; subrogar o transferir las facultades del Vice-Patronato Real;¹² otorgar privilegiadamente el fuero militar o el de nobleza a aquellos a quienes querían proteger de un proceso judicial; interponer contra el fuero eclesiástico el recurso de fuerza,¹³ y avocarse las causas judiciales pendientes o en otras palabras, atentar contra el principio republicano de la inamovilidad de los jueces, dictando a los magistrados inferiores la llamada inhibitoria,¹⁴ o declinatoria.¹⁵

Con anterioridad a la Real Ordenanza de Intendentes, la facultad de confirmar o revocar las elecciones concejiles, recaía en las Reales Audiencias. Sancionada en 1782 la Real Ordenanza, dicha facultad se transfirió a los Gobernadores-Intendentes, quienes la usufructuaron hasta que en 1787 una Real Cédula la anuló, retornándosela al Virrey.¹⁶ La subrogación o transferencia del Vice-Patronato Real de los Virreyes a los Gobernadores-Intendentes, y de estos a los Asesores Letrados, suscitó intensas controversias entre Cabildantes, Obispos, Gobernadores y Oidores, que iniciaron un largo historial en las relaciones entre la Iglesia y el estado.¹⁷ Asimismo, la facultad que poseían los Virreyes, Reales Audiencias y Gobernadores de avocarse las causas judiciales pendientes ante los tribunales inferiores tenía su origen en el derecho canónico,¹⁸ y consistía en sustraer al acusado de sus jueces naturales para someterlo a aquellos otros jueces especiales designados por alguna autoridad superior.¹⁹ Por ejemplo, en el conflicto suscitado por la Expulsión de los Jesuitas, tanto el Gobernador Campero

como la Real Audiencia de Charcas protegían a sus partidarios dictando reiteradas inhibitorias,²⁰ u otorgándoles el fuero militar.²¹ En 1737, el Tesorero de la Santa Cruzada Nicolás de Echeverría y Lerchundi, en su pleito con los herederos de Domingo de Acasuso, interpuso por vía de excepción ante el Comisario de la Santa Cruzada la Declinatoria.²² En otro conflicto suscitado en 1761 en Potosí entre el porteño Felipe Santiago de Arce, testaferro del poderoso azoguero José Ascasubi, y Rafael de los Reyes y Serrano, apoderado de Francisco Alvarez Campana, este último se vió obligado a recurrir a la Real Audiencia de Charcas pidiendo con éxito que una Real Provisión inhibiera a Arce, para que como Alcalde electo "...no entendiese en causa mía ni de ninguno de mi fama".²³ En el conflicto suscitado en 1778 en Mendoza entre su Cabildo, dominado por José Perfecto de Salas y las llamadas tres Casas Reinantes, con el Azoguero del Mineral de Uspallata Francisco de Serra y Canals, el Gobernador de Cordoba despachó providencia a Don Agustín Gómez Pacheco, en calidad de juez privativo, "...para que con inhibitoria de todas las Justicias de Mendoza conozca de las causas de José de Almeyda y Juan Santos Preciado, como apoderados de los asuntos de Minas".²⁴ En Salta, en la causa criminal que el Teniente Asesor Tadeo Fernández Dávila formara en 1789 contra el Lic. Mateo de Saravia y Jáuregui, por haberle ofendido e injuriado como Juez Real en una causa por evicción de tierras, el Dr. Domingo Paz y Echeverría, abogado de este último, afirmaba que:

"...si un comprador por ejemplo es reconvenido y demandado ante su Juez Real por otro tercero sobre la cosa comprada, y pretende que el vendedor salga a la voz y defensa; aunque este sea clérigo y goce de un fuero tan privilegiado, debe ir a contestar ante el Juez Real porque la causa de evisión sigue a la principal como la Sombra al Cuerpo".²⁵

Pero habiendo obtenido Saravia la inhibición del Juzgado elegido por el Teniente Asesor, este último alegaba que

"...esta inhibición temporal para sus causas, y las de sus parientes la ha elevado a tan alto grado que intentó hacerla trascendental asta otros negocios que no dicen relación, ni con él, ni con toda su prosapia; tales son las causas del público como los arrendamientos de sus rentas y de los abastos de que se trataba".²⁶

Y en Paraguay, en 1796, Don José del Casal y Sanabria obtuvo en la causa criminal que se le formó por la matanza de 75 indios Mbayás, que se le inhibiera de la jurisdicción del Gobernador Lázaro de Rivera, y se le nombrara como Juez privativo de sus causas civiles y criminales al Teniente Gobernador Dr. Gregorio Zamalloa, de sus causas políticas a los Alcaldes ordinarios, y en lo militar al oficial de mayor graduación.²⁷ Con posterioridad a la revolución de Independencia estas instituciones del Antiguo Régimen se perpetuaron con ciertos velos o disimulos, como en el caso del Tribunal Especial para los recursos extraordinarios de nulidad e injusticia notoria,²⁸ duramente criticado en 1838 en la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires,²⁹ por Agustín Francisco Wright, así como en el proceso a los asesinos del General Juan Facundo Quiroga.³⁰

La incidencia de los fueros judicial o capitular.

En cuanto a la incidencia que el fuero judicial o capitular pudo haber tenido en la circulación mercantil y en la estratificación y movilidad social entonces vigente, variaba según el tipo de provincia de que se tratase. En las provincias periféricas a los circuitos mercantiles de larga distancia es sabido que los Cabildos fueron por lo general corporaciones representativas de los estamentos productivos y no del comercio, continuamente endeudados con la Real Hacienda. En tanto, en las provincias centrales a los circuitos mercantiles de larga distancia es sabido que los Cabildantes vivían endeudados con las

grandes casas comerciales de Cádiz o Buenos Aires. Asimismo, como corporaciones, los Cabildos fueron por lo general más restrictivos que la Milicia y los distintos ramos de la Real Hacienda. Entre las prácticas restrictivas más usuales, vigentes en los Cabildos, figuraban la endogamia y la prohibición de recaer la elección en individuos considerados ajenos a la llamada clase decente.³¹ Más aún, para combatir los obstáculos al comercio, las Reformas Borbónicas requirieron que los aspirantes a capitulares poseyeran solvencia, no estuvieran endeudados con la Real Hacienda ni con las grandes casas comerciales de Cádiz o Buenos Aires, no practicaran ausentismos, y tuvieran las fianzas actualizadas en caso de haberse venido éstas a menos.³² También es conocido el hecho de que los Alcaldes de primero y segundo voto contaban en tiempos de la colonización Habsburga con casi más poder que los demás funcionarios de la administración colonial. En cambio, los Alcaldes de Hermandad o Jueces Pedáneos operaban como simples auxiliares o delegados de los Alcaldes Ordinarios al actuar en materia penal como jueces de instrucción y en materia civil como jueces de barrio para casos de menor cuantía.³³ Su incidencia en la estratificación y movilidad social rioplatense estaba directamente vinculada a los mecanismos de reclutamiento implementados, a su grado de subordinación a gobernadores, obispos, oidores y virreyes, y a la composición étnica de sus miembros.

Los miembros de las elites patricias mantuvieron diversas estrategias en su vinculación con los Cabildos. La estrategia más generalizada consistía en apoderarse de los cargos más relevantes para con ellos tratar de manipular las relaciones con el mundo exterior. A los efectos de asegurar el cobro de sus adelantos fiados, los comerciantes acreedores valoraban enormemente las vinculaciones políticas de los deudores. La circunstancia de ser regidores y apoderados de comerciantes porteños permitía a quienes aunaban dichos privilegios, operar como cobradores de las deudas contraídas por azogueros o comerciantes residentes en el Alto Perú con acreedores radicados en Cádiz o Buenos Aires. Este cobro era particularmente engorroso por cuanto los azogueros contaban con el fuero de minería, el cual los protegía contra todo posible arresto fuera de los centros mineros, y contra toda amenaza de embargo a sus propiedades mineras.³⁴ El método más corriente para lograr la seguridad jurídica consistía en imponer en las regiones destinatarias de la mercancía importada las autoridades políticas que compulsivamente podían colocar o repartir dicha mercadería en los volúmenes y a los precios convenientes. El interés por colocar o repartir los embarques de géneros de Castilla o incluso de mercadería ilegal (e.g.: el tabaco vendido fuera del Estanco) llegaba entonces a decidir la suerte política de distritos enteros. La provisión de regidurías, corregimientos y subdelegaciones (con posterioridad éstas últimas a la rebelión tupamara), se hacía en interés directo de las sociedades o compañías introductoras o importadoras de efectos de Castilla o de mercadería contrabandeada.³⁵ También en Potosí, advertido de la postulación a Alcalde del porteño Felipe Santiago de Arce,³⁶ testaferro del poderoso azoguero José Ascasubi,³⁷ Rafael de los Reyes y Serrano, apoderado de Francisco Alvarez Campana,³⁸ pidió licencia para entrar en la Sala Capitular y poder exponer en contra de dicha postulación. Habiéndosele concedido el pedido

"...entre y les expresé que públicamente se decía iban a elegir de Alcalde al dicho Arce, que esto era sumamente gravoso a mi constituyente, por que debiendo a mi parte el dicho Arce 28 mil y más pesos como constaba de la escritura que les manifesté, le atrasaban más con dicha elección porque aún cuando se moderase en los primeros gastos que traía consigo la vara, no bajarían de 1500 o 2000 pesos".³⁹

Reyes y Serrano se vió obligado a recurrir a la Real Audiencia de Charcas pidiendo con éxito en 1761 que una Real Provisión inhibiera a Arce, para que como Alcalde electo

"...no entendiese en causa mía ni de ninguno de mi fama, cuya Providencia así como de cajón

se mandó librar a mi favor".⁴⁰

Lamentablemente para Reyes la gestión se empantanó en Lima, porque "...allí entretuvieron por los empeños contrarios, el tiempo".⁴¹ Sin embargo, la gestión habría logrado un éxito parcial, pues para 1762 Arce dejó el Cabildo para ser designado Contador Interino de la Real Casa de Moneda de Potosí.⁴² Ocho años después, en 1769, el Juez Comisionario enviado a Potosí por el Virrey del Perú Manso de Velazco le embargó al poderdante del Alcalde Arce, José Ascasubi, "...todo lo que había en su casa [a lo] que decía era ajeno".⁴³ En vista de dicho descargo, el Juez Comisionario de Lima arrestó a Ascasubi en la Sala Capitular del Cabildo de Potosí, lo que hizo que el Alcalde Arce, metido en la Sala Capitular, armara un tremendo escándalo, escribiendo sus demandas con la ayuda de abogados y escribanos y "...saliendo al balcón de cuando en cuando a dar gritos pidiendo papel sellado".⁴⁴ Para aquietar los ánimos, el Visitador General Jaime San Just,⁴⁵ proveyó un auto ordenando al Alcalde y al Juez Comisionario de Lima diesen parte a la Real Audiencia de Charcas.⁴⁶ En otras palabras, el Visitador General había conminado al Juez Comisionario de Lima y al Cabildo Potosino, pretendiendo antagonizarlos con la Real Audiencia de Charcas. Intimado el auto, Arce se sosegó, y Reyes pasó a dicha Real Audiencia. Una vez en ella el Fiscal de la Real Audiencia de Charcas, quien debió haber sido Tomás Antonio Álvarez de Acevedo,⁴⁷ pidió se multase al Juez Comisionario de Lima por no haberse asesorado en si los testimonios que Reyes presentó, como apoderado de Álvarez Campana, le servían o no para arrestar a Ascasubi. Según Phelan (1972), un Fiscal de la Real Audiencia deliberaba pero no podía votar pues estaba colocado en un grado menor al del Oidor, pero si bien no podía votar en los casos en que era parte como abogado de la corona, en aquellos litigios en que no lo era podía votar solo para romper el empate entre los Oidores.⁴⁸ Vista la presentación del Fiscal, la Real Audiencia de Charcas mandó se multase al Juez Comisionario en \$500, y se pusiese a Ascasubi en libertad. Forzados a un arreglo, Ascasubi propuso una composición, por lo que se suspendió la continuación de la causa hasta tanto viniere respuesta de Campana, aprovechando Reyes para retirarse de Charcas rumbo a Potosí. El Juez Comisionado por el Virrey del Perú, que había resultado "atropellado, multado y ajado" por cumplir con su deber, apeló la decisión de la Audiencia de Charcas recurriendo por vía de queja ante el Virrey de Lima, "...pidiendo el que se sirviese ordenar a la Audiencia se le bolviesen sus \$500 y se lo relevase de la Comisión".⁴⁹ Finalmente, Ascasubi rechazó la propuesta hecha por Álvarez Campana, y el Virrey del Perú terminó por solicitar a la Audiencia de Charcas le enviara los autos del caso a Lima. Toda esta parafernalia burocrática muestra el poder de un Cabildo local y su Real Audiencia más próxima, en este caso la de Charcas, para resistir las presiones de un Virrey y su correspondiente Real Audiencia, cuando de intereses económicos se trataba.

Así como los azogueros contaban con el fuero de minería, los que pertenecían a la Real Renta de Tabaco y Naipes también gozaban de fueros. En el caso concreto de la Administración dirigida en Córdoba por el Coronel Manuel Castro, pertenecer a la misma significaba gozar de toda suerte de privilegios, pues a más de estar sus tercenistas y estanquilleros exceptuados de hecho de tener que poner fiador, tampoco estaban, al menos en La Rioja, sujetos a la justicia ordinaria emanada de los funcionarios capitulares locales. Por lo general, las pulperías estaban ubicadas próximas a los estancos, no sólo por la necesidad de adquirir naipes sino también por la necesidad de hallar amparo o fuero contra la intervención de la justicia local. Este era el motivo por el cual los Juzgados no podían imponer justicia "...porque los que allí existen de a pié y de a caballo, se pasan luego [de cometer un crimen] al estanco, haciendo alarde de hallarse en sagrado, y dejar así burlada a la justicia".⁵⁰

Asimismo, en las ferias los proveedores del mercado interno, conocidos como cancheros,⁵¹ gozaban del llamado fuero de plaza. En Potosí, el llamado fuero de Plaza, "...es como una Aduana donde se conducen, guardan, y recogen todos los efectos comestibles que traen de fuera los mismos

labradores o las primeras manos compradoras al tiempo de las cosechas".⁵² Son los miembros del Cabildo potosino quienes nos describen en 1786, el rol cumplido por los cancheros. Estos eran dueños o arrendatarios de "...cuarenta casas grandes a manera de almacenes que llaman canchas repartidas por todo el distrito de la Villa".⁵³ Los indios eran los que, a juzgar de Andrés Lamas en su ignorado Diccionario Geográfico, surtían los abastos, pero como se hospedaban en las canchas (unas casas que distaban a cuatro cuadras de la plaza de Potosí),

"...les compraban los cancheros sus efectos por poco menos que nada, siendo lo más gravoso a los infelices indios, que salen los enviados de las canchas [arquiris] por los cantos, y allí les quitan los abastos [a los indios que vienen] al precio que quieren: abuso que no a podido extinguir el gobierno que se haya dedicado a este objeto".⁵⁴

Según el documento capitular antes mencionado, que lo encabeza entre sus firmantes el Dr. Pedro Vicente Cañete (más que seguro su autor),⁵⁵ el Gremio de los Cancheros estancaban en actitud monopolista el abasto de los productos que presumían habrían de encarecer, y con relación al resto de los productos "...abrían feria a las indias regatonas ganando a su vez con ellas un 25 o más por ciento". Bien instruidos de la escasez o abundancia de la población, los cancheros

"...contentan breve al pobre indio a costa de poca plata con muchas buenas razones, iguales promesas y fiados en que de contado van ganando la mitad de aquella remesa con la seguridad de que cevado el genio ambicioso del indio con esta aparente liberalidad lo buscaría indefectiblemente con todos sus frutos para mantener esta protección que en realidad es una grangería injusta, usuraria y criminal".⁵⁶

La evasión de los servicios de república: milicia y judicatura.

Otra de las estrategias bastante difundidas en las campañas consistía en instrumentar los cargos capitulares y judiciales para evadir las responsabilidades militares. En Córdoba, el Comandante Félix Mestre,⁵⁷ le comunicaba en 1782 al Virrey Juan José Vértiz y Salcedo que desde que se encargó de las Milicias de Córdoba "...noté los diferentes medios de que se valen en la campaña para escusarse del servicio".⁵⁸ No había, según Mestre "...hacendado que tenga alguna conveniencia, que no piense u anele algún título [juez pedáneo] para ebitar esta incomodidad [servicio de Milicia]".⁵⁹ Por ese motivo, la carga militar venía a recaer casi siempre "...en los más infelices, faltos de auxilios, y por lo mismo sin honor, y sin sentimiento que pueda inspirarle su desempeño".⁶⁰ Entre los títulos de que suelen valerse, Mestre hallaba que el de los Jueces Pedáneos resultaba ser "...uno de los más especiosos, que en tan basta jurisdicción son necesarios para perseguir los ladrones, homicidas, y vagamundos, que lo infestan".⁶¹ El nombramiento de los Jueces Pedáneos le dictaba a Mestre "...ser un origen fecundo de competencias, y de mutuas quejas, entre dichos jueces y los Oficiales Milicianos".⁶² Los Milicianos denunciaban "...la pensión en que constituyen indevidamente a las Milicias", y los Jueces denunciaban

"...que no se les dan por los Capitanes los auxilios que necesitan, de cuios antecedentes resultan los inconvenientes de estar mal servida la justicia, y la disminución o excepción de muchos individuos útiles para el servicio".⁶³

Entre los auxilios que se solían solicitar a los Comandantes de Milicias estaban los requerimientos de mano de obra forzosa, o Mita agraria, para la siembra y cosecha de granos, y para el poblamiento de las fronteras con el indígena y los portugueses.⁶⁴ Para obviar esta situación de mutua indiferencia, Mestre

sugería se adoptase en Córdoba la misma providencia que se había adoptado en Buenos Aires, que consistía en "...autorizar a los Sargentos Mayores y Capitanes de las Compañías para Jueces Pedáneos de sus respectivos Partidos, con facultad de conocer en demandas verbales hasta de \$25".⁶⁵ Quince años más tarde, en 1796, la protesta se invirtió, pues Juan Bautista de Isasi,⁶⁶ quien había sido Alcalde Ordinario de primer voto en 1783, declaraba que el fuero exclusivo de los Milicianos "...no podría menos que turbar y desconcertar la armonía entre los juzgados por las frecuentes dudas y competencias que suelen suscitarse".⁶⁷ Los numerosos mulatos y zambos en quienes recaían los empleos militares, aspiraban a ellos "...con el objeto de sustraerse de las Justicias ordinarias e insolentarse".⁶⁸ Dichos fueros operaban como privilegios puramente personales, y no como privilegios profesionales o reales, tal como se pretendió aparentar en el siglo XIX. Como era muy reducido y corto el número de vecinos de Córdoba, y muy numerosa la cantidad de cargos de capitanes, tenientes, alféreces, sargentos, cabos y otros empleos de la milicia a cubrir, Isasi concluía que "...todos vienen a quedar excluidos de la jurisdicción ordinaria, "...por lo menos las dos tercias partes de su vecindario".⁶⁹ También en la Banda Oriental se dieron repetidos conflictos entre los Alcaldes y los Milicianos. En Santo Domingo Soriano, en 1800, el Alcalde de segundo voto Manuel Zavala interpuso queja contra el Capitán de Milicias José Antonio Pérez Tejada, el Alférez Juan Ramos y el Teniente Antonio Velazco, por haberles desconocido jurisdicción para hacerles comparecer a juicio.⁷⁰

Finalmente, los miembros de las élites patricias recurrían a otras instituciones para evadir las responsabilidades de los llamados servicios de república: milicia y judicatura. Entre dichas instituciones resaltaba el rol cumplido por el Correo. En La Rioja, por ejemplo, Francisco Dávila y Doria, que era uno de los vecinos más distinguidos, y por tanto uno de los pocos libres de excepciones para libertarse de los cargos concejiles y del servicio militar, había entrado al ejercicio de postillón, merced a que los Maestros de Posta tenían la facultad de elegir al que les pareciera más a propósito para el cargo, sin otro gravámen "...que el de dar dos caballos en el discurso del año, tocándoles cada dos meses la carrera de 50 leguas que dista desta ciudad a la de Catamarca".⁷¹

La incidencia del fuero consular.

Respecto a la incidencia que el fuero consular pudo haber tenido en la estratificación y movilidad social vigente en el Río de la Plata, es sabido que el Tribunal y las Diputaciones del Real Consulado fueron por lo general --al igual que el Gremio de Azogueros de Potosí y el Gremio de Hacendados de Buenos Aires-- instituciones tanto o más restrictivas que los Cabildos.⁷² Entre las prácticas restrictivas más constantes figuraban la endogamia y la prohibición de recaer las consignaciones en personas no matriculadas en el comercio, incluídos los mancebos, dependientes o mozos de tienda. Ello obedecía, entre otros motivos, a la necesidad de dificultar el contrabando, para lo cual la corona buscaba, según Lucena Salmoral (1982), evitar la confusión entre mayoristas (comerciantes) y minoristas (mercaderes y bodegueros), entre tenderos de mercadería importada y vendedores de frutos de la tierra, y entre pulperos y artesanos.

En cuanto al fuero consular o mercantil, este hallaba sus mayores obstáculos donde más generalizado se hallaban los fueros militar y eclesiástico. Las contradicciones entre el ejercicio de los fueros militar y eclesiástico y los derechos del Consulado de Comercio provocaron conflictos casi interminables. En Potosí, el Juez Diputado de comercio del Consulado Manuel Fernández de Alonso,⁷³ solicitó amparo en 1797 a la Audiencia de Charcas en el incidente que tuvo --por cuestiones de jurisdicción y competencia mercantil-- con las autoridades concejiles.⁷⁴ En Oruro, a raíz de que el Diputado del Consulado Fermín José de Ocampo demandara por quiebra al Capitán de Milicias José Cazaos, el Virrey Antonio Olaguer y Feliú resolvió por providencia en 1797 que no gozaban de fuero

militar los comerciantes quebrados que pertenecieran a la milicia cívica.⁷⁵ En Buenos Aires, en ocasión del ocultamiento de una Real Orden del 22 de Agosto de 1794, por la cual se tenían por exentos de ser alistados en los Batallones y Cuerpos de Milicias los comerciantes de Registro, los Mercaderes de Lonja o tienda, y los Dependientes o mancebos, el Comandante de Milicias Miguel de Azcuénaga,⁷⁶ cuñado del Virrey Olaguer y Feliú, "...soltó las riendas a su genio orgulloso y dominante; y corrió el velo a la saña de su corazón contra el Español Europeo".⁷⁷ De esa forma, según lo expresa en su memorial de agravios Manuel Crespo, "...se vieron y experimentaron sonrojos, multas y prisiones de orden de este Comandante executadas en diferentes Europeos necesitados todos a sufrir y callar en aquel Gobierno".⁷⁸ El conflicto subsistió hasta 1799, año en que el Virrey Avilés se expidió eximiendo del servicio a los comerciantes.⁷⁹ Y en Asunción del Paraguay, una ciudad donde los comerciantes con tienda abierta, giro de yerba, y propietarios de barcos para la carrera de navegación del río Paraná, eran también oficiales de Milicias que usufructuaban del fuero militar, el Teniente Coronel del Regimiento de Milicias de Infantería Gregorio Tadeo de la Cerda,⁸⁰ planteaba con respecto a la integración de la diputación del Consulado de Comercio, que la prerrogativa del fuero militar

"...les ha hecho creer [a los Milicianos] que en fuerza de las esenciones que gozan de no estar sujetos a las justicias ordinarias, no pueden ser compelidos a aceptar el nombramiento de colegas, cuando esta Diputación los elija, ni a prestar declaraciones o certificados sin que preceda allanamiento de sus personas".⁸¹

Cerda consideraba que si bien todo comerciante "...por alguna parte o respecto esté rebestido de otro fuero, siempre se considera sujeto y subordinado a la jurisdicción de los Reales Consulados en negocios mercantiles".⁸² Si para entenderse con tales personas, fuera necesario el allanamiento del fuero en cada ocurrencia, Cerda manifestaba que la jurisdicción

"...sería mendiga, débil, y en cierto modo ninguna la que S.M. por el bien del comercio, y brevedad de las causas ha concedido a estos juzgados privativos y privilegiados que se embarcarían a cada paso en esos trámites y detenciones tan opuestas a su constitución".⁸³

Según este pensamiento, el Miliciano que goza de fuero debería "...pedir licencia para comparecer en la Diputación aún en la calidad de actor en las causas de comercio, sin ser bastante la comparecencia voluntaria, puesto que ninguno puede renunciar el fuero que es de derecho público".⁸⁴ Los Militares que se ingieren y mezclan en negocios y comercios, debían, según Cerda, al igual que los Eclesiásticos, perder el fuero y sujetarse

"...a la jurisdicción que debe conocer de tales causas privativamente con exclusión de las otras, como sucede con los juzgados privilegiados de Bienes de Difuntos y otros, de que no puede declinar persona alguna por privilegiada que sea en las causas que le están peculiarmente cometidas, siendo consiguiente que para su expedición queden allanadas las personas o Bienes que abraza el Ramo en lo extensivo de su jurisdicción".⁸⁵

Es decir, el Miliciano patentado debería participar

"...de dos fueros privilegiados, uno que lo excluya de las justicias ordinarias en todas sus causas criminales y civiles, y otro que le proporcione la más pronta administración de justicia en las que sean de comercio, sin que un fuero perjudique ni derogue al otro, siendo compatible que el Miliciano patentado esté sujeto a la jurisdicción militar en todas las causas y negocios de su concernencia, y que también lo esté a la del Consulado en las que son propias y privativas de su

inspección".⁸⁶

Si ambos fueros no pueden combinarse, Cerda reflexionaba que en la jurisdicción de los Consulados de las ciudades donde la mayor parte de los comerciantes eran milicianos, como Asunción del Paraguay, se llamarían los más "...al goce del fuero militar, precisando a la Diputación a solicitar el allanamiento de sus personas con retardación de la brevedad en la administración de justicia".⁸⁷ Por ello Cerda concluía, que el Miliciano o persona que goza de fuero "...lo pierde desde el momento que acepta empleo o comisión pública, sugetándose por el mismo hecho a la Jurisdicción que se le confirió".⁸⁸ Sin embargo, pareciera ser que los argumentos de Cerda no prevalecieron, pues en 1796 el Consulado declinó su jurisdicción en el conocimiento de la causa que siguió Luis Casilao contra Antonio Rodríguez;⁸⁹ y en 1808, se privó al Diputado del Consulado de Comercio en la Villa de Concepción Francisco de Quevedo entender en los tratos y contratos que hacían los peones yerbateros con los beneficiadores por ser ellos atribución del Comandante y Juez Político.⁹⁰

La exención del pago de la Alcabala.

También el ejercicio de privilegios eclesiásticos, como la exención del pago de la Alcabala, se había constituido en un abuso y una práctica desleal, que si bien atentaba contra los fueros del comercio era, antes de las Reformas Borbónicas, consentida por las autoridades.⁹¹ El Cabildo de Córdoba se quejaba en 1768 al Virrey del Perú del privilegio fiscal con que contaban los eclesiásticos cuyanos.⁹² Dicho clero se obstinaba en no pagar los derechos de Alcabala so pretexto de que las cargas de vino y aguardiente eran producidas de sus patrimonios y como tales exentas de todo gravámen.⁹³ Era este un pretexto pues todos sabían que actuaban como apoderados de viñateros y bodegueros profanos. Uno de los primeros evasores que tuvo el alcabalero Agustín Garfías,⁹⁴ fué el Dr. Matías Frías, Cura y Vicario de Mendoza, el cual hizo fuga por no pagar los derechos de unas cargas de aguardiente que pasó por alto en compañía de Don Fernando Torres. El procedimiento seguido por Garfías para detener a Frías fué recurrir al Alcalde de segundo voto para obtener una orden mediante la cual enviar alguien en su seguimiento y consiguiente detención. Habiendo recaído esta orden en Don Joseph Martínes, este le dió alcance en el pago de Areco y en virtud de la orden le embargó las cargas de aguardiente depositándolas en un vecino de Areco, y lo trajo a Buenos Aires con orden de no salir de ella "hasta tanto me pague todo el cargo que le hago de los derechos reales que a querido ocultar". Según Garfías, la acusación se justificaba "pues se conoce por su fuga estar cómplice en su delito".⁹⁵ Esta situación de litigio con el clero cuyano para el cobro de los derechos de sisa y alcabala sobre las cargas de vino y aguardiente fueron permanentes, al extremo de continuarlas sus albaceas hasta después de muerto.⁹⁶ En efecto, los apoderados de la testamentaría de Garfías iniciaron acciones contra el Pbro. Maestro Bernardino Mayorga, el Dr. Francisco Correa de Sáa, cura y vicario de Mendoza, y el Pbro. Dr. Joseph Morales. Este fenómeno también se manifestaba en el litoral. El Cura Rector de la Catedral de Corrientes, Dr. Marcos Rodríguez de Figueroa, cuando fué al Paraguay en 1716, confesaba haberse visto precisado a reducirlo todo a yerba

"...por tener ésta más cuenta en ésta [Corrientes], y perderse en aquella [especie (lienzo de algodón)] la mitad del valor pues vale un peso cada vara de lienzo, y en ésta [Corrientes] apenas se reduce a cuatro reales".⁹⁷

Quince años después, en 1736, en nombre del Real Derecho de Alcabala, Gaspar de Bustamante, le inició una demanda al Maestro Ignacio Ruiloba,⁹⁸ cura y vicario de Corrientes, por los derechos de 400 tercios de yerba que remitió a Buenos Aires procedentes del Paraguay.⁹⁹ Dicha voluminosa remisión de yerba, según diversos testimonios incluídos en el proceso, "...no correspondían a las Rentas de su

Curato", por excederlas notoriamente. Aún cuando lo fuesen, Bustamante alegaba

"...no por eso estaba [Ruiloba] en modo alguno exonerado de la satisfacción de este y los demás derechos que deben los efectos que tiene remitidos respecto de haber hecho 1a, 2a, y 3a negociación, y los clérigos no tienen más que la 1a venta exenta, pero en las demás deben pagar los derechos reales como legos".¹⁰⁰

El origen de estas múltiples negociaciones del cura Ruiloba provenían de los ingresos que le había rendido anteriormente el Curato de Luján, y del producto de unas casas que trocara por géneros con Gerónimo de Escobar. Trasladado Ruiloba a Corrientes por despacho del Gobernador Bruno Mauricio de Zavala en 1723 y transformados sus ingresos en géneros "...para reducirlos a otra especie que le diese más dineros que el empleado", Bustamante concluye que el cura Ruiloba "redujo sus dineros a géneros, sus géneros a ganados, los ganados y retacerías de géneros a yerba, y la yerba vuelve a reducirla a dineros", sin haber contribuido un real a la Real Hacienda.¹⁰¹ Por si esto fuera poco, el Teniente Gobernador de Corrientes Capitán Pedro Gribeo, quién le había dado licencia a Ruiloba para el pase desde el Paraguay de una tropa de 18 carretas cargadas de yerba, tabaco, y azúcar, declara que oyó decir a Don José Mier de los Ríos que el origen de dichas carretas y hacienda no provenía de los ingresos del curato de Luján sino de los 6 o 7 mil pesos que "...le había dado su hermano [de Ruiloba] en Potosí".¹⁰² Esta información de Mier de los Ríos muy bien pudo ser cierta si tenemos en cuenta que para esa época, Francisco Ruiloba, regidor de Tarija, y hermano de Ignacio contrae en Buenos Aires tres operaciones de fiado, una en 1728 con Juan Francisco Bazurco por \$4.877, otra en 1734 con Francisco Huidobro por \$5775, y otra en 1739 con Antonio Larrazábal por \$2500.¹⁰³ Posteriormente, con las Reformas Borbónicas (Real Ordenanza de Intendentes), se prohibió a los clérigos el ejercicio del comercio. Pese a ello, la práctica no se abandonó, pues Tjarks (1962) relata la conducta del Pbro. Pedro Ignacio Arze, el mismo que le arrebató sus aguas al Pueblo de Indios de Choya, en Catamarca,¹⁰⁴ quien en 1808 cargaba gran cantidad de frutos de la tierra en la tropa que Luis Orellana remitía a Buenos Aires.¹⁰⁵

Finalmente, podemos concluir que sólo en las regiones centrales pudo el fuero consular desplazar la antigua hegemonía de los fueros militar, capitular y eclesiástico. En las regiones periféricas, donde los fueros militar, capitular y eclesiástico estaban dotados de una legitimidad centenaria, la legislación metropolitana pudo hacer prevalecer los fueros consulares en forma esporádica y con grandes esfuerzos de tipo coactivo.

NOTAS

¹ El Redactor de la Asamblea (Buenos Aires: Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1913), n.18, pp.69-70, citado en Cabral Texo, 1952, 100.

² Registro Oficial de la República Argentina, t.I, 1810-1821, p.206. Los Alguaciles y Familiares del Santo Oficio de la Inquisición eran los que debían expedirse sobre la limpieza de sangre de quienes aspiraban a determinados cargos.

³ Ibáñez Frocham, 1938, 149-150.

⁴ Registro Oficial de la República Argentina, t.I, 1810-1821, pp.219.

⁵ Registro Oficial de la República Argentina, t.I, 1810-1821, pp.206, 216 y 219. Ver Sáenz Valiente, 1910, 10; Cabral Texo, 1952, 100; Díaz, 1952, 19, nota 4; y Mouchet, 1960, 29.

⁶ Registro Oficial de la República Argentina, II, 1822-1852, p.41, citado por Rivarola, 1934, 241; y Cabral Texo, 1952, 104-107. Ver también Heras, 1923, 1925; Ibáñez Frocham, 1938, 165-171; Díaz, 1952, 18-33; y Halperín Donghi, 1979, 359-360.

⁷ Linares Quintana, 1956, III, 475ss.

⁸ Giddens, 1977, 274.

⁹ Levaggi, 1971, 45.

¹⁰ Ibáñez Frocham, 1938, 4.

¹¹ Heras, 1923, 1925; Ibáñez Frocham, 1938, 165-171; Díaz, 1952, 18-33; y Halperín Donghi, 1979, 359-360.

¹² proveer de curatos y beneficios, declarar sedes vacantes, laudar en litigios eclesiásticos, concursar canongías, y supervisar y controlar la educación superior.

¹³ recurso ordinario interpuesto por un agraviado ante un juez secular contra un juez de la jurisdicción eclesiástica para que disponga que este último alce la fuerza o violencia que hace al agraviado o en su defecto provea su propia declinatoria.

¹⁴ Vicente y Caravantes, I, 295. En la Francia y la España del Antiguo Régimen esta institución era denominada avocación (De Tocqueville, 1982, 94; Enciclopedia Universal Ilustrada, t.XIV, pp.791ss.; y Enciclopedia Jurídica Omeba [Buenos Aires], I, 1030).

¹⁵ Petición en que el demandado declina la jurisdicción del juez que le ha citado, por creerle incompetente, pidiéndole que se inhiba y abstenga del conocimiento de la causa, o porque no es juez competente para él, o porque no puede conocer de aquel negocio, o porque este se halla pendiente en otro juzgado (Escriche, 1863, 668; y Vicente y Caravantes, II, 79).

¹⁶ Lynch, 1958, 212; y Saguier, 1991a.

¹⁷ Saguier, 1991b.

¹⁸ fué introducida por vez primera en el Concilio de Letrán de 1213 (Silva, 1968, 1030).

¹⁹ Silva, 1968, 1030.

²⁰ Acevedo, 1969, 16, 32, 64 y 97.

²¹ Que operaba al igual que una inhibitoria pues sustraía al reo de la jurisdicción ordinaria. El Subdelegado de Real Hacienda y Comandante General de Armas de La Rioja Vicente Antonio Bustos, cuñado del Receptor de Alcabalas José Pascual de San Román y Castro, ligado a los intereses mineros de Chilecito, se había tomado la facultad en 1799 de revestir a Don Nicolás Bazán, con el título de

Capitán de Milicias "...para que a la sombra de este aparente fuero [militar] tuviese un motivo para negarse a la obediencia y reconocimiento de la jurisdicción de [Francisco Antonio Ortiz de] Ocampo" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.104, Exp.18. Ver también AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 2). Para el fuero militar, ver Cabral Texo, 1952, 91-126; Díaz, 1952, 18-33; Tanzi, 1969, 236-243; Levaggi, 1971, 44-91; y Domínguez, 1985, 88.

²² AGN, Tribunales, Sucesión 3909, Testamentaría de Domingo de Acasuso, fs.21. Por auto proveído en 14-V-1670 se mandó que todos los Ministros de Cruzada de las cabezas de partidos, "...sólo los propietarios, con oficios comprados, hubiesen de gozar de los fueros, privilegios y excepciones que por sus títulos les fuesen concedidos, sino en las causas tocantes al ejercicio y Ministerio de la Santa Bula; pero no en lo que morase como a personas particulares en las deudas que tuviesen, y delitos que cometiesen" (Idem).

²³ Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, 7-III-1769, (AGN, Tribunales, Sucesión 8125, Incidente sin Cuerpo Principal de la Sucesión de Rafael de los Reyes y Serrano, fs.52). Arce terminó siendo Contador Interino de la Real Caja de Moneda de Potosí.

²⁴ AGN, División Colonia, Criminales, Leg.13, Exp.6, fs.11.

²⁵ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.212, Exp.6, fs.59.

²⁶ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.212, Exp.6, fs.85.

²⁷ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.121, Exp.15.

²⁸ Mientras los recursos de injusticia notoria y de segunda suplicación sólo procedían respecto de los fallos ejecutoriados en juicios cuya primera instancia se hubiese seguido ante un juez inferior, o cuando el tribunal superior había conocido en primer grado, el derecho de intercesión o poder de casación, consistía en un recurso de carácter extraordinario que tenía por objeto anular los fallos dictados por los tribunales y fijar a la vez la verdadera inteligencia de las leyes (Weber, 1922, 1944, II, 1003; y Enciclopedia Universal Ilustrada, t.12, p.21).

²⁹ Buenos Aires, Provincia, Honorable Junta de Representantes, Diario de Sesiones, t.23, n.587, 8 de marzo de 1838, 20-27; t.23, n.588, 9 de marzo de 1838, 5-9; y t.23, n.590, 19-36.

³⁰ Ibáñez Frocham, 1938, 229-238 y 243-245; Levene, 1954-58, VIII, 511-513; y Zorraquín Becú, 1971, 164-205.

³¹ Solo aquellos que tuvieren casa poblada de por sí en la villa de su jurisdicción, fueren vecinos, mayores de 20 años de edad, fuesen honrados "de buena opinión y fama", no hubieren ejercido ningún oficio mecánico "ni otros trabajos humildes y bajos", fuesen personas beneméritas "...de buenas partes y servicios, idóneas, temerosas, y celosas del servicio de Dios nuestro Señor, limpias, rectas, y de buenas costumbres", es decir, carecieran de tacha racial alguna, y fuesen hijos de legítimo matrimonio, reducía enormemente el universo dentro del cual podía elegirse a un capitular, operando como una suerte de ley de embudo (Leyes 6, 10, y 12, Tít.10, Lib.4; Ley 8, Tít.3, Lib.5; y Ley 13, Tít.2, Lib.3 de la Recopilación de Indias; y Ley 3, Tít.9, Lib.3 y Ley 1 y 7, Tít.10, Lib.4 de la Recopilación de Castilla. Según Pedro Vicente Cañete "...el extranjero no puede ser Alcalde ni Regidor por la Ley 66, Cap.5,

Tít.4, Lib.2, y Ley 2, Tít.3, Lib.7 de Castilla; no puede serlo tampoco el hombre desentendido, o de mal ceso, ni el mudo, ni el sordo, ni el ciego, ni el enfermo havitual, ni el que fuere de mala fama, ni el herege, ni la mujer, ni el siervo según la Ley 7 y 8, Tít.9, Lib. 3 de Castilla copiadas literalmente de la Ley 4, Tít.4, part.3, y Ley 7, Tít.6, part.7, incluso el clérigo de orden sacro, y los Alcaydes de Fortalezas que están igualmente prohibidos por la Ley 10, Tít.3, Lib.1, y por la Ley 15, Tít.5, Lib.3 de Castilla" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Para la noción de vecindad ver Lezcano de Podetti (1968). En cuanto a que solo los varones podían ser cabildantes, Barbier (1981) enfatiza el rol de las estructuras informales del poder, entre las cuales debe destacarse el rol de algunas mujeres, como fué el caso en Córdoba de María de Allende y Losa, esposa del Alcalde Gregorio de Arrascaeta; y de Clara de Echenique y Urtubey, mujer del Alcalde Provincial José Martínez de Candia; y en Mendoza, de María Josefa Corvalán, la mujer del Fiscal de la Real Audiencia de Santiago de Chile, Dr. José Perfecto de Salas. Entre otro de los requisitos se hallaba el de haber cumplido con el "hueco" (Institución que prescribía en los Cabildos un intervalo de dos o tres años entre cargo y cargo [Hevia Bolaños, 1853, 14; y Bayle, 1952, 113-115]).

³² Pike, 1958, 144.

³³ Ibáñez Frocham, 1938, 7.

³⁴ Buechler, 1989, 19 y 340.

³⁵ AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 44, Exp. 14; y Hacienda, Leg. 12, Exp. 235.

³⁶ Hijo del General Alonso de Arce y Arcos, nacido en Guaraz, Perú, y de María Báez de Alpoyn y Labayén; marido de María Juana de Arráez, hija de Martín de Arráez y de Tomasa de Larrazábal; concuñado del poderoso comerciante Juan de Vargas Macías, del Oficial de las Reales Cajas Blas Gascón Cervellón de Arze y de Manuel Antonio Warnes (FB, I, 137, 162 y 222; y III, 163).

³⁷ Casado con María Josefa de Ortega y Lunel, hija de Cristóbal de Ortega y de María Lunel y Samorano. Su viuda nombra por su heredero al R.P. Rafael de Arregui y Ortega, Cura Rector de la Parroquia de San Benito, en Potosí (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.97, Exp.2).

³⁸ Hijo de Bernardo Alvarez Campana y de Josefa Manuela de la Vega, nacidos en Cádiz, marido de Isabel Gil, hija de Nicolás Gil, gallego, muerto por los indios en la travesía de Chile, y de Bartola Rodríguez Osorio; y concuñado de Pascual Mariano Basallo (FB, I, 98; y III, 171; y JR, 1989, item 5161).

³⁹ Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, 7-III-1769, (AGN, Tribunales, Sucesión 8125, Incidente sin Cuerpo Principal de la Sucesión de Rafael de los Reyes y Serrano, fs.52). Arce terminó siendo Contador Interino de la Real Caja de Moneda de Potosí.

⁴⁰ Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, 7-III-1769, (AGN, Tribunales, Sucesión 8125, Incidente sin Cuerpo Principal de la Sucesión de Rafael de los Reyes y Serrano, fs.52). Arce terminó siendo Contador Interino de la Real Caja de Moneda de Potosí.

⁴¹ Idem.

⁴² AGN, Tribunal de Cuentas de Lima, Nombramientos de Oficiales Reales, Libro 3, fs.61-63).

⁴³ Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, Potosí, 7-III-1769 (AGN, Sucesiones, Leg. 8125, fs. 53)

⁴⁴ Idem.

⁴⁵ Sucesor del Visitador General Ventura de Santelices y Venero, y antecesor del Visitador Jorge Escobedo.

⁴⁶ Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, Potosí, 7-III-1769 (AGN, Sucesiones, Leg. 8125, fs. 53)

⁴⁷ el mismo que propusiera la creación del nuevo Virreinato con capital en Buenos Aires (Acevedo, 1992, 544).

⁴⁸ Phelan, 1972, 604.

⁴⁹ Rafael de los Reyes y Serrano a José Antonio de Alzaga, Potosí, 7-III-1769 (AGN, Sucesiones, Leg. 8125, fs. 53)

⁵⁰ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 15.

⁵¹ número restringido de comerciantes locales que operaban en las canchas. Sobre estas últimas, ver Acevedo, 1992, 376.

⁵² AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 34, Exp. 867

⁵³ Andrés Lamas, Diccionario Geográfico del Río de la Plata, (AGN, Sala VII, Archivo de Andrés Lamas, Leg. 26, fs. 369v.

⁵⁴ Andrés Lamas, Diccionario Geográfico del Río de la Plata, (AGN, Sala VII, Archivo de Andrés Lamas, Leg. 26, fs. 369v.

⁵⁵ Don Pedro Vicente Cañete y Domínguez, autor de la Guía de Potosí; era hijo de José Cañete, Regidor en 1769 y luego Regidor Perpetuo, dueño de haciendas en el Valle de Barsequillo, Paraguay; y de Juana Catalina Domínguez; y marido de Manuela Pérez, hija del arrendatario del ingenio de moler metales de Potosí Fermín Prudencio Pérez y de María Josefa Quizado de Ortega, y sobrina política del rico azoguero Juan de Peñarubia (Buechler, 1989, II, 322 y 343). Fermín Prudencio Pérez era hijo natural de Pedro Prudencio Pérez, uno de los Mercaderes de Plata del Potosí (Tandeter, 1992, 155).

⁵⁶ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 34, Exp. 867

⁵⁷ Nació en Albuquerque, reino de Extremadura; hijo del Capitán José Mestre; y hermano menor del Gobernador de Tucumán Andrés Mestre (Acevedo, 1955, 10). Marido de Mercedes Allende Ascasubi, hija de Jose de Allende Losa Bravo y de Isidora Ascasubi y de las Casas.

⁵⁸ Félix Mestre al Virrey Vértiz, Córdoba, 1-V-1782 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3, Sala IX, 5-9-5).

⁵⁹ *Ibídem.*

⁶⁰ *Ibídem.*

⁶¹ *Ibídem.*

⁶² *Ibídem.*

⁶³ *Ibídem.*

⁶⁴ AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.11, Exp.22. La fundación de los pueblos de Belén y de San Gabriel de Batoví, en territorio de la Banda Oriental poblado por indios Charrúas y Minuanes, la de la Villa de Concepción y el Fuerte Borbón en territorio Paraguayo poblado por indios Mbayás, y la de Ranchos y Chascomús en territorio bonaerense expuesto a los malones de los indios Pampas, no se puede explicar sin la violencia que los Comandantes de Frontera ejercían sobre los vecinos de poblaciones menos expuestas, como fué el caso de Paysandú en la Banda Oriental, Asunción en el Paraguay, y el Zanjón en el pago de la Magdalena, respectivamente (Marilúz Urquijo, 1987, capítulos XI y XII; Ferrer de Arréllaga, 1985, 23-25; Sánchez Zinny, 1939, 108; Cabodi, 1950, 107; Viola, 1985, 75-83; y Barrios Pintos, 1989, VI, 119-134). Dicha violencia dió lugar a numerosos litigios y pasquines con poesías de protesta entre los cuales descuella el que ocurriera entre el Capitán de Milicias Benito Chain y el Capitán de Blandengues Jorge Pacheco (AGN, Comerciales, Leg.20, Exp.17, fs.60-81). Paradójicamente, pese a dicho conflicto ambos oficiales resultaron posteriormente consuegros. En su producción poética, el Alcalde de Asunción José Marcos Vallejos, hacía eje en la explotación que significaba al vecindario de Asunción la fundación de nuevas ciudades, con su secuela de exacciones de todo tipo, practicadas por el Gobernador Agustín Fernando de Pinedo tanto al pretender fundar la Villa Real de Concepción en el area de Coimbra y Albuquerque, en 1773, como al originar la Reducción de Remolinos, en 1776 (Ferrer de Arréllaga, 1985, 23-25; y Frakes, 1989, 497).

⁶⁵ Félix Mestre al Virrey Vértiz, Córdoba, 1-V-1782 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3, Sala IX, 5-9-5).

⁶⁶ Casó con Doña María Luisa de Echenique y Villafañe, hija de José Gregorio de Echenique y Cabrera, y de Margarita Villafañe, cuñada de Nicolás de Azcoeta, y madre de María Ignacia de Isasi, mujer primero de Estéban Montenegro, Sargento Mayor de la Nobleza y Maestre de Campo, y más luego de Miguel de Learte y Ladrón de Zegama, autor de unas divertidas memorias (CC, 1938, III, 233).

⁶⁷ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.96, Exp.32.

⁶⁸ *Ibídem.*

⁶⁹ AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.96, Exp.2557.

⁷⁰ AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.98, Exp.2557.

⁷¹ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.1.

⁷² Sobre el fuero minero, ver Buechler, 1989, 19, nota 77.

⁷³ Regidor de la Villa de Potosí. En 1795 pide permiso para pasar a Potosí (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 6, f.197). En 1800 es procesado por injurias y calumnias (AGN, Criminales, Leg.46, Exp.9). En 1802 le prohíben votar en las elecciones concejiles (AGN, Interior, Leg.52, Exp.18). Ver en Morales (s/f) según Quesada (1988). Giró entre 1785 y 1802 mercadería fiada en 17 operaciones por valor de \$198.211 de manos de Francisco Xavier de Riglos, Tomás de Valanzátegui, Roque Sánchez, Juan Antonio de Lezica, Isidro José Balbastro, José Martínez de Hoz, P. Cor., J. Elg., J. Ar., Diego Agüero, Vicente Antonio Murrieta, José Ramón de Ugarteche, LJIB, Joaquín de Aguirre Zavalaga y Anselmo Sáenz Valiente (AGN, Protocolos, Reg.2, 1785, fs.575v.; R.1, 1786, fs.7v.; R.2, 1786, fs.8v.; R.6, 1786, fs.5 y 16; R.4, 1792, fs.58v.; R.1, 1795, fs.416 y 433; R.6, 1795, fs.241v., 249v., 281v., y 297v.; R.2, 1802, fs.597v.; R.3, 1802, fs.393, 343v., y 466; y R.6, 1802, fs.495).

⁷⁴ Actas del Consulado, III, 233-238; y IV, 35-38.

⁷⁵ Consulado de Buenos Aires, II, 1796-97, 650.

⁷⁶ Hijo de Vicente Azcuénaga y de Rosa de Basavilbaso; marido de su prima hermana Justa Rufina Basavilbaso Garfias; y cuñado de Agustín Antonio de Erézcano, de Francisco Ignacio de Ugarte, de Gaspar de Santa Coloma, y del Virrey del Río de la Plata Antonio de Olaguer y Feliú (FB, 1986, I, 201; y JR, 1989, ítem 6161).

⁷⁷ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.55, Exp.9, fs.109.

⁷⁸ *Ibidem*. Ver también Tjarks, 1962, 198; y Socolow, 1978, 116.

⁷⁹ Tjarks, 1962, I, 198-199.

⁸⁰ Según Vásquez (1962) y White (1984), Cerda era un administrador oportunista y sin principios (Vásquez, 1962, 236, citado por White, 1984, 50). En oportunidad de formarse la primer Junta de Gobierno, en 1811, White (1984) sostiene que de la Cerda, conjuntamente con Fernando de la Mora, eran vistos como porteñistas, y que preparaban un plan para establecer comunicaciones más estrechas con Buenos Aires (Wisner, 1957, 57, citado por White, 1984, 51). Finalmente, la Junta expulsó a Cerda del Paraguay bajo los cargos de intriga y subversión (White, 1984, 55).

⁸¹ AGN, División Colonia, Comerciales, Leg.20, Exp.9.

⁸² *Ibidem*.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ Ibídem.

⁸⁷ Ibídem.

⁸⁸ Ibídem.

⁸⁹ AGN, División Colonia, Interior, Leg.40, Exp.2.

⁹⁰ AGN, Sala IX, 4-6-11, citado por Garavaglia, 1983, 378.

⁹¹ Ganster, 1993, 169.

⁹² Punta, 1988, 13-14.

⁹³ Punta, 1988, 14 y 23.

⁹⁴ nacido en San Juan en setiembre de 1710, hijo de Domingo Garfias, nacido en Ayamonte, avecindado en San Juan, y de Catalina López de Quiroga, y casado con Antonia Giles, hija de Juan Giles y de María Rosa Rivadeneira (Espejo, 1967, 426).

⁹⁵ AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2.

⁹⁶ No sólo el clero cuyano, exento del pago de los derechos reales, defraudaba al fisco operando como testaferro de bodegueros y viñateros profanos, sino también, como ya hemos visto, el clero correntino vendía ganado en pié en el Paraguay a nombre de hacendados profanos.

⁹⁷ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs. 4.

⁹⁸ Ver Saguier, 1989, 276-277.

⁹⁹ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-8, Exp. 8, fs. 46v.

¹⁰⁰ Idem.

¹⁰¹ Idem.

¹⁰² Idem.

¹⁰³ AGN, Protocolos, Reg.3, 1728, fs.481v.; 1734, fs.672; 1739, fs.497.

¹⁰⁴ AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.93, Exp.5, fs.54-58, 79-81v., y 91-93v.

¹⁰⁵ Tjarks, 1962, I, 422.

TOMO VII

CAPITULO 9

Las contradicciones entre los fueros capitulares y el poder de Gobernadores, Virreyes y Oidores. La facultad de nombrar y representar (1739-1810)

Las tardías Reformas Borbónicas, en lo que habría constituido un antecedente inmediato de la revolución de independencia, lograron que como reacción a las políticas centralizadoras de Virreyes, Gobernadores, Corregidores (de españoles), Obispos y Oidores se intensificara inconscientemente la resistencia de las elites criollas locales, representadas por sus Cabildantes y Comandantes de Armas.¹ Dichas políticas centralizadoras recaían en la facultad de los Subdelegados de Real Hacienda y de los Gobernadores de:

- a) representar al soberano en actos de honor o etiqueta;
- b) confirmar elecciones concejiles;
- c) designar autoridades políticas subalternas;
- d) otorgar fuero militar, y subrogar o transferir los poderes administrativos y jurisdiccionales;
- e) conferir rango de capital de provincia así como el de Villa Real, o pueblo de indios;
- f) recaudar impuestos y practicar levass;
- g) administrar bienes de Temporalidades;
- y h) otorgar licencias para ausencias prolongadas, carga y salida de barcos, beneficio de yerbales, recogida de ganado cimarrón, y expendio de tabaco y naipes.

En este trabajo nos hemos limitado a indagar el rol jugado por los estamentos en la actividad política. En ese sentido nos preguntamos si los privilegios estamentales se hallaban o no relacionados con los obstáculos para la formación de una clase política dominante. El pasaje de estamento (patriciado) a clase política encontraba en el estado colonial límites difíciles de remontar, que comenzaron a superarse recién durante la crisis revolucionaria de comienzos del siglo pasado. En ese sentido hemos indagado el rol jugado por los fueros capitulares en los mecanismos de descentralización de la sociedad colonial y de circulación de las elites políticas, así como los roles cumplidos por el ejercicio de designar Villas Reales y capitales de provincia y Virreinato. También nos preguntamos si los conflictos por los fueros, la autonomía capitular y la independencia de la jurisdicción civil respecto de la militar y la eclesiástica se hallaban o no relacionados con los orígenes del federalismo y el republicanismo. Asimismo, nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas mineras y comerciales, por cuanto fué durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el rol de los fueros y el margen de autonomía de los patriciados y cabildos locales.

En otras palabras, nos proponemos analizar las constelaciones de poderes y privilegios en el espacio ampliado de todo el Virreinato. Por ejemplo, por estar subordinados a la Gobernación-Intendencia de Potosí fueron afectados en su poder, rango y privilegios los Cabildos de las Villas de Potosí y Tarija. Asimismo, por estar subordinados a la Gobernación-Intendencia de Charcas fué afectado en su rango y poder el Cabildo de la Villa de Oruro. Por estar sujetos a la Gobernación-Intendencia de Salta fueron afectados los Cabildos de Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. Por estar sometidos a la Gobernación-Intendencia de Córdoba fueron afectados en su rango y poder los Cabildos de La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y Río Cuarto. Y por estar subordinados a la Gobernación-Intendencia de Buenos Aires fueron afectados en su rango y poder los Cabildos de Corrientes, Santa Fé y Luján. Para ello hemos recogido una docena de textos de época, hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), en el Archivo Histórico de Mendoza (AHM), y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC). A los efectos de esta investigación nos hemos servido de la información genealógica que nos proveen diversos tratados,² así como los testamentos protocolizados en Buenos Aires.³

El otorgamiento de rangos o categorías a pueblos o ciudades.

El otorgamiento de rangos o categorías a pueblos o ciudades, las de capital de provincia o Virreinato y las de Villa Real, desestructuraban la constelación de honores, fueros y privilegios a los que podían tener acceso los pobladores de una ciudad.⁴ En el Alto Perú, en 1781, la Real Audiencia de Charcas vió tremendamente restringida su jurisdicción territorial con la fundación de la Real Audiencia de Buenos Aires.⁵ Más aún, el Cabildo de Charcas, pese a contar con una Real Audiencia en su jurisdicción, se lamentaba que la capital del Virreinato no se trasladara de Buenos Aires a Charcas.⁶ Como capital de una gobernación, una ciudad como Buenos Aires, pasó a ser en oportunidad de las Guerras Guaraníticas (1754-56), sede originaria de la llamada Primera Expedición Demarcadora de Límites; y en oportunidad de la Expulsión de los Jesuitas (1767), capital de las Gobernaciones del Paraguay y Córdoba del Tucumán. Más aún, como capital de Virreinato, Buenos Aires pasaba a ser asiento de toda una administración central, que incluía la Superintendencia de Real Hacienda, el Tribunal de Cuentas, el Patronato Real, las Temporalidades, la Real Audiencia, el Real Consulado de Comercio, la Aduana, la Administración de Correos, y la Real Renta de Tabaco y Naipes. Una de las consecuencias más inmediatas de la asignación de cabecera de Virreinato fué la ampliación de la oferta de cargos públicos, la redistribución del ingreso fiscal de una ciudad (Potosí) a otra (Buenos Aires), y la redistribución espacial o geográfica bajo su jurisdicción. La ciudad de Córdoba, aún antes de la división de la Gobernación de Córdoba del Tucumán, ocurrida en 1782, según la respetada opinión del Dr. Victorino Rodríguez,⁷ era considerada por los Cordobeses: capital de la Provincia, "...por residir en ella la Iglesia Católica y por otros establecimientos que tenía [Universidad, Colegio, Administración de Tabaco y Naipes]".⁸ Pero como los Gobernadores residían en Salta, "...por estar así mandado o porque los llamaba el cuidado del cuantioso Ramo de Sisa de mulas y su feria", ellos mismos nombraban en las ciudades sufragáneas Tenientes, para que en éstos recayere la autoridad del gobierno en su ausencia.⁹ Sin embargo, para los salteños, Salta era entonces "...desde su fundación residencia de los gobernadores, aún estando la Silla Episcopal primero en Santiago del Estero y después en Córdoba".¹⁰ Más aún, Salta había

"...sugetado por sí al feliz gremio de la Iglesia, y al suave Dominio de Vuestra Real Persona todos los indios que ocupaban este ameno Valle, y toda su lata circunferencia por Norte, Poniente y Sur".¹¹

Con el corto auxilio que le dió la Ciudad de Jujuy, su colonia o ciudad sufragánea o subalterna, Salta

"...ha extendido la frontera del Chaco más de 80 leguas por el NNE, donde se ha fundado la Nueva Ciudad de Orán,...ha dilatado su frontera por el NE más de 60 leguas estableciendo allí fuertes y Fortines, que hacen barrera a los indios infieles,...ha unido por el Este su frontera con la de Santiago del Estero, de manera que la una y la otra resguardan completamente al Tucumán, que ha contribuido muy poco a estas glorias".¹²

De ahí que el Cabildo de Salta,¹³ se hubiera quejado en 1807 de la traición de su Teniente Asesor Letrado José de Medeyros,¹⁴ quien pretendía erigir a San Miguel de Tucumán en capital de la Gobernación y sede de su Obispado. Para los capitulares salteños no era de admirar que Tucumán aspirara

"...al rango de Capital de Provincia, porque apenas habrá en el Mundo una [ciudad] que no quiera ser metrópoli, pero admiramos que no conozca, y no confiese, que todavía no ha llegado su vez".¹⁵

Pero para estos capitulares salteños esta "vez" u oportunidad no se había dado aún porque

"...ni su situación geográfica, ni su población, ni sus circunstancias, ni sus servicios, son comparables con los de esta ciudad de Salta, que se halla en el centro del nuevo Gobierno, y del nuevo Obispado, dividido del de Córdoba".¹⁶

Cuando finalmente, durante las Reformas Borbónicas, las grandes jurisdicciones de tiempos de los Austrias dieron lugar a nuevas jurisdicciones, las grandes ciudades entraron a disputarse los territorios limítrofes. Cuando se dividieron las Gobernaciones de Buenos Aires y Córdoba del Tucumán, ciudades como Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero pasaron a depender de la Gobernación de Salta del Tucumán y ciudades como La Rioja de la Gobernación de Córdoba. Pueblos más pequeños, como Cruz Alta o Guardia de la Esquina, eran disputadas en 1775 por las jurisdicciones de ciudades mayores, como Córdoba y Buenos Aires.¹⁷ En la rebelión comunera de Traslasierra, ocurrida en 1774, Cipriano Hurtado de Lara habría fraguado un documento por el cual el Cabildo puntano veía con buenos ojos que el partido de Traslasierra, perteneciente a la jurisdicción de Córdoba, se pasara a la jurisdicción Puntana.¹⁸ En 1784, el Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo decide dividir los cinco Departamentos en que estaban comprendidos los treinta pueblos de Misiones. Los Departamentos de Yapeyú, San Miguel y Concepción pasaron a depender de la Gobernación-Intendencia de Buenos Aires, y los Departamentos de Candelaria y Santiago de la Gobernación-Intendencia del Paraguay.¹⁹ Seis años antes, en 1778, el Virrey Vértiz había repartido también el territorio de Entre Ríos, adjudicando a Buenos Aires la llamada Costa del Uruguay, desde el río Nogoyá hasta el río Uruguay, incluyendo los partidos de Gualaguay, Gualaguaychú y Arroyo de la China; y a Santa Fé la llamada Costa del Paraná, que abarcaba la zona entre los ríos Paraná y Nogoyá.²⁰ Pero pese a este nuevo redimensionamiento de las jurisdicciones, los vecinos de la aldea de Nogoyá alegaban a fines del siglo XVIII, no estar ésta sometida a la ciudad de Santa Fé.²¹ En un largo escrito, elevado en 1789 al Gobernador de Buenos Aires, los vecinos de Santa Fé José Arias Troncoso,²² José de Vera Múxica,²³ y José Manuel Troncoso,²⁴ integrantes de la facción dominante de los Echagüe, los Maciel y los Vera, aducían que en su ciudad se debía tener a Francisco J. Crespo,²⁵ nacido en Santa Fé, por más foráneo que José Ignacio Uriarte,²⁶ pues Crespo

"...es vecino de Nogoyá en la otra banda, cuya parte se ha pretendido desmembrar de la jurisdicción desta ciudad y lo cierto es que aquel vecindario no reconoce en los jueces de aquí [Santa Fé], jurisdicción ni autoridad".²⁷

Recién en 1792, la región de Nogoyá, que del punto de vista administrativo dependía del Alcalde de Paraná, subalterno a su turno del Cabildo de Santa Fé, designa para el cargo de Juez Pedáneo a Santiago Hereñú,²⁸ vecino y hacendado de dicho partido.²⁹ De igual manera, ciudades tenidas por principales o mayores, donde regían las restricciones de raza y linaje para acceder a la condición de don y de vecino, se oponían a que se les otorgara prerrogativas o fueros a pueblos considerados menores en jerarquía, por estar poblados por blancos pobres y de dudosa legitimidad de origen, mestizos y mulatos libres, donde no regían las anteriores restricciones. Cuando en 1755 el Gobernador José de Andonaegui concede a Luján la condición de Villa, por su rol militar en la defensa de la frontera, el Cabildo de Buenos Aires puso en duda por muchos años la autoridad del Gobernador para conferir tales privilegios, cuestionando numerosas veces la designación de Alcaldes de Hermandad hecha por el Cabildo de Luján.³⁰ En localidades menores, como Traslasierra, provincia de Córdoba, sus vecinos se alzaron en 1774 contra la prepotencia de su capital, bajo la dirección de su Cura Párroco el Dr. Simón Tadeo Funes, y reprimidos por el Maestre de Campo Juan Tiburcio Ordóñez.³¹ Más luego, el Gobernador-Intendente de Salta Ramón García de León y Pizarro y el Gobernador-Intendente de Córdoba Marqués Rafael de Sobremonte, instados a atraer población, por la necesidad de garantizar la seguridad de las fronteras frente al peligro indígena, le otorgaron la condición de Villa a numerosos pueblos, entre los cuales destacamos a San Carlos en Mendoza,³² Nueva Orán en Salta,³³ y Río Cuarto y La Carlota en el sur de Córdoba.³⁴ De igual modo, los Gobernadores del Paraguay le otorgaron categoría de villa y le asignaron Cabildo a los pueblos de Belén, Concepción, Curuguaty y Neembucú.³⁵ Cuando a fines del siglo XVIII el Cabildo de Montevideo demandó formar un Consulado de Comercio propio, el Síndico Procurador del Cabildo de Buenos Aires Francisco Antonio de Escalada,³⁶ opuesto al proyecto, manifestó que hasta ese momento Montevideo "...no ha salido, ni es justo que salga de la clase de [ciudad] subalterna y subordinada".³⁷ En 1780 se dispuso

"...que las familias dispersas situadas en parajes arriesgados y generalmente todos los habitantes de la campaña que no tuvieran terrenos propios [es decir aquellos que no fueren de la condición de vecinos], los agregados a las estancias o chacras y los vagos sin residencia fija se reuniesen a los respectivos Fuertes o Guardias".³⁸

Y, finalmente, en momentos en que el gabinete español se disponía a sobornar al Cabildo de Buenos Aires entregándole títulos de "fiel y leal", fué cuando tomó conocimiento de la revolución.³⁹

El poder de Virreyes, Gobernadores, Corregidores y Oidores.

Con respecto al poder de Virreyes, Gobernadores, Corregidores (de Españoles) y Oidores, siempre estuvo en juego en la colonia la facultad de transferir el poder jurisdiccional que estos últimos detentaban. La interferencia de autoridades subalternas (Tenientes de Rey,⁴⁰ Comandantes de Armas, Tenientes Asesores Letrados y Subdelegados de Real Hacienda), en las decisiones jurisdiccionales o administrativas capitulares (Alcaldes Provinciales, Alcaldes de Hermandad y de Barrio) dió lugar a disputas de toda índole. En teoría, la facultad de confirmar las elecciones de alcaldes podía ser asumida sólo por Virreyes, Presidentes de Reales Audiencias, Gobernadores y Corregidores (de Españoles). La Real Ordenanza de Intendentes, sancionada en 1782, transfirió la facultad virreinal de confirmar las elecciones concejiles a los Gobernadores-Intendentes, quienes usufructuaron dicho privilegio hasta que en 1787 una Real Cédula anuló dicha transferencia retornándosela al Virrey.⁴¹ Pero en la práctica, esta facultad la usufructuaban los Tenientes de Rey, los Justicias Mayores, los Alcaldes Provinciales y, más luego, los Subdelegados de Real Hacienda.⁴²

Respecto de la facultad de nombrar o rechazar autoridades políticas, los Cabildos seculares manifestaban sus celos respecto de los Tenientes Asesores Letrados, de los Corregidores (de

Españoles), de los Alcaldes Provinciales, de los Alcaldes de Barrio, de los Gobernadores-Intendentes, de los Virreyes, y hasta del propio Rey. En Buenos Aires, cuando en 1778 Carlos III reemplazó a Pedro Antonio de Ceballos por Juan José de Vértiz y Salcedo, su Cabildo se "afligió" implorando que Ceballos quedara en el cargo. De resultas de esta impertinencia, el Rey confinó por un año en las Malvinas a los cabildantes Judas José de Salas y Bernardo Sancho Larrea, y a los otros nueve capitulares que firmaron la representación se les prohibió ejercer cargos concejiles durante siete años.⁴³ A los efectos de tomar conciencia de la influencia de los cabildantes porteños castigados por el Rey, el Apéndice A-I nos ilustra acerca de las conexiones que dichos capitulares mantuvieron con el interior del espacio colonial. Diez años después, en 1788, cuando el Super-Intendente de Real Hacienda Francisco de Paula Sanz rechazó las elecciones capitulares, que habían recaído en Manuel Antonio Warnes,⁴⁴ por el "espíritu revoltoso" del elegido, el Cabildo apeló a la Real Audiencia, y esta alta magistratura confirmó a Warnes en su nuevo cargo, desairando a Sanz, quien optó por aceptar el cargo de Gobernador-Intendente en el Alto Perú.⁴⁵ Y a fines de siglo, en 1799, cuando el Virrey nombró al Caballero de Santiago Capitán de Navío Martín Boneo,⁴⁶ como Intendente de Policía, subordinado al Virrey y encargado del registro y nomenclatura de calles, el Cabildo lo rechazó apelando a Madrid con éxito.⁴⁷ Estas arbitrariedades también se registraron en otras provincias. En la propia Córdoba, en 1784, el cabildante Miguel de Learte y Ladrón de Zegama confesaba que

"...lo que más me dió que sentir fué el de haber de hacer frente al Teniente Asesor, al Gobernador y al mismo Cabildo, porque la Ciudad gozase de la libertad establecida y los Alcaldes, de la que debían gozar en no estar sujetos a los Gobernadores, por apelación que se habían abrogado".⁴⁸

Veinte años más tarde, en 1806, el Gobernador-Intendente Interino de Córdoba Dr. Victorino Rodríguez rechazó la elección de José Francisco Tissera como Alcalde Ordinario de Río Cuarto "...porque poseía un estanco de tabacos que sufriría la falta de atención, en detrimento de las rentas reales".⁴⁹ En Paraguay, uno de los motivos que engendró una poesía de fuerte raigambre popular consistió en el repudio que la corrupción de los altos funcionarios públicos, provenientes por lo general de Buenos Aires, provocaban en la población, en especial la corrupción originada con el secuestro de las propiedades jesuíticas. Entre los gobernadores designados para imponer el Ramo de las Temporalidades (Bienes de los Expulsos) se destacó el Sargento Mayor de la Plaza de Buenos Aires Agustín Fernando de Pinedo,⁵⁰ manifiestamente impopular ante la población paraguaya, en especial entre los vecinos miembros de su Cabildo, la mayoría encomenderos,⁵¹ por sus reiterados abusos que comprendían opresión, nepotismo, malversación de los recursos fiscales, y actividades comerciales privadas, pero en realidad por su interés en abolir las encomiendas.⁵² Fue el Alcalde José Marcos Vallejos, quien denunciara en mayo de 1776 su manejo de las reducciones de Indios.⁵³ A tal extremo se acentuó en el vecindario de Asunción la impopularidad de Pinedo que a fines de la década del 70 menudearon los pasquines, con "décimas" que denunciaban la crueldad del Gobernador. Hemos logrado rescatar del olvido --gracias a una querrela iniciada por el Comandante de la Villa Real de Concepción Ayudante de Milicias Manuel García de Barrazábal-- siete de esas "décimas" y algunos estribillos. Si bien dichas "décimas" fueron leídas en los parajes públicos de Asunción por un mulato menor de edad llamado Manuel Tello, hijo de un tal José María Tello, debemos descartar que algunos de estos sea su autor, pues nos inclinamos por Vallejos, como posible creador de las mismas. El texto de Vallejos comienza con una "décima" elegíaca dedicada a sus compatriotas Paraguayos por los sufrimientos recibidos de manos del Gobernador Pinedo, a quien se lo estigmatiza con el calificativo de faraón,⁵⁴ las que rezan:

I

1. Con lamentación profunda
2. Lloro a mis hijos pobres

3. Ya no hay repiques, si dobles
4. por mis muertos fundamentos
5. que alguna vez opulentos
6. fueron cuando fuí Ciudad
7. Y con tanta brevedad
8. se cayeron mis cimientos
9. quien así te a puesto Provincia Leal
10. el Faraón Pinedo con su crueldad

II

1. Desde el año que entró en mí
2. con achaque de Gobernador
3. diferencia del Infierno
4. no tengo puedo decir
5. por que todo es maldecir
6. todos al Gobernador
7. Su nombre les causa horror
8. ha buelto pobres a ricos
9. a pobres Locos, Borricos
10. es loba sin ton ni son

1. Malaya sea la hora
2. ay de mí, ay de mí
3. que ese Neronitano
4. se llegase aquí

En la tercer y cuarta "décimas" Vallejos hace eje en la explotación que significaba al vecindario de Asunción la fundación de nuevas ciudades, con su secuela de exacciones de todo tipo, practicadas por Pinedo tanto al fundar la Villa de Concepción, en 1773, como al originar la Reducción de Remolinos, en 1776.⁵⁵ De dichas exacciones no estuvo exenta la propia gente de su compañía, lo cual dió lugar a un motín y a la "décima" de protesta que reproducimos:

III

1. De hambre Peste y Mortandad
2. y de Infieles abatida
3. de Langosta perseguida
4. estoy que no puedo más
5. en nada ya no me arribo
6. En la Causa decir puedo
7. el Gobernador Pinedo
8. que a costa de mis costillas
9. a Poblado nuevas Villas
10. con tan furioso denuedo

IV

1. Y sé que a informado al Rey
2. que a costa suia a Poblado
3. y el Rey engañado de él
4. ya sus rentas le a doblado
5. este es de insaciable sed
6. todo lo quiere abarcar

7. nada quiere perdonar
8. en materia de interés

La quinta "décima" hace alusión a las actividades mercantiles de Pinedo y a su inescrupulosidad, pues incluía el consumo de mercancía contrabandeada:

- V
1. Es un fuerte Mercader
 2. a los Pueblos a fundido
 3. al comercio lo a perdido
 4. porque a su interés prefiere
 5. y con su poder adquiere
 6. sin mirar a lo prohibido
 7. Gobernador comerciante
 8. Y con familia y mujer
 9. que bienen muertos de hambre
 10. que cosa buena han de acer

En la sexta "décima" no se salvó siquiera la propia mujer de Pinedo cuyo comportamiento con respecto a los bienes de los Expulsos Jesuitas fue anatematizado:

- VI
1. Muchas cosas del Secuestro
 2. con trampas, drogas, e industrias
 3. estas las sacó y son suias
 4. que la prueba daré presto
 5. Hagarra a diestra y siniestro
 6. y con tal enormidad
 7. que asta un cierto Petoral
 8. sin Seresa la gozola
 9. su mujer Doña Bartola
 10. a la Virgen vi quitar

1. Virgen de congregación
2. Madre de Misericordia
3. como permites Señora
4. tan Sacrílega extracción

- VII
1. No para siempre permite
 2. Dios y si nos sufre és
 3. que algún día puede ser
 4. que el Rey sobre el caso adbitre
 5. que traiciones el no admite
 6. mas antes las abomina
 7. miren los de la propina
 8. injusta cuanto traidora
 9. que nos dé inhibitoria
 10. dél en lo que determina

1. Seguro está que lebante

2. en contra de aquesto el dedo
3. el faraón de estos tiempos
4. que es el pérfido Pinedo.⁵⁶

Posteriormente, el Gobernador Lázaro de Rivera,⁵⁷ profundamente enemistado con el Virrey Marqués de Avilés, había despojado de su alcaldía a Don José del Casal y Sanabria,⁵⁸ el anfitrión y amigo de Félix de Azara y Juan Francisco de Aguirre, peritos de la IV Comisión Demarcadora de Límites entre España y Portugal.⁵⁹

La imposición a los Cabildos en la elección de autoridades.

Las Reales Audiencias y los Subdelegados de Real Hacienda y Guerra solían también imponer a los Cabildos la elección de diversas autoridades políticas. Acevedo (1972) nos ilustra con el caso que se dió en Córdoba, en 1757, donde el abogado y Alcalde Mayor de Minas de Potosí Sebastián de Velasco, designado como Comisionado en Córdoba por el Presidente de la Real Audiencia de Charcas Nicolás Giménez de Lobatón y Azaña, Marqués de Rocafuerte,⁶⁰ procesó a los capitulares Gerónimo Luis,⁶¹ Juan Agustín,⁶² y José Gregorio Echenique,⁶³ Félix Cabrera,⁶⁴ Gregorio Arrascaeta,⁶⁵ José Arrascaeta,⁶⁶ Marcos Ascasubi,⁶⁷ y José de Molina Navarrete,⁶⁸ por haber levantado en 1756 cargos no justificados contra el Teniente de Rey Manuel de Estéban y León,⁶⁹ quien por otro lado se hallaba apoyado por un numeroso grupo de partidarios.⁷⁰ De resultas de dicho proceso, a Arrascaeta, Cabrera y Molina se les impidió ejercer cargo alguno.⁷¹ Y en 1758 la Real Audiencia de Charcas procesó y condenó al Alguacil Mayor Nicolás García Guilleddo,⁷² y a los cabildantes Juan Antonio de la Bárcena,⁷³ Manuel de Castro,⁷⁴ y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique,⁷⁵ por la conducta hostil observada con el Comisionado Sebastián de Velasco. Guilleddo fué suspendido en el ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a 30 leguas de Córdoba.⁷⁶ Asimismo, Acevedo (1965) nos ilustra con el caso que se dió a fines de siglo en Santiago del Estero, donde el Subdelegado Juan José Iramain,⁷⁷ fué acusado de ser "...el principal motor de tomar cartas en las elecciones [concejiles] de bastantes años a esta parte".⁷⁸ Iramain, era a juicio de José Bravo de Rueda,⁷⁹ en una acusación elevada en 1789, un personaje

"...que se sujeta al coeCHO de maior entidad que solo para esto no tiene los sentidos perdidos de modo que ya no hay valor el sufrirle sus vorracheras continuándolos asta en los actos más serios de Cabildo y aún en estas presentes elecciones, causando gravísimos escándalos introduciéndose a las tavernas o pulperías, de vara alta y Peluca, a proveerse de aguardiente y proveer una botella para venir con ella a las actas capitulares, en donde por instantes saliendo a sus corredores, a vista del Pueblo saciaba su apetito con brindis a su Teniente [Gobernador], y a la amanuense Escribano".⁸⁰

Al año siguiente, en 1790, y seguramente como consecuencia de la acusación de Bravo de Rueda, el Gobernador-Intendente de Salta anuló la elección de Iramain como Alcalde de segundo voto, porqué ya era Subdelegado de Real Hacienda y, como tal, excluído de cargos capitulares.⁸¹

El caso de la inhibitoria.

Los conflictos sobre la designación de los Jueces Pedáneos o de Hermandad y los Alcaldes de Barrio es lo que más nos ilustra acerca de la arbitrariedad con que el régimen absolutista administraba justicia. Cuando algún Alcalde pretendía dictar medidas que no le simpatizaban a los Gobernadores y Comandantes de Frontera o juzgaba por sí mismo las acciones de algún funcionario de alto rango les caía por lo general la inhibitoria,⁸² institución que consistía en avocar las causas pendientes o, en otras

palabras, sustraer al acusado de sus jueces naturales para someterlo a aquellos otros jueces designados por alguna autoridad superior. A comienzos del siglo XVII, en 1608, con motivo del recurso que el Procurador del Cabildo de Tucumán interpuso ante la Real Audiencia de La Plata se declaró "...que los Gobernadores no quiten las Causas Civiles, ni criminales de los Jueces Ordinarios hasta que las vean, sentencien, y determinen, ni después de sentenciadas".⁸³ Un siglo más tarde, en 1721, con motivo de una Provisión dictada por la Real Audiencia de La Plata, la cual avocaba las causas judiciales de la jurisdicción de Tucumán, el Gobernador Estéban de Urízar y Arespacochaga representó el perjuicio que experimentarían los Tucumanos "...si se pusiese en práctica lo prevenido por la Real Audiencia".⁸⁴ Atendiendo el reclamo, el monarca "...se dignó prevenir a la misma Real Audiencia, se ajustase a la disposición de las ya citadas Leyes, que con otras alegó el expresado Gobernador, y se corroboran por la Real Cédula de 30 de Mayo de 1721".⁸⁵ Otro medio siglo más tarde, en el conflicto suscitado por la Expulsión de los Jesuitas, tanto el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero,⁸⁶ como la Real Audiencia de Charcas, protegían a sus partidarios dictando reiteradas inhibitorias.⁸⁷ Si bien el poder judicial como el militar trataban de guardar entre sí una mutua independencia, la violación de este modus operandi fué una constante. En Aunción, en 1794, el Gobernador Intendente Joaquín de Alós representó ante el Virrey el deshonor e ignominia que se le seguía de habersele inhibido de todo acto jurisdiccional con respecto a los Capitulares que informaron contra su conducta.⁸⁸ El separarlo de todo acto jurisdiccional, era para Alós, "...suponerme reo, o delincuente, o que hay al menos semi-plena prueba para temer alguna violencia y estorción de que estoy muy distante como lo he protestado repetidas veces a VE. y lo acredita la experiencia".⁸⁹ El poco concepto que se haría de mis Providencias, alegaba Alós,

"...y el ningún respecto y subordinación con que se me ha de mirar hace más sensible dicha inhibición porque con este motivo hirán tomando ..ansa considerándose independientes de mi jurisdicción: con este mal ejemplo otros pocos reflexivos y naturalmente inquietos se animarán a buscar ocasiones de probar mi paciencia, pues todo es de presumir sin hacer una violenta conjetura".⁹⁰

Tan extendida estaba esta institución de la inhibitoria que incluso era cantada por el pueblo en las décimas de protesta. El Alcalde José Marcos Vallejos en su disputa contra el Gobernador Pinedo, arriba detallada, reproduce unas décimas entre las cuales se reclama de Pinedo que les dé la inhibitoria para recurrir ante el Rey.⁹¹ En San Juan, el Alcalde de segundo voto José Cano de Carvajal, depuso en 1803 de su cargo de Alcalde de Barrio a Tadeo Rojo, degradándolo "...hasta el extremo, creyéndose que ha cometido algún crimen que lo ha hecho digno de esta deposición".⁹² En San Luis, el Procurador Juan de Almeyra, a nombre del Alcalde Provincial José Ramírez de Villalón, (a) "El Lechero", enemistado con el Alcalde de Primer Voto Marcelino Poblet,⁹³ alegaba que sus facultades para designar cuadrilleros se hallaba coartada. Ello ocurría, según Villalón, contra lo que dictaba la tradición, por cuanto el Cabildo "...por legítima costumbre o por Real Cédula expedida al intento se halla en la posesión de nombrar Alcaldes pedáneos o de la hermandad que están repartidos en su jurisdicción", cuando en San Luis "...no hay semejante costumbre ni aquella Real Cédula debe extenderse a ella".⁹⁴ En la propia Buenos Aires, cuando para suplir la insuficiencia de las medidas tomadas por los Alcaldes Ordinarios, los Cabildos estimulaban con premios la prisión de los salteadores, Mariano Moreno concluyó en 1810 que los Cabildos "...no tienen autoridad para ofrecer premios, ni tomar una intervención activa en las prisiones de los delincuentes, cuías causas penden ante los Juzgados Ordinarios".⁹⁵ En la Villa de Luján, cuando en 1755 carecía aún de Cabildo, la jurisdicción ordinaria era ejercida por el Cura Párroco del lugar.⁹⁶ Y en Ranchos y Chascomús, jurisdicciones fronterizas de la provincia de Buenos Aires que se regían con la sólo autoridad militar de sus respectivos Comandantes, cuando a comienzos del siglo XIX el Cabildo de Buenos Aires les designó Teniente Alcalde y Alcalde de Hermandad, dicho Cabildo tuvo que acudir en defensa de los mismos contra las

resistencias de sus Comandantes.⁹⁷

Las Juntas Municipales de Temporalidades y sus autoridades.

En cuanto a la designación del Diputado a las Juntas Municipales de Temporalidades, órgano encargado de subastar los cuantiosos bienes de los Jesuitas Expulsos, esta facultad dió lugar a una gran confusión entre las autoridades gubernativas y las capitulares. En Mendoza, en 1771, el Gobernador Vértiz designó en la Presidencia de la Junta Municipal de Temporalidades al Corregidor Juan Manuel Ruiz.⁹⁸ Este a su vez propuso al Cabildo integrar dicha Junta con el Alcalde de primer voto Pedro Nolasco Correas,⁹⁹ el Regidor Decano y Fiel Ejecutor Pedro Ortiz, el Tesorero Teniente de Oficiales Reales Juan de Gamboa,¹⁰⁰ y el Procurador General Francisco Javier Santander.¹⁰¹ En Santa Fé, el cargo de Depositario de los bienes de los Jesuitas expulsos había recaído en el Teniente Gobernador Joaquín Maciel,¹⁰² quien "...se posesionaba a su vez del producido de las ventas [de los biens Jesuíticos] sin dar cuenta detallada alguna".¹⁰³

Integrando la mayor parte de los cargos capitulares con parientes próximos o afines, las familias de los Maciel, los Echagüe, y los Vera Muxica reproducían la misma conducta que en períodos anteriores había desplegado la familia de los Monje. En Tucumán, la designación de Defensor de Temporalidades, recaída en 1768 en el Fiel Ejecutor Propietario Diego Ignacio Aráoz del Campo,¹⁰⁴ vino a acentuar la consolidación del patriciado, con su consiguiente repercusión en el Cabildo, pues su hijo Pedro Antonio Aráoz y Paz de Figueroa,¹⁰⁵ llegó a desempeñarse como Alcalde de segundo voto en 1772, como Expedicionario del Chaco en 1774, y como Fiel Ejecutor (oficio heredado de su padre) entre 1771 y 1775; su otro hijo Diego Miguel Aráoz fué Cura Vicario de Monteros; y el primo hermano de estos últimos Miguel Aráoz y Echávez,¹⁰⁶ alcanzó a ejercer como Alcalde de Primer Voto en 1765 y 1772. Sin embargo, la unión de este clan familiar no estaba garantizada, pues a la muerte de Diego Ignacio Aráoz, sus hijos Pedro Antonio y Diego Miguel disputaron arduamente su herencia.¹⁰⁷ En 1770 fué designado Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades Miguel Aráoz, y en segundo lugar Vicente Escobar y Envila.¹⁰⁸ Esta designación no fué bien recibida por el Cabildo pues en dicha oportunidad dividió sus preferencias.¹⁰⁹ Mientras el Alcalde de Segundo Voto Vicente Escobar, el Alférez Real Simón Domínguez,¹¹⁰ y el Alguacil Mayor Francisco Texerina y Barreda,¹¹¹ la repugnaron, el Alcalde de primer voto Luis José Díaz de la Peña,¹¹² el Alcalde Provincial Francisco Xavier Sánchez de la Madrid,¹¹³ y el Regidor Decano Juan Porcelo y Zuaso,¹¹⁴ la votaron; desempataando el Gobernador en favor de Aráoz. Luego, en Diciembre de 1771 habiendo sucedido Escobar a Aráoz, el Cabildo le reportó al Gobernador de Buenos Aires Vértiz, en el afán de incriminarlo, que Escobar condujo a una hacienda de las Temporalidades

"...toda su crecida familia donde se mantiene hasta la fecha, teniendo en su poder las llaves todas de la casa, y de quanto ay en ella, disponiendo de todo a su arbitrio, y gastando de las Temporalidades".¹¹⁵

Un año más tarde, en mayo de 1773, Sánchez de Madrid le informaba a Vértiz que la conducta de Escobar "...me ha parecido siempre mala, [pues] ha cometido en ella muy graves excesos".¹¹⁶ En su reemplazo recomienda en primer lugar al Tesorero de la Real Hacienda José de Thames,¹¹⁷ y en segundo lugar a José de Molina.¹¹⁸ Finalmente, la Junta de Temporalidades del Tucumán lo remueve a Escobar de la Presidencia,¹¹⁹ y nombra en su lugar, en Octubre de 1773, al Administrador de Correos Fermín Ruiz Poyo.¹²⁰ En cuanto a la Administración de Correos, órgano encargado de la administración de las postas y de la distribución de la correspondencia de ultramar, también gozaba de fueros propios.¹²¹

En conclusión, podemos afirmar, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en los Cabildos de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que la dualidad política subsistente entre los Cabildos y las autoridades políticas superiores (Virreyes, Gobernadores y Oidores) asfixiaba a las fuerzas vitales de la sociedad colonial. En efecto, los Cabildos debían representar a las fuerzas vivas de la sociedad, pero por efecto de mecanismos discriminatorios y anti-democráticos la mayor parte de la población masculina activa estaba excluida de la política comunal. Las luchas libradas en cada uno de dichos Cabildos en tiempos de los Borbones contribuyó a acelerar la transición hacia una forma de estado más próxima al estado liberal burgués del siglo XIX. Finalmente, fueron la Asamblea de 1813 y el Directorio de 1815 quienes suprimieron los fueros concejiles,¹²² y quienes dispusieron la renovación de los capitulares por elección popular.¹²³

NOTAS

¹ Según Gonzalez y González la mentalidad administrativa Habsburga era la de la acumulación de poderes --legislativo, ejecutivo y judicial-- en unos organismos colegiados, mientras que la borbónica "...tendía a la división de poderes y funciones, pero con la dirección de cada sector centralizada en personas u organismos especializados" (González y González, 1975, 505, nota 40).

² entre ellos los trabajos de Calvo, Cornejo, Luque Colombres, Morales Guiñazú, Corominas, Crespo Naón, Lazcano Colodrero, Jáuregui Rueda y Avellá-Cháfer, estos tres últimos identificados de ahora en más con las siglas LC, JR, y A-CH.

³ El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr. Hugo Fernández de Burzaco, --por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza-- quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada "Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes del Río de la Plata", la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

⁴ El uso del Don parece haber sido un patrón de discriminación más fuerte aún que el de vecindad (Fradkin, 1992, 10). Solo accedían a la vecindad aquellos que tuvieran casa poblada de por sí en la villa de su jurisdicción, fueren mayores de 20 años de edad, fuesen honrados "de buena opinión y fama", no hubieren ejercido ningún oficio mecánico "ni otros trabajos humildes y bajos", fuesen personas beneméritas "...de buenas partes y servicios, idóneas, temerosas, y celosas del servicio de Dios nuestro Señor, limpias, rectas, y de buenas costumbres", es decir, carecieran de tacha racial alguna, y fuesen hijos de legítimo matrimonio, reducía enormemente el universo dentro del cual podía elegirse a un capitular, operando como una suerte de ley de embudo (Leyes 6, 10, y 12, Tít.10, Lib.4; Ley 8, Tít.3, Lib.5; y Ley 13, Tít.2, Lib.3 de la Recopilación de Indias; y Ley 3, Tít.9, Lib.3 y Ley 1 y 7, Tít.10, Lib.4 de la Recopilación de Castilla. Según Pedro Vicente Cañete "...el extranjero no puede ser Alcalde ni Regidor por la Ley 66, Cap.5, Tít.4, Lib.2, y Ley 2, Tít.3, Lib.7 de Castilla; no puede serlo tampoco el hombre desentendido, o de mal ceso, ni el mudo, ni el sordo, ni el ciego, ni el enfermo havitual, ni el que fuere de mala fama, ni el herege, ni la mujer, ni el siervo según la Ley 7 y 8, Tít.9, Lib. 3 de Castilla copiadas literalmente de la Ley 4, Tít.4, part.3, y Ley 7, Tít.6, part.7, incluso el clérigo de orden sacro, y los Alcaydes de Fortalezas que están igualmente prohibidos por la Ley 10, Tít.3, Lib.1, y por la Ley 15, Tít.5, Lib.3 de Castilla" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Para la noción de vecindad ver Lezcano de Podetti (1968). En cuanto a que solo los varones podían ser cabildantes, Barbier (1972) enfatiza el rol de las estructuras informales del poder, entre las cuales debe destacarse el rol de algunas mujeres, como fué el caso en Córdoba de María de Allende y Losa, esposa del Alcalde Gregorio de Arrascaeta; y de Clara de Echenique y Urtubey, mujer del Alcalde Provincial José Martínez de Candia;

y en Mendoza, de María Josefa Corvalán, la mujer del Fiscal de la Real Audiencia de Santiago de Chile, Dr. José Perfecto de Salas. Entre otro de los requisitos se hallaba el de haber cumplido con el "hueco" (Institución que prescribía en los Cabildos un intervalo de dos o tres años entre cargo y cargo [Hevia Bolaños, 1853, 14; y Bayle, 1952, 113-115]).

⁵ ver Roca, 1983.

⁶ Lynch, 1967, 196.

⁷ Profesor Titular de la cátedra de Instituta en la Universidad de Córdoba.

⁸ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.51, Exp.1463.

⁹ *Ibídem*.

¹⁰ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.86, Exp.29, fs.32v.

¹¹ *Ibídem*.

¹² *Ibídem*.

¹³ Conformado por Tomás de Arrigunaga y Archondo, Ramón Saravia, José Vicente de Toledo Pimentel, Calisto Ruiz Gauna, Matías Gómez Linares, Santiago Figueroa, Francisco Avelino Costas, Manuel Brizuela, y José Gabriel Arias Castellanos (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.86, Exp.29, fs.32v.).

¹⁴ Era nacido en la Colonia del Sacramento, hijo de un Portugués. Casó con Jerónima Rosa Martínez de Iriarte, natural de San Miguel de Tucumán, viuda del Gobernador de Guanta Juan de Zubiaur, e hija de Juan Martínez de Iriarte y de Felipa Campana (Aranzaes, 1915, 480). Posteriormente, Calvo señaló que Doña Jerónima fué hija del segundo matrimonio de Domingo Martínez de Iriarte y de Florencia de la Cámara y Díaz de Elizondo; hermana del Diputado al Congreso de Tucumán Pbro. Felipe Antonio Martínez de Iriarte; media hermana del Gobernador de Armas de Jujuy Domingo Martínez de Iriarte; y cuñada de Francisco Zenavilla, de Juan de Simón y Olazo, de Juan Manuel Pucheta y del Coronel realista Ventura José Marquiegui (Calvo, VI, 24). Fué padre de Gertrudis de Medeyros, casada en junio de 1799 con el Coronel Juan José Fernández Cornejo y de la Corte (Cornejo, 1972, 65).

¹⁵ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.86, Exp.29, fs.32v.

¹⁶ *Ibídem*.

¹⁷ Barbero, 1990, 45.

¹⁸ Barrionuevo Imposti, 1968, 51.

¹⁹ Mariluz Urquijo, 1987, 353-354.

²⁰ Segura, 1972, 87.

²¹ el origen de Nogoyá puede fijarse de modo conjetural en 1750 (Martínez, 1884, 14 y 25; Pérez Colman, 1936, II, 295 y 481; y Cervera, 1907, I, 501 y 582; citados en Razori, 1945, III, 258).

²² Hijo de Manuel Arias, natural de los Infantes, Galicia, y de Cecilia Catalina Troncoso y Echagüe.

²³ Hijo del Teniente Gobernador Francisco de Vera Muxica y de Juana Ventura López Pintado, hermano de Petrona Vera, que casó con Juan José de Lezica, y de Rafaela Vera, casada con el Virrey Rafael del Pino (Crespo Naón, 1983, 56).

²⁴ Hijo de Manuel Troncoso y de María Elbira de Zabala (Crespo Naón, 1983, 76).

²⁵ Hijo del Regidor Capitán José Crespo y de Casilda Carvallo y Aguilera del Pino, y marido de Polinesia Rodríguez y Lencinas (Crespo Naón, 1983, 63).

²⁶ Alcalde de Segundo Voto de Santa Fé en 1785. Natural de Lemoniz, Vizcaya, casó con Estefanía Echagüe y Gaete, hija del Teniente Gobernador, Justicia Mayor, y Comandante de Armas de Santa Fé Francisco Javier de Echagüe y Andía y de Josefa Gaete y del Casal, padres de José Uriarte, casado con Angela López de los Ríos (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730; Crespo Naón, 1983, 66). En 1791 demanda para que la justicia de Santa Fé cite a testigos que prueben su conducta y moral (AGN, Tribunales, Leg.215, Exp.3). En 1801 sigue autos contra B.López (AGN, Tribunales Administrativos, Leg.5, Exp.150; Leg.9, Exp.268; y Leg.8, Exp.220). En 1804 demanda a M. Almagro por cobro de pesos (AGN, Tribunales Administrativos, Leg.14, Exp.414).

²⁷ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.25, Exp.730.

²⁸ Hijo del Alcalde de Hermandad Santiago Hereñú y Arbestain y de María Osorio, y nieto de Tomás Hereñú Arteaga, natural de Mondragón, Guipúzcoa, y de María Magdalena de Arbestain y del Peso (Segura, 1972, 86).

²⁹ Pérez Colman, II, 296.

³⁰ Levene, 1941, II, 405; Melli, 1974, 82-84; Barba, 1984, 263-273; y Marquiegui, 1990, 67.

³¹ Larrouy, 1927, II, 365; y Barrionuevo Imposti, 1949, 785-786. Hijo de Antonio de Funes y de Juana Pavón (Castellano Sáenz Cavia, 1969, 157).

³² Sosa Morales, 1965; y Duda de de Rosas y Herrera, 1968-69, 69.

³³ Lamas, 1871, 305-316; Centeno, 1935; y Arribas, 1970.

³⁴ Porreca, 1926; Vitulo, 1936; Montes, 1953; Robinson y Thomas, 1974, 12; y Barrionuevo Imposti, 1986, 65.

³⁵ Quevedo, 1973, 103-117; Velásquez, 1975, 333-352; Viola, 1985, 75-83; Ferrer de Arréllaga, 1985, 23-25; y Barrios Pintos, 1989, 119-134.

³⁶ suegro del prócer José de San Martín.

³⁷ AGN, Consulado, Leg.5, n.1, Sala IX, 4-7-7, citado por Juan E. Pivel Devoto en el prólogo del

tomo II del Archivo Artigas.

³⁸ Romay, 1967, 22.

³⁹ Mero, 1991, 43.

⁴⁰ No debe confundirse este cargo con el de Teniente Oficial Real. El Teniente de Rey era equivalente al de Teniente Gobernador.

⁴¹ Lynch, 1958, 212.

⁴² Lynch, 1958, 203, 206 y 212. Como los Gobernadores de la Gobernación de Córdoba del Tucumán residían en Salta, "...por estar así mandado o porque los llamaba el cuidado del cuantioso Ramo de Sisa de mulas y su feria", ellos mismos nombraban en las ciudades sufragáneas como Córdoba a sus Tenientes, para que en éstos recayere la autoridad del gobierno en su ausencia (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.51, Exp.1463). Los Tenientes de Rey ganaban un sueldo de \$1.800 anuales (Acevedo, 1965, 91).

⁴³ Lynch, 1967, 197; y Bruno, 1967, VI, 263. Dichos capitulares, conocidos con el apelativo de Sarracenos, fueron Manuel Martínez de Ochagavía, Diego Mantilla y de los Ríos, Miguel Mansilla, Manuel Joaquín de Tocornal, Pedro Díaz de Vivar, Francisco Antonio de Escalada, Cecilio Sánchez de Velasco, Manuel Joaquín de Zapiola, Juan Antonio de Lezica, Miguel José de Riglos y José de Andújar (Barba, 1978, 303).

⁴⁴ Coronel de Milicias. Sobrino de Adrián Pedro Warnes. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con María Josefa Benedicta Arráez y Larrazábal, hija de Martín de Arráez y de Tomasa Larrazábal, y sobrina de su socio Antonio Larrazábal; y segundas nupcias con Ana Jacoba García de Zúñiga, hija del Regidor Perpetuo Alonso Mateo García de Zúñiga y de Juana de Lisola y Escobar; conuñado primero del Regidor de Potosí Felipe Santiago de Arce, y luego de Juan Angel Lazcano, y de los Coroneles Juan Ignacio de Elía y José María Calceite; y suegro de su cuñado Juan Francisco García de Zúñiga, marido de Francisca Warnes y Arráez (FB, I, 162; III, 153).

Warnes mantenía estrechos vínculos comerciales con el Consulado de Lima y era considerado por los agentes del Consulado de Cádiz, como uno de sus peores enemigos, conjuntamente con Francisco Rodríguez de Vida, Juan de Lezica y Antonio de Larrazábal (Mariluz Urquijo, 1987, 77). Asimismo, Warnes cultivaba estrechos vínculos comerciales:

- a) en Potosí con Plácido J. de Herrera (R.1-1747-fs.248) y Domingo Barragán;
- b) en Jujuy con Domingo Araujo (R.1-1747-fs.204v.; R.1-1748-fs.285), Gregorio de Zegada (MAW-R.2-1761-fs.45); y Juan de Zegada (R.5-1756-fs.257, 299 y 303);
- c) en Salta con Juan de Zegada (R.5-1756-fs.257, 299 y 303v.); d) en Tucumán con Manuel García (R.1-1747-fs.271);
- e) en Santiago del Estero con Manuel Bravo de Rueda (R.2-1761-fs.172v.; R.5-1763-fs.285);
- f) en Córdoba con Estéban Montenegro (R.2-1751-fs.465v.), Francisco del Signo (R.6-1771-fs.346v.) y Juan Francisco Roldán (R.6-1769-fs.205v.);
- g) en Chile con Nicolás Jil (R.1-1747-fs.313), José Toro y Villalobos y Manuel Alonso Velazco;
- h) en Paraguay con García Rodríguez Francia (R.2-1760-fs.214 y 222; R.6-1769-fs.242v.), Juan de la Costa (R.2-1760-fs.213 y 220) y Juan Miguel de Zugasti (R.2-1759-fs.67v.);
- i) en Santa Fé con Simón de Abechuco (R.2-1759-fs.61v.);

y j) en Corrientes con Tomás Garay (R.6-1769-fs.207).

⁴⁵ Acuerdos del Cabildo de Buenos Aires, Serie III, tomo VIII, pp. 454-455; citado por Lynch, 1967, 200; y por Socolow, 1978, 124.

⁴⁶ Nacido en Palma de Mallorca, y casado con Cipriana Viana, hija de Toribio Viana y de Francisca Pérez Dávila (FB, I, 300).

⁴⁷ Lynch, 1967, 206.

⁴⁸ Learte, 1926, 281.

⁴⁹ Lynch, 1967, 199.

⁵⁰ Natural de Burgos, Asturias. Nombrado Gobernador del Paraguay en 1771, Presidente de la Real Audiencia de Charcas en 1776, y Brigadier de los Reales Ejércitos en 1779 (AGN, Reales Cédulas, t.20, f.313; y Reales Ordenes, Libro 9, f.244). Falleció en 1780 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.214, Exp.17).

⁵¹ En la gobernación del Paraguay, a diferencia del Alto Perú, los encomenderos no fueron desplazados por la clase de los corregidores.

⁵² Lynch, 1958, 209; y Saeger, 1981, 69-70.

⁵³ AGN, División Colonia, Reales Cédulas, tomo 23, fs.350, Sala IX, 24-8-3.

⁵⁴ Este calificativo fué profusamente utilizado en otros pasquines que se difundieron para esta época en el Perú (Flores Galindo, 1977, 144).

⁵⁵ Ferrer de Arrellaga, 1985, 23-25.

⁵⁶ AGN, División Colonia, Criminales, Leg.16, Exp.27, f.32-34.

⁵⁷ nació en Málaga, hijo de Pedro Antonio de Ribera y de Francisca Cayetana Espinosa de los Monteros. Fué Gobernador de Moxos, en donde había sostenido una dura disputa con el Presidente de la Real Audiencia de Charcas, General Ignacio Flores (Furlong Cardiff, 1954, 15-69; Massare de Kostianovsky, 1985, 95-119). Era marido de María Francisca de Sarratea, hija de Martín de Sarratea y de Tomasa de Altolaguirre; con cuñado del Virrey Santiago de Liniers y del Administrador de Correos de Potosí Teniente Coronel de Artillería Angel Augusto de Monasterio (Udaondo, 1945, 762; FB, IV, 359; y JR, 1989, ítem 7165).

⁵⁸ hijo de José del Casal y Sanabria y de Rosa Fernández de Valenzuela; cuñado del Comandante de Caballería Ligera Fernando Antonio de la Mora (padre del prócer Fernando de la Mora y del Casal); y marido de Rosa Agustina Gamarra y Caballero de Añasco, hermana del héroe de Paraguarí y Tacuarí, Comandante Juan Manuel Gamarra, e hija del Comandante Juan José Gamarra y Mendoza (Albarenga Caballero, 1978, 207). Según Furlong, Ribera se había indignado por el proceder criminal de Casal, al caer con 150 hombres armados sobre una toldería de indios Mbayás, asesinando a 75 de ellos a sangre fría (Furlong, 1954, 37). En realidad, Furlong idealiza la figura de Rivera, al ignorar un documento no catalogado existente en la Serie Criminales del AGN, donde consta que Casal se había opuesto, con

anterioridad a la matanza, a reiterados proyectos del Gobernador Rivera (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10, fs.88v). En efecto, en 1797, al igual que en 1788, el Regidor Decano del Cabildo de Asunción Don Fermín de Arredondo Lovatón, proyectó para defender la provincia levantar tropas veteranas, cuyos sueldos serían financiados estancando el ramo de la yerba. A este proyecto se opuso con éxito en ese entonces el cabildante José del Casal y Sanabria, arguyendo en contrario que para financiar la milicia existía "...un crecido ramo de guerra, cuyos fondos permanecían sin salida, y cuando por otra parte los Milicianos desempeñan de buena voluntad las funciones, que haría la tropa veterana [proyectada], con las ventajas de no repetir premio" (Ibídem). También se opuso del Casal y Sanabria a la licencia otorgada por el Gobernador Lázaro de Rivera al Subdelegado del Departamento de Santiago "...para que pusiese un beneficio de yerba, por cuenta de los cinco pueblos de su cargo, en los yerbales recientemente descubiertos en Villa Real" (Ibídem, fs.89). El objeto de este último proyecto era "...fomentar a los cinco pueblos [de indios de Misiones], para que pudiesen pagar el reparto de géneros que acababa de hacerles el Gobernador en la Visita" (Ibídem, fs.89). El malogrado fin de estos proyectos, que fueron atribuidos a la oposición de Casal, le costó a este último, según el Dr. Mariano Zavaleta, ser implicado por el Teniente Asesor Letrado Juan José Bazán, el Comandante Juan Antonio Zavala y Delgadillo, y el Coronel José de Espínola y Peña, en la cruel matanza de 75 indios Mbayás prisioneros, cometida por el Comandante Luis Bernardo Ramírez y el Sargento Mayor José Miguel Ibáñez. Del Casal fué detenido y dirigido preso con escolta a Montevideo, prisión de la cual salió absuelto en 1799 de culpa y cargo (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.42, Exp.10; Interior, Leg.40, Exp.3; y Tribunales, Leg.121, Exp.15).

⁵⁹ Mariluz Urquijo, 1987, 625.

⁶⁰ Acevedo, 1972, 257. Era padre de Leandra Ximénez Lobatón, mujer del Marqués de Buenavista Don Fernando Venero y Moscoso, y abuelo de Juana Venero Moscoso, mujer del Corregidor de Chayanta y Tesorero General de Cruzada Francisco Rodríguez Dávila (AGN, División Colonia, Potosí, Leg.4, Sala IX, 6-3-1).

⁶¹ estaba vinculado con la Casa santiagueña de los Paz de Figueroa, por estar casado con Josefa de Urtubey, hija del Cap. Pedro de Urtubey, quien pasó a América con el Gobernador Martín de Jáuregui en 1689, y de Mariana Paz de Figueroa. Eran padres del R.P. Bernabé Echenique, a quien equivocadamente se le adjudicara la autoría de los *Laudatione* Quinque (Furlong, 1937, 1952), de Juan Alejandro Echenique, marido de la viuda de Felipe Crespo, Doña Marquesa Antonia de los Reyes, y de Clara Echenique, mujer del Alcalde Provincial Coronel José Martínez de Candia, natural de Galicia. Era Clara a su vez madre de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez (CC, 1938, III, 229; LC, 1968, 223). Gerónimo Luis de Echenique intentó contraer una sociedad o compañía para el tráfico de mulas por \$300.000 con Don José Cabrera, salteño, y con Don Manuel Prego de Montaos, residente en Potosí, comprando uno en Córdoba, invernando otro en Salta, y el otro vendiendo, remitiendo el dinero, y llevando la cuenta en Potosí, la cual no tuvo efecto por la desgraciada muerte del primero (Learte, 1926, 197). La desgraciada muerte de Gerónimo Luis de Echenique a la que alude Learte (1926) ocurrió a comienzos de 1754 y fue "desgraciada" por tratarse de un suicidio mediante ahorcamiento motivado por la profunda frustración que le infligiera la derrota política a manos del Gobernador de Córdoba, al suspender éste los oficios y varas concejiles, que su familia monopolizaba (R.P. Pedro Juan Andreu al R.P. Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766, Archivo Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.47). En cuanto a Prego de Montaos es de destacar que terminó por adquirir en Potosí un ingenio de moler metal llamado Pampa a los herederos de José Ascasubi, probable pariente del vecino de Córdoba Marcos Ascasubi. En 1758 se le

inició a Gerónimo Luis un juicio post-mortem por insania (AHC, Escribanía N.1, Leg.331, Exp. 1; Leg.346, Exp. 2).

⁶² Alcalde de Primer Voto en 1757, hijo del Teniente General de Gobernación y Maestre de Campo Don Juan de Echenique, nacido en España, y de María Antonia de Cabrera y Carvajal, casado con María Josefa de Molina y López del Barco, hija de Lorenzo Molina Navarrete y Tejeda y de Luisa López del Barco; y hermano de José Santiago, Gerónimo Luis, José Gregorio y Catalina de Echenique y Cabrera (LC, II, 1968, 203; III, 1969, 145). Fueron padres de Francisco Xavier Echenique Molina, marido de Rosa Tablada y Otáñez, y de José Echenique y Molina, marido de Magdalena de las Casas y Ferreyra, hija del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jayme, y de Agueda Ferreyra Lasso de la Vega (AN, 1964, 151). Magdalena de las Casas era a su vez hermana de Francisco Antonio y de Estanislao de las Casas (AHC, Escribanía N.1, 1753, Leg.315, Exp.13). Los cuatro hermanos Echenique Cabrera eran cuñados del Alcalde de Hermandad Manuel Noble Canelas y Cortés, y de Ignacio de Carranza y Herrera Velazco (CC, 1936, III, 229). Francisco Xavier Echenique y Molina y Rosa Tablada, fueron padres de María Josefa Echenique nacida en Noviembre de 1765, mujer del Alcalde José Benito de Acosta, fallecido sin sucesión, de Gervasia Echenique, mujer de Lucas Dícido y Zamudio, y de Petrona Isabel Echenique, mujer del comerciante Francisco del Signo y San Román (LC, II, 205). Juan Agustín de Echenique mantuvo un pleito por tierras con su tío Gregorio de Echenique en 1743. A raíz de dicho pleito, el Gobernador de Córdoba Matías de Anglés libró en 1743 un despacho para que el Alcalde de Primer Voto Capitán José Moyano Oscariz prendiera y embargara todos los bienes de los hermanos Juan y Gregorio Echenique "...por el disgusto que se le informó a SS. avíamos tenido entre ambos usando en el de armas violentas" (AHC, Escribanía N.1, Leg.295, Exp.8). Recién en 1766 los hermanos Gregorio y José Echenique alcanzaron una transacción (AHC, Escribanía N.1, Leg.356, Exp.7).

⁶³ contrajo primeras nupcias con María Rosa Arzaga, padres de María Rosa Echenique, mujer de Nicolás Azcoeta, y segundas nupcias con Margarita Villafañe, riojana, padres de María Luisa Echenique, mujer de Juan Bautista de Isasi y Molina, padres estos últimos de María Ignacia de Isasi, mujer del Sargento Mayor de la Nobleza y Maestre de Campo Estéban Montenegro (CC, 1938, III, 229 y 233; y LC, II, 203).

⁶⁴ Félix Cabrera Célis de Burgos era hijo de Félix Cabrera y Cortés y de Dionisia Celis de Burgos, y se casó con María Isabel de Zeballos y Suárez de Velazco, hija del comerciante avecindado en Buenos Aires Juan Antonio de Zeballos. Era padre de Nicolás Cabrera Zeballos, casado con María Tomasa de Allende, hija del General Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicentileo de la Rosa y Carranza (Calvo, 1924, 74). Félix Cabrera Celis era hermano de Bartolina Cabrera, mujer del Maestre de Campo Francisco Figueroa Mendoza, hijo del santiagueño Sargento Mayor Juan Figueroa Mendoza y de Ana Suárez de Cabrera; y de Francisca Cabrera Celis, mujer del Maestre de Campo Vicente Moyano y Oscariz (Calvo, 1936, I, 240; y LC, III, 195).

⁶⁵ Teniente Tesorero, Superintendente de la Santa Cruzada, Juez de Minas, y Alcalde de primero y segundo voto (AN, 1964, 86). Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de María Ferreira de Acevedo, poseedor este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Fué casado luego de 1744 con María de Allende y Losa. Era hermano de María

Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de Villamonte, padres de Estefanía y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; de José de Arrascaeta, casado con María Roldán y Allende; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta. Gregorio Arrascaeta era primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón, casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; y LC, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5). La herencia de Gregorio Arrascaeta tuvo toda suerte de incidentes, comenzando con su sobrino Justo Arrascaeta, quien disputó la propiedad de la estancia denominada la Yerba Buena, que hubo Don Gregorio por herencia de su hermano el Arcediano Dr. Marcos Arrascaeta (AHC, Escribanía N.3, Leg.42, Exp.16). Estos incidentes se extendieron a la herencia del primer Arrascaeta, procedente de España, que en su oportunidad cobrara el Coronel Marcos José de Larrazábal, al extremo que Juan de Hormaeche solicitaba en 1816 se le exhibiera su testamento (AHC, Escribanía N.1, Leg.447, Exp.2).

⁶⁶ Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de María Ferreira de Acevedo, poseedor este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Hermano de Gregorio Arrascaeta, de María Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de Villamonte, padres de Estefanía y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta. José Arrascaeta era primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón, casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; y LC, II, 143). Era marido de María Roldán y Allende, hija del comerciante y Comisario General Bernardo Roldán y de María de Allende y Losa; cuñada del comerciante Felipe de Haedo y de la Sota; y padres de José Manuel de Arrascaeta y Roldán, marido de la porteña Tomasa Mantilla, hija del santanderino Diego Mantilla de los Ríos, y de Juana Inés de Fresneda y Esquivel, propietarios de una chacra en el pago de la Matanza, Provincia de Buenos Aires (CC, II, 113).

⁶⁷ Adquiere el oficio de Regidor en 1730 (AHC, Escribanía N.2, Leg.18, Exp.4). Probablemente pariente de Don José Ascasubi, dueño del ingenio de moler metal denominado Pampa, en Potosí, y marido de María Ortega, cuyos herederos venden el ingenio a Manuel Prego de Montaos, socio de Gerónimo Luis de Echenique (Learte, 1926, 197). A Marcos Ascasubi le es abierto el juicio sucesorio en 1777 (AHC, Escribanía N.3, Leg.29, Exp.20). Según Lascano Colodrero (1968), la mujer de Marcos Ascasubi era Rosalía de las Casas y Ponce de León, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario Ignacio de las Casas y Jaime, y de Teresa Ponce de León; hermana de Teresa de las Casas, mujer del Comisario de Caballería Joaquín de Mendiola, dueño de la mayor arria de mulas a Potosí; y media hermana de Estanislao de las Casas, marido de María Ignacia Pavón, suegro éste de Benito Mariano de Zavalía, Francisco Javier Alvarez y Arias, y José de Echenique y del Barco (LC, II, 151).

⁶⁸ Hijo del Capitán Luis de Molina Navarrete y Tejeda y de Isabel de Garay y Peralta; sobrino de Lorenzo Molina Navarrete y Tejeda, casado con Luisa López del Barco; del Sargento Mayor Alonso Molina Navarrete, casado con Ana Gutiérrez de Toranzo; de Juana Molina Navarrete, casada con el

Cap. Francisco López del Barco; y de Petronila Molina Navarrete, mujer del Alcalde Francisco Garay. Casó en 1724 con Josefa Rosa de la Sierra y Cuerno, hija del Alférez Juan Antonio de la Sierra y Cuerno y de Paula de Losa Bravo y Peralta (LC, II, 1968, 203; y III, 1969, 145).

⁶⁹ Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el cargo hasta de 1775 (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr. Emilio Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y Acevedo, 1972, 253-267). Fué también encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrirre y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (LC, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

⁷⁰ Entre los partidarios de Estéban y León se encontraban el Regidor Juan Moyano, Pedro Urtubey, José de los Reyes, Felipe Crespo, Juan Arana, Felipe Guarasas, Francisco Garay, José Lauro Alvarez y el Sargento Mayor de la Nobleza Estéban Montenegro (Acevedo, 1972, 259).

⁷¹ *Ibídem*.

⁷² Casó con María Teresa de las Casas y Correa, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario, y dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y Ferreyra. Era concuñado del Escribano Clemente Guerrero (LC, II, 142). Guilledo remata el oficio de Alguacil Mayor en 1753 (AHC, Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26, Exp.6). En 1758 fué encausado y condenado por la Real Audiencia de Charcas conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena, Manuel de Castro, y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique, por la conducta observada respecto del Comisionado Sebastián de Velasco. Guilledo fué suspendido en el ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a 30 leguas de Córdoba (Acevedo, 1972, 258). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

⁷³ Hijo de Angel Antonio de la Bárcena, y de Gabriela Goyechea, casado en primeras nupcias con Francisca Fernández, la misma que fué hostigada por el Alcalde de Primer Voto Francisco de Armesto y Allende, y en segundas nupcias con Teresa de Funes y Allende, hija de Ambrosio Funes y Bustos de Albornoz y de María Ignacia de Allende y Vicentelo de la Rosa (LC, 1936, I, 194). Padre del Coronel Manuel de la Bárcena, llamado el "Tuerto Bárcena", célebre por sus crueldades durante las guerras civiles. Juan Antonio de la Bárcena fué compañero del Alcalde Provincial José Martínez (Learte, 1926, 217), y fué quien iniciara ante el Virrey de Lima en 1768 la causa criminal contra el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero, y ante la Real Audiencia de La Plata en agosto de 1769 la causa criminal contra Fernando Fabro, Administrador de la Junta de Temporalidades de Córdoba, el mismo que había secuestrado los bienes de los Jesuitas (AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, Legajos 2 y 7, Sala IX, 21-9-3, y 21-10-2). Por mano de Bárcena el Cabildo de Cordoba había iniciado en Lima en 1768 instancias judiciales contra Campero. (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental

donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

⁷⁴ nacido en Lugo, Galicia, y designado administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes del Tucumán en 1769, fué hallado luego de fallecido, culpable de dejar la Renta casi quebrada (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 411, fs. 21. Ver sus datos familiares en Lazcano, 1936, I, 118). Más luego, en 1782, mientras fuera administrador en Córdoba se le hallaron también deficiencias en las cuentas (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590). Efectivamente, una vez fallecido, el Contador Francisco de Urdaneta, de la Real Renta de Tucumán, descubrió que el Coronel había dejado la Renta fallida con un alcance (déficit) del orden de los \$2600. Marido de Dominga Carreño Bazán, de origen riojano; y padre del Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes de San Juan, Juan Manuel de Castro y Carreño, quien tuvo a su cargo defender la memoria de su padre y en representación de sus hermanos y sobrinos cuestionó por "injusta y fantástica" dicha suma (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590., fs. 39).

⁷⁵ mencionados anteriormente.

⁷⁶ Acevedo, 1972, 258.

⁷⁷ Hijo del Gobernador de Armas Juan José Iramain y de Pascuala Bailona Díaz Gallo, y marido de Paula López de Velasco y Sánchez de Zambrano, hija del Maestre de Campo José López de Velasco y de Magdalena Sánchez Sambrano y Maldonado de Saavedra (CC, III, 661; y Figueroa, 1927, 21).

⁷⁸ Acevedo, 1965, 184.

⁷⁹ Hijo de Manuel Fernando Bravo de Rueda y de Inés Santillán. Su madre, al enviudar, contrae segundas nupcias con Manuel de Palacio y Amavíscar. Era Jose Bravo de Rueda casado con María Roberta Suasnábar, hija del Maestre de Campo Francisco Antonio de Suasnábar, Alcalde en 1767 y Tesorero Juez Oficial Real en 1771, y de Petrona de Paz y Figueroa (hija de Miguel Paz y Figueroa y de María Díaz Caballero). José Bravo de Rueda era hermano del Alcalde de primer voto y Comandante de Armas Diego Bravo de Rueda, casado con María Josefa Goyechea y Frías. María Roberta Suasnábar era hermana de Gabriela, casada con José Pelayo de Alcorta; de Victoria, casada con el Comandante Gregorio Díaz; y de Margarita, mujer de José de Olaechea (Figueroa, 1927, 104, y 119).

⁸⁰ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.147, Exp.2, fs.3v.

⁸¹ artículo 73 de la Real Ordenanza de Intendentes (Lynch, 1967, 199).

⁸² En la Francia y la España del Antiguo Régimen esta institución era denominada avocación (De Tocqueville, 1982, 94; Enciclopedia Universal Ilustrada, t.XIV, pp.791ss.; y Enciclopedia Jurídica Omeba [Buenos Aires], I, 1030).

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.20, Exp.536.

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco. Sobrino del Brigadier Diego de Hesles

Campero, Secretario del Virrey del Perú Conde de Superunda, Don Diego de Hesles Campero. Marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y Campero, y padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marqués de Yavi Fernando Campero; sobrino de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes (Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; y primo hermano del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero (Cutolo, II, 74; y III, 50; Lohmann, 1947, II, 377; y Acevedo, 1969, 94). Según Acevedo (1969), Campero utilizó la expulsión de los Jesuitas como medio para envolver a todos los que se opusieron a sus manejos del Ramo de Sisa (Acevedo, 1969, 117).

⁸⁷ Acevedo, 1969, 16, 32, 64 y 97.

⁸⁸ AGN, División Colonia, Interior, Leg.35, Exp.18 (sin foliar). Los capitulares que firman el pedido de inhibitoria fueron Fermín de Arredondo y Lobatón, Francisco Olegario de la Mora, Benito Ramón Carrillo, Sebastián Antonio de Villalta, Juan Francisco Centurión, José Estéban de Arza, Francisco Antonio de los Santos Rubio, y Juan Baleriano de Zevallos.

⁸⁹ *Ibídem*.

⁹⁰ *Ibídem*.

⁹¹ AGN, División Colonia, Criminales, Leg.16, Exp.27, f.32-34.

⁹² AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.133, Exp.12, fs.24.

⁹³ abuelo materno de quien fuera Gobernador de San Luis Jacinto Videla Poblet.

⁹⁴ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.103, Exp.12, fs.26v.

⁹⁵ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.240, Exp.19, fs.33v.

⁹⁶ AGN, División Colonia, Criminales, Leg.2, Exp.3.

⁹⁷ Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, serie IV, t.III, 27 y 63, citado por Carbia, 1930, 56; y Vidal, 1937, 34.

⁹⁸ Fontana, 1962, 78.

⁹⁹ Hijo de Pedro Nolasco Correas y Villegas y de Magdalena Corvalán y Chirinos, marido de Magdalena Almandós, y cuñado del Teniente Coronel Francisco Javier de Rosas, de Bernardo Ortiz, y de Francisco Segura (Calvo, V, 39; y Morales Guiñazú, 1939, 73).

¹⁰⁰ Hijo del Alcalde Felipe Gamboa Avendaño, bautizado en Vizcaya, y de Josefa Videla y Puebla; cuñado de Manuel Segura; medio hermano del Dr. Manuel Ignacio Molina Videla; y sobrino político de Antonio de Ferramola (Calvo, IV, 351; y Morales Guiñazú, 1939, 297).

¹⁰¹ Hijo de Gregorio Santander. Cuando en 1787 pretendió desposarse con María Gerónima Coria, su padre le opuso disenso judicial (AGN, Tribunales, Leg.208, Exp.27).

¹⁰² Hijo del Maestre de Campo Manuel Maciel, natural de Corrientes, y de Isidora Fernández de

Valdivieso; padres de Juana Maciel, mujer de Nicolás del Campo, sobrino del Virrey Loreto; y hermano de María Isabel Maciel, que casó con Melchor de Echagüe y Andía; de Dominga Maciel, que casó con José Fernández Valdivieso; y de Domingo Maciel, quien casó primero con Ventura del Casal, en segundas nupcias con su sobrina Antonia Maciel y Valdivieso, y en terceras nupcias con Josefa López Pintado (Azarola Gil, 1940, 134; y Crespo Naón, 1983, 73).

¹⁰³ Cervera, 1979, 529.

¹⁰⁴ Comandante del primer regimiento de Milicias del Tucumán. Hijo de Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y de Claudia del Campo Avila; hermano de Bartolomé Santos, Ignacio Inocencio y Juan Gregorio Aráoz; marido de Josefa Paz de Figueroa, hija del encomendero de Silipica Maestre de Campo Juan Paz de Figueroa, y de Gregoria Ibáñez del Castrillo; cuñado de Francisco Solano, Domingo, y Juan José de Paz y Figueroa; y conuñado de Gaspar de Goncebat y del Maestre de Campo Roque Jacinto López de Velazco (Calvo, 1924, 286ss.; 1939, 177ss.). Era padre de Pedro Antonio Aráoz, del R.P. Diego Miguel Aráoz, Cura Vicario de Monteros, y del Dr. Miguel Ignacio de Aráoz, Cura de la Iglesia de Famaillá. Según el Cura apóstata Francisco José Marcano y Arizmendi, Diego Ignacio de Aráoz extrajo del Colegio Jesuítico del Tucumán "...barias alajas, y toda la librería, fingiendo se la han robado, hasta han extraído varios cuadros y entre ellos dos grandes el uno de nuestro Patriarca San Ignacio de Loyola, para su Casa y estancia" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Sus hijos se enfrentaron duramente a raíz de la herencia del padre.

¹⁰⁵ Teniente Coronel del segundo regimiento de Milicias de Tucumán. Marido de Francisca Antonia Núñez de Herrera, hija de Pedro Núñez Herrera y de Andrea Moreno Briceño; y padres del Congresista de Tucumán Pbro. Dr. Pedro José Miguel Aráoz, y de Josefa Aráoz, mujer del Maestro de Postas Francisco Borja Helguero Rodríguez (Calvo, 1936, I, 77; Pereira Lahitte, 1966; Murga, 1979, 223; y Corominas, 1987, ítem 161).

¹⁰⁶ Hijo de Bartolomé Aráoz y del Campo y de Catalina de Echávez y Elorriaga; marido de Catalina Sánchez de la Madrid, hija del Teniente Gobernador del Tucumán Francisco Sánchez de la Madrid y de María de Villafañe y Guzmán; y padres de Miguel Ignacio, marido de María Gramajo y Lucena; del Comandante de Armas y Coronel Francisco Xavier, marido de María Ignacia de Aráoz López; de María Petrona, mujer de Francisco José Díaz Vélez; de Mercedes, mujer de Julián Ruiz Huidobro; de Juan Antonio, marido de Josefa Córdoba y Gutiérrez; de Catalina, mujer primero de Juan José de las Muñecas y Alurralde y luego del Alcalde de Segundo Voto José Fermín Ruíz Poyo; de Pedro Nolasco, marido de Narcisa García Guevara; y de José Manuel de Aráoz, marido de Nicolasa Figueroa Mendoza y Moreno Briceño (Calvo, 1936, I, 68 y 246; Díaz de Molina, 1946-47, 45). Catalina Sánchez de la Madrid era hermana de Francisca Xaviera, mujer del Sargento Mayor y Provincial de la Santa Hermandad Juan Francisco Deheza y Helgueros, natural de Laredo, España. De todos sus hijos, indudablemente fué Petrona, la mujer de Díaz Vélez, la que dejó la descendencia más relevante desde el punto de vista del parentesco.

¹⁰⁷ Según Pedro Antonio Aráoz en carta al Visitador General Diego de la Vega, el Cura Diego Miguel Aráoz entorpeció el cumplimiento de los dos testamentos de su padre "...sobornando al Subdelegado que fué, en ese tiempo, y al abogado fiscal, de manera que ocultando bienes y abultando costos y gastos, bino a quedarse el referido mi hermano con 6 o 7 mil pesos que importan los bienes.

Este principio me ha parecido conveniente poner en la alta comprensión de V.S. por que de éste dimana todas las iniquidades que a cometido dicho mi hermano, como tengo suficientemente alegado en autos, y justificado la cría de yeguas, que dejó mi padre cuando falleció, de estas dimanan las mulas que este Subdelegado tiene embargadas, como la cría de Bacas bastante número, una y otra especie se hizo dueño el prefijado mi hermano sin llamarnos a los herederos, ni contar, ni saber las cantidades con todo el derecho de las marcas, las que ocultó en los inventarios que hizo" (Pedro Antonio Aráoz al Visitador General Diego de la Vega, Tucumán, 10-VIII-1803, AGN, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

¹⁰⁸ Casó en Diciembre de 1754 con María Josefa de la Cerda (Corominas, 1987, ítem 150).

¹⁰⁹ Miguel Aráoz al Gobernador de Buenos Aires, 1770 (AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

¹¹⁰ Alférez Real, hijo del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieyra), y casado en 1752 con María Ignacia de Toledo Pimentel, hija del Sargento Mayor y Alcalde Ordinario Luis de Toledo Pimentel y de María Ledesma Valderrama (Corominas, 1987, ítem 137). Era hermano de Teresa Domínguez, la mujer de Don Fermín Texerina y Barreda, los cuales fueron suegros de Manuel Carranza y Manuel Posse, este último nacido en Camariñas, La Coruña, en 1744 (Avila, 1920, 69, y 112). La mulata Catalina de Herrera le inició a Simón Domínguez ante la Real Audiencia de Charcas una demanda por su libertad y la de sus hijos (AGN, Tribunales, Leg.6, Exp.6; Leg.236, Exp.9).

¹¹¹ citado anteriormente.

¹¹² Titular del Mayorazgo de Guazán. Administrador de la Hacienda Guazán, Andalgalá. Pretendía que la Real Hacienda le devolviera la cesión que le hizo a los Padres Jesuitas para que se fundase un Colegio en el Valle de Catamarca (Miguel Aráoz al Gobernador de Buenos Aires, 1770, AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6). A su muerte, accedió al mayorazgo su sobrino Salvador Díaz de la Peña, marido de Francisca Xaviera Ramírez, natural de San Felipe, Chile, y padre de Marcelo Antonio Díaz de la Peña, marido de Josefa Figueroa Ceballos, de Agustina Díaz de la Peña, mujer de Miguel Molina; y de Juana Díaz de la Peña, mujer de Segismundo Boter y Villar. Según Vilgré (1977) el General Luis José Díaz de la Peña mantuvo fuera del mayorazgo valiosas haciendas en Andalgalá. Así Santa Bárbara, alias La Toma, Julumao, y San Pedro Nolasco, alias El Molino, en Tucumangasta, también Andalgalá, las regaló a su sobrina Bonifacia Díaz de la Peña, cuando casó con Don Manuel de la Madrid (Vilgré La Madrid, 1977, 306).

¹¹³ Hijo del General Francisco Sánchez de la Madrid y de María de Villafañe y Guzmán, y hermano de Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid y de María Sánchez de la Madrid, mujer de Francisco Xavier Cabrera (AGN, Temporalidades de Tucumán, Leg.5, Sala IX, 22-2-5). Viudo de Claudia Aráoz, casó en segundas nupcias en 1758 con Clara de Paz y Aguirre, natural de Santiago del Estero, hija de Domingo de Paz y de Gregoria Aguirre (Corominas, 1987, ítem 181). Sánchez de la Madrid era simultáneamente tío carnal de Catalina Aráoz, la mujer del Veinticuatro Fermín Ruiz Poyo; cuñado y deudo consanguíneo con José González Thames; primo hermano por su madre de María Josefa Villafañe, mujer del Maestre de Campo José Fermín de Molina y López; tío de la mujer del Alcalde José Velarde; y tío carnal de un yerno del Alcalde Sargento Mayor José de Figueroa Mendoza y Cabrera. Dueño del Potrero Río Blanco, por compra a las Temporalidades (Avila, 1920, 257).

¹¹⁴ Natural de Cádiz, hijo de José de Porcelo y de Salvadora Zuaso, marido de Rosa González, hija del Capitán Francisco González, natural de Santiago de Chile, y de María de Abreu y Figueroa, y suegro de Juan de Zamalloa, natural de España (Corominas, 1987, ítem 1 y 131).

¹¹⁵ El Cabildo de Tucumán al Gobernador de Buenos Aires Juan José Vértiz, 12-III-1772.

¹¹⁶ Francisco Xavier Sánchez de Madrid al Gobernador Juan José Vértiz, 31-V-1773 (AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

¹¹⁷ Natural de Llanes, Asturias, dueño de la mina San Francisco de Asís, en San Antonio de los Cobres, provincia de Salta, quien trajo treinta barreteros del Potosí. En 1802 solicitó auxilio a la Real Hacienda para continuar el beneficio de la mina San Francisco (AGN, Tribunales, Leg.65, Exp.43). Era hijo de Ignacio de Thamés y de Ana Gonsález de la Borbolla y Lamadrid, y se casó en 1755 con Francisca Javiera Sánchez de la Madrid Villafañe, hija del General Francisco Sánchez de Lamadrid y de María de Villafañe y Guzmán, y viuda de Juan Francisco Dehesa y Helgueros. Francisca Javiera era cuñada de Francisco Javier de Cabrera, vecino de Córdoba, y de Miguel de Aráoz (Luque Colombres, 1942, 38; y Corominas, 1987, ítem 155, 101, y 35). Fueron padres del Dr. José Ignacio Thames y de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid, mujer de Pedro Nolasco de Córdoba y Gutiérrez (Calvo, III, 208). Dueño de las tierras de Yerba Buena (Avila, 1920, 252). Era también tío de José Colombres y Thames, nacido en Blanes en febrero de 1749, quien era hijo de Bartolomé Díaz de Colombres y del Castillo, bautizado en Llanes, España, y de su hermana Josefa de Thamés y Gonsález de la Borbolla (Calvo, III, 199; Pereira Lahitte, 1966, 79-82).

¹¹⁸ Hijo del Maestre de Campo Miguel de Molina y de Agustina López, casado en primeras nupcias en 1747 con Agustina Cháver Domínguez, hija del Teniente Gobernador, Justicia Mayor y Capitán a Guerra General Diego Domínguez y de Teresa Rodriguez (Viera o Vieira), y en segundas nupcias en 1755 con María Josefa Villafañe, hija del Teniente Gobernador Diego de Villafañe y Guzmán y de María Corvalán y Castilla; y hermana del R.P. Diego León Villafañe, S.J., jesuita expulsado, que retornara al Tucumán desde su exilio en Roma. Era concuñado en su primer matrimonio de Fermín Texerina, de Francisco Xavier Villafañe, y de Juan López Ríos (Corominas, 1987, ítems 118, 156, 196 y 214), y en su segundo matrimonio de Francisco Antonio Zorroza y de Martín León García (Corominas, 1987, ítems 157, 184 y 206). Fué padre del célebre abogado y patriota Manuel Felipe de Molina, casado con María del Tránsito López de Velazco, y del poeta R.P. José Agustín Molina (Avila, 1915, 298-302; Garro, 1900; Ponssa, 1912; y Tonda, 1966, 1967;).

¹¹⁹ Francisco Xavier de Villafañe al Teniente de Rey Diego de Salas, 30-XI-1773, Tucumán (AGN, Sala IX, 22-2-6).

¹²⁰ Sargento Mayor del primer regimiento de Milicias de Tucumán. Casa con la viuda de Juan José de las Muñecas Alurralde, Doña Catalina Aráoz y Sánchez de la Madrid, hija de Miguel Aráoz y de Catalina Sánchez de la Madrid (Calvo, 1936, I, 77). En 1778 Francisco Texerina y Barreda y Pedro Aráoz lo demandan por mal desempeño en sus funciones de Administrador de Correos (AGN, Interior, Leg.3, Exp.15). Poseía la estancia Yerba Buena, que fuera de los Jesuitas (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Según el Cura apóstata Francisco Marcano y Arizmendi, Ruiz Poyo cambió "...el Divino Señor que estaba en la Sacristía, por uno mediano, y la madera y tablazón que tenían los expulsos en la carpintería la extrajo dicho Poyo para su casa, y parte della le dió a José Antonio Molina, con la que acabó su casa...Las demás tierras respectivas a las Estancias dicen las repartieron de Limosna a los

sobrinos de la mujer de Poyo y del Vicario [Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20).

¹²¹ ver AGN, División Colonia, Criminales, Leg.47, Exp.9.

¹²² Ravignani, 1937, I, 49.

¹²³ Cervera, 1907, II, 913; Silva, 1937, I, 175; y Sáenz Valiente, 1952, 208-209.

TOMO VII

CAPITULO 10

LAS GRATIFICACIONES EN LA CONDUCCION DE LOS CAUDALES DE ORO Y PLATA COMO MECANISMOS DE CORRUPCION. EL CASO DEL SITUADO ASIGNADO A BUENOS AIRES POR LAS CAJAS REALES DE POTOSI EN EL SIGLO XVIII.

(fue publicado en 1989 bajo un título ligeramente distinto en Historia [Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile], 24, pp.287-317);

En este capítulo, me he propuesto aplicar los esquemas ensayados por Pietschmann (1982,1987) para analizar y explicar la corrupción existente en las colonias españolas de América. Para examinar cómo el abuso de los poderes legales por parte de los miembros de la burocracia colonial ayudó a debilitar la dominación española en América es preciso explorar aquellos cargos públicos donde se contemplaban mecanismos discrecionales de reclutamiento y participación de sus miembros, como era el caso de los conductores de los Situados Reales. Para ello distinguiremos en este trabajo como corrupción sólo aquellas actividades de funcionarios que violaban la confianza puesta por el público en los mismos. El cohecho o soborno, el nepotismo, favoritismo, o clientelismo, entrarían en esta definición de corrupción.

Como es sabido, la principal fuente de acumulación de capital durante la vigencia del comercio colonial se fundaba en las diferencias de precios generada en el intercambio de mercancías y monedas. Estas diferencias dieron lugar desde los mismos inicios de la colonización española a crónicas defraudaciones y estafas que reflejaban en su forma más aguda y patética las contradicciones secundarias por la renta minera entre los Mercaderes de Plata y los comerciantes españoles, vecinos de Lima o Buenos Aires, transitoriamente residentes en Potosí. Asimismo, existieron en el Alto Perú, y en general en todo el mundo colonial hispanoamericano, diversas fuentes oficiales de recursos donde se alimentaba la especulación financiera, y la tentación de defraudar o estafar al fisco real. Estas fuentes oficiales fueron fundamentalmente las Cajas Reales, la Compañía de Azogueros, los Situados Reales, la Real Renta de Correos, la Bula de la Santa Cruzada, y la Renta de Tabaco y Naipes.

El premio de la moneda doble.

Es sabido también que el valor de los diversos tipos de moneda pese a su equivalencia general

sufría de oscilaciones en su oferta y demanda que provocaban fluctuaciones en los premios o primas con que unas monedas se canjeaban por otras. De ahí que el lugar geográfico elegido para cancelar los compromisos adquiridos y la naturaleza de la mercadería introducida incidía en el tipo de moneda utilizado. Cuando la paga era hecha en el Alto Perú, por lo general era hecha en moneda columnaria o doble, y si en Chile en doblones de oro. Si se trataba de saldar deudas contraídas por introducir en el Alto Perú aguardiente, yerba, mulas, o textiles de las provincias abajeñas, el pago por lo general se hacía en moneda sencilla. Mas si se trataba de géneros importados la deuda se debía saldar en moneda doble. Por su naturaleza de circulante menudo, la moneda sencilla vino a sustituir o desplazar en el mercado interno a la moneda doble, la cual constituía el dinero-mercancía por excelencia para saldar las importaciones del comercio exterior. La moneda cobrada a los comerciantes del interior que compraban géneros de Castilla a crédito en Buenos Aires, era canjeada en el Alto Perú a moneda doble y remesada a este puerto por los apoderados o consignatarios de los comerciantes porteños o peninsulares, funcionando así como base o respaldo monetaria de un circulante compuesto por moneda sencilla. Este circulante implicaba un mecanismo multiplicador que convertía los medios de pago en un múltiplo de la moneda doble. Era también utilizado por los funcionarios peninsulares que arribaban a sus lugares de destino para saldar las deudas contraídas para viajar y hospedarse, y por los comerciantes que llegaban al Alto Perú para saldar sus deudas con los Oficiales de la Real Hacienda en los numerosos puestos donde bajo fianza habían quedado adeudando los derechos de sisa y alcabala.¹

Las oscilaciones del premio de la moneda doble obedecían a que las tres Mercancías de Plata existentes en Potosí especulaban con la partida de los diversos Situados, los cuales debían estar compuestos exclusivamente por moneda doble, dado que el premio de la misma era más alto en Buenos Aires que en el lugar de partida. Entre la moneda doble (o de ocho y cuatro reales) y la sencilla (de 2, 1, 1/2, o 1/4 real) no había diferencia de fino o ley ni tampoco de peso salvando la proporción, pero si existió una diferencia de volumen, siendo mayor en moneda sencilla. También existió un premio a favor de la primera, que oscilaba según en qué momento o lugar se concertaba. El premio de la moneda doble, a la inversa de las tasas de interés, era más alto en los puertos de salida, y más bajo en tiempo muerto (tiempo de ausencia de navíos en los puertos) y cerca de las Casas de Moneda. Durante el tiempo muerto en Buenos Aires el premio que se estilaba alcanzaba al 3%, y en tiempos de navíos oscilaba entre el 5 y el 15%.² En Chile, en 1737, el premio de la moneda doble alcanzaba al 2% y en Potosí, donde había más abundancia de moneda doble el premio debió haber sido menor. En igual fecha, en Buenos Aires, el premio llegó al 6%, en 1778 en la Colonia del Sacramento alcanzó al 17%, y en Brasil al 25%.³ En la tarea de introducir ilegalmente mercadería procedente de la Colonia del Sacramento la moneda doble tuvo un rol protagónico. Por cada peso fuerte o doble correspondían 750 reis en lugar de los 640 reis que correspondían a un peso sencillo de ocho reales. Finalmente, en 1772 se impuso en Buenos Aires por Real Orden un premio del 3%. En una palabra, mientras que a un peso doble se lo estimaba en Buenos Aires en 1778 en 8 1/4 reales, es decir con un premio del 3%, en la Colonia del Sacramento se lo llegó a estimar en 9 3/8 reales de plata, es decir se le aumentaba el equivalente de 1 3/8 de real por cada 110 reis, o el equivalente a un premio del 17%.⁴ También existió un premio entre el oro y la plata, a favor del primero, que oscilaba entre el 7% y el 8%. Esta oscilación estaba en función de la abundancia o escasez de la plata. La escasez de moneda de plata hacía que bajara el premio del oro, y viceversa, su abundancia hacía que su premio subiera.⁵

En épocas excepcionales, como fué la rebelión de Tupac Catari, el premio de la moneda doble en Potosí alcanzó al 4%. En una muy ilustrativa carta escrita desde Potosí por Josef Beláustegui a Juan de Lezica y Torrezuri el 16 de marzo de 1781 el primero le manifestaba "...toda la plata que tengo en mi poder la he reducido a doblones aunque me an costado al 4% pero con todo doi mil gracias pues en una carguita caminara todo".⁶ Pero no siempre y en todos los lugares, este premio era respetado. En la

provincia de Córdoba, Agustín de Olavarrieta, funcionario del Tribunal de Cuentas, declaraba en un litigio acontecido en agosto de 1805, que en dicha provincia "...se considera del mismo valor la plata fuerte que la sencilla o macuquina".⁷ De dicha realidad, Olavarrieta deducía "...sin violencia"

"...que siendo el peso fuerte en Córdoba de igual valor al que se compone de monedas menores,...,el peso fuerte de esta Capital hace par, o no es de más valor que el peso de Córdoba, bien sea en una moneda de rostro o formado de las menores monedas que corren en aquella provincia".⁸

El control de los Situados Reales y de Comercio.

El dispositivo que más se prestaba a mecanismos de defraudación y estafa era el control de los Situados Reales y de Comercio.⁹ El control de estos Situados recaía en los Situadistas, responsables de transportar los subsidios a los Presidios o plazas fuertes y los caudales públicos y privados a los puertos, para su remisión a España. Los situadistas a su vez, estaban considerados como una suerte de Maestres de Plata "...depositarios del común del Comercio, que contraen la obligación explícita en los conocimientos, de entregar lo que reciben, a sus dueños o consignatarios, por el estipendio que entre los contratantes se estipula".¹⁰ Andrés de Ibieta, como apoderado de Juan Bautista Villegas, Juez Subdelegado del Partido de la Puna en la Provincia del Tucumán, en un litigio que contrajo con un vecino de Jujuy llamado Tomás Joseph Gómez reputaba a los Situadistas

"...como a unos Maestres de Plata en quienes se depositan todos los caudales y mercancías, y en cuya buena fé se afianza la fiel tradición de cuanto conducen con sus despachos y registro; mirados a estos conductores con cualquiera de los dos conceptos, es inconcuso que tienen una obligación estrecha de hacer la tradición pronta y liberal de todo cuanto conducen y que sino lo ejecutan se hallan en precisión de sufrir el rayo de la ejecución hasta que puntualmente lo cumplan".¹¹

La demora en partir el Situado de Potosí.

Entre las causas que hacía que los Situados fueren vulnerables a la defraudación y la estafa estaban: la demora en partir de Potosí, la innumerable suerte de presiones a las que estaban sujetos quienes eran responsables de su control, y la catadura moral del apoderado designado por el Presidio de Buenos Aires frente a las Cajas Reales de Potosí. El tiempo que tardaba el apoderado del Presidio de Buenos Aires en obtener en Potosí moneda doble a cambio de la moneda sencilla, que también recibía de las Cajas Reales, era el tiempo que se demoraba el Situado en partir, y el tiempo que el Banco de Plata aprovechaba para hacer "trabajar" el dinero. Por ejemplo, en 1748 por mandato del Virrey de Lima se ordenó remitir a Buenos Aires con el fin de subsidiar las labores de defensa 116 mil pesos, para cuyo despacho le pidieron los Oficiales Reales a Isidro José Navarro diese más de 80 mil pesos en plata doble.¹² En carta a Nicolás de la Quintana y Echeverría, Veedor General del Presidio de Buenos Aires, Isidro J. Navarro le expresaba el 9 de mayo de 1748 que "...aunque los tenía enzurrados para el situado fué preciso se demorase hasta reemplazarlos en dobles por este motivo se ha hecho preciso la detención".¹³ La operación de reducir la moneda sencilla a doble se practicaba reduciéndola primero a barras, en Oro, donde como vimos los derechos de avería eran mucho más bajos que en Potosí, para luego reacuñarlos en moneda doble.

Las presiones para designar el Conductor del Situado.

Las presiones para designar el Conductor del Situado, que sufría el Apoderado del Presidio de Buenos Aires de parte de los Oficiales Reales de Potosí, del Gobernador de Buenos Aires, del Virrey del Perú, y de la Real Audiencia de Charcas, eran infinitas. En oportunidad en que regenteaba la Procuraduría del Presidio de Buenos Aires Isidoro J. Navarro, éste le detallaba a Quintana en Mayo de 1750 que

"...en fuerza de los empeños al Asesor del Virrey [Francisco de Hervoso] por una parte y por otra el empeño del Secretario me hallo bien estrechado sin saber lo que debo executar ha vista de la obligación que me corre de servir al Sr. Marcos [Riglos]".¹⁴

En virtud de los compromisos adquiridos con Marcos José de Riglos, Navarro le manifestaba a Quintana

"...contemplo no podrá habilitarse para volver a esa ciudad hasta el año que viene, que iré proporcionando la cosa a fin de ver si puedo complacer a V.md., porqué se me hace muy duro hauer de faltar a la palabra que tiene uno dada".¹⁵

También el primer apoderado del Presidio de Buenos Aires luego de la quiebra de la Casa de los Navarro, el R.P. Miguel Saloguen S.J., sufre la presión del propio Presidio en la selección del conductor. En 1752 Quintana le reclama a Saloguen elija a Francisco Cabrera como Conductor del Situado. Pero Saloguen se disculpa aduciendo en abril de 1752 "...con arto sentimiento mío" no poder tener lugar el pedido ni para el presente ni para el Situado que le sigue pues "...ha tres meses que tengo dada palabra, en fuerza de los empeños de dos Oidores de Chuquisaca".¹⁶ El mismo Juan Francisco Uzal S.J., el siguiente Procurador del presidio de Buenos Aires, no dudaba en Enero de 1753 que había en la selección del Conductor del Situado "...muchos empeños para sujetos de esta Villa [Potosí],...como Don Manuel Prego de Montaos,¹⁷ Don Pedro Maquiriain, Don Joseph de Lezica,¹⁸ y otros, y aún los mismos Sres. Oficiales Reales con preferencia el Sr. Marqués de Casa Palacio".¹⁹

La presencia de gratificaciones, regalías, o propinas.

Lo que hacía que estas presiones fueren una fuente de corrupción era su naturaleza extorsiva debido a la presencia cuasi-institucionalizada de gratificaciones, regalías, o propinas. La gratificación era precisamente aquello que se daba a algún funcionario por encima del sueldo o salario que debía percibir.²⁰ A los efectos del cobro del Situado Real en las Reales Cajas de Potosí, los apoderados del Presidio de Buenos Aires debían facilitar a los Oficiales Reales de dichas Cajas suculentas gratificaciones. Estas recompensas o propinas dieron siempre lugar a controversias acerca de su monto y de la oportunidad de su pago. La discusión acerca de la oportunidad del pago revela la desconfianza mutua que se prodigaban ambos, el apoderado del Presidio y los Oficiales Reales de Potosí. En Mayo de 1751 Isidoro Navarro en carta a Quintana, denuncia que estuvo necesitado de "...proferir no les había de dar la gratificación asta que no me enterasen el Situado".²¹

Es evidente que los Oficiales Reales de las Cajas Potosinas extorsionaban a las autoridades del Presidio de Buenos Aires, en el otorgamiento de los correspondientes Situados, con la excusa de las supuestas órdenes procedentes de Lima y las necesidades financieras de otras Cajas subsidiarias. Dichas órdenes incluían todo tipo de argucias. Cuando en Mayo de 1751, Navarro denuncia la falta del entero de los dos meses que restan del Situado de 1749 advierte que "...como todos estos años no se han enviado las certificaciones que está prevenido deben venir con las listas, parece a tirado el Virrey a que se retengan los dos meses que se deben".²² Las obligaciones financieras para con otras cajas

particulares y privilegiadas de la Real Hacienda le quitaban a veces al Presidio de Buenos Aires la prioridad en el otorgamiento del Situado. Cuando en Febrero de 1754 Uzal soborna a los Oficiales Reales con \$200 a cada uno, fué para que antepusieran la paga del medio situado "...a todas los [situados] que tienen que hacer a Oidores de Chuquisaca, y al de los cien mil pesos para el Marqués de Valdelirios en que ahora andan apurados por falta de plata".²³

No siempre los Oficiales Reales de la Caja Potosina comulgaban al unísono en sus mezquinos intereses. De los tres miembros que la componían (Factor, Contador, y Tesorero) el Contador Marqués de Casa Palacio debía recibir por parte del apoderado del Presidio un trato excluyente debido a "...los buenos oficios que ha practicado en beneficio de ese Presidio". Estos buenos oficios que debían ser premiados --seguramente logrados merced a su parentesco con el Corregidor Santelices-- consistían en no haber sido "...cómplice en la maldad que tienen executada los otros dos".²⁴ Sin embargo, nada podía hacer un solo Oficial Real si los otros dos estaban unidos y opuestos al Presidio de Buenos Aires. A juzgar por la misiva del 19 de febrero de 1754 "...será muy conveniente el que a sus dos compañeros Factor y Teniente de Tesorero se les den \$500 a cada uno por cada año, porque si ellos [dos] se unen..., nada hará solo el Marqués, que por eso me persuadió ahora a que les diese siquiera a \$200 a cada uno, por la necesidad en que se hallan".²⁵ Las regalías solían alcanzar hasta los mil pesos por Oficial Real en cada Situado.²⁶

Cuando cambiaba el apoderado del Presidio de Buenos Aires, las órdenes respecto a las regalías a distribuir entre los Oficiales Reales solían alterarse, provocando ello la consiguiente angustia en los mismos. En Octubre de 1753 el nuevo apoderado Uzal le anuncia a Quintana que desde Chuquisaca el Tesorero José Manrique, hermano de Pedro Manrique, cuya actuación veremos más adelante, "...suspira por su antigua regalía...de los mil pesos en cada situado pero yo hago que no oigo".²⁷

La mezquindad en la distribución de las regalías solía traer todo tipo de ojeriza. Cuando en Febrero de 1754, otras Cajas subsidiarias ponen a los Oficiales Reales en aprietos financieros, Uzal le cuenta a Quintana que

"...juzgo muy importante el darles algo con el secreto que ahora lo hize, y así todos quedarán contentos, siendo cierto que me miraban muy mal todos ellos, menos el Marqués, por la grande cortedad con que anduve en el Situado antecedente".²⁸

La distribución de estas recompensas padecía asimismo de una estratificación interna. En el caso de oficiales de menor rango como los escribanos, las regalías eran por cierto mucho menores, alcanzando a lo sumo \$50 por cabeza cada tercio del Situado. Este monto debe haberse considerado como muy mezquino por cuanto al tenor de la carta de Diciembre de 1753 Uzal le revela a Quintana que el anterior apoderado Saloguen "...estuvo enfadado de que no hubiesen agradecido aquellos \$50 que les repartió".²⁹ Aparentemente, estos oficiales menores especulaban con que los nuevos apoderados del Presidio ignoraban el monto de las regalías que les habían dispensado los apoderados precedentes. En el caso del Oficial Robles, que tan "siniestramente" le protestara a Quintana por el monto de las regalías recibidas, le hacen exclamar a Uzal "...que yo [Uzal] solo practiqué lo que mi difunto compañero [Saloguen] dejó entablado en el último tercio que cobró y en que sólo gastó en estos oficialejos y escribano los \$50 que constan de la Cuenta".³⁰

La renovación de los Oficiales Reales de la Caja de Potosí no obstaba a que, en algunos casos --cuando aún faltaba la resulta del Virrey para la remoción de algún Oficial Real-- se continuara por las dudas en el pago de la regalía respectiva al Oficial por remover. Luego que la Casa Navarro quebrara, el Marqués de Casa Palacio recomendaba en mayo de 1757 a Uzal que se le retribuyera en algo a

Isidoro Nvarro pues aún "...persevera en su empleo". En la misma misiva, Uzal le aclaraba a Quintana que "...si me alargare algo en este particular de gratificación a estos caballeros, y a tanto Ministril de la Caja, será a más no poder, y por necesidad de adelantar el tiempo en la prontitud de la paga, y con la mira de dejarlos gratos para la subsecuente".³¹

La prontitud o brevedad en el transporte del Situado era la condición más importante para ser tenido por un Situadista exitoso.

Una vez arribado el Situado al lugar de destino --Buenos Aires-- se abonaba el mismo directamente a los comerciantes acreedores, sin que la plata pasara por los Oficiales Reales. Esto último se reconoce por la falta de entrada de situados en los Libros Manuales de las Cajas Reales de aquel tiempo. De ello se infiere que los Oficiales Reales de las Cajas de Buenos Aires no corrían con los pagos de la tropa del Presidio, sino que los Situados "...venían dirigidos a los mismos acreedores, sin causar a los Oficiales Reales el trabajo de la administración de este caudal, ni el de su cambio y reducción a moneda sencilla, ni riesgo de fallas, ni su reposición".³² Luego, con esa moneda doble tan apreciada, obtenida como cancelación de las deudas de la tropa del Presidio, los mercaderes o comerciantes residentes en Buenos Aires, citados anteriormente, adquirirían mercadería ilegal a los comerciantes portugueses de la Colonia del Sacramento.³³

La designación del apoderado del Presidio de Buenos Aires en las Cajas de Potosí.

En las vicisitudes del Situado, la designación del apoderado del Presidio de Buenos Aires en las Cajas de Potosí también jugaba un rol crucial en la vulnerabilidad de los Situados a la defraudación y la estafa. Durante la larga gestión de la Casa de los Navarro, como Mercaderes de Plata y apoderada del Presidio de Buenos Aires, los apoderados o procuradores variaron en una sola oportunidad. En mayo de 1748 Isidro J. Navarro le sugiere a Quintana acepte la sustitución del poder en su primo Gregorio Navarro, quien queda con el traje de la Mercancía de Plata conjuntamente con su sobrino Juan Joseph Pérez Navarro, por cuanto "...entrando yo al ejercicio de mi Plaza [de Contador Oficial Real] veré las cosas de adentro y procuraré venser cualquier dificultad para que no se demoren las pagas, y puedan ir los socorros con más brevedad".³⁴ La asunción de I. J. Navarro en dicho cargo significó la exoneración de José Palacios y Santelices --cuñado del Mercader de Plata Antonio Rodríguez de Guzmán. Con la remoción de Palacios de la Contaduría de las Cajas Reales, la facción liderada por el Visitador Herboso e Isidro J. Navarro había logrado consolidar el desplazamiento del Banco de Miguel Antonio Ezcurrechea y su cuñado Pedro Francisco Iribarren, continuadores del Banco de Rodríguez de Guzmán, del mercado de la plata potosina.³⁵ Una vez concretada la sustitución del apoderado del Presidio, Isidro J. Navarro le escribe a Quintana en enero de 1749 agradeciéndole que hubiese quedado satisfecho "de la substitución del poder en mi primo", pues ello le servira de más estímulo "...para que las cosas se procuren arreglar".³⁶ Sin embargo, Quintana no había quedado satisfecho con dichos cambios.

Con motivo de la excesiva demora del Situado de 1750 y el aparente cansancio de Navarro, Quintana le escribía que "...hizo vd. muy mal el hauerse mezclado en esa caxa especialmente hallándose V.M. en la postura en que se hallaba [Mercader de Plata y Apoderado del Presidio de Buenos Aires]". Por toda recomendación Quintana le aconsejaba a Navarro que "...si se hallase forma de poder desaserse de dicha Plaza [de Contador Oficial Real] lo executara dándole el Rey algún equivalente".³⁷ No habiendo dado Navarro señales de vida, y el Situado Real demorado por más de 18 meses, el Presidio de Buenos Aires sospechando lo peor (un desfalco) se vió precisado en Julio de 1751 a revocar el poder y mudar de apoderado. La designación recayó en el Procurador de la única

institución que podía ofrecer credibilidad y confianza: la Compañía de Jesús. Para ello la Compañía escogió al R. P. Miguel Saloguen S.J., a quien Quintana le ordenó inmediatamente en la misma carta que "...ponga en ejecución la entrega de los caudales, que existen en su poder de los 18 meses".³⁸ Asumido el cargo, Saloguen le expresa a Quintana en su primera carta de Septiembre de 1751 "...que lo que el anterior apoderado [I.J.Navarro] ha percibido en estas Cajas y debe al Presidio [18 meses], es lo que me causa más compasión, porque en la presente providencia lo considero perdido".

Aparentemente, el conductor del Situado desaparecido fué Don Pedro Manrique, hermano del Oficial Real Joseph Manrique, y sus cómplices en dicha desaparición Don Isidoro Navarro y Don Juan Antonio Rivera. Esta sospecha se confirma por los términos de la carta que José Manuel Angulo dirigiera al Gobernador Andonaegui desde Santiago del Estero, en enero de 1751, que revelan el destino y las relaciones del controvertido situadista. En dicha carta Angulo gestionaba transporte en el navío de Villanueva para el Caballero Manrique, pues "...va dicho situadista con ánimo de pasear a Europa, para ver a sus parientes, que los tiene en gran auge en la Corte".³⁹ Un año más tarde, en carta dirigida a Quintana, Saloguen le previene en Abril de 1752 que el Tesorero Joseph Manrique "...sospechando lo que puede suceder, con su hermano Don Pedro [Manrique]...envió orden para conseguir licencia de beneficiar esta su Plaza, y ni éste ni los otros dos cómplices...tienen seguridad de la vida".⁴⁰ Por toda medida, y con el fin de rescatar lo perdido Saloguen le hace ver a Quintana "...que necesito del testimonio de dicha fianza [otorgada por el Conde de Casa Real de Moneda] que allá se habrá otorgado, para demandar al que está acá".⁴¹ Un par de años después, y habiendo fallecido el R.P. Saloguen, Uzal le aconseja a Quintana "...que lo que conviene es dar el Poder al que es, o fuere Procurador por la Provincia de Castilla [Compañía de Jesús] en Potosí, y nada más, porque sólo así podrán estar allá sin cuidado".⁴² Finalmente, el Presidio de Buenos Aires confirma su confianza en el Procurador de la Provincia Jesuítica, Juan Francisco Uzal, S.J.. A diferencia de otras ordenes religiosas, lo que hacía de la Compañía de Jesús que gozara de mayor predicamento financiero entre los Capitanes del Presidio era que podían dar dinero a réditos sin necesidad de pedir licencia del Obispo correspondiente.⁴³

No obstante la defraudación cometida, no se encontraron bienes ni deudas a favor de los Navarros que poder pedir o embargar. El destino personal de los Navarro tampoco fué muy edificante. En carta a Quintana, Uzal le informa el 12 de abril de 1753 que uno de los Navarro [Isidro] estaba "...en esta Caja a medio sueldo para comer, y el otro [Gregorio] metido a minero en Lipez, último recurso de los perdidos, en vista de lo cual ninguno de los acreedores se mueve, por considerar ser inútil, y lo perdido perdido".⁴⁴ Uzal no se quedó con los brazos cruzados e intimó a fines de 1753 con Gregorio Navarro con el fin de descubrir la verdad. Mas Navarro "...claramente dice que nada hay, ni sé como el pobre se mantiene en esta Villa, después que volvió de Lipez adonde habrá pasado a trabajar una Mina". En cuanto a Isidoro "...va pasando con su medio sueldo de Oficial Real en la Caja, insensible a todo lo demás, echando la culpa a Don Gregorio, y este al primero, sobre la quiebra pasada".⁴⁵ Don Isidro perseveró en su empleo hasta mediados de 1757, pero en julio de dicho año exhaló su último suspiro, a juzgar por una misiva de Uzal a Quintana, donde aquel le relata que

"...el día primero del corriente [1-VII-1757] como a las diez del día se llevó Dios a Don Isidro Navarro, después de todas las disposiciones cristianas a que lo preparó el Padre Rector de este Colegio, en cuya Iglesia se enterró por lo mismo de ser pobre en realidad",⁴⁶

Ni lerdo ni perezoso, Uzal, presintiendo el fallecimiento de Navarro, le había escrito el 27 de junio, en defensa de los intereses del Presidio de Buenos Aires, al Visitador General Ventura de Santelices y Venero,

"...presentándole sigilosamente una Petición para precaver cualquier substracción de bienes o papeles, y con efecto puso su Señoría todo el conveniente resguardo hasta la hora en que espiró, y en la misma pasamos en Persona a la Casa con escribano y echando llaves a todo, dejando en ella al Alguacil Mayor para custodia, se retiró su Señoría hasta que pase todo el funeral, y se empiezen los inventarios, a que he de asistir, y en las horas que no puedo, quedará persona de mi satisfacción que tengo nombrada".⁴⁷

Sin perjuicio de los inventarios, y a ojo de buen cubero Uzal estimaba:

"...lo que por mayor hemos visto llegará al valor de 60 mil pesos, unos dicen más y otros menos, y lo que juzgo es, que separada la dote de su mujer, que toca al hijo clérigo, no sera mucho lo que sobre".⁴⁸

Viendo la mayoría de los acreedores de la Casa Navarro que el Presidio de Buenos Aires era el acreedor que contaba con el mayor y mejor derecho de preferencia, los Oficiales Reales comenzaron a esgrimir en 1757 la argucia de que existía una cuenta por la cual se "saca no deber nada de situado la Casa de Navarro al Presidio, antes lo alcanza en cierta cantidad".⁴⁹ Más aún, era tanta la oposición que se levantó en Potosí contra la deuda que Uzal le manifestaba a Quintana en Julio de 1757 que

"...es conveniente el que allá no se pierda tiempo remitir dichos instrumentos (certificación de las partidas que Don Gregorio recibió en esta Caja) bien instruídos y claros, porque es mucha la oposición que hay aquí contra dicha deuda..."⁵⁰

Tanta era la oposición que había en Potosí contra el pago de la deuda al Presidio de Buenos Aires, que hasta al Visitador Santelices (a quien Uzal confesaba tener de su parte)

"...lo hacen dudar de la certidumbre de ella; y temo que me han de echar fuera del concurso [de acreedores], por falta de cargo justificatorio, y de poder para demandar el débito",⁵¹

Más aún, en carta posterior dirigida a Quintana, y no dando crédito a lo que escuchaba, Uzal le refiere que en Potosí "...antes se infiere que los Navarros anticiparon Caudal propio al Presidio como lo dicen aquí muchos, lo que yo no puedo creer, cuando vimos la quiebra que sucedió [a Navarro] por falta de dinero".⁵² A excepción del Visitador Santelices que parecía mantenerse neutral, Uzal cuenta, entre consternado y por que no decir también algo acobardado, que en Potosí:

"...Todos,...,son aquí contra mí, o contra la deuda, y los Oficiales Reales más, sentidos de que yo hubiese pedido la Declaración de ella [o quiebra], y si eran responsables los Oficiales Reales que hicieron la paga a Don Gregorio, como vería V.md. en la copia de dicho escrito que incluí en el Correo ordinario esto lo sintieron mucho, como me han asegurado; y aún el Oficial Mayor Agreda anda prometiendo que ha de sacar en limpio a favor de la Casa de Navarro cosa de 80 mil pesos que debe el Presidio por que aún no cargó en la cuenta que sacó las gratificaciones que acá daban a Oficiales Reales y otros gastos de cobranza".⁵³

En cuanto al deudor supérstite, Gregorio Navarro, Uzal le informa a Quintana que

"...Don Gregorio se hace muerto, y dice que no recibió nada de situado, de que sólo disponía su primo Don Isidro, de quien sólo era un mero cajero: y Don Isidro dijo en su enfermedad que en el Situado no había tenido arte ni parte..."⁵⁴

Confundido Uzal por tanta contradicción, termina por suplicarle a Quintana que lo ayude a entender este entuerto en términos tales que por sí solos revelan el clima que entonces se vivía en Potosí: "...compóngame V.m.d. estos dichos de hombres como aburridos de sí mismos".⁵⁵ Pero en su terco afán por averiguar la verdad del desfalco, Uzal le inquiere un mes después a Quintana

"...remita la cuenta formal que en tres anteriores cartas tengo pedida, con cargo y data de lo que aquí recibieron los Navarros, y lo que allá se recibió remitido por ellos, con expresión de la cantidad recibida en esas Cajas, con qué persona, por qué año de sueldos, y en qué tiempo llegó allá el conductor",⁵⁶

Estas preguntas obedecían a una suerte de trabajo de inteligencia iniciado por el propio Uzal con el fin de detectar quién finalmente se había quedado con los dineros reales. En ese sentido Uzal le preguntaba a Quintana:

"...se necesita saber esto de lo que llevó Domingo Basavilbaso y Don Pedro Manrique, que fueron los dos últimos conductores de situados que salieron de Potosí por los Navarros, el primero en el año 49 y el segundo a fines del 50, y si estos entregaron en Buenos Aires lo que dice la cuenta del Oficial Mayor que lo ignoro totalmente..."⁵⁷

La oposición de los demás acreedores --posiblemente acreedores fraudulentos-- a las diligencias judiciales provocadas por la deuda de los Navarro, al no responder a los traslados que los Jueces de la Causa mandaron darles, "...no hay forma de hacerles mover".⁵⁸ Recién en 1759, y por diligencia del apoderado de los Presidios de Buenos Aires y Lima se trajo al cúmulo del concurso

"...los \$8300 que ya reconoce el Sr. Joseph de Herboso sobre sus Ingenios de esta Rivera en cuyo havío los había gastado su hermano Don Joaquín Herboso, valiéndose para ello de unos tejos de oro que tenía del difunto D. Isidoro en confianza".⁵⁹

De aquí que la caída de la Casa Navarro también arrastra a José Herboso y Figueroa, dueño de los Ingenios Chaupi y Jesús María, Visitador de Potosí entre 1746 y 1747, Contador Principal del Tribunal de Cuentas de Lima a partir de 1749, hermano de Francisco de Hervoso, Asesor del Virrey del Perú José Antonio Manso de Velazco, Conde de Superunda, y suegro del Conde de San Miguel de Carma.

La historia de la vulnerabilidad del estado colonial.

La historia de la vulnerabilidad del estado colonial al cohecho o soborno presentaría aparentemente excepciones notables. Una de ellas habría sido la de Ventura de Santelices y Venero, Corregidor y Visitador General de la Villa de Potosí. La conducta de este alto funcionario colonial en esta estafa o desfalco fué por demás controvertida y contradictoria. Por cierto, apenas Santelices hizo su entrada en la Villa, enviado por el Virrey del Perú Conde de Superunda, para que se obstaculizaran las relaciones con el Río de la Plata, se suscitaron toda suerte de vicisitudes en la consecución del situado.⁶⁰ Aparentemente, la más perjudicada por la presencia de Santelices fué la Casa de los Navarro. Como consecuencia de los entretelones del Situado de 1750, Isidro Navarro le contaba a Quintana, que la conducta de Santelices "...es incomprensible traiendo a todo el pueblo al resortero, hallándose los vecinos bien desabridos que no se sabe en que pararán sus providencias ni como las recibirá el Gobierno".⁶¹ Pero luego de la quiebra de la Casa de Navarro, el nuevo apoderado del Presidio de Buenos Aires R.P. Saloguen le reconoce a Quintana en septiembre de 1751

"...que el que exista en la Real Caja lo que ahora se me ha de entregar, se debe al Sr. Ventura Santelices, que impidió por su Decreto el que se entregase cosa alguna del Situado a los

Navarros antes de ahora, y que deben esos Sres. Jefes, principales, no sólo dar las gracias a SS, sino informar a SM de la rectitud y justificación de este exemplar Ministro".⁶²

Sin embargo, y a pesar de las recomendaciones de Saloguen, parece ser que Santelices se resintió de la conducta de los oficiales del Presidio de Buenos Aires. El resentimiento de Santelices para con el Presidio habría obedecido en primer lugar a que dichos oficiales no hubieran dado crédito a lo que Santelices les tenía escrito sobre los Navarros. A juzgar por los términos de una carta llena de excusas dirigida por Miguel Antonio de Ezcurrechea al Virrey Manso de Velasco, Conde Superunda el 19 de enero de 1754, quién habría escrito dichos Informes no sería otro que el mismo Ezcurrechea, ex- dueño de un Banco de Plata competidor del de los Navarro, y que Santelices no tuvo más remedio que cerrar. En dicha carta Ezcurrechea le pide al Conde de Superunda "...se sirva dispensarme los deslices que pude tener en correr la pluma con fervor en los citados Informes, que fueron nacidos del afecto de buen vasallo, y hablar claro a los soldados [del Presidio de Buenos Aires y la Expedición de Límites]".⁶³

En segundo lugar, dicho resentimiento habría obedecido a la ingratitud que demostraron los oficiales del Presidio de Buenos Aires luego de descubierto el fiasco de la Casa Navarro, al no merecer ni siquiera una carta de agradecimiento por haber contribuido a que las Cajas Reales no entregasen más plata del Situado a los Navarro. Esta ingratitud se manifestó en febrero de 1752 debido a dos circunstancias: La primera y la más personal "...porque no les mereció en su pasaxe la más mínima atención de oferta de si se le ofrecía algo". La segunda circunstancia "...porque estos oficiales del Presidio no hacían el servicio de Su Majestad siendo los agentes de los contrabandos que de la otra banda [Colonia del Sacramento] se metían en esa Ciudad".⁶⁴ En efecto, dichos Capitanes del Presidio eran quienes hacían la vista gorda cuando los comerciantes residentes en Buenos Aires (Manuel del Arco, Miguel Ezcurrechea, Alvarez Campana, Roque de San Martín, Antonio de Guzmán, Carlos de los Santos Valente, Manuel de Olivera Braga, Bartolomé J. de Quiroga, y Francisco Pérez de Saravia) introducían mercadería ilegal desde la Colonia del Sacramento.⁶⁵ Esta última circunstancia, alegada por Santelices, se compadecía plenamente con la Real Orden del Marqués de la Ensenada dirigida el 28 de Julio de 1748 al Virrey del Perú Conde de Superunda, en la cual se ordenaba adoptar precauciones tendientes a evitar el paso clandestino de caudales hacia la Colonia del Sacramento.⁶⁶ Entre esas precauciones, el Gobernador del Río de la Plata José de Andonaégui aplicó mediante el bando del 20 de noviembre de 1748 la decisión del Virrey del Perú de suspender la internación de los enjunques hasta que fuese vendido el fierro, acero y ferretería introducido por la Real Hacienda.⁶⁷

Las argucias esgrimidas por Santelices para obstaculizar la remisión del Situado a Buenos Aires le hacían decir en abril de 1752 al mismo Saloguen --quien como vimos se había visto al comienzo bien impresionado por la conducta de Santelices-- en carta a Quintana que "...este Caballero sólo emplea sus talentos en enredar a todos, vendiéndoles ofertas de palabra, practicando todo lo contrario de lo que ofrece".⁶⁸ La persistente conducta obstaculizadora de Santelices respecto al Situado de Buenos Aires habría obedecido a su interés por otras prioridades. Estas prioridades no serían otras que el rescate de las barras de Oro, las cuales debido a la quiebra del Banco de Iribarren no tenían comprador. En carta a Quintana, Saloguen le expresaba en abril de 1752:

"...Este Caballero que tanto ofrece favorecer a ese Presidio, quiere con la Plata del Situado rescatar las Barras de Oro, y las Piñas de esta Rivera, pues habiendo por su causa, cerrado el Banco de Plata Don Pedro Iribarren, no ay otro que el de la Compañía de Azogueros y este se halla sin bastantes fondos para el rescate y Mercancía".⁶⁹

Las desavenencias acerca del Situado.

Las desavenencias acerca del Situado entre los apoderados del Presidio de Buenos Aires y el Visitador Santelices se prolongaron en el tiempo. En Septiembre de 1752 Saloguen S.J. le manifestaba a Quintana "...que este Caballero me puso todos los Caves [sic] que una perversa intención puede discurrir a fin de aburrirme en la cobranza del último Situado que salió de aquí".⁷⁰ En su empeño por boicotear la gestión del apoderado del Presidio de Buenos Aires, el Caballero Santelices, a juzgar por lo que Saloguen manifestaba a Quintana, no paraba en escrúpulos pues "...su malignidad llegó a quererme desacreditar, y aún publicó que escribiría al General de la Compañía, para que me obligase a renunciar los Poderes de ese Presidio".⁷¹ Para evitar esta campaña Saloguen aconsejaba "...recurrir a S.M. proponiéndole lo que ha ejecutado este Caballero, y lo que en adelante se espera de él, para que ese Presidio no experimente atraso en sus pagos". Este objetivo sólo se podría lograr "...inhibiendo a este Caballero de que entienda en punto de Situado, y por inmediato debe V.S. hacer esta representación al Exmo. Sr. Virrey".⁷²

La animadversión del apoderado del Presidio contra Santelices se extendió, luego de la muerte de Saloguen, al nuevo apoderado Juan Francisco Uzal. En carta escrita a Quintana, Uzal le escribía en Junio de 1753 que la curiosidad y la malicia de Santelices lo obligaban a practicar ciertas "trampas que no lastimaban la conciencia", pues "...este hombre...hasta las conciencias quisiera escudriñar".⁷³ El mismo Santelices en una carta anterior dirigida en enero de 1752 al Gobernador Andonaégui expresaba que "...convendrá mucho que el Padre Saloguen aga sus remesas por tercios, y que ni a él ni a otro que le suceda se le consienta por ese Presidio la menor demora en ejecutarlo así por que la Plata tiene aquí más amancebados que en otras partes por el uso que se puede hacer de ella en cualquiera dilación de remitirla".⁷⁴ En una carta anterior Uzal le advertía a Quintana que "...las raterías y nimiedades de este Ministro nos a dado mucho que sufrir, y es capaz de provocar a un Santo...porque en todo se quiere meter y mandar, y es preciso aguantarlo".⁷⁵ Pero en su nueva urgencia por enviar el Situado cuanto antes, Santelices descuidaba la calidad de la moneda con que debía ser enviado, integrándolo casi exclusivamente con moneda sencilla, cuando debía serlo con moneda doble.

Era tal el control que ejercía Santelices de la remisión del Situado que también obligaba al apoderado del Presidio de Buenos Aires a buscar fiadores para fletar el mismo. Ello le hacía decir también a Uzal en carta a Quintana, de agosto de 1754, "...a todo esto obliga la cicatería y celo indiscretísimo de este Hombre inaguantable, de quien otros dirán bastantes cosas que parecen increíbles, pero las sufrimos, porque así lo permite Dios que sea azote de Potosí".⁷⁶ La desconfianza de Santelices por todo lo que proviniera de Buenos Aires lo inducía a tener a todos sus vecinos "...por malos vasallos". Esta actitud de Santelices lo lleva a Uzal a decirle asimismo a Quintana que "...si el Presidio no consigue del Sr. Virrey el que este Ministro no tenga intervención alguna en el Situado...no habrá hombre de vergüenza que sufra a este caballero que sólo piensa en el daño del prójimo".⁷⁷ No seguro del énfasis puesto en su carta, dos semanas después, Uzal le insiste a Quintana, "...a fin de que este hombre no tenga intervención con el Situado, pues cada día ha de salir con nuevos reparos, según su genio caviloso dispuesto a creer cualquier especie que cuadre a su malicia".⁷⁸

Presumiblemente Santelices, en su premura por enviar el Situado cuanto antes, no comprendía o no quería comprender que el Presidio de Buenos Aires esperaba sólo moneda doble y rechazaba la sencilla. En carta dirigida a Quintana, el 17 de julio de 1754, Uzal le expresaba que Santelices "...no atiende a que la Plata que va para el Presidio llega allá cuando ya la tienen gastada los soldados supliéndosela los [comerciantes] que esperan compensación en la doble, cuando llegue". De no ser de esta manera, "...no hallaría el soldado quien le socorriese su necesidad".⁷⁹ Entre otras medidas,

Santelices había proyectado rebatir \$3000 en la mitad del sueldo de un año. Pero esto a juicio de Alonso de la Vega, Marcos Larrazábal y Agustín Fernández de Pinedo en carta al mismo Santelices de 18 de octubre de 1754 "...es lo mismo que quitarle al mercader el único aliciente que tenía para adelantar el socorro al soldado. Sin éste [aliciente]...es lo mismo que abandonar [la tropa] por nueve meses o más".⁸⁰

Al parecer, una vez fallecido Ezcurrechea, Santelices lo sustituyó en su condición de Asesor con la persona de Miguel de Salcedo, el ex-Gobernador de Buenos Aires. En carta escrita en noviembre de 1754 al Gobernador de Buenos Aires Andonaégui, Juan Francisco de Urtubey le informaba que Santelices "...sigue los dictámenes errados de Miguel de Salcedo por lo que se halla la Villa caminando a su ruina".⁸¹ Los reiterados reclamos de los apoderados del Presidio para emanciparse de la tutela de Santelices parecieran haberse coronado con el éxito recién a fines de 1754. En la carta dirigida a Quintana de diciembre de 1754, Uzal revela que Santelices contestó el 14 en forma

"...disimulada y cautelosa,...no conviniendo la paz y tranquilidad que en ella muestra, con la arrogancia y autoridad que se atribuye en el sobreescrito,...no constando sea mas que Corregidor, Visitador de la Caja, y Superintendente de la Casa de Moneda y Mita".⁸²

Pese a la cautela y disimulo mostrada en su carta, Santelices "...no sabe todavía la Providencia favorable que nos vino de S.E. [el Virrey], que fijamente nada le avisó, ni hace caso de él para la paga del Situado, que es lo que pretendemos".⁸³

Con el tiempo, el Presidio de Buenos Aires dejó de nombrar apoderados, y como por una Real Cédula, tenían facultad los Oficiales Reales de las Cajas de Potosí para hacer por sí solos el pago del Situado, "sin necesidad de Libramientos del Superior Gobierno", comenzaron los Oficiales Reales mismos a nombrar situadistas a su arbitrio. Este nuevo cambio volvió a exponer el aparato del estado colonial al influjo del cohecho y el soborno, para cuyo remedio el Gobierno de Lima acordó por auto del 16 de octubre de 1760

"...que ofreciéndose conducir dinero o efectos de cuenta del Rey, para Buenos Aires u otra parte, se pregonase y sacara a remate, para que los conduzca bajo de fianzas correspondientes el que hiciese mayor beneficio, para evitar colusiones".⁸⁴

De todas maneras, habiendo fallecido el Virrey de Lima, Conde de Superunda en 1761 Santelices perdió influencia y debió renunciar a su cargo, con lo que las defraudaciones y las estafas volvieron a sus andadas, afectando nuevamente a los Situados. En 1761 Alonso Bernardo de León, un comerciante con mercaderías consignadas a su orden, sustrajo en su condición de Conductor de un Situado \$137.938 pertenecientes a la Carta Cuenta de las Cajas Reales de La Paz.⁸⁵ Este Situado estaba destinado a la Villa de Puno, donde dicha cantidad debía ser reducida a barras, para luego ser conducida a Lima por la vía de Arequipa, y ser entregada a Don Francisco Morales, Receptor del Santo Oficio de la Inquisición.⁸⁶ Sin embargo, León derivó el Situado a Oruro, donde luego de reducirlo a barras, enfiló para Buenos Aires con probable destino final en la Colonia del Sacramento. En palabras del Conde de San Isidro "...León condujo su persona desde La Paz a Oruro, y desde Oruro a Buenos Aires extraviando caminos y en calidad de ladrón, lo que no se hace sin extraordinarios costos (es imposible que con menos de \$2.500 hiciese este viaje)".⁸⁷ No obstante su fuga, León fué capturado, merced a los informes enviados desde Santiago del Estero por el Conductor oficial del Situado Juan Tomás de Zegada. Este último, previno a las autoridades para que en caso que los conocimientos por \$51.000 dobles, firmados por Bernardo Sancho Larrea y recibidos por el como Situadista, pertenecieran a León

"...mande V.m.d. chasqui acelerado a Buenos Aires a Don Eugenio Lerdo de Tejada pues es factible espere el dicho León al Situado para recibir la plata, o a lo menos cuando aiga tenido noticias de que van tras de él, dicho Lerdo sepa donde para, para aprehender su persona".⁸⁸

Aprehendido finalmente, y divulgada la noticia de su prisión, Don Faustino Solís y Don Eugenio Lerdo de Tejada manifestaron ciertos tejos de oro y moneda doble que León les había puesto en su poder. En su confesión León declaró que "...la plata doble y los tejos de oro que tenía eran comprados y reducidos con el dinero del Rey, que recibió en la Caja de La Paz [en moneda sencilla]".⁸⁹ Recogidos los caudales sustraídos, los Oficiales Reales alcanzaron a recaudar, incluídos los remitidos a sus acreedores particulares, la suma de \$94.074, restando para completar la Carta Cuenta \$43.874. Bartolomé J. de Chávez, apoderado de los acreedores, declara que "...lo que de él pudo recaudarse no alcanzaba a cubrir lo que los acreedores entregaron [a las autoridades], y este es el descubierto, que hasta ahora están persiguiendo los Oficiales Reales".⁹⁰ A pedido de los acreedores, la moneda doble que se recogió debía ser reducida a sencilla "...vendiendo con el maior adelantamiento el oro que le embargaron, para que engrosado con este beneficio aquel caudal, huviese más sobrante a fauor del concurso".⁹¹

León había sido designado Conductor del Situado por su propio suegro Don Andrés Díez de Medina, "...quien conociéndose principal obligado, puso su persona en una Iglesia para evitar la execución".⁹² Aparentemente, si bien Díez de Medina se había hecho responsable ante las Cajas Reales por el Situado, no era cómplice de su yerno en la sustracción, por cuanto denunció la fuga de éste y luego, a juzgar por las expresiones de Chávez, "...procedió como hombre de bien a descubrir el hurto".⁹³ Esta actitud le valió a Medina "...que lo dejen libre de la sustracción sin perjuicio de la deuda del Rey, que como obligado reconoció siempre en sus pedimentos".⁹⁴ Pero para Chávez, no sólo Medina era inocente de hurto alguno, sino también León, pues "...éste [León] juzgaba que su suegro debía darle una dote más crecida de la que le dió".⁹⁵ Viendo que Medina se obligaba en la Caja Real de la ciudad de La Paz por la cantidad que remitían los Oficiales Reales, León "...quiso lograr la ocasión de aprovecharse de todo lo que le faltaba para completar su dote con aquel caudal que estaba obligado el suegro a entregar en Lima".⁹⁶ Con este ánimo, León remitió separadamente a sus propios acreedores lo que estaba en su poder del producto de las ropas que comerciantes de Lima le habían consignado, "...y emprendió la fuga con parte de la plata del Rey, dejando a Don Andrés para que la repusiese".⁹⁷ La lenidad con que Chávez juzgaba a León habría obedecido a la influencia interpuesta por el fuerte comerciante porteño Bernardo Sancho Larrea. Según el testimonio brindado por Zegada, León había mandado "...por mano de Larrea...una barra a Potosí a la Real Casa de Moneda para que las redujese a plata y me la entregase a mí".⁹⁸ Zegada le prevenía al juez de la causa que le tenía firmados a Larrea conocimientos por valor de \$51.000 en moneda doble para entregar en Buenos Aires a Eugenio Lerdo de Tejada.⁹⁹ Mis sospechas de que Zegada se hallaba en lo cierto y de que Larrea estaba complicado en el desfalco se fundan también en el hecho de que veinte años después, siendo Larrea ya un hombre maduro y habiendo sufrido cárcel en Malvinas por haber solicitado la continuidad del Virrey Cevallos, se lo halló complicado en un grueso contrabando.¹⁰⁰ Con relación a la responsabilidad que le cupo en este fraude a Díez de Medina, Chávez hallaba que aquél, por estar obligado a la Real Hacienda, también lo estaba a los acreedores, pues "...tuvo la culpa de que su yerno se alzase con la Carta Cuenta al confiarle la conducción, y permitió que saliese a reducir a barras el caudal que los Oficiales Reales le entregaron en monedas".¹⁰¹ Finalmente, como resultado de esta defraudación a Díez de Medina le fué embargado la totalidad de su patrimonio rural.¹⁰² Y su yerno, el reo León, alias Juan Rodríguez Hidalgo, pudo fugar de la cárcel con la ayuda de su cómplice Bernardo Sancho Larrea, quien le dió libranza de \$34.000 a cargo de Eugenio Lerdo de Tejada. Por dicha complicidad Larrea fué arrestado en la cárcel pública.¹⁰³

El control de la evasión fiscal.

Erigida la Caja de Buenos Aires en 1778 en Caja matriz del nuevo Virreynato del Río de la Plata, como lo era antes la de Lima, el control de la evasión fiscal pasó a Buenos Aires, el corazón del virreinato, y la remisión de los caudales del Real Erario no lo fueron más por razón de situado, sino como sobrante de las Tesorerías de las Provincias arribeñas "...para que allí [en Buenos Aires] se depositen y vuelvan a circular por el Reino, como dispuso la naturaleza con la sangre del cuerpo humano respecto del corazón".¹⁰⁴ Para evitar malversaciones de los caudales reales, las Leyes de Indias mandaban que cuanto caudal enviaban los Oficiales Reales de una Caja Real a otra fuere remitido consignado a los Oficiales de la otra Caja, bajo pena del 4% y perdimiento del oficio si hicieren el envío de otro modo. Por estas transgresiones numerosos Oficiales Reales en toda la América colonial fueron denunciados y procesados. El Río de la Plata no estuvo exento de estos casos de malversación dado los altos premios que se pagaban por el uso del dinero prestado. Tomás Antonio Romero, el conocido comerciante y situadista residente en Buenos Aires, denunció en marzo de 1787 al Superintendente de la Real Hacienda que Gaspar Lozano y Rafael Castellanos, Contador y Tesorero de la Real Caja de Córdoba "...se han hecho delincuentes...por haber incurrido en la pena de confiscación de bienes, privación de oficio y destierro por diez años a los Ministros que negociaren con hacienda del Rey".¹⁰⁵ En efecto, Lozano y Castellanos hicieron una remesa de Córdoba a Buenos Aires de 4000 pesos fuertes. Para ello, ambos Ministros habían reducido los caudales de moneda sencilla a moneda doble "...con sólo el descuento del 1% que costó la reducción, resultando a su favor en el envío un 2%, que quedaba del 3% con que previenen haga el entero por ser notorio y moralmente imposible que se ignore que este premio tiene en esta capital la plata fuerte".¹⁰⁶ Según Romero, quien había sido Situadista por subasta real, los Oficiales Reales debían recibir los derechos en la mejor plata posible y no se debían apropiarse de las sobras de caja, "...entre las cuales no cabe duda que se debe comprender este aumento de premios".¹⁰⁷

La malversación de los caudales reales y privados.

La malversación de los caudales reales continuaron hasta el mismo filo de la revolución. Don Tomás Villota, Asentista del Situado Real, declara en 1807 que Don Indalecio Gonsález de Socasa había despachado desde Potosí un situado real con \$200.000, por medio del Conductor Don Gabriel Cuñado.¹⁰⁸ Detenido Cuñado en Tucumán por haberse anoticiado que Buenos Aires había sido tomado por los Ingleses, cometió la criminalidad de ponerse a jugar a los naipes y perder en la partida. Informado del hecho Villota, dió orden a Don Juan Félix Ezcurra, vecino de Santiago del Estero, y yerno del Ministro de Real Hacienda José Antonio López de Velazco, para que pasase al Tucumán, tomase cuentas a Cuñado, se recibiese del caudal, y lo bajase a Buenos Aires,

"...respecto a que no era prudencia fiar el cuidado de los reales intereses de un hombre [Cuñado] que había caído en tal desgracia,...debiendo sí presumir racionalmente que siguiese en el criminal exceso en que había incurrido, y fuese total la pérdida".¹⁰⁹

Recibido Ezcurra de los caudales del Rey, llegó a Buenos Aires en carretas, con el dinero que se había logrado recuperar de manos de quienes le habían ganado en el juego a Cuñado. Si bien Ezcurra estacionó las carretas frente al fuerte no se presentó en las Cajas Reales como era su deber. Esta ausencia u ocultación que hizo de su persona produjo la presunción de que el caudal del Rey que recibiera en Tucumán de manos de José Gregorio Aráoz no estaba íntegro "...por haber tomádolo él para algunos usos que habrá querido arbitrariamente".¹¹⁰ Esta presunción se confirmó luego, al contarse el dinero y descubrirse la falla.

Amén de los desfalcos sufridos por los situados reales, los situados privados se veían también periódicamente expuestos a desfalcos. En la larga denuncia formulada en 1799 por el abogado Juan José Mariano Barón del Pozo contra diversos funcionarios avecindados en la ciudad del Tucumán, las concretadas contra el Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes y simultáneamente conductor de los caudales del Rey Mariano Soloaga revisten especial relevancia por cuanto aquel se preguntaba "si habiendo sido nombrado Conductor de los caudales del Rey, le entregó baxo la confianza pública 12.000 pesos Don Miguel Amatller y Brancos, comerciante de Potosí, para que los emplease en efectos en esta capital y se alzó con ellos", si habiéndose alzado con este dinero, y simulado a Amatller que estaba haciendo negocio, y que para consumarlo con un buen surtimiento necesitaba \$4.000 más, se alzó también con estos, después que aquel se los remitió", si habiendo "...pasado personalmente Amatller a cobrar este dinero a esta Capital lo encontró en Córdoba donde lo prendió y si habiendo baxado ambos a esta Capital se compuso baxo de fianza", si habiéndose "...habilitado por influxo de los mismos fiadores con factura de efectos de Castilla se alzó también con esta en Salta y Jujuy para pagar a Brancos, dejando en total descubierto a sus acreedores", y finalmente, si habiéndosele "...nuevamente habilitado con la Administración de Tabacos del Tucumán se alzó con todas las existencias del Rey para acabar de pagar a Brancos y demás acreedores".¹¹¹ También la corona subvenía, mediante confiscaciones impuestas a los situados privados, los ingentes gastos guerreros a que la obligaba la situación Europea. Mas a partir del momento en que al fisco le entró a llegar plata de la Aduana de Buenos Aires misma, dejó de recurrir a este impopular expediente. En carta de Jayme Alsina a Carlos Camuso, de marzo de 1809, aquel le manifestaba a éste último, con expresiones suficientemente ilustrativas que

"...desde que ay tormenta en esta ciudad no a venido situado alguno con plata de particulares nada le puedo decir aunque me parece que el Virrey ya no echará mano aunque venga, porque va entrando alguna plata de la Aduana y mas ramos de la Tesorería,...[con lo cual] me parece que no abrá necesidad de echar mano de la plata ajena".¹¹²

El control de las extorsiones de la Junta de Comerciantes de Potosí.

Con la erección del Consulado de Buenos Aires en la década del 90, su Junta de Gobierno entró a controlar las extorsiones de la Junta de Comerciantes de Potosí, en lo que respecta a la elección del conductor del Situado, haciendo más improbables desfalcos como los ocurridos en las décadas del 50 y 60. Esta Junta había aprobado un Reglamento de situados con 17 puntos en donde se estipulaban los términos, condiciones, fianzas, y obligaciones.¹¹³ De flete el situadista cobraba entre 1/4% y 1/2% del valor de la remesa ganando de \$1500 a \$4000 en cada viaje. La condición más objetada por el Consulado de Buenos Aires era la de que los situadistas debían ser oriundos o residentes de Potosí. Esta cláusula generó toda suerte de animosidades en los comerciantes de toda la carrera entre Potosí y Buenos Aires, precipitándose finalmente el conflicto en el seno de la misma Junta de Comercio potosina. Por un lado se hallaban los seguidores de Indalecio Gonsález de Socasa, y por el otro un grupo liderado por el comerciante, regidor y contador Juan de Ybieta y Endeiza, sobrino del José de Endeiza que fuera ajusticiado por los indios en la rebelión de Tupac Amaru. Socasa contaba en 1803 con cuatro paradas de molinos de granos y dos ingenios de moler metal en Porco, habiendo alcanzado para esa época el grado de Coronel y el cargo de Comandante de Infantería en Potosí. El poder de Socasa descansaba en el apoyo que le prestaba una numerosa facción compuesta por vecinos comerciantes de Potosí, Salta y Buenos Aires. Entre los salteños figuraba Pedro de Ugarteche y entre los Potosinos se contaban Manuel Bulúcu,¹¹⁴ Juan Bautista Elorreaga,¹¹⁵ Nicolás Ponte, Nicolás de Oriden,¹¹⁶ Francisco Senavilla,¹¹⁷ y Joaquín Obregón, éste último socio de Juan Estéban de Anchorena y Domingo de Ezcurra. Entre los porteños que apoyaban su grupo se encontraban Anselmo Sáenz

Valiente,¹¹⁸ Juan Estéban de Anchorena, Domingo de Ezcurra,¹¹⁹ el Diputado del Consulado en Potosí Domingo Achúcarro, y Martín de Gainza, éste último Subdelegado del Partido de Atacama. Ybieta en tanto, estaba apoyado por los dueños de ingenios Gregorio Barragán,¹²⁰ y Joaquín de la Quintana;¹²¹ los Diputados del Consulado en Chuquisaca Manuel Fernández de Alonso,¹²² y Domingo Antonio de Achával;¹²³ los mercaderes porteños residentes en Potosí José Ramón de Ugarteche,¹²⁴ Manuel Alejandro Obligado,¹²⁵ Ramón de Aramburu Zavala,¹²⁶ Juan Gonsález y Torres y José Miguel de Tagle;¹²⁷ y los comerciantes minoristas Antonio Gonsález de Ortega, Gerónimo Tudó,¹²⁸ y Miguel de Amatlíer.¹²⁹ Ybieta era un comerciante acostumbrado a operaciones de gran cuantía, dado que entre 1783 y 1800 llevaba contraídas en Buenos Aires siete operaciones de fiado por valor de \$105.000 con comerciantes de la talla de Juan Antonio de Lezica y Domingo Antonio de Achával.¹³⁰ Por el contrario Socasa se había iniciado en el comercio en calidad de mozo de José Ramón de Ugarteche, y fue acusado por Ybieta de "...andar menudeando cintas, hilos, y ropa de la tierra, y otros artículos de este jaez por las inmediaciones del Cuzco, La Paz, y Valle de Sinti".¹³¹ El motivo que dió lugar al conflicto fué la violación del propio Reglamento de Situados citado, por parte de una facción de comerciantes encabezados por Indalecio Gonsález de Socasa, al reelegirse como vocales a quienes aún no habían pasado el hueco, o sea los dos años fuera del cargo requeridos por el Reglamento.¹³² En palabras postreras de Pedro Vicente Cañete, quien antes había apoyado a la facción de Socasa, la causa del conflicto era el

"...continuar perpetuándose en la Diputación de la Azoguería dos de los que fueron separados por igual abuso el año 1801, que después han sido reelegidos, antes del hueco, que mandó guardar la superioridad, y no han cesado, como debieron cesar por enero, de este año, en que correspondió hacer nuevas elecciones, conforme a la Ordenanza 3, título 6, del Reglamento del Banco".¹³³

La deuda acumulada por el Gremio de Azogueros para con la Real Hacienda también le hacía pronunciar a Cañete en 1804 que

"...si he de hablar con mi corazón, debería decir que todo este caudal se halla acumulado y bien escondido entre tres o cuatro azogueros, que los pueden apuntar con el dedo, cuantos han estado en Potosí: porque todo el Mundo ha visto, y está viendo el lujo escandaloso de sus casas, sus ricos menajes, sus cacerías, sus haciendas de campo, y el alto poder que han ganado, por este medio, no habiendo tenido antes de los auxilios ni uno ni otro".¹³⁴

Es evidente que este conflicto no resuelto socavó la unidad del sector minero-exportador, lo cual a su vez afectó el equilibrio de poder en el seno del Consulado de Buenos Aires, beneficiando a aquel grupo de comerciantes porteños que por negociar con cueros y carnes saladas estaba interesado en el librecambio y en el comercio con las colonias extranjeras (Brasil, Angola, Mozambique, etc.). Sin duda, en esta fractura se encuentra la raíz de la fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de la llamada independencia argentina.

NOTAS

¹ Entre los gastos a los que estaban sujetos los funcionarios que arribaban a América estaban aquellos referidos a la financiación de sus viajes, estadías en los Puertos, etc. Para alcanzar sus destinos, los funcionarios peninsulares debían endeudarse con comerciantes que les adelantaban dinero sencillo, a cambio de escrituras donde se comprometían a devolver las habilitaciones en plazos muy breves y con moneda dura o fuerte. En la diferencia entre la moneda dura y la sencilla los comerciantes

les cargaban premios exorbitantes. Tal fue el abuso que en 1790 la corona decidió poner coto a ello habilitándolos de su cuenta y riesgo acudiendo los que necesitaban al Ministerio de Guerra y Hacienda de Indias donde se les otorgaban libranzas a pagar en Cádiz o en la Coruña en las cantidades proporcionales a las clases de empleos y sueldos que llevaran. "A fin de evitar a los Provistos para Indias los graves perjuicios y atrasos que padecen con la frecuente y largas detenciones, ya en la Corte, o ya en los Puertos, por no encontrar en lo general quien los habilite con lo necesario para equiparse, y transferirse a sus destinos, teniendo que sugetarse, quando lo consiguen, a la dura ley que les imponen los Comerciantes, cargándoles sobre la diferencia de la moneda sencilla que les entregan, a la fuerte en que hacen los pagos en América, unos premios exorbitantes, con plazos muy cortos, que en lo común no pasan de treinta a quarenta días de haber llegado a sus destinos, o arribado a los Puertos respectivos de aquellos Dominios, lo que les pone en necesidad de sufrir otras detenciones en ellos para facilitar el pago de sus escrituras, aumentando considerablemente sus empeños con los nuevos premios que les exigen, o de contraer con los Prestamistas obligaciones perjudiciales a la recta administración de justicia, y de los intereses de la Real Hacienda...Madrid, 26 de Febrero de 1790" (AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg. 35, Exp.14).

² AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. A-3, Exp. 13, fs. 10.

³ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-4, Exp. 6, fs. 116 y Leg. S-6, Exp. 17, fs.25v.; y Levene, 1952, 401.

⁴ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-6, Exp. 17, fs. 25v.

⁵ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 101, Exp. 2642.

⁶ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. L-7, Exp. 3. José de Beláustegui era hermano de Francisco Antonio Beláustegui, y se casó en 1782 con María Antonia de Casajús, vecina de Corrientes, hija de Bernardo Casajús y de Rosa Ruiz de Bolaños, padres de Diego Beláustegui (Labougle, 1953, 273).

⁷ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 127, Exp. 3205.

⁸ Idem.

⁹ Entre 1693 y 1802, el Real Situado procedente del Potosí experimenta fuertes altibajos cuyos motivos obedecen a razones muy diversas. En un primer instante, que comienza en 1693, el ramo se halla con un ingreso de \$178.668, manteniendo este nivel intermitentemente hasta 1710 en que comienza una caída vertical registrando su ingreso mas bajo en 1717, con \$1403. Sin embargo, esta caída del subsidio potosino halla su compensación en el situado provincial procedente de Santa Fé (fruto del comercio de la yerba mate), que partiendo de \$40.000 en 1703, va ascendiendo lentamente hasta decuplicarse en el mismo año 1717 en que el situado potosino se hallaba en su peor momento, debido a la inundación que sufriera su ribera y la destrucción consiguiente de sus ingenios.

A partir de 1718 el situado potosino recobra los viejos tiempos alcanzando, con motivo de las hostilidades desatadas contra Inglaterra, el mismo nivel del que partió el situado un cuarto de siglo antes, pero con una diferencia a favor: las remesas dejan de ser esporádicas para tornarse estrictamente anuales. Si bien la anualidad mantiene su nivel, va decayendo lentamente hasta alcanzar su cota más baja con \$44.000 en 1731, con excepción del año anterior en que, por haberse reanudado el conflicto con Gran Bretaña por la confiscación del Real Asiento de Inglaterra, el situado ascendió a más de \$100.000. A partir de entonces, el situado remonta su nivel hasta promediar anualmente los \$80.000.

Desde 1738 en adelante, el situado supera los cien mil pesos alcanzando en 1740, año de peligro de que Buenos Aires caiga en manos Inglesas, los \$262.563.

A lo largo de las décadas del 40 y 50 las remesas promedian los \$125.000. Una vez entrados a la década del 60, y en plena guerra de los Siete Años, el situado alcanza los \$385.000 en 1762 y los \$315.000 en 1763. El creciente estado de vulnerabilidad guerrera hace que Buenos Aires deba seguir pendiente del situado altoperuano, pero a un ritmo siempre mayor superando en la década del 70, por primera vez el millón de pesos.

Es a partir del momento en que Buenos Aires es declarada capital de un virreinato que el Situado Real se duplica recaudando tanto en 1777 como en 1778, unos dos millones y medio de pesos. En la década del 80 el situado vuelve a su cauce natural recaudando anualmente poco mas de un millón de pesos. Luego, entrando en la década del 90, el ramo real asciende lentamente hasta volver a duplicarse en 1795 y 1800, años de serios peligros de ceder a manos enemigas.

¹⁰ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 242, Exp. 7, fs. 32.

¹¹ Idem.

¹² Isidro J. Navarro, sobrino del Maestre de Campo Pedro Navarro, de quien hereda la posición de "Mercader de Plata", estuvo desposado con una sobrina de un antiguo Corregidor de Potosí, el Conde de Belayos. En 1745 deviene Oficial Real de las Cajas Reales de Potosí, Contador Real en 1748 (desplazando a José Palacios y Santelices), Apoderado del Presidio de Buenos Aires en 1749, y Factor Oficial Real desde 1751 a 1757.

¹³ Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1748 (AGN, División Colonia, Presidio, 1724-1785, Sala IX, 27-4-6). Debo esta valiosa información a la gentileza del Coronel Ulises Muschietti, quien dicho sea de paso ha dejado inédita, con su lamentable desaparición, una inestimable recopilación de fuentes para la historia de los orígenes del ejército Argentino.

¹⁴ Navarro a Quintana, Potosí, 20-V-1750 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

¹⁵ Idem.

¹⁶ Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IV-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

¹⁷ dueño del Ingenio Pampa, Administrador de la Renta de Tabacos y amigo personal del Visitador Jaime San Just.

¹⁸ Hijo de Juan de Lezica y María de Torrezuri, vecinos de la Anteiglesia de Cortezubi; marido de Ana Ortega y Carbajal, nacida en Potosí; suegro de Francisco Javier de Riglos, Pablo Ruiz de Gaona y José de Endeyza; y hermano de Juan de Lezica y Torrezuri (Fernández de Burzaco, 1986-90, IV, 144).

¹⁹ Uzal a Quintana, Potosí, 23-I-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

²⁰ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp.411, fs.23. En 1787 la gratificación fué prohibida a todos los miembros de la Real Hacienda (Socolow, 1987, 102).

²¹ Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

- ²² Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6)
- ²³ Uzal a Quintana, Potosí, 19-II-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6).
- ²⁴ Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IX-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6).
- ²⁵ Uzal a Quintana, Potosí, 19-II-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6)
- ²⁶ Uzal a Quintana, Potosí, 6-X-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6)
- ²⁷ Uzal a Quintana, Potosí, 6-X-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6)
- ²⁸ Uzal a Quintana, Potosí, 19-II-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6)
- ²⁹ Uzal a Quintana, Potosí, 25-XII-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6)
- ³⁰ Idem.
- ³¹ Uzal a Quintana, Potosí, 13-V-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6).
- ³² AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 5, Exp.85, fs.181.
- ³³ Barba, 1980, 59-60.
- ³⁴ Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1748 (AGN, Sala IX, 27-4-6).
- ³⁵ Tandeter, 1980, 41, 74. El Coronel de Dragones Miguel Antonio Ezcurrechea fué Alcalde de la Santa Hermandad en 1729, Alcalde Ordinario en 1733, Situadista en 1735, propietario del Ingenio Chaca en la Ribera de Potosí, y auxiliar de Santelices en sus pioneros proyectos de reforma. Ezcurrechea se casa con la hija de Miguel Ondarza, arrendatario del Ingenio Trinidad o San José, y deja por única heredera a su hija Josefa, mujer de Joaquín José de Otondo.
- ³⁶ Navarro a Quintana, Potosí, 16-I-1749 (AGN, Sala IX, 27-4-6).
- ³⁷ Quintana a Navarro, Buenos Aires, 1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6).
- ³⁸ Quintana a Saloguen, Buenos Aires, 19-VII-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6).
- ³⁹ José Manuel Angulo a Andonaegui, Santiago del Estero, 18-I-1751 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.1, Sala IX, 5-9-3).
- ⁴⁰ Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IV-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6).
- ⁴¹ Saloguen a Quintana, Potosí, 10-IX-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6).
- ⁴² Uzal a Quintana, Potosí, 23-I-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6).
- ⁴³ Learte, 1926, 269.
- ⁴⁴ Uzal a Quintana, Potosí, 12-V-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

⁴⁵ Uzal a Quintana, Potosí, 25-XII-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

⁴⁶ Uzal a Quintana, Potosí, VII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

⁴⁷ Idem.

⁴⁸ Idem.

⁴⁹ Uzal a Quintana, Potosí, 12-VII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

⁵⁰ Uzal a Quintana, Potosí, 17-VII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

⁵¹ Idem.

⁵² Uzal a Quintana, Potosí, 2-VIII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

⁵³ Idem.

⁵⁴ Uzal a Quintana, Potosí, 17-VII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

⁵⁵ Idem.

⁵⁶ Uzal a Quintana, Potosí, 2-VIII-1757 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

⁵⁷ Idem. Basavilbaso, conductor del Situado de 1749 llegó a encabezar a un grupo de comerciantes porteños compuesto por Antonio de Larrazábal, Manuel Antonio Warnes, Francisco Rodríguez de Vida y Juan de Lezica y Torrezuri, adversos a los comerciantes que pretendían acentuar la influencia gaditana en Buenos Aires (Manuel del Arco, Pedro de Lea, Francisco Pérez de Saravia, Bartolomé Jacinto de Quiroga, y Antonio de Arriaga}. Para ello, Basavilbaso llegó a sugerir la creación de una diputación del Consulado de Lima en Buenos Aires, cargo que finalmente recayó en Don Antonio de Larrazábal, suegro de Don Joseph de Iturriaga (Mariluz Urquijo, 1987, 77). Larrazábal otorgaba su favor al conocido contrabandista Fernando Escalada, cuya quiebra en 1753 afectó a muchos de los comerciantes avecindados en Potosí, entre ellos a Juan de la Plaza (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.E-3, Exp.13, fs. 58)

⁵⁸ Uzal a Quintana, Potosí, 15-V-1759 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

⁵⁹ Uzal a Quintana, Potosí, 15-V-1759 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

⁶⁰ Mariluz Urquijo, 1987, 62.

⁶¹ Navarro a Quintana, Potosí, 9-V-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

⁶² Saloguen a Quintana, Potosí, 10-IX-1751 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

⁶³ Ezcurrechea a Superunda, Potosí, 19-I-1754

⁶⁴ Saloguen a Quintana, Potosí, 15-I-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

⁶⁵ Barba, 1980, 59-60.

⁶⁶ Mariluz Urquijo, 1987, 62.

⁶⁷ Idem, p. 51.

⁶⁸ Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IV-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

⁶⁹ Idem. Amén del Situado de Buenos Aires las Cajas Reales de Potosí remitían anualmente para el rescate de barras 50 mil pesos a las Cajas de Chucuito, 16 mil pesos al Corregidor de Lipez y una cifra desconocida a las Cajas de Oruro, para evitar así las fraudulentas extracciones de plata sin quintar hacia el Tucumán. Los azogueros en general preferían fundir sus barras de plata en Oruro y Chucuito y no en Potosí por cuanto en las Cajas de aquellas se toleraba que las barras se fundieran de hasta 220 marcos de peso cada una en Oruro, y de hasta 165 marcos en las de Chucuito. Por el contrario, en las Cajas de Potosí, desde que el Conde de Chinchón lo impuso en 1630 y lo confirmara el Reglamento del Banco de San Carlos, los fundidores no podían hacer barras de más de 130 a 140 marcos la mayor. Toda barra que excedía este peso defraudaba al fisco y merecía la pena de 100 pesos ensayados cada una. Pagándose en la Casa de Moneda de Potosí el derecho de avería de la plata producida por el número de piezas y no por peso, a razón de \$5 cada una, aquellos azogueros, aunque fueren de la Rivera de Potosí, que fundían sus barras en las Cajas de Oruro, obtenían pingües ganancias a costa del erario real (Cañete, 1952, 186). El afán del Corregidor Santelices de destinar el dinero de las Cajas Reales de Potosí a la Tesorería de la Casa de Moneda para el rescate de las barras de Oruro obdecía además a las diferencias que por ello obtenía la misma Real Hacienda. En efecto, si bien en Potosí el peso ensayado se pagaba a razón de 146 maravedíes, en Oruro se lo compraba a 143 3/4 maravedíes obteniéndose una diferencia de 2 1/4 maravedíes por peso ensayado (Cañete, 1952, 147 y 127).

⁷⁰ Saloguen a Quintana, Potosí, 29-IX-1752 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

⁷¹ Idem.

⁷² Idem.

⁷³ Uzal a Quintana, Potosí, 20-VI-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

⁷⁴ Santelices a Andonaegui, Potosí, 8-I-1752 (AGN, Sala IX, Potosí, 6-2-6).

⁷⁵ Uzal a Quintana, Potosí, 20-VI-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

⁷⁶ Uzal a Quintana, Potosí, 2-VIII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

⁷⁷ Uzal a Quintana, Potosí, 2-VIII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

⁷⁸ Uzal a Quintana, Potosí, 19-VIII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

⁷⁹ Uzal a Quintana, Potosí, 17-VII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

⁸⁰ Alonso de la Vega, Marcos de Larrazábal y Agustín Fernández de Pinedo a Ventura de Santelices, Buenos Aires, 18-X-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

⁸¹ Urtubey a Andonaegui, Potosí, 13-XI-1754 (AGN, Sala IX, Potosí, 6-2-6).

⁸² Uzal a Quintana, Potosí, 15-XII-1754 (AGN, Sala IX, 27-4-6)

⁸³ Idem.

⁸⁴ Cañete, 1952, 443.

⁸⁵ En La Paz, el 11-XI-1761 dijeron que atento a constar por ella...recibió Alonso Bernardo de León desta Real Caxa para conducirlos en cinco Ramos como son:

\$119.785 pertenecientes a la Carta Cuenta de la Caja de La Paz

\$ 3.887 " " al Ramo de Azogues

\$ 2.963 " " a la Media Anata

\$ 10.811 " " a la Cruzada

\$ 500 " " a la asignación del Conde de Cancelada, que componen la referida cantidad de \$137.938 (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 5, Exp. 75).

⁸⁶ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 5, Exp. 75.

⁸⁷ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 63, fs.57v.

⁸⁸ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 5, Exp.75.

⁸⁹ Idem, fs.65v.

⁹⁰ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 63.

⁹¹ Idem, fs.66.

⁹² Idem.

⁹³ Idem.

⁹⁴ Idem.

⁹⁵ Idem.

⁹⁶ Idem.

⁹⁷ Idem.

⁹⁸ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 5, Exp. 75.

⁹⁹ Idem.

¹⁰⁰ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 20, Exp. 468.

¹⁰¹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 63.

¹⁰² Su patrimonio estaba constituido por la estancia nombrada Cañuma, en el Valle del Totoral, la hacienda Guaiguasi, en el Río Abajo de La Paz, la hacienda de cicales nombrada Calacala, en jurisdicción del pueblo de Coroyco, y la hacienda Yalaca, en la jurisdicción del pueblo de Chulumani

(Yungas). Acerca de la fortuna en bienes inmuebles rurales de Don Tadeo Díez de Medina (Klein, 1985, 199-226).

¹⁰³ Jaime San Just al Virrey, Potosí, 18-II-1762 (AGN, División Colonia, Intendencia de Potosí, Leg.4, Sala IX, 6-3-1).

¹⁰⁴ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 63.

¹⁰⁵ Tomás Antonio Romero al Señor Superintendente de la Real Hacienda, Buenos Aires, marzo de 1787, (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 41, Exp. 1056).

¹⁰⁶ Idem.

¹⁰⁷ Idem.

¹⁰⁸ Casado con Francisca Cau, y padre de José Cuñado. Habiendo enviudado Francisca Cau contrajo segundas nupcias con Alejo Belaúnde, vecino de Jujuy (Ver Cutolo).

¹⁰⁹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 132, Exp. 3310.

¹¹⁰ Idem.

¹¹¹ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 509 al 513.

¹¹² Jayme Alsina a Carlos Camuso, Buenos Aires, 4-III-1809 (AGN, División Colonia, Sala IX, 10-2-2, fs.12).

¹¹³ Tjarks, 1959, 49.

¹¹⁴ Capitán de la Sala de Armas de la Villa de Potosí. Participa en la elección de los Situadistas (AGN, Comerciales, Leg.18, Exp.5). Fiador del Administrador de Tabaco de Potosí Ignacio Crespillo (AGN, Hacienda, leg.86, Exp.2250).

¹¹⁵ Nacido en Abadiano, Durango, Vizcaya, hijo de Juan Bautista de Elorriaga y de Josefa de Urizar, casado con María Leocadia de Segurola, hija de Francisco de Segurola y de María Bernarda de Lezica (Fernández de Burzaco, 1987, II, 278).

¹¹⁶ Hijo de Francisco Ignacio de Oliden y de Francisca Antonia de Erazo, y casado con Prudencia Molina, hija de Francisco Molina (Fernández Burzaco, 1990, V, 59).

¹¹⁷ Alcalde de Segundo Voto de Jujuy, probablemente hermano de Pedro Zenavilla, marido de María Justa Allende y Funes, hija de Benito Antonio de Allende Vicentelo y de María Mercedes Funes (Lazcano Colodrero, I, 28).

¹¹⁸ Sáenz Valiente fué auxiliar de comercio de Juan Martín de Pueyrredón. Ocurrido el asesinato de Pedro de Lagrava (representante de Pueyrredón) en Oruro durante la rebelión indígena de Tupac Amaru, y destruídas la totalidad de las mercaderías almacenadas en esa y otras plazas por el pillaje de los indios, Pueyrredón (padre) comisionó a Sáenz Valiente para restablecer las sucursales arrasadas, por lo que fué ascendido a representante y habilitado con ingentes remesas de mercancías. Finalmente,

Sáenz Valiente se casó con la hija de Pueyrredón (Ver Cutolo).

¹¹⁹ Su parentesco con Juan Ignacio Ezcurra lo desconozco.

¹²⁰ En 1792 le arrienda un ingenio a Manuel Pío García (AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.18).

¹²¹ Dueño del Ingenio Canteros, marido de María Lizarazu, hija del Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de Santiago de Chile, Caballero de Carlos III y Conde de Casa Real de Moneda General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra (Lohmann Villena, 1947, II, ítem 120). Heredero legítimo de Alejandra de la Quintana, que lo fué por testamento de su hermana la Marquesa Bárbara de la Quintana, quien por igual institución hereditaria había sucedido en los bienes de su marido José de Palacios, y tío de Estéban Giráldez [nieto de Antonia de la Quintana] (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.92, Exp.51).

¹²² Regidor de la Villa de Potosí. En 1795 pide permiso para pasar a Potosí (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 6, f.197). En 1800 es procesado por injurias y calumnias (AGN, Criminales, Leg.46, Exp.9). En 1802 le prohíben votar en las elecciones concejiles (AGN, Interior, Leg.52, Exp.18). Ver en Morales (s/f) según Quesada (1988).

¹²³ Nacido en Vizcaya, b. 17-2-1759, hijo de Antonio de Achával y de Ana de Sasturri, y casado con Josefa Barrón, hija de Diego Barrón y de Agustina Berecoechea. Era cuñado de Diego Barrón, Administrador de la Real Renta de Tabacos de Charcas, y primo del Intendente de La Paz y Director General de la Real Renta de Tabaco y Naipes Francisco Ortega y Barrón (Fernández de Burzaco, 1986, I, 33).

¹²⁴ Casado con María Josefa Herrera, padres de José Francisco Ugarteche, nacido en Villa Rica en 1768.

¹²⁵ Obligado fué Regidor y Alcalde Ordinario de Primer Voto en Potosí en 1796, habiéndose casado en primeras nupcias con la potosina Isabel Carrasco de Arrascaeta (Ver Cutolo).

¹²⁶ b.1783, hijo de Adriano de Aramburu Zavala, nacido en Escoriaza, Guipúzcoa, y de Catalina de la Torre (Fernández de Burzaco, 1986, I, 127).

¹²⁷ Dependiente del comerciante porteño José Martínez de Hoz (Romero Cabrera, 1973).

¹²⁸ Contrajo con mercaderes de Buenos Aires entre 1793 y 1796 siete operaciones de fiado por valor de \$25.477 (AGN, Protocolos, Registro 6, año 1793, fs.254v.; Reg.1, año 1795, fs.560v.; Reg.1, año 1796, fs.353; Reg.3, año 1796, fs.372; y Reg.6, año 1796, fs.337 y 329)

¹²⁹ Padre de Alejandra Amatller, quien contrajo una operación de crédito en Buenos Aires en 1809 por valor de \$7105 (AGN, Protocolos, Registro 4, año 1809, fs.32).

¹³⁰ AGN, Protocolos, Reg. 1, 1783, fs. 179v.; Reg.6, 1783, fs.250; Reg. 1, 1784, 305v.,y 334; Reg.6, 1784, fs.190; Reg.4, 1800, fs.19v.; y Reg. 3, 1800, fs.159.

¹³¹ AGN, Sala IX, Comerciales, Leg. 17, Exp. 9, fs.9.

¹³² Tjarks, 1959, 63.

¹³³ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 124, Exp. 3146.

¹³⁴ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 124, Exp.3146

TOMO VII

CAPITULO 11

La imposición fiscal y su impronta en la estructura social. El poder de recaudar impuestos, librar licencias y administrar bienes en el Río de la Plata (1739-1810).

(fue presentado en el Simposio V Centenario, realizado en el marco de las III Jornadas Inter-Escuelas/Departamentos de las Universidades Nacionales de Argentina, celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires en la primera quincena del mes de septiembre de 1991);

Ciertos modelos teóricos se propusieron analizar los ciclos y bloques históricos y las prácticas discursivas instrumentadas en períodos de crisis sobre la base de las presiones fiscales causantes de las crisis de estado. A diferencia de Morse (1964), que fundándose en Max Weber, definía la organización del fisco colonial como un caso de dominación patrimonial, Phelan (1967) le agregaba la dominación carismática y legal.¹ Pero el peligro para la subsistencia del poder patrimonial peninsular --que las presiones fiscales provocaban-- no se originaba, según Bonilla (1981), al interior de la burocracia colonial Borbónica, sino que provenía de la propia estructura económico-social colonial.² Y a diferencia de los análisis y la narrativa de la historiografía clásica acerca de las revoluciones, común a liberales, nacionalistas y marxistas, Trimberger (1978) y Skocpol (1979), propusieron que los fenómenos revolucionarios habrían surgido de una crisis de estado (y no de una crisis social o económica), condicionada por la posición de este en los sistemas internacionales políticos y económicos y por su relación con la clase social dominante.³

En el caso de la América Latina colonial, el clima de corrupción y la consiguiente crónica crisis fiscal habría acelerado las condiciones materiales del fenómeno revolucionario. ¿Como operó esta influencia? ¿que tipo de cambios produjo? Trimberger (1978), una discípula de Theda Skocpol, al referirse a las revoluciones acontecidas en países de capitalismo tardío --como el Japón de la dinastía Meiji, la Turquía de Kemal Atatürk, el Egipto de Nasser y el Perú del General Velasco Alvarado-- adujo que las elites capaces de responder a las presiones externas llevando a cabo cambios sociales revolucionarios --incluyendo reformas agrarias, abolición de tradicionales distinciones de status y rápida industrialización-- eran sólo aquellas cuyos lazos con los grupos propietarios eran débiles.⁴ Al examinar la resultante de dichas revoluciones, Trimberger descubre que ellas alcanzaron, en general, un éxito limitado. Cerrar la brecha que las separaba de las economías centrales requería el desvío de grandes excedentes de la producción de bienes primarios para la inversión de capitales.⁵ Véliz (1984),

uno de los autores perteneciente a la corriente revisionista, les atribuye a dichos funcionarios españoles, a diferencia de los criollos, una supuesta "probidad", y a la prevención de las actividades corruptas un "éxito notable". Estas virtudes habrían generado, según Véliz, en las capas más altas de la sociedad criolla, un profundo resentimiento contra los funcionarios españoles.⁶

Por otro lado, como la explotación de una renta fiscal por parte de los Corregidores era una cuestión sumamente discutible, es muy posible que la defraudación y el cohecho se volvieran una pura necesidad. Para Moreno Cebrián (1976), como el valor en que se vendían los corregimientos en el siglo XVIII creció muchísimo, el desfase existente entre los sueldos y los gastos inherentes al cargo aumentó también en grado sumo, debido justamente a la depreciación del dinero, la baja de su poder adquisitivo, y las constantes usuras a las que estaban sujetos.⁷

Las políticas centralizadoras Borbónicas se verificaron en la facultad de los Gobernadores de confirmar o revocar las elecciones y decisiones gubernativas y concejiles. Entre estas decisiones estaban las de representar al soberano en actos de honor o etiqueta, las de designar autoridades políticas subalternas, las de recaudar impuestos, administrar bienes de los Expulsos, y las de otorgar licencias para la carga y salida de barcos, beneficio de yerbales, recogida de ganado cimarrón, y expendio de tabaco y naipes. En este trabajo, continuación de otros anteriores, nos hemos propuesto indagar el rol cumplido por los Cabildos en las prácticas fiscales de transferencia del excedente, en etapas anteriores a la centralización del poder estatal colonial, y en sus correspondientes impactos en la estructura social.⁸ En ese sentido nos preguntamos si los conflictos en el seno de los Cabildos por la recaudación de impuestos, y el libramiento de licencias para la carga y salida de barcos, beneficio de yerbales, expendio de tabaco y naipes, y recogida de ganado cimarrón se hallaban o no relacionados con el proceso de centralización del estado colonial. Asimismo, nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas mineras y comerciales, por cuanto fué durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de las élites y cabildos locales y a aumentar las presiones fiscales y mercantiles. Para ello hemos recogido una docena de textos de época, hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación, de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC) y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC).

La crónica crisis fiscal y el clima de corrupción que aceleró las condiciones materiales del fenómeno revolucionario y que balcanizó al antiguo y tardío Virreinato del Río de la Plata, se extendió a la recaudación de la Alcabala, la Sisa, el Diezmo, los Propios y Arbitrios, al Situado Real y a otras ramas y estancos no menos importantes de la Real Hacienda. La Casa de Moneda, la Compañía de Azogueros, las cofradías, las Comandancias de Fronteras, los Cabildos Eclesiásticos, la Renta de Tabaco y Naipes, la Renta de Tributos, la Administración de Temporalidades y la Renta de Correos, fueron durante el prolongado período de recolonización borbónica, a diferencia de lo que sostiene Véliz (1984), fuentes usuales de corrupción. Asimismo, este clima de corrupción no se concentró exclusivamente en las regiones más ricas, como el Alto Perú, sino que alcanzó a otras regiones geográficas de la llamada carrera del Perú.

Mecanismos de defraudación fiscal.

El mecanismo de defraudación más directo y frontal, aunque también el más inusual, por la disuasión que provocaba su eventual castigo, consistía en estafar a la Real Casa de Moneda adulterando la misma moneda y los instrumentos con que se pesaba y acuñaba la plata. Ya en 1652, durante la dominación colonial Habsburga, el ensayador de la Casa de Moneda de Potosí fué hallado culpable de

defraudar a la Corona en más de \$472.000, al adulterar con cobre la moneda de plata de ocho reales.⁹ Debido a este descomunal fraude, el Virrey de Lima, Conde de Salvatierra, ordenó en Septiembre de 1652 la observancia de la Real Orden de Octubre de 1650, que estableciera la recogida y fundición de la moneda adulterada y el reacuñamiento de una moneda de 7 1/2 reales por peso. Simultáneamente se declaró en la Real Orden que el viejo peso de ocho reales, llamado moclés, valiera sólo seis reales por peso.¹⁰ Como dicha fundición se postergaba, un Informe que sobre la recogida de la moneda adulterada emitiera en 1652 la Comisión de Mercaderes de Santiago de Chile advertía que de no hacerse dicha fundición, el primer daño que resultaría sería

"...que los mercaderes que hacen el viaje a Lima irán escogiendo la mejor para llevársela, y la cobriza y de peor calidad dejarán en la tierra, comprando con ella el sebo y el cordobán y otros géneros de este reino...y por la codicia del más valor que se les dá no repararán en que sea mala o buena dicha moneda porque no la quieren para atesorarla sino es para darla a este comercio"
" 11

El otro daño que resultaría de dilatar dicha fundición es que

"...corriendo esta mala moneda de a seis reales los mercaderes alterarán los precios de la ropa, procurando saldar en ella la pérdida que podrán tener en dicha moneda y por consiguiente subirán los mantenimientos,...con que serán siempre los pobres dagnificados".¹²

Pero el daño más considerable señalado por este notable documento resaltaba

"...que en sabiendo en el Pirú y en Tucumán que se alarga el uso de la mala moneda, meterán en este Reyno [Chile y Tucumán] mucha cantidad y de la de peor calidad por cuanto en la ciudad de los Reyes [Lima] hay muchas personas que han comprado mocleses a 4 reales y a 4 1/2 los más caros, y corriendo en esta ciudad [Santiago] por seis ganan a 50% en dicha moneda trayéndola por empleo, y la emplearán en jéneros deste Reyno por precios muy subidos que aunque en ellas no tengan ganancias en el Pirú, no les importa respecto de la que han tenido en dicha moneda".¹³

Tan cierta fué esta advertencia, que en el Río de la Plata, durante el tiempo en que estuvo en vigencia dicha Real Orden, la misma fué la causante de un increíble fraude practicado por el Gobernador de Buenos Aires Jacinto de Laríz. Laríz, según Peña (1911) y Levene (1927), mediante el ocultamiento de la Real Pragmática, fué capaz de aprovecharse de la diferencia entre ambas monedas.¹⁴ Por último, como los acreedores se negaron a aceptar la nueva moneda --envilecida en medio real por peso-- en pago de sus créditos, el Presidente de la Real Audiencia de La Plata se vió obligado a hacer observar su circulación en forma coercitiva.

Sin embargo, la disuasión que significaba el castigo previsto para quienes adulteraran la moneda no fué lo suficientemente convincente como para que otros funcionarios no intentaran defraudar las Cajas Reales adulterando los dinales con que se medía la ley que pesaban las barras de plata. Esta posibilidad se acentuaba en momentos de rebeliones indígenas y en localidades apartadas, pues no era fácil encontrar en dichas ocasiones y lugares un vecino español suficientemente calificado en quien pudieran recaer dichos oficios. Es por ello, que en Carangas, durante la rebelión de Túpac Amaru, fué elegido de fundidor, ensayador, y balanzario interino de la Real Caja, Joseph García Manzano, un criollo hijo de españoles, "...suficientemente instruído en el método de ensayar aprendido de su padre que lo ejerció muchos años en la propia Caja".¹⁵ Pero en 1784, a instancias de las quejas de

los mineros por la baja ley que experimentaban sus barras, los Ministros de la Real Hacienda hallaron que Manzano era culpable de utilizar un dineral propio, y no el que se le había entregado cuando se hizo cargo de la fundición.¹⁶ No podía ser para estos Ministros que se hubieran hallado diferencias de hasta 8 granos en algo más de 20 barras. Asimismo, García Manzano fué acusado de practicar la fundición en su propia casa, y no en la oficina que se hallaba destinada para esa operación.¹⁷ En su descargo, García Manzano manifestaba no parecerle justo tener que pagar las indemnizaciones pues no gozaba de sueldo alguno, y sólo contaba con los ingresos provenientes de la hechura de las barras, "...que no alcanzan a los gastos precisos de carbón, fábrica de callanas, pago de peones, y demas costas".¹⁸

Fraudes en perjuicio de la Compañía de Azogueros.

Con relación a las defraudaciones cometidas en el Alto Perú durante los inicios del proceso de recolonización borbónica en perjuicio de la Compañía de Azogueros, y que provocara la intervención del Visitador General Ventura de Santelices y Venero, es conocido el caso del Conde de Casa Real de Moneda General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra.¹⁹ Este último, que fuera Tesorero de la Compañía de Azogueros, y uno de los tres funcionarios que junto con el Visitador José de Herboso y el Contador Miguel Antonio de Ezcurrechea poseía las llaves del arca, fué acusado en 1752 de sustraer de la misma la suma de \$48.000.²⁰ Aparentemente, el Conde entregó a su vez el dinero a la Casa de los Navarro, en perjuicio de Ezcurrechea y su cuñado Pedro Francisco Iribarren, el cual poseía la otra Mercancía de Plata existente.²¹ De todas maneras, se sospechaba que el Conde se había quedado con más de la mitad de la remesa. Ambas Casas o Mercancías de Plata, la de los Navarro y la de los Iribarren, continuadora esta última de la de Rodríguez de Guzmán, rescataban las barras de Oro con tardanzas que alcanzaban hasta los cuatro meses, y a precios subvaluados. Tal fué el desastre de estas operaciones, al provocar la quiebra de ambas Mercancías de Plata, que el Visitador General Santelices debió innovar al respecto, derivando la responsabilidad de rescatar las barras de Oro a las mismas Cajas Reales de Potosí. Más luego aún, cuando entre 1762 y 1767 gobernaba en Potosí el Corregidor Jaime Saint Just, durante el Virreinato de Manuel de Amat y Junient, Tandeter (1980) nos revela que en la Compañía de Azogueros se alcanzó a dilapidar la increíble suma de \$800.000.²²

La recaudación del Ramo de Tributos, Alcabalas, Sisa y Propios y Arbitrios.

Amén de la recaudación del Ramo de Tributos, la administración y el empleo del Ramo de Alcabalas, Sisa y Propios y Arbitrios es lo que más desavenencias y conflictos ocasionaba en el mundo colonial.²³ El derecho de delegar la facultad de recaudar los Propios y Arbitrios y el Ramo de Sisa y Alcabala se registró por vez primera, con abundantes testimonios escritos, en el paradigmático caso Cordobés. En efecto, con motivo de la edificación del Palacio Real de Madrid la corona requirió en 1739 a través de sus Virreyes y Gobernadores una contribución especial en toda América, la cual fué duramente resistida en Córdoba y, en particular, en los valles de Tulumba y Río Seco.²⁴ Asimismo, los conflictos arreciaron con motivo de la recaudación de los Propios y Arbitrios y del Ramo de Sisa o de Guerra.²⁵ En realidad, el Cabildo debía contar en su Ramo de Propios y Arbitrios con ingentes recursos, producto de los gravámenes a los solares, pulperías, canchas de bolos, y al consumo local de vino y aguardiente, pero cuya recaudación estaba --antes de la fundación del Virreinato del Río de la Plata y la consecuente reorganización de la Real Hacienda-- a merced de la discrecionalidad de los Mayordomos de Propios, encargados del arrendamiento de la recaudación fiscal.²⁶ Asimismo, el Cabildo participaba, desde la imposición del Reglamento de 1772, en la administración del Ramo de Sisa, pues este estaba destinado al mantenimiento de la frontera, pagando la soldada a la tropa, constituida por los llamados partidarios o blandengues.²⁷

Pero la verdadera causa de la discordia entre los Cabildantes y la Gobernación de Córdoba emergió cinco años después de haberse impuesto la contribución para la edificación del Palacio Real de Madrid, en 1744, por la desmedida ambición de la oficialidad de las Milicias Urbanas y Rurales en querer participar a prorrata en las Entradas o corambres que oficialmente se practicaban en el desierto. Estas corambres se originaban en la demanda extra generada por los navíos de registro, recalados por vez primera en el puerto de Buenos Aires, luego de la revocación del Real Asiento de Inglaterra (1744). Cuando en febrero de 1744, el Gobernador y Capitán General de Córdoba del Tucumán Juan Alonso Espinosa de los Monteros le mezquinó al Cabildo de Córdoba, integrado por el Alcalde de Primer Voto Maestre de Campo José de Molina Navarrete,²⁸ y el Alcalde de segundo voto, el Maestre de Campo Gregorio Arrascaeta,²⁹ los ingresos de la Real Sisa, le ordenó librar los arbitrios y medios para la Entrada al Desierto de sus propias cajas, el Cabildo replicó con un Dictámen en el cual se consideraba a dicha orden como "inconveniente", dada la imposibilidad financiera que padecían los vecinos de Córdoba y su ayuntamiento para afrontar la empresa por sí mismos, como había sido de estilo tradicionalmente. Manuel de Estéban y León,³⁰ que detentaba la recientemente creada plaza de Teniente de Rey,³¹ contestó el exhorto del Cabildo en un "...estilo preceptivo" que ponía en tela de juicio el Dictámen del Cabildo. En este estado, el Alcalde de Primer Voto Molina Navarrete había librado a fines de 1744 un nuevo parecer y dictámen, apoyado por el Alcalde de segundo voto Arrascaeta, insistiendo en su anterior parecer y dictámen, que consideraba como inconveniente acatar la orden del Gobernador Juan Alonso Espinosa. Por consiguiente, no se le ofrecía al Cabildo otro medio que suplicar de nuevo al Gobernador Juan Alonso Espinosa "...destine para el efecto de dicha Entrada [al desierto] toda aquella parte del ramo de la Real Sisa".³² Y si de la benignidad del Gobernador no se podía conseguir este subsidio se aconsejaba al Cabildo recurriese "...por la Secretaría del Cabildo y Regimiento al Excelentísimo Sr. Virrey [del Perú]".³³ Esta solicitud fué elevada al Gobernador Juan Alonso Espinosa, que residía en Salta, conjuntamente con los Informes solidarios del Cabildo Eclesiástico y de las Ordenes Religiosas

"...para que enterado S.E. de la miseria en que se alla esta pobre Ciudad imposibilitada desta guerra y que únicamente tiene librado su remedio en el Adbitrio insinuado de la Real [Sisa] de la Provincia".³⁴

Este último Ramo de Sisa se recaudaba principalmente en Salta y Jujuy, donde residían los Oficiales Reales y se hallaba la sede central de las Reales Cajas.³⁵ Sus ingresos se los destinaba casi en su totalidad a fortalecer la frontera del Chaco salteño.³⁶ Al parecer y voto del Alcalde Molina se adhirieron en 1744 el Comandante de Armas Félix de Cabrera,³⁷ y los Maestres de Campo Marcos de Ascasubi,³⁸ y Juan Agustín de Echenique,³⁹ con la sólo discrepancia del Alcalde Provincial Manuel Noble Canelas,⁴⁰ quien consideraba necesario acatar la orden del Gobernador Juan Alonso Espinosa. De resultas entonces de la negativa del Cabildo a prestar los arbitrios necesarios para hacer la entrada a la frontera sur de Córdoba, el Teniente de Rey Estéban y León ordenó en 1744 la prisión de Molina y de Arrascaeta, medida que estos apelaron ante la Real Audiencia de Charcas.⁴¹ Es aquí, cuando por vez primera en el siglo, el Cabildo de Córdoba apelaba a la Audiencia de Charcas contra la posición del Gobernador, quien se había negado a prestar los recursos de la Real Sisa, que se recaudaban en Jujuy. No habiéndose producido la Entrada al desierto, las vaquerías quedaron libradas a la discrecionalidad de los pobladores de la campaña, menudeando todo tipo de tropelías.⁴² Para esa época, año de 1752, el Cabildo de Buenos Aires había establecido por bando gravámenes al cuero y los caldos (vinos y aguardientes), una suerte de Ramo de Guerra, aprobado por el Rey recién en 1779, con los cuales se mantuvieron tres compañías de veteranos, llamados Blandengues,⁴³ que debían reprimir a los indios rebeldes.⁴⁴

Cuatro años más tarde, en 1757, el Presidente de la Real Audiencia de Charcas Nicolás Giménez de Lobatón y Azaña, Marqués de Rocafuerte, designó al abogado y Alcalde Mayor de Minas de Potosí Sebastián de Velasco como Comisionado en Córdoba para procesar a los capitulares Gerónimo Luis,⁴⁵ Juan Agustín, y José Gregorio Echenique,⁴⁶ Félix Cabrera, Gregorio Arrascaeta, José Arrascaeta,⁴⁷ Marcos Ascasubi y José Molina Navarrete por el sólo motivo de haber levantado en 1756 cargos de malversación de caudales, que no fueron justificados, contra Estéban y León.⁴⁸ De resultas de dicho proceso, a Arrascaeta, Cabrera y Molina se les impidió ejercer cargo alguno.⁴⁹ Y en 1758 la Real Audiencia de Charcas procesó y condenó al Alguacil Mayor Nicolás García Guilledo,⁵⁰ y a los cabildantes Juan Antonio de la Bárcena,⁵¹ Manuel de Castro,⁵² y Gerónimo Luis y Juan Agustín Echenique, por la conducta hostil observada con el Comisionado Sebastián de Velasco. Guilledo fué suspendido en el ejercicio del Alguacilazgo por seis años y desterrado a 30 leguas de Córdoba.⁵³ Sin embargo, al persistir el desorden de la campaña o, en palabras de Real de Azúa (1961), al perpetuarse el asedio de la base social, con el ingente número de arrias de mulas que no pagaban la consiguiente sisa y la desbordante gama de corambres ilegales, la imagen de Estéban y León se había revertido a los ojos de muchos vecinos y cabildantes, al extremo de conseguir atraer a su partido "...mucho número del vecindario y aún a los mismos que entonces clamaban a viva voz, pidiendo el desagravio y remedio de las extorsiones que [Cabrera] les hacía".⁵⁴ Más aún, consiguió atraer a su partido al propio Cabrera "...que hoy es uno de los principales que defienden y fomentan al Teniente de Rey".⁵⁵ De resultas de ello, el patriciado cordobés dejó de hacer fronda y designó de Alcalde de primer voto a Juan Agustín de Echenique, el mismo que se había opuesto en 1744, conjuntamente con Molina, Ascasubi y Cabrera a la Entrada al Desierto, por cuanto "...se necesita su persona por la osadía de la libertad por la gente plebeya, en que se halla así esta Ciudad como su jurisdicción y demás reparos de la causa pública".⁵⁶

Luego de transcurrido un año, en 1759, con el Cabildo de Córdoba aún controlado por el clan de los Echenique, el Regidor Propietario General Tomás de Allende y Losa,⁵⁷ cuñado ahora del antiguo Alcalde Gregorio Arrascaeta, se opuso a la autoridad del Alcalde Provincial José Martínez Rodríguez,⁵⁸ marido de Clara Echenique y Urtubey,⁵⁹ de resultas de lo cual el Cabildo, lo exoneró de los oficios concejiles.⁶⁰ Finalmente, en 1766, con motivo de las malversaciones del Gobernador Juan Manuel Fernández Campero,⁶¹ el Virrey del Perú decidió por Auto expedido en Lima que la administración y el empleo del Ramo de Sisa, que tantas desavenencias y conflictos había ocasionado en el vecindario Cordobés, pasase a la responsabilidad de los oficiales reales (Contador y Tesorero) de la Real Hacienda "...con intervención de los cabildos", con total independencia de los Gobernadores del Tucumán, y que las cuentas del correspondiente Ramo se rindiesen ante la Real Audiencia de Charcas.⁶² Pero seis años más tarde, en 1772, un Reglamento fijó que la Administración de la Sisa estuviera a cargo de los Alcaldes y del Síndico Procurador.⁶³ Casi veinte años después, en 1791, la impresión que el Tesorero de la Real Hacienda de Santa Fé Don Rafael María Guerrero y Montañez tenía con respecto al cobro de la Sisa en el partido del Rosario, provincia de Santa Fé, era que en él reinaba una corrupción generalizada, pues los Receptores de Sisa de la Campaña "...limitaban su recaudación a sólo los recintos de las capillas de su residencia, y no adelantaban su cuidado a lo interior de las estancias".⁶⁴ Esta negligencia era atribuida en dicho documento al hecho de que dicho ramo de Alcabala, Pulperías, y Sisa no reportaba en la campaña utilidad alguna a los arrendatarios de la recaudación debido al "...costo de los caminos, que necesitaban andar en remotas distancias, para impedir las clandestinas introducciones, ventas, y extracciones de frutos y efectos".⁶⁵ Sin embargo, la corta recaudación obtenida no se compadecía con las "...cuantiosas porciones con que abastece aquel partido [Rosario] a esa ciudad, la de Córdoba, y Mendoza, y crecido el número de mulas, que de el mismo territorio se conduce a Salta, de las cuales ninguna guía han sacado los conductores".⁶⁶ De esta

realidad el documento infiere "...que si fueron ocultas las extracciones, serían asimismo clandestinas las introducciones en los destinos, y que por consiguiente se ha hecho también extensivo el perjuicio a otras Tesorerías".⁶⁷ Finalmente, y con referencia a los compradores de mulas, Agustín Garfias,⁶⁸ en representación de la Ciudad de Santa Fé, para el cobro del Real Derecho de Sisa, cuestionó el procedimiento del cobro "...por cuanto las personas que vienen a comprar dichas mulas luego que las compran se ban sin pagar nada de lo que adeudan".⁶⁹ Entiende Garfias que no basta con cobrar al vendedor de las mulas y que es preciso gravar en su lugar a los compradores. En ese sentido, Garfias recurre a las autoridades "...para que se sirva mandar que todos los vendedores retengan en sí el derecho de sisa".⁷⁰ Los mismos sinsabores corrían los cobradores del diezmo de cuatropea, lo cual hace pensar que lo que a Halperín Donghi (1992) le hicieron sugerir los cálculos de Garavaglia (1985) estarían muy lejos de la realidad.⁷¹ Juan Martín Dupon parece y dice en 1797 "...aber hallado un intolerable abuso en los hacendados, pues varios no me han querido pagar".⁷² El Juez Hacedor de Diezmos Don José Fontesli

"...mandó al alférez Alcorta pusiera el diezmo en la estancia en el Arroyo Negro, éste no ha cumplido siendo que también es Juez Comisario, está bien lejos de dar buen ejemplo se mantiene obstinado en no pagar el diezmo a la Iglesia de Dios, Don Pablo Ribera...es un hacendado que obstinadamente hase insufribles detrimentos no sólo a mi, sí a los demás diezmeros pues del año 96 no a pagado como es constante".⁷³

La recaudación o cobro del Real Derecho de Alcabala.

No hay duda que el perjuicio se había extendido a otras Tesorerías. Pese a la existencia de una incipiente burocracia patrimonial compuesta por comerciantes particulares ansiosos por acumular una diferencia entre lo recaudado y lo abonado en la subasta, la presión fiscal, aunque escrupulosa, solía también ser muy a menudo burlada. Es Don Agustín Garfias quien en 1746 obtiene en Buenos Aires en subasta pública por \$44.345 la recaudación o cobro del Real Derecho de Alcabala, por el término de cinco años y a razón de \$8.869 cada año.⁷⁴ A ello se sumaba su sociedad con Mayoriano Casco, en calidad de fiador, en la postura del Diezmo.⁷⁵ Desde el primer instante en que asumió el cargo Garfias se vió precisado a enfrentarse tanto con el clero cuyano, como con los vendedores ambulantes, los dueños de tienda y pulpería, los mayoristas, y los dueños de arrias de mulas. El clero cuyano se obstinaba en no pagar tales derechos so pretexto de que las cargas de vino y aguardiente eran producidas de sus patrimonios y como tales exentas de todo gravámen.⁷⁶ Era este un pretexto pues todos sabían que actuaban como apoderados de viñateros y bodegueros profanos. Uno de los primeros evasores que tuvo Garfias fué el Dr. Matías Frías, Cura y Vicario de Mendoza, el cual hizo fuga por no pagar los derechos de unas cargas de aguardiente que pasó por alto en compañía de Don Fernando Torres. El procedimiento seguido por Garfias para detener a Frías fué recurrir al Alcalde de segundo voto para obtener una orden mediante la cual enviar alguien en su seguimiento y consiguiente detención. Habiendo recaído esta orden en Don Joseph Martínez, este le dió alcance en el pago de Areco y en virtud de la orden le embargó las cargas de aguardiente depositándolas en un vecino de Areco, y lo trajo a Buenos Aires con orden de no salir de ella "...hasta tanto me pague todo el cargo que le hago de los derechos reales que a querido ocultar". Según Garfias, la acusación se justificaba "...pues se conoce por su fuga estar cómplice en su delito".⁷⁷

Esta situación de litigio con el clero cuyano para el cobro de los derechos de sisa y alcabala sobre las cargas de vino y aguardiente fueron permanentes, al extremo de continuarlas sus albaceas hasta después de muerto.⁷⁸ En efecto, los apoderados de la testamentaría de Garfias iniciaron acciones

contra el Pbro. Maestro Bernardino Mayorga, el Dr. Francisco Correa de Saa, cura y vicario de Mendoza, y el Pbro. Dr. Joseph Morales.

También debió Garfias enfrentarse con los dueños de tiendas, quienes se excusaban de pagar los derechos que adeudaban "...por decir que con la multitud de vendedores que andan por las calles (a quienes regularmente llaman chifles) se minoran las ventas de sus tiendas".⁷⁹ Este argumento fue suficiente para que Garfias se viera precisado "...a rebajar a muchos del ajuste combenido".⁸⁰ No obstante, Garfias no se dió por vencido y recurrió a los Jueces Oficiales Reales para que "manden con la pena que hubieren por conveniente,...que ninguno venda en dicha forma sin que primero tengan ajuste conmigo". Tampoco pudo obstar a las pretensiones de Garfias "...el decir que de las mismas tiendas, sacan los géneros que salen a vender, porque en algunos se verifique esto, en los más se falsifica, quedando por eso defraudada y perjudicada la Real Hacienda".⁸¹

Asimismo, Garfias debió encarar a los comerciantes mayoristas, los cuales argumentaban para eludir el pago de la alcabala "...no hauer vendido todavía sus efectos".⁸² Esta excusa parecería haber sido orquestada colectivamente y en forma premeditada por cuanto Garfias declara que esta excusa, era "...un entable general en todos, que parece regular, porque como quiera que la satisfacción le han de hacer de lo que venden, si no han vendido, no hay arbitrio para compelerlos".⁸³ Si bien es verdad que Garfias advierte que algunos mienten, "...mientras esta (la malicia) no se conoce, no parece conveniente trabar un pleito y execusión con cada uno de ellos".⁸⁴ La impotencia para auditar a cada vendedor mayorista era reconocida por Garfias al expresar: "...siendo cosa casi inaveriguable el que ayan recaudado sus fiados, por que para ello era menester poner un sobreestante a cada uno lo cual es imposible".⁸⁵ Garfias se agravia también de padecer "...gran decadencia con los que tienen tiendas y pulperías por ocasión que unos se quitan y se van fuera desta ciudad vendiendo sus efectos y cuando llega el año en que me es preciso cobrar ya no ai noticia dellos quedando este derecho perjudicado". Para remediar esta situación crítica Garfias sugiere y solicita se reduzca por bando el período de pago de un año a seis meses "...y si posible sea que paguen adelantado como se practica con el derecho de pulpería".⁸⁶

La designación de los receptores de la Sisa y la Alcabala.

A propósito de las reformas fiscales instauradas por los Borbones, que del arrendamiento de la alcabala, por vecinos del lugar, pasó a la administración real asalariada y centralizada, en diversos lugares del interior del Virreinato se fueron reproduciendo múltiples casos de resistencia y hostilidad colectivas contra las autoridades fiscales designadas por la Corona. En el repertorio de acciones colectivas propias del Antiguo Régimen se contaban en el Río de la Plata las serenatas y las cencerradas, con música, canto, burla y pifia de los adversarios.⁸⁷ En oportunidad de la designación de los receptores de la Sisa y la Alcabala, por lo general foráneos o peninsulares, nombrados por los Ministros de la Real Hacienda, que desplazaban a los arrendatarios criollos, se presentaba la ocasión para manifestar el disenso contra la opresión colonial, mediante pasquines y décimas anónimas, compuestas de versos tenidos por "insolentes".⁸⁸ En Asunción del Paraguay, los resentimientos contra la dominación porteña se remontaban a la actuación que le cupo al Gobernador Baltasar García Ros, en oportunidad de la Rebelión de los Comuneros. Con el correr del siglo y el aumento de las gabelas (alcabalas) dicho resentimiento se acentuó. En 1776, el Cabildo de Asunción, integrado en su mayoría por encomenderos,⁸⁹ denunció al porteño gobernador Agustín Fernando de Pinedo,⁹⁰ por sus reiterados abusos que comprendían opresión, nepotismo, malversación de los recursos fiscales y actividades comerciales privadas, pero en realidad por su interés en abolir las encomiendas.⁹¹ Fue el Alcalde José Marcos Vallejos, quien habría liderado dicho movimiento y quien denunciara su manejo de las

reducciones de Indios.⁹² A tal extremo se acentuó en el vecindario de Asunción su impopularidad que a fines de la década del 70 menudearon los pasquines, con "décimas" que denunciaban la crueldad del Gobernador.⁹³

También la venta de coca y su respectivo cobro de la alcabala se hallaba reglamentada. A los extractores de coca se los obligaba a pagar el Real derecho de Alcabala "...de quantas partidas se extraigan cuyo principal no exceda de cincuenta pesos".⁹⁴ En la ardua tarea de subdividir sus negociaciones en tantas partes como sean necesarias para que cada una no exceda del principal de cincuenta pesos, los productores de coca se ven perjudicados "...pues tiene que pagar por cada una de las guías que les libra el Receptor de Alcabalas los cuatro reales correspondientes, y son tantas [guías] como las divisiones, y se los maltrata si resisten a que se hagan".⁹⁵

La expedición de licencias para vender tabaco y naipes.

En cuanto a la expedición de licencias para vender tabaco y naipes, estas las otorgaban las autoridades virreinales a lo largo y ancho de todo el Virreinato. En la jurisdicción del Río de la Plata llegaron a existir 12 administraciones generales, 71 administraciones particulares y 480 tercenas y estancos de tabaco.⁹⁶ En Catamarca, Guzmán (1985) anota que los administradores de las tercenas no sólo negociaban el tabaco y los naipes, sino también los productos cosechados y elaborados en la provincia, al igual que los géneros y artículos ultramarinos que traían los mercaderes de Córdoba y Buenos Aires.⁹⁷ En La Rioja, el Administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes José de Noroña y Losada,⁹⁸ ha hecho

"...por separado comercio de aguardientes; que se ha interesado públicamente por los remates de Diezmos haciendo para el de ganados compañía con Dn. José Antonio Mercado, que ha girado en los caldos, que ha comerciado en el ramo de salitre, haciéndolo conducir a Chile, y que ha hecho empleos en esta Capital, en Córdoba y Catamarca; que tiene tienda pública en la misma terrena y que en el comercio no le va en zaga el Subdelegado [Bustos]".⁹⁹

La necesidad de hallar amparo o fuero contra la intervención de las justicias locales, hacía que los estancos y tercenas de la Real Renta de Tabaco estuvieren ubicados próximos a las pulperías. En el caso de La Rioja, los Juzgados no podían imponer justicia

"...porqué los [criminales] que allí existen de a pié y de a caballo, se pasan luego [de cometer un crimen] al estanco, haciendo alarde de hallarse en sagrado, y dejar así burlada a la justicia".¹⁰⁰

Con respecto a la administración de los bienes de los Expulsos, podemos afirmar que ella perseguía --a través de la designación del Diputado en las Juntas Provinciales de Temporalidades-- la participación primero en el arrendamiento y luego en la subasta de los bienes de los Expulsos. Las luchas por las Diputaciones en las Juntas de Temporalidades, al igual que las luchas por las Maestrías de Postas, reflejaban las contradicciones por la ocupación del aparato civil del estado colonial.¹⁰¹ Pero la Expulsión de los Jesuitas significó también una reforma agraria, que generó una creciente distribución del ingreso; así como una reforma laboral, por cuanto dió lugar a la expropiación y redistribución de la numerosa mano de obra esclava existente en manos Jesuíticas. La importancia de las Temporalidades arrancaba entonces de la Expulsión de los Jesuitas, ofreciendo también casos notorios de conflictos inter-institucionales en el mundo colonial español.¹⁰² Sus autoridades estuvieron originalmente constituídas por los Gobernadores, los Obispos, los Asesores de Gobierno, los Diputados o vocales designados por los Cabildos seculares y eclesiásticos respectivos y los Procuradores Síndicos

En suma, podemos ensayar como conclusión, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en los Cabildos de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que si bien el derecho de los Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias a interferir en las decisiones relacionadas con la recaudación de impuestos y la subasta de los bienes de los Expulsos, se acentuó con las Reformas Borbónicas, los integrantes de los Cabildos no cesaron de luchar por su autonomía y soberanía. Es innegable, asimismo, que el cambio de régimen fiscal, de la recaudación por vía de arrendamiento a la recaudación por administración real, acentuó la presión fiscal, y por lo tanto los rasgos colonialistas del gobierno metropolitano. Si bien la administración de la recaudación fiscal por vía de arrendamiento se prestaba a numerosos desfalcos, corruptelas y luchas facciosas, el hecho de estar controlados por los Cabildos evitaba que se engendrara entre las élites criollas y la élite burocrática central una crisis imposible de saldar. Sin embargo, esta inevitable crisis alimentó la animadversión hacia los llamados chapetones y maturrangos que lenta pero irremisiblemente derivó en la revolución de independencia.

NOTAS

¹ Peralta Ruiz, 1991, 149.

² Bonilla, 1981, 278, cit. por Peralta Ruiz, 1991, 150.

³ De acuerdo con el segundo axioma acerca de la distribución de la riqueza prevaleciente en la era revolucionaria norteamericana, las políticas económicas de la aristocracia culpables de distorsionar la distribución de dicha riqueza fueron: a) los gravámenes fiscales sin la correspondiente representación política, b) el establecimiento de una burocracia corrupta repleta de militares y clérigos parásitos, c) el favoritismo gubernamental, d) la erección de una iglesia oficial, y e) la emisión inflacionaria de papel moneda (Huston, 1993, 1083-1087).

⁴ Trimberger, 1978, 439.

⁵ Trimberger, 1978, 440.

⁶ Véliz, 1984, 92.

⁷ Moreno Cebrián, 1976, 228. Entre los gastos a los que estaban sujetos los funcionarios que arribaban a América estaban aquellos referidos a la financiación de sus viajes, estadías en los Puertos, etc. Para alcanzar sus destinos, los funcionarios peninsulares debían endeudarse con comerciantes que les adelantaban dinero sencillo, a cambio de escrituras donde se comprometían a devolver las habilitaciones en plazos muy breves y con moneda dura o fuerte. En la diferencia entre la moneda dura y la sencilla los comerciantes les cargaban premios exorbitantes. Tal fue el abuso que en 1790 la corona decidió poner coto a ello habilitándolos de su cuenta y riesgo acudiendo los que necesitaban al Ministerio de Guerra y Hacienda de Indias donde se les otorgaban libranzas a pagar en Cádiz o en la Coruña en las cantidades proporcionales a las clases de empleos y sueldos que llevarán. "A fin de evitar a los Provistos para Indias los graves perjuicios y atrasos que padecen con la frecuente y largas detenciones, ya en la Corte, o ya en los Puertos, por no encontrar en lo general quien los habilite con lo necesario para equiparse, y transferirse a sus destinos, teniendo que sugetarse, quando lo consiguen, a la dura ley que les imponen los Comerciantes, cargándoles sobre la diferencia de la moneda sencilla que les entregan, a la fuerte en que hacen los pagos en América, unos premios exorbitantes, con plazos

muy cortos, que en lo común no pasan de treinta a quarenta días de haber llegado a sus destinos, o arribado a los Puertos respectivos de aquellos Dominios, lo que les pone en necesidad de sufrir otras detenciones en ellos para facilitar el pago de sus escrituras, aumentando considerablemente sus empeños con los nuevos premios que les exigen, o de contraer con los Prestamistas obligaciones perjudiciales a la recta administración de justicia, y de los intereses de la Real Hacienda...Madrid, 26 de Febrero de 1790" (AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg. 35, Exp.14).

⁸ Ver Saguier, 1991; y Acevedo, 1992, 420-423.

⁹ Boxer, 1970, 466-469; 466-469; y Lohmann Villena, 1976, 579-639.

¹⁰ AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v.33, fs.333v. y v.30, fs.394.

¹¹ Vicuña Mackenna, 1882, 40.

¹² Idem.

¹³ Idem.

¹⁴ Peña, 1911, 59-61; Levene, 1927, 1952, 178; y Scenna, 1968, 82.

¹⁵ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 40, Exp. 1015, fs. 37.

¹⁶ Dinerales eran las pesas menudas con que en ese entonces se arreglaba el peso justo que debían tener las barras y monedas. El dineral de oro se dividía en 24 quilates y cada quilate en 4 granos. El de plata se dividía en 12 dineros y cada dinero en 24 granos.

¹⁷ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 40, Exp, 1015, fs.8.

¹⁸ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 36, Exp. 933.

¹⁹ Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de Santiago de Chile, Caballero de Carlos III, nacido en Ollantaytambo en febrero de 1710, hijo del Corregidor de Aymaraes y Tesorero de la Real Casa de Moneda de Potosí General José de Lizarazu, nacido en Potosí, y de Margarita Rosa Centeno, nacida en Cuzco (Lohmann Villena, 1947, II, ítem 120).

²⁰ Ventura de Santelices y Venero al Virrey del Perú, Conde de Superunda, Potosí, 15-VII-1752 (AGN, División Colonia, Potosí, 1751-54, Sala IX, 6-2-6).

²¹ Tandeter, 1980, 49-51.

²² Ibídem, 267.

²³ Acerca de la factibilidad del uso de las fuentes fiscales como indicador de actividad económica en el Imperio Otomano, ver Genç, 1987.

²⁴ Farré, 1941, 96.

²⁵ sobre la Sisa, ver Gullón Abao, 1993, 125-154.

²⁶ Punta, 1988, 5. Antes de la fundación del Virreinato del Río de la Plata el Ramo de Propios y Arbitrios era administrado por el Mayordomo de Propios de cada Cabildo. Luego de dicha fundación la Junta Municipal de Propios y Arbitrios la formó el Tribunal Mayor de Cuentas con el Gobernador o Corregidor, el Alcalde de Primer Voto, el Regidor Decano, y el Escribano; y a partir de la Real Ordenanza de Intendentes, en 1784, se formó con el Alcalde Ordinario de Primer Voto, dos Regidores y un Síndico Procurador. La misión de esta Junta era ocuparse de la venta de los cargos capitulares (Lynch, 1967, 201; y Ornaghi y Franciosi, s/f, 42 y 61).

²⁷ Ots Capdequí, 1946, 77; Punta, 1988, 9; y Acevedo, 1990, 10. El Reglamento del Ramo de Sisa aprobado por el Virrey del Perú en 1772 mandaba que su caja, caudales, libros y papeles pasaran a poder de los Alcaldes Ordinarios y del Síndico Procurador General (Ornaghi y Franciosi, s/f, 23). La creación de los Blandengues fué a juicio de Halperín Donghi (1982) "...el resultado de la transformación en veterana de una fuerza originariamente miliciana destinada a la guarda de la frontera" (Halperín Donghi, 1982, 28).

²⁸ Hijo del Capitán Luis de Molina Navarrete y Tejeda y de Isabel de Garay y Peralta; sobrino de Lorenzo Molina Navarrete y Tejeda, casado con Luisa López del Barco; del Sargento Mayor Alonso Molina Navarrete, casado con Ana Gutiérrez de Toranzo; de Juana Molina Navarrete, casada con el Cap. Francisco López del Barco; y de Petronila Molina Navarrete, mujer del Alcalde Francisco Garay. Casó en 1724 con Josefa Rosa de la Sierra y Cuerno, hija del Alférez Juan Antonio de la Sierra y Cuerno y de Paula de Losa Bravo y Peralta (LC, II, 1968, 203; III, 1969, 145).

²⁹ Teniente Tesorero, Superintendente de la Santa Cruzada, Juez de Minas, y Alcalde de primero y segundo voto (AN, 1964, 86). Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de María Ferreira de Acevedo, poseedor este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Fué casado luego de 1744 con María de Allende y Losa. Era hermano de María Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de Villamonte, padres de Estefanía y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; de José de Arrascaeta, casado con María Roldán y Allende; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta, asesinado por los indios Pampas. Gregorio Arrascaeta era primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón, casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; Lazcano, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5). La herencia de Gregorio Arrascaeta tuvo toda suerte de incidentes, comenzando con su sobrino Justo Arrascaeta, quien disputó la propiedad de la estancia denominada la Yerba Buena, que hubo Don Gregorio por herencia de su hermano el Arcediano Dr. Marcos Arrascaeta (AHC, Escribanía N.3, Leg.42, Exp.16). Estos incidentes se extendieron a la herencia del primer Arrascaeta, procedente de España, que en su oportunidad cobrara el Coronel Marcos José de Larrazábal, al extremo que Juan de Hormaeche solicitaba en 1816 se le exhibiera su testamento (AHC, Escribanía N.1, Leg.447, Exp.2).

³⁰ Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de

Cabinda y Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (LC, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21). Falleció en enero de 1775 (Acevedo, 1972, 265).

³¹ plaza de nueva creación, para los casos de ausencia del gobernador. Según Zinny poseía atribuciones sólo en el ramo militar (Zinny, 1920-21, I, 202). Según Ornaghi y Franciosi (s/f), el Teniente de Rey tenía a su cargo la recepción del ramo de Sisa, debido a que su tarea específica estaba relacionada con la defensa de las fronteras de los ataques de los indígenas. Como prueba de ello, desde el desplazamiento del Teniente Oficial Real Francisco Javier Garay en 1760, hasta 1767, firma las entradas del ramo de Sisa el Teniente de Rey Manuel de Estéban y León, y desde 1767 hasta 1770 el Teniente de Rey Fernando Fabro. En febrero de 1770 el Ramo fué arrendado a José Rodríguez, el que adquiriera la estancia de Alta Gracia a las Temporalidades, y fuera padre del jurista Victorino Rodríguez (Ornaghi y Franciosi, s/f, 86, y 99-100).

³² Archivo Municipal de Córdoba (AMC), Actas del Cabildo de Córdoba, t.XXX, 1757, fs.53.

³³ *Ibídem*.

³⁴ AMC, Actas del Cabildo de Córdoba, t.XXX, 1757, fs.53.

³⁵ La Real Hacienda contaba con un Teniente de Oficiales Reales asignado en la ciudad de Córdoba (Ornaghi y Franciosi, s/f, 86).

³⁶ Sánchez Albornoz, 1965a, y 1965b; y Cornejo, 1977 y 1979. Al pasar por Tucumán Mateo de Saravia y Jáuregui, Juan Silvestre Deheza y Helgueros oyó públicamente decir: "...que el objeto principal por qué ocurrir a la Capital de Buenos Aires, no era solo el asunto de elecciones, sino el defender el Ramo de Sisa [bajo el control del Cabildo desde 1772] por haber una Real Cédula por la que multaban a los Cabildos en \$4.000, sino lo hacían; a cuyo fin llevaba poder de todos los vocales, que el día antes de la Elección se le confirieron porque el Sr. Gobernador pretendía se custodiasen las Fronteras por Milicianos, y que oponiéndose el Cabildo se suspendió, que la mira del Sr. Gobernador era, que custodiándose por las Milicias, se ahorrara los gastos a la Sisa para que desempeñase el alcance supuesto, en que decían se hallaba, debiendo haber dinero sobrante después de pagadas todas las plazas y pensiones" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.33, Exp.2, fs.52).

³⁷ Félix Cabrera Celis de Burgos era hijo de Félix Cabrera y Cortés y de Dionisia Celis de Burgos, y se casó con María Isabel de Zeballos y Suárez de Velazco, hija del comerciante avecindado en Buenos Aires Juan Antonio de Zeballos. Era padre de Nicolás Cabrera Zeballos, casado con María Tomasa de Allende, hija del General Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicente de la Rosa y Carranza (CC, 1924, 74). Félix Cabrera Celis era hermano de Bartolina Cabrera, mujer del Maestre de Campo Francisco Figueroa Mendoza, hijo del santiagueño Sargento Mayor Juan Figueroa Mendoza y de Ana Suárez de Cabrera; y de Francisca Cabrera Celis, mujer del Maestre de Campo Vicente

Moyano y Oscariz (CC, 1936, I, 240; y LC, III, 195).

³⁸ Adquiere el oficio de Regidor en 1730 (AHC, Escribanía N.2, Leg.18, Exp.4). Probablemente pariente de Don José Ascasubi, dueño del ingenio de moler metal denominado Pampa, en Potosí, y marido de María Ortega, cuyos herederos venden el ingenio a Manuel Prego de Montaos, socio de Gerónimo Luis de Echenique (Learte, 1926, 197). A Marcos Ascasubi le es abierto el juicio sucesorio en 1777 (AHC, Escribanía N.3, Leg.29, Exp.20). Según Lazcano Colodrero (1968), la mujer de Marcos Ascasubi era Rosalía de las Casas y Ponce de León, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario Ignacio de las Casas y Jaime, y de Teresa Ponce de León; hermana de Teresa de las Casas, mujer del Comisario de Caballería Joaquín de Mendiola, dueño de la mayor arria de mulas a Potosí; y media hermana de Estanislao de las Casas, marido de María Ignacia Pavón, suegro éste de Benito Mariano de Zavalía, Francisco Javier Alvarez y Arias, y José de Echenique y del Barco (LC, II, 151).

³⁹ Alcalde de Primer Voto en 1757, hijo del Teniente General de Gobernación y Maestre de Campo Don Juan de Echenique, nacido en España, y de María Antonia de Cabrera y Carvajal, casado con María Josefa de Molina y López del Barco, hija de Lorenzo Molina Navarrete y Tejeda y de Luisa López del Barco; y hermano de José Santiago, Gerónimo Luis, José Gregorio y Catalina de Echenique y Cabrera (LC, II, 1968, 203; III, 1969, 145). Fueron padres de Francisco Xavier Echenique Molina, marido de Rosa Tablada y Otáñez, y de José Echenique y Molina, marido de Magdalena de las Casas y Ferreyra, hija del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jaime, y de Agueda Ferreyra Lasso de la Vega (AN, 1964, 151). Magdalena de las Casas era a su vez hermana de Francisco Antonio y de Estanislao de las Casas (AHC, Escribanía N.1, 1753, Leg.315, Exp.13). Los cuatro hermanos Echenique Cabrera eran cuñados del Alcalde de Hermandad Manuel Noble Canelas y Cortés, y de Ignacio de Carranza y Herrera Velazco (CC, 1936, III, 229). Francisco Xavier Echenique y Molina y Rosa Tablada, fueron padres de María Josefa Echenique nacida en Noviembre de 1765, mujer del Alcalde José Benito de Acosta, fallecido sin sucesión, de Gervasia Echenique, mujer de Lucas Dícido y Zamudio, y de Petrona Isabel Echenique, mujer del comerciante Francisco del Signo y San Román (LC, II, 205). Juan Agustín de Echenique mantuvo un pleito por tierras con su tío Gregorio de Echenique en 1743. A raíz de dicho pleito, el Gobernador de Córdoba Matías de Anglés libró en 1743 un despacho para que el Alcalde de Primer Voto Capitán José Moyano Oscariz prendiera y embargara todos los bienes de los hermanos Juan y Gregorio Echenique "...por el disgusto que se le informó a SS. avíamos tenido entre ambos usando en el de armas violentas" (AHC, Escribanía N.1, Leg.295, Exp.8). Recién en 1766 los hermanos Gregorio y José Echenique alcanzaron una transacción (AHC, Escribanía N.1, Leg.356, Exp.7).

⁴⁰ Padres de Rosa Noble Canelas y Echenique, mujer del Sargento Mayor y Protector de Indios Juan Calvo de Arana, hijo de Luis Calvo de Arana y de Ana Pimienta, naturales de Lebrija, Sevilla, padres a su vez de Agustina Arana, casada el 1-X-1764 con el Fundador de la Hermandad de la Caridad Juan José Vélez y de los Reyes, sobrino del Sargento Mayor José de los Reyes Marmolejo (LC, 1936, I, 447).

⁴¹ AMC, Actas Capitulares de Córdoba, t.XXIX, mayo de 1754.

⁴² Cabrera, 1930, 13.

⁴³ en Salta conocidos por el nombre de partidarios.

⁴⁴ AGN, Bandos, Libro 1, fojas 346, y 356-357. Ver Rázori, 1945, II, 42-45; y Levene, 1962, 442.

⁴⁵ estaba vinculado con la Casa santiagueña de los Paz de Figueroa, por estar casado con Josefa de Urtubey, hija del Cap. Pedro de Urtubey, quien pasó a América con el Gobernador Martín de Jáuregui en 1689, y de Mariana Paz de Figueroa. Eran padres del R.P. Bernabé Echenique, a quien equivocadamente se le adjudicara la autoría de los *Laudatione* Quinque (Furlong, 1937, 1952), de Juan Alejandro Echenique, marido de la viuda de Felipe Crespo, Doña Marquesa Antonia de los Reyes, y de Clara Echenique, mujer del Alcalde Provincial Coronel José Martínez de Candia, natural de Galicia. Era Clara a su vez madre de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez (CC, 1938, III, 229; y LC, 1968, 223). Gerónimo Luis de Echenique intentó contraer una sociedad o compañía para el tráfico de mulas por \$300.000 con Don José Cabrera, salteño, y con Don Manuel Prego de Montaos, residente en Potosí, comprando uno en Córdoba, invernando otro en Salta, y el otro vendiendo, remitiendo el dinero, y llevando la cuenta en Potosí, la cual no tuvo efecto por la desgraciada muerte del primero (Learte, 1926, 197). La desgraciada muerte de Gerónimo Luis de Echenique a la que alude Learte (1926) ocurrió a comienzos de 1754 y fue "desgraciada" por tratarse de un suicidio mediante ahorcamiento motivado por la profunda frustración que le infligiera la derrota política a manos del Gobernador de Córdoba, al suspender éste los oficios y varas concejiles, que su familia monopolizaba (R.P. Pedro Juan Andreu al R.P. Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766, Archivo Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.47). En cuanto a Prego de Montaos es de destacar que terminó por adquirir en Potosí un ingenio de moler metal llamado Pampa a los herederos de José Ascasubi, probable pariente del vecino de Córdoba Marcos Ascasubi. En 1758 se le inició a Gerónimo Luis un juicio post-mortem por insania (AHC, Escribanía N.1, Leg.331, Exp. 1; Leg.346, Exp. 2).

⁴⁶ contrajo primeras nupcias con María Rosa Arzaga, padres de María Rosa Echenique, mujer de Nicolás Azcoeta, y segundas nupcias con Margarita Villafañe, riojana, padres de María Luisa Echenique, mujer de Juan Bautista de Isasi y Molina, padres estos últimos de María Ignacia de Isasi, mujer del Sargento Mayor de la Nobleza y Maestre de Campo Estéban Montenegro (CC, 1938, III, 229 y 233; LC, II, 203).

⁴⁷ Hijo del Maestre de Campo Antonio de Arrascaeta, nacido en Elgóibar, y de María Ferreira de Acevedo, poseedor este último de un valioso contingente de libros de comedias (Furlong, 1944, 42). Hermano de Gregorio Arrascaeta, de María Josefa Arrascaeta, mujer de Antonio Godoi Funes del Arco; de Mariana Arrascaeta, mujer del Coronel Marcos José de Larrazábal; de María Arrascaeta, mujer del Maestre de Campo Francisco de Villamonte, padres de Estefanía y Teodora Villamonte, mujer esta última de Manuel Argüello; del Arcediano de la Catedral Dr. Marcos Arrascaeta; y de Miguel Arrascaeta. José Arrascaeta era primo hermano de Martín de Arrascaeta, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón, casado con Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez (Romero Cabrera, 1973, 27; LC, II, 143). Era marido de María Roldán y Allende, hija del comerciante y Comisario General Bernardo Roldán y de María de Allende y Losa; cuñada del comerciante Felipe de Haedo y de la Sota; y padres de José Manuel de Arrascaeta y Roldán, marido de la porteña Tomasa Mantilla, hija del santanderino Diego Mantilla de los Ríos, y de Juana Inés de Fresneda y Esquivel, propietarios de una chacra en el pago de la Matanza, Provincia de Buenos Aires (CC, II, 113).

⁴⁸ Acevedo, 1972, 257.

⁴⁹ *Ibídem.*

⁵⁰ Casó con María Teresa de las Casas y Correa, hija del Maestre de Campo y Regidor Propietario, y dueño de las estancias La Herradura y La Rinconada, Pedro de las Casas y Correa, y de Agueda de Funes y Ferreyra. Era concuñado del Escribano Clemente Guerrero (LC, II, 142). Guillelmo remata el oficio de Alguacil Mayor en 1753 (AHC, Escribanía N.2, Leg.24, Exp.13; y Leg.26, Exp.6). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

⁵¹ Hijo de Angel Antonio de la Bárcena, y de Gabriela Goyechea, casado en primeras nupcias con Francisca Fernández, la misma que fué hostigada por el Alcalde de Primer Voto Francisco de Armesto y Allende, y en segundas nupcias con Teresa de Funes y Allende, hija de Ambrosio Funes y Bustos de Albornoz y de María Ignacia de Allende y Vicentelo de la Rosa (LC, 1936, I, 194). Padre del Coronel Manuel de la Bárcena, llamado el "Tuerto Bárcena", célebre por sus crueldades durante las guerras civiles. Juan Antonio de la Bárcena fué compañero del Alcalde Provincial José Martínez (Learte, 1926, 217), y fué quien iniciara ante el Virrey de Lima en 1768 la causa criminal contra el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero, y ante la Real Audiencia de La Plata en agosto de 1769 la causa criminal contra Fernando Fabro, Administrador de la Junta de Temporalidades de Córdoba, el mismo que había secuestrado los bienes de los Jesuitas (AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, Legajos 2 y 7, Sala IX, 21-9-3, y 21-10-2). Por mano de Bárcena el Cabildo de Córdoba había iniciado en Lima en 1768 instancias judiciales contra Campero. (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

⁵² nacido en Lugo, Galicia, y designado administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes del Tucumán en 1769, fué hallado luego de fallecido, culpable de dejar la Renta casi quebrada (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 411, fs. 21. Ver sus datos familiares en LC, 1936, I, 118). Más luego, en 1782, mientras fuera administrador en Córdoba se le hallaron también deficiencias en las cuentas (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590). Efectivamente, una vez fallecido, el Contador Francisco de Urdaneta, de la Real Renta de Tucumán, descubrió que el Coronel había dejado la Renta fallida con un alcance (déficit) del orden de los \$2600. Marido de Dominga Carreño Bazán, de origen riojano; y padre del Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes de San Juan, Juan Manuel de Castro y Carreño, quien tuvo a su cargo defender la memoria de su padre y en representación de sus hermanos y sobrinos cuestionó por "injusta y fantástica" dicha suma (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590., fs. 39).

⁵³ Acevedo, 1972, 258.

⁵⁴ AMC, Actas Capitulares de Córdoba, t.XXX, 1757, f.53.

⁵⁵ *Ibídem.* Entre los partidarios de Estéban y León se encontraban además el Regidor Juan Moyano, Pedro Urtubey, José de los Reyes, Felipe Crespo, Juan Arana, Felipe Guarasas, Francisco Garay, José Lauro Alvarez y el Sargento Mayor de la Nobleza Estéban Montenegro (Acevedo, 1972, 259).

⁵⁶ AMC, Actas Capitulares de Córdoba, t.XXX, 1757.

⁵⁷ General, Justicia Mayor, y Teniente Gobernador, hijo de Lucas de Allende y Larrea, y de Agueda de Losa Bravo y Gutiérrez de Nis, hermano de José y Santiago Allende y Losa, y sucesivamente cuñado de Francisco Armesto, Bernardo Roldán, y Gregorio Arrascaeta, casó con Bernarda Vicentelo de la Rosa y Carranza, hija de Francisco Vicentelo de la Rosa y de Angela Carranza y Herrera, padre del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende, y suegro de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, Antonio de la Quintana y Cebreros, Nicolás de Cabrera y Ceballos, y Ambrosio Funes y Bustos (CC, IV, 327; AN, 1964, 97; y LC, I, 27).

⁵⁸ Natural de Galicia, casado con Clara Echenique, y padres de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez, propietarios de la estancia de Ambargasta, en Santiago del Estero (LC, 1968, II, 223). Fué denunciado en 1761 por el Tesorero Oficial Real Manuel Arredondo y Puerta, y procesado por protector de comercios ilícitos y defraudador de los reales derechos (AHC, Crímen, 1761, Leg.16, Exp.5; y Escribanía N.2, Leg.36, Exp.13). En 1761 litiga con Estanislao de las Casas por incumplimiento de contrato (AHC, Escribanía N.1, Leg.345, Exp.1). En 1762 litiga con Julián Cabrera (AHC, Escribanía N.1, Leg.347, Exp.12). En 1764 le inicia a Francisco José de Uriarte un juicio por injurias (AHC, Crímen, 1764, Leg.19, Exp.13). Con motivo de la expulsión de los Jesuitas, en 1767, estuvo preso conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena, José Bejarano y Manuel Isidoro Gutiérrez (Learte, 1926, 216). En 1779 el Maestre de Campo Diego de las Casas denuncia que Martínez "...intenta desconceptuarlo seduciendo al efecto a un mulato malévolo, nombrado Tomás Andrada, para que instruya queja del castigo que le impuso" (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Sala IX, 5-9-4). Cuando su hijo Julián Martínez se casó en 1794 con Juana Pérez, hija de un importante azoguero de la ribera de Potosí, su madre Clara Echenique le inició un juicio de disenso "...respecto a que el padre de la contrayente Joaquín Pérez, es de extraño vecindario [vecino de Potosí], y en tan larga distancia como la de Potosí, se me hace preciso se me dé a conocer su calidad y esclarecimiento" (AHC, Escribanía N.2, Leg.83, Exp.9). En 1792 Joaquín Pérez vende su parte en la Hacienda-Ingenio de Guariguay, Potosí (AGN, Hacienda, Leg.64, Exp.1691).

⁵⁹ Hija de Gerónimo Luis de Echenique y de Josefa Urtubey y Paz de Figueroa (Archivo Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, 1766, Leg.36, Exp.13). Era hermana del R. P. Bernabé Echenique, a quien según Furlong se le adjudicó erróneamente la autoría de la poesía latina *Laudatione Quinque* (Furlong, 1937, 1952), y tía segunda de Sor María Antonia de la Paz y Figueroa. Era Clara a su vez madre de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez (CC, 1938, III, 229; LC, 1968, 223). La personalidad de Doña Clara Echenique, un exponente de las mujeres hidalgas de las que nos hablaba Romero (1976), o más bien victimarias de las que nos habla Vicuña Mackenna, se nos ha revelado en ocasión de la crisis desatada en 1766 con motivo del rol jugado por la Orden Mercedaria, merced a una carta del R.P. Pedro Juan Andreu dirigida en esa fecha al R.P. Jaime Pérez, hallada en el Archivo Histórico de Córdoba, donde el primero le relata al segundo que la mujer del Alcalde Provincial José Martínez, Doña Clara Echenique, hija del Alcalde Ordinario Gerónimo Luis de Echenique,

"...ha heredado [de su padre] su mismo espíritu, esta gobierna, a su marido, y según pude entender, y supe después de cierto, luego, que yo, me aparté, reprehendió al Alcalde, de que admitiese composición, y de que fuese de corazón tan apocado, que siendo el ofendido conviniese, en irse a humillarse al Teniente de Rey, iendo a su casa como a pedirle perdón. A la tarde conocí luego que el corazón del Alcalde estaba mudado, y aunque salió conmigo de la cárcel, luego, que estube en la calle me dixo: Como quiere Padre, que vaya a casa de el Teniente de Rey; vamos antes al aposento de V.R. todos, y allá, haremos las paces: mire, añadió

mi Padre, que mi mujer sabiendo, que he hecho esta vajeza, me ha de cerrar las puertas de Casa a la vuelta, de hay no lo pude sacar, y por no perder lo que tenía trabajado, volví con esta novedad a Casa del Teniente de Rey, donde estaban esperando" (R.P. Pedro Juan Andreu al R.P. Jaime Pérez, Córdoba, 30-III-1766 [AHC, Escribanía N.2, Leg.34, Exp.8, fs.46-48].

Como las negociaciones duraron varias semanas más, el R.P. Andreu interpuso un nuevo sujeto de mediador, el cual le aseguraba

"...que por Martínez no habría habido dificultad, pero que su mujer le dixo, separa tu caudal, que fué corto, los treinta y cinco mil pesos, que traxe en dote, los he de gastar en esta causa, porque el agravio no se ha hecho a tí sino a mí, y a toda mi parentela" (Ibídem).

⁶⁰ AHC, Escribanía N.2, 1759, Leg.29, Exp.3.

⁶¹ Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco, entre 1755 y 1760. Sobrino de Diego de Hesles, el Secretario del Virrey del Perú José Antonio Manso de Velazco, Conde de Superunda, y marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y Campero, padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marqués de Yavi Fernando Campero, sobrino de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes (Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; y primo hermano del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero y de Francisco de Güemes y Campero (Acevedo, 1969, 14 y 103; y Cutolo, II, 74; y III, 50). Tomás de Allende y Losa y su cuñado Gregorio Arrascaeta afianzaron en 1764 el juicio de residencia del Gobernador Campero (Acevedo, 1969, 15).

⁶² Acevedo, 1969, 23; y 1990, 10.

⁶³ Acevedo, 1990, 10.

⁶⁴ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 61, Exp. 1594, fs. 1.

⁶⁵ Idem, fs. 1.

⁶⁶ Idem, fs. 3

⁶⁷ Idem, fs. 3.

⁶⁸ nacido en San Juan, hijo de Domingo de Garfias y de Catalina de Quiroga; casó en primeras nupcias en Areco con Ramona de las Casas, nieta de Juan de las Casas y de Dominga Romero Gutiérrez, y en segundas nupcias con Antonia de Giles Rivadeneyra; suegro de Juan Milloney, de Bernardo Poblaciones y de Juana Agustina Gallen; y abuelo de la mujer del General Miguel de Azcuénaga (FB, II, 89; y III, 155).

⁶⁹ AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2.

⁷⁰ Ibídem.

⁷¹ Halperín Donghi, 1992, 14.

⁷² AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 92, Exp. 2384.

⁷³ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 92, Exp. 2384.

⁷⁴ AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2. Era nacido en San Juan en setiembre de 1710, hijo de Domingo Garfias, nacido en Ayamonte, avecindado en San Juan, y de Catalina López de Quiroga, y casado con Antonia Giles, hija de Juan Giles y de María Rosa Rivadeneira (Espejo, 1967, 426).

⁷⁵ Birocco, 1992, 20.

⁷⁶ Punta, 1988, 14 y 23.

⁷⁷ AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2.

⁷⁸ No sólo el clero cuyano, exento del pago de los derechos reales, defraudaba al fisco operando como testaferro de bodegueros y viñateros profanos, sino también, como ya hemos visto, el clero correntino vendía ganado en pié en el Paraguay a nombre de hacendados profanos.

⁷⁹ AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2.

⁸⁰ *Ibídem.*

⁸¹ AGN, División Colonia, Garfias, Sala IX, 11-8-2.

⁸² *Ibídem.*

⁸³ *Ibídem.*

⁸⁴ *Ibídem.*

⁸⁵ *Idem.*

⁸⁶ *Idem.*

⁸⁷ Sewell, 1990, 527-52; y Tarrow, 1993, 87 y 88.

⁸⁸ Ver Vázquez Machicado, 1957.

⁸⁹ En la gobernación del Paraguay, a diferencia del Alto Perú, los encomenderos no fueron desplazados por la clase de los Corregidores de Indios.

⁹⁰ Natural de Burgos, Asturias. Luego Presidente de la Real Audiencia de Charcas. Propuso al Rey en un Informe abolir las encomiendas, organizar tropa reglada, y fomentar la complementación económica con el Alto Perú (Arréllaga, 1976, 55). Era marido de María Bartolina Arce y Báez de Alpoin, hija del General Alonso de Arce y Arcos y de María Báez de Alpoin y Labayén; cuñado del Alcalde de Potosí Felipe Santiago de Arce; padre del Coronel Agustín José de Pinedo, quien fuera

marido de Juana Albizuri y Echauri; y suegro del Contador de las Cajas Reales de Buenos Aires Juan de Andrés y Arroyo y del Corregidor, Tesorero de Real Hacienda y Caballero de la Orden de Santiago Coronel Antonio de Pinedo y Montúfar (FB, 1986-90, I, 58 y 140; y V, 206 y 207; y JR, 1989, ítem 5929). Para más datos ver Quevedo (1973), Arréllaga (1976), Albarenga Caballero (1977), Ferrer de Arréllaga (1985) y Romero de Viola (1987).

⁹¹ Lynch, 1958, 209.

⁹² AGN, División Colonia, Reales Cédulas, tomo 23, fs.350, Sala IX, 24-8-3.

⁹³ José González Ledo y Eduardo R. Saguier (1991): "El Discurso poético de protesta y la formación de una conciencia política independiente. Las décimas y octavillas de Ocampo Ysfrán, Camboño, Barrazábal, Melo, Lafuente, y Arias Saravia, en las provincias del Río de la Plata (1772-1805)", ponencia presentada en el Encuentro "Sociedad y Economía en el Mundo Colonial", organizado por el Centro de Estudios de Historia Americana Colonial (Universidad Nacional de La Plata) y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, celebrado el 27, 28 y 29 de junio de 1991 en el Museo Roca (Buenos Aires).

⁹⁴ AGN, División Colonia, Criminales, Leg.56, Exp.6.

⁹⁵ Idem.

⁹⁶ Arias Divito, 1978, 7. En las tercenas, a cargo de la venta al por mayor, se gratificaba al 7%; y en los estanquillos, a cargo de la venta al por menor, se gratificaba al 5% (Arias Divito, 1987, 13).

⁹⁷ Guzmán, 1985, 268.

⁹⁸ Casado en 1769 con Ana María de Herrera y Dávila, sobrina segunda del Alcalde de primer voto Juan José de Villafañe y Dávila, hija de su prima hermana carnal, y padre de Manuel de Noroña y Herrera, marido de Carmen Magarzo. Aparentemente estaba separado de su mujer (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.1; y Serrano Redonnet, 1979, 213).

⁹⁹ AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.39.

¹⁰⁰ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 15.

¹⁰¹ Francisco Dávila y Doria, que era uno de los vecinos más distinguidos de La Rioja, y por tanto uno de los pocos libres de excepciones, para libertarse de los cargos concejiles y del servicio militar, había entrado al ejercicio de postillón, merced a que los Maestros de Postas tenían la facultad de elegir al que les pareciera a propósito para el cargo, sin otro gravámen "...que el de dar dos caballos en el discurso del año, tocándoles cada dos meses la carrera de 50 leguas que dista desta ciudad a la de Catamarca" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.88, Exp.1).

¹⁰² Socolow, 1987, 292; Bravo Acevedo, 1984, 1986; Rivarola Paoli, 1988; y Aljovín de Losada, 1990.

¹⁰³ Socolow, 1987, 292.

TOMO VII

CAPITULO 12

LA CORRUPCION ADMINISTRATIVA COMO MECANISMO DE ACUMULACION Y ENGENDRADOR DE UNA BURGUESIA COMERCIAL LOCAL

(publicado en 1989 en *Anuario de Estudios Americanos* [Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos], XLVI, 269-303; rescens. en *Historical Abstracts* (Sta. Bárbara, Cal.), v.42, n.2, 1991, n.5992, p.452);

Aunque persuasiva, la tendencia revisionista padecía, para Pietschmann (1982), Andrien (1984), Domínguez (1985), y el que suscribe, en tres artículos publicados entre 1984 y 1985, de severas limitaciones, pues las prácticas corruptas no eran implementadas sólo por quienes gobernaban, para impulsar una determinada política económica o meros objetivos personales, sino también por quienes, como integrantes de una emergente burguesía comercial local, se sirvieron de ellas para volcar el equilibrio del poder en su propio beneficio, y en última instancia, en favor de un proceso de emancipación política, que se concretó recién en los inicios del siglo XIX.

Pero si para investigar este último proceso de crisis e insurrección nos reducimos a analizar la estructura política, con exclusión de la esfera puramente económica, debemos concluir también en la importancia que significa estudiar la capacidad política de un estado para movilizar recursos humanos y materiales con que defenderse de las amenazas externas. Es en ese sentido, que el mejor indicador de los cinco que menciona Wallerstein (1980) para medir el consenso político vigente en las colonias es la capacidad del estado de continuar recaudando recursos con que impulsar la defensa militar contra la amenaza naval inglesa, a un costo tal que no absorviera las ganancias de la burguesía comercial local dominante.¹ En este trabajo nos proponemos estudiar las prácticas corruptas que devoraban las recaudaciones fiscales (alcabala, sisa, etc.). Si los costos de esta recaudación, insumido por las prácticas corruptas (evasión fiscal), devoraba las eventuales ganancias sería evidente la incapacidad del estado de mantener sus colonias dentro de márgenes que no volvieran su administración ineficiente y costosa. Tanto Pietschmann (1982) y Andrien (1984) como el que suscribe, perseguimos entonces, examinar no sólo cómo los miembros de un aparato burocrático abusaron de los poderes legales sino también cómo el abuso de los poderes legales por parte de una emergente burguesía comercial local ayudó a socavar el aparato del estado colonial. Para examinar cómo el abuso de los poderes legales por parte de los miembros de la burocracia colonial ayudó a debilitar la dominación colonial en América es preciso entonces explorar no sólo aquellos cargos públicos donde no se contemplaban mecanismos racionales de reclutamiento de sus miembros, si no también aquellos otros cargos públicos donde sí se contemplaban, pero donde la venalidad superaba cualquier salario que la corona podía otorgar, o como

en el caso de los consulados, se contemplaban mecanismos eleccionarios en la selección de sus integrantes.

Es preciso entonces, para superar estas limitaciones, preguntarse en qué grado toda corrupción administrativa contribuyó a gestar una burguesía comercial local y a generar las condiciones objetivas para desencadenar un proceso revolucionario. Para ello deberemos distinguir las diversas definiciones de los actos considerados como corrupción. Para Heidenheimer (1970) existen tres definiciones de conducta corrupta: 1) las centradas en la función pública, 2) las centradas en el mercado, y 3) las centradas en el interés público. Las primeras se refieren a la violación de la confianza pública puesta en el funcionario, que incluirían según Pietschmann (1982) al cohecho o soborno; al nepotismo, favoritismo, o clientelismo; y al desfalco, quiebra o malversación de los caudales públicos. Las segundas se refieren a la situación en que el funcionario considera la posición como una jerarquía en la cual maximizar individualmente ganancias privadas al dispensar servicios públicos, adquiriendo venalmente el oficio en cuestión. Esta definición de corrupción implicaría un cambio de un modelo de precios fijados compulsivamente a un modelo de precios fijados libremente en el mercado. Las terceras enfatizan la violación del interés común en favor de intereses especiales que proveen beneficios directos o indirectos a los funcionarios gubernamentales. La evasión del pago de los impuestos internos, tales como la saca ilegal de plata sin sellar ni registrar, y de cueros sin marcar, así como la introducción ilegal de géneros Europeos, esclavos del Africa, y tabaco del Brasil, entrarían en la tercer definición de corrupción, a la cual está dedicado este trabajo. Para Pietschmann (1982), las dos últimas definiciones de corrupción serían las más funcionales para comprender el fenómeno de la corrupción latinoamericana colonial al no limitar las definiciones al aparato burocrático secular y extenderlo por el contrario a toda la sociedad civil y eclesiástica. A ello agregaríamos nosotros, que también debería extenderse el fenómeno de la corrupción a las mismas relaciones intra-familiares. Más aún, para el que suscribe, la primer definición -aunque equivocada en cuanto iguala a la corrupción con el nepotismo- sería la más funcional para comprender las motivaciones individuales y colectivas que engendraron el proceso revolucionario, mientras que la tercer definición sería la más funcional para explicar la emergencia de una burguesía comercial local que en última instancia dió lugar también a la gesta revolucionaria. Pero para Nas, Price, y Weber (1986), que analizan la corrupción administrativa en el estado contemporáneo, lo que está faltando en la literatura especializada es un mecanismo sistemático que ligue las causas de la corrupción con las consecuencias para generar alternativas válidas de políticas públicas. En el caso de las colonias españolas de América, por más que la mercancía importada por un comerciante local en su territorio haya sido fruto de un tráfico interlope no constituía por ello un acto de un típico comerciante burgués. Para que ello ocurriera el acto ilegal debería a nuestro juicio haber competido ventajosamente con el monopolio gaditano, alentado el comercio intercolonial, y contribuido a ampliar el ritmo de la acumulación de capital local. Esto pudo haber sido logrado si el fruto del acto ilegal hubiera constituido un insumo irremplazable con el cual agregar valor a la mercancía producida (e.g.: el acto de importar azogue y almadanetas para los ingenios de moler metal, o el acto de importar toneles para envasar carne salada a exportar, constituyen actos típicos de una burguesía exportadora). Más aún, las actividades ilegales como el contrabando, a juicio de Assadourian (1983), no dinamizan ni incitan al crecimiento de los sectores externos regionales, mantienen la tendencia al consumo suntuario del grupo social dominante, agudizan la tendencia descendente de los precios, y constituyen un elemento disruptivo al desarticular la estructura de los circuitos comerciales externos e internos.² Ultimamente, Imbernón (1986) logró romper con las crónicas disputas entre spenglerianos y revisionistas y fué capaz de concebir el contrabando en primera instancia como un contacto con el mundo extra colonial y en segunda instancia como una circulación ilícita tanto de productos foráneos como de productos locales pero ilegales.³ Es en ese sentido que pienso en este trabajo explorar esa realidad que tanto angustió y sigue angustiendo a generaciones de

intelectuales y políticos del mundo colonial y post-colonial.

La discriminación de los gravámenes en favor de la Iglesia y de las ordenes religiosas.

En primer lugar, la actividad ilícita más considerable en perjuicio de la Real Hacienda se cometía al amparo de la política fiscal colonial que discriminaba los gravámenes en favor de la Iglesia y de las ordenes religiosas, al exceptuarlas del pago de los derechos correspondientes a la primera venta. Estas actividades ilícitas o defraudaciones adquirirían mayor volumen al interior del espacio colonial, donde el control de las autoridades centrales se hacía más aleatorio. Ya en 1736 Gaspar de Bustamante, en nombre del Real Derecho de Alcabala, le inicia una demanda al Maestro Ignacio Ruiloba, cura y vicario de Corrientes, por los derechos de 400 tercios de yerba que remitió a Buenos Aires procedentes del Paraguay.⁴ Dicha voluminosa remisión de yerba, según diversos testimonios incluidos en el proceso, "...no correspondían a las Rentas de su Curato", por excederlas notoriamente. Aún cuando lo fuesen, Bustamante alegaba

"...no por eso estaba [Ruiloba] en modo alguno exonerado de la satisfacción de este y los demás derechos que deben los efectos que tiene remitidos respecto de haber hecho 1a, 2a, y 3a negociación, y los clérigos no tienen más que la 1a venta exenta, pero en las demás deben pagar los derechos reales como legos".⁵

El origen de estas múltiples negociaciones del cura Ruiloba provenían de los ingresos que le había rendido anteriormente el Curato de Luján, y del producto de unas casas que trocara por géneros con Gerónimo de Escobar. Trasladado Ruiloba a Corrientes por despacho del Gobernador Bruno Mauricio de Zavala en 1723 y transformados sus ingresos en géneros "...para reducirlos a otra especie que le diese más dineros que el empleado", Bustamante concluye que el cura Ruiloba "redujo sus dineros a géneros, sus géneros a ganados, los ganados y retacerías de géneros a yerba, y la yerba vuelve a reducirla a dineros", sin haber contribuido un real a la Real Hacienda.⁶ Por si esto fuera poco, el Teniente Gobernador de Corrientes Capitán Pedro Gribeo, quién le había dado licencia a Ruiloba para el pase desde el Paraguay de una tropa de 18 carretas cargadas de yerba, tabaco, y azúcar, declara que oyó decir a Don José Mier de los Ríos que el origen de dichas carretas y hacienda no provenía de los ingresos del curato de Luján sino de los 6 o 7 mil pesos que "...le había dado su hermano [de Ruiloba] en Potosí".⁷ Esta información de Mier de los Ríos muy bien pudo ser cierta si tenemos en cuenta que para esa época, Francisco Ruiloba, regidor de Tarija, y hermano de Ignacio contrae en Buenos Aires tres operaciones de fiado, una en 1728 con Juan Francisco Bazurco por \$4.877, otra en 1734 con Francisco Huidobro por \$5775, y otra en 1739 con Antonio Larrazábal por \$2500.⁸

La discriminación en favor de los consignatarios de las casas monopolistas de Cádiz.

En segundo lugar, la evasión fiscal más generalizada se cometía pese a la política fiscal colonial que discriminaba en favor de los consignatarios de las casas monopolistas de Cádiz, y en contra de los mercaderes locales y los empresarios sustituidores de importaciones. A diferencia de los dueños y arrendatarios de minas e ingenios productores de plata y oro para exportar, que solían gozar de exenciones fiscales tales como el pago del quinto real, aquellos otros contribuyentes establecidos en los puertos de entrada, que producían y distribuían artículos que competían con la introducción de manufactura metropolitana, como ser los maestros herreros dueños de fraguas y productores de frenos, espuelas, y herramientas de la industria minera (azadones, barrenas, barretas, almadanetas, combas, espadillas, y varillas) se veían aplastados no sólo por la competencia de los precios de la manufactura importada sino también por la persecución fiscal para el pago de la alcabala.⁹ Por la naturaleza indirecta de la alcabala su costo se solía trasladar al precio de venta al consumidor. Pero cuando el contribuyente

era un productor local cuyo producto sufría la competencia de las importaciones procedentes de la metrópoli, no siempre podía trasladar el costo del gravámen fiscal. En los Autos por cobro de pesos obrados en 1745 por Tomás Antonio Arroyo y Esquivel,¹⁰ Administrador del Real Derecho de Alcabalas Terrestres, contra Francisco Lillo, un maestro herrero dueño de dos fraguas, Nicolás Lisperguer, testigo en la información levantada declara:

"...que es cierto tienen la tienda los susodichos Lillos abastecida de varios géneros y por el año de 40 o 41 viviendo el sujeto en aquel barrio les oyó decir a los dos susodichos que venderían un día con otro a setenta u ochenta pesos (menudeo diario) y que en esta ocasión estaba el comercio más corriente que ahora y que después se mudó de aquel barrio."¹¹

Arroyo, declara en los mismos autos que:

"...bien justificado está por su mismo dicho el que la venta diaria del menudeo son 70 a 80 pesos pero yo lo regulo prudencialmente a sesenta pesos que en 365 días que tiene el año importan \$21.900 de venta que en los dos años en que se debió recaudar a razón del 4% montaron dichos pesos de venta diaria \$43.800: y su alcabala importa \$1.752 y en los otros dos años últimos del 2% adeudaron a favor del dicho Real Derecho por razón de dicha venta diaria \$876 cuías partidas suman \$3.028".¹²

Por lo general estaba establecido que a los receptores que administraban las alcabalas terrestres se les asignaba un porcentaje que alcanzaba promedio al 30% de lo recaudado.¹³ Pero cuando en 1746 el Cabildo resuelve arrendar el ramo, quienquiera lo obtuviera debía previamente hacer un cálculo de la capacidad contributiva de la jurisdicción a fiscalizar y tener en cuenta que para poder concretar los enteros anuales a los que se obligaba con las Cajas Reales debía al igual que los antiguos administradores del ramo perseguir denodadamente la evasión fiscal. El cobro del ramo de alcabalas había sido durante el siglo XVII tradicionalmente arrendado en todas las ciudades del Virreinato Peruano a comerciantes particulares, y el precio ofrecido varió siempre según la capacidad contributiva que el ramo poseía en cada ciudad. En Potosí, en 1623, Lope de Bastidas la arrendó en la suma de \$45.000 anuales por el término de ocho años. En La Paz, en 1625, Diego de Bobadilla lo arrendó en \$2000 anuales por el término de tres años. En Oruro, en 1627, Diego Fernán Rodríguez lo arrendó en \$13.000 anuales por el término de cuatro años.¹⁴ Y en Buenos Aires, en 1664, Mateo de Aliende, a su vez un pulpero, arrendó el ramo en la suma de \$1840 anuales por el término de tres años.¹⁵ Pero pese a la existencia de una incipiente burocracia patrimonial compuesta por comerciantes particulares ansiosos por acumular una diferencia entre lo recaudado y lo abonado en la subasta, la presión fiscal, aunque escrupulosa, solía también ser muy a menudo burlada. Es Don Agustín Garfías quien en 1746 obtiene en Buenos Aires en subasta pública por \$44.345 el Real Derecho de Alcabala, por el término de cinco años y a razón de \$8869 cada año.¹⁶

Desde el primer instante en que asumió el cargo Garfías se vió precisado a enfrentarse tanto con el clero cuyano, como con los vendedores ambulantes, los dueños de tienda y pulpería, los mayoristas, y los dueños de arrias de mulas. El clero cuyano se obstinaba en no pagar tales derechos so pretexto de que las cargas de vino y aguardiente eran producidas de sus patrimonios y como tales exentas de todo gravámen.¹⁷ Era este un pretexto pues todos sabían que actuaban como apoderados de viñateros y bodegueros profanos. Uno de los primeros evasores que tuvo Garfías fué el Dr. Matías Frías, Cura y Vicario de Mendoza, el cual hizo fuga por no pagar los derechos de unas cargas de aguardiente que pasó por alto en compañía de Don Fernando Torres. El procedimiento seguido por Garfías para detener a Frías fué recurrir al Alcalde de segundo voto para obtener una orden mediante la cual enviar alguien en su seguimiento y consiguiente detención. Habiendo recaído esta orden en Don Joseph Martínez, este

le dió alcance en el pago de Areco y en virtud de la orden le embargó las cargas de aguardiente depositándolas en un vecino de Areco, y lo trajo a Buenos Aires con orden de no salir de ella "hasta tanto me pague todo el cargo que le hago de los derechos reales que a querido ocultar". Según Garfias, la acusación se justificaba "pues se conoce por su fuga estar cómplice en su delito".¹⁸

Esta situación de litigio con el clero cuyano para el cobro de los derechos de sisa y alcabala sobre las cargas de vino y aguardiente fueron permanentes, al extremo de continuarlas sus albaceas hasta después de muerto.¹⁹ En efecto, los apoderados de la testamentaría de Garfias iniciaron acciones contra el Pbro. Maestro Bernardino Mayorga, el Dr. Francisco Correa de Sáa, cura y vicario de Mendoza, y el Pbro. Dr. Joseph Morales.

También debió Garfias enfrentarse con los dueños de tiendas, quienes se excusaban de pagar los derechos que adeudaban "...por decir que con la multitud de vendedores que andan por las calles (a quienes regularmente llaman chifles) se minoran las ventas de sus tiendas". Este argumento fué suficiente para que Garfias se viera precisado "...a rebajar a muchos del ajuste combenido". No obstante, Garfias no se dió por vencido y recurrió a los Jueces Oficiales Reales para que "manden con la pena que hubieren por conveniente,...que ninguno venda en dicha forma sin que primero tengan ajuste conmigo". Tampoco pudo obstar a las pretensiones de Garfias "...el decir que de las mismas tiendas, sacan los géneros que salen a vender, porque en algunos se verifique esto, en los más se falsifica, quedando por eso defraudada y perjudicada la Real Hacienda".²⁰

Asimismo debió Garfias encarar a los comerciantes mayoristas, los cuales argumentaban para eludir el pago de la alcabala "...no hauer vendido todavía sus efectos".²¹ Esta excusa parecería haber sido orquestada colectivamente y en forma premeditada por cuanto Garfias declara que esta excusa, era "...un entable general en todos, que parece regular, porque como quiera que la satisfacción le han de hacer de lo que venden, si no han vendido, no hay arbitrio para compelerlos".²² Si bien es verdad que Garfias advierte que algunos mienten, "...mientras esta (la malicia) no se conoce, no parece conveniente trabar un pleito y execusión con cada uno de ellos".²³ La impotencia para auditar a cada vendedor mayorista era reconocida por Garfias al expresar: "...siendo coas casi inaveriguable el que ayan recaudado sus fiados, por que para ello era menester poner un sobreestante a cada uno lo cual es imposible".²⁴

Garfias se agravía también de padecer "...gran decadencia con los que tienen tiendas y pulperías por ocasión que unos se quitan y se van fuera desta ciudad vendiendo sus efectos y cuando llega el año en que me es preciso cobrar ya no ai noticia dellos quedando este derecho perjudicado". Para remediar esta situación crítica Garfias sugiere y solicita se reduzca por bando el período de pago de un año a seis meses "...y si posible sea que paguen adelantado como se practica con el derecho de pulpería".²⁵ Finalmente, y con referencia a los compradores de mulas, Garfias, en representación de la Ciudad de Santa Fé para el cobro del Real Derecho de Sisa, cuestiona el procedimiento del cobro "...por cuanto las personas que vienen a comprar dichas mulas luego que las compran se ban sin pagar nada de lo que adeudan". Entiende Garfias que no basta con cobrar al vendedor de las mulas y que es preciso gravar en su lugar a los compradores. En ese sentido, Garfias recurre a las autoridades "...para que se sirva mandar que todos los vendedores retengan en sí el derecho de sisa".²⁶ Mucho después, en 1782, en los autos obrados por la Diputación del Cabildo de Córdoba acerca de la alegada extenuación del ramo municipal de Propios, Carlos Estela, un comerciante de origen porteño, ex-Tesorero de la Real Hacienda de Córdoba, al igual que con anterioridad lo había denunciado el Teniente Gobernador Arriaga y la minoría del Cabildo de Córdoba, delata la situación imperante en dicho Cabildo como un grave caso de defraudación. Si el Cabildo de Córdoba había cobrado los derechos de entrada de carreta

y arrias que debía percibir la Real Hacienda, los ingresos correspondientes a dicho ramo no podían, según Estela, menos que abundar "...por que bien notorio es las mulas que entran en aquella ciudad [Córdoba] de la de Buenos Aires anualmente".²⁷ Pero si, por el contrario, el Cabildo no había cobrado dicho derecho, y como hemos visto, tampoco los cobraba el Alguacil Mayor de Cajas García Guilleddo, ello sería evidencia de que los vecinos negociantes en las especies gravadas habían usurpado a los Propios este derecho. Entre dichos vecinos, Estela detallaba

"...principalmente los Allendes, Quintanas, y toda su parentela, que sucesivamente están empleados en el Cabildo, ya de jueces ya de regidores".²⁸

Como era de suponer, Estela había sido excluido y separado por los demás Oficiales Reales del manejo de la Real Caja, motivo por el cual se había suscitado un litigio en la Intendencia de la Real Hacienda. Impuesto del hecho, el Gobernador-Intendente de Córdoba Antonio Arriaga no sólo lo declaró a Estela por "buen Ministro", sino que también le libró despacho de reposición.²⁹ El Cabildo compuesto por el linaje de los Allende en la persona de Don José de Allende y Losa y Don Francisco Hurtado de Mendoza,³⁰ resistió su reposición, no admitiendo de modo alguno la fianza que Estela ofreciera. Pero el caso era que en aquel Cuerpo municipal "...no se cumplían las resoluciones de los Tribunales superiores".³¹ Los que componían aquel ayuntamiento eran los regidores propietarios José, Santiago, y José Antonio de Allende; el Justicia Mayor Antonio de la Quintana y Sebreros, y el Alcalde de Segundo Voto Don Ambrosio Funes y Bustos de Albornoz, casados estos últimos con dos hermanas hijas del finado General Tomás de Allende y Losa, sobrinas de los dos primeros regidores mencionados; el Alcalde de Primer Voto Don Francisco Antonio Díaz, consuegro de un tío de las esposas del Justicia Mayor Quintana y del Alcalde Funes; el Procurador General de la Ciudad Don Francisco José de Uriarte, con cuñado del Coronel Santiago de Allende y Mendiola; y los regidores Don Prudencio Gigena y Francisco Hurtado de Mendoza, "...todos parientes dentro del cuarto grado, unos por afinidad y otros por sanguinidad y parcialidad".³² Como se comprenderá

"...no hay quien no les rinda por la violencia todo omenaje, y con razón, porque ellos tienen, puede decirse, como en el bolsillo, toda la autoridad y judicatura de aquella Ciudad, anualmente se ve entrar y salir todo el mando y poder de aquella ciudad de unos parientes en otros, entre ellos turna y entre sus manos se gastan las varas, mas no se atienden las resoluciones del Soberano".³³

No se diga, alegaba Estela, que en Córdoba no había otros vecinos a quienes acudir para llenar los cargos capitulares, pues Córdoba

"...era abundantísima en vecinos honrados de conciencia, timoratos, y sin coligación, ni parentesco, de modo que anualmente se pueda con amplitud completar el número de individuos en el ayuntamiento, sin necesitarse por ningún título de incluir en mucha serie de años dos individuos que por línea alguna aludan parentesco".³⁴

También observaba con asombro en 1786 el Ministro Tesorero de Real Hacienda Don Gabriel Güemes Montero,³⁵ al Gobernador Intendente del Tucumán, el irrisorio cobro que los Receptores de Sisa y Alcabala practicaban.³⁶ Esta realidad, muy probablemente haya quebrado su moral, por cuanto en 1802, un numeroso grupo de vecinos de Salta,³⁷ al dar cuenta de serios casos de corrupción, mencionaba el caso de dicho Ministro, quien influía para que las mulas que gravaba en ejercicio de sus funciones de sisero se inviernaran en los campos del yerno del Teniente Asesor José de Medeyros, y primo de su mujer, el Comandante de Frontera Juan José Cornejo.³⁸ Asimismo, la impresión que Don Rafael María Guerrero y Montañez, Tesorero de la Real Hacienda de Santa Fé, manifestara al Virrey en 1791 tenía con respecto al partido del Rosario, provincia de Santa Fé, era que en él reinaba una corrupción

generalizada, pues los Receptores de Sisa de la Campaña "...limitaban su recaudación a sólo los recintos de las capillas de su residencia, y no adelantaban su cuidado a lo interior de las estancias".³⁹ Esta negligencia era atribuida en dicho documento al hecho de que dicho ramo de Alcabala, Pulperías, y Sisa no reportaba en la campaña utilidad alguna a los arrendatarios de la recaudación debido al "...costo de los caminos, que necesitaban andar en remotas distancias, para impedir las clandestinas introducciones, ventas, y extracciones de frutos y efectos".⁴⁰ Sin embargo, la corta recaudación obtenida no se compadecía con las "...cuantiosas porciones con que abastece aquel partido [Rosario] a esa ciudad, la de Córdoba, y Mendoza, y crecido el número de mulas, que de el mismo territorio se conduce a Salta, de las cuales ninguna guía han sacado los conductores".⁴¹ De esta realidad el documento infiere "...que si fueron ocultas las extracciones, serían asimismo clandestinas las introducciones en los destinos, y que por consiguiente se ha hecho también extensivo el perjuicio a otras Tesorerías".⁴² También era negativa la impresión que en 1799 tenía el Ministro de la Real Hacienda con sede en Córdoba Gaspar Lozano, de la administración del ramo de Alcabalas de la provincia de La Rioja. Fundaba Lozano su aserto en que

"...no se verificó recaudar derecho alguno, ni de los ganados y mulas que allí se consumen, y expenden, ni de otros diferentes efectos, que se conducen de Chile, cuyo comercio está muy propagado en La Rioja y su jurisdicción con el aumento que han tomado los salitres, que se benefician y se extraen para dicha Capital".⁴³

La recaudación del diezmo.

De parecida mezquindad resultaba también la recaudación del diezmo. Con todo, el diezmo de granos solía ser más recaudable que el diezmo de cuatroepea. Este último, ofrecía mayores problemas, según las regiones, pues para recaudarlo era preciso parar rodeo, y además caer en tiempo oportuno ya que, habitualmente, los hacendados encontraban siempre alguna excusa en las lluvias, las sequías, las epidemias, los cardos, o las pariciones.⁴⁴ El noveno y medio de los diezmos perteneciente a los Hospitales también se veía afectado por la resistencia que ofrecían los hacendados al pago de dicho tributo. En el caso de Santa Fé, el Obispo Manuel Antonio de la Torre proveyó en una Visita un auto mandando

"...que desde aquel año en adelante luego que el Juez Hacedor percibiese esta parte de Diezmos la entregase al Cabildo, y éste la pusiese inmediatamente a intereses, en sujeto abonado, y que al año siguiente, los réditos de aquel principal con el producto del noveno y medio, se pusiesen asimismo a intereses, y así se siguiese sucesivamente, con el objeto de formar un fondo considerable, para la fundación del Hospital".⁴⁵

Dicha idea, "...aunque tan proporcionada, no tuvo efecto alguno en lo principal, así por la omisión del Juez Hacedor, como del Cabildo y Procurador, que en tantos años, no exigieron al cumplimiento del citado auto, perdiendo aquel ramo por esta razón una cantidad considerable".⁴⁶ Pero nombrados como Procuradores Generales José Ignacio Uriarte primero, y Juan Crisóstomo Pérez después, se empezó al menos a indagar el monto de lo adeudado por los principales contribuyentes del Ramo, entre ellos Melchor Echagüe, dueño de estancias en la Costa del Añapiré, quien debía más de \$3.000 al Ramo.⁴⁷ Sin embargo, al ver los deudores la firme actitud de Pérez, "...y que no me podían contrastar, tuvieron poder para conseguir la revocación [del Auto], con lo que cesó la persecución [de los recaudadores] y quedaron [los deudores] como antes".⁴⁸ Si bien antes y después ha habido Procuradores, los nombran "...de los que les son parciales, o uno de los mismos deudores, como en el día, para de este modo entorpecer el asunto, y estar privando a los pobres del socorro en sus enfermedades".⁴⁹

La manipulackión de las guías de aduana.

Amén de los derechos del Ramo de sisa y alcabalas, los comerciantes del interior solían defraudar al fisco manipulando las guías de aduana. El mecanismo más común era sacar guías fraudulentas declarando cargas semejantes pero de inferior valor, que si bien podían tener igual gravámen en el lugar de expedición no lo tenían en el lugar de destino. Este fué el caso, por ejemplo, del aguardiente de San Juan que so capa de cargas de vino era expedido a Córdoba y las provincias del Alto Perú.⁵⁰ Según el abogado Juan José Castelli menos del quince por ciento de las cargas de aguardiente que entraban en Córdoba traían guía.⁵¹ También solían los comerciantes sacar sus guías de aduana entre los Tesoreros de la Real Hacienda de cada cabecera provincial para introducir sus mercaderías en destinos geográficos preestablecidos, y en su lugar comercializar la mercancía en puntos intermedios. Con lo que los comerciantes no pagaban los gravámenes ni en el destino fingidamente prefijado ni en el efectivamente arribado. Finalmente, los comerciantes retornaban la guía al Tesorero, quedando este último cubierto y el fisco defraudado.⁵²

El comercio ilícito o desdoblamiento del orden legal.

En relación con el concepto que se tenía del comercio ilícito, Imbernón (1986) ensaya asimismo la innovadora concepción de que el contrabando formaba también parte de las prácticas de desdoblamiento del orden legal vigente en ese entónces, al contribuir a la legitimación histórica del orden colonial creando "...nuevos momentos de síntesis y redistribución económicos y sociales que formaron cadenas solidarias de intercambio en oposición al aparato burocrático y al ciclo tributario y comercial realengo".⁵³ Este desdoblamiento del orden legal llegó a ser extremadamente desigual, según se tratara de la política vigente antes o después de las Ordenanzas de Libre Comercio (1778).⁵⁴ El instrumento central en este desdoblamiento del orden legal era la guía o licencia de internación expedida por las respectivas Aduanas. Cuando las autoridades aduanales capturaban un embarque fraudulento lo sacaban a pública almoneda (remate), entregando a los compradores las guías que los autorizaban a vender dichos artículos en el país. Los contrabandistas introducían luego géneros foráneos, por alguna ensenada poco controlada, para venderlos amparados en las guías que adquirieron en pública almoneda. Si bien por un lado la Corona otorgaba antes de 1778 permisos de registro con licencias o guías de internación que implicaban la autorización de extraer el equivalente de la mercadería importada en dinero-mercancía (plata doble), por el otro lado el Ministro Marqués de la Ensenada ordenaba ya en 1748 al Virrey del Perú Conde de Superunda que cesara la tolerancia para con el comercio a través de la Colonia del Sacramento. En cumplimiento de esta orden virreinal procedente de Lima, los Gobernadores de Buenos Aires interpretaban las guías de aduana restrictivamente con gran menoscabo del comercio, fijando plazos para que todos los factores y encomenderos autorizados para internar mercadería importada saliesen para sus destinos.⁵⁵

El menoscabo económico que estos plazos provocaban equivalía a algo más que un gravámen fiscal. Pero a partir de la aplicación de las Ordenanzas de Comercio Libre de 1778 la política fiscal colonial respecto de Buenos Aires se alteró radicalmente. Como la prohibición de extraer metálico del Alto Perú pasó de vedar la saca por vía de Buenos Aires a prohibir la extracción de dicho metálico por vía de Lima, el nivel de evasión fiscal en plata sin diezmar disminuyó notoriamente. Pero no lo fué así sin embargo el nivel de ilegalidad practicado con respecto a las introducciones de mercadería extranjera. Por el artículo 30 del Reglamento del Comercio Libre se ordenaba que siempre que resultare comprobada la falsedad de las guías se castigara a los autores y cómplices de este delito con las penas previstas en el artículo 18, advirtiendo que aún cuando los géneros saliesen como Españoles de los

puertos habilitados en la Península e Islas de Mallorca y Canarias se reconocieran de nuevo en los de América y se declarara el comiso con extensión al buque que los hubiera transportado si perteneciese al mismo dueño de ellos. Por el mismo artículo prevenía S.M. que con ningún motivo ni pretexto se mezclaran, confundieran, ni suplantarán, los efectos y manufacturas de España con las extranjeras poniéndolas en unos mismos fardos, baúles o envoltorios, y que los que incurriesen en semejante delito sufrieran, irremisiblemente, las penas de confiscación de cuanto les perteneciera en los buques, y sus cargazones, la de cinco años de cárcel en un presidio de Africa, y la de quedar privado para siempre de hacer el comercio de Indias comunicando a los Ministros de las Aduanas que resultasen cómplices en esta contravención con el perdimiento de sus empleos.⁵⁶

La dificultad de perseguir estos ilícitos residía en las múltiples argucias y justificaciones con que los inculcados eludían en los tribunales la aplicación de los castigos previstos por el Reglamento. En el caso planteado en 1785 a causa de una docena de medias imputadas de extranjeras, ante el Gobernador Intendente por Lorenzo García, consignatario de una memoria de efectos que condujo la polacra San Francisco de Paula, perteneciente a Don José Andrés Sanz, el vecino de Potosí que fuera su Capitán de Mita y socio en la quiebra del Administrador de la Aduana de Buenos Aires José Ximénez de Mesa, García alegaba que no bastaba el juicio de los expertos para declarar a las medias caídas en comiso, sino que se requería para confiscarlas no sólo verificar que efectivamente fueren extranjeras sino también que hubieren sido presentadas con nombre de nacionales.⁵⁷ A más del juicio de los expertos y la verificación de la extranjería, García requería que el valor aplicado al Juez y al denunciador debía ser sólo del de la docena de medias y no del de la memoria entera de los efectos encontrados en el cajón de marras.⁵⁸ Asimismo, García sostenía que mal podía ser Sanz inculcado por cuanto al momento del registro y embarque de la memoria él estaba en Potosí, y por cuanto no hubo falsedad de marcas y despachos.⁵⁹ Por el contrario, García aducía que si hubo en realidad suplantación de medias extranjeras en lugar de españolas, debía repetirse el valor de las mismas no contra Sanz sino contra la remitente en Cádiz, Doña María Pérez de Urria y Loye.⁶⁰

De acuerdo con el Reglamento del Comercio Libre los dueños de las mercaderías importadas o sus consignatarios debían limitarse a pagar el 3 o el 7% de los derechos de almojarifazgo, pudiendo vender libremente en Buenos Aires y Montevideo o en las provincias interiores sin oblar otra contribución, siempre y cuando ellos fueren en persona quienes introdujeran los géneros. Pero si los artículos deseaban ser destinados para el Perú o Chile debían satisfacer el derecho de internación en los puertos secos de Jujuy o Mendoza y la alcabala en el lugar donde efectuaran las ventas. Esta internación era aceptada siempre y cuando la mercadería importada llevara una tornaguía que indicara las aduanas de origen y de recepción, los nombres del vendedor y del comprador, y la naturaleza y precio de la mercancía, así como dejaran la correspondiente fianza en la Aduana de Buenos Aires.⁶¹ El quid de la cuestión que provocara litigios sin fin fué según Levene (1952) y Santamaría (1982) establecer donde debía saldarse la alcabala de primera venta. El Contador Mayor Francisco de Cabrera opinó que

"si a los efectos que vienen de España consignados para las provincias interiores, no se les rebajase el 3% de la primera alcabala (que han de pagar forzosamente en esta Aduana al tiempo de desembarcarlos), del 4 o del 6% que han de contribuir en los parajes donde se expendan, se verificaría en tal caso, que se les exigiera de primera venta dos alcabalas, cosa abiertamente prohibida por las leyes y muy distante de las piadosas intenciones de S.M. en los nuevos establecimientos".⁶²

Nicolás Torrado repuso por su parte "...que deben pagar aquí el derecho de entrada y alcabala de primera venta, en cumplimiento del registro y el de la plaza a que los destinen aunque sea dirigiéndolos

desde la misma Aduana".⁶³ Finalmente, Francisco de Villanueva, creía conveniente el pago en Buenos Aires del 3% conforme a la Real Cédula de febrero de 1779 y al introducir los efectos en su destino "el exceso que falte al cumplimiento de la cuota que contribuyen los que se destinan desde esta plaza", agregando que

"...la alcabala de las plazas interiores nunca puede suprimir la de ésta, en razón de que hace dos representaciones cualquier factor o dueño de ropas de Europa que las envía a alguna otra plaza de la interioridad, para su cambio o permuta la una como factor ultramarino, la otra, la del primer comprador en la interioridad, que viene a comprar aquí los efectos de Europa".⁶⁴

Vistas las distintas opiniones vertidas, la Corona española resolvió que todo género europeo pagase en puerto el 3% de alcabala de primera venta, según los precios corrientes del país y con arreglo a la Real Orden de febrero; que para poder llevarlos al interior debía solicitarse guía, equivalente a la antigua licencia de internación para que, sobre el tanto por ciento que da la Instrucción de Aduanas, se cobre el 4% en las provincias de frontera y el 6% en las interiores.⁶⁵

Para evitar los perjuicios que podría ocasionar a la Real Hacienda la generalización de convenios de segunda y tercera venta sin el pago de la correspondiente alcabala, la corona impuso un plazo máximo para producir la reventa, a partir del cual se cobraba nueva alcabala aunque la mercancía no se hubiera podido revender. Esta medida estaba fundada en la presunción de que habiendo pasado la mercancía a otro poseedor, y tomando éste el nombre y voz del primero, se consideren como de primera venta unos géneros que en realidad eran ya de segunda o tercera negociación y sujetos por consiguiente a nueva alcabala. El artículo 11 del capítulo I del Reglamento de Aduanas del 2 de Octubre de 1773 prevenía "...que aunque los mercaderes intenten sacar y remitir a otra parte cualesquiera géneros sin pagar la Alcabala adeudada pretendiendo no deberla hasta su efectiva venta, se les cobre este derecho luego que se cumpla plazo". Fué hasta 1795, que los efectos europeos o locales llevados a Potosí, tenían que pagar doble alcabala si por no haberse vendido, después de un año los primeros, o seis meses los segundos, se hubieran sacado de esa ciudad a otra plaza. El diputado consular de Potosí elevó en abril de 1795 una representación al Consulado porteño denunciando que

"...se halla hoy el comercio de Potosí con los numerosos obstáculos que impiden la libertad de sus negociaciones por el duplicado derecho a que se les compele luego que han verificado sus exportaciones fuera del año, así en el lugar de donde se extraen sus mercaderías como en el destino a donde las dirigen".⁶⁶

Agregaba el diputado consular que:

"...un negociante que interna sus facturas hasta estas provincias jamás podrá lograr todo su expendio en sólo el término de un año y cuando proyectase extraerlas para otros lugares inmediatos ya se encontrara sobre los costos de su transporte con otro derecho del que ya había satisfecho, por los mismos géneros, y que les hace subir considerablemente en sus precios".⁶⁷

Para evitar estos fraudes, la Corona implementó en 1796 el registro cerrado. La guía con el recuento de los bienes introducidos era remitida a Jujuy donde se permitía un nuevo registro si se los internaba al Alto Perú impidiéndole al comerciante vender legalmente sus mercancías en las plazas intermedias en el caso que el precio y otras condiciones lo hicieran estimulante. Habiendo resuelto y puesto en práctica la Real Aduana que

"...toda clase de guías que saquen los comerciantes para estas provincias vengan cerradas en clase de registro a entregar a la Tesorería menor de Jujuy resultan los inconvenientes que ya se han tocado:

1) que el negociante que dijo en esta capital que se dirigía a La Paz...y en la dilatada distancia de su carrera se desengañó y tomara el arbitrio de hacer sus ventas en la plaza que le convenga...la guía que se halla en La Paz impide esta libertad;

2) que el Tesorero de Jujuy ha tenido allí muchas guías y varios interesados se han encontrado aquí (en Potosí) sin ellas y los perjuicios se dejan muy bien entender".⁶⁸

El pedido surtió efecto y el Tribunal del Consulado accedió poco después a derogar el registro cerrado y permitir las ventas en los mercados de tránsito.

El costo de la guía y demás trámites aduanales estaban en función de la escala de las operaciones comerciales practicadas. A mayor intensidad del comercio más bajos eran los aranceles fijados para cada trámite burocrático. Es así que en las provincias interiores resultaba más costoso comerciar que hacerlo en la propia submetrópoli colonial. Juan Antonio Moldes a nombre de los comerciantes de Jujuy hizo presente en 1794 el perjuicio

"...que experimentan por la cobranza que se les hace en estas Reales Cajas de diez reales de cada guía que sacan a saber seis reales que se aplican para el escribano de Real Hacienda, y los cuatro reales que tocan al Rey con más cuatro reales de la cancelación que se les hace de su fianza cuando traen tornaguía no debiendo cobrarse más de dos reales y eso cuando no se paga de contado la Alcabala para estender la fianza".⁶⁹

En 1794 hallándose el comercio en estado tan deplorable y decadente se hacía sensible que se lo gravara con semejante pensión, máxime cuando era notorio que en la Aduana de Buenos Aires sólo satisfacían por una guía que sacaban en papel común (sin sellar) cuatro reales pertenecientes a la Corona, y por extender la fianza los dos reales.

La defraudación fiscal practicada por todos aquellos comerciantes venidos de España con el Reglamento del Comercio Libre, se manifestaba también en la evasión del pago de la alcabala del 6% que se lograba instalando almacenes que pretendían el privilegio del comercio mayorista pagando sólo el 3% de alcabala para luego vender al menudeo. Por ejemplo, en el Buenos Aires de fines del siglo XVIII, Francisco Ximénez de Mesa, el conocido y fraudulento Administrador de la Aduana porteña, nos manifiesta la existencia de almaceneros tenderos que vendiendo al por menor lo que han traído por su cuenta de España, quieren les valga la calidad de almaceneros y no la de tenderos.⁷⁰ En los puertos de entrada, a diferencia de las provincias interiores, la comercialización de los productos importados denominados efectos de Castilla merecía toda suerte de maquinaciones con tal de eludir los gravámenes fiscales, establecidos con el fin de controlar el contrabando. Esta confusión de funciones derivó en una "...controversia de opuestos intereses, que trae perturbación, e irá en mayor incremento si la autoridad no lo fija", pues los almaceneros que vendían al por menor no pagaban la alcabala debida, mientras que los tenderos cargaban con el peso del gravamen.⁷¹ Para dificultar el contrabando, la corona buscaba, según Lucena Salmoral (1982), evitar la confusión entre mayoristas (comerciantes) y minoristas (mercaderes y bodegueros), entre tenderos de mercadería importada y vendedores de frutos de la tierra, y entre pulperos y artesanos. Los propios agentes mayoristas del monopolio gaditano en Buenos Aires se esforzaban para que sus habilitados en el comercio minorista no se mezclaran en tratos ilícitos.⁷² La lealtad personal para con el patrón del comercio y la fidelidad en el cumplimiento de los

contratos estaban entre los prerequisites ineludibles para el ascenso social dentro de las filas de la burguesía comercial descrita por Sombart (1972), en su biografía o contribución a la historia espiritual del hombre económico moderno. En la demanda que Juan Antonio de Lezica y Osamiz le iniciara a su primo Juan de Osamiz y Urtubey, prevalecen las pautas morales de las que habla Sombart (1972) y que se encuentran tipificadas indirectamente en el desprecio que se cultivaba por las pulperías. Lezica le había adelantado a su primo Osamiz seis remesas por valor de \$98.820 entre 1776 y 1783. Pero dicho Osamiz

"...ingrato y desconocido, lejos de corresponder a tantas finezas, y de dar cumplimiento a sus obligaciones, no sólo no ha procurado remitir los caudales correspondientes para pagar a su benefactor, pero lejos de ello tengo (Lezica) puntuales y expresas noticias de que su conducta es despreciable, y que en lugar de aplicarse a sus negocios dedica el tiempo a sus devaneos, y disipa los bienes de modo que causa escándalo y a mi me produce un perjuicio inmenso".⁷³

Finalmente, Osamiz terminó como no podía ser de otra manera, sirviendo los intereses del fallido Administrador de la Aduana de Buenos Aires Don Francisco Ximénez de Mesa. En las curiosas instrucciones acerca del comportamiento que debe llevar en Potosí el joven José del Pozo, Ximénez de Mesa le advierte en 1786 que "...en todo no des paso sin Osamiz, bajo cuya cubierta va esta y otra de pasatiempo".⁷⁴

El cumplimiento estricto de las obligaciones, la seguridad del crédito, y el evitar devaneos, escándalos y disipación de bienes estaban para Juan Antonio de Lezica en el decálogo de una conducta respetable.⁷⁵ La estigmatización del despilfarro y la ociosidad como fuentes de deshonor, infamia, y lascivia, señalada oportunamente por Sombart (1972), encuentran en las palabras de Lezica su confirmación. El parentesco sólo, no era entonces garantía alguna contra la corrupción, ni tampoco garantía de cumplimiento y lealtad en las operaciones mercantiles, cuando la distancia no permitía ejercer un control periódico y directo, y las tentaciones de Potosí para malgastar los dineros, eran muchas. Para evitar los fraudes entre los comerciantes mismos o entre los comerciantes y el público consumidor era preciso asegurar la lealtad comercial. La lealtad comercial comprendía el respeto por las formalidades comerciales. La formalidad comercial incluía a su vez el uso de pesas y varas arregladas al patrón establecido por el ayuntamiento, y el uso del sello respectivo. Era responsabilidad de los Fieles Ejecutores vigilar estrictamente, visitando periódicamente las tiendas y pulperías, el uso de las pesas y medidas legales. En un sonado caso ocurrido en Salta, Don Mateo de Saravia y Jáuregui, Abogado de la Real Audiencia y Fiel Ejecutor Propietario de la ciudad de Salta, encontró en una Visita practicada en 1792 que Domingo Cardo, factor del comerciante salteño Manuel Antonio Boedo, usaba en su tienda pesas y varas sin el sello correspondiente.⁷⁶ En otra Visita posterior, como aún continuaba con las pesas y varas sin sellar, se le recogen las mismas y se le manda "...que interín no ocurra con varas y pesas arregladas, para que se le sellen, tenga su tienda cerrada".⁷⁷ De haber estado las pesas y vara de Boedo arregladas con el Padrón, Saravia no hubiera tenido necesidad de recogerlas y en el acto mismo de la Visita se las hubiera sellado. Pero lo cierto era que el marco de las pesas de Boedo estaba menguado, y aunque Boedo alegaba que era inservible y no era usado, el hecho fué que en la Visita Boedo presentó las pesas como corrientes y actuales. Como consecuencia de ello Saravia impuso a Boedo una fuerte multa, a la que este último se resistió altivamente. Pero amén de las regulaciones de toda índole, los comerciantes minoristas corrían con otro tipo de riesgos. El mercado minorista

"...era muy trabajoso y arriesgado por las faltas de vara, por la retacería que queda, por el desperdicio en muestras, por el deterioro y ajamiento del genero en tantas manos como corre para ser visto, examinado y comprado, en que se emplea mucho tiempo, y se difiere la venta

con estimación".⁷⁸

La evasión fiscal también tenía sus costos, que incluían los gastos de residencia. Estos últimos se inflaban debido a las sucesivas mudanzas de residencia que era preciso practicar para impedir su ubicación por parte de los recaudadores alcabaleros, lo que explica a su vez el porqué preferían los comerciantes alquilar que comprar su vivienda. También era muy común que, no obstante que la ley obligaba a llevar cuenta y razón particular de lo que compraban y vendían en sus libros manuales y mayores, pocos comerciantes observaban en Buenos Aires lo prescripto por las leyes reales. Entre los costos más altos del comercio ilícito figuraban los ingentes gastos en gratificaciones y sobornos.⁷⁹ Sin duda, el costo más alto de todos consistía en el riesgo de cárcel. Si bien la cárcel no estuvo muy generalizada, dada la abierta complicidad de los funcionarios reales con el contrabando, se dieron casos donde los conductores de los contrabandos se vieron forzados a usar de métodos violentos. En sus curiosas y poco conocidas memorias el comerciante Miguel de Learte recuerda que cuando pasó a Buenos Aires desde Córdoba para invertir su corto caudal en los contrabandos de la colonia, se ocupó de ese "penoso ejercicio" unos meses

"...sin tropiezo, hasta que una vez, unidos tres, para conducir un crecido contrabando de un registrante, tuvimos encuentro con los Guardas, y no pudiendo componerlos con las ofertas de dinero, fué preciso darles pasaportes de plomada, la que recibieron tres o cuatro y estos y otros no quisieron más despachos, retirándose sin ellos y con bastante priesa".⁸⁰

Reconoce Learte en los recuerdos de sus aventuras, que dicho lance les hubiera costado caro si el interesado en la remesa ilegal no hubiera sido un individuo "de tanto respeto" (por lo visto el Registrante), y si los heridos en lugar de haber sido peones, como en realidad lo fueron, hubieran sido Guardas.⁸¹

Aquellos otros pocos contrabandistas que no encontraban modo alguno de escapar a la persecución fueron necesariamente procesados. En 1760 el comerciante y hacendado Francisco Alvarez Campana reportó que él había sido informado que Miguel Ibáñez, capataz de la estancia que tenía en las Islas del Paraná, había vendido contra sus órdenes "...varias porciones de carne, tasajo, y sebo a los barcos Portugueses que arribaron a ese lugar". Como ese hecho, además del perjuicio económico que le podía causar, "...podía dar motivo a la malicia y la emulación de pensar algo menos favorable a su comportamiento" Campana pidió a varios de sus jornaleros que testimoniaran.⁸² En otro caso, ocurrido en 1772, Don Roque Verón, el Comandante Militar del Río Pardo, en la Banda Oriental, fué acusado de vender caballos a los Portugueses.⁸³ Aquellos que fueron encarcelados por cargos de contrabando, solían obtener fácilmente fianzas de cárcel, entre las cuales hemos hallado la otorgada a favor de Juan Diego Gauto, Manuel Fontán, Bernardo Barela, Diego Collado, y Antonio Ximénez.⁸⁴ Otro de los favorecidos por las fianzas de cárcel fué Manuel Cipriano de Melo, quien había sido apresado in fraganti en varias oportunidades por introducir cargamento de contrabando.⁸⁵ Durante la última de sus varias prisiones Melo, quien pese a sus antecedentes "delictivos" era un espíritu sensible, amigo de Francisco Antonio Maciel, el Padre de los Pobres, dejó para la literatura rioplatense un rastro imborrable, hasta hoy inédito, al componer unas décimas en forma de contrapunto o payada consigo mismo, que revelan lo extendido que estaban en ese entonces las prácticas corruptas y los delitos contra el fisco real:

"Cipriano No delinquí contra el Rey
tampoco contra el estado,
mis deberes e llenado
luego que quiere el Virrey

Amigo Obedecer Justa Ley
es que a todos nos obliga
sufre amigo, no se diga
que se amilana el valor;
es muy justo ese Señor,
esperanza, y que prosiga

Cipriano Del Rey en ningún destino
caudal tengo ni poseo
luego porque aquí me veo
imitando a un capuchino?

Amigo Que otra es la causa imagino,
y así ten cuenta Cipriano,
vé con detenida mano
no enoges a la Exelencia,
implorale su clemencia,
y ten fé que no es tirano.

Cipriano En tiempos atrás confieso
que no sé si e reservado
pero si estoy perdonado
a que viene este proceso?

Amigo Chitón Amigo que el peso
del Gobierno mucho abrasa
y quien sabe si la trasa
de alguna chispa te toca
y así, Melo punto en boca
y vamos a pasa pasa

Cipriano Si cumplí mi obligación
si no fuí defraudador
si e sido buen servidor
quien me causa esta prisión

Amigo Hermano en Christo estoy, son
justos destinos del cielo
que no penetra el desvelo
ni la cautela rastrea
mas por si es que ...sea
no te sorprenda el recelo

Cipriano Pero dime por ventura
puede darse sufrimiento
que en tanto padecimiento
no haga extremos la locura?

Amigo ya lo sé mas la cordura
en el freno en caso tal,
pues ya ves que sin igual
y absoluto en el p...
y callando puede ser
que sea menos el mal

Cipriano Dime en esta estrechez
enterrado en vida amigo
que me dirás que consigo".⁸⁶

La discriminación de los comerciantes entre sí.

Posteriormente, con la autorización real concedida a los comerciantes de Buenos Aires de comerciar con colonias extranjeras y en buques neutrales (1791-93) se alteró nuevamente el ritmo de la evasión fiscal entrándose a discriminar a los comerciantes entre sí. Con motivo de los debates acerca de si los cueros eran o no "frutos del país" susceptibles de ser exportados y de la imposición de los derechos de nueva avería para el armado de una escuadrilla defensiva en el Río de la Plata que protegiera además la rada contra los ingentes contrabandos, se dió a fines del siglo XVIII, durante las Guerras Napoleónicas, la evidencia más significativa del creciente conflicto entre dos grupos distintos de intereses.⁸⁷ Aquellos que exportando cueros introdujeran esclavos procedentes del Africa estaban exentos del pago de la alcabala del buque adquirido y de los derechos del cargamento extraído. Más luego, cuando en oportunidad de las guerras napoleónicas, la corona impuso en 1801 el derecho de avería (4% por tonelada) afectó fundamentalmente a aquel grupo de comerciantes negreros que tenían barcos propios, fletaban cueros a Europa, y corrían con el alto costo del riesgo de mar.

Por el contrario, el grupo de comerciantes terrestres, que así se llamaban los consignatarios de las casas monopolistas de Cádiz, que traficaba con plata, oro y géneros Europeos votó la contribución del Derecho de Avería en el Consulado, echando todo el peso de la contribución sobre los comerciantes que poseían naves y traficaban con cueros y esclavos.⁸⁸ Finalmente, cuando en oportunidad de una causa criminal por detracción de ganados, la parte demandante intentó elevar a la Justicia ordinaria los casos relacionados con los debates entablados en el Tribunal del Consulado, para que dirimiera su competencia jurisdiccional.⁸⁹ Recaído en el juzgado de Francisco Antonio de Escalada la responsabilidad de dirimir el entuerto, éste último, miembro de una familia con fuertes intereses minero-exportadores y profundamente imbuído de una ideología mercantilista, declaró que el que mande Su Majestad que el cuerpo del Consulado se componga de Hacendados y Comerciantes

"...no es darle la menor jurisdicción sobre aquellos, ni sobre los tratos que tengan acerca de la venta de los frutos de sus haciendas, si no únicamente poner a su cuidado el adelantamiento y fomento de la agricultura, como la madre de donde sale lo que se trafica y comercia; así como no deberá conocer de las sobras de los artesanos, cuyo adelantamiento y perfección también parece que es de la inspección de ese cuerpo".⁹⁰

Al prevenirse en la Real Orden del 31 de enero de 1797 que todos los años se distribuyan premios entre los que mejor se adelantasen en las artes, Escalada también concluye que dicha prevención "...no puede tener por objeto, sino el del florecimiento de las artes, o su adelantamiento, que es el mismo que se procura para la agricultura por igual medio".⁹¹ En su oficio el representante del Consulado, imbuído

de un pensamiento más proclive al librecambismo emergente en la época insiste que "...combinando ideas no halla en el hacendado otra investidura que darle que la de un comerciante, pues sus labores y beneficios industriosos se dirigen a mantener un comercio de los frutos".⁹² Al replicar, Escalada reflexiona que

"...si el Tribunal del Consulado toma el comercio con tanta amplitud, quanta la combinación de ideas que manifiesta su oficio, pudieran extinguirse los mas de los Tribunales, como sin materia de que conocer. Por que si con motivo de mantener los hacendados un comercio de frutos, se han de llamar comerciantes; por la misma razón se deberían llamar tales los fabricantes de paños, lienzos, medias, zapatos, vestidos, que todos hacen un comercio de sus manufacturas; y se deberan llamar igualmente tales los labradores que traen a vender a la plaza huevos, gallinas, granos, menestras, y aún hortalizas; porque todo esto y algo más es fruto de sus haciendas, y en parte también de su industria, como el queso, la mantequilla, el charque, que todo se vende, o lo que equivale a lo mismo en concepto de V.S., se comercia con ello".⁹³

Es evidente que este litigio plantea una nueva realidad económica para cuyo análisis Escalada contaba sólo con el pensamiento mercantilista vigente. El hecho de que en dichos años de guerra "...los hacendados contribuyen o constituyen, uno de los mejores ramos del Comercio" no debería, a juicio de Escalada, cambiar su identidad estamental. De ocurrir ello, también deberían someterse a la competencia del Tribunal del Consulado los fabricantes y labradores "...por ser todos ramos considerables de Comercio". Hablando en general, sostiene Escalada "nunca lo más o lo menos hacen mudar de especie la cosa, por el principio de la Filosofía o de la sana razón: que lo más o lo menos no muda especie".⁹⁴ Por último, de llamarse comerciantes "...los que venden frutos de sus haciendas o las obras de sus manos, fabricantes y artesanos, sólo por la razón dada de vender o cambiar sus frutos y manufacturas" Escalada arguye socarronamente que también lo serían y estarían inmediatamente sujetos a la jurisdicción de ese Tribunal "los eclesiásticos y religiosos, y aún los mismos Cenobitas o Anacoretas, que se sabe vivían en parte del trabajo de sus manos".⁹⁵ Esta resistencia a considerar como comerciales las actividades productivas llevó a Escalada a sostener una rígida división del trabajo:

"...Una cosa es cultivar la tierra, y dedicarse a la cría de ganados, para sustentar sus familias, y si algo sobrase, venderlo; y otra muy distinta el dedicarse a estos u otros ejercicios, sólo con el fin de venderlo todo, y de transportarlo a regiones distantisima, si de esto resulta mayor ganancia. Lo primero lo hacen los que puramente son labradores, o hacendados; pero lo segundo sólo los mercaderes o comerciantes, entendiéndose si estos vuelven a emplear el producto de los frutos que transportan en efectos que retornan al país de donde salieron; que es lo que hacen los verdaderos mercaderes, lo que los caracteriza de comerciantes, y lo que constituye el giro o torno de especies, de donde nace y procede el ingreso de la Real Hacienda, por la reduplicación de ventas, exportación e introducción de efectos".⁹⁶

También serán mercaderes, sin salir de este género, a criterio de Escalada,

"...los que los comprasen al labrador y artesano para revender; por que estos ya lo hacen por negociación y para lucrar, y como que ellos no han cultivado las especies que venden, ni las han fabricado con sus manos, no se pueden llamar labradores, artífices, ni artesanos, y de consiguiente es indispensable que los coloquemos en la clase de mercaderes o comerciantes".⁹⁷

Finalmente, cuando más perjudicada se vió la recaudación fiscal fué, como es obvio, cuando el grupo librecambista, exportador de cueros y carnes saladas, desplazó de la hegemonía del Consulado de Buenos Aires al grupo minero-exportador, habiendo ocurrido ésto durante las Invasiones Inglesas. En

todo el año 1808 no fué posible recaudar la alcabala del año anterior, sensiblemente aumentada por disposición de las autoridades, y la Junta se vió obligada a disponer de los fondos que entraron en la primera quincena de ese mes en concepto de avería consular, para completar el anticipo sobre la alcabala de 1807, ya tan demorada.⁹⁸ A fines de 1809, los comisionados daban a conocer el detalle de lo que faltaba para completar el cobro y "la inutilidad de las diligencias practicadas al intento", ordenándose en consecuencia, que integraran en la tesorería consular lo ya recaudado, y que pasaran las boletas de los deudores morosos al tribunal mercantil, para que aquél apremiara el pago con todos los recursos legales.

Estos primeros síntomas de decaimiento comercial, se fueron acentuando progresivamente en años posteriores, a pesar de todas las medidas y protestas del Consulado que no fueron atendidas por el gobierno. A todos estos inconvenientes se sumó la destrucción o separación del expediente de cobros de Alcabala de 1805, después de la incursión inglesa en Buenos Aires, que impidió concretar las operaciones recaudatorias de ese año.⁹⁹

NOTAS

¹ Wallerstein, 1980, 113, citado por Garst, 1985, 473. De igual manera, el mejor indicador para medir el consenso político vigente en las nacientes repúblicas independientes es la capacidad que los gobiernos revolucionarios tuvieron para movilizar recursos con que impulsar la defensa militar contra la amenaza española, a un costo tal que no absorbiera las ganancias de la burguesía revolucionaria. Es por ello que estos gobiernos ensayaron mecanismos de defensa que implicaban premios o primas mediante patentes de corsos, participación en botines de guerra, y redistribución de bienes y tierras confiscados.

² Assadourian, 1983, 145.

³ Imbernón, 1986, 101.

⁴ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-8, Exp. 8, fs. 46v.

⁵ Idem.

⁶ Idem.

⁷ Idem.

⁸ AGN, Prtocolos, Reg.3, 1728, fs.481v.; 1734, fs.672; 1739, fs.497.

⁹ El primero en vislumbrar cómo la alcabala de reventa puede servir, en el período sometido a estudio, como barómetro para registrar los altibajos y la pronunciada declinación del capital en giro en Buenos Aires, fué Tjarks (1962).

¹⁰ Hijo de Tomás de Arroyo y Arteaga y de Ana de Esquivel; marido de Juana de Matos y Flores, hija de Juan de Matos y de María Flores de Santa Cruz (Fernández de Burzaco, I, 171).

¹¹ A la tercera pregunta dijo que es "...cierto que tienen cantidades gruesas de frenos y espuelas que hazen en dos fraguas que tienen y save que en una ocasión vendieron al Sr. Don Domingo de Basabilbaso como mil pesos de dichos efectos y dos porciones mas la una a Don Juan de Gainza y la otra al Procurador General de Misiones fuera del continuo menudeo que tienen que es mucho" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. A-6, Exp. 12).

¹² "...que siendo cierto que los frenos y espuelas que han vendido [los Lillo] son producidos de más de 400 quintales de fierro que han beneficiado en dos fraguas que tienen; sólo les hago cargo del dicho fierro y como si todo lo hubiesen vendido en barras o planchas que al precio de \$25 quintal importa \$10.000 y su alcabala a razón del 4% importa \$400 mediante a averles entrado el año de 1742 y empezándolo a bender desde entónces". Pedro de la Gama sentencia: "...que aviendo echo el cálculo y regulación de lo que prudentemente he juzgado venden diariamente Don Francisco Lillo y su compañero José en su tienda y demás inteligencia se sirbieron V.S. y Mrds. demandar,...debo decir que dichas obras mecánicas y sus ventas están incluídas en la regulación que tengo echa, en esta forma por todas las obras mecánicas regulo a ocho pesos por la venta diaria, y por la de los demás efectos y especies de la tierra y de Castilla y las de Abasto mercantiles a \$24 por día por aver estado y estar siempre abastecida" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. A-6, Exp.12).

¹³ María Nicolasa Echavarría, viuda del finado Pedro Villarino, Receptor que fué del Real Derecho de Alcabala en el Puerto de las Conchas, declara que a su marido "...le estaba asignado el 30% hasta Diciembre de 1782, y que de allí adelante el sueldo de \$400 al año" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp.573).

¹⁴ Escobedo, 1976, 267.

¹⁵ AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v.37, fs.395v.

¹⁶ AGN, División Colonia, Garfías, Sala IX, 11-8-2. Era nacido en San Juan en setiembre de 1710, hijo de Domingo Garfías, nacido en Ayamonte, avecindado en San Juan, y de Catalina López de Quiroga, y casado con Antonia Giles, hija de Juan Giles y de María Rosa Rivadeneira (Espejo, 1967, 426).

¹⁷ Punta, 1988, 14 y 23.

¹⁸ AGN, División Colonia, Garfías, Sala IX, 11-8-2.

¹⁹ No sólo el clero cuyano, exento del pago de los derechos reales, defraudaba al fisco operando como testaferro de bodegueros y viñateros profanos, sino también, como ya hemos visto, el clero correntino vendía ganado en pié en el Paraguay a nombre de hacendados profanos.

²⁰ Idem.

²¹ Ibídem.

²² Ibídem.

²³ Ibídem.

²⁴ Idem.

²⁵ Idem.

²⁶ Idem.

²⁷ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 13, Exp. 269.

²⁸ Ibídem.

²⁹ AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

³⁰ Mayordomo de Propios y Arbitrios en 1776; casado con una Moynos y Ledesma, hija de Pedro Moynos e Hipólita Ledesma, cuñada del regidor José Manuel Salguero, sobrina del Alguacil Mayor Manuel de Estéban y León, y prima política del General Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, III, 293).

³¹ AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

³² AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 12, Exp. 13.

³³ Ibídem.

³⁴ Ibídem.

³⁵ marido de Magdalena Goyechea y de la Corte, nacida en Jujuy en 1763, hija del General Martín Miguel de Goyechea y de Cesárea Ignacia de la Corte. Viuda, contrajo segundas nupcias con Juan Francisco Martínez de Tineo (Cutolo, III, 427).

³⁶ En el Tucumán "...las Alcabalas terrestres habían dado unos anuales ingresos tan limitados, cuando sólo con las ventas de vacas, caballos, mulas, y yeguas debían recabarse más de cuatro mil pesos en cada uno. Pasé órdenes positivas al nuevo teniente para que con estudiosa vigilancia inquirese esta clase de tratos, y sin contemplación exigiese indistintamente de todos, la correspondiente Alcabala, y no hubo hacendado que no se admirase de semejante determinación, que allí para todos carecía de ejemplos. En iguales términos se asustaron los tenderos, que en pulperías, y tiendas revenden el vino, aguardiente, ropa, azúcar, chocolate, tucuios, coca, y otros efectos mercantiles, porque nunca creyeron deben pagar aquel derecho sagrado persuadidos que la primera satisfacción que hizo el introductor con la primera venta, hera cuanto a S.E. se le debía, mirándose por esto libre de toda responsabilidad, por las demás untos echos de aquellos mismos efectos que han transferido dominio, y se han hecho con ellos nuevo comercio.

Es incesante así en la Ciudad como en toda la basta jurisdicción del Tucumán el cambalache que hay dando efecto de Castilla por los terrestres; pero tampoco de esto se ha cobrado jamás Alcabala entusiasmados en que sería del Real desagrado semejantes exacciones. Dos tercias partes de los avitantes tucumanos, afianzan su subsistencia con las ventas continuas de pellones, ponchos, fresadas, tablazón, suelas, y carretas. Algunas con crías de vacas, y yeguas, otros con mansaje de bueyes, por último todos o quasi todos viven en varios trajines, propios de aquel clima y terreno: pero de nada de esto, al paso que es tan justa la exacción del derecho de Alcabala, ninguno absolutamente la paga, ni nunca la ha satisfecho.

Ay muchos que se dedican a leer las leyes recopiladas, para reclamar quanto juzgan pueden serles útil pero quando llegan a las del Título 8, Libro 8 las pasan sin verlas, y el más curioso aunque las lea no las entiende o no quieren entenderlas, y así se ve que aún reconvenidos para que paguen lo que a

S.M. deben se resisten con expresiones dignas sino de castigo al menos reprehensibles. Durante mi estada en el Tucumán el actual nuevo Ministro en virtud de mis particulares ynstrucciones, quiso entablar esta clase de cobranzas tomandolas por partes, y con medios suaves para introducirlas, pero las particulares circunstancias que se presentaron a la vista tuve por conveniente desentenderme de todo hasta que en vista de mis representaciones V.S. resolviese quanto estimase mejor" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.44, Exp.1158).

³⁷ Juan Antonio Moro, Mariano de Iriarte, Agustín Vivas, Luis de Medina, Pedro Martínez de Vinueza, José Toribio Olmos, Francisco Avelino Costas, Lucas Subicueta y Cipriano González de la Madrid.

³⁸ AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97. Por ser hijo de Juan Adrián Fernández Cornejo y de Clara de la Corte y Rosas, era primo hermano carnal de su mujer.

³⁹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 61, Exp. 1594, fs. 1.

⁴⁰ Idem, fs. 1.

⁴¹ Idem, fs. 3

⁴² Idem, fs. 3.

⁴³ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 102, Exp. 2667.

⁴⁴ Juan Martín Dupon parece y dice en 1797 "...aber hallado un intolerable abuso en los hacendados, pues varios no me han querido pagar". El juez Don José Fontesli "...mandó al alférez Alcorta pusiera el diezmo en la estancia en el Arroyo Negro, éste no ha cumplido siendo que también es Juez Comisario, está bien lejos de dar buen ejemplo se mantiene obstinado en no pagar el diezmo a la Iglesia de Dios, Don Pablo Ribera...es un hacendado que obstinadamente hase insufribles detrimentos no sólo a mi sí a los demás diezmeros pues del año 96 no a pagado como es constante (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 92, Exp. 2384).

⁴⁵ AGN, Tribunales, Leg.148, Exp.39, fs.109.

⁴⁶ Idem.

⁴⁷ Idem, fs.111.

⁴⁸ Idem, fs.110.

⁴⁹ Idem, fs.110

⁵⁰ Francisco Herrera, dependiente del Resguardo de San Juan declaraba en el expediente de Visita a la Tesorería menor de San Juan "...que se ha cansado de dar parte a Don Juan Manuel de Castro [Carreño] de que las más veces ha encontrado puestas en guías por de vino las cargas de aguardiente, y que le ha dicho Don Juan Manuel de Castro que la deje que allá en su destino lo repararán, que eso no importa nada en San Juan con cuio motivo ha dejado correr así la salida de cargas de esta naturaleza (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 67, Exp. 1810, fs.155). Acerca de la producción de aguardiente sanjuanina exportada al Alto Perú, ver Garavaglia, 1987, 58.

⁵¹ En 1793, en los autos sobre la posesión del empleo de Teniente Ministro de la Real Hacienda que a nombre de Fernando de la Rosa iniciara Juan de Almeira contra Juan Manuel de Castro Carreño, el letrado patrocinante Juan José Castelli aclaraba que "Aquí tenemos que notar muchas cosas; la primera, que las guías de aguardiente para la jurisdicción eran en tanto número que excedían su consumo; la segunda, que ni aún la quincuagésima parte de los que entraban a Córdoba constaban de guía; y lo tercero, que no se ocultaba a Castro así el perjuicio inferido al ramo de Sisa por este fraude, como también que para cometerlo se balían del advitrio de sacar con nombre de vino las cargas de aguardiente. Ahora pues, si al tiempo de registrar los caldos que se extraían le era tan fácil advertir este fraude ¿cómo dió lugar a que su continuación causase el grave perjuicio de no equivaler los aguardientes que salían para Córdoba con guía, a la quincuagésima parte de los que en ella y su jurisdicción se consumen al año? No es esto justificar las aseveraciones juradas de los dependientes del resguardo, que aseguran haver advertido a Castro de semejante fraude, y que no puso remedio por el motivo que queda expuesto? Que mucho...que los que disfrutaban de este delincente disimulo clamen con furor que Castro sea repuesto como el mismo lo asegura? El interés, pero un interés con daño de un tercero tan privilegiado como es el Ramo de Sisa, es el que a grangeado a Castro amigos y parciales que en el furor de ver estancada la fuente de sus utilidades claman que vuelva a correr por su cauce. Pero no se crea que Castro dispensaba esta gracia en general e indistintamente a cualquiera del vecindario: No Señor; sus parciales eran los únicos que las disfrutaban y por eso ellos son también los únicos que an sacado la cara después de su separación" (AGN, Tribunales, Leg.115, Exp.19, fs.379).

⁵² José Huergo, vecino de San Miguel del Tucumán, rematador del Ramo de Sisa, digo "...que sufre un considerable perjuicio de resultas de no tener noticia de las guías que despacha el Ministro Tesorero de la ciudad de San Juan del Pico para los que conducen cargas de aguardientes y se dirigen a Salta y Jujuy, respecto a que los interesados sacan las correspondientes guías para las dichas ciudades y venden sus cargas en los términos de la del Tucumán sin satisfacer en esta los derechos que adeudan, ni en el destino que fingidamente proponen en San Juan, por que no teniendo entonces precisión de manifestar la guía, la vuelvan original al Tesorero, este queda cubierto, y el Ramo de Sisa defraudado llevando el rematador el perjuicio de no cobrar lo que legítimamente adeudan" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.52, Exp. 1353).

⁵³ Imbernón, 1986, 104.

⁵⁴ La recaudación de la Aduana de Buenos Aires pasa por diversas fases marcadas por los acontecimientos guerreros. Un primer momento que empieza en 1768 con la recaudación de \$65.982 es seguido por un lento descenso que llega a su punto más bajo en 1776 con \$13.615. Luego en 1778 se cuadruplica alcanzando la cifra de \$53.725. Como consecuencia del Decreto de Libre Comercio al año siguiente la recaudación de la Aduana monta casi los \$300.000. Pero con la guerra desatada, el ramo sufre un embate lógico cayendo languidamente hasta reducirse en un 50% en 1782. Con la Paz de Versailles en 1783, la Aduana supera los cuatro centenares de miles de pesos de recaudación, y tres años más tarde, en 1786, el ramo alcanza su apogeo con \$661.662. A partir de entonces los ingresos de Aduana no sufren altibajos significativos, pero con el recrudecimiento de la guerra, el ramo cae abruptamente de los \$400.000 en 1797 a los \$192.105 en 1798. Al año siguiente el ramo remonta su anterior estado para alcanzar en 1802, con la Paz de Amiens, la cifra de \$656.195. Dos años más tarde, en 1804 y 1805 la Aduana de Buenos Aires supera por primera vez el millón de pesos.

⁵⁵ Mariluz Urquijo, 1987

⁵⁶ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 134, Exp. 3387, fs. 45.

⁵⁷ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 33, Exp. 864, fs. 132v.

⁵⁸ Idem, fs. 133v.

⁵⁹ Idem, fs. 134.

⁶⁰ Idem, fs. 135.

⁶¹ Levene, 1952, 428 y 465; y Santamaría, 1982.

⁶² AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 13, Exp. 264., cit. por Santamaría (1982).

⁶³ Idem.

⁶⁴ Idem.

⁶⁵ Idem.

⁶⁶ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 6, fs.12, cit. por Santamaría, 1982.

⁶⁷ Idem.

⁶⁸ Santamaría, 1982.

⁶⁹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 71, Exp. 1890.

⁷⁰ Francisco Ximénez de Mesa denuncia en un desconocido documento que "...casi todos los que vienen de España en el día con sus géneros y frutos, menudena por varas, libras, y francos, haciendo de unos que debían ser almaceneros, en donde lo mas que como tales se les puede permitir vender son por pieza, arroba, o barril, otras tantas tiendas, queriendo gozar el privilegio del comercio en mayor pagando sólo 3% de Alcabala por las tarifas del Reglamento (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 44, Exp. 1154).

⁷¹ "El caso es, que el bien que les resulta a los Comerciantes de España en el referido menudeo, es momentáneo y accidental, porque por el se privan de la venta en mayor, que para revender les compran los tenderos, y haciendo ellos el comercio, que estos, mal pueden comprarles, sino les ha de resultar utilidad en el menudeo. Los Catalanes con los caldos hasta forman baratillos, y las pulperías, que pagan los derechos de composición y alcabala, perecen" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 44, Exp. 1154).

⁷² Julián Gregorio de Espinosa, uno de los comerciantes de mayor giro en Buenos Aires le adelantaba en 1758 a José Rodríguez, residente en Montevideo, \$2357 en mercaderías para vender en la Banda Oriental con la condición "...de que no se mezclara en tratos ilícitos por cuanto si eso pasara y llegara ello a los oídos del acreedor sería la primer excusa para quitarle el manejo de la tienda" (AGN, Sala IX, Protocolos, Registro 3, años 1757/58, fs. 756v.).

⁷³ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 108, Exp. 22, fs.120.

⁷⁴ Francisco Ximénez de Mesa a José del Pozo, Buenos Aires, 1786, (AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 33, Exp. 4, fs. 20).

⁷⁵ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 108, Exp. 22, fs. 120.

⁷⁶ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 184, Exp. 1.

⁷⁷ Idem, fs. 103.

⁷⁸ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 84, Exp. 2176, fs. 77.

⁷⁹ Petit, 1986, 49.

⁸⁰ Learte, 1926, 176.

⁸¹ Ibídem.

⁸² Bazán Lezcano, 1974, 329.

⁸³ Idem, p. 373.

⁸⁴ AGN, Protocolos, Reg. 2, 1772, fs. 34v.; y Reg. 3, 1773/74, fs. 112; 1790, fs. 31v.; 1784/89, fs. 277, 296, y 297.

⁸⁵ AGN, Sala IX, Protocolos, Registro 2, 1772, fs. 50; Criminales, Leg. 34, Exp. 7; y Tribunales, Leg. 88, Exp. 29, fs. 74-91v, 191-199, y 246-270v.

⁸⁶ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 183, Exp. 4, fs. 58-58v.

⁸⁷ Tjarks, 19 , 381-400.

⁸⁸ Pedro José Berbel, a nombre de los comerciantes de esta Capital, que hacen el tráfico de negros declara el 13-II-1801 que "A mas de estos vicios padece otro muy principal aquella decisión, y es el de la desigualdad con que se grava la contribución contra la expresa voluntad de la ley que tratan de esta materia de averías, y mandan que se echen sueldo a libra, esto es a prorata de intereses, pero los que votaron por la contribución tuvieron buen cuidado de que sobre ellos no recaiese, pues no teniendo ellos barcos propios, ni haciendo giro de mar durante la guerra, no tuvieron reparo en gravar los barcos en cuatro por ciento por tonelada, y la introducen durante la guerra en un 4% y 2% en la extracción, a rebajar un 1/2% a la publicación de la paz, y todo esto con exclusión de la plata y oro, con lo que echaron todo el peso de la contribución sobre otros agravando los males de la guerra.

Pero con todo que estaba manifiesto este egoísmo y de que sólo se trataba de hacer pagar el exorbitante impuesto a los que tienen naos, y hacen durante la guerra un arriesgado comercio, incómodo a los mercaderes que en el día puedan llamarse terrestres, pues el giro de los mercantes no permite subir los géneros de Europa al extremo precio que apetecieran ni por consiguiente baxar los cueros del país al ínfimo valor a que llegaron en la pasada guerra en que con todo de ser nuestra la superioridad en la mar, y de menor duración, se compraban los cueros a seis reales y en este se venden en el día a once y a doce! con todo esto digo, los comerciantes negreros nunca creieron, que este impuesto se extendiese a la esclavatura, por ser este un comercio privilegiado y extraordinario hasta que a la entrada de alguna partida de esclavos se ha exigido, y cobrado este derecho a Juan Tomás

Balanzátegui, y a Juan de Silba Cordeiro, el cual echo pone a todos los interesados en la necesidad de ocurrir a la Suprema Justificación de V.E. para que se sirva contener tan abusivo exceso (AGN, Sala IX, Comerciales, Leg.22, Exp.11, fs.6).

⁸⁹ El caso consistía en que el Alcalde de Santo Domingo Soriano mandó retener en poder de Julián Gregorio de Espinosa \$300 para pago de las costas que adeudaba Juan Benavidez, (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. D-6, Exp. 26).

⁹⁰ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. D-6, Exp. 26, fs.52v.

⁹¹ Idem.

⁹² Idem., fs. 30.

⁹³ Idem.

⁹⁴ Idem.

⁹⁵ Idem., fs. 30v.

⁹⁶ Idem.

⁹⁷ Idem.

⁹⁸ Acuerdo del 4-I-1809.

⁹⁹ Tjarks, 1962, 486.

TOMO VII

Capítulo 13

La Justicia como ámbito de contienda facciosa. El Fuero Federal en el siglo XIX de la Argentina.*

* presentado al Primer Congreso de Investigación Social: Región y sociedad en Latinoamérica. Su problemática en el noroeste argentino, a celebrarse en el Instituto de Estudios Históricos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, del 6 al 8 de setiembre de 1995; y publicado bajo el título La magistratura como herramienta de contienda política. La Justicia Federal en el siglo XIX de la Argentina, en Región y sociedad en Latinoamérica: su problemática en el noroeste argentino (Actas del Primer Congreso de Investigación Social celebrado en Tucumán entre el 6 y el 8 de setiembre de 1995), 113-123;

La vinculación entre la burocracia estatal y la estructura política y social ha sido siempre materia de preocupaciones teóricas entre los científicos sociales del mundo. Sin embargo, el caso de las burocracias judiciales no siempre ha merecido el interés correspondiente.¹ Mientras que para la tesis liberal-utilitarista, propuesta por Jeremy Bentham, era conveniente hacer compatibles las funciones legislativas con las Judiciales;² para la tesis liberal-positivista,³ las incompatibilidades entre los cargos judiciales y legislativos constituían la piedra angular de la división de poderes.⁴

Más luego, para el Marxismo, revisado por Gramsci, el éxito de la Modernidad no habría residido en la presencia de condiciones materiales, tales como el desarrollo de las fuerzas productivas, sino en el despliegue de una efectiva estrategia de hegemonía cultural impulsada por la llamada intelectualidad orgánica (periodistas, rectores de colegios y universidades, gerentes de bancos, inspectores de correos), entre la cual se encontraba sin duda un sector de la magistratura y del foro, que aunara a todas las clases populares de la ciudad y del campo detrás de un bloque revolucionario que derrotara a la llamada intelectualidad tradicional (el clero), rompiera las casamatas del Antiguo Régimen y abriera el camino hacia la democracia.

Asimismo, para el estructuralismo, mientras Flory (1975, 1977) sostuvo que la magistratura se convirtió en un agente político dependiente de la elite terrateniente, con las cuales se consolidaban las situaciones estatales; Schwartz (1973) y Barman y Barman (1976, 1977), por el contrario, sostuvieron que la magistratura consistió en una elite altamente profesionalizada y eficiente que se promovía gradualmente y por estricto orden de antigüedad. Ultimamente, una corriente pos-moderna, representada por Zimmermann (1994), Gargarella (1995) y Smulovitz (1995, 1996) ha vuelto a incursionar en la llamada independencia de los jueces y de la justicia respecto de la política y de los demás poderes del estado. Pero lo que la historiografía científico-política local no ha alcanzado aún a

vertebrar es la íntima conexión que se dió en ese entonces entre la administración de justicia, y la naturaleza de los regímenes electorales, educativos y comunicacionales.⁵

Cabe entonces preguntarse si la administración de justicia contó siempre en la segunda mitad del siglo pasado con un alto grado de legitimidad, o si por el contrario pueden hallarse en su desempeño histórico fuertes altibajos, desajustes o involuciones; y si la Justicia Federal fué asimilada positivamente por el resto del aparato del estado, operando funcionalmente en la consecución del consenso entre las elites o si, por el contrario, alimentó la fractura entre las mismas al ponerse al servicio de los intereses y los resabios de un Antiguo Régimen, aún inconcluso, y reproducir las miserias de lo que se dió en llamar un estado oligárquico. Este interrogante responde al principio de que cuánto más homogénea es una elite, más alta es la probabilidad de su éxito; y, por el contrario, cuánto más heterogénea más probable su fracaso.⁶ La aparición de la república moderna hizo necesario entonces contemplar la influencia de la administración de justicia en otras instituciones, tales como las redacciones del periodismo político, las gerencias de los bancos, las comandancias de las guarniciones militares, los capítulos catedralicios, las inspecciones de las estaciones postales y telegráficas y las bancas parlamentarias, así como la independencia de las mismas del poder ejecutivo del Estado. Asimismo, el análisis de la República moderna hizo necesario implementar la noción de la creciente gestación de la esfera pública, como desglosada de lo puramente privado, comprendiendo en la misma las incompatibilidades judiciales.

En este estudio no nos propusimos un análisis empírico de contenido temático, cuantitativo o cualitativo, de los fallos judiciales, sino un análisis de las reacciones que diferentes políticos tuvieron del comportamiento de los jueces, y en particular de los jueces federales.⁷ En ese sentido en este trabajo analizamos la diferenciaciones de funciones del estado moderno (la división de poderes), las invasiones de un poder en otro, el favoritismo, la corrupción y la judicialización de la política, la designación, traslado y revocación de los jueces, la carrera judicial propiamente dicha, los cursus honorum políticos acumulados por los jueces, y las consideraciones personales, familiares y de parentesco para su reclutamiento y promoción.

Para este estudio, hemos aplicado el análisis intersticial o residual,⁸ del que nos habla Carmagnani (1988); instrumentando numerosos textos de época hallados en los Diarios de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación y en las correspondencias presidenciales de Julio A. Roca, Miguel Juárez Celman y Victorino de la Plaza, y en la provincial del Dr. Dardo Rocha, depositadas en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires; y el método estadístico-genealógico, instrumentando para ello un listado de Jueces Federales y Provinciales, con un Apéndice que tabula sus conexiones en materia de parentescos sanguíneos y políticos.

La lenta gestación de la esfera pública en el mundo moderno fué dando lugar a la constitución de lo que se ha dado en llamar la Magistratura. El mecanismo inicial de la jurisdicción pre-moderna (el capitular), legado histórico de la colonización Habsburga, que las Reformas Borbónicas no alcanzaron a disolver, reducía el número de los jueces a un ínfimo núcleo de parientes y vecinos, lo cual tornaba la administración de justicia pre-moderna en estructuras puramente nepóticas u oligárquicas. La aparición de la magistratura en la panoplia de la república moderna hizo necesario también contemplar sus relaciones con la burocracia civil, eclesiástica y militar; y su propia independencia de los otros poderes del Estado. Para la consecución de una república democrática, la división de poderes y la independencia de la justicia, eran consideradas en aquél entonces, a juicio de Zimmermann (1994), como instrumentos profundos y fundamentales. En ese sentido, la independencia institucional de un juez, el respeto de la jurisdicción natural de los jueces,⁹ y las incompatibilidades judiciales constituían

un valor sagrado.¹⁰

La diferenciación de funciones del estado moderno (la división de poderes).

La diferenciación de funciones ocupaba un rol relevante en el esquema de racionalización del estado moderno.¹¹ El que los miembros del Tribunal de Justicia, poder supuestamente independiente del estado, ocuparen cargos políticos como el de Diputados, Senadores, Gobernadores o Jefes de Comités Electorales fué estigmatizado por políticos como Aristóbulo del Valle y numerosos juristas.¹² Cuando en 1862 los Senadores Salvador María del Carril y Francisco Delgado fueron nombrados Ministros de la Corte Suprema, ésta estableció el principio de

"...que la aceptación por parte de un senador, del cargo de miembro de la Corte Suprema o de un Juzgado Federal, aún sin previa renuncia, importa el cese de su destino de senador".¹³

También el Senador Correntino Pedro Ferré planteó en la década de 1860 la incompatibilidad entre las funciones judiciales y legislativas.¹⁴ Sin embargo, en Salta, la familia Uriburu y su círculo, a juicio de Francisco J. Ortiz, se preparaba en 1882 a candidatear para Gobernador al Juez Federal Pedro Nolasco Arias,¹⁵ "...ese nuevo caballo griego que Vd. nos ha mandado disfrazado de Juez".¹⁶ Su venida a Salta, a juicio de M. Zorreguieta, fué "...de gran esperanza, era ya el candidato para futuro Gobernador de la Provincia".¹⁷ Y en Entre Ríos, en 1882, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia figuraba "...como miembro del Comité ejecutivo de un partido;...uno de los vocales de este Superior Tribunal formaba parte de la misma Comisión Directiva; y todos los Jueces de primera instancia, que en Entre Ríos se llaman de Alzada, formaban parte de los Comités electorales".¹⁸

Pero la división y superposición de poderes y las incompatibilidades judiciales no alcanzaban la misma intensidad en las diferentes provincias de la Argentina moderna. La Constitución de Mendoza en el capítulo referente a las atribuciones del Poder Legislativo dice en su art.2, inc.1: "Juzgar y calificar la validez de las elecciones de sus miembros".¹⁹ Atribución explícita que constituía a la Legislatura en juez electoral inapelable de las elecciones provinciales. Con las mismas palabras como si se hubiesen copiado las unas a las otras, se encuentra ese artículo en las Constituciones de las siguientes provincias: La Rioja, San Luis, Catamarca, Salta, Jujuy, Santa Fé, San Juan, y Corrientes.²⁰ La Constitución de Córdoba difiere de las anteriores en estos términos "La Asamblea será juez en la comprobación de los poderes de sus Diputados".²¹ La de Santiago del Estero atribuye a una Comisión de la Sala en receso esta facultad "Recibir los Diputados electos haciendo el escrutinio de las actas de la elección".²² Estas Constituciones dan a la Legislatura facultades más amplias, invasoras del Poder Judicial, por que expresamente le confiere la facultad para resolver sobre la validez o nulidad de los títulos de sus miembros, pero aún esta facultad tan amplia como peligrosa supone la salvación de las mayorías, para no alterar la forma republicana de gobierno.²³ A propósito de la superposición de las funciones legislativas y judiciales, desde Tucumán, José Posse llegó a recomendarle a Roca que leyera un artículo periodístico suyo,²⁴ en donde caracterizaba a dicha superposición como "...un Poder Público metido o embutido dentro de otro Poder".²⁵

Pero el articulado de las nuevas Constituciones Provinciales, que incluían incompatibilidades, impidiendo ser legisladores a los empleados de los Poderes Ejecutivo y Judicial, demandaban una plétora de recursos humanos calificados y partidos políticos mucho más numerosos que pudieran dar abasto a la creciente exigencia de mayor cantidad de cuadros administrativos y judiciales.²⁶ La costumbre de "...renovar íntegramente el personal de las oficinas a cada cambio de la política", es decir violar la independencia y autonomía del poder administrador, en el caso de Santiago del Estero, la

atribuía José Nicolás Matienzo a "...los malos hábitos dejados por el gobierno personal de los Taboada".²⁷ Ese es el motivo que "...no ha permitido la formación de prácticas administrativas regulares", y lo que hacía que los Gobernadores y los Ministros tengan que intervenir "...hasta en los más insignificantes detalles".²⁸ Tienen que ser, según la frase de Buckle, "...arquitectos y albañiles a la vez".²⁹ Por ese mismo motivo, el recientemente designado Gobernador de Santiago del Estero Luis G. Pinto le comunicaba al Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman "...hoy no trato de echar a toda la Administración de Justicia".³⁰

Por el contrario, en ciertas provincias la interferencia legal de unos poderes en otros era jurídicamente imposible. En Tucumán, la separación entre los Poderes Legislativo y Judicial era casi absoluta. El ex-Senador Nacional José Posse, (a) "Pepe" o "Dr. Amoníaco", observaba que la Constitución de Tucumán en su art. 20, inc.12, no ha "...concedido ni dado facultades de Juez a la Sala, sino la de simple escrutadora, la de contar votos y por eso en un mismo objeto a los Diputados Nacionales".³¹ La razón que tuvieron los constituyentes para no darle a la Legislatura atribuciones judiciales se explicaba y se justificaba, a juicio de Posse,

"...por las últimas elecciones, para que no se erigieran en dictadores procediendo como hombres de partido, dando un puntapié al voto de los Departamentos, y haciéndose ella electora de sus miembros".³²

Preferible debía ser, según Posse,

"...que se equivoquen los Departamentos eligiendo lo que mejor les parezca, que un Poder Público se corrompa estableciendo como regla el despotismo en nombre de la responsabilidad de sus actos".³³

Establecer como derecho o doctrina la soberanía, irresponsabilidad y arbitrariedad de la Sala era, para Posse

"...levantar una guillotina a la verdad del sufragio, y a la forma republicana de gobierno para fundar la tiranía de muchos, la peor de las tiranías".³⁴

Aquí es ocasión de repetir las doctrinas jurídico-constitucionales que Posse venía sosteniendo en la prensa:

"...Cuando una elección es viciosa por la forma, por el modo de proceder, por violencia u otros actos ilegales, se anula en el todo, se practica de nuevo para que se corrija el error, ocurriendo a la fuente del voto popular de cada distrito electoral de donde proceden las actas desechadas, porque la elección es un acto indivisible".³⁵

Con estos antecedentes, Posse consideraba que era imposible, sin mengua de la dignidad y del decoro, que el Gobierno reconociera una Legislatura con Diputados que no hubieren sido elegidos por los pueblos de los Departamentos.³⁶ Del desconocimiento de la Legislatura vendrá el conflicto, y del conflicto la intervención, pero no el juicio político. Este último no estaba prescripto en la Constitución Tucumana,

"...porque cuando esta se declaró, ese juicio era atribución del Congreso, y cuando en esa parte se reformó la Constitución Nacional, la nuestra continuó sin llenar ese vacío, como hicieron en

otras provincias, de suerte que no hay juez constitucional para conocer en semejante juicio, menos hay acusador, y sobre todo motivo de acusación".³⁷

Las invasiones de un poder del estado en otros se perpetuaron aún después de consagrado el proceso de Organización Nacional. El que los jueces federales, detentadores de un poder independiente del estado, ocuparen cargos ejecutivos como el de Gobernadores, fué puesto en tela de juicio; y el hecho que conjuntamente con los Presidentes de los Tribunales de Justicia integraren las Juntas Electorales era motivo de permanentes conflictos.

Las invasiones de un poder en otro.

Asimismo, el que los Poderes Ejecutivos o Legislativos provinciales intervinieran o invadieran la jurisdicción de los Poderes Judiciales comprometía o alteraba la forma republicana de gobierno. Jujuy, en la tarea de reponer sus autoridades, fué intervenida por decreto del Gobierno Nacional, el 15 de octubre de 1879, mensaje mediante del Ministro del Interior Domingo F. Sarmiento, en el cual se desarrollaba una peculiar teoría que garantizaba la soberanía de la Legislatura provincial. A comienzos del año siguiente, el 6 de enero de 1880, el Interventor Uladislao Frías, que a la sazón era Ministro de la Corte Suprema, puso en práctica, según Absalón Rojas, "...las originales y pérfidas teorías de Sarmiento", al reponer la Legislatura disuelta en 1878 y convocar a elecciones sólo para substituir a aquellos cuyo mandato había fenecido.³⁸ En Catamarca, el Gral. Antonino Taboada juzgó conveniente, después de la batalla del Pozo de Vargas, nombrar como Fiscal a su amigo el Dr. Remigio Carol, "...a fin de que se aperciba una vez mas de que la cuña para que sea buena, es necesario que sea del mismo palo".³⁹ Quince años más tarde, a los Sres. Molinas, dueños de la Casa Comercial más importante de Catamarca, les interesaba "...tener los Jueces de su parte y como desde años los tienen, han irritado sobremanera el espíritu público y lo tienen decididamente en contra".⁴⁰ Y en Tucumán, la Sala de Representantes aprobó en 1879 los diplomas de Diputados Provinciales, entresacando entre los candidatos electos por las minorías en perjuicio de los candidatos electos por las mayorías.⁴¹ Esta deleznable práctica se hizo, a juicio de Posse, bajo el auspicio de la doctrina Sarmientina, inaugurada en Jujuy, de que

"...las Legislaturas no deben en la tierra cuenta a nadie de sus actos, como en la Convención Francesa, la absorción de todos los Poderes Públicos. Doctrina tan perniciosa, si pasase a ser jurisprudencia parlamentaria, acabaría con la forma republicana de gobierno; la consecuencia sería que en adelante las Legislaturas tomarían diputados en la calle omitiendo el trabajo de que los elija el pueblo".⁴²

Y también en Salta, el Poder Legislativo contaba en 1896 con facultades cuasi-avocatorias o judiciales. La publicación de un artículo en El Cívico, en el cual se empleaba el epíteto de "alcahuetes" con relación a trece diputados,⁴³ provocó el enojo de la Legislatura, la cual ordenó el arresto de los periodistas autores del agravio, violando el antiguo precepto que establece que nadie puede ser juez en causa propia.⁴⁴ El Jefe de Policía cumplió la orden transmitida. Tras once días de arresto los autores del agravio obtuvieron un habeas corpus del Juez de Comercio, que el Jefe de Policía hizo efectivo. Irritada la camarilla de los trece diputados por la libertad de los periodistas arrestados, e instigada por el ex-Diputado Nacional Angel M. Ovejero y los editoriales de La Razón (Salta),

"...le pareció llegada la oportunidad de desarrollar todo su plan de campaña contra el Sr. [Antonino] Díaz, contra su Ministerio [de Hacienda e interinamente de Gobierno], y sancionó el famoso decreto 'que suspendía la consideración [en la Legislatura] de todos los asuntos que

pendían de su sanción".⁴⁵

Donde más se observaban las invasiones de un poder en otro y las arbitrariedades era en la Juntas Electorales, compuestas por los Jueces Federales y los Presidentes de la Legislatura y el Tribunal de Justicia, en oportunidad de elecciones nacionales; y en la Justicia de Paz responsable de administrar la justicia electoral provincial.⁴⁶ Eran en esta última donde más recaían los reclamos de prescindibilidad electoral.⁴⁷ El deber del Juez Federal consistía, a juicio del Diputado Nacional Filemón Posse, en informar si eran ciertos los hechos fraudulentos "...en que las protestas se fundan".⁴⁸ Pero era la Cámara Legislativa, juez de la elección, la que "...juzgaba de la gravedad de los hechos y de la prueba que sobre esos hechos se produzca, si es válida o nula la elección por estar o no la provincia tal o caul en condiciones electorales".⁴⁹ En un comienzo, las mesas escrutadoras eran compuestas por aclamación. En Salta, en 1854, Manuel Puch designó la mesa escrutadora

"...parándose encima de una mesa del salón, con sombrero y poncho calado, gritando por Don Fulano, a lo que contestaba la chuzma que llevó ebria afirmativamente".⁵⁰

De las personas que pasaban por "decentes" concurrieron a dicha selección sólo diez personas, permaneciendo "...el pueblo todo indiferente a este escándalo".⁵¹ Pero más luego, los Jueces de Paz adquirieron una importancia más grande que los mismos miembros de los Tribunales de Justicia, pues a juicio del Diputado Nacional Estanislao Zeballos, eran en 1882 "...con arreglo a nuestro sistema electoral, la llave de la elección".⁵²

Treinta años después los métodos fraudulentos se sofisticaron. En Santiago del Estero, como el Juez de Primera Instancia en lo Civil,⁵³ que presidía la Mesa Electoral de la Capital, era un joven muy celoso de su independencia, al Gobernador Pedro C. Gallo no se le ocurrió mejor idea que reformar la Ley Electoral, convocando a sesiones extraordinarias, para que la Mesa Electoral fuera presidida por un Juez de Paz que él pudiera manipular.⁵⁴ En Catamarca, el Gobernador José S. Daza le denunciaba a Juárez Celman, que los Rochistas "...han mandado emisarios por todos los Departamentos,...a ver si corrompen a los conjuces por medio del dinero".⁵⁵ Para ello, según Daza, "...tendrán que fundir el Banco Hipotecario, pues en los dos o tres Departamentos que tenían sus guaridas, no cuentan con un sólo hombre en las mesas [electorales]".⁵⁶ En Jujuy, en Febrero de 1886, el Gobernador J. M. Alvarez Prado le informaba a Roca que a consecuencia del dinero derramado por los Rochistas y en consideración de estar Jujuy cortada de las demás provincias amigas y expuesta a sucumbir por falta de armas y municiones; "...comprendo que nuestro partido así debilitado solamente puede triunfar con el auxilio del poder judicial".⁵⁷ Y en La Rioja, el Juzgado Federal había impartido en marzo de 1886 orden de prisión contra el Vice-Presidente de su Legislatura, Marcial Catalán, a instancias del político rochista Guillermo San Román "...por resistirse a entregar documentos de carácter nacional".⁵⁸ El suplente de la Junta Insaculadora Sr. Aravena le había entregado a Catalán el resultado de una insaculación fraudulenta, por haber sido hecha, antes de vencerse el término de tachas, el 30 de diciembre de 1885, y sin tener a la vista uno solo de los Registros Cívicos de la Provincia "...que por las distancias a que se encuentran las secciones electorales, llegaron recién al Juzgado Federal el 9 del corriente".⁵⁹ Por ese motivo, la Junta Electoral, que estaba compuesta por el Juez Federal y los Presidentes de la Legislatura y el Superior Tribunal de Justicia, se había reunido el 10 de enero de 1886 en el Salón de la Legislatura, y había practicado el sorteo de Conjuces. Pero el Ministro de Gobierno Olímpides Pereira, siguiendo instrucciones del Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman, desconoció por decreto a la Junta Electoral y dió orden "...para que sean perseguidos y reducidos a prisión todos los Conjuces legales, si el día de la elección concurren a desempeñar su mandato".⁶⁰ Por último, el 8 de marzo Catalán destituyó a los integrantes de las mesas electorales sorteados. En realidad

aquel fraude fué la excusa argüida por San Román para vengarse del atropello que Catalán había hecho de la Junta Escrutadora integrada por Rochistas. Frente a la denuncia de San Román, la Corte de Justicia provincial dictó una orden de prisión contra Catalán, por lo que este optó por fugarse a Córdoba.⁶¹ Días más tarde, el Tribunal fué intervenido por el Poder Ejecutivo, recayendo la intervención en el Camarista Dr. Lorenzo J. Torres,⁶² y la Junta Escrutadora modificada para otorgarle mayoría al situacionismo.⁶³ Por el contrario, en Catamarca, el Ministro de Gobierno Antonio del Pino, le confesaba al Gobernador de Córdoba Juárez Celman, la impotencia política de su facción partidaria, a la sazón oficialista, pues

"...ha sido imposible quitar de algunas mesas calificadoras 4 o 5 jueces departamentales, que estaban sumariados y que debieran ser suspendidos".⁶⁴

Pero un par de meses más tarde, en Diciembre de 1885, la oposición Rochista denunciaba que, como consecuencia de la clausura de las sesiones extraordinarias, el Poder Judicial había quedado

"...librado al capricho del Ejecutivo habiéndose producido ya el caso de separación de dos magistrados rectos con pretextos fútiles, quedando sin justicia que nos ampare y en situación desfavorable por lo que respecta a la intervención de esta en la formación de las mesas receptoras de votos".⁶⁵

Estas arbitrarias invasiones de un poder en otro no eran unánimes en todas las provincias. Cuando en Santiago del Estero el Gobernador Pedro C. Gallo, cuya nominación como Gobernador se la debía a los hermanos Jaime y Pedro Vieyra, dirigió circulares a los Comandantes y Jueces de Paz, bajo su firma, diciéndoles

"...que habiendo sido acordada una lista en una reunión numerosa de amigos, y les pide le presten todo su concurso y elementos para hacerla triunfar",⁶⁶

muchos Jueces de Paz y algunos Comandantes, probablemente influídos por el Comandante Octavio Olascoaga, "...han devuelto la circular considerándola vejatoria y dándole una lección de moralidad al Sr. Gobernador".⁶⁷ En otros casos prevalecían ciertos pruritos. Cuando en San Juan una agrupación del Club del Pueblo hizo una manifestación de adhesión a la política presidencial de Roca y de repudio a la política provincial de Anacleto Gil (h), el Juez de Primera Instancia Segundo Benavídez justificaba -- consciente de las incompatibilidades judiciales-- la no suscripción de ese documento porque su cargo lo privaba de ello, pero les dijo a sus amigos "...que renunciaría el empleo si fuese necesario porque no era digno ni decoroso, que siendo empleado le hiciera la guerra desde el puesto que desempeñaba".⁶⁸

Las invasiones o superposiciones de un poder jurisdiccional en otro se extendieron a las relaciones del Poder Civil con la Iglesia.⁶⁹ En San Juan, en 1857, el Gobernador Francisco Domingo Díaz y su Ministro José Antonio Durán habían detenido y procesado criminalmente al Provisor de la Diócesis de Cuyo Timoteo Maradona.⁷⁰ Pero un decreto del Vice-Presidente Salvador María del Carril y del Ministro Campillo mandó reponer al funcionario eclesiástico.⁷¹ Y en Córdoba, la publicación de artículos anti-clericales en el periódico La Carcajada, provocó el enojo de la Iglesia, en la persona de su Vicario Dr. Jerónimo Clara, quien dictó una Pastoral, el 25-IV-1884, prohibiendo a los feligreses la lectura de dicho semanario.⁷² A propósito de esta Pastoral, acusada por el gobierno de Roca como subversiva del orden social y de la autoridad nacional, el Poder Ejecutivo ordenó el enjuiciamiento de dicho Vicario Capítular por el Juez Federal, luego de haberlo despojado por decreto de su autoridad canónica.

La invasión de la magistratura judicial también se manifestó sobre la Milicia, alimentándose con las excepciones al servicio militar y las permanentes rebeliones en las provincias. Con posterioridad a Caseros y en pleno proceso de la llamada Organización Nacional, el poder de la magistratura federal suplantó a la Guardia Nacional o al Ejército de Línea, llamados a intervenir contra los desafueros de las magistraturas provinciales o como los encargados del enganche para la remonta del ejército nacional.⁷³ En la década del 70, en una muy ilustrativa misiva enviada desde Mendoza al General Roca, el Jurista Manuel A. Sáez,⁷⁴ expresaba que si bien el gobierno provincial ya no contaba con elementos de la nación (Guardia Nacional o Ejércitos de Línea) para oprimir a sus opositores, "...manejan a su antojo los Tribunales en donde han colocado hombres que son verdaderos instrumentos".⁷⁵ En otras palabras,

"...el Ejecutivo ha sustituido en mucha parte la fuerza de que antes disponía con la composición de los Tribunales, que tiene hoy tan subyugados como antes no se ha visto en la provincia".⁷⁶

Con referencia a las levas practicadas por los Ejércitos de Línea, en Mendoza, el Gobernador Joaquín Villanueva le relataba a Roca, refiriéndose a los abogados y procuradores que defendían a los destinados, que fuera de los que han sentenciado los Tribunales hay treinta hombres mas destinados

"...y tengo nueve presentaciones y treinta empeños para que no sean incorporados a las Compañías. Hasta hoy las solicitudes son hechas ante el Gobierno pero mañana no faltará un Chileno González que patrocine a las madres, mujeres o hermanas de los destinados y vayan ante el Juez Federal a fastidiarlo como a mí".⁷⁷

Y en San Luis, el Gobernador Toribio Mendoza le informaba a Roca que el Juez Federal Donaciano del Campillo, procedente de Córdoba, había tomado "...su deseo de paralizar y entorpecer la acción de gobierno [el reclutamiento]", con tal furor que su Juzgado estaba

"...habilitado de día y de noche y había nombrado dos Fiscales ad hoc que eran [Justo] Daract y [C.] Jofré [ambos Puntanos] para que recibieran las solicitudes que se presentasen por los que formaban parte de los cuerpos movilizadas".⁷⁸

No obstante ello, Don Toribio llevó su prudencia hasta el extremo de

"...hacer respetar por los Jefes de los Cuerpos, varias ordenes que directamente les pasaba el Juez, mandándoles dieran de baja algunos individuos por haberlos exceptuado".⁷⁹

Más luego, cuando Don Toribio se apercibió de la parcialidad manifiesta del Juez Campillo, "...dí orden de que no fueran respetadas sus ordenes sin antes consultar al Gobierno".⁸⁰

Las crónicas rebeliones en las provincias dieron a los Jueces Federales materia prima para sus dictámenes. En Jujuy, la intervención del Juez Federal Dr. Federico Ibarguren, en 1877, obedeció a las desavenencias internas existentes en el gobierno de Cástulo Aparicio y en el seno de la facción Barcenista,⁸¹ ampliamente relatados en el trabajo publicado por Corbacho y otros (1977). Y dos años después, el 15 de octubre de 1879, mensaje mediante del Ministro del Interior Domingo F. Sarmiento, Jujuy volvió a ser intervenida recayendo la misma en el Ministro de la Suprema Corte Uladislao Frías Gramajo, para quien la tarea no fué fácil pues, según José María Astigueta "...ha ido a medias a interponerse entre aquellos Capuletos y Montescos cual otro Escalígero".⁸² El ejemplo hallaba

semejanza pues

"...no falta en aquellas escenas, un Paris y un Zorombello, es decir una cabeza que piensa sin reparar en la moral, y un astuto siciliano que tiene todas las artimañas para ejecutar en el misterio los planes más audaces en satisfacción de los sentimientos más cobardes".⁸³

En Corrientes, con motivo de la Intervención del Dr. Victorino de la Plaza, y de la orden para que fueran repuestas las autoridades de campaña desplazadas por el levantamiento armado Liberal-Mitrista de 1878, hizo ver al Juez Federal José Benjamín Romero,⁸⁴ en carta a Dardo Rocha, que donde no habían Jefaturas Políticas sino Jueces de Paz, el Interventor se ha atribuido "...la facultad de crearlos".⁸⁵ También cuidó el Interventor en Corrientes de

"...destituir a los Jueces Pedáneos, haciéndoles comprender que ellos son especie de Comisarios sujetos a los Jefes Políticos cuyas órdenes les dicen que tienen obligación de cumplir".⁸⁶

Y en el caso de San Juan, el Gobernador Anacleto Gil declaró "...cesantes el Jurado actual y nombrando otro a su amañ y sin juicio político y consiguiente destitución de los principales miembros del Poder Judicial, que no son partidarios del Gobernador".⁸⁷ Al año siguiente, en Febrero de 1884, con la muerte del Gobernador Agustín Gómez, a juzgar por el Juez de la causa Dr. Numa Sánchez Benavídez, la persecución de los asesinos no terminó con el principal sospechoso, el ex-Inspector de Irrigación y Agricultura de San Juan Napoleón Burgoa, pues

"...los sangrientos sucesos provocaron la venganza más cruel de parte de los mandatarios cometiéndose en nombre de ella innumerables atentados contra algunas personas que eran inocentes".⁸⁸

Para evitar que como Juez de la causa, lo acosasen con exigencias que no podía satisfacer y lo quisiesen "...convertir en instrumento de violencia y odio contra los procesados", el Juez Numa Sánchez Benavídez adoptó

"...el temperamento de mantenerme prudentemente retirado y concretado al cumplimiento estricto de mi deber sin servir ni al gobierno ni a los revolucionarios sino a la justicia tal cual yo la entendí".⁸⁹

El favoritismo y la corrupción en la Justicia.

La Justicia Federal, no obstante su función de control y revisión constitucional,⁹⁰ y las Justicias Provinciales, fueron siempre instrumentos extremadamente idóneos para el favoritismo y la discriminación política. Ya en la primera mitad del siglo XIX, con motivo del enfrentamiento de Facundo Quiroga con el ex-Gobernador Nicolás Dávila, el Ministro José Inocencio Moreno le escribía a Facundo en abril de 1824

"...Inmediatamente procedí yo: en este Departamento a la deposición del Juez de Minas Don Domingo Dávila y del [Juez] Pedáneo Manuel Gordillo por las relaciones de parentesco y demás que tienen estos con los Dávilas".⁹¹

Aún luego de Caseros, el favoritismo y la corrupción de las magistraturas locales, es decir el llamado

círculo vicioso, alcanzaba intereses privados estrechamente ligados con intereses políticos. En Mendoza, Lauro Galigniana Villanueva le advertía al Gral. Julio A. Roca, refiriéndose a la quiebra de la Banca González,⁹² que "...para vergüenza de la administración de justicia ya les mandan entregar a los González todos sus intereses".⁹³ El diario El Constitucional proponía en 1879 como indispensable, "...buscar letrados completamente ajenos a todo vínculo personal o de familia; contratar jueces y abogados de otra provincia".⁹⁴ La corrupción en las esferas judiciales mendocinas la confirmaba tres años más tarde, en 1882, el propio Gobernador José Miguel Segura, quien le informaba a Roca que "...el estado del Superior Tribunal no podía ser dado peor la presencia con él de un elemento corrompido que le desprestigiaba dentro y fuera de la provincia".⁹⁵ Y otros tres años más tarde, el ex-Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Dr. Isaac Chavarría le informaba a Roca que para que el Dr. Juan Eugenio Serú pueda confirmar la propiedad de las tierras de Malargüe, que disputaba al ex-Gobernador Rufino Ortega, al Camarista Manuel Videla lo

"...sacarán ahora...para hacerlo Diputado al Congreso y nombrar en su reemplazo al redactor de Los Andes, Adolfo Calle, enemigo personal y capital de Ortega y así seguirán".⁹⁶

En Santiago del Estero, en 1885, el Gobernador Absalón Rojas quiere, --en la Administración de Justicia-- deshacerse "...de la 'inmundicia' que tuvo que manejar por necesidad".⁹⁷ Las desmedidas pretensiones manifestadas por los hermanos Benjamín y Dámaso Jiménez, Ministros del Superior Tribunal de Justicia, le ofrecieron a Rojas la excusa para "...arrojarlos a la calle porque no habían hecho sino desacreditarlo a él y a la situación de la provincia".⁹⁸ Y en Entre Ríos, mientras el Juez Federal Emilio Villafañe se hallaba con posibilidades de alcanzar una Diputación Nacional se comprometía a fallar en un juicio de tierras a favor de la Provincia y en contra de los intereses económicos del Jefe Político de Concepción del Uruguay Don Genaro L. de Elía;⁹⁹ pero cuando su candidatura fue reemplazada por la de Juan Manuel Febre, el Ministro de Hacienda Juan Antonio Mantero,¹⁰⁰ él mismo vecino de Concepción del Uruguay, le informaba reservadamente a su condiscípulo, el Gral. Roca, que sería fácil que

"...estuviera dispuesto a fallar de acuerdo con mis pretensiones...desde que no tiene vínculo que lo obligue a mirar la cuestión de una manera preconcebida".¹⁰¹

Si bien la actividad política ostensible le estaba vedada a los Jueces Federales, ello no era óbice para que informal u oficiosamente los Jueces intervinieran en política. En ese sentido nada más ilustrativo que el tenor de cierta correspondencia reservada mantenida por los Jueces con notorios políticos. En Santa Fé, en oportunidad de debatirse la sucesión del Irigoyenista Gobernador Manuel María Zavalla,¹⁰² el Juez Federal Emilio Villafañe le manifestaba a Victorino de la Plaza que la persona que tiene el mayor número de simpatías era el actual Ministro José Gálvez, "...pues no solo cuenta con la buena voluntad de los hombres de la situación, sino también con la de muchos de los que han sido siempre opositores a Irigoyen".¹⁰³ Y para hacer ver que en Santa Fé, la figura de Juárez Celman valía más que la de Bernardo de Irigoyen, el Juez Federal Gualberto Escalera y Zuviría sugirió a J. Celman que en la candidatura a Diputado Nacional para reemplazar a Eusebio Gómez, se eliminara a Bernardo de Irigoyen (h).¹⁰⁴

La designación, traslado y revocación de los jueces.

Pero la designación de los Jueces Federales requería del acuerdo del Senado de la Nación y la nominación de los Jueces Provinciales de las necesarias negociaciones en los acuerdos de los Senados provinciales.¹⁰⁵ Es sabido que con la denominada Organización Nacional el número de magistrados y

abogados entre los miembros de la elite, particularmente en las Legislaturas y el Congreso Nacional, fué incrementándose progresivamente en perjuicio de militares y curas. Sin embargo, esta paulatina incorporación no fué practicada sin que se dieran permanentes conflictos. Una reforma de la administración de justicia que contemplara la elegibilidad popular de los jueces fué un reclamo desoído.¹⁰⁶ En Catamarca, el Senado negaba en 1885 el acuerdo para que fueran designados Camaristas los Dres. Salvador de la Colina y Marcos Figueroa. El rechazo de Colina trajo, según el ex-Ministro de Gobierno Lúder B. Sotomayor, el rechazo de Figueroa. El primero era la manifestación "...de los rencores aún latentes que ha dejado su dura tenacidad anterior", y el de Figueroa "...una revancha del otro rechazo que a él se atribuía".¹⁰⁷ La explicación de este entuerto la da con una claridad meridiana el propio Gobernador José S. Daza, quien en carta a Roca le manifiesta que

"...habiendo arreglado con los amigos nuestros, que en la votación para la aceptación de estos jueces, en caso se manifestara opositor el Dr. Figueroa con su canalla clerical a Colina, que votasen también en contra de Figueroa y fué lo que sucedió".¹⁰⁸

En los Acuerdos donde se designaban, trasladaban y promovían los miembros de las magistraturas nacional y provinciales intervenían no sólo consideraciones de índole puramente profesional sino también intereses políticos y clientelísticos. En Tucumán, el Gobernador Lucas A. Córdoba le aseguraba infructuosamente a Roca que sería muy grave discernir el cargo de Juez Federal al Dr. Federico Helguera,¹⁰⁹ "...que es enemigo radical del partido nacional, particularmente enemigo político tuyo y enemigo a la vez de la situación", en lugar del Dr. Napoleón Vera, "...que es tu recomendado y nuestro común amigo político y personal".¹¹⁰ En San Juan, el Juez Severo Igarzábal, hermano del Senador Nacional Rafael Igarzábal, pagó en 1883 su vocación periodística, por su agresiva conducta como redactor del periódico La Unión,¹¹¹ con la destitución del seno del Poder Judicial.¹¹² En Santiago del Estero, a raíz de la renuncia del Dr. Pedro Novoa,¹¹³ fué candidateado como Juez Federal el Dr. Gabriel Larsen del Castaño. Pero esta candidatura fué frustrada con su arresto, bajo la aparente y falsa acusación de conspirar contra el orden constituido.¹¹⁴ Y en La Rioja, a fines de siglo, en marzo de 1898, la Legislatura votó la ley por la cual se lo despojaba a Marcial Catalán del cargo de Presidente del Superior Tribunal de Justicia. El conflicto traído a uno de los Poderes del estado provincial no obedecía a otro propósito, según Catalán,

"...sino a suprimir mi rol de Presidente para poner uno de los íntimos de [Francisco Vicente] Bustos, renunciar éste el Gobierno para que lo elijan Senador y a su vez, tener de su parte al Presidente del Tribunal que asuma el Gobierno y garanta las elecciones de Gobernador en que es candidato su sobrino [Antonio P.] García".¹¹⁵

Esta maniobra fué denunciada, según relata Bazán (1967), "...por importantes diarios del país: [pues] se trataba de un canje de funciones entre tío y sobrino, que hacía entrever una sucesión familiar interminable".¹¹⁶ Finalmente, dicha maniobra provocó el 23 de abril de 1898 un levantamiento popular encabezado primero por Catalán, y más luego por el partido Carreñista.

Los cargos políticos detentados por los jueces.

La Lista J nos revela el dossier burocrático de innumerables jueces, camaristas, miembros integrantes y Presidentes de las Cortes Superiores, Defensores de Pobres, Procuradores Fiscales y Vocales de las Cámaras Federales, conjuntamente con los cargos políticos detentados antes y con posterioridad al ejercicio de la magistratura. De dicha Lista, resulta que de 73 jueces federales, sólo 25 o el 18%, ocuparon cargos políticos con anterioridad a su designación en el foro, y 48 o casi el 50%,

dejaron de pertenecer a la magistratura para luego entrar a desempeñar cargos políticos ejecutivos o electivos. A título de ejemplo, en Jujuy, el Dr. Pablo Blas,¹¹⁷ --quien hacía tiempo venía siendo presionado por el Gobernador de Salta Cnel. Juan Solá-- presentó la renuncia a la Gobernación de Jujuy a cambio del Juzgado Federal, prometido primero por Francisco J. Ortiz y luego por el Cnel. Juan Solá y Don Plácido Sánchez de Bustamante.¹¹⁸ El Juzgado Federal le fué otorgado en premio de sus maquinaciones por engañar a Domingo T. Pérez y por medio de este al Presidente de la República (Roca), pues la Gobernación había recaído finalmente en otro Uriburista (Tello). También hubo varios casos de Jueces que antes de haberse incorporado a la Justicia Federal se habían desempeñado en la docencia secundaria y universitaria. Hubo asimismo casos como el de José Manuel Arias, Abrahám Cornejo, y Ramón Febre, que ocuparon cargos políticos antes y después de su transitorio desempeño en la Justicia Federal.

La carrera judicial propiamente dicha.

Para aquellos Jueces que desistían de pasarse a la carrera política y que optaban por permanecer en la carrera judicial, la esperanza de promoción consistía en ser transferidos a una sede más trascendente. En el caso del Juez Federal Nataniel Morcillo, fué trasladado de La Rioja a San Juan. Entre otras apuestas de ascenso en la carrera judicial, figuraba la de vocal de la Cámara Federal o integrante de la Corte Suprema.¹¹⁹ En Santa Fé, Juan Alvarez, Pedro Morcillo Suárez, Nicolás Vera Barros, Benigno T. Martínez y Santos J. Saccone fueron promovidos, de Jueces Federales a Vocales de la Cámara Federal. Lo mismo ocurrió en Córdoba con Melitón Arroyo y Nicolás Berrotarán; en Concepción del Uruguay con Alfredo Berduc; en Paraná con Eleodoro R. Fierro; y en Mendoza y San Luis con Jorge Vera Vallejo. En el caso de Abel Bazán, ascendió a Presidente de la Corte Suprema de Justicia luego de haber ocupado entre otros numerosos cargos judiciales el de Juez Federal en La Rioja. Y en el caso de Abrahám Cornejo, luego de haberse desempeñado como Ministro de la Corte de Salta es designado Juez Federal en dicha provincia.

Cuando la transferencia judicial consistía en un destino más lejano o de menor jerarquía esta era sentida más como un castigo, producto de la intransigencia política de la víctima. En San Luis, cuando el Gobernador Toribio Mendoza toma conciencia de la incorregibilidad del Juez Federal Donaciano del Campillo --manifestada en la actitud benefactora asumida con los reclutas destinados a la frontera-- le propuso a Roca transferirlo al nuevo Juzgado Federal de Jujuy

"...pues aquí es imposible que marche bien con nosotros por cuanto el móvil de todos sus actos son sus ideas contrarias en la política general, y más hoy más mañana andará siempre mal con cualquier gobernante que venga siendo de nuestros amigos".¹²⁰

Las consideraciones personales, familiares y de parentesco para su reclutamiento y promoción.

En la designación de los miembros de la magistratura intervenían también consideraciones de índole puramente personal, familiar y de parentesco. De acuerdo a la información genealógica que he podido recoger, gran parte de la elite judicial tenía alguna conexión familiar con las clases dominantes terratenientes y comerciales. En Santa Fé, el clan de los Rodríguez del Fresno, que la había gobernado por décadas, había caído en una cruel lucha intestina, cuyos embates por intereses económicos se hicieron sentir a nivel del máximo Tribunal de Justicia del país.¹²¹ El Tribunal Supremo de Santa Fé, que se hallaba sospechado de parcialidad,¹²² en oportunidad de la vacante del Juez Federal Donaciano del Campillo,¹²³ y frente a la postulación de los Dres. Cullen y Saturnino Salvá, el Interventor Pedro

Nolasco Arias,¹²⁴ le sugería al Presidente Roca proponer como candidato de transacción al Juez de Primera Instancia Dr. José Miguel Salvá "...que me consta tiene motivos de adhesión personal hacia tí, hasta por la tradición de la familia Figueroa de Salta, a la que pertenece la madre".¹²⁵ En el caso de Entre Ríos, a fines del siglo pasado, la situación era angustiante, por cuanto el gobierno de Salvador Maciá, amigo del Gobernador Santafesino José Gálvez, se había desacreditado, pues el pueblo

"...vé a su administración de justicia sirviendo los intereses de una familia, los puestos públicos ocupados por miembros de ella, sus rentas invertidas en paseos y giras políticas, y que no se hace el servicio de su deuda externa".¹²⁶

Sin embargo, a juicio de Carlos M. Zavalla,

"...si recorremos los distintos poderes públicos de la provincia, [vemos] que en la Cámara de Justicia no hay ningún pariente ni afín de las familias enunciadas".¹²⁷

Por el contrario, en Catamarca, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, el Dr. Pío Cisneros,¹²⁸ y el Presidente de la Legislatura Adolfo Castellanos, eran primos del Gobernador Julio Herrera González.¹²⁹ En San Juan, Carlos Doncel sucedió en el Juzgado Federal a su suegro Nataniel Morcillo "...y se lo ha transmitido a un cuñado suyo, Lino Echegaray, y proyecta reemplazar en el Senado a [Rafael] Igarzábal".¹³⁰ Y en Salta, el Gobernador Francisco J. Ortiz elevaba un Recurso de Queja en apelación directa ante la Corte Suprema contra el Juez Federal Federico Ibaguren,¹³¹ designado por el Interventor Bernardo de Irigoyen, pues éste era

"...un instrumento vil y ciego de la familia Uriburu de que es miembro, y en todo asunto político o civil en que alguno de nuestros amigos es parte hace servir su puesto por venganzas inícuas".¹³²

Ibaguren, a juicio de Juan Solá, "...no podía ser nunca imparcial, desde que toma una participación activa en nuestros asuntos políticos en pro de sus parientes".¹³³ El Presidente Avellaneda se ha equivocado, le aseguraba Ortiz a Victorino de la Plaza, "...al creer que no hay aquí más gente que valga que los Uriburu".¹³⁴ Estos están

"...ya en quiebra y bajo la acción de los Tribunales, y es muy probable que el Senador [Luis] Linares, que ha sido declarado en quiebra, reciba la declaración de fraudulento y tenga el Juez que pedir su desafuero".¹³⁵

La Lista J y el Apéndice K nos revelan la información familiar y de parentesco de medio centenar de jueces, camaristas, miembros integrantes y Presidentes de las Cortes Superiores, Procuradores Fiscales y Vocales de las Cámaras Federales con sus respectivos apellidos maternos. Los lazos sanguíneos eran una instancia decisiva en la carrera judicial de algunos de los Jueces incluidos en la Lista mencionada.¹³⁶ El matrimonio fué también para algunos jueces un elemento coadyuvante en dicha carrera judicial. De 58 casos en que conocemos el apellido de su respectiva cónyuge, en sólo cinco, o casi el 10%, hallamos un concreto ascenso social. En efecto, los matrimonios de los Doctores Barco, Careño, Febre, Granillo y Pulo Meriles significaron su incorporación a las elites locales respectivas. Sin embargo, en la mayoría de los casos registrados encontramos que los Jueces y sus respectivas cónyuges pertenecen, por filiación paterna y/o materna, a las elites locales.¹³⁷

Por último, podemos concluir que la falta de independencia de la justicia, los niveles de

corrupción y los estrechos lazos de parentesco en los ambientes judiciales del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para certificar que las prácticas del Antiguo Régimen aún se hallaban presentes en la segunda mitad del siglo XIX.

NOTAS

¹ para el caso Inglés, ver Prest (1991); para el del Perú, ver Mac Lean Estenos (1945); para el de Colombia, ver Martínez Sarmiento (1943) y Vélez B., Gómez de León, y Jaime Giraldo (1987); para el del Paraguay, ver Ocampo (1945); para el de Bolivia, ver Paredes (1944); y para el del Brasil, ver Pang and Seckinger (1972); Flory (1975, 1977); y Barman y Barman (1976, 1977).

² González Calderón, 1923, II, 470 o 1931, II, 988; citado en Linares Quintana, 1942, II, 22, nota 234. Acerca de la influencia del Poder administrador sobre el Legislativo en Bentham, ver Crimmins, 1994, 265-267.

³ representada por May (1884), Bañados Espinosa (1888), Todd (1902), Micell (1902), Montes de Oca (1910), Roldán (1917), Bas (1927), Barthélemy (1939) y González Calderón (1923, 1931).

⁴ Linares Quintana, 1942, II, 563. Lamentablemente para la noción de división de poderes no he podido consultar a Agapito Serrano (1989), por hallarse agotado.

⁵ ver Saguier, 1995 y 1996-1997.

⁶ Murilo de Carvalho, 1982, 396.

⁷ Para el caso argentino, Bosch (1964) se refiere al Poder Judicial en la Confederación Argentina (1854-1861) y al debate sobre el nacimiento del fuero federal; Ibáñez Frocham (1938), Díaz (1959) y Allende (1973) incursionaron sobre la Justicia durante la tiranía de Rosas; y Comadrán Ruiz (1988) se refiere a la justicia penal. Otros autores como Cornejo (1983) y Martínez Peroni (1983) prefirieron incursionar en el género puramente biográfico e ideológico.

⁸ consistente en la pluralidad de niveles informativos susceptibles de ser extraídos de las fuentes al margen del fin utilitario que dió origen a cada documento (Carmagnani, 1988, 12).

⁹ El poder inhibitorio o avocatorio del Ejecutivo y del Legislativo, como herencia del Antiguo Régimen colonial, aún se hallaban subsistentes. Avocar consistía en asumir las causas pendientes o, en otras palabras, sustraer al acusado de sus jueces naturales para someterlo a aquellos otros jueces designados por alguna autoridad superior. En la Francia y la España del Antiguo Régimen esta institución era denominada avocación (De Tocqueville, 1982, 94; Enciclopedia Universal Ilustrada, t.XIV, pp.791ss.; y Enciclopedia Jurídica Omeba [Buenos Aires], I, 1030). Estas instituciones se perpetuaron con ciertos velos o disimulos en la primera mitad del siglo XIX, como por ejemplo en el Tribunal Especial para los recursos extraordinarios de nulidad e injusticia notoria, duramente criticado por Agustín Francisco Wright en 1838, en la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires (Buenos Aires, Provincia, Honorable Junta de Representantes, Diario de Sesiones, t.23, n.587, 8-III-1838, 20-27; t.23, n.588, 9-III-1838, 5-9; y t.23, n.590, 19-36), así como en el proceso a los asesinos del General Juan Facundo Quiroga (Ibáñez Frocham, 1938, 229-238 y 243-245; Levene, 1954-58, VIII, 511-513; y Zorraquín

Becú, 1971, 164-205). Mientras los recursos de injusticia notoria y de segunda suplicación sólo procedían respecto de los fallos ejecutoriados en juicios cuya primera instancia se hubiese seguido ante un juez inferior, o cuando el tribunal superior había conocido en primer grado, el derecho de intercesión o poder de casación, consistía en un recurso de carácter extraordinario que tenía por objeto anular los fallos dictados por los tribunales y fijar a la vez la verdadera inteligencia de las leyes (Weber, 1922, 1944, II, 1003; y Enciclopedia Universal Ilustrada, t.12, p.21).

¹⁰ Linares Quintana, 1942, I, 17 y 95.

¹¹ Zimmermann, 1994, 5.

¹² tales como Bañados Espinosa (1888), Micell (1902), González Calderón (1909, 1931), Montes de Oca (1910), Roldán (1917), Bas (1927) y Barthélemy (1939) (Linares Quintana, 1942, II, 563).

¹³ González Calderón, 1917, II, 75; o 1923, II, 470; citado en Linares Quintana, 1942, II, 22, nota 234.

¹⁴ Bosch, 1965, 21.

¹⁵ sobrino del General Aniceto Latorre.

¹⁶ Francisco J. Ortiz a J. Roca, Salta, 25-I-1882 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.21).

¹⁷ M. Zorreguieta a Victorino de la Plaza, Salta, 10-III-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.384).

¹⁸ Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1882, I, 122.

¹⁹ José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*.

²³ Silvano Bores a Julio A. Roca, Tucumán, 4-III-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

²⁴ publicado en El Independiente, de Tucumán, del 7-III-1879.

²⁵ José Posse a J. A. Roca, Tucumán, 7-III-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7.

²⁶ Posteriormente, a comienzos del siglo XX, se incluyó la justicia letrada, ver para ello el debate parlamentario sobre la Justicia de Paz entre los Diputados Nacionales Manuel Carlés y Juan Balestra a favor de la justicia lega, contra los Diputados Gouchon e Iturbe a favor de la justicia letrada, en Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1905, I, 8a. sesión ordinaria, 19a. Reunión, del 19-VI-1905 al 30-VI-1905, pp.649-746.

²⁷ José Nicolás Matienzo a J. Roca, Santiago del Estero, 26-XI-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.34).

²⁸ José Nicolás Matienzo a J. Roca, Santiago del Estero, 26-XI-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.34).

²⁹ José Nicolás Matienzo a J. Roca, Santiago del Estero, 26-XI-1883 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.34).

³⁰ Luis G. Pinto a Juárez Celman, Santiago del Estero, 18-VIII-1884, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, IEG.15.

³¹ José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

³² José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

³³ José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 27-II-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

³⁴ *Ibídem.*

³⁵ *Ibídem.*

³⁶ *Ibídem.*

³⁷ José Posse a Julio A. Roca, Tucumán, 4-III-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

³⁸ Absalón Rojas a Julio A. Roca, Tucumán, 13-I-1880, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.9.

³⁹ Antonino Taboada a Próspero García, Catamarca, 23-VI-1867 (AGN, Doc. Donada, Arch. P. García, Sala VII, 20-3-13).

⁴⁰ Pbro. José F. Segura a J. Roca, Catamarca, 7-I-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).

⁴¹ José Posse a J. Roca, Tucumán, 7-III-1879 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7). A propósito de este despropósito, Absalón Rojas manifestaba que "...el extravío y la pasión llevó a nuestros mismos amigos hasta hacer alianza con los Mitristas para cometer en la Legislatura la más grande de las iniquidades cuyo único resultado positivo fué dar a los contrarios una mayoría en ella, mayoría que no la hubieran obtenido por otro camino y que hoy sirve de rémora, por lo menos, a la marcha normal de este gobierno" (Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 13-I-1880, AGN, Documentación Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9).

⁴² José Posse a J. Roca, Tucumán, 7-III-1879 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

⁴³ entre los cuales estaban los Delfinistas (por Delfín Leguizamón) y Güemistas: Tomás Oliver, Carlos Grande, Francisco J. Alsina, el Dr. García, y el Dr. Angel M. Ovejero.

⁴⁴ heredado del aforismo Romano que reza *Nemo esse iudex in sua causa potest* (Nadie puede ser

Juez en causa propia).

⁴⁵ Eliseo Outes a Julio A. Roca, Salta, 16-VIII-1896 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.73).

⁴⁶ sobre la justicia rural y los juzgados de paz en Buenos Aires entre 1830 y 1852, ver Garavaglia, 1997.

⁴⁷ Halperín Donghi, 1985, 87.

⁴⁸ Filemón Posse, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 31-V-1886, p.109.

⁴⁹ Filemón Posse, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 31-V-1886, p.109.

⁵⁰ José Uriburu a Anselmo Rojo, Salta, 27-I-1856 (AGN, Sala VII, Colección Rojo, 10-3-2).

⁵¹ Ibídem.

⁵² "...está en manos de los Jueces de Paz de toda la República, la pureza del sufragio, porque son los Presidentes de las Juntas que hacen la inscripción de los ciudadanos, es decir, la calificación de los votantes, y bastaría que un Juez de Paz, pusiera entorpecimiento a un reclamo, para que un voto falso quedase en la inscripción, o para que un voto válido no fuese recibido en ella. Son, además los funcionarios que dirigen la inscripción, los Presidentes de los Tribunales de Apelación por inscripción indebida....Son ellos los que deben entregar las urnas y los registros" (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 1882, I, 123).

⁵³ que a la sazón lo desempeñaba el Dr. Martín Herrera, de filiación Nacionalista.

⁵⁴ Francisco Olivera a J. A. Roca, Santiago del Estero, 1-III-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.22.

⁵⁵ José S. Daza a Juárez Celman, Catamarca, 11-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.20).

⁵⁶ José S. Daza a Juárez Celman, Catamarca, 11-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.20).

⁵⁷ J. M. Alvarez Prado a J. Roca, Jujuy, 12-II-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50).

⁵⁸ Guillermo San Román al Comandante Marcelino Reyes, La Rioja, 17-III-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.205).

⁵⁹ Guillermo San Román a Dardo Rocha, La Rioja, 22-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

⁶⁰ Guillermo San Román a Dardo Rocha, La Rioja, 22-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

⁶¹ Guillermo San Román al Comandante Marcelino Reyes, La Rioja, 17-III-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.205).

⁶² nacido en La Rioja (no confundir con el homónimo porteño), hijo del Mayor Juan de la Cruz Torres y de Dominga Moreno, y marido de Delicia de la Fuente (Cutolo, VII, 375).

⁶³ San Román le expresaba a Luis María Campos que "...estamos en plena dictadura. El Poder Judicial acaba de ser derrocado para hacer mayoría en la Junta Escrutadora, por supuesto con un verdadero atentado constitucional. Quedamos sin tribunales y entregados a la justicia de un animal, como Lorenzo Torres, Camarista!!! y de un borracho consuetudinario un doctorcito Pazos!!!" (Guillermo San Román a L. M. Campos, La Rioja, 9-IV-1886, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204).

⁶⁴ "...Esos jueces nos están costando muy mucho, no solo por el esfuerzo que tenemos que hacer para contrarrestarlos en sus pillerías sino por la burla que de ellos se recibe. Hombres de puntos medios, de luz y sombra, hermafroditas políticos todo lo quieren, pero sin responsabilidad" (Antonio del Pino a Juárez Celman, Catamarca, 26-X-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).

⁶⁵ L. Olmos a Dardo Rocha, Catamarca, 11-XII-1885 (AGN, Sala VII, Archivo Rocha, Leg.215).

⁶⁶ Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 8-I-1882 (AGN, Archivo Roca, Leg.21).

⁶⁷ Francisco Olivera a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 8-I-1882 (AGN, Archivo Roca, Leg.21).

⁶⁸ Segundo Benavídez a J. Roca, San Juan, 22-III-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30.

⁶⁹ Esta realidad se extendió a lo largo del continente hispanoamericano, por cuanto se observó en México, tal como lo refieren Schmitt (1962) y Coerver (1990); y en la República Dominicana, como lo señala Martínez-Fernández (1995).

⁷⁰ ver Bruno, X, 513-530.

⁷¹ Bosch, 1965, 13.

⁷² Bischoff, 1971, 50-51; y Grenón, 1968, 311-313; citados en Cutolo, II, 286.

⁷³ Ortega, 1963, 257.

⁷⁴ Jurista experto en minería, autor de El Código de Minería para la Confederación Argentina (Buenos Aires, 1886). Sobrino del que fuera Gobernador de San Luis Justo Daract,

⁷⁵ M.R. Sáez a Julio A. Roca, Mendoza, 12-IX-1875 (AGN, Archivo Julio A. Roca, Leg.2, Documento 458, fs.363-367)

⁷⁶ *Ibíd.*

⁷⁷ Joaquín Villanueva a J. Roca, Mendoza, 13-III-1877, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.4.

⁷⁸ Toribio Mendoza a J. Roca, San Luis, 22-XII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13.

⁷⁹ Toribio Mendoza a J. Roca, San Luis, 22-XII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13.

⁸⁰ Toribio Mendoza a J. Roca, San Luis, 22-XII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13.

⁸¹ seguidores del Gobernador José Benito de la Bárcena.

⁸² J. M. Astigueta a Julio A. Roca, Jujuy, 6-I-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7). Montescos y Capuletos era la comedia de Don Francisco de Rojas Zorrilla, más conocida con el título de Los bandos de Verona, cuyo argumento está basado en los amores de Romeo y Julieta y en la enemistad de la familia Montesco, perteneciente al bando güelfo, partidario del Papado, triunfante en Florencia y Pisa, al que se hallaba afiliado Romeo, con la familia de los Capuleti, perteneciente al bando gibelino, partidario del Emperador, triunfante en Verona y Milán, al que estaba ligado Julieta (Enciclopedia Universal Ilustrada, t.36, 603).

⁸³ Ibídem.

⁸⁴ cuñado del Diputado Nacional Justino Solari.

⁸⁵ José Benjamín Romero a Dardo Rocha, Corrientes, 18-VI-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217).

⁸⁶ José Benjamín Romero a Dardo Rocha, Corrientes, 18-VI-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217).

⁸⁷ Guillermo Sarmiento a J. Roca, San Juan, 16-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

⁸⁸ Sánchez Benavídez a J. A. Roca, San Juan, 24-XI-1884, Archivo Juárez Celman, Leg.15.

⁸⁹ Sánchez Benavídez a J. A. Roca, San Juan, 24-XI-1884, Archivo Juárez Celman, Leg.15.

⁹⁰ Barraquero, 1878, 320, citado por Martínez Peroni, 1983, 478.

⁹¹ Archivo del Brigadier General Juan Facundo Quiroga (1824-25), t.III, n.43, p.53.

⁹² ver Cunietti-Ferrando, 1989; Bragoni, 1993; y Saguier, 1995. Sólo Cunietti-Ferrando trata este crucial y crítico acontecimiento de la Banca González. Lamentablemente Bragoni (1993) no incursiona en este evento, que podría estudiarse analizando el expediente del concurso o quiebra correspondiente que debe existir en el Archivo Judicial de Mendoza.

⁹³ Lauro Galigniana a J. R., Mendoza, 30-VIII-1879, Archivo General de la Nación (AGN), Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.

⁹⁴ Cunietti-Ferrando, 1989, 35.

⁹⁵ José Miguel Segura a J. Roca, Mendoza, 30-I-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.21.

⁹⁶ Isaac Chavarría a J. Roca, Buenos Aires, 23-XI-1887 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56).

⁹⁷ Napoleón Taboada a Manuel....., Santiago del Estero, 24-XI-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.215.

⁹⁸ "Dos Vocales de la Corte y uno (o los dos) Juzgados de Primera Instancia ofrecidos por los Caballeros de la situación a los Rochistas (según Zavalía) es algo que no estaba previsto y que dá la medida de los aprietos en que se hallan sin tener como formar Administración de Justicia, sintiendo por otra parte además el peso de la opinión del país sobre los que manejan el Gobierno de Santiago" (Napoleón Taboada a Manuel....., Santiago del Estero, 24-XI-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.215).

⁹⁹ cuya extensa propiedad, denominada Cupalén, parte del Potrero de San Lorenzo, heredado de los García de Zúñiga, le disputa el Gobierno sin verdadero interés para la Provincia.

¹⁰⁰ Combatiente de Cepeda y Pavón, Archivero de Concepción del Uruguay en 1863, Ministro de López Jordán en 1870; Ministro de Hacienda del Gral. Racedo en 1883; redactor de El Uruguay y fundador de El Eco de Entre Ríos (Urquiza Almandó, 1965, II, 380, 532; III, 257 y 328).

¹⁰¹ Juan Antonio Mantero a J. Roca, 1882, AGN, Sala VII, arch. Roca, Leg.28.

¹⁰² M. Derqui a J. Roca, Corrientes, 10-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

¹⁰³ Emilio Villafañe a V. de la Plaza, Paraná, 9-IX-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.392).

¹⁰⁴ Escalera y Zuviría a J. Celman, Rosario, 16-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.17).

¹⁰⁵ ver Dagrossa (1990-91).

¹⁰⁶ Halperín Donhi, 1985, 190. Para un estudio de la emergencia de una magistratura electa en Estados Unidos, ver Hall (1983).

¹⁰⁷ L. B. Sotomayor a J. Roca, Catamarca, 8-VI-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.45.

¹⁰⁸ José Daza a J. Roca, Catamarca, 12-VI-1885, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.45.

¹⁰⁹ marido de María Luisa Padilla Nougues, hermana mayor del Gobernador Ernesto Padilla, y sobrina carnal de los Rochistas Tiburcio y Angel Cruz Padilla Puente y de los Juaristas José e Isaías Padilla.

¹¹⁰ Lucas Córdoba a J. A. Roca, Tucumán, 22-VI-1896, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.72.

¹¹¹ propiedad de un tal Nicanor Garramuño.

¹¹² por insultar en un escrito, donde tenía entablado juicio contra El Zonda, "...a la situación, al Juez [Sánchez] Benavídez y al redactor de El Zonda, con quien tiene añejo pleito de injurias" (Vicente C. Mallea a J. A. Roca, San Juan, 23-VII-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.32).

¹¹³ Novoa había aceptado la Presidencia de la Cámara de Justicia de Córdoba.

¹¹⁴ El 27 de Enero Absalón Rojas le escribe a Roca informándolo que "...Larsen y otros han sido reducidos a prisión. Esta es una de tantas sonceras que se cometen en mi tierra y quizá de las peores que haya habido motivo que justifique la prisión de Larsen, cuanto porque es enconar mas los ánimos y alarmar la opinión fuera de Santiago, con estas medidas tan extremas. Pero yo no estraño esto, porque hay cerca de Gallo algunos que son salvajes en sus odios. Yo no pretendo tampoco santificar a Larsen, pues lo conozco y sé que tiene un carácter impetuoso, que quiere y odia con vehemencia y le falta la calma y reposo necesarios para soportar las contrariedades de la vida. Creo que Larsen me escuchaba y puedo asegurar que su prisión, que tiene por fundamento un supuesto plan de revolución [Rochista], es injusta, pues que si algún pensamiento loco existió en algún momento de despecho o de exaltación, ese pensamiento no hubiera madurado por cuanto, como le decía a Vd. en mi anterior, no encontrarían apoyo en los elementos del partido, en virtud de haberlos yo vinculado ya al Gobierno, o mejor dicho a Telasco [Castellanos] personalmente" (Absalón Rojas a J. Roca, Tucumán, 27-I-1880, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9). El propio Larsen le escribía a Rocha contándole que "...hasta hoy que van 17 días no se me ha dicho la causa de mi prisión ni se ha dictado auto de prisión, me detiene por simple orden superior y para soltarme andan buscando de que manera pueden hacerlo sin declarar que no hay mérito para proceder contra mí. Estos últimos tiempos me ocupaba en estudios históricos, no salía de casa, ni hablaba con nadie; de esta actitud sacaron que algo tramaba y como son muy miedosos, los candidatos influyeron ayudándoles la mujer del Gobernador para que me aprisionaran. Quizá pronto esté en libertad sin instruirse la causa, para la cual no hay mérito, pero aunque esto suceda, no se me escapa que Goyena y Avellaneda han de poner dificultades a mi nombramiento para el Juzgado Federal" (Gabriel Larsen del Castaño a Dardo Rocha, Santiago del Estero, 11-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226). Sin embargo, Jaime Vieyra sostenía que "...se ha tenido con él toda clase de consideraciones y no se lo ha metido preso sino cuando se han tenido las pruebas evidentes de la revolución, y para que Vd. crea más en ella le diré que Roca desde Córdoba fué el primero que la denunció pues a él fueron a proponérsela pidiéndole su apoyo y cuando él no les aceptó fueron a esa a ponerse de acuerdo con ilusos que nunca faltan" (Jaime Vieyra a D. Rocha, Santiago del Estero, 11-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226).

¹¹⁵ Marcial Catalán a Julio A. Roca, La Rioja, 11-III-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.77).

¹¹⁶ Bazán, 1967, 652.

¹¹⁷ casado con una hija del clan de los Carrillo, de filiación Barcenista (Uriburista).

¹¹⁸ Francisco J. Ortiz a J. Roca, Salta, 25-XII-1882 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.28; Teodosio Temístocles Carrizo a Victorino de la Plaza, Jujuy, 17-III-1883 (AGN, Doc. Donada, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 5-1-6, fs.319; y Teodoro Sánchez de Bustamante a J. Roca, Jujuy, 18-V-1883 (AGN, Documentación Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

¹¹⁹ Zimmermann, 1994, 7.

¹²⁰ Toribio Mendoza a J. Roca, San Luis, 22-XII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.13.

¹²¹ Nicasio Oroño c/su cuñado Camilo Aldao, s/liquidación de sociedad de capital e industria

para contratar la proveeduría del Ejército del Gobierno de la Confederación, Fallos de la Corte Suprema, Causa LXXV, t.VIII, 1875, p.450-452; Nicasio Oroño c/ José Ramón Aldao p/rendición de cuentas, Causa CL, t.IX, 1877, p.301-303; Causa XLVIII, 1885, t.XIX, p.182-183; Causa CXVII, 1888, v.34, 223-226; Dr. Manuel M. Zavalla c/ Domingo Cullen, s/tierras en el paraje de Ascochinga, Causa XIX, 1889, v.33, 58-61; José Iturraspe c/su sobrino José Freire, s/justificación y cobro al Gobierno Nacional del valor de los perjuicios causados en sus bienes de campo, Causa LVIII, t.I, 1871, p.311-316; y José Iturraspe, Cónsul Oriental y Vice-Cónsul de Portugal en Santa Fé c/ Petrona Candioti de Iriondo, Causa CXXIII, t. X, 1877, p.383-386. Ver también Bonaudo y Sonzogni, 1992, 89.

¹²² por contar entre sus cinco miembros al Dr. Zenón Martínez y Cabanillas y al Dr. Blanco, el uno cuñado y el otro socio del ex-Gobernador y entonces Senador Nacional José Gálvez (Carlos Cejas a J. Roca, Santa Fé, 9-IX-1891, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.76).

¹²³ el mismo que había servido en San Luis.

¹²⁴ ex-Juez Federal.

¹²⁵ Pedro Nolasco Arias a J. A. Roca, Rosario, 7-VI-1896, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.72. Arias aludía interesadamente a este parentesco porque sabía que Julio A. Roca era sobrino carnal de Genoveva Paz Mariño, mujer de Pío Figueroa Aráoz y por tanto primo hermano de los Figueroa Paz.

¹²⁶ Benito E. Pérez a Julio A. Roca, Paraná, 3-VI-1896 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.72).

¹²⁷ C. M. Zavalla a Julio A. Roca, Paraná, 3-VIII-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg. 80).

¹²⁸ Hijo del Gobernador José Pío Cisneros y de Anastasia Sánchez de Loria.

¹²⁹ Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 2a. Sesión de Prórroga, p.100.

¹³⁰ A. Belín Sarmiento a Dardo Rocha, San Juan, 12-XI-1884, AGN, Sala VII, Arch. D. Rocha, Leg.214.

¹³¹ en un juicio promovido por Delfín Leguizamón contra un amigo de Ortiz por supuestas violaciones de la libertad de sufragio en la elección de Diputados Nacionales del 24 de Febrero de 1878.

¹³² Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 2-X-1878 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.687).

¹³³ Juan Solá a Victorino de la Plaza, Salta, 30-VI-1878 (AGN, Doc. Donada, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 4-7-14, fs.575).

¹³⁴ Francisco J. Ortiz a Victorino de la Plaza, Salta, 12-V-1878 (AGN, Archivo Victorino de la Plaza, Correspondencia y Documentos Particulares, 1877-78, Sala VII, 4-7-14, fs.477).

¹³⁵ *Ibídem.*

¹³⁶ En Entre Ríos, el Juez Federal Mariano Tezanos Pintos era hermano del Diputado Nacional

Manuel Tezanos Pintos. En Santa Fé, los Jueces Federales Fenelón y José María Zuviría eran hermanos carnales. Y el Juez Federal Gualberto Escalera era sobrino carnal de los Jueces Zuviría. En Tucumán, el Gobernador Benjamín Aráoz Ormaechea era hermano del Juez Federal Luis Felipe Aráoz. Y el Juez Federal Federico Helguera Molina era hijo del Gobernador Federico Helguera Garmendia y primo hermano del Gobernador y Diputado Nacional Pedro Alurralde. Y el Juez Federal Francisco L. García era pariente del Diputado Nacional Silvano Bores. En Salta, los Jueces, Fiscales y Convencionales Carlos, Flavio, Vicente y Julio Arias Romero eran hermanos carnales. El Fiscal Pedro José Uriburu era sobrino carnal del Juez Federal José Evaristo Uriburu. El Ministro de la Corte Vicente Tamayo Ovejero era hijo del Diputado Nacional Sidney Tamayo Gurruchaga. Y en este siglo, el Juez Federal Martín Gómez Rincón era sobrino carnal del Senador Nacional Francisco J. Ortiz Viola. En La Rioja, el Juez Federal Carlos Luna Herrera era hermano del Diputado Nacional Félix Luna. En Córdoba, el Juez Federal Nicolás Berrotarán era sobrino carnal de los Diputados y Gobernadores Félix y Eleázar Garzón. En San Luis, el Juez Federal Valentín Luco Laborde era hijo del que fuera Ministro de Gobierno de Rafael Cortés, Valentín Luco. Y en Corrientes, el Juez del Crimen (1884) Juan José Lubary Llano era sobrino del Gobernador Manuel Derqui.

¹³⁷ En algunos pocos casos, como en el de los Jueces José Evaristo Uriburu y Delfín Leguizamón, se desposaron con parientas próximas, primas hermanas o primas segundas. En Salta, los Ministros de la Corte de Justicia Miguel F. Costas Fleming y Carlos Zambrano Orihuela eran cuñados. En San Juan, el Juez Federal Nataniel Morcillo era suegro del Gobernador Carlos Doncel Villanueva. En Salta, el Camarista Isidoro López Plaza era cuñado del Ministro Eduardo Wilde García, y suegro del Camarista José María Solá. En Jujuy, el Juez Federal Macedonio Graz era con cuñado del Gobernador José María Álvarez Prado. En Santiago del Estero, el Juez Federal Benjamín Palacio Santillán era cuñado del Diputado Nacional Napoleón Zavalía Gondra. Y en Tucumán, los Jueces Federales Federico Helguera Molina y Ernesto Padilla Nougues también eran cuñados. Y el Juez Federal Agustín Justo de la Vega Granillo era cuñado de los Gobernadores Marco Manuel Avellaneda y Juan Manuel Terán Alurralde.

TOMO VII

Capítulo 14:

Las Comunicaciones como esfera crítica. La censura telegráfica en el régimen republicano.

La historia aplicada a la esfera pública en el terreno de las comunicaciones (postales, telegráficas, radiotelefónicas y electrónicas) no ha sido un espacio asiduamente frecuentado por la historiografía política.¹ Por un lado, para la tesis liberal, personificada en el siglo XIX en Ugo Foscolo y Emile Hatin, las comunicaciones tuvieron el mérito de divulgar el conocimiento, el cual permitió combatir el dogmatismo y la intolerancia. Más luego, para el Marxismo, las comunicaciones fueron meros instrumentos de las clases dominantes. En la última post-guerra, el Estructural-Funcionalismo, representado por Paul F. Lazarsfeld y Robert K. Merton, sostuvo que las comunicaciones proveían el necesario apoyo para el equilibrio del sistema. Para esta escuela de pensamiento, el impacto de las comunicaciones en el pasado político de las repúblicas occidentales estaría ligado con líneas de fractura de origen moderno (crisis o agotamientos de la censura eclesiástica versus el naciente dogma de la libertad de prensa). Desde una perspectiva de economía política, Gillespie y Robins (1989) y Garnham (1990a) han sostenido que debido al crecimiento de la infraestructura informativa privatizada --que lleva a vencer la tiranía de la distancia geográfica y también lleva a una creciente disparidad entre los que poseen información y aquellos que no la poseen-- se justifican la provisión y los subsidios públicos a los servicios de información.² Por otro lado, desde una perspectiva post-estructuralista, Gandy (1994) y Agre (1994), han sostenido que dicho crecimiento informativo llevaba a la extensión de cada vez más grandes sistemas de vigilancia y control.³ Y recientemente, para Luhmann (1995) y Friedland (1996), sin el desarrollo de las comunicaciones (periodismo, telegrafía, telefonía, radio-televisión, etc.) es imposible ensanchar la esfera pública y "...crear cadenas complejas de poder en las burocracias políticas y administrativas, mucho menos el control democrático sobre el poder político".⁴ Finalmente, para la teoría general de sistemas, representada últimamente por Morin (1992), las instituciones políticas --como las comunicaciones-- son meras instancias, cambiables y transitorias, de redes de relaciones más extensas y fundamentales.⁵

En cuanto a la historiografía local, autores como Castro Estévez (1934-52) y Galván Moreno (1944a) incursionaron en la elemental reconstrucción de la historia institucional. Por otro lado, autores como Hodge (1984) y Bose (1987) intentaron comprobar las vinculaciones entre estas últimas y la formación de la nacionalidad. Solo los trabajos de Johnson (1948) y Mc Evoy (1994), aunque referidos a Chile y Perú respectivamente, han intentado analizar con éxito las múltiples relaciones y fracturas entre las comunicaciones y el poder político propiamente dicho. En ese sentido, lo que la historiografía científico-política local no ha alcanzado aún a vertebrar es la íntima conexión que se dió en ese

entonces entre los mecanismos comunicacionales (telegrafía) por un lado y los regímenes electorales, judiciales y educativos por el otro.⁶ Es en esta línea de investigación que este trabajo tratará de inscribirse.⁷

Cabe entonces preguntarse si la administración postal y telegráfica contó siempre en la segunda mitad del siglo pasado con un alto grado de legitimidad, o si por el contrario pueden hallarse en su desempeño histórico fuertes altibajos, desajustes o involuciones. Para responder en parte a este interrogante, en este trabajo analizamos al servicio telegráfico en su instrumentación para el favoritismo y la discriminación política; su utilización como botín de guerra al servicio de los gobiernos de turno; la violación y el espionaje a la correspondencia postal y telegráfica; y las paralelas vinculaciones con el periodismo y su instrumentación como testimonio de legalidad. Para este estudio, hemos aplicado el análisis indicial, de Ginzburg (1983), y el intersticial o residual,⁸ del que nos habla Carmagnani (1988), seleccionando una docena de textos de época hallados en las correspondencias presidenciales de Julio A. Roca, Miguel Juárez Celman y Victorino de la Plaza, así como en la del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Dr. Dardo Rocha, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires.

En la constitución y la caída de las situaciones provinciales el Correo y el Telégrafo fueron desde sus inicios instrumentos extremadamente envidiables de poder, favoritismo y discriminación política. Apenas a los cuatro años de inauguradas las líneas telegráficas por el Presidente Sarmiento, en 1874, cuando aconteció la revolución de "La Verde", los Mitristas tuvieron en la provincia de Buenos Aires diversas Oficinas Telegráficas "...para tomar la correspondencia del Gobierno Nacional".⁹ Tres años más tarde, en 1877, el Presidente de la Cámara de Apelaciones Dr. Amadeo Benítez le explicaba al General Roca desde San Nicolás porqué razón no era explícito en el Correo, pues "...las cartas han sido abiertas casi siempre por Alsínistas interesados en saber lo que dicen u hacen sus enemigos o sus émulo".¹⁰ Desde San Juan, el ex-Diputado Nacional Dr. Hermógenes Ruiz le advertía al Presidente Roca que nombrar de Interventor de Correos a Nicanor Garramuño "...sería tener allí un espía siempre desleal para con aquellas personas que le dispensaran aquel favor".¹¹ Y tres días más tarde, en un operativo epistolar aparentemente orquestado, un Oficial de la Guardia Nacional, Román Videla, le expresaba a Roca que el nombramiento de Garramuño "...ha alarmado a todos los amigos y mucho más cuando se ha postergado a D. Arnovio Sánchez".¹² Y en febrero de 1883, Román Videla le transmite al entonces militante de la facción radicalizada de la coalición liberal opositora al gobierno sanjuanino de Anacleto Gil, el Inspector de Irrigación y Agricultura de la provincia y futuro conspirador en el atentado del cual resultó asesinado el ex-Gobernador de San Juan Agustín Gómez, Don Napoleón Burgoa, que "...una carta que le ha escrito a Vd. ha sido violada, y no puede ser de otra manera porque muchos saben su contenido".¹³ A propósito de este entuerto, el ex-Gobernador de San Juan Rosauro Doncel le expresaba a Roca que

"...parece que nos familiarizamos con la inmoralidad y que encontramos lo más natural del mundo abrir y leer una carta dirigida al primer magistrado de la Nación, y después hacemos alarde de repetir o referir el contenido sin ruborizarnos".¹⁴

Desde San Luis, el Diputado Nacional Toribio Mendoza y el Gobernador Rafael Cortés le escribían a Roca en 1878 haciéndole presente la necesidad que había de cambiar el Administrador de Correos de San Luis, por no ofrecer

"...garantía alguna para la correspondencia por sus malas condiciones, aparte de otros defectos capitales que lo inhabilitan para ocupar este puesto y que no quiero mencionar por ser muy

conocidos de la generalidad".¹⁵

Aparentemente en el Correo y en los Telégrafos no existieron incompatibilidades ni se implementaron circulares semejantes a las que rigieron en el Ministerio de Instrucción Pública, en la Inspección General de Armas, y más luego en los Bancos oficiales, prohibiendo a sus empleados tomar parte en la política local.¹⁶ Por el contrario, las autoridades de los Distritos de Correos y Telégrafos así como las oficinas de la Defensa Agrícola Nacional enviaban tradicionalmente Partes Mensuales con detallados diagnósticos políticos, prolongándose estas prácticas hasta bien entrado el siglo XX.¹⁷ En La Rioja, en 1883, hasta el Jefe de la Oficina de Telégrafos era candidato para futuro Gobernador de esa provincia.¹⁸ Y en 1884, el Gobernador Jamín Ocampo le informaba a Roca que

"...con la mayor injusticia se ha suspendido al telegrafista Herrera,...dejando este medio de comunicación en manos únicamente del yerno del Senador [Nicolás] Barros [un tal Grandolí]".¹⁹

La Dirección de las Oficinas de Telégrafos era un botín de guerra al servicio ostensible de los gobiernos de turno. Desde Tucumán, el periodista santiagueño Carlos M. Maldonado le informaba al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Dardo Rocha, que

"...los Juaristas quieren apoderarse de la dirección de la Oficina de Telégrafos en Tucumán, que es la llave [por ser central retransmisora] para Salta, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero".²⁰

Y cuando los Inspectores Colombres,²¹ afiliados al Rochismo, fueron suspendidos del servicio por el Juarismo, su pariente Benjamín Paz (Ministro de Gobierno del Gobernador Eugenio Méndez, partidario de Bernardo de Irigoyen), cuya esposa era Dalmira Colombres Gutiérrez, se enfureció y advirtió que "...no he de permitir que nadie suspenda a ninguno de los empleados de Tucumán".²² El Jefe Interino nombrado en Tucumán en reemplazo de los Colombres, un tal José D. Soliveres,²³ era a juicio del Inspector Principal de Telégrafos Nacionales Pedro López, "...peor que los Colombres, es hechura de [Luis] del Carril,²⁴ y tráfuga como éste".²⁵ Pero la clave de la intriga desatada la da una carta de Juan B. Lacroix,²⁶ dirigida a Rocha, en la que el primero reconoce que

"...hasta hace dos días era dueño absoluto de la oficina de Telégrafos de esta, dominando por consiguiente cuanto plan desarrollaban nuestros enemigos en las provincias de Catamarca, La Rioja, Salta, y Jujuy y algo de Santiago del Estero".²⁷

El motivo de la pérdida de poder obedeció, a juicio de Lacroix, a una imprudencia de un tal Luis del Carril que

"...nos ha hecho perder este recurso tan importante costando la destitución de un empleado, pero entre dos o tres días estará nuevamente reemplazado y podré continuar en mi obra".²⁸

Lacroix le confesaba a Rocha, que "...tengo documentos tan notables que pueden llamarse piezas preciosas, para confundirlo a Roca especialmente".²⁹ En cuanto a Soliveres, ahijado de del Carril, no duró mucho en el cargo, pues en Febrero de 1886 fué destituido debido a su filiación Rochista. Del Carril creía que Soliveres, una vez destituido, había pasado a Buenos Aires, donde se habría colocado "...al frente de alguna de las estaciones telegráficas de aquella Provincia", pero "...no le fué posible hacer el viaje por haber sido avisado de que al pasar por Córdoba había orden de prisión contra él,

razón por la que ha regresado a ésta".³⁰

Desde Santiago del Estero, el entonces Diputado Nacional Absalón Rojas le informaba a Roca que el Inspector Pablo Lascano,³¹ escribe en el periódico La Prensa Libre, de Mariano Gorostiaga,³² y su empeño "...por retirar al telegrafista Gerné so pretexto de conveniencias del servicio, para colocar otro que ha propuesto, obedece a esos mismos propósitos de conspiración".³³ Y en 1885 le escribe al Gobernador Juárez Celman, informándole que acababa de pedir al Presidente Roca y al ex-Subsecretario de Marina y entonces Director General de Correos y Telégrafos Olegario Ojeda,³⁴ solicitándoles que le ordenen al Inspector de Telégrafos Pablo Lascano, quien se hallaba

"...completamente embanderado en la oposición,...que vaya a La Rioja donde tiene orden de permanecer dirigiendo la reparación de la línea y no sé porqué viene burlándose de esas ordenes hace mucho tiempo".³⁵

Desde Córdoba, el Director de Telégrafos Pedro López le informaba al Gobernador de Córdoba Juárez Celman, que el Inspector Lucio Capdevila lo ha "...colocado en una posición un tanto embarazosa".³⁶ El hecho era que en dos oportunidades Capdevila había logrado frustrar sus propios traslados. En la primer oportunidad, debido a las quejas que el Gobernador hiciera acerca del mal servicio de la Oficina de Córdoba, y en que se "...adoptó la medida de trasladar a todo el personal", Capdevila obtuvo la contraorden que lo mantuvo en el puesto. Y en la segunda, Capdevila logró otra contraorden "...que habrá sido obtenido por pedidos de Ortega".³⁷ López se dirigió a la Dirección General de Correos y Telégrafos informando que la moral del servicio "...se relajaría si queda éste en Córdoba". López tenía "...vehementísimas sospechas de que nos está traicionando y que hasta los mismos telegramas del Presidente son violados".³⁸

Para fines de siglo, en 1896, el entonces Senador Nacional Absalón Rojas le informaba a Roca que en la Dirección de Correos y Telégrafos "...se está montando una máquina política".³⁹ Luego de colocar, en Rosario y Buenos Aires, que eran la llave de las comunicaciones, a dos de sus parientes, el Director General de Correos y Telégrafos Dr. Carlos Carlés,⁴⁰

"...acaba de decretar que solo se trasmitan directamente a su destino los despachos del Presidente, ex-Presidentes, Ministros y Jefe del Estado Mayor".⁴¹

Los despachos de los demás usuarios debían "...transmitirse a Central".⁴²

La violación y el espionaje a la correspondencia postal y telegráfica.

Las violaciones a la correspondencia telegráfica estaban a la orden del día. Desde Santiago del Estero, en 1878, el futuro Ministro de Gobierno del Gobernador Pedro Gallo, Don Telasco Castellanos, prevenía a Roca que el Jefe de la Oficina Telegráfica "...es un grandísimo cachafaz o mejor dicho un gran carajo, instrumento ciego de [Comandante Octavio] Olascoaga, que constantemente viola la correspondencia".⁴³ En 1880, cuando la revolución de Carlos Tejedor, el entonces Diputado Nacional Absalón Rojas le escribía a Roca desde Belgrano, que "...no tengo confianza en el telégrafo ni Correo, para correspondencia dirigida a Vd. sé que por lo menos, nuestros telegramas llegan con retardo".⁴⁴ El entonces Subsecretario de Marina Olegario Ojeda le advierte a Roca que

"...jamás te hago telegrama porque sé que primero pasarán por los ojos de [Luis] Cané y

después irán al aparato.⁴⁵ Hay orden terminante de avisarte de todo despacho dirigido a tí o por tí y no hay una sola palabra tuya que se le escape".⁴⁶

Y el entonces periodista Tucumano Benjamín Posse le confesaba a Roca que "...creo que lo han tenido a Vd. sitiado en Córdoba, por medio del telégrafo, durante estos días".⁴⁷ Esto lo creía Posse

"...porque de los seis telegramas que yo le he hecho, algunos tenían contestación, y no he recibido ni un simple acuse de recibo: pienso que solo dejaban pasar, o le transmitían los que pudieran engañarlo, o meterle miedo para arrancarle su renuncia".⁴⁸

Terminaba su misiva Posse, negando que su sospecha fuera tanto, "...cuando se trata del mulatón de [Eduardo] Olivera,⁴⁹ capaz de todo eso y mucho mas".⁵⁰ Un año más tarde, el Gobernador de Tucumán Miguel M. Nougues le confesaba a Roca que

"...como Ugarte estaba en el Telégrafo Nacional y por esta razón allí no se guardaba secreto ni para los telegramas que vos diriges me limité a pedirte que no te valieses de esa línea".⁵¹

Incluso cuando Nougues se comunicaba con las autoridades de la campaña, las mismas "...me han pedido no lo haga por telégrafo porque no tienen confianza en los empleados".⁵² Convencido Roca entonces de la falta de seguridad en el telégrafo, le escribe a su cuñado Juárez Celman, pidiéndole "...no use del telégrafo para ciertas cosas y aún en sus cartas debe ser muy cauto con ciertas gentes".⁵³ Desde Catamarca, el Diputado Nacional Onésimo Leguizamón le informa a Roca que comienza

"...a tomar desconfianza de mi correspondencia por correo porque su Jefe está afiliado con pasión en los adversarios del gobierno, y nadie queda en esta tierra sin estar apasionado o por unos o por otros i servir como instrumento a sus amigos".⁵⁴

Desde Mendoza, alguien cuya firma no he logrado descifrar le escribe a Juárez Celman que el Gobernador Rufino Ortega

"...piensa que no debo en manera alguna contestar por la misma vía en que Vd. me interroga, pues presume que tanto [Bernardo de] Irigoyen como [Dardo] Rocha, tiene conocimiento de todo cuanto se trasmite por el telégrafo".⁵⁵

Desde Salta, José M. Fernández le transmitía al Presidente Roca que "...por el telégrafo nada podemos comunicarle a V. E. por que tenemos desconfianza de que nuestros avisos lo sepan los enemigos del orden y la prosperidad".⁵⁶ En Salta, en oportunidad en que el Gobernador Juan Solá pretendía mantener su neutralidad en la lucha por las candidaturas presidenciales de 1886, al Rochista Juan B. Lacroix le fué fácil conseguir de manos de su correligionario el Jefe de la Oficina del Telégrafos de Salta, Don Napoleón Martiarena, la copia de un telegrama del Canciller Francisco J. Ortiz al Ministro de Gobierno Juan M. Tedín, en la que se desmentía dicha conducta.⁵⁷ Y un año más tarde, Pío Urriburu le comunicaba a Dardo Rocha, que él tenía el telégrafo a su servicio "...y sé, con seguridad, lo que se transmite, de manera que difícilmente pueden engañarme".⁵⁸ Desde Concordia, en 1878, Simón Derqui le manifestaba a Dardo Rocha, y José Luis Madariaga a Bernardo de Irigoyen, que debido a la "...mala conducta de los telegrafistas de Concordia [estaba en manos de un niño de diez años]", se hacía indispensable que los renovaran sin demora "...y mientras esto no se haga debe Vd. cuidarse de no comunicar por telégrafo lo que no pueda saberlo el público";⁵⁹ y desde Concepción del Uruguay, el Gobernador Coronel José Francisco Antelo le informaba a Roca en 1879 que el telégrafo "...se hallaba

en poder de enemigos declarados, dependientes del Dr. [Saturnino] Laspiur".⁶⁰ Y cuatro años más tarde, en 1883, el ex-Ministro de Hacienda de Entre Ríos, Juan Antonio Mantero,⁶¹ denunciaba a su condiscípulo de Concepción del Uruguay, el Presidente Roca, que la Oficina Telegráfica de Paraná, dirigida por Ramón Calderón, consulta al Gobernador Gral. Eduardo Racedo "...si se pueden transmitir los telegramas a Buenos Aires".⁶² Esta realidad era para Mantero

"...un escándalo que hace mucho daño, máxime si se tiene en cuenta que tanto esta oficina como la del Paraná suponen que los telegramas dirigidos por mí a Salvatierra tienen un alcance distinto de los demás, porque ellos han seguido toda la evolución política para la elevación de Racedo".⁶³

Y desde Tucumán, en 1885, Carlos M. Maldonado, que oficiaba entonces de Secretario Privado de Dardo Rocha, le confesaba a éste que "...estoy en relación íntima con un alto empleado del telégrafo que me pone al corriente de todo cuanto pasa".⁶⁴ Y cinco días más tarde, le comunicaba que Luis del Carril "...dió instrucciones de ponerse completamente a mi disposición, a la persona que él tenía en el telégrafo [Colombes].⁶⁵ Esa persona, de apellido Colombes, era "...la misma que antes que Carril viniera ni supiera nada, ya estaba en relaciones conmigo, y que me había dado las copias que le mandé a Vd. y otras que conservo en mi poder reservadas".⁶⁶ Con razón entonces, Barraquero (1926), un autor y político mendocino, expresaba con tanta elocuencia que

"...hubo época que los jefes de correos estaban a las órdenes de los gobernantes y estos revisaban toda la correspondencia telegráfica y epistolar de los opositores".⁶⁷

Esta situación alcanzó su máximo grado de corrupción en Junio de 1886, cuando los telegramas del Senador Nacional Francisco J. Ortiz dirigidos desde Salta al Presidente Juárez fueron, al decir de José Fernández López en clave de metáfora campera, "...robados como los ganados de la Pampa por los malones de los beduinos políticos".⁶⁸ El ex-Ministro Eduardo Wilde le contaba a Roca, que había salido del Ministerio

"...por la forma descortés y hasta ofensiva que usaba Juárez en sus telegramas, tomando pretexto en todo hasta en mentiras y en violaciones de la correspondencia telegráfica".⁶⁹

Desde Corrientes, en 1891, el Diputado Nacional Justino Solari le expresaba a Roca que

"...sería bueno que nos saquen algunos telegrafistas que nos hacen mucho mal, haciendo saber las noticias a los Cívicos antes que a aquellos a quienes vienen dirigidos los telegramas".⁷⁰

Para Eleázar Garzón, (a) "Botón-Bumbula",⁷¹ Gobernador de Córdoba, el valor de la Unión Cívica estaba en el telégrafo, pues "...aquí no tiene nada, en la campaña no los sigue nadie, están haciendo bullaranga y con gritos hacer creer que son algo".⁷² Y desde Catamarca, en 1897, el Gobernador Flavio Castellanos sospechaba que el Jefe de Correos Agustín Sal, "...no guarda la compostura debida revelando la correspondencia telegráfica".⁷³ Toda esta realidad hacía que la instrumentación de claves y contraseñas se generalizara haciendo harto difícil el uso de los telegramas y el correo como fuente documental.⁷⁴ Como botón de muestra, Benjamín Posse se dirigió a J. Roca, en oportunidad de convencer al Gobernador de Tucumán Domingo Martínez Muñecas de integrar su Ministerio de Gobierno con un Autonomista en lugar de un Mitrista, con la consigna clave "la pulpería salvada".⁷⁵ Y Rufino Ortega se dirigía al entonces Diputado Nacional Ramón J. Cárcano, en las vísperas del golpe de estado ocurrido en Mendoza en 1888, que en caso de decidirse por el golpe "...sírvasse decirme antes del

domingo por telegrama 'mande ganado a Chile'".⁷⁶ Y para aventar las sospechas que recaían en el Correo de San Luis, el líder Rochista Lúndor S. Quiroga le solicitaba al Gral. José M. Arredondo le dirija "...la contestación de la presente con el 'Sra. Doña Carmen L. de Quiroga', pues así creerán que es de su hijo Julio, que siempre le escribe".⁷⁷

Si no era en las cabeceras de provincia, era en las centrales retransmisoras desde donde se ejercía el espionaje, dirigido por su Administrador General Ramón J. Cárcano.⁷⁸ Desde Tucumán, un tal Luis del Carril le encargaba en 1885 a Carlos M. Maldonado le dijera a Dardo Rocha que

"...era de la mayor conveniencia, que procurase servirse para los despachos telegráficos de las líneas de los Ferrocarriles de Buenos Aires al Rosario, que tienen combinación con la del Central Argentino del Rosario a Córdoba y esta con la del Ferrocarril Central Norte, evitando así servirse de la línea nacional".⁷⁹

Un año antes, desde Catamarca, Onésimo Leguizamón le advertía a Roca que

"...si no es aquí, en Tucumán, Córdoba o Rosario, que retransmiten los telegramas, serán sorprendidas nuestras confidencias i explotadas por los círculos que se ajitan activamente".⁸⁰

El espionaje lo practicaban no solo los hombres sino también las mujeres de los Administradores e Inspectores de Correos y Telégrafos. Desde Catamarca, Leguizamón también le advertía a Roca que "...hasta las mujeres son exploradoras o agentes de los círculos".⁸¹ Pero el espionaje telegráfico no se limitaba exclusivamente a las provincias argentinas, sino que se extendía a los países vecinos. Desde Santiago de Chile, Juan Cristensen se tomaba la libertad de indicarle al Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza que

"...sería tal vez prudente que la correspondencia no viniera como oficial, porque en la Administración de Correos aquí hay un empleado que dá cuenta de todo".⁸²

Pero el Inspector Pedro López le escribía a Juárez Celman que el Telégrafo Andino era peor que el Trasandino,⁸³ pues "...centenares de personas se enteran de la correspondencia telegráfica, empezando por el Administrador del Ferrocarril y siguiendo hasta los guarda trenes".⁸⁴

Las vinculaciones entre la Telegrafía y el periodismo.

La relación entre la telegrafía y el periodismo era muy estrecha.⁸⁵ La larga lista de periódicos titulados El Telégrafo o cuyo título estaba vinculado a la telegrafía prueban este vínculo. Con el título de El Telégrafo salió un diario en Mendoza en 1822, otro en Córdoba en 1853, otro en Concepción del Uruguay, y otro en San Luis entre 1870 y 1875.⁸⁶ En Catamarca, El Andino que circuló entre 1876 y 1881 y El Trasandino dirigido por Segundo Acuña.⁸⁷ Esta íntima relación se prestaba para ejercer el espionaje político. Desde Córdoba, el ex-Diputado Nacional Dámaso E. Palacio le advertía a Roca

"...que todo despacho que llega o sale por la Oficina Telegráfica de ésta [Córdoba], se publica su contenido en los diarios Cívicos. Esto necesita ser prontamente remediado".⁸⁸

Y en el recorte periodístico que el Gobernador de Córdoba Eleázar Garzón le acompañaba a Roca, le manifestaba que

"...verá que conocen el contenido del telegrama particular que le dirigí a Vd. el Domingo. Y más: un amigo que tengo en el Correo, me dice que estoy vendido [traicionado] en esas oficinas, pues casi todos son opositores".⁸⁹

También la relación entre la telegrafía y el ferrocarril con la política fué muy íntima pues los registros y resultados electorales se transmitían y enviaban por telégrafo y ferrocarril. Sin embargo, no siempre estos adelantos garantizaban la eficiencia del sistema por cuanto la corrupción penetraba los espacios más insólitos. En Catamarca, mientras en 1873 la viabilidad "...era enteramente difícil y no había medios fáciles de comunicación, llegaban los registros [cívicos o padrones]; hoy [que] tenemos a casi todos los departamentos de la provincia ligados por el telégrafo, [y] tenemos varios de ellos ligados por ferrocarril...los registros [cívicos] no pueden llegar a tiempo".⁹⁰

Finalmente, el telégrafo sirvió también para dar fé de la legitimidad o legalidad de los documentos oficiales. En 1880, cuando la revolución de Carlos Tejedor, el Presidente Avellaneda dió un decreto al salir para Belgrano declarando a la república en estado de sitio e incitando a los Gobernadores de Provincia a enviar milicias en su auxilio. Como este decreto no pudo transmitirse a Rosario por la interrupción de los telégrafos y medios de comunicación, La República lo publicó asegurando que se había dado, llegando un ejemplar a manos del Teniente Octavio Sosa, quien se lo transmitió a Pedro López, Inspector de Telégrafos en Córdoba. Como no era un documento oficial y había que legalizarlo para que los Gobernadores de Provincia le dieran cumplimiento, "...asumí la responsabilidad y autenticué este Decreto transmitiéndolo para su cumplimiento; lo consulté con Vd. General y con entusiasmo aplaudió mi resolución".⁹¹

Por último, podemos concluir que los niveles de corrupción en los ambientes informativos del interior argentino estaban lo suficientemente generalizados como para certificar que la prolongación de las prácticas de censura, propias del Antiguo Régimen, aún se hallaban profundamente vigentes en la segunda mitad del siglo XIX. De aquí que el telégrafo cumplía un doble rol con respecto a la difusión de las prácticas democráticas. Por un lado, era el instrumento de la represión y del fraude, pero por el otro, al servir a la difusión de la información periodística, cumplía un rol eminentemente progresista. También las prácticas del espionaje y la infiltración estuvieron en boga en dicha época.

NOTAS

¹ Para el caso inglés, ver Robinson (1948, 1970); para el de los Estados Unidos, ver Plum (1882, 1974), Du Boff (1984), Tarr (1987), Charlott (1989) y Graham (1990); para el de China, ver Cheng (1970); y para el de Chile, ver Johnson (1948).

² Friedland, 1996, 185.

³ Friedland, 1996, 186.

⁴ Luhmann, 1995, 11.

⁵ Morin, 1992, IV, 64-70.

⁶ ver Saguier, 1995a y 1996-1997.

⁷ ver Saguier, 1995b.

⁸ consistente en la pluralidad de niveles informativos susceptibles de ser extraídos de las fuentes al margen del fin utilitario que dió origen a cada documento (Carmagnani, 1988, 12).

⁹ J. Villanueva a J. Roca, Río Cuarto, 4-II-1886, Archivo General de la Nación (AGN), Arch. Roca, Leg.50.

¹⁰ Amadeo Benítez a Roca, San Nicolás, 27-III-1877, Arch. Roca, Leg.4.

¹¹ Hermógenes Ruiz a J. Roca, San Juan, 14-I-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29.

¹² Román Videla a J. Roca, San Juan, 17-I-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29.

¹³ Napoleón Burgoa a J. Roca, San Juan, 4-II-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29.

¹⁴ Rosauero Doncel a J. Roca, San Juan, 3-II-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.29.

¹⁵ T. Mendoza a J. Roca, San Luis, 21-XII-1878, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.6.

¹⁶ permítaseme citar a Saguier (1995), (1997a) y (1997b).

¹⁷ En el repositorio documental del Gral. Agustín P. Justo, existente en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires, abundan esta clase de Partes Mensuales, con nutrida información para cada Distrito.

¹⁸ José U. Fernández a Victorino de la Plaza, Paraná, 14-XI-1883, AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.388.

¹⁹ J. Ocampo a J. Roca, La Rioja, 11-VIII-1884, Arch. Roca, Leg.40.

²⁰ Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 27-XII-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.214.

²¹ ignoro sus nombres, aunque sospecho de Clementino y Bernardo Colombres y de Ignacio Colombres Gutiérrez, todos ellos Diputados Provinciales en 1883 y primos políticos y cuñados del Gobernador Benjamín Paz.

²² Pedro López a Juárez Celman, 27-XII-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18.

²³ Podría ser hijo o hermano de un tal Pedro Solivarez, director de un periódico bisemanal denominado La Prensa, fundado en Salta en 1861 (Galván Moreno, 1944b, 397); o de un tal Emilio Soliveres, gerente de un diario de Salta, aparecido en 1895, denominado La Actualidad, órgano del Partido Nacional (Solá, 1924, 81).

²⁴ era hijo de Nicolás del Carril y la Rosa y de Januaria Benavídez Balmaceda, avecindado en Tucumán, y matrimoniado con Rosa Alvarez, nacida en Tucumán, y suegro del Senador Nacional por La Rioja, Segundo Tiburcio Gallo Ferreyra (Calvo, III, 276). Se había hecho otorgar por Roca ocho (8) leguas de campo, que luego vendió a Rocha por \$80.000 (Rato de Sambucetti, 1980, 439, nota 65).

²⁵ Pedro López a Juárez Celman, 27-XII-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18.

²⁶ nacido en Salta, hijo de Gabriel Augusto Lacroix Chanet, n. en Lyon en 1802, y de Francisca Paz de las Quintas, asesinado en 1909 en Villa Ocampo, Pcia. de Santa Fé; y hermano menor de Salustio Lacroix, integrante de la Unión Cívica Radical de Córdoba.

²⁷ Juan B. Lacroix a Dardo Rocha, Tucumán, 22-I-1886, AGN, Sala VII, Archivo Dardo Rocha, Leg.214.

²⁸ Juan B. Lacroix a Dardo Rocha, Tucumán, 22-I-1886, AGN, Sala VII, Archivo Dardo Rocha, Leg.214.

²⁹ Juan B. Lacroix a Dardo Rocha, Tucumán, 22-I-1886, AGN, Sala VII, Archivo Dardo Rocha, Leg.214.

³⁰ Luis del Carril a Dardo Rocha, Salta, 20-II-1886, AGN, Sala VII, Archivo Rocha, Leg.216.

³¹ marido de María de Jesús Gorostiaga, prima hermana de Manuel y Antonino Taboada y tía carnal del Diputado Nacional Manuel Gorostiaga, y padre "...de una numerosa falange de jóvenes inteligentes que nos ayudaron mucho, uno de ellos [Pablo] es redactor de El Progreso de Córdoba, otro es Secretario del Comité [Rochista] aquí" (Jaime Vieyra a Dardo Rocha, Santiago del Estero, 1-I-1880, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.226).

³² había sido Director de El País de Santiago del Estero y del Diario Popular de Salta, Inspector General de Escuelas, Gerente del Banco Hipotecario de Santiago del Estero y Presidente del Banco Provincial (Cutolo, III, 410). Era primo hermano del Diputado Nacional Manuel Gorostiaga, sobrino segundo del Gral. Roca y del Director de La Prensa, José C. Paz, y marido de una prima hermana de Roca y de Paz, llamada Plácida Figueroa Paz.

³³ Absalón Rojas a J. Roca, S. del Estero, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42.

³⁴ desempeñó el cargo desde 1880 a 1887 (Castro Estévez, 1952, t.V, 332).

³⁵ Absalón Rojas a J. Celman, S. del Estero, 3-XI-1885, Arch. J. Celman, Leg.19.

³⁶ Pedro López a J. Celman, 13-X-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18.

³⁷ Pedro López a J. Celman, 13-X-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18.

³⁸ Pedro López a J. Celman, 13-X-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18.

³⁹ Absalón Rojas a J. Roca, Buenos Aires, 21-XI-1896, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.73.

⁴⁰ desempeñó el cargo entre 1891 y 1898 (Castro Estévez, 1952, t.V, 332).

⁴¹ *Ibídem.*

⁴² *Ibídem.*

⁴³ Telasco Castellanos a Roca, Santiago del Estero, 10-XII-1878, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.

⁴⁴ Absalón Rojas a Roca, Belgrano, 7-VII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.11.

⁴⁵ Cané desempeñó el cargo de Director General de Correos desde junio del 1880 a octubre del 1880 (Castro Estévez, 1952, t.V, 332).

⁴⁶ Ojeda a Roca, 1-VIII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.11. "...La noche que tu me llamaste al telégrafo tuve que hacer venir al Inspector Ugarte para que llevara el aparato porque solo él podía hacerlo sin la intervención superior" (Ojeda a Roca, 1-VIII-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.11).

⁴⁷ Benjamín Posse a Roca, Buenos Aires, 19-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9.

⁴⁸ Benjamín Posse a Roca, Buenos Aires, 19-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9.

⁴⁹ fué el primer Director General de Correos y Telégrafos, desempeñando el cargo desde 1876 a 1880 (Castro Estévez, 1952, t.V, 332).

⁵⁰ Benjamín Posse a Roca, Buenos Aires, 19-II-1880, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.9.

⁵¹ Miguel M. Nougés a Roca, Tucumán, 6-IX-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.18.

⁵² Miguel M. Nougés a Roca, Tucumán, 6-IX-1881, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.18.

⁵³ J. A. Roca J. Celman, 26-IX-1881, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.9.

⁵⁴ O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 6-X-1884, Arch. Roca, Leg.41.

⁵⁵ Mendoza, 22-IV-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.19.

⁵⁶ José M. Fernández a Roca, Salta, 19-VI-1882, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.23.

⁵⁷ Juan B. Lacroix a D. Rocha, Salta, 15-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

⁵⁸ Pío Uriburu a Dardo Rocha, Salta, 10-II-1886, AGN, Sala VII, Archivo Rocha, Leg.216.

⁵⁹ Simón Derqui a Dardo Rocha, Concordia, 3 y 12-III-1878 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.217).

⁶⁰ José Francisco Antelo a J. Roca, Uruguay, 1-IX-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.

⁶¹ Combatiente de Cepeda y Pavón, Archivero de Concepción del Uruguay en 1863, Ministro de López Jordán en 1870; Ministro de Hacienda del Gral. Racedo en 1883; redactor de El Uruguay y fundador de El Eco de Entre Ríos (Urquiza Almandóz, 1965, II, 380, 532; III, 257 y 328).

⁶² J. A. Mantero a Roca, Uruguay, 23-VI-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31.

⁶³ J. A. Mantero a Roca, Uruguay, 23-VI-1883, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31.

⁶⁴ Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 16-XII-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.214.

⁶⁵ Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 23-XII-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.214.

⁶⁶ Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 23-XII-1885, AGN, Arch. Rocha, Leg.214.

⁶⁷ Barraquero, 1926, 473 y 435.

⁶⁸ José Fernández López a Juárez Celman, Buenos Aires, 9-VII-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.22. José del Viso en carta a J. Celman dice que "...los originales de esos telegramas serán los que se lean [en la Cámara]. Será fácil que se produzca con este motivo una moción de juicio criminal, al autor de esa violación de correspondencia, si es verdad que la hay, cuyo juicio deberá comenzar por el Diputado que presente esos despachos" (José del Viso a Juárez Celman, Buenos Aires, 17-VI-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.24).

⁶⁹ Eduardo Wilde a Julio A. Roca, Ostende, 4-II-1889 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.58).

⁷⁰ Justino Solari a Roca, Corrientes, 25-II-1891, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.62.

⁷¹ Agrimensor, hijo de Félix Garzón y Rosales, y de Juana Luisa Duarte Olivera y Caballero, hermano del Gobernador Delegado y Diputado Nacional Tomás Garzón Duarte Olivera, tío del Gobernador de Santiago del Estero Dámaso E. Palacio Achával, concuñado del Diputado Nacional Francisco de Paula Moreno Cabral, y suegro de su sobrino el Gobernador Félix T. Garzón y Moreno. Estaba casado con Carmen Gómez Argüello, natural de La Punilla, hija de Toribio Gómez y de Eloísa Argüello (Cutolo, III, 269; Gómez, 1990, 13; y Lazcano, I, 221).

⁷² Eleázar Garzón a Julio A. Roca, Córdoba, 9-VIII-1891 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.64).

⁷³ Flavio Castellanos a J. Roca, Catamarca, 3-XII-1897, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.76.

⁷⁴ ver telegramas en clave enviados entre Luis del Carril y Martín G. Güemes y Manuel M. Zorrilla (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.218).

⁷⁵ Benjamín Posse a J. Roca, Tucumán, 16-III-1879 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7).

⁷⁶ Rufino Ortega a Ramón J. Cárcano, Mendoza, 2-I-1888 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.26).

⁷⁷ Lúndor Quiroga al Gral. José M. Arredondo, San Luis, 24-V-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, L.214).

⁷⁸ B. Domínguez a Roca, Córdoba, 18-IV-1890, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.59. Desempeñó el cargo de Director General desde IV-1887 a VIII-1890 (Castro Estévez, 1952, t.V, 332).

⁷⁹ Carlos M. Maldonado a Dardo Rocha, Tucumán, 20-XII-1885, AGN, Sala VII, Archivo Rocha, Leg.214.

⁸⁰ O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 6-X-1884, Arch. Roca, Leg.41.

⁸¹ O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 6-X-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.41.

⁸² Juan Cristensen a V. de la Plaza, Santiago de Chile, 8-IV-1884, AGN, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.390.

⁸³ ver Johnson, 1948.

⁸⁴ Pedro López a J. Celman, 28-XII-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18.

⁸⁵ Duncan (1980) relata como Ramón J. Cárcano se valía de un servicio telegráfico especial para transmitir al periódico Sud-América (Buenos Aires) los discursos, resoluciones y listas de socios del Juarismo (Duncan, 1980, 772).

⁸⁶ Beltrán, 1943, 295; Galván Moreno, 1944b, 345, 369, 381 y 409; y Bischoff, 1994, 89.

⁸⁷ Galván Moreno, 1944b, 331.

⁸⁸ D. E. Palacio a Julio A. Roca, Córdoba, 18-XII-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61).

⁸⁹ Eleázar Garzón a Julio A. Roca, Córdoba, 12-XII-1890 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.61).

⁹⁰ Rafael Castillo, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 6a sesión ordinaria, 10-VI-1892, p.161.

⁹¹ Pedro López a Roca, 1-XII-1895, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.71.

CAPITULO 15

CONCLUSION del Tomo-VII

Podemos afirmar, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados en los Cabildos de Potosí, Oruro, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y San Juan, de fines del siglo XVIII aquí relatados, que no obstante las periódicas elecciones de cargos concejiles, el proceso de centralización y formación de un estado patrimonialista se consolidó. A la lucha electoral fueron incorporándose paulatinamente, en especial en los cabildos periféricos, numerosos vecinos de dudoso origen racial y legitimidad de origen, que merced a la venalidad de los oficios, podían acceder a los cargos públicos, transformándose así el cuadro étnico de la política colonial.¹ Pero, por el contrario, al ser los oficios vendibles también renunciables entre parientes, se lograba retener en las mismas familias, por herencia, lo que había sido adquirido venalmente. De ahí que, la venalidad, y consiguiente heredabilidad de los oficios, cumplió en las colonias de América un rol contradictorio, democratizador por un lado al romper con las dualidades étnicas y estamentales, acelerando así la transición hacia un régimen político de matriz liberal burguesa, y elitista por el otro al retener en las mismas familias los cargos adquiridos por compra.

Pese a las limitaciones provocadas por las élites señoriales locales, podemos entonces concluir que el Clero habría participado fuertemente en la constitución del estado burocrático-patrimonial. La negativa de las Curias Eclesiásticas a reducir la tasa de interés de los censos y capellanías operó en desmedro de la circulación de capitales y de la constitución y fluidez de un mercado de capitales, en beneficio de los curatos urbanos, y en perjuicio de los rurales. Como la subsistencia de los curatos rurales dependía casi enteramente de las transacciones comerciales que sus curas podían concertar, la obligación de pagar sisas y alcabalas que las Reformas Borbónicas impusieron, alimentó en los mismos el espíritu de rebelión contra el gobierno español.²

Finalmente, la Milicia habría participado también fuertemente en la constitución del estado burocrático-patrimonial. Asimismo, ella habría sido la única que logró generar un inusitado proceso de movilidad social ascendente de las capas y grupos marginales. Surge de lo relatado una realidad signada por la arbitrariedad y el clientelismo. Era entonces natural que de ello derivara un caos más o menos prolongado, que alimentó los resentimientos que precipitaron la revolución de independencia.

Notas

¹ Socolow, 1987, 106.

² Hunefeldt, 1983, 4.